



RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes



Universidad
Nacional
de Quilmes

Jung Garibaldi, María Eugenia

Derechas y universidad en Uruguay. Entre la reacción y la modernización, 1958-1973



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Jung Garibaldi, M. E. (2022). *Derechas y universidad en Uruguay. Entre la reacción y la modernización, 1958-1973. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes* <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3585>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Derechas y universidad en Uruguay. Entre la reacción y la modernización, 1958-1973

TESIS DOCTORAL

María Eugenia Jung Garibaldi

mariaeugeniajunggaribaldi@gmail.com

Resumen

Esta tesis se propone reconstruir las posiciones de las derechas uruguayas sobre la Universidad, poniendo particular atención en las ideas y proyectos modernizadores que algunos de sus sectores impulsaron en el lapso que va desde 1958 hasta el quiebre institucional de 1973. Concretamente, postula que durante los largos sesenta, de manera convergente con la radicalización política, se fue conformando un programa modernizante por derecha que cristalizó a fines de 1968, con la formulación de la “Universidad para el desarrollo”, término acuñado por el ministro de Cultura de la época. Se evidencia de este modo la presencia de otras formas de concebir la modernización universitaria que fueron a contrapelo de los proyectos reformistas generalmente asociados a la izquierda o a los progresismos y tras los cuales se solaparon diversos modelos de desarrollo en disputa. Más concretamente, se observa que junto a los planteos tradicionalistas que ponían el foco en la depuración ideológica de los claustros y la reforma de planes de estudios, hubo una derecha propositiva que bregó por la capacitación de cuadros técnicos para el sector productivo en línea con planteos similares en la región y el mundo.

Universidad Nacional de Quilmes
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas

Tesis:

**DERECHAS Y UNIVERSIDAD EN URUGUAY.
ENTRE LA REACCIÓN Y LA MODERNIZACIÓN, 1958-1973**

Directora de Tesis: Vania Markarian

Co-Director: Carlos Altamirano

María Eugenia Jung

CI: 1.947.650-5

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
1. La Universidad de la República.....	9
2. En el cruce de tres campos. Un estado de la cuestión	17
3. Archivos, fuentes y organización del texto	45
CAPÍTULO I. LOS VÍNCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA CON EL PODER EJECUTIVO (1959-1967)	51
1. La creación del Conicyt	52
2. La Universidad y la CIDE, o crónica de una colaboración discreta	92
CAPÍTULO II. LA UNIVERSIDAD BAJO LA LUPA: LAS DERECHAS Y LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (1960-1967)	120
1. Debates sobre los <i>técnicos</i> y el lugar del conocimiento	121
2. Los intentos de crear una universidad privada y católica	154
CAPÍTULO III. LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TRAS EL GIRO AUTORITARIO (1968-1973)	182
1. El Movimiento pro Universidad del Norte y la deriva a la derecha	184
2. Universidad para el desarrollo: un programa de modernización conservadora..	207
3. Lecturas inspiradoras y modelos de universidad	224
CAPÍTULO IV. LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN LA CONFORMACIÓN DEL CAMPO DE LAS DERECHAS (1958-1973)	246
1. La Universidad, “foco de subversión”	248
2. Los “demócratas” en defensa de la Universidad	250
3. La pérdida del último “bastión demócrata” en la Universidad.....	273
4. Las derechas y la Universidad de la República (1968-1973)	277

CONCLUSIONES	306
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES	320
FUENTES	320
BIBLIOGRAFÍA	324

SIGLAS

AGN. Archivo General de la Nación

AGU. Archivo General de la Universidad de la República

AGC. Asamblea General del Claustro

CIDE. Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico

CNG. Consejo Nacional de Gobierno

Conicyt. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

IIB. Instituto de Investigaciones en Ciencias Biológicas, hoy Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE)

MEDL. Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad

Mondel. Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad

MpUN. Movimiento pro Universidad del Norte

NARA. National Archives and Records Administration

Orpade. Organización de Padres Demócratas

PDC. Partido Demócrata Cristiano

PC. Partido Colorado

PN. Partido Nacional

JSP. Juventud Salteña de Pie

JUP. Juventud Uruguaya de Pie

UCB. Unión Colorada y Batllista

Udelar- Universidad de la República

UN. Universidad del Norte

AGRADECIMIENTOS:

A Vania Markarian, directora de tesis. Sus lecturas exigentes y sutiles contribuyeron a afinar las preguntas que la orientan y a mejorar la calidad del texto.

A Carlos Altamirano, co-director, por su buena disposición y acompañamiento.

A los miembros del Tribunal para la Pre-defensa de esta tesis Ernesto Bohoslavsky, Ximena Espeche y Osvaldo Graciano, que leyeron una versión preliminar de algunos capítulos e hicieron comentarios y sugerencias que fueron de mucha utilidad.

Al equipo del Archivo General de la Universidad donde radica esta investigación; muy especialmente a Lucas D'Avenia que leyó fragmentos e hizo valiosos aportes.

A mi familia. En especial a Carlos, Martín, Santi y Manuel por su infinita paciencia. Ningún esfuerzo vale la pena sin ellos.

INTRODUCCIÓN

En Uruguay, desde mediados de los años cincuenta del siglo XX, actores de diversas procedencias y signos discutieron la necesidad de transformaciones en la Universidad de la República (Udelar). Los cuestionamientos a la orientación de la principal casa de estudios superiores en el país, a tono con las exigencias de la modernización, no fueron una novedad de estos años. Sin embargo, los debates sobre el papel de las instituciones de producción de conocimiento y de los modelos universitarios que florecieron en la región y el mundo desde la segunda posguerra tuvieron su traducción en el ámbito nacional.

Bajo los influjos del desarrollismo en boga, intelectuales y políticos, Gobiernos, consultores y organismos internacionales adscribieron a la concepción de que el conocimiento era un factor estratégico para el progreso de los países, ambientando esfuerzos más o menos articulados de reforma de diverso signo ideológico en las universidades latinoamericanas. Las distintas posiciones en disputa estuvieron atravesadas por la creciente radicalización que fue tiñendo argumentaciones y condicionando marcos de alianza en relación con el futuro de la educación superior.

Esta tesis se propone reconstruir las posiciones de las derechas uruguayas sobre la Universidad, poniendo particular atención en las ideas y proyectos modernizadores que algunos de sus sectores impulsaron en el lapso que va desde 1958 hasta el quiebre institucional de 1973. Concretamente, postula que durante los largos sesenta, de manera convergente con la radicalización política, se fue conformando un programa modernizante por derecha que cristalizó a fines de 1968, con la formulación de la “Universidad para el desarrollo”, término acuñado por el ministro de Cultura de la época. Se evidencia de este modo la presencia de otras formas de concebir la modernización universitaria que fueron a contrapelo de los proyectos reformistas generalmente asociados a la izquierda o a los progresismos y tras los cuales se solaparon diversos modelos de desarrollo en disputa. Más concretamente, se observa que junto a los planteos tradicionalistas que ponían el foco en la depuración ideológica de los claustros y la reforma de planes de estudios, hubo una derecha propositiva que bregó

por la capacitación de cuadros técnicos para el sector productivo en línea con planteos similares en la región y el mundo.

A lo largo del período un conjunto variado de agrupaciones de la derecha partidaria, sectores católicos, movimientos de estudiantes afines a este espectro político así como de egresados y docentes universitarios que paulatinamente fueron perdiendo incidencia en sus órganos de conducción, centró sus críticas contra la participación estudiantil (mayoritariamente de izquierda) en el gobierno universitario, el monopolio ostentado por la Udelar y su perfil academicista y doctoral.

Estas fuerzas coaligaron esfuerzos con el objetivo de neutralizar la politización de la Universidad causada por la radicalización del movimiento estudiantil y su injerencia en el cogobierno, oscilando, así, entre la reacción y los intentos modernizadores. Mientras las derechas partidarias y sociales incrementaban su retórica anticomunista y asociaban a la única institución universitaria en el país, de libre acceso y gratuita, como parte del “enemigo interno” a tono con la retórica de la Guerra Fría, impulsaron diversas alternativas para contrarrestar su influencia. Así, emergieron en estos años varios proyectos de crear otras universidades, privadas o públicas, que desafiaron el exclusivismo estatal y de la Universidad sobre la enseñanza superior.

La investigación también se propone como un análisis del papel de la Universidad en la conformación del campo de las derechas en este período. A lo largo de los casi tres lustros que nos ocupan se fue configurando un conglomerado heterogéneo y plural que reunió a figuras y sectores de diversas tradiciones político-ideológicas, con intereses y expectativas diversas que, en medio del clima de creciente polarización, se unieron ante la percepción de amenaza al orden socio-político establecido ante el avance del “comunismo” y del “izquierdismo” en general. En un contexto de incertidumbres, de crisis social y política y de recrudescimiento de la lógica amigo-enemigo propia de la Guerra Fría, las corrientes más moderadas fueron confluyendo con los sectores más radicales, adoptando sus discursos y prácticas.

Sin embargo, los marcos de alianzas que se tejieron en la comunidad universitaria no siempre estuvieron subordinados a aquellas que se produjeron en el escenario político nacional. Dicho de otro modo, los posicionamientos académicos no tuvieron un correlato directo en las posiciones político-ideológicas o en las adscripciones políticas partidarias de los universitarios, sino que en ellos se superpusieron intereses de diverso

origen —científicos, institucionales, corporativos— dejando en evidencia la relativa autonomía del campo académico respecto del campo político.

Visto así, es posible visualizar las limitaciones de las tipologías (“conservador liberal”, “nacionalista”) de uso frecuente en la historiografía reciente para caracterizar al espacio político ideológico de las derechas y, especialmente, a sus actores en el ámbito universitario. El análisis ofrece, por tanto, otra ventana de observación de las derechas locales que nos devuelve una mirada más compleja, matizada y, por qué no, más interesante de esta tradición.

El recorte temporal elegido se apega a las periodizaciones más habituales de la historia política. Sin embargo, ese arco solapa tres cronologías que a la vez funcionan como variaciones en las escalas de observación: la de la coyuntura nacional, la institucional y la más amplia de los avatares de la Guerra Fría en América Latina.

El punto de inicio corresponde a 1958, cuando el Partido Nacional, en alianza con el ruralismo de Benito Nardone, llegó en las urnas por primera vez al Gobierno, hecho que la historiografía local considera un hito en la política uruguaya. La victoria de esa fuerza política posibilitó la alternancia de partidos en el Ejecutivo luego de casi cien años de predominio del Partido Colorado y el inicio de lo que se conoce como el período de los “colegiados blancos”.

Ese triunfo significó, por otra parte, la opción por una salida de tono conservador a una crisis económica y social cada vez más aguda. En medio de una fuerte prédica anticomunista, el giro a la derecha se concretó mediante la liberalización de la economía y el abandono de las políticas redistributivas y de contención del conflicto social que habían caracterizado los períodos anteriores.

Recordemos que el cambio de partido en el Gobierno expresó el descontento social ante una creciente crisis económica que había comenzado a hacerse evidente a mediados de los años cincuenta. En palabras de los historiadores José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, en ese momento se asistió a un quiebre de los fundamentos económicos que habían sustentado “el modelo socio político del Uruguay del consenso, la conciliación social, la democracia y el Estado proveedor”, cuyas causas obedecen a factores internacionales (transformación radical en los mercados capitalistas, declinación de la demanda de productos latinoamericanos y la consecuente baja de precios

internacionales) e internos (estancamiento productivo, caída de exportaciones).¹ Naturalmente, los efectos de la crisis, como la disminución del salario real y el aumento de precios, se hicieron sentir con fuerza en una sociedad con elevadas condiciones de vida y un alto poder adquisitivo, y provocaron un hondo malestar y el incremento de la protesta social.

En un escenario de creciente movilización sindical y estudiantil, signado además por el clima electoral previo a los comicios generales de noviembre de 1958, en octubre el Parlamento había aprobado una nueva Ley Orgánica para la Universidad, que asentó su autonomía política, técnica y financiera y habilitó la participación de los tres órdenes universitarios en el gobierno de la institución. Las nuevas circunstancias habilitaron mudanzas en los órganos de cogobierno y en las orientaciones generales de la casa de estudios. Entre ellas destacó la incorporación a la dirección de los asuntos universitarios de una generación de estudiantes más combativa que sus predecesoras, que fue labrando una alianza con parte del cuerpo docente con el propósito de llevar a cabo transformaciones institucionales que potenciaran la investigación científica y acercaran la Universidad a la sociedad. Acaso el punto más alto de estos impulsos renovadores fue la presentación en 1967 de un ambicioso plan de reconversión integral elaborado por el entonces rector Óscar J. Maggiolo.

Como contrapartida, las viejas dirigencias universitarias mayoritariamente alineadas con las fuerzas políticas tradicionales (el Partido Colorado y el Partido Nacional) paulatinamente fueron perdiendo incidencia en los órganos de conducción. Esta circunstancia, a la que se sumaron los crecientes enfrentamientos de las autoridades universitarias con el poder político y el descontento ante los nuevos rumbos que tomaba esa institución, llevó a que diversos sectores políticos y sociales acusaran a los actores universitarios, particularmente, al cuerpo docente y a los gremios estudiantiles, de adherir a ideologías de izquierda.

Los procesos locales reseñados se dieron de manera convergente con las dinámicas generales de la Guerra Fría que entonces comenzaba su momento más álgido en América Latina. El triunfo de la Revolución cubana en 1959 y su pronta incorporación al bloque socialista constituyeron un punto de inflexión en la región que entró en una de

¹ Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín. “El problema nacional: un marco histórico”, en Cinve, *La crisis uruguaya y el problema nacional* (Montevideo: Cinve/Ediciones de la Banda Oriental [EBO], 1986), pp. 13-33

las etapas más virulentas del conflicto. En esos años se incrementó la injerencia de EEUU en la región en el marco de su política de contención al comunismo. Los representantes del conservadurismo y las derechas locales articularon con los intereses estadounidenses para frenar la posible amenaza revolucionaria. Los años que siguieron estuvieron marcados por las expectativas y propuestas de cambio para el país, así como para la Universidad que comenzó a discutir su reestructura académica, pero también por el incremento de la polarización política y el recrudecimiento de la represión estatal.

Finalmente, la crisis económica sin control, el quiebre en el sistema político y la imposibilidad de contener la protesta social terminó derivando en una escalada de violencia y autoritarismo que tuvo su culminación con la ruptura institucional de 1973. La dictadura no solo dio comienzo a una etapa de brutal represión y acallamiento de la disidencia que duró más de una década, sino que canceló los debates universitarios del período anterior. El golpe de Estado uruguayo formó parte del cierre de un ciclo de la Guerra Fría, cuyo desenlace fue una contraofensiva de represión que tuvo como escenario principal el cono sur latinoamericano y abrió uno de los períodos más oscuros del continente.

1. La Universidad de la República

Si se la compara con las primeras universidades en América Latina creadas durante la etapa colonial, como las de Lima y México o las de Charcas y Córdoba, la Universidad de la República es relativamente joven. Surgió a la vida pública en la tercera década del siglo XIX, acompañando los titubeantes pasos de una naciente República Oriental del Uruguay, luego de un demorado proceso fundacional a causa de los vaivenes políticos y la inestabilidad propia de las guerras civiles que signaron esos primeros tiempos. Así, la entonces denominada Universidad Mayor, ya en su origen pública y laica, fue concebida como un complemento de la institucionalidad estatal en el terreno de la enseñanza, con atributos monopólicos y fuertemente centralizadores, rasgos que determinaron su derrotero histórico y su singularidad en el contexto regional, como señala Jorge Landinelli.² La ley de creación le encomendó la totalidad de la instrucción pública del país (primaria, secundaria y superior), previendo además la instalación de cuatro facultades (Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y

² Landinelli, Jorge. “La Universidad como problema político (1968-1973)”, en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, v. 3, (1989), pp. 73-86

Teología). Sin embargo, hasta 1876, cuando se erigió la Facultad de Medicina, funcionaron únicamente Jurisprudencia y la sección de secundaria, que comprendía una formación preparatoria para el ingreso a la enseñanza superior. Con la aprobación de la Ley de Educación Común, en 1877, primaria se autonomizó y la Universidad se afirmó como institución de enseñanza superior (que hasta 1935 incluyó los estudios secundarios), con la función principal de formar para el ejercicio de las profesiones liberales.

Desde fines del siglo XIX la casa de estudios experimentó sucesivos y profundos cambios, que la escasa historiografía existente ha atribuido principalmente a dos impulsos reformistas. El primero remonta a fines del siglo XIX, cuando Uruguay transitaba su primera modernización económica y social de la mano de los gobiernos militaristas de Lorenzo Latorre y Máximo Santos. Ese impulso fue promovido, bajo el manto del credo positivista, por el rector Alfredo Vázquez Acevedo (1885-1893 y 1895-1899). La Ley Orgánica de 1885, aprobada durante su mandato, definió su estructura centralizada y la organización en base a facultades de acuerdo al modelo napoleónico.³ En esta etapa se revisaron fines, programas y estructuras, sentando las bases de una universidad “tecnocrática y utilitaria con acento profesionalista”, según las palabras de los historiadores uruguayos Juan Oddone y Blanca París.⁴

El segundo momento tuvo lugar en las primeras dos décadas del siglo XX, en consonancia con el proyecto modernizador que impulsó el presidente colorado José Batlle y Ordóñez. En ese momento, el rector Eduardo Acevedo (1904-1907), continuando el camino de reformas trazado por Vázquez Acevedo, instrumentó una serie de cambios que dio paso a un nuevo ciclo de crecimiento y de transformaciones institucionales y de corte académico. Como consecuencia, se discutió el papel de la Universidad en la sociedad y se hicieron sentir los cuestionamientos al modelo profesionalista que, sin atacarlo directamente, apostaron a su reformulación y a la ampliación de las funciones universitarias. Si bien en este período hubo una mayor apertura hacia la investigación, la ciencia aplicada y la difusión de nuevas técnicas, la institución continuó siendo concebida como el centro del cual emergían los elencos

³ En esos años tomaron forma tres facultades: Derecho y Ciencias Sociales, Medicina y Matemática (que poco después pasó a llamarse Facultad de Ingeniería)

⁴ Oddone, Juan y París, Blanca. *La Universidad uruguaya del militarismo a la crisis 1885-1958* (Montevideo: Universidad de la República, 1971), p. XIV

dirigentes. Acaso lo que varió fue el concepto de quiénes formaban parte de los cuadros técnicos y políticos, entendidos estos de manera más amplia en la medida en que la estructura social y económica del país iba transformándose.

En 1908, tras intensos debates entre los universitarios y el poder político, el Parlamento sancionó una nueva Ley Orgánica que modificó su estructura, descentralizó y amplió la autonomía técnica de las facultades y quitó potestades al rector y el Consejo Central Universitario. Se sentaron entonces algunos rasgos perdurables de la organización y funcionamiento de la Universidad: su afirmación como una federación de facultades, la prevalencia de ciertas profesiones liberales y de sus corporaciones y la participación indirecta en el gobierno universitario de los estudiantes, quienes elegían un representante que debía ser egresado.⁵

En los años veinte y treinta del siglo XX, los debates sobre la universidad se centraron en algunos de los postulados propagados por el movimiento reformista que se inició en la Universidad de Córdoba en 1918, como la gratuidad de la enseñanza, la autonomía política, técnica y financiera del gobierno, el papel social de la institución y la participación directa de los estudiantes en la dirección universitaria. Vale decir que en buena medida esos principios fueron ensayados en los años anteriores: exoneración de la matrícula en la enseñanza secundaria, creación de liceos departamentales, y formas de participación docente y estudiantil en los órganos de conducción.

No obstante, en esta etapa parte del cuerpo docente y de los estudiantes insistió en la necesidad de reformar la Ley Orgánica para modificar, además de la forma de gobierno, unas estructuras académicas que favorecían el desarrollo de carreras profesionales en detrimento de la investigación científica. La creación de nuevas facultades, por otra parte, hizo evidente la necesidad de cambiar un estatuto que no las contemplaba y, por tanto, afianzó las demandas a favor de una nueva normativa a tono con la realidad de la educación superior en el país. Concomitantemente se fueron dando pasos concretos para sentar las bases del cogobierno.

El golpe de Estado dado en 1934 por el colorado Gabriel Terra puso un freno a estos avances al derogar todas las disposiciones de representación estudiantil. La dictadura además aprobó una nueva Ley Orgánica de carácter centralista que establecía la total dependencia de todos los organismos universitarios del Consejo Central Universitario.

⁵ Markarian, Vania, Jung, María Eugenia, Wschebor, Isabel. 1908. *El año augural*. (Montevideo: Universidad de la República, 2008)

La medida provocó amplio rechazo en la comunidad universitaria y reavivó las discusiones sobre la organización y forma de gobierno de la casa de estudios. El decano de la Facultad de Derecho y principal dirigente del Partido Socialista Emilio Frugoni convocó a una comisión integrada por destacados universitarios para redactar un estatuto orgánico que asegurara la autonomía de la educación superior. En 1935, el Claustro Universitario votó afirmativamente el informe elaborado por esa comisión y designó a Carlos Vaz Ferreira como rector. El Gobierno de Terra, por su parte, desestimó el *Estatuto Universitario*, como se lo denominó, y, en cambio, aceptó la designación de Vaz Ferreira. Al mismo tiempo, dispuso la segregación de la sección secundaria de la órbita universitaria, que pasó a depender del Ministerio de Instrucción Pública. El Estatuto de 1935 constituyó el origen del proceso de reforma que se plasmó en la Ley Orgánica de 1958.⁶ Sus lineamientos relativos a la autonomía administrativa y financiera y la participación de los tres órdenes en el gobierno de la institución se mantuvieron en el centro de las discusiones universitarias de esos años.

Dos décadas más tarde, en 1958, fruto de una intensa movilización social y estudiantil, el Parlamento sancionó la Ley Orgánica que conservó algunos aspectos de la normativa anterior y corrigió otros. Entre sus modificaciones más relevantes cabe señalar la consagración de la autonomía política, técnica y financiera y la participación de docentes, estudiantes y egresados en los órganos de cogobierno, satisfaciendo viejos postulados del movimiento reformista de Córdoba. El nuevo estatuto, todavía vigente, no transformó sustantivamente la estructura federativa y la orientación profesionalista que había caracterizado a la casa de estudios desde su fundación, pero amplió las funciones universitarias y apuntó a una mayor centralización. En los hechos vino a convalidar y ampliar derechos que habían sido adquiridos de modo paulatino por el reformismo en las décadas anteriores.⁷

En este marco, la significativa diversificación de la oferta académica que se produjo en el primer medio siglo de existencia de la Universidad acompañó las “exigencias prácticas de la realidad nacional”, decía el historiador de las ideas Arturo Ardao. Dicho de otro modo, las cambiantes demandas de un Estado que se expandió de manera

⁶ Markarian, V, Jung, M. E., Wschebor, I. 1958. *El cogobierno autonómico* (Montevideo: Universidad de la República, 2008), pp.17-24

⁷ Petit Muñoz, Eugenio. *El derecho de nuestra Universidad a darse su propio estatuto* (Montevideo: CIENCIAS, 1961)

sostenida, del creciente sector industrial y de una clase media en ascenso que aspiraba a escalar socialmente y el estatus que daba el título universitario fueron condicionando la progresiva adecuación técnico-profesionalista de la institución que, como se señaló, no alteró su perfil como formadora de elencos dirigentes.⁸ Así, las disciplinas científicas se mantuvieron supeditadas a los fines inmediatos de la formación profesional. Recién en los años cuarenta la investigación comenzó a expandirse en la institución no como parte de una iniciativa centralizada y sistemática sino gracias a esfuerzos individuales, concentrándose fundamentalmente en las facultades de Medicina e Ingeniería. La Facultad de Humanidades y Ciencias, creada en 1945, fue pensada como un centro de investigación libre y de creación original en las disciplinas de filosofía, ciencias humanas y ciencias básicas con el propósito de quebrar con el profesionalismo. Sin embargo, no tuvo éxito en brindar un espacio de formación científica profesional.

En el período que abarca esta tesis, la única universidad del país se componía de diez facultades (Humanidades, Odontología, Medicina, Arquitectura, Ingeniería, Agronomía, Veterinaria, Derecho y Ciencias Sociales, Química y Ciencias económicas) y seis escuelas (Bellas Artes, Auxiliares del Médico, Servicio Social, Enfermería, Bibliotecnia, Conservatorio de Música) a las que a fines de los sesenta se agregarían cinco más (Auxiliares de Enfermería, Auxiliares del Odontólogo, Computación, Administración Pública, Superior Técnica).⁹ Asistía además a un proceso acelerado de expansión de su matrícula estudiantil, conforme a una tendencia regional y global, que se mantuvo en las décadas siguientes; expansión que, por otra parte, respondía al crecimiento que desde la década anterior venía experimentando la enseñanza secundaria. No obstante, según los cálculos de la época el aumento de la matrícula universitaria era más lento que la del resto del sistema educativo. Las primeras cifras disponibles proceden del *Registro de Estudiantes* que realizó el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho entre 1959 y 1960. Como se analizará en el primer capítulo, este censo brindó información acerca de la cantidad de estudiantes, su perfil

⁸ Ardao, Arturo. *La Universidad de Montevideo*, p. 13. Así entre 1903 y 1907 se establecieron las facultades de Comercio, de Agronomía y Veterinaria, aunque al poco tiempo, con la reforma del estatuto orgánico de 1908, fueron transformadas en escuelas o institutos especializados por fuera de la órbita universitaria. En las siguientes décadas la Facultad de Ingeniería se dividió en Ingeniería y Arquitectura (1915) y diez años después Agronomía reingresó a la Universidad (1915). Más tarde se instalaron las Facultades de Química y Farmacia y la de Odontología (1929), Ciencias Económicas (1933), Veterinaria (1933) y finalmente la Facultad de Humanidades y Ciencias (1945)

⁹ Udelar. Oficina de Planeamiento. *Censo General de Estudiantes. 1968 Informe Preliminar*. Elaborado con el asesoramiento del experto de Unesco Dr. Jorge Graciarena (Montevideo: Udelar, 1969)

sociodemográfico, distribución por carreras, división por sexo, entre otros indicadores, y se constituyó en la base para los diagnósticos sobre la situación de la educación que proliferaron en la época.

Sabemos, por tanto, que a comienzos de la década del sesenta la Universidad contaba con 15.320 estudiantes que se repartían desigualmente entre sus facultades y escuelas (14.016 en las primeras y 1.304 en las segundas). Con estos datos Uruguay ocupaba el tercer lugar en América Latina en la proporción de estudiantes dentro de la población total (1 estudiante cada 177 habitantes), un dato que en forma aislada podría ser considerado positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que de acuerdo al censo de 1963 la población del país alcanzaba los 2.595.510 habitantes (46,3 % en Montevideo; 53,7 % en el interior).¹⁰

Sin embargo, al contemplar otros indicadores como el bajo nivel de egresos y la alta deserción estudiantil, exhibía, según los analistas del período, la baja eficiencia del sistema. A esto se agregaba la extensión excesiva de las carreras más allá de la cantidad de años establecida por los planes de estudios y la avanzada edad promedio de egreso. También, las carreras preferidas por los estudiantes y que concentraban la mayor cantidad de inscripciones eran las de Derecho —con sus dos derivaciones, abogacía y notariado— y Medicina (28,8 % y 19,5 % respectivamente). En contraste, las de estudios vinculados al sector productivo eran los menos poblados: ingeniería, química, agronomía y veterinaria (3,7 %, 3,5 %, 2,9 % y 1,3 %).¹¹

Otro fenómeno relevante en esta etapa es la feminización de la matrícula. En 1960 las mujeres representaban un 41,3 % del estudiantado universitario. Sin embargo, su distribución interna acompañaba los roles sociales tradicionalmente asociados con lo femenino, concentrándose en las escuelas técnicas, donde superaban ampliamente la presencia de varones, y en aquellas facultades consideradas de menor prestigio social o menos ligadas al sector productivo. Mientras la Facultad de Humanidades era la que contaba con el mayor porcentaje de estudiantes mujeres (38 %), estas se encontraban

¹⁰ La población urbana total alcanzó un 80 % debido al creciente proceso de urbanización o de “desruralización” que se produjo en el país. El censo de 1963 demostró el acentuado envejecimiento de la población. Aumentó significativamente la cantidad de personas mayores de 60 años en el total de habitantes. Estos fenómenos fueron atribuidos al ritmo lento de crecimiento poblacional y a la creciente emigración. Nahum, B. *Manual de Historia del Uruguay*. Tomo II: 1903-2010 (Montevideo: EBO, 2010) [1.ª ed. 1995]

¹¹ Solari, A. “La Universidad en transición en una sociedad estancada: el caso del Uruguay” en *Aportes. Revista trimestral de Ciencias Sociales*, n.º 2, (octubre, 1966), pp. 5-50, publicada por el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales (ILARI), París

prácticamente excluidas de las carreras de Veterinaria, Agronomía e Ingeniería. Digamos también que la significativa presencia femenina en la Universidad no tuvo como correlato una participación destacada en las posiciones de poder universitario y no se registra su actuación en los órganos de cogobierno de la época.

El estudiantado universitario, además, reproducía el macrocefalismo que caracterizaba a Uruguay ya que dos tercios de los estudiantes provenían de la capital del país. Siguiendo las tendencias demográficas nacionales, un 86 % de los estudiantes era de origen urbano, específicamente de Montevideo y de las capitales departamentales del interior del país; solo el 6 % eran originarios de otras ciudades y 8 % de pueblos y zonas rurales.¹² Este fenómeno, bastante general en el mundo, era particularmente acentuado en Uruguay.

Por último, pese al libre acceso, la gratuidad de sus servicios y la existencia de un programa de becas, eran una minoría los alumnos de las clases más bajas que accedían a la universidad y aún menos los que egresaban. El proceso de selección social, por tanto, se producía previamente al ingreso, de modo que la elección de los estudios universitarios estaba sujeta a la categoría socio-económica y a la posición social de los padres. Aún así la educación superior fue más “accesible a la generación de los hijos que a la de los padres”, afirmaba el *Registro*. La casa de estudios tenía una fuerte representación de la clase media que unida a los sectores de los estratos más altos marcaban el origen social de la mayoría de la población estudiantil.¹³ Estas tendencias se mantuvieron en los años siguientes con mínimas variaciones. El proceso de masificación siguió siendo muy pronunciado: entre 1961 y 1965 la población estudiantil creció un 22 % y los ingresos aumentaron un 54 % entre 1955-1966.¹⁴ El censo de 1968, realizado por la oficina de planeamiento de la Udelar con el asesoramiento de Jorge Graciarena, experto de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

¹² Universidad de la República. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Ciencias Sociales. *Registro universitario 1960: informe general preliminar*. (Montevideo: Universidad de la República, 1961), p. 19. Montevideo, 65,9 %, capitales 20,7 %, ciudades 5,8 %, pueblos 4,4 % y zonas rurales 3,2 %

¹³ De acuerdo con los datos del *Registro de Estudiantes* la población estudiantil reclutaba un 37 % de las categorías “ocupacionales” más altas de las sociedad; de las medias un 46 % y las de más bajas un 12,2 %

¹⁴ Estimaciones en base a cifras cuadro 2 y 3 del Plan de reestructuración de la Universidad presentado por el rector de la Udelar, Óscar J. Maggiolo, junio de 1967, citado en Markarian, V., Jung, M. E., Wschebor, Isabel. 1968. *La insurgencia estudiantil* (Montevideo: Udelar, 2009), pp. 15-28

Ciencia y la Cultura (Unesco), dio como resultado una cantidad de alumnos de 18.650. En 1972 esta cifra trepó a 27.705.¹⁵

En consonancia con el perfil profesionalista de la institución, el plantel de docentes se componía mayoritariamente de profesionales que ejercían la labor de enseñanza de manera lateral y complementaria a la actividad privada. En 1963 había 2.182 profesores (uno cada siete alumnos) pero la estructura de dedicación docente era inadecuada a las necesidades de una universidad moderna y solo un 6,4% tenía una carga horaria mayor a 24 horas semanales. El régimen de dedicación total, un sistema de incentivo a las actividades de investigación, se había instalado en 1946 en la Facultad de Medicina y tres años después se extendió a la de Ingeniería. A mediados de 1958 se aprobó la ordenanza del personal docente y del régimen de dedicación total. Si bien desde entonces este se implementó en toda la Universidad, en 1960 solo 27 de los casi 2.000 cargos docentes en toda la institución podían dedicarse de tiempo completo a la actividad académica y el tema continuó estando en el centro de atención de la comunidad universitaria en el marco de la discusión más general sobre la importancia de investigación científica en el país.¹⁶

La Udelar mantuvo el monopolio para establecer, acreditar y otorgar títulos habilitantes para el ejercicio de las profesiones. Al mismo tiempo concentró una multiplicidad de funciones docentes y científicas que en otros países se disgregaron en un sistema diversificado de instituciones públicas o privadas, nacionales y regionales, confesionales y laicas que no siempre convivieron en armonía. En Uruguay esto recién iba a ocurrir en 1984, cuando en sus últimos estertores el régimen militar estableció por decreto la habilitación de las universidades privadas. La fundación de la Universidad Católica del Uruguay al año siguiente sentó las bases del sistema universitario actual que alberga a un conjunto de instituciones de educación superior, universitarias y terciarias, privadas y públicas.¹⁷

¹⁵ Universidad de la República. *Censo General de Estudiantes, 1968. Informe preliminar*. Para los datos de 1972 ver Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), *Indicadores básicos del Uruguay*, citado por Nahum, B. *Manual de Historia del Uruguay. Tomo II: 1903-2010* (Montevideo: EBO, 2010) [1.ª ed. 1995], p. 320

¹⁶ Solari, A. "La Universidad en transición en una sociedad estancada: el caso del Uruguay" en *Aportes. Revista trimestral de Ciencias Sociales*, n.º 2, (octubre, 1966) Uruguay. Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Comisión Coordinadora de los Entes de Enseñanza. *Informe sobre el estado de la educación en el Uruguay: plan de desarrollo educativo* (Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública y Previsión social, 1966) 2 vol.; Cassinoni, Mario A. *Memoria del 1957-1960* (Montevideo: Udelar, 1962)

¹⁷ *Registro Nacional de Leyes y Decretos* (RNLD). Decreto n.º 343/984, 22 de agosto de 1984, p. 455

En suma, la única universidad del país tuvo una orientación hacia la formación de profesionales en sentido clásico que contribuyó a conformar los cuadros dirigentes y técnicos del país. A mediados de la centuria crecieron los cuestionamientos a este modelo, provenientes de una generación de docentes y estudiantes “reformistas”, llamados así por su apelación al legado de Córdoba, que reclamaron, además de la consagración de la autonomía y del cogobierno, el desarrollo de la investigación científica en relación con la enseñanza y una mayor inserción de la institución en la sociedad. Promediando los años cincuenta hubo cambios en esa dirección y, como consecuencia, la Universidad se expandió y diversificó sus actividades académicas: se crearon nuevos servicios, se actualizaron planes de estudio, se fomentó la investigación científica y se institucionalizaron las tareas de extensión.

Si bien las medidas fueron consideradas insuficientes, ciertamente sentaron las bases para la elaboración de una propuesta de reestructuración académica integral en la década siguiente. Asimismo, gracias a la Ley Orgánica de 1958 los llamados reformistas, en particular una nueva generación de jóvenes más combativos y en proceso de radicalización, accedieron a los órganos de conducción de la institución. De este modo, los grupos que tradicionalmente se habían mantenido al frente, en su mayoría afines a los partidos tradicionales, fueron paulatinamente perdiendo espacios de poder. Como veremos, la relación con estos grupos así como con el poder político se fue modificando en forma sustantiva en un contexto signado por la agudización de la radicalización política.

2. En el cruce de tres campos. Un estado de la cuestión

La presente investigación se ubica en la intersección de tres tradiciones historiográficas: la historia de la educación superior o, más específicamente, de la universidad, la historia intelectual y el campo más vasto de la historia política con énfasis en los estudios del pasado reciente. Recorre así un tramo de la peripecia de la Universidad de la República asumiendo una perspectiva que apuesta a trascender las narrativas canónicas y dar cuenta de la complejidad de los avatares institucionales, de los matices y conflictos existentes en su interior.

Entre los antecedentes más lejanos es posible remitir a la vasta producción de Ardao dedicada a los orígenes y la evolución de las ideas —entendidas como grandes sistemas

de pensamiento—, que en Uruguay tuvieron en la Udelar a su principal foco de producción e irradiación.¹⁸ Bajo el magisterio de Ardao, Paris y Oddone escribieron tres voluminosos libros que abordan un extenso arco temporal que va desde su proceso fundacional a mediados del siglo XIX hasta la aprobación de la Ley Orgánica a fines de 1958.¹⁹ Esta obra, pionera por su gran riqueza heurística y originalidad interpretativa fundó los estudios sobre la Universidad en Uruguay. Por ende, constituye un ineludible punto de partida para cualquier investigación que apunte a reconstruir su trayectoria. Así lo reconocía Tulio Halperín Donghi en su *Historia de la Universidad de Buenos Aires* al destacar la novedad del enfoque de Paris y señalar la ausencia de síntesis de ese tenor, suficientemente vastas y comprensivas, para esa casa de estudios.²⁰ Curiosamente, pese a la centralidad de la entonces única universidad existente y, en consecuencia, con carácter exclusivo en la formación de los cuadros técnicos y dirigentes, esta línea de investigación no tuvo demasiados cultores.

Los escritos posteriores, por cierto escasos y dispersos, se destacaron por reconstruir episodios puntuales o recuperar la historia y la memoria de algunos servicios, evocando hitos o trayectorias específicas con un marcado tono celebratorio.²¹ Acaso este

¹⁸ Ver por ejemplo Ardao, A. *Filosofía pre-universitaria en el Uruguay: De la Colonia a la fundación de la Universidad, 1787-1842* (Montevideo: Claudio García, La Bolsa de los Libros, 1945), *Espiritualismo y positivismo en el Uruguay* (México: FCE, 1950), Ardao, A. *La Universidad de Montevideo: su evolución histórica*. (Montevideo: CED, 1950), *La filosofía en el Uruguay en el siglo XX* (México: FCE, 1956), *Racionalismo y liberalismo en el Uruguay* (Montevideo: Universidad de la República, 1962) y *Etapas de la inteligencia uruguaya* (Montevideo: Universidad de la República, 1971). El historiador Eugenio Petit Muñoz, por su parte, analizó algunos asuntos puntuales como el proceso hacia la autonomía o el proyecto de estatuto orgánico de 1935 en *El derecho de nuestra Universidad a darse su propio estatuto* (Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias, 1961) y *Dos estudios sobre Autonomía* (Montevideo: Comisión Permanente de la VIII Asamblea de Profesores de Enseñanza Secundaria, 1966)

¹⁹ París de Oddone, Blanca. *La Universidad de la República en la formación de nuestra conciencia liberal*. (Montevideo: Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, 1958), Oddone, J. y París de Oddone, B. *Historia de la Universidad de la República: La Universidad Vieja, 1849-1885* (Montevideo: Universidad de la República, 1963) y *La Universidad uruguaya desde el militarismo a la crisis (1885-1958)* vol. 2 (Montevideo, Universidad de la República, 1971)

²⁰ Halperín Donghi, Tulio. *Historia de la Universidad de Buenos Aires* (Buenos Aires: Eudeba, 2013) [1ª. ed. 1962], pp. 10-11

²¹ París, B. (coord.). *Historia y memoria: Medio siglo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1945-1995* (Montevideo: Udelar-Fhuce, 1995) Ruiz, Esther y otros. *Memorias de una profesión silenciosa: Historia de la ingeniería en Uruguay* (Montevideo: Udelar-Facultad de Ingeniería, 1997) Sánchez Puñales, Soledad. *Historia de la enfermería en Uruguay* (Montevideo: Trilce, 2002) Ruiz, E. (ed.). *Una poderosa máquina opuesta a la ignorancia: 100 años de la Facultad de Agronomía* (Montevideo: Facultad de Agronomía, 2007) Beretta, Alcides. *Roberto Caldeyro Barcia: El mandato de una vocación* (Montevideo: Trilce/Pedeciba, 2006) Markarian, Roberto y Mordecki, Ernesto (coords.). *José Luis Massera: Ciencia y compromiso social* (Montevideo: Orbe/Pedeciba, 2010) Martínez, María Laura. *75 primeros años en la formación de los ingenieros nacionales. Historia de la Facultad de Ingeniería (1885-1960)* (Montevideo: Udelar, Facultad de Ingeniería, 2014) Wilson, Eduardo, Nowinski, Aron, Turnes, Antonio L., Sánchez, Soledad y Sierra, Jorge. *Hospital de Clínicas de Montevideo: Génesis*

fenómeno responda a la propia envergadura y, sobre todo, a la pretensión globalizadora de la empresa acometida por Oddone y Paris. Tal como anunciaban en el primer tomo de 1963, se trató de la primera historia comprensiva, con una perspectiva global, de la institución a lo largo de más de un siglo de existencia. Ese esfuerzo estuvo pautado, decían, por la voluntad de conocer el pasado para iluminar el presente y por el propósito de convertirse en insumo para pensar el futuro de la Universidad en un momento de crisis e incertidumbres. Más tarde, Paris continuó investigando sobre etapas posteriores cuyos resultados se plasmaron en un libro póstumo que abarca desde la crisis a la intervención por parte del gobierno autoritario en 1973.²²

Sin dejar de reconocer las virtudes de ese ya clásico y monumental estudio, esta tesis discute algunos de sus presupuestos en sintonía con la renovación de este campo de estudios tanto en el ámbito local como regional que de modo interdisciplinar se propone recrear una historia institucional más entrelazada con los aspectos sociales, culturales y políticos. En tal sentido, abreva y forma parte de los esfuerzos que hace más de una década realiza el Archivo General de la Universidad de la República (AGU), donde radica la investigación que le da sustento, por ampliar enfoques, temas y actores así como por complejizar una narrativa que se centró en presentar a la Universidad como un actor homogéneo y unificado y donde las disputas internas aparecen diluidas frente a la necesidad de responder a los ataques de un otro externo —el Gobierno o los sectores conservadores de los partidos tradicionales— que también se muestra de modo cohesionado o uniforme. Se trata, por ende, de problematizar un relato que se volvió sentido común para buena parte de la comunidad universitaria, que explica en clave teleológica el devenir de esa casa de estudios como una sucesión de etapas de crecimiento en el camino de ascenso de la llamada generación reformista, a la que los autores estaban ligados, coronado por la sanción de una nueva Ley Orgánica en 1958. Desde este punto de vista, la ley del 58 se tornó punto de partida y de llegada en el largo proceso reformista gestado en las décadas anteriores.

Finalizando los años ochenta del siglo pasado, en un incipiente e inconcluso estudio Landinelli contradujo en parte esta visión al remarcar que la Universidad es un

y realidad (1887-1974) (Montevideo: Bioerix, 2011) Rico, Álvaro. *La Universidad de la República desde el golpe de Estado a la Intervención* (Montevideo: Udelar-CEIU/Fhuce, 2003)

²² París de Oddone, María Blanca. *La Universidad de la República. Desde la crisis a la intervención*. (Montevideo: Udelar, Departamento de Publicaciones, 2010)

organismo e institución social que como tal no “constituye una entidad unitaria, un cuadro homogéneo e integrado, sino un espacio público surtido por la afluencia de procesos políticos concretos”.²³ En un intento de ir más allá, las investigaciones del AGU —llevadas a cabo de manera articulada con el acopio, descripción y puesta en servicio de variados y heterogéneos corpus documentales— se propusieron capturar los puntos de conflicto, las polémicas y las pugnas que formaron parte de la vida universitaria y en las que se superponen o contraponen intereses de diverso origen, reponiendo la contingencia de los procesos que se describen. Aún así no han sido pocas las ocasiones en que este espacio académico ha debido navegar en la tensión entre las imposiciones propias de las conmemoraciones y la asunción de un enfoque crítico y reflexivo en el examen de algunos momentos claves de la historia universitaria.²⁴ Con estas prevenciones se avanzó en el conocimiento sobre otras facetas del devenir universitario, hasta ahora no abordadas. Así por ejemplo se avanzó en la historia de la presencia universitaria en el interior del país que introdujo entre los factores explicativos el papel, a veces determinante, de las demandas de sectores y actores locales en los procesos que condujeron a la ampliación de la cobertura geográfica de la educación superior.²⁵

Las investigaciones de Vania Markarian sobre la imbricación entre los debates universitarios, el campo cultural, intelectual y político y la reconfiguración de las izquierdas en un tiempo marcado por la radicalización política expresan a cabalidad ese impulso innovador. La autora analizó en detalle la conformación y el ascenso en el gobierno universitario de la heterogénea generación reformista gracias a una frágil y tensionada alianza con el movimiento estudiantil de la época, sus declinaciones y

²³ Landinelli, J. “La Universidad como problema político (1968-1973)”, en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, n.º 3, (1989), p. 74.

²⁴ Markarian, Vania (ed.). *Un pensamiento libre: Cartas de José Luis Massera* (Montevideo: AGU, 2006) Markarian, V. (ed.) *Don Julio: Documentos del Archivo Ricaldoni* (Montevideo: AGU, 2007) Inchausti, Martha (ed.). *Una vida dedicada a la matemática: Documentos del Archivo Laguardia* (Montevideo: AGU, 2007) Markarian, V. (ed.). *Universidad, investigación y compromiso: Documentos del Archivo Maggiolo* (Montevideo, AGU, 2010). Ver serie *Aniversarios 2008*: Markarian, V., Jung, María Eugenia, Wschebor, Isabel. *1908: El año augural*. (Montevideo: Universidad de la República, 2008); *1918: En la hora americana*. (Montevideo: Universidad de la República, 2008) *1958: El cogobierno autonómico*. (Montevideo: Universidad de la República, 2008) *1968: La insurgencia estudiantil* (Montevideo: Universidad de la República, 2008) *1983: La primavera democrática* (Montevideo: Universidad de la República, 2009)

²⁵ Jung, M. E. (ed.). *Antecedentes históricos de la Universidad en el interior del país 1906-1973* v. 1 (Montevideo: Universidad de la República, 2012) y *Antecedentes históricos de la Universidad en el interior del país 1973-2007* v. 2 (Montevideo: Universidad de la República, 2013)

derivas junto a los intentos de transformación académica por izquierda.²⁶ Más recientemente profundizó esa línea interpretativa al analizar dos polémicas acerca de la recepción de fondos externos para la investigación científica que enfrentaron distintas posiciones en el marco más general de debates sobre la función social de las instituciones de conocimiento, aportando conclusiones novedosas respecto a los complejos vínculos entre el campo universitario y académico y la izquierda intelectual y política en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado.

Por un lado, postula que en ancas de —y gracias a— la politización de las discusiones universitarias y del recrudescimiento de las posturas antiimperialistas fue posible la definición de políticas científicas, la institucionalización de algunas disciplinas y la consolidación de un programa de reforma integral de la institución; por otro, demuestra cómo estos debates, que traspasaron los claustros, coadyuvaron a la reformulación de las identidades políticas e intelectuales, confluyendo con los intentos de elaboración de un programa de cambio social que, en última instancia, cristalizó en la creación del Frente Amplio a comienzos de los setenta.²⁷

Esta tesis dialoga de modo fluido con este trabajo, incluso podría decirse que es su contracara, al pararse en la vereda de enfrente y capturar el punto de vista de aquellos “otros” que desafiaron, cuestionaron o se opusieron a la llamada generación reformista estableciendo sus alianzas más o menos coyunturales, construyendo su propio relato sobre la institución universitaria y, en ocasiones, expresando una manera alternativa de entender el papel de la universidad.

Finalmente, cabe referir de manera general a un conjunto de investigaciones proveniente de otros espacios de producción académica con los cuales este trabajo se emparenta. Entre ellas merecen una mención especial las que lleva adelante un grupo de investigadores del Instituto de Educación de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación acerca de la relación entre educación y desarrollo en los largos sesenta y, más específicamente, de la centralidad que asumió esa relación en el discurso público y político bajo el influjo del desarrollismo y de la conformación de nuevos saberes

²⁶ Ver por ejemplo Markarian, V. “Apogeo y crisis del reformismo universitario. Algunos debates en torno al “plan Maggiolo” en la Udelar”. *Pensamiento Universitario*, 14 (octubre de 2011) y “Tres partes y tres fuentes. Un ensayo de ubicación del Plan Maggiolo en el contexto intelectual del Uruguay de los sesenta”. En: Jung, M. E., Martínez, M. L. y Paroli, P. (eds.). *50 años del plan Maggiolo. Historia, testimonios y perspectivas actuales* (Montevideo: Udelar-Ediciones Universitarias, 2018)

²⁷ Markarian, Vania. *Universidad, revolución y dólares Dos estudios sobre la izquierda, la Guerra Fría cultural y la reforma de la educación superior en el Uruguay de los sesenta* (Montevideo: Debate, 2020)

expertos, que proporcionaron modelos explicativos del fenómeno educativo.²⁸ Asimismo, se ha nutrido del aporte de otras disciplinas como la sociología, la ciencia política o la filosofía de la ciencia que analizan la vinculación entre las ideas y las políticas públicas, la producción de conocimiento y el desarrollo o la historia de disciplinas o campos científicos.²⁹

La renovación de este campo de estudios se dio en diálogo con procesos similares en la región. Recordemos que la llamada “universidad latinoamericana”, a causa de las peculiaridades de su implantación y su rol social, atrajo tempranamente el interés de las ciencias sociales, especialmente en países vecinos como Argentina.³⁰ No es de extrañar, por ende, que la celebración en 2018 de los cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba y el cincuentenario de las protestas sociales y estudiantiles de 1968 fuera una oportunidad para hacer balance de la producción académica al mismo tiempo que dejó abierta una promisoriosa agenda de investigación. Los numerosos eventos, artículos y libros publicados dieron cuenta de la copiosa acumulación historiográfica de la última década que revisó esos grandes acontecimientos, exploró facetas menos conocidas y aportó nuevas lecturas sobre temáticas ya transitadas.³¹

²⁸ Ver: Romano, Antonio. *De la Reforma al Proceso. Una historia de la Enseñanza Secundaria de 1955-1975*. (Montevideo: Trilce, 2010) y *Reconstrucción del debate en torno a la investigación en educación en la década de los 60 en el Uruguay* Ponencia presentada a las IV Jornadas de Investigación y III de Extensión del Facultad de Humanidades y Ciencias, noviembre de 2011. D’Avenia, Lucas. “La CIDE y el campo pedagógico uruguayo: actores, producción de conocimiento y agenda política”. Seminario *Ciencia, educación y desarrollo en el Uruguay de los sesenta* organizado por el Departamento de Ciencias de la Educación/FHCE y el Archivo General de la Universidad, 5 de julio de 2012, “La irrupción de la cuestión del desarrollo en el campo educativo y su interpelación al campo pedagógico. El caso de la CIDE en Uruguay” *IV Jornadas de Investigación y III de Extensión*, Facultad de Humanidades y Ciencias, noviembre de 2011 y “Desarrollismo y Educación en Uruguay en los 60”. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 5, n.º 5, 2014. D’Avenia, Lucas. “Desarrollismo y Educación en Uruguay en los 60”. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 5, n.º, (2014)

²⁹ En la Ciencia Política destaca el trabajo de Adolfo Garcé, *Ideas y competencia política en Uruguay, 1960-1977. Revisando el “fracaso” de la CIDE* (Montevideo: Trilce, 2002). Una síntesis de las acumulaciones sobre estos temas se encuentra en la fundamentación del proyecto *Fuentes para la historia intelectual 2018-2022*, del Grupo de investigación: Archivos y Estudios sobre Historia Intelectual (AEHI) radicado en el AGU y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República

³⁰ Halperín Donghi, T. *Historia de la Universidad de Buenos Aires* (Buenos Aires: Eudeba, 2013) [1a. ed., 1963]; Buchbinder, Pablo *Historia de las universidades argentinas*. (Buenos Aires: Sudamericana, 2005) y “Los sistemas universitarios de Argentina y Brasil: una perspectiva histórica y comparada de su evolución desde mediados del siglo XX”, en Buchbinder, P. y otros, *Apuntes sobre la formación del movimiento estudiantil argentino 1943-1973* (Buenos Aires: Final Abierto, 2010)

³¹ Entre las compilaciones o colecciones pueden mencionarse los de Bascolla, Natalia, Mauro, D., Eujanian A. *Dimensiones del Reformismo universitario*. (Rosario: Humanidades y Artes Ediciones, 2018). 7 Vols. Para el movimiento estudiantil y las protestas de 1968: Bonavena, Pablo y Millán, Mariano (eds.). *El ‘68 latinoamericano. A 50 años de Tlatelolco. Movimientos estudiantiles, política, cultura, historia y memoria*. (Buenos Aires: Clacso/IIGG, 2018)

De ese modo, múltiples aspectos de los avatares universitarios en el continente vienen siendo repensados a partir de otras miradas y preguntas. Las derivas del reformismo, las dinámicas de la movilización estudiantil, la politización de los centros educativos, los debates sobre la transformación de las universidades, las implicancias de sus formas de gobierno, la democratización del acceso a la enseñanza superior y las relaciones entre universitarios, intelectuales y fuerzas políticas son apenas algunos de los asuntos que vienen siendo tratados.

En buena medida los abordajes del universo académico se beneficiaron del intercambio con una nueva historia intelectual que, como recuerda Carlos Altamirano, se practica de muy diversos modos y está exenta de fronteras fijas en relación con otros campos del mundo histórico y social. La historia intelectual —un campo de estudios más que una disciplina—, a diferencia de la vieja historia de ideas, se interesa por el pensamiento en su propio contexto social e histórico y comprende entre sus objetos las diversas formas de producción y circulación del conocimiento y sus interrelaciones con otras esferas de la vida social, con énfasis en el estudio de redes, instituciones y agentes.³² Concebida de esta manera amplia, ofrece un marco más comprensivo en el cual las universidades son un elemento central y constitutivo del entramado institucional de donde emergen las élites intelectuales y culturales.³³

En el ámbito latinoamericano los ya clásicos libros de Oscar Terán y Silvia Sigal constituyen una referencia ineludible para cualquier análisis acerca de las relaciones entre universidad, intelectuales y política. Escritos en los albores de la última década del siglo pasado, dejaron una profunda huella, al inaugurar una línea de reflexión que fue

³²Altamirano, Carlos. *Ideas para un programa de Historia Intelectual y otros ensayos* (Buenos Aires: Siglo XXI Ediciones Argentina, 2005) pp. 10 y 13; *Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta*. (Buenos Aires, Siglo XXI Ediciones Argentina, 2013). Esta nueva historia intelectual se ha definido por oposición o diferenciación de la tradicional historia de las ideas. Esta gira, dice Elías Palti, en torno a una serie de oposiciones (ilustración/romanticismo, liberalismo/nacionalismo, antiguos contra modernos, entre otras), cuyo propósito es trazar genealogías de pensamiento. Uno de sus máximos exponentes fue el mexicano Leopoldo Zea y en el ámbito local el mencionado Arturo Ardao. Ver: Palti, Elías, “La historia intelectual latinoamericana y el malestar de nuestro tiempo”, *Anuario IEHS* n.º 8, (2003), pp. 232-249. Por una síntesis de este recorrido ver Polgovsky Ezcurra, Mara “La historia intelectual latinoamericana en la era del “giro lingüístico”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* <http://nuevomundo.revues.org/60207>

³³ Ver Sigal, Silvia. *Intelectuales y poder en la Argentina: La década del sesenta* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2002) Terán, Oscar. *Nuestros años sesentas: La formación de la nueva izquierda intelectual argentina, 1956-1966* (Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1993) Caldelari, María y Funes, Patricia, "La Universidad de Buenos Aires, 1955-1966: Lecturas de un recuerdo", en Oteiza, Enrique (coord.), *Cultura y política en los años 60* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires, 1997), Altamirano, C. *Historia de los intelectuales en América Latina* 2 vol. (Buenos Aires: Katz editores, 2008-2010)

profundizada y discutida a lo largo de los decenios siguientes. Reconociendo su anclaje en la historia de las ideas el primero y en la sociología de la cultura la segunda, ambos exhiben variaciones de enfoques, metodologías y recortes analíticos, pero también claras similitudes temáticas y en la elección de sus marcos cronológicos. Podría decirse que representan dos interpretaciones de un mismo objeto de análisis: los intelectuales y su vinculación con las derivas de las izquierdas argentinas y latinoamericanas. Si bien ninguno se focaliza específicamente en la universidad, lo cierto es que examinan sus objetos en el marco de ese espacio institucional o en referencia a él. Particularmente para Sigal la universidad ocupa un lugar central: por un lado constituye el ámbito en el cual se desempeña el sector de intelectuales de izquierda que estudia y por otro este grupo tomó como fuente de legitimación doctrinaria el legado reformista de Córdoba cuyos postulados permitieron reunir a un conjunto de individuos y sectores diverso ideológicamente pero que pueden asociarse, según la autora, a una cultura política progresista. El propio Terán reconoció en aquel momento los méritos de esta perspectiva, que tomaba “la universidad como caso del Estado argentino: el Estado como género y la Universidad como especie”, aportando así “una serie de reflexiones francamente productivas.”³⁴ Asimismo, un argumento central de la tesis de Sigal, que atraviesa y articula su relato, refiere a la superposición entre la historia de la universidad argentina y la historia del país, poniendo en evidencia la debilidad del campo universitario subordinado a la lógica del campo político y, por eso mismo, a sus vaivenes y crisis.

Más allá de toda disquisición y de los cuestionamientos posteriores, ambos textos inspiraron una profusa producción académica que, en el cruce de tradiciones y procedencias disciplinares, fue diversificando temáticas, enfoques y marcos temporales. Los dos voluminosos tomos de la *Historia de los Intelectuales en América Latina* dan cuenta de esas variaciones de asuntos así como de la heterogeneidad de perspectivas que supone esta noción amplia de historia intelectual tal como la formuló el propio Altamirano y que tuvo en el programa de historia intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes su radicación institucional.³⁵

³⁴ Terán, O., “Los intelectuales frente a la política” [conversación entre Oscar Terán y Silvia Sigal publicada en *Punto de Vista*, n.º 42, (abril, 1992). En Terán, O. *Nuestros años sesentas* (Buenos Aires: Puntosur, 1991)

³⁵ Altamirano, C. *Historia de los intelectuales en América Latina* 2 vol. (Buenos Aires: Katz editores, 2008-2010)

Por último, cabe destacar la línea de análisis que recorre el trabajo de Federico Neiburg y Mariano Plotkin, cercana al núcleo de preocupaciones descritas, pero más atenta al papel de intelectuales y expertos en los procesos de institucionalización del conocimiento social. A partir de la reunión de un conjunto de estudios empíricos y casos particulares, se da cuenta de la permeabilidad y la mutua contaminación de las categorías intelectual y experto, alejándose de las clasificaciones dicotómicas y normativas. Se observa, además, el entrelazamiento entre la configuración de campos disciplinares, las demandas estatales en los procesos de construcción de una voz de autoridad social y los flujos y pasajes de individuos, ideas, modelos institucionales y formas de intervención más allá de los marcos nacionales.³⁶ Los deslindes analíticos resultan útiles a la hora de pensar los cambiantes roles sociales que van asumiendo distintas categorías socio-profesionales de origen universitario (científico, profesional, técnico), sus fronteras siempre porosas y sus intersecciones en distintos espacios de circulación (universitarios y extrauniversitarios). Asimismo, el enfoque de los autores plantea una relación productiva entre la historia intelectual y los estudios históricos sobre el Estado. Investigaciones posteriores profundizaron en esta perspectiva, abordando la constitución de conocimiento social en relación con las demandas del Estado, la conformación de elites estatales y los mecanismos de circulación, recepción y legitimación de los saberes fuera de fronteras y en el ámbito local.³⁷ Otro conjunto de indagaciones continuó analizando los procesos de institucionalización y de profesionalización de una variedad de campos disciplinares referidos al estudio de diversos aspectos de la sociedad.³⁸ La producción académica señalada abona los estudios sobre el rol social de las universidades, intelectuales y técnicos en el marco de los procesos de modernización económica, del papel del conocimiento técnico y aplicado así como de la adaptación no pasiva de sistemas de ideas y modelos de circulación y regional.

³⁶ Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano (comp.) *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina* (Buenos Aires: Paidós, 2004), p. 17

³⁷ Ver por ejemplo: Ben Plotkin, Mariano y Zimmermann, Eduardo. *Los saberes de Estado* (Buenos Aires: Edhasa, 2012) y *Las prácticas del Estado* (Buenos Aires: Edhasa, 2012). En una línea similar pero más apoyado en la literatura sobre el Estado ver: Bohoslavsky, Ernesto y Soprano, Germán. *Un Estado con rostro humano: funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad)* (Buenos Aires, Prometeo, 2010)

³⁸ Blanco, Alejandro, *Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2006), Suasnábar, Claudio. *Universidad e intelectuales. Educación y política en la Argentina (1955-1976)* (Buenos Aires: Manantial, Flacso, 2004)

Si bien esta tesis no trata específicamente de los intelectuales, esa amplitud de orientaciones, estrategias y prácticas de investigación y el énfasis en la historicidad de las prácticas y conceptos que caracteriza los nuevos desarrollos de la historia intelectual sirven de inspiración para examinar la Universidad en relación con tramas sociales, culturales y políticas más amplias, restituyendo su carácter de actor político y social significativo en relación con otros actores, el poder político y las élites. El universo académico se erige desde esta perspectiva como un espacio de disputa, donde se anudan actores, redes y conflictos de diversa índole: políticos, científicos, institucionales y corporativos. En este mismo sentido, resulta sugerente la invitación del sociólogo Pierre Bourdieu —de cuya sociología de la cultura en parte abreva esta nueva historia intelectual— al abordaje sistemático y relacional de este ámbito social específico que tiene sus propias reglas y sus sistemas de relaciones internas. Como tal, es un espacio de lucha y competencia entre agentes dotados desigualmente de recursos simbólicos. En su estudio sobre el sistema académico francés, Bourdieu alertaba además de los retos que implica tomar por objeto “un mundo social en el que uno se halla comprendido”, en este caso el de los universitarios del pasado por parte de quienes ocupamos una posición en ese mismo espacio.³⁹

Junto a estas referencias, la tesis se inscribe en la historia política y, más concretamente, en la vertiente que hizo foco en los estudios del pasado reciente en Uruguay. Tras la primacía en los años sesenta y setenta de los enfoques estructurales y socioeconómicos, la disciplina emergió renovada y con fuerza en los ochenta bajo la estela de los regímenes autoritarios implantados en la región y los recién iniciados procesos de transición a la democracia. En ese momento, ante la necesidad de comprender los fenómenos ocurridos así como de ofrecer salidas a la situación dictatorial todavía imperante, las ciencias sociales influidas por las corrientes politológicas en boga ensayaron las primeras interpretaciones globales del período que presentaron un marcado carácter institucionalista y postularon la autonomía de la política por sobre los condicionantes socioeconómicos.

También los análisis históricos de la época, todavía escasos, privilegiaron el rol de los líderes civiles y militares, el sistema de partidos, entre otros aspectos, en la caída de la democracia y el avance del autoritarismo y las transiciones a la democracia. En los

³⁹ Bourdieu, Pierre. *Homo Academicus* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2014), [1ª. ed. 1984] pp. 11-52; sobre la definición más general de campo ver: *Intelectuales, política y poder* (Buenos Aires: Eudeba, 2009)

albores del siglo XXI, pasado el giro subjetivo de los noventa, una nueva generación de historiadores se abocó desde una perspectiva interdisciplinaria a la comprensión de la violencia política de los años sesenta que terminó desembocando en el quiebre institucional. Gracias a la convergencia del interés académico y de un clima favorable y de voluntad política a las investigaciones sobre crímenes de la dictadura, se consolidó un campo de estudios con legitimidad social.⁴⁰

En el caso uruguayo, el lúcido y original trabajo de Álvaro Rico sobre la deriva autoritaria del liberalismo conservador anterior al golpe, que luego afirmó con su conocida tesis del “camino democrático a la dictadura” en el lustro que va de 1967 a 1973, abrió un campo fértil de investigaciones sobre los mecanismos de control social y la instalación de medidas de excepción al amparo del aparato estatal. Con un enfoque de filosofía política, el proyecto de Rico se propuso indagar en la génesis del autoritarismo para comprender la perdurabilidad de prácticas y lógicas autoritarias en la posdictadura.⁴¹

Sin embargo, la historia reciente en Uruguay se amplificó y se asentó en el espacio académico, pero se mantuvo centrada en las organizaciones de izquierda o el despliegue de los mecanismos de control y represión del Estado, dejando de lado las referencias a las organizaciones de derecha de profusa actividad en los años sesenta y setenta. Comenzando el siglo XXI la historiadora estadounidense Sandra McGee Deutsch, en su libro seminal *Las Derechas*, hacía extensiva esta situación a los estudios latinoamericanistas concentrados en el estudio de la izquierda tradicional o la denominada revolucionaria. En contraste, decía, era evidente la escasa atención académica a los proyectos, movimientos e ideologías ligadas a la defensa del orden o

⁴⁰ Ver Marchesi, Aldo y Markarian, V. “Cinco décadas de estudio sobre la crisis de la democracia y el autoritarismo en Uruguay”. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 3, v. 3 (2012). En este artículo los autores repasan los diferentes momentos e itinerarios en el proceso de conformación de un campo de estudios sobre el pasado reciente en Uruguay, contemplando las corrientes que fueron dominantes en cada momento, los énfasis teóricos, perspectivas disciplinarias, marcos institucionales, los condicionantes políticos y problemas históricos más importantes en cada etapa: enfoques estructurales y explicaciones socioeconómicas en los sesenta y setenta; el retorno de las explicaciones políticas de carácter institucionalista en los ochenta; el giro subjetivo en los noventa y la consolidación del campo en los 2000 con predominio de ideas como “terrorismo de Estado” y “violaciones de los derechos humanos”. También muestran como este proceso se dio en diálogo e intercambio con la producción académica en la región

⁴¹ Rico, Álvaro. *Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay, 1985-2005* (Montevideo: Trilce, 2005), y *1968: El liberalismo conservador* (Montevideo: Facultad de Humanidades, Universidad de la República/EBO, 1989)

que reaccionaron a los intentos de subvertirlo.⁴² Según el historiador brasileño Rodrigo Patto Sá Motta, esta omisión respondía a la descalificación y desprestigio de estos grupos y sujetos en círculos progresistas luego de su derrota a fines de la Segunda Guerra Mundial. Ambos autores llamaban la atención acerca del desequilibrio entre la ausencia de estudios académicos dedicados a la temática y la relevancia que efectivamente tuvieron los movimientos de derecha en el acontecer político latinoamericano. En cambio, aparecían en la literatura de manera esquemática y superficial, en ocasiones con apelaciones maniqueas, demostrando un esfuerzo de denuncia más que una voluntad por comprender y explicar.⁴³ Esta tendencia pone una alerta, además, sobre los desafíos de estudiar actores con los que no se tiene sintonía o se rechaza ideológicamente.

En la última década un contingente de académicos procedentes de distintas ciencias sociales tomó como objeto de reflexión a los actores, organizaciones, ideas y cosmovisiones que pueden ser caracterizadas como propias de las derechas. El desarrollo en la región de espacios de producción y discusión académica sobre estos asuntos, decíamos, se produjo en estrecho vínculo con los estudios del pasado reciente que, además, coincidió con el ascenso de los Gobiernos de centroizquierda en distintos países del continente. Así, se fue configurando un campo de estudios específico con sus redes, ámbitos de intercambio y publicaciones. El interés se renovó con el resurgimiento y vigorización de diversas expresiones de derecha (“nuevas”, extremistas, populistas) a nivel global que vienen demostrando su capacidad de renovación, de generar nuevos liderazgos así como de atraer apoyo social y sustento electoral, coadyuvando a la consolidación de este campo académico.⁴⁴ Pasada más de una década, el fin del llamado ciclo progresista y el ascenso de Gobiernos de derecha en América Latina redoblaron la preocupación por comprender estos fenómenos políticos y sociales novedosos y, por ende, volvió más urgente el estudio de las ideas, organizaciones y prácticas de este campo político.

⁴² McGee Deutsch, Sandra. *Las Derechas. La extrema derecha en Argentina, Brasil y Chile, 1890-1939* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2005), p. 21

⁴³ Ver Motta, Rodrigo Patto Sá, *Em guarda contra o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil, 1917-1964* (São Paulo: Editora Perspectiva, 2002). En 2019 se publicó una versión en español: *En guardia contra el peligro rojo: el anticomunismo en Brasil 1917-1964* (Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2019) y “Apresentação” En *Varia historia*, vol. 30, n.º 52, Belo Horizonte (2014)

⁴⁴ Motta, Rodrigo Patto Sá, “Apresentação” En *Varia historia*, vol. 30, n.º 52, Belo Horizonte (2014), pp. 7-10

También la historiografía local ha incorporado en los últimos años entre sus objetos de estudio de diversas formaciones derechistas. Esta línea de investigación denotó en su origen una marcada preocupación por proveer otros ingredientes de comprensión del proceso político y social que condujo al golpe de Estado en 1973 o del lento “camino democrático a la dictadura”, en palabras de Rico. Esa búsqueda por complejizar los factores que desencadenaron los procesos autoritarios motivó los estudios sobre las derechas en la región. De hecho, la pionera investigación de McGee Deutsch, si bien se concentra en las tres primeras décadas del siglo XX, está orientada por una clara intención de comprender lo que conocemos como pasado reciente.⁴⁵

Un espíritu similar animó al uruguayo José Pedro Barrán, quien por esa misma época, respondiendo a la convocatoria del historiador Fernando Devoto, escribió un libro sobre el conservadurismo uruguayo en un período semejante al analizado por la historiadora estadounidense. Decía entonces Barrán que del examen de las claves del pensamiento y las prácticas conservadoras se podía llegar “a comprobar cómo era diferente y también parecido, el huevo de la serpiente —el conservadorismo democrático de 1916, el golpista de 1933— a la serpiente de 1973”.⁴⁶ Desde entonces se han desarrollado espacios de encuentro e intercambio entre especialistas de diversos países latinoamericanos donde se ponen en común avances de investigación y se debate sobre la definición de las derechas, los abordajes metodológicos así como los problemas que supone analizar este campo político ideológico.⁴⁷

En Uruguay, las conclusiones de Álvaro Rico acerca del giro del liberalismo democrático tradicional hacia el liberalismo conservador de práctica autoritaria que finalmente se asentó tras el golpe de Estado resultaron muy influyentes en los abordajes sobre el pasado reciente en general, y de las derechas en particular.⁴⁸ Con base en estas preocupaciones en los últimos diez años se produjo una vastísima literatura académica que puede agruparse en dos ejes analíticos: uno centrado en el análisis de las lógicas

⁴⁵ Ver especialmente el último capítulo “El Legado”. McGee Deutsch, Sandra, op.cit., pp.395-424

⁴⁶ Barrán, José Pedro. *Los conservadores uruguayos (1870-1933)* (Montevideo: EBO, 2004)

⁴⁷ Fue clave el papel de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de los historiadores Ernesto Bohoslavsky y Olga Echeverría en la conformación de estos espacios de discusión. En particular se destacan los talleres anuales y los coloquios “Pensar las Derechas en América Latina”, que se realizan en forma bienal. Ver <http://www.ungs.edu.ar/derechas/>. Ver también el blog *Derechal@gos*: <https://derechalogs.hypotheses.org/coloquios-pensar-las-derechas>. También se conformó una red interdisciplinaria de investigadores latinoamericanos dedicados al estudio de las derechas en el marco de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: “Derechas contemporáneas: dictaduras y democracias” en <https://www.clacso.org/derechas-contemporaneas>

⁴⁸ Rico, A. 1968. *El liberalismo conservador*

estatales e institucionales con el propósito de rastrear el uso y las concepciones represivas y autoritarias del Estado previas a la dictadura y la crisis “sesentista”; otro focalizado en las expresiones sociales de las derechas, sus formas de organización, ideas, formas identitarias y acciones. Estos dos cuerpos de literatura comparten, como se dijo, el interés por aportar nuevas claves de interpretación a los procesos que desencadenaron en el quiebre institucional de 1973 y sobre todo por explicar la irrupción de la violencia política —estatal y no estatal— que caracterizó los largos sesenta. Como señalaron Marchesi y Yaffé, en la bibliografía sobre el período 1959-1973, recostada sobre los enfoques politológicos de los años ochenta, la violencia fue considerada un factor causal del proceso de deterioro institucional que derivó en el golpe pero no como un “resultado a ser explicado”. En conjunto, las nuevas investigaciones sobre las derechas reponen la violencia política no como un “dato dado” sino como un fenómeno “cuya emergencia y desarrollo requiere ser explicado”.⁴⁹

En el primer eje analítico, en línea con el enfoque de Rico, las investigaciones se orientaron a la reconstrucción histórica de las prácticas autoritarias y de la violencia del Estado más allá del período dictatorial y del lustro que le precedió. Sin dejar de reconocer la novedad de los nuevos autoritarismos se buscó superar la interpretación de la dictadura y de la crisis como un corte abrupto o un período extraordinario en la larga historia democrática uruguaya, desplazando la mirada hacia las continuidades con los períodos de excepción y represión en las décadas previas.⁵⁰ Para ello se puso énfasis en análisis de los actores estatales e institucionales, tanto en el plano discursivo como en el de las prácticas.

Desde esta perspectiva, Mariana Iglesias reconstruyó el uso de las medidas prontas de seguridad (MPS) —recurso de excepción establecido en la Constitución uruguaya que habilita la suspensión de derechos individuales en caso de conmoción interna o amenaza externa— por parte de los partidos políticos uruguayos entre 1946 y 1963. La

⁴⁹ Marchesi, Aldo; Yaffé, Jaime “La violencia bajo la lupa: una revisión de la literatura sobre la violencia política en los sesenta”, *Revista Uruguaya de Ciencia política*, v.19, 1 (2012)

⁵⁰ Sobre la definición de los nuevos autoritarismos sigue vigente el clásico trabajo de Guillermo O’Donnell “Tensiones en el estado Burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia”. En: O’Donnell, Guillermo, *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, (Buenos Aires. Paidós. 1997). En una línea similar al trabajo de Rico, pero desde una perspectiva historiográfica Marina Franco abordó el período constitucional 1973-1976. Estudia las líneas de continuidad (“olvidadas, silenciadas, omitidas”) en términos de políticas represivas estatales de este período con el ciclo abierto con el golpe de 1976. Su enfoque discurre por dos sendas: las prácticas estatales represivas, por un lado, y la discursividad política y periodística predominantes en esos años. Franco, Marina, *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*, (Buenos Aires, FCE, 2012)

historiadora puso en evidencia cómo las MPS se constituyeron y funcionaron como un mecanismo para preservar el orden sociopolítico y reponer la centralidad de los partidos políticos tradicionales uruguayos, restituyendo su superioridad cada vez que fueron desafiados por movimientos o colectivos sociales orientados por demandas específicas. La corroboración de que su utilización fue una práctica habitual durante todo el siglo XX contradice el consenso social y académico que las focalizó en el período 1968-1973, en el marco de la reacción ante el avance de la izquierda política y la creciente movilización social asociada a ella. De modo similar, la investigación de Leandro Kierszenbaum apunta a reconstruir históricamente las prácticas legales autoritarias bajo los Gobiernos democráticos junto con los aspectos discursivos que las legitimaron en Uruguay entre 1945 y 1968. Analiza así como las MPS equiparadas al concepto de “Estado peligroso” —noción proveniente de la dictadura de Terra— fungieron como eficaz herramienta de control social.⁵¹

Asimismo, una línea de indagación que se desarrolló con fuerza en la primera década del siglo XXI se volcó a reponer las prácticas y los discursos de una diversidad de agrupaciones anticomunistas que emergieron durante los largos sesenta en Uruguay como respuesta a lo que denunciaban como una ofensiva de las izquierdas y al ascenso de la movilización social. Los trabajos resultantes partían de la constatación de un desbalance en la producción académica, volcada mayoritariamente al estudio de las organizaciones revolucionarias de izquierda, en particular del Movimiento Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Quedaba en evidencia así el escaso interés historiográfico en las organizaciones de derecha que habían incorporado la violencia como parte del repertorio de acciones legítimas.⁵² El desarrollo de estas investigaciones permitieron avanzar en el conocimiento de los vínculos de las expresiones derechistas con los intentos de contención —estatales y no estatales— a un “movimiento popular previamente activado”, en palabras de O’Donnell, y con la instalación de la violencia política que contribuyeron en la deriva autoritaria de esos años. Mauricio Bruno, Gabriel Bucheli y Magdalena Broquetas indagaron sobre las campañas anticomunistas, las prácticas violentas y los vínculos con actores del sistema político partidario, el

⁵¹ Iglesias, Mariana, “La excepción como práctica de gobierno en Uruguay, 1946-1963”. *Contemporánea Historia y problemas del siglo XX*, v.2, 2, (2011), pp.137-154 y Kierszenbaum, Leandro, “‘Estado peligroso’ y Medidas Prontas de Seguridad: violencia estatal bajo democracia (1945-1968)”

⁵² Marchesi, A. y Yaffé, J., op.cit, p.103

Estado y con fuerzas policiales y de inteligencia uruguaya de una miríada de organizaciones de derecha que tuvieron importante actividad a lo largo de los años sesenta.⁵³

Cabe destacar como valioso e ineludible antecedente de esta literatura académica la obra del historiador Raúl Jacob sobre la vertiente ruralista conservadora que irrumpió en el panorama político a fines de los cuarenta y que tanta relevancia tendría en los años siguientes. Aunque lejano a las preocupaciones por la violencia política, su libro sobre la formación del movimiento ruralista liderado por Benito Nardone (1945-1958), publicado en 1981, constituyó un aporte novedoso a la historiografía sobre el conservadurismo en Uruguay tan apegada en ese momento al estudio del sistema político y de sus partidos. La Liga Federal de Acción Ruralista fue un amplio movimiento “gremial, social y político” que agrupó a pequeños y medianos productores y alcanzó gran arraigo en el medio rural. Pregonó un acentuado conservadurismo y anticomunismo en lo ideológico, al tiempo que fue innovadora en su forma y sus postulados. Junto con la proyección que tuvo su líder se erigió en una pieza clave para la conformación del campo de las derechas uruguayas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado.⁵⁴

⁵³ Ver: Bucheli, Gabriel, “Los inicios. Rastreado los orígenes de la violencia política en el Uruguay de los 60”. En *Cuadernos de la Historia reciente 1968-1985*. No. 4. (Montevideo: EBO, 2008). Bruno, Mauricio, “Algunas operaciones de las “bandas fascistas”, y su conexión política». En *Cuadernos de la Historia Reciente 1968-1985*, no.5 (Montevideo: EBO, 2008) y “La caza del fantasma. Benito Nardone y el anticomunismo en Uruguay”. Montevideo, FHCE-Departamento de Publicaciones, 2007. Broquetas, Magdalena, «A propósito de las repercusiones del “caso Eichmann”. Antisemitismo y anticomunismo en Uruguay (1960-1962)». En *Encuentros Uruguayos*, año 3, 3, setiembre 2010 y “Los frentes del anticomunismo. Las derechas en el Uruguay de los tempranos sesenta”, *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX* Año 3, 3, 2012

⁵⁴ Jacob, Raúl. *Benito Nardone. El ruralismo hacia el poder (1945-1958)* (Montevideo: EBO, 1981). En un trabajo muy posterior Jacob analizó los intentos en las primeras décadas del siglo XX de crear un partido ruralista que representara los intereses de los productores, una experiencia singular y poco conocida que tuvo lugar en el norte del país. Jacob muestra como el fracaso de este partido se produjo al mismo tiempo que surgía el movimiento ruralista impulsado por Domingo Bordaberry y Benito Nardone. Ver Jacob, R. *Brevísima historia del Partido Ruralista*. (Montevideo: Aprodor, 2006). Otros trabajos de Jacob que abonan en el conocimiento sobre el pensamiento conservador en Uruguay son sus libros sobre la dictadura de Gabriel Terra. *El Uruguay de Terra, 1931-1938* (Montevideo: EBO, 1983). Gerardo Caetano, por su parte, analizó el conservadurismo de los años veinte y treinta que se organizó para poner freno al reformismo de José Batlle y Ordoñez. Ver por ejemplo Caetano, Gerardo *La República conservadora 1916-1929*, 2 tomos (Montevideo: Fin de Siglo, 1992-1993). Cabe referir entre estos antecedentes los trabajos sobre las derechas radicales en un período anterior al de esta tesis, Aldrighi, Clara y otros. *Antisemitismo en Uruguay. Raíces, discursos, imágenes (1870-1940)* (Montevideo: Ediciones Trilce, 2000) y Alpini, Alfredo. *La derecha política en Uruguay en la era del fascismo 1930-1940* (Montevideo: FCU, 2015)

En un trabajo reciente, Bucheli analizó la acción organizada y militante de grupos derechistas que operaron fundamentalmente a nivel social. Su enfoque se nutre de las categorías provenientes del campo de estudio de los movimientos sociales, abocado mayoritariamente al análisis de grupos disruptivos del orden social, para dilucidar la relación de las derechas sociales con la política. Se concentró para ello en dos impulsos de la reacción derechista que ubica en los períodos 1959-1962 y 1969-1973, constatando líneas de continuidad entre ambos. Pero su contribución más relevante consiste en la reconstrucción de la trayectoria de una de las agrupaciones de derecha nacionalista de comienzos de los setenta de mayor impacto y visibilidad: la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). En su libro, Bucheli da cuenta del proceso de creación de la JUP, nacida en la ciudad de Salto en octubre de 1970, su carácter juvenil y su ofensiva ante el avance de las izquierdas en el ámbito estudiantil. Por un lado presenta las coincidencias ideológicas con la tradición conservadora uruguaya, especialmente su nacionalismo, su impronta ruralista y su cerril anticomunismo, y por otro analiza su paulatina adhesión a un proyecto de “revolución nacional” para construir un “nuevo orden”. La JUP asumió, por tanto, un discurso antiliberal, corporativo y fuertemente católico, integrando activamente la coalición que apoyó el golpe de Estado en 1973.⁵⁵

El libro de Broquetas es una buena síntesis de los dos ejes analíticos mencionados. Su investigación pone el foco en la reacción derechista ante la percepción de amenaza “comunista” sobredimensionada por el contexto de la Guerra Fría que tuvo lugar en la primera mitad de la década del sesenta. Partiendo de una serie de preocupaciones comunes a los estudios del pasado reciente, Broquetas reconstruye con minuciosidad una miríada de movimientos sociales, grupos de presión, organizaciones y facciones políticas que operó en el período. Para ello se sirve de una tipología, de uso frecuente en los estudios sobre las derechas, que va desde los nacionalistas, antisistémicos y mayoritariamente violentos hasta los liberal-conservadores, que se apropiaron del calificativo “demócratas” y se mantuvieron apegados a algunos de los mecanismos del sistema democrático. Recompone, además, los vínculos de estos grupos con los Gobiernos del Partido Nacional entre 1958 y 1966. En este sentido, uno de los puntos

⁵⁵ Bucheli, Gabriel. “Movimientos sociales de derecha en el Cono Sur, 1959-1974», Tesis de maestría. Maestría en Estudios Latinoamericanos-Fhuce-Udelar, 2015; “Los inicios. Rastreado los orígenes de la violencia política en el Uruguay de los 60”, *Cuadernos de la Historia reciente 1968-1985*, 4 (2008); *O se está con la patria o se está contra ella. Una historia de la Juventud Uruguaya de Pie*. (Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2019)

fuerzas de su trabajo surge del análisis de las respuestas autoritarias de los dos colegiados blancos ante lo que se consideraba la “ofensiva comunista”, en un contexto de crisis económica y movilización social. Durante el primer Gobierno de mayoría herrerista-ruralista liderado por Nardone se buscó una modificación de los marcos legales considerados inadecuados para frenar la “infiltración de elementos foráneos” en las instituciones y los movimientos sociales. Sin embargo, estos intentos fracasaron y el segundo Gobierno blanco, ahora con mayoría del sector partidario Unión Blanca Democrática (UBD), reorientó su estrategia al dar curso a la legislación existente para frenar la protesta social.

Entre los hallazgos de la autora se destaca también la elección de un marco cronológico que hasta ese momento había sido escasamente transitado por la historiografía uruguaya (1959-1965). Aunque no se plantea en forma explícita, resulta claro que esta opción responde a ciertas insatisfacciones en la historiografía sobre el pasado reciente muy concentrada, como han señalado Marchesi y Markarian, en el lustro previo al golpe de Estado y en la dictadura misma.⁵⁶ Broquetas rompe con esta lógica y estira hacia atrás esos marcos temporales como parte de un esfuerzo dentro del propio campo por acercar la historia reciente con la producción académica sobre períodos anteriores. Eso le permite poner la lupa, como se señaló, sobre la implementación por parte de los Gobiernos blancos de mecanismos represivos a la protesta social y muestra un primer momento de quiebre en la tradición liberal uruguaya, dejando en evidencia que la deriva autoritaria comenzó bastante antes de 1968.⁵⁷

Estas investigaciones dejaron planteadas una serie de temáticas que continúan siendo profundizadas como la compleja relación de las corrientes liberales de los partidos tradicionales con la violencia y con la democracia, los vínculos de las agrupaciones derechistas con redes transnacionales o regionales o con organizaciones supranacionales, la construcción de las identidades políticas de las derechas en vinculación con los marcos ideológicos de la Guerra Fría, marcadas por la lógica del “enemigo interno” así como por la paulatina incorporación de la Doctrina de la

⁵⁶ Marchesi, A. y Markarian, V., “Cinco décadas de estudio sobre la crisis de la democracia y el autoritarismo en Uruguay”

⁵⁷ Broquetas, Magdalena. *La trama autoritaria: derechas y violencia en Uruguay, 1958-1966* (Montevideo: EBO, 2014)

Seguridad Nacional (DSN).⁵⁸ Es posible observar en este conjunto de trabajos el interés por el abordaje transnacional que propone la incorporación de los procesos de circulación, recepción y adaptación de ideas, agendas y programas más allá de los marcos nacionales.⁵⁹

Esta perspectiva atenta a las dimensiones transnacionales se nutre de los hallazgos de una renovada historiografía de la Guerra Fría, que expandió sus marcos cronológicos, temas y enfoques, otorgando mayor centralidad a los agentes locales en las dinámicas del conflicto global. Esta bibliografía dejó de lado las grandes explicaciones diplomáticas y geopolíticas que hacían de América Latina un espacio en el cual se replicaba el conflicto para dar mayor centralidad a la articulación de procesos nacionales, actores políticos y élites locales con las dinámicas generales del conflicto. El cambio de enfoque posibilitó identificar y reponer una serie de procesos, actores y redes que la historiografía tradicional opacó o relegó.⁶⁰

⁵⁸ Asimismo, aunque con clara influencia de la historia política de los partidos, las tesis de Matías Rodríguez Metral y de Pablo Ferreira también se acercan a los años cincuenta para examinar el giro a la derecha del sector de la lista quince del batllismo tanto en el plano económico como político. Rodríguez Metral, Matías, “En el llano. Adaptación política y renovación del programa económico de la Lista Quince del Partido Colorado. 1958-1966”, *Tesis de Maestría en Historia Política*, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9907/1/TMCP_Rodr%C3%ADguezMetr%20alMatias.pdf (última consulta: 7 mayo 2020) y Ferreira, Pablo. “El otro viraje. Democracia y ciudadanía en el discurso de la lista quince ante los debates constitucionales de 1951 y 1966”. En *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año V, n.º 5, 2014, pp. 105-123. Sobre la extensión de la temporalidad en el campo del pasado reciente, en este caso abonando los estudios sobre los ochenta del siglo pasado, se destaca la investigación de maestría de Marcos Rey sobre el sector colorado Unión Colorada y Batllista (UCB), liderada por el expresidente Jorge Pacheco Areco, y su actuación en la posdictadura. Este sector representó la derecha colorada liberal-conservadora de rasgos autoritarios y populistas, “Pachequismo, anticomunismo y liberalismo conservador al comienzo de la dictadura transicional en Uruguay (1980-1982)”, artículo inédito, presentado en las VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, 2019

⁵⁹ Hay un caudal numeroso de trabajos que han trabajado los vínculos transnacionales de las agrupaciones de derechas. Sin pretensión de exhaustividad menciono algunos de ellos: Bohoslavsky, Ernesto; Broquetas, M. “Vínculos locales y conexiones transnacionales del anticomunismo en Argentina y Uruguay en las décadas de 1950y 1960” *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, (2017) López Macedonio, Mónica Naymich. “Historia de una colaboración anticomunista transnacional. Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y el gobierno de Chiang Kai-Shek a principios de los setenta” en *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, v. 1, n.º 1, (2010), pp. 133-158 Santiago Jiménez, Mario Virgilio. “Anticomunismo católico. Origen y desarrollo del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), 1962-1975”. En Collado, C. (coord.). *Las derechas en el México contemporáneo*. Ciudad de México: Instituto Mora, 2015; “Julio Meinvielle, tacuaras, los Tecos y El Yunque contra la «infiltración roja» en México y Argentina”. *Cahiers des Amériques Latines*, 2015 Disponible en: <https://journals.openedition.org/cal/3630>. “La universidad como «campo de batalla». Tres escenarios de participación política de jóvenes católicos radicales anticomunistas en México 1934-1975” *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, v. 12, n.º 1 (2020)

⁶⁰ Pettinà, Vanni. *Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina* (Ciudad de México: El Colegio de México, 2018) Spenser, Daniela (ed.) *Espejos de la Guerra Fría. México, América Central y el*

Mi propio trabajo se inserta en la producción académica reseñada. Se inició con mi tesis de maestría que reconstruyó el itinerario del Movimiento pro Universidad del Norte (MpUN) —creado a fines de los sesenta— y su impulso al proyecto de instalar en el interior de Uruguay otra universidad pública que pusiera fin al monopolio de la Udelar. La cooptación por parte de las derechas de una demanda de origen localista, originalmente sin adscripción político-partidaria, tuvo fuerte incidencia en el nacimiento primero de la Juventud Salteña de Pie (JSP) y más tarde de la JUP. Asimismo, incursiona en la relación de las derechas con los debates sobre los modelos de universidad. En este sentido, da cuenta cómo en pleno proceso de radicalización diversos sectores y actores provenientes de tendencias político-ideológicas, influenciadas también por el clima desarrollista de la época, se involucraron en las discusiones, de ramificaciones a escala regional y mundial, sobre el futuro de la educación superior.⁶¹ El énfasis en estos asuntos incorpora, como se dijo, las influencias de la nueva historia intelectual y dialoga con una serie de investigaciones desarrolladas a fines de los noventa y comienzos de la década siguiente, que priorizaron la articulación entre política y cultura y más exactamente entre cultura y autoritarismo.⁶²

Asimismo, en relación con las universidades, un puñado de investigaciones ha mostrado cómo desde los años cincuenta agencias gubernamentales, organismos multilaterales y fundaciones filantrópicas financiaron investigaciones, congresos y revistas, además de promover intercambios académicos norte-sur. En este sentido, los

Caribe. (México: Ciesas/Porrúa, 2004). Grandin, Greg. *The last colonial massacre. Latin America in the Cold War*. (Chicago: Chicago University Press, 2011). Por un enfoque global ver Westad, Odd Arne *La Guerra Fría. Una historia mundial* (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017)

⁶¹ Jung, M. E. *La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista. El movimiento pro-Universidad del Norte de Salto (1968-1973)* (Montevideo: CSIC-Udelar, 2018)

⁶² En ese terreno, todavía incipiente a mediados de los noventa, Isabella Cosse y Vania Markarian, con un enfoque entonces innovador, abordaron las políticas de conmemoración histórica y los intentos de la dictadura de reformular los contenidos y modalidades de la identidad nacional, tomando como punto de partida la parafernalia patriótica desplegada a propósito del sesquicentenario de la Cruzada Libertadora en 1825 Cosse, Isabela, Markarian, V., *El Año de la Orientalidad* (Montevideo: Trilce, 1996). La *Cruzada Libertadora*, se produjo el 19 de abril de 1825. De modo similar, Marchesi reconstruyó las estrategias de comunicación que implementó el régimen cívico-militar y, más tarde, profundizó en la vinculación existente entre sus políticas culturales y la búsqueda de consenso social. Marchesi, Aldo. *El Uruguay inventado* (Montevideo: Trilce, 2001); “‘Una parte del pueblo uruguayo, feliz, contento, alegre’. Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura”, en: Carlos Demasi, Aldo Marchesi, Vania Markarian, Álvaro Rico, Jaime Yaffé, *La dictadura cívico militar. Uruguay 1973-1985* (Montevideo: EBO, 2009). Ver también la tesis inédita de Mariana Monné, *Intelectuales conservadores y autoritarismo* (Uruguay, 1975-1980), ponencia presentada a las II Jornadas de Investigación del Archivo General de la Universidad, 10-12 octubre de 2011 y “*Los 'rinocerontes' y el Estado*”. *Aproximaciones al campo cultural durante la dictadura en Uruguay (1975-1980) y Chile (1977-1983)*”, tesis de maestría recientemente presentada, 2014

estudios sobre las instituciones académicas y científicas también se diversificaron con las interpretaciones de esta remozada historiografía de la Guerra Fría.

La más reciente conceptualización de Guerra Fría cultural, además, permitió avanzar en el conocimiento de la compleja trama de vinculaciones entre las agencias estadounidenses y sus intentos de incidir en el campo cultural —y más específicamente en el universitario— y en los intelectuales o académicos como parte de sus objetivos políticos más generales respecto a la región.⁶³ Esta perspectiva favoreció un análisis que tiene en cuenta las variaciones de escala al abordar casos nacionales en interacción con procesos de carácter regional y global. De ese modo, mi indagación sobre la relación de las derechas con la reforma de la Universidad de la República se inserta en un marco de comprensión más abarcador, que articula los fenómenos nacionales con los procesos globales. Es posible demostrar así que los proyectos de modernización universitaria promovidos por estos sectores fueron producto de la apropiación y adaptación de ideas preconizadas por agencias gubernamentales estadounidenses, organismos multilaterales y consultores

Por último, me interesa destacar la original línea de indagación que abrió el historiador brasileño Rodrigo Patto Sá Mota, en la que esta tesis se reconoce. En *As universidades e o regime militar*, Patto no solo amplió la información disponible y complejizó la interpretación sobre la exitosa modernización del sistema universitario durante la última dictadura cívico-militar que gobernó Brasil, sino que además introdujo nuevas claves explicativas globales sobre el proceso dictatorial. El texto abunda en las complejidades de las políticas universitarias llevadas a cabo en ese momento y pone en evidencia cómo los programas implantados combinaron el empuje modernizador con las prácticas represivas en un doble movimiento: destructivo y constructivo, represivo y modernizador. Patto va más lejos aún al demostrar que ese impulso innovador de signo conservador se reapropió del legado de la tradición anterior, en particular de los proyectos de reforma en danza en los sesenta y, especialmente, de la experiencia de la

⁶³ Calandra, Benedetta, y Franco, Marina. *La guerra fría cultural en América Latina. Desafíos y límites para una nueva mirada de las relaciones interamericanas*. (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2012); Iber, Patrick. *Neither Peace nor Freedom. The Cultural Cold War in Latin America*. (Cambridge (Massachusetts) y Londres: Harvard University Press, 2015). Ehrlich, Laura y Espeche, Ximena. (coords.). *Guerra fría cultural en América Latina: prácticas del saber en conflicto. Prismas. Revista de Historia Intelectual*, n.º 23 (2) (2019), pp. 173-181. <https://ediciones.unq.edu.ar/539-prismas-no-23-2019.html>

Universidad de Brasilia liderada por el antropólogo e intelectual de izquierda Darcy Ribeiro.⁶⁴

El régimen llevó adelante una política desarrollista de perfil tecnocrático y elitista que combinó la despolitización de los claustros y la erradicación de la disidencia con una profunda transformación de las estructuras universitarias que, por otra parte, sentó las bases del sistema universitario brasileiro actual. Resulta persuasiva, además, la utilización que hace el autor de la categoría “modernización conservadora”, acuñada por el sociólogo Barrington Moore en los años sesenta para explicar los procesos de desarrollo económico y su relación con los regímenes totalitarios. Cuestiona así la relación virtuosa entre modernización y democracia postulada por las ciencias sociales de los cincuenta y sesenta.⁶⁵ Su aplicación al estudio de las políticas universitarias llevadas a cabo por el régimen dictatorial en Brasil resulta de gran productividad analítica porque permite plantear dos cuestiones relacionadas: la existencia de una derecha modernizante que buscó cambios estructurales en la educación superior, en sintonía con el proyecto de modernización que sustentó (no sin fricciones internas) la dictadura en Brasil, y la permanente tensión entre los aspectos reactivos y los proyectuales o propositivos de esa derecha que se nos presenta como un actor más complejo de lo que habitualmente suele considerarse. Asimismo, no debe perderse de

⁶⁴ Motta, Rodrigo Patto Sá. *As universidades e o regime militar. Cultura política brasileira e modernização autoritária* (Rio de Janeiro: Zahar, 2014). Ver también “O anticomunismo e os órgãos de informacao da ditadura nas universidades brasileiras”. En *Contemporânea. Historia y problemas del siglo XX*, III, nº 3, 2012, 133-148. “Modernizando a repressão: a Usaid e a polícia brasileira”. En *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 30, nº 59, (2010), pp. 237-266. Rodríguez, Laura Graciela “La ‘subversión científica’ en las universidades de Argentina e Hispanoamérica” *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. (2016) Disponible en <https://nuevomundo.revues.org/68862> En Argentina Laura Graciela Rodríguez analiza las políticas educativas de la dictadura entre 1976 y 1983 así como las ideas que diversos actores de la derecha argentina sostuvieron en relación con la universidad durante el período autoritario: Rodríguez, Laura Graciela *Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976–1983)* (Rosario, Prohistoria, 2011); Rodríguez, Laura Graciela y Soprano, Germán “La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983)” en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* (2009) disponible en <https://nuevomundo.revues.org/56023>. Más recientemente publicó *Universidad, peronismo y dictadura, 1973-1983* (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2015). Para el caso uruguayo ver: Markarian, V. “La Universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguayo durante la última dictadura (1973-1984)”

⁶⁵ En su libro *Los orígenes sociales de la Dictadura y la Democracia: Señor y Campesino en la Formación del Mundo Moderno*, de 1966, Barrington Moore hizo un estudio comparado de la modernización en Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China, Japón e India. Ofrece una tipología de la modernización (o como Moore las llama «rutas hacia el mundo moderno») en estos seis casos de estudio, distinguiendo tres tipos de transición del mundo premoderno y preindustrial al mundo moderno e industrializado: la ruta burguesa, la ruta fascista y la ruta comunista. Según Moore, la modernización no desemboca necesariamente en la democracia, también puede hacerlo en el fascismo y el comunismo.

vista que el término “modernización” es también nativo, es decir, que formaba parte del vocabulario político y académico de esa época. Introducido por las ciencias sociales anglosajonas, en particular por las teorías de la modernización de gran incidencia tanto en los debates académicos como políticos, locales y globales, junto con otras palabras como “desarrollo”, fue apropiado y utilizado por una gran diversidad de actores con sentidos diferentes.

Tras este recuento, digamos que la definición o caracterización de las derechas, es decir cuáles son los rasgos peculiares y específicos que permiten que las definamos como tales, ha sido y es objeto de permanente debate en las ciencias sociales. El estudio de este campo político-ideológico exige un esfuerzo de conceptualización que parte del reconocimiento de las dificultades que plantea una noción que se percibe más difusa que la de izquierda, sostenida en las autoidentificaciones de los actores.⁶⁶ Acaso porque, como ha dicho Altamirano, “el combate por la definición de qué es o debe ser una posición de izquierda ha sido parte del trabajo ideológico de este sector”.⁶⁷ En contraste, los sujetos o grupos afines a las derechas habitualmente se resisten a utilizar ese calificativo. Esto ha ocurrido así, en algunos casos, porque esa referencia asocia a los individuos y grupos a los pasados traumáticos que marcaron la región y de los cuales estos han querido desligarse; en otros, debido a que ciertos sectores de las nuevas derechas han enfatizado la inexistencia de las dicotomías izquierdas-derechas, para, en cambio, enfatizar un pragmatismo por encima de ideologías, funcional a sus proyectos políticos. Por otra parte, en ámbitos académicos o políticos se han utilizado denominaciones alternativas en referencia a un conjunto de individuos y grupos, que aunque heterogéneo y plural, tiene una especificidad propia al tiempo que comparte diagnósticos, proyectos y una determinada visión del mundo fácilmente considerados como propios de la derecha. En la historiografía argentina, por ejemplo, se ha apelado a términos como nacionalistas o autoritarios.⁶⁸ En el caso uruguayo ocurre algo similar; la palabra derecha/s raramente es utilizada y, en cambio, se ha preferido las palabras

⁶⁶ McGee Deutsch, Sandra. Óp. cit., pp. 20-21

⁶⁷ Altamirano, C. [Carlos Altamirano sobre izquierdas y derechas (mimeo, 2016). Parcialmente editado en una entrevista realizada por Raquel San Martín en *La Nación*, en 2016]. Agradezco el conocimiento de este texto a Ana Clarisa Agüero. El artículo completo puede ser consultado en <https://www.lanacion.com.ar/opinion/izquierda-y-derecha-nid1876503>, última consulta 7 de agosto de 2020

⁶⁸ Echeverría, Olga. “¿Las cosas por su nombre? Preguntas sobre la propensión a llamar “nacionalismo” a la derecha argentina de la década de 1920”, en Bohoslavsky, E. (comp.) *Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del Taller de Discusión*, Universidad Nacional de General Sarmiento (2011)

conservador/conservadurismo en referencia a actores vinculados a este espectro político ideológico. Esto además ha sido abonado por un sentido común extendido, tanto en ámbitos sociales como políticos, de que en Uruguay existe una derecha débil y desdibujada en los partidos tradicionales.

La necesidad de encontrar un término suficientemente inclusivo de la heterogeneidad de tradiciones, ideas e identidades políticas que conforman este campo ha sido una de las principales preocupaciones de los estudiosos en la región y, por tanto, objeto de la discusión académica. En parte, estos mismos debates han estado ligados más o menos explícitamente a los cuestionamientos del poder explicativo de la taxonomía izquierda-derecha recibió a partir de la década del noventa, tras el derrumbe de los países socialistas. Así, por ejemplo, desde una perspectiva liberal Norberto Bobbio alegó a favor la eficacia de esta distinción. Contradiendo las proposiciones que vaticinaban el fin de las ideologías, proponía como criterio de diferenciación entre izquierda y derecha la posición frente a determinados valores, específicamente, el valor de la “igualdad”: quienes se autoidentifican de izquierdas dan mayor importancia en su conducta moral y en su iniciativa política a los aspectos que convierten a los hombres en iguales, o a las maneras de atenuar y reducir los factores de desigualdad; quienes se sitúan a la derecha están convencidos de que las desigualdades son un dato natural e imposible de suprimir, ni siquiera desean su eliminación, señalaba el intelectual italiano.⁶⁹ En vez de utilizar la palabra derecha, el economista Albert Hirschman se inclinó por la noción de reacción y definió tres etapas o momentos “reactivos” frente a los progresivos de avance de la ciudadanía a lo largo de los tres siglos.⁷⁰ Digamos que esta polémica, lejos de agotarse, ha resurgido en medio del ascenso de distintas expresiones de derecha en América Latina y el mundo que además volvió a poner sobre el tapete el fenómeno del fascismo y, en especial, la vigencia de esta categoría para denominar realidades políticas “nuevas, inesperadas y sobre todo inquietantes”, como advierte el historiador italiano Enzo Traverso.⁷¹

⁶⁹ Bobbio, Norberto, *Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política* (Madrid: Taurus, 2014) [1ª. ed. 1994]

⁷⁰ Hirschman, Albert O. *Retóricas de la Intransigencia* (México: Fondo de Cultura Económica, 1991)

⁷¹ En un reciente libro sobre las nuevas derechas radicales, Enzo Traverso se preguntaba: “¿estamos seguros de que el uso indiscriminado de un concepto tal ayuda de verdad a comprender fenómenos tan obviamente diferentes entre sí?”. Sostiene, entonces, que la noción de fascista claramente sirve para estigmatizarlos, transformando “la moral en categoría cognitiva”, y propone el concepto de posfascismo. Traverso, Enzo. *Las nuevas caras de la derecha* (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2018)

En América Latina, como se anticipó, la expresión derecha, proveniente del espacio europeo, es de incorporación relativamente reciente tanto en ámbitos políticos como académicos. Recién a comienzos del siglo XXI, tras el acceso al gobierno de las izquierdas, las referencias a los partidos de derecha tanto en la prensa, en la producción académica como en los debates políticos, se hicieron habituales como si esa categorización, dice el historiador Stéphane Boisard, fuese autoevidente e “inherente a los sistemas políticos modernos [y en los discursos políticos] establecidos en los siglos XIX y XX”. Para Boisard, esta circunstancia se debe en parte a la ausencia de una profunda reflexión teórico-metodológica sobre el término en cuestión y en particular sobre el espectro político que abarca.⁷²

Ahora bien, ¿qué se entiende por derecha? De modo general se la ha identificado con la resistencia al cambio progresivo en lo político y lo social; resistencia que asumió distintas modalidades según los momentos históricos y lugares geográficos.⁷³ McGee Deutsch la define como una reacción a tendencias políticas igualitarias y liberadoras así como a otros factores que puedan socavar el orden social y económico. La delimitación apunta a un conocimiento localmente y temporalmente situado de estas expresiones políticas. En 1970, el historiador argentino José Luis Romero anticipaba algunas de las cuestiones señaladas al plantear los riesgos de una definición en términos exclusivamente teóricos y convocaba a asumir una perspectiva relacional que tomara en cuenta “las correlaciones entre las doctrinas y los grupos sociales”, así como el “análisis de las relaciones entre el pensamiento de la derecha y el de las demás corrientes políticas”. Y agregaba que “ningún movimiento ideológico o político puede entenderse sino dentro del juego de situaciones reales y controversias en que surge y se desarrolla”. Concebido así el sustantivo remite a situaciones históricas conflictivas y cambiantes. Romero decía que:

con ese nombre [derecha] no se define una doctrina concreta –como podría ser el liberalismo, el fascismo o el comunismo– sino un haz impreciso de ideas que se combinan con ciertas actitudes básicas, configurando en conjunto una corriente política cuyo sentido fundamental está en relación inmediata con los problemas en juego en cada momento y con las doctrinas y actitudes del centro y de la izquierda, a su vez conjuntos también

⁷² Boisard, Stéphane “Pensando as direitas na América Latina, objeto científico, sujeitos e temporalidades?” *Varia Historia* v. 30, n.º 52, (2014), pp. 85-88

⁷³ Sobre las primeras discusiones académicas sobre las formaciones de derecha en la región ver el libro de Rock, David. *La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales* (Buenos Aires: Ediciones B, 2001)

complejos y con frecuencia definibles ideológicamente solo por sus contrarios⁷⁴

Más recientemente, Sergio Morresi cuestionó la existencia de “un espectro político en forma de arco, gradiente o espacios dispuestos en ejes cartesianos” dentro del cual situar posiciones más a la derecha o a la izquierda y, en cambio, recurrió a la metáfora de campo utilizada por Bourdieu, donde las derechas aparecen como agentes en conflicto (conservadurismo, conservadurismo liberal, nacionalismo) y en disputa por la hegemonía del campo pero que pueden actuar de forma solidaria cuando este se encuentra bajo el asedio de otros campos.⁷⁵

El punto de vista contextual y relacional es retomado por Motta, quien además advierte de las dificultades para establecer las fronteras que delimitan el espectro de las derechas. Mientras la inclusión del conservadurismo clásico y el fascismo parecen generar una extendida aprobación, la asociación de las vertientes liberales con las derechas, por sus implicaciones actuales, se vuelve más compleja. Así sus contornos se van delineando en cada contexto histórico particular en directa relación con la identificación de un enemigo, sea este real o imaginado.⁷⁶ En el período que nos ocupa, el anticomunismo y la lucha contra el avance izquierdista azuzado por el clima propio de la Guerra Fría fue fundamental para su institución como segmento específico del campo político.⁷⁷ Es claro, que la lucha contra el comunismo ocupó un lugar central en los conflictos políticos, culturales y en las relaciones internacionales a lo largo de todo el siglo XX, pero esta centralidad se agudizó en la segunda posguerra cuando la influencia del comunismo se expandió en los tres continentes. La Revolución cubana localizó el conflicto en América Latina, convirtiendo a las izquierdas en una amenaza concreta para las fuerzas del conservadurismo local.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y prevenciones, los estudiosos de estas temáticas han consensuado en el uso de la noción derechas como la más adecuada para

⁷⁴ Romero, José Luis. *El pensamiento político de la derecha latinoamericana* (Buenos Aires: Paidós, 1970)

⁷⁵ Morresi, Sergio, “Un esquema analítico para el estudio de las ideas de derecha en Argentina (1955-1983)”, en Bohoslavsky, E. (comp.) *Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del Taller de Discusión* (Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2011)

⁷⁶ Echeverría, O. “Los estudios sobre las derechas argentinas y rioplatenses del siglo XX. Balances, preguntas y perspectivas de análisis”, en Bohoslavsky, E., Broquetas, M. y Echeverría, O. (editores), *Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del VII Taller de discusión* (Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2015), p. 155

⁷⁷ Motta, Rodrigo Patto Sá, 2004, pp. 7-10

visibilizar a actores que “en términos discursivos estaba[n] ausente[s] o se diluía[n] entre las diferentes nominaciones”, según las palabras de la historiadora Olga Echeverría.⁷⁸ Se reconoce asimismo el carácter histórico de este segmento político ideológico, que se define en referencia directa a marcos y coyunturas específicas a las cuales va adaptando nociones, prácticas y marcos de alianzas. Buena parte de la identidad, de los discursos y de las acciones de los grupos e individuos que lo componen solo pueden ser interpretados en la interrelación y oposición con otras tradiciones políticas e ideológicas. Recordemos que izquierdas/derechas, más allá de sus fronteras lábiles, surgieron como dos antagonistas; dos campos de fuerza inseparables, que han tenido y tienen expresión en la vida política y social y se constituyen en la competencia con el otro.

Finalmente, el uso del plural resulta fructífero porque habilita un mayor ajuste a las distintas realidades históricas a la vez que da cuenta de la diversidad ideológica, de tradiciones políticas y modalidades de acción (desde grupos moderados a radicales) que, pese a sus profundas diferencias, han coincidido en algunas coyunturas, mientras que en otras han establecido tensas y ríspidas relaciones.⁷⁹ Como ha demostrado McGee Deutsch, las tendencias moderadas y extremas suelen unirse en coyunturas de crisis política, cuando la amenaza del enemigo se vuelve manifiesta. En una línea similar, el investigador uruguayo Alción Cheroni, en un trabajo de la década de los ochenta, desde un enfoque marxista clásico y, aún cuando no utilizaba el término derechas, dejaba sentada la pluralidad de formas que adopta el pensamiento conservador y proponía tres grandes modelos a través de los cuales se habría expresado esa corriente en Uruguay: el liberal, el reaccionario y el tecnocrático.⁸⁰

Así las cosas, asumo las dificultades que supone identificar a lo que aquí llamamos de manera muy amplia actores de derechas, sean estos individuos o grupos posicionados en ese espectro político en el lapso de estas dos décadas. Por un lado, porque quienes participaron de ideologías y prácticas derechistas (en sus múltiples vertientes), como dijimos, no se reconocían con esa etiqueta. Tampoco fue una denominación usual entre sus adversarios o enemigos políticos, que prefirieron el uso de expresiones

⁷⁸ Echeverría, O. “Los estudios sobre las derechas argentinas y rioplatenses del siglo XX. Balances, preguntas y perspectivas de análisis”, p. 155

⁷⁹ McGee Deutsch, S. Óp. cit., pp. 20-21

⁸⁰ Cheroni, Alción, *El pensamiento conservador en Uruguay* (Montevideo: ClaeH, 1986)

descalificantes como fascistas o reaccionarios. Asimismo, en la documentación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) es utilizada en alusión a los grupos “extremistas”. Por otro lado, y más específicamente en relación con la Universidad, representaron a sectores que fueron perdiendo representación en sus órganos de conducción y, por tanto, aparecen en forma indirecta en las fuentes institucionales.

Las dificultades señaladas se vuelven más complejas si tenemos en cuenta la movilidad político-ideológica de los actores en el contexto de radicalización del período. En la medida que esa radicalización fue en aumento es posible observar que individuos que originalmente habían sustentado posiciones liberales se fueron desplazando hacia la derecha y confluyendo en argumentaciones e intereses con este campo político-ideológico. Esto nos lleva a otra cuestión: el del reconocimiento de la existencia de pasajes, tránsitos complejos y de circulaciones en términos de doctrinas, ideas y prácticas políticas.⁸¹ Es claro también que el marco de la polarización creciente, particularmente luego de 1968, acortó los márgenes de autonomía para optar por caminos o posturas intermedias y los tránsitos tendieron a los antagonismos inconciliables. El otro asunto que emerge se relaciona con el poder explicativo del par dicotómico izquierda/derecha por fuera de la arena política en sentido lato; es decir, su capacidad para escrutar fenómenos o procesos que se producen en otros campos, en este caso el académico o universitario, en los cuales se presentan otros clivajes. De hecho, como intenta demostrar esta tesis, no existió un correlato y menos una subordinación directa entre los posicionamientos universitarios, científicos o académicos y la lógica de las disputas políticas en la escena nacional; se observa, en cambio, la existencia de tensiones superpuestas que dan sentido a las disputas dentro de ese campo. Las personas y grupos podían convivir con adscripciones distintas en sus variadas esferas de actuación. En este sentido, la indagación de actores, grupos y fenómenos dentro del campo académico, con sus peculiaridades y reglas propias, posibilita registrar los límites del par antagónico izquierda-derecha para explicar algunos de los asuntos que

⁸¹ Ver Agüero, Ana Clarisa y Bohoslavsky, E. “Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino. Categorías, problemas, abordajes” y Devoto, Fernando. “Pasajeros en la tormenta. Variaciones sobre tres intelectuales italianos y el fascismo” *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, coloquios, publicado el 25 de junio de 2020, consultado el 15 de agosto de 2020 <http://journals.openedition.org/nuevomundo/80352>

aquí se tratan, explorando los márgenes de libertad de esos espacios respecto a la política.

En este sentido, las polémicas y posicionamientos al interior de la universidad bien pueden ser pensados a partir de la oposición más restrictiva de reformismo versus contrarreformismo. Este último correspondería así a un movimiento de reacción y respuesta a una tradición, de límites lábiles y contornos imprecisos, que se remonta a la Reforma de la Universidad de Córdoba de 1918. El reformismo, a esta altura, desdibujado de sus referencias históricas concretas, había quedado asociado a las izquierdas y progresismos en sus diversas expresiones y declinaciones. En términos generales suponía la adscripción a una serie de postulados vagos, como la participación estudiantil en el gobierno universitario, la autonomía de las universidades del poder político, la renovación científica y pedagógica y el compromiso con la sociedad, en particular con los sectores populares.

3. Archivos, fuentes y organización del texto

La investigación se sostiene en la consulta de un conjunto de repositorios y fuentes documentales diverso y de variada procedencia. El acceso a la documentación estuvo condicionado por la situación archivística del país, caracterizada por la exigua disponibilidad de corpus documentales organizados, situación que se vuelve más patente en relación con las temáticas vinculadas al pasado reciente. A esto se suman las restricciones específicas derivadas de los inconvenientes que supone identificar a individuos o grupos que se posicionaron en el campo de las derechas en el lapso que abarca esta tesis.

En contraste con la dispersión documental y la casi inexistencia de instituciones públicas o privadas que se hayan preocupado por la reunión y protección de la historia científica, intelectual y académica del país, el AGU ofrece un acervo documental heterogéneo (series institucionales que remontan a finales del siglo XIX producidas por sus órganos de conducción, archivos privados, colecciones documentales halladas en dependencias universitarias, etc.), resultado de una política activa de detección y rescate de fondos institucionales y privados que trascienden las líneas tradicionales de transferencia. Eso permitió la compulsión de documentos institucionales como las actas del Consejo Directivo Central (CDC) y de la Asamblea General del Claustro (AGC) o la

colección de *Repartidos de la Universidad de la República*, pero también de materiales procedentes de los archivos privados de destacadas personalidades universitarias en el período que contempla esta investigación. La variedad de materiales presentes en las colecciones de Julio Ricaldoni, Óscar J. Maggiolo y Rafael Laguardia hizo posible reconstruir algunos debates de la interna universitaria en torno a asuntos centrales para este trabajo, como la diversidad de posiciones en torno al lugar que el desarrollo científico debía ocupar en la institución, la creación de un organismo de ciencia y tecnología, la posible fundación de una universidad privada o la instalación de universidades en el interior. También las publicaciones oficiales de la Universidad de la República constituyen una valiosa fuente de información. Este corpus se complementó con material procedente de las facultades de Ingeniería, Humanidades y, en menor medida, Ciencias Económicas.

Se consultaron también los fondos custodiados por el Archivo General de la Nación (AGN), entre los los que destaca la colección de documentos pertenecientes al historiador y político Juan Pivel Devoto, ministro de Instrucción Pública y Social entre 1962 y 1966. Durante su gestión se instaló y funcionó el grupo de planeamiento en educación de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) y también bajo la égida de ese ministerio actuó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicyt), creado en 1961, temas extensamente tratados en esta tesis. Acceder a material diverso en relación con estos organismos permitió conocer valiosos aspectos de su funcionamiento así como algunas de las polémicas que se generaron en torno a ellos.

También custodiado en el AGN se encuentra la colección perteneciente al médico y político colorado Federico García Capurro, cuyo acervo fue clave para la reconstrucción de algunos pasajes de esta investigación. Este archivo se compone de correspondencia privada, notas y documentos vinculados a su actuación profesional y pública, y comprende los períodos en que fue ministro de Salud Pública (1952-1954), de Cultura (1969-1970), de Defensa (1971-1972) y miembro del Consejo de Estado que funcionó durante la dictadura (1977-1981). Asimismo, resulta de especial interés el fondo documental del Ministerio de Educación y Cultura disponible al público en el AGN. Finalmente, se accedió a la versión digitalizada de las actas del Conicyt que conserva el actual Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Un tercer corpus documental está constituido por los documentos generados por la DNII, los servicios de inteligencia policial uruguaya. Este archivo no es de carácter administrativo y posee documentación posterior a 1947, año en que se creó esta dependencia. El material que allí se encuentra fue producido en el marco de sus tareas de espionaje (informes, apuntes de trabajo, fotografías, expedientes) o es producto de las incautaciones realizadas en sus procedimientos (folletos, publicaciones, materiales producidos por organizaciones políticas y sociales). Es un archivo de fundamental importancia para la historia social, política y cultural del Uruguay de la segunda mitad del siglo XX y su disponibilidad abre un campo fértil para el desarrollo de investigaciones en diferentes áreas del conocimiento histórico. Contiene información, muchas veces única en el país, como por ejemplo la generada por una gran diversidad de movimientos sociales y organizaciones políticas que no pudieron conservarla. La gestión de estos papeles depende de la burocracia policial, por tanto su consulta estuvo mediada por un funcionario de la institución. Por otra parte, no tienen disponibles instrumentos de descripción archivística que faciliten el conocimiento del material. Pude examinar el acervo sobre algunos de las agrupaciones de derecha que actuaron en el período y reconstruir de manera fragmentaria su actuación en el espacio universitario, aunque presumo que aún queda muchísima documentación que podría alumbrar este tema y otros.

Fue también de particular relevancia el acceso a documentación diplomática estadounidense del National Archives and Records Administration (NARA), archivo central del Gobierno de Estados Unidos, digitalizada y puesta a disposición pública por el Grupo de Estudios para el Pasado Reciente (Geipar). Gracias a las notas, informes y correspondencia de esa sede diplomática fue posible conocer las opiniones de representantes estadounidenses respecto a la situación política y social del país en general y respecto a la Universidad en particular, así como el amplio abanico de actores con los estableció contactos y vínculos en el período aquí trabajado. Por último, se utilizó la prensa periódica partidaria de Montevideo y el interior disponible en la Biblioteca Nacional de Uruguay, así como fuentes editas entre las que destacan las producidas por la CIDE.

Las páginas que siguen se aproximan a la temática a través del examen atento de los debates político-institucionales y académicos en el seno de la Universidad de la

República, tanto en los organismos centrales de dirección como en diversos contextos institucionales, profesionales y disciplinares. Se buscó contemplar de este modo las dinámicas internas de la institución al mismo tiempo que las interacciones con otros actores (corporaciones profesionales, organismos del Estado, político-partidarios, sociales). Asuntos como la forma de gobierno, la autonomía, el papel de la ciencia y la tecnología y, de modo más general, la orientación académica de la institución, fueron objeto de duras contiendas. Se analizó la expresión de estas discusiones en el debate público, con énfasis en las posturas que expresaron las derechas partidarias y sociales en distintos ámbitos. Las discusiones en torno a los modelos de universidad estuvieron en directa relación a la forma en que fue concebido el desarrollo del país por los diversos actores involucrados.

Al mismo tiempo se examinó el impacto que tuvieron las ideas y tendencias de amplia circulación en la época (especialmente las vinculadas al desarrollismo, teorías de la modernización y visiones alternativas del cambio social) en estos debates. Más concretamente, se procuró desentrañar cómo los sectores derechistas incorporaron la idea del desarrollo y cómo significaron su relación con la modernización universitaria, tratando de vislumbrar las posibles diferencias así como las tensiones que se manifestaron a la interna de este campo político.

Por último, se reconstruyó la conformación de las derechas en relación a la Universidad de la República. Para ello se registran individuos o grupos derechistas, sus trayectorias y la red de relaciones que establecieron con agrupaciones profesionales, partidos políticos o agrupaciones gremiales. Digamos que esta reconstrucción no se limitó a los actores universitarios sino que abarca a un conjunto sectores, grupos y personas que en el ámbito social, partidario o estatal buscaron intervenir en ella y en sus debates así como en su orientación y políticas académicas. En algunos casos se siguen de modo somero algunas trayectorias individuales, si no representativas por lo menos ilustrativas de los procesos que se busca describir. Resulta evidente el impacto de la politización creciente en los posicionamientos y alianzas de este conjunto heterogéneo de actores, algunos claramente asociados a la derecha política y social (desde los conservadores, a veces liberales, que se opusieron a los cambios al interior de la universidad a aquellos que pretendieron su intervención o su reforma de signo conservador) y de otros grupos o individuos, en ocasiones difícilmente clasificables en

términos de adscripción político ideológica, que circunstancialmente se les unieron. Por último, como anticipamos, es posible afirmar que los debates universitarios en su interrelación con otros debates de carácter general contribuyeron a la conformación de un programa más o menos articulado de modernización universitaria de tintes conservadores en línea con ideas de circulación regional y global.

Dicho esto, la narración priorizó una organización temática que mantiene sin embargo una ordenación cronológica. Se compone así de cuatro capítulos: el primero se focaliza en las derivas contradictorias y ambiguas del vínculo entre la Universidad y el Poder Ejecutivo durante la primera mitad de la década del sesenta a partir del análisis de dos casos: la creación del Conicyt, un organismo de fomento de la ciencia y la tecnología, y la fundación de la CIDE, un organismo técnico encargado de elaborar un diagnóstico de la situación del país y establecer planes de desarrollo.

El segundo capítulo estudia las respuestas que actores vinculados a las derechas promovieron ante la crisis de la educación también en la primera mitad de la década, poniendo el foco en el papel que asignaron al conocimiento técnico, qué entendían por tal y cómo debía reflejarse en la orientación académica de la Universidad, así como el impulso que dieron al proyecto de crear una universidad privada y católica como parte de sus propuestas; el tercero da cuenta de los debates en relación con los modelos universitarios y el intento de conformar un programa de modernización a fines de la década del sesenta, que cristalizó en el proyecto de Universidad del Norte y su reformulación como la Universidad para el desarrollo. Se tratará de mostrar cómo la concepción que subyacía al proyecto estuvo en sintonía con iniciativas de similar tenor en la región así como con algunos de los modelos universitarios de circulación global preconizados por consultores estadounidenses para su aplicación en América Latina.

El texto cierra con un cuarto apartado enfocado en la reconstrucción del campo de las derechas en relación con la Universidad a lo largo de todo el período estudiado (1958-1973). Pone el énfasis en el proceso de construcción discursiva del anticomunismo de derecha, a través del cual se conformó un conjunto de nociones e interpretaciones compartidas que ubicaron a la Universidad como parte del “enemigo interno” de acuerdo con la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN). Este apartado reconstruye así un mapa, aún fragmentario, de personas, grupos o movimientos

alineados con estas tendencias, la red de relaciones que fueron tejiendo y las estrategias que llevaron adelante para contrarrestar la influencia izquierdista.

CAPÍTULO I. LOS VÍNCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA CON EL PODER EJECUTIVO (1959-1967)

Este capítulo examina las derivas contradictorias y ambiguas del vínculo entre el Gobierno y la Universidad en la primera mitad de la década del sesenta momento en que comenzó un progresivo resquebrajamiento de las relaciones entre el Poder Ejecutivo (PE) y las autoridades universitarias. Se busca mostrar la complejidad de estas relaciones, signadas por el distanciamiento y el conflicto pero también por ocasionales aproximaciones y espacios de colaboración. Para ello se examinan dos iniciativas gubernamentales que involucraron de diversas formas a la Udelar y a los universitarios: la instalación del Conicyt y la creación de la CIDE. Las posiciones y los marcos de alianzas en relación a estos dos asuntos estuvieron condicionadas por las diferentes configuraciones disciplinares —con sus diferentes grados de institucionalización y profesionalización— y por los sistemas de prestigio y reconocimiento propios del campo académico y universitario.

Imbuido por el extendido optimismo acerca del potencial del desarrollo científico y tecnológico para el progreso y apremiado por captar fondos de programas de ayuda de los organismos internacionales y del Gobierno de Estados Unidos en un contexto de restricción presupuestal, en 1961 el PE dispuso la instalación del Conicyt, dependiente del entonces Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. La Universidad de la República, que concentraba la mayor parte de la investigación científica del país, no fue consultada en la elaboración de las características ni el diseño institucional de este nuevo Consejo. Su marginación en un área que consideraba de su competencia fue la causa de un duro y dilatado conflicto entre autoridades nacionales y universitarias que cobró gran notoriedad en el período, al tiempo que dejó al descubierto profundas fisuras en el interior de la comunidad universitaria respecto a la posición ante el nuevo organismo.

En forma paralela, mientras emprendía el camino de la liberalización económica de acuerdo con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) e implementaba una política de recorte presupuestal, el Gobierno puso en práctica mecanismos de planificación en sintonía con las pautas de la Alianza para el Progreso (AFP, por su sigla en inglés), parte de la estrategia estadounidense hacia América Latina en el

contexto de la Guerra Fría. Con este propósito fundó la CIDE en 1960. Sus trabajos sobre el sector educativo se desarrollaron a través de una comisión técnica especializada en la órbita del Ministerio de Instrucción Pública que se abocó al estudio de la situación de la enseñanza nacional y al diseño de un programa de reformas.

A diferencia de lo ocurrido con el Conicyt, no hubo cuestionamientos sustantivos por parte de la Universidad de la República. Las expectativas que la CIDE despertó en el ámbito académico, sumado a que se nutrió de un contingente de connotados universitarios, permiten sostener que hubo una colaboración discreta entre ambas instituciones. Esta situación cambió drásticamente a partir de 1965 cuando se publicó el *Informe de Educación*. Tanto el diagnóstico como las recomendaciones del organismo técnico, especialmente las referidas a la Universidad, provocaron el rechazo de una buena parte del colectivo universitario. La deriva autoritaria que se produjo bajo los colegiados blancos agudizó los choques con el poder político, que fueron tomando un cariz político-ideológico. Pasando la mitad de la década, la Universidad retiró sus representantes del Conicyt (1966) y de la CIDE (1967), iniciando el inexorable camino que condujo al divorcio con el PE a partir de 1968.

1. La creación del Conicyt

Desde fines de la década del cuarenta buena parte de la comunidad científica venía planteando la necesidad de crear una instancia institucional para organizar la ciencia nacional, en sintonía con similares discusiones en la región y el mundo. Esto ocurría en pleno apogeo de los desarrollismos y las teorías de la modernización y en medio de un clima de generalizado optimismo, cuando se instaló la idea de que el conocimiento científico jugaba un rol estratégico en el progreso de las naciones. En palabras de María Caldelari y Patricia Funes, en estos años “la tríada educación-técnica-ciencia” se convirtió en un “indicador del desarrollo alcanzado y de la distancia que nos separaba de los países del Primer Mundo”.⁸² En el mundo, los primeros organismos nacionales de ciencia y tecnología datan de comienzos del siglo XX pero la amplificación y

⁸² Caldelari, María y Funes, Patricia. “La Universidad de Buenos Aires, 1955-1966: lecturas de un recuerdo.” En Oteiza, Enrique (coord.), *Cultura y Política en los años 60*. (Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC, 1997) p. 20

consolidación de esta modalidad institucional tuvo lugar en la segunda posguerra.⁸³ Fue en estos años cuando la preocupación por la ciencia se extendió hacia América Latina, donde varios países tomaron como ejemplo los modelos jurídico-institucionales europeos.⁸⁴ La investigación pasó a ocupar entonces un lugar central en la agenda de los Gobiernos, que aumentaron los recursos destinadas a esta área. En ese marco, y a impulsos de entidades internacionales como la Unesco y la Organización de los Estados Americanos (OEA), se crearon instituciones, asociaciones de interés y agencias públicas afanadas en generar las condiciones adecuadas para el desarrollo y profesionalización de la actividad científica. La Primera Conferencia de Expertos Científicos de América Latina, realizada en setiembre de 1948 con sede en Montevideo y organizada por Unesco y el Gobierno uruguayo, marcó un primer hito en ese proceso. En esa oportunidad se creó la Oficina Latinoamericana de Cooperación Científica de la Unesco, radicada también en la capital de Uruguay.

Como parte de este impulso, en esos años hubo un movimiento favorable a la institucionalización de la ciencia y la tecnología en distintos puntos del continente. Independientemente de los contextos políticos y de las orientaciones político-ideológicas de los Gobiernos, en varios países se implementaron los primeros institutos estatales a esa finalidad. En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Investigación Científica fue creado en 1950. Más cerca, en Brasil, en esos años se establecieron la Sociedad Brasileira para el Progreso de la Ciencia (SBPC, 1948), el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF, 1949), el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) y la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 1951).

En Argentina, los primeros pasos se dieron bajo la égida del peronismo con la instalación en 1951 de la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas (DNIT) como organismo de ejecución. Un año después se conformó el Consejo Nacional de

⁸³ Reino Unido -Department of Scientific and Industrial Research, 1918- o en Francia -Conseil National pour la Recherche Scientifique, a mediados de los '30; aún en los Estados Unidos, un organismo de apoyo a proyectos de investigación se creó con la Primera Guerra Mundial, el National Research Council, en 1917. Davyt, Amilcar, "Apuntes para una historia de las instituciones rectoras en ciencia, tecnología e innovación en Uruguay: 50 años de cambios y permanencias" En *Fondo Bicentenario "José Pedro Barrán": políticas científicas, tecnológicas y de innovación en el Uruguay contemporáneo: (1911-2011)* (Montevideo: ANII, 2011)

⁸⁴ Caldelari, María, Casalet, Mónica, Fernández, Eduardo y Enrique Oteiza. "Instituciones de promoción y gobierno de las actividades de investigación" En *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas* (Buenos Aires: CEAL, 1992) p. 169

Investigaciones Científicas y Técnicas (CNICyT), dependiente del Ministerio de Asuntos Técnicos e integrado por representantes de distintos ministerios y de las universidades nacionales, con la función asesorar y ejercer de enlace entre los organismos del estado y el “contingente investigativo”. Este proceso tuvo su culminación varios años más tarde, durante la dictadura del general Pedro Aramburu, cuando en 1958 se creó por decreto ley una nueva institución científica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que se transformó en uno de los pilares del sistema científico del país.⁸⁵

En un país como Uruguay, con escasa tradición y desarrollo de su comunidad científica debido, entre otros factores, a la escasez de recursos humanos y financieros, el grueso de la producción de conocimiento original se concentraba en la Universidad de la República. Pese a su marcado énfasis en la formación de los profesionales liberales, la institución albergaba espacios dedicados al cultivo de la ciencia básica o aplicada, especialmente en las áreas de medicina e ingeniería. Fuera de ella funcionaban núcleos dispersos bajo la órbita de algunos ministerios entre los que claramente destacó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Biológicas (IIB), dependiente del de Instrucción y Seguridad Social y dirigido por el biólogo Clemente Estable.

Digamos también que no había un sector empresarial poderoso y pujante dispuesto a realizar inversiones en el sector y que optó, en cambio, por importar tecnología para el desarrollo de una industria protegida por el Estado y orientada a la sustitución de importaciones.⁸⁶ En consecuencia, cualquier iniciativa al respecto dependía fuertemente de la acción y, sobre todo, de los dineros del Estado. Con todo, estas ideas y transformaciones que se estaban produciendo a nivel global y en la región ejercieron una significativa influencia en medios científicos y, en menor medida, en sectores de la industria y ámbitos estatales.

⁸⁵ Ver Botelho, André. “Ciencia pelo desenvolvimento: a escrita pública de José Leite Lopes” En Botelho, André, Bastos, Elide Rugai, Villas Bôas, Glaucia (orgs.) En *O moderno em questao. A década de 1950 no Brasil* (Rio de Janeiro, PPGSA/UFRJ, 2008) p. 272 y Feld, Adriana, “El Consejo Nacional de Investigaciones: Estado y comunidad científica en la institucionalización de la política de ciencia y tecnología Argentina (1943-1966)” En Vessuri, H. (ed.). “*Conocer para transformar*”. *Producción y reflexión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica. IV Encuentro de Jóvenes Investigadores y Ira Escuela Doctoral Iberoamericana en Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la Tecnología–ESOCITE/CYTED/AECID/IVIC/UNESCO-IESALC* (Caracas: Iesalc-Unesco, 2009), p. 137. Caldelari, M. y otros “Instituciones de promoción y gobierno de las actividades de investigación”, p. 168

⁸⁶ Martínez, María Laura. *75 primeros años en la formación de los ingenieros nacionales: historia de la Facultad de Ingeniería (1885-1960)*. (Montevideo: Udelar, Facultad de Ingeniería, 2014)

Fue gracias a la tenaz voluntad de un puñado de científicos de varias disciplinas, con clara predominancia de las médicas y la ingeniería, que en 1948, a instancias de la mencionada Conferencia de Expertos organizada por la Unesco, se fundó la Asociación Uruguaya para el Progreso de la Ciencia (AUPC). Al igual que sus pares latinoamericanas, la AUPC desarrolló una pionera y profusa labor tendiente a favorecer el cultivo de la ciencia así como a sensibilizar a la sociedad y al poder político de sus efectos benéficos para el desarrollo económico y social.⁸⁷ Estuvo integrada por científicos nacionales de reconocida trayectoria como el ingeniero Julio O. Maggiolo, el físico y astrónomo Félix Cernuschi, los matemáticos José Luis Massera y Rafael Laguardia, el reconocido obstetra Roberto Caldeyro Barcia, el ingeniero y físico Walter Hill o el mencionado biólogo Estable.

Sus cometidos eran estimular la investigación científica en todas sus ramas, asegurar las condiciones materiales para su desarrollo, coordinar e incrementar la colaboración y coordinación entre investigadores de iguales o distintas disciplinas y promover el intercambio con científicos e instituciones extranjeras.⁸⁸ Fiel a estos propósitos exhortó a los poderes públicos a invertir en ciencia y tecnología y elaboró un par de proyectos orientados a la creación de un órgano nacional encargado de regular la actividad científica, uno presentado en 1948 y el otro en 1956. Aunque no se concretaron, estimularon los debates y constituyeron un valioso antecedente del Conicyt, creado en 1961.⁸⁹ El proyecto de 1956 fue el que cobró más relevancia. Puesto a consideración de la Universidad de la República, a la que estaban vinculados la mayoría de sus asociados, y del Poder Ejecutivo, planteaba diseñar un organismo nacional con los cometidos de asesorar, promocionar y coordinar toda la actividad científica en el país y compuesto por tres científicos en actividad designados por la Universidad, y por representantes del

⁸⁷ Los delegados uruguayos a la Primera Conferencia de Expertos Científicos de América Latina fueron Clemente Estable, director del IIB, los ingenieros Germán Villar y Walter Hill (Facultad de Ingeniería) y el biólogo Rodolfo V. Tállice (Facultad de Humanidades y Ciencias)

⁸⁸ Ver AUPC. *Boletín de la Asociación Uruguaya para el progreso de la Ciencia*, n.º 1, Montevideo, 1952, p. 4. Para un examen detallado de las actividades de la Asociación Uruguaya para el Progreso de la Ciencia ver Martínez, María Laura, “La Asociación Uruguaya para al Progreso de la Ciencia”, *Galileo* 23 (mayo de 2001)

⁸⁹ “Sugestión al Poder Ejecutivo de designar una Comisión Provisional, integrada por Científicos Auténticos, para estudiar la conveniencia de crear un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas e Industriales.” Nota redactada por F. Cernuschi, R. Laguardia, entre otros, en junio de 1948. *Archivo Laguardia* Caja n.º 16, carpeta n.º 16.11. AGU, Montevideo y “Asociación Uruguaya para el Progreso de la Ciencia- Montevideo-Uruguay. Proyecto de ley de creación del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica”. Setiembre de 1956. Caja n.º 16, carpeta n.º 16.11. *Archivo Laguardia*, AGU, Montevideo

Gobierno, del Consejo de la Economía, la AUPC y la Cámara de Industrias. Funcionaría adjunta una Comisión Nacional Consultiva con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de la Universidad, de los entes de enseñanza, entes industriales y organismos científicos dependientes del Estado.⁹⁰

En el seno de la Universidad, en línea con los debates globales y regionales sobre el papel social de las instituciones de conocimiento que adjudicaban un lugar preeminente a las universidades en la promoción de la ciencia, un grupo de universitarios expresó su respaldo al proyecto de la AUPC, promoviendo la discusión del proyecto y reivindicando el “patrocinio” de esa casa de estudios a la institucionalización científica y tecnológica.⁹¹ Esos universitarios pertenecían a la generación reformista —así llamada por sus frecuentes apelaciones al legado de la Reforma Universitaria de Córdoba e integrada por un conjunto heterogéneo de docentes e investigadores de diversas procedencias disciplinares y tradiciones político-ideológicas—, que venía batallando por una transformación académica que fortaleciera la investigación científica, avanzando en su profesionalización, y la colocara en el centro de las actividades de la Universidad. Opinaban que la investigación no había adquirido suficiente envergadura y, mucho menos, ocupaba el lugar destacado que reclamaban para ella. De hecho, la actividad científica que allí se hacía (y en el país) no era el resultado de esfuerzos articulados a nivel institucional, sino que formaba parte de impulsos individuales o eran derivaciones de la práctica desarrollada en algunas cátedras.

Con estas ideas, los reformistas universitarios, entre los que destacó un grupo de ingenieros que promovió el desarrollo de la ciencia básica en la Facultad de Ingeniería, fueron afianzando paulatinamente su influencia en la Universidad. Con la asunción al rectorado del médico y dirigente socialista Mario A. Cassinoni (1956-1962), lograron la mayoría en sus órganos de conducción, iniciando una etapa de cambios que cristalizó en la concreción de una serie de acciones orientadas a la transformación de las estructuras académicas. Se reclamaron entonces más recursos y mejores condiciones para

⁹⁰ Ver “Asociación Uruguaya para el Progreso de la Ciencia- Montevideo-Uruguay. Proyecto de ley de creación del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica”. Setiembre de 1956. Caja n.º 16, carpeta n.º 16.11. *Archivo Laguardia*, AGU, Montevideo

⁹¹ *Actas CDC*, 3 de abril de 1959, p. 221. Para América Latina ver Vessuri, Hebe. “*O inventamos o erramos*”. *El Poder de la ciencia como idea-fuerza en América Latina*, (Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2007), p. 194

modernizar las estructuras existentes y alcanzar una producción científica acorde a los estándares internacionales, se abrieron nuevos campos de especialización y se extendió el régimen de dedicación total para los investigadores. En este marco se creó la Comisión de Investigaciones Científicas en 1957 (reformulada en 1960) y un año más tarde fue aprobado el reglamento del régimen de dedicación.⁹²

Pero es claro que aún faltaba un largo trecho para lograr la ansiada reconversión global de la institución que ubicara a la ciencia como una función primordial de la universidad. Si bien los reformistas fueron conquistando espacios en el gobierno universitario, lo cierto es que todavía eran muy minoritarios y, por tanto, no contaban con suficiente poder para imponer los cambios que deseaban. La actividad científica era francamente subvalorada ante el propósito institucional principal que era la formación de profesionales. Por tanto, era llevada a cabo con un enorme esfuerzo y de manera muy solitaria por talentos excepcionales que se abocaron a la capacitación de investigadores, la construcción y equipamiento de laboratorios y bregaron por conformar espacios institucionales que los cobijaran. En ese contexto, se entiende que los planteos de la AUPC de crear un consejo de investigaciones a nivel nacional no tuviera la recepción esperada.

Aún así, el Estado uruguayo no permaneció ajeno a los incipientes impulsos a la ciencia y la tecnología. De hecho desde la primera mitad del siglo XX el batllismo en el Gobierno las había concebido en clave utilitaria y, por ende, al servicio de su proyecto de desarrollo industrial. En este sentido, impulsó iniciativas estatales para su fomento. A comienzos de los años cincuenta, el Poder Ejecutivo de mayoría colorada inició gestiones ante la Fundación Armour del Instituto de Tecnología de Illinois solicitando asesoramiento para la instalación en Uruguay de un laboratorio tecnológico industrial.⁹³

A las expectativas gubernamentales se sumó el interés de la Cámara de Industrias del Uruguay y de amplios sectores de la Facultad de Ingeniería de establecer un servicio

⁹² Ver París de Oddone, B. *La Universidad de la intervención a la crisis, 1958-1973* (Montevideo: Universidad de la República, 2010), Markarian, V., y otros. *1958. El cogobierno autonómico* (Montevideo: Universidad de la República, 2008), p. 139

⁹³ Armour Research Foundation en el Instituto de Tecnología de Illinois era un laboratorio de investigación privado estadounidense sin fines de lucro orientado a la investigación, asesoramiento en ingeniería experimental para el Gobierno y la industria. Ver Comisión Especial para Fomento de Laboratorios Tecnológicos e Investigaciones Industriales. *Antecedentes relacionados con la creación en el Uruguay de un Centro de Asistencia Técnica para la Industria*, [Montevideo, 1956] (Agradezco el acceso a este material a María Laura Martínez)

de ayuda al sector industrial con base en los institutos universitarios existentes.⁹⁴ En 1952, el Consejo Nacional de Gobierno (CNG) creó por decreto la Comisión Especial para Fomento de Laboratorios Tecnológicos e Investigaciones Industriales, a través de la cual, y con la ayuda de la Embajada del Uruguay en Washington, contrató los servicios técnicos de la Fundación Armour. Se esperaba que como resultado de la consultoría de esta Fundación se estableciera “una reorganización general de los Institutos de Tecnología y Química, Máquinas, Electrotécnica, Ensayo de Materiales, Estática, Física y Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas, cuyas importantes instalaciones y equipos prestan ya a nuestros industriales eficientes servicios”, ampliando su radio de acción de acuerdo con las necesidades del sector, informaba en 1953 la Asociación de Ingenieros Uruguayos.⁹⁵

Contra todo pronóstico, la Armour concluyó que era necesario instalar un centro de asesoramiento técnico de la industria independiente y externo a todo organismo gubernamental, y especialmente a la Universidad, dedicado exclusivamente a la investigación aplicada y de apoyo a la industria y al Gobierno. Las expectativas universitarias que preveían la intervención de los servicios universitarios resultaron así frustradas. Las nuevas directivas ocluían toda injerencia de la Universidad en los procesos de producción y aplicación de tecnología industrial así como en la gestión administrativa del instituto proyectado. Como consecuencia, se desató una áspera polémica entre el Gobierno y las autoridades de la Universidad que hizo naufragar este proyecto en el ámbito universitario. La disputa involucró asuntos que formarían parte de discusiones más amplias a lo largo del período que abarca esta tesis como el papel de la Universidad de la República, la capacidad de injerencia del Gobierno central y la industria privada o la naturaleza del conocimiento producido. Estas disputas alcanzaron particular resonancia en la interna de la Facultad de Ingeniería, donde el grupo de ingenieros reformistas, en una posición minoritaria, reclamaba el incremento de la formación en ciencia básica y la modificación del perfil de los egresados. Digamos que desde los años cuarenta estos ingenieros se enfrentaron a una mayoría que seguía

⁹⁴ Ver Martínez, María Laura. *75 primeros años en la formación de los ingenieros nacionales: historia de la Facultad de Ingeniería (1885-1960)*.

⁹⁵ *Revista de Ingeniería de la AIU*. Montevideo, setiembre de 1953

planteando una formación profesional clásica orientada al asesoramiento del estado y el sector privado.⁹⁶

Aún así, y a pesar de las reacciones universitarias, en 1956 el PE envió un mensaje a la Asamblea General legislativa con la propuesta de fundación del Centro de Asistencia Técnica para la Industria (CATI) bajo la órbita del Ministerio de Industrias y Trabajo, que fue duramente impugnada por buena parte de la comunidad universitaria y de sectores de la Facultad de Ingeniería. A cambio, estos presentaron un anteproyecto para organizar un CATI dependiente de la Universidad, que tampoco prosperó en esta instancia.⁹⁷

Pese a las discusiones y altercados reseñados, la idea de crear un organismo centralizado coordinador de la actividad científica continuó siendo un objetivo primordial para diversos sectores políticos y académicos en medio de pronunciadas discrepancias. En 1959, el CNG —por primera vez controlado por el Partido Nacional— con la colaboración de Estable, director del IIB, promovió la transformación de ese instituto en un Centro Nacional de Investigaciones, concitando un movimiento de oposición en filas universitarias que terminó frenando su concreción. Dos años más tarde, el Poder Ejecutivo volvía a tomar la iniciativa al incluir en la Ley de Presupuesto Nacional dos artículos que disponían la organización de un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicyt).

Ambas iniciativas provocaron choques al interior de la academia al tiempo que incrementaron los conflictos entre la Universidad y el Poder Ejecutivo, en un escenario nacional signado cada vez más por la polarización política y social. Mientras los voceros blancos, claramente alineados con las derechas políticas de la época, pusieron en cuestión los alcances de las funciones de la Udelar en la materia, los reformistas universitarios —más comprometidos con la renovación académica de la institución y que a partir de 1958, con la sanción de la nueva Ley Orgánica, se afianzaron en su

⁹⁶ Markarian, V. “Universidad, revolución y dólares. Aproximación a otras discusiones de la izquierda uruguaya en los sesenta a partir de una polémica generada en la Facultad de Ingeniería” Ponencia presentada a LASA, mayo de 2016

⁹⁷ Sobre este conflicto ver: Markarian, V. (ed.) *Don Julio, documentos del Archivo Ricaldoni*. (Montevideo: Universidad de la República, 2007). Martínez, María Laura “La Asociación Uruguaya para al Progreso de la Ciencia”, *75 primeros años en la formación de los ingenieros nacionales: historia de la Facultad de Ingeniería (1885-1960)* y Guarga, Rafael, “O.J.Maggiolo, a 50 años de su plan de reestructura de la Universidad y a 38 años de su fallecimiento” En: Jung, María Eugenia, Martínez, M.L. y Paroli, P. *50 años del plan Maggiolo. Historia, testimonios y perspectivas actuales* (Montevideo: Ediciones Universitarias, Udelar, 2018)

conducción—, acusaron al Gobierno de limitar la influencia de la Universidad en temas que consideraban de su competencia.

El Centro de Investigación Científica, 1959. Universidad vs. Poder Ejecutivo

Finalizando el año 1959, el consejero de Gobierno Eduardo Víctor Haedo puso a consideración del Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que reconvertía el IIB, fundado en 1927 por Estable en el ámbito de la Inspección Técnica de Enseñanza Primaria, en un Centro Nacional de Investigación Científica, con funciones de coordinación de la actividad científica y técnica. El instituto, fundamentaba Haedo, había cumplido una etapa en su desarrollo; era momento de que diera un salto para pasar a cumplir un papel más amplio y ambicioso, dando cabida “a todas las vocaciones que en el país se manifiestan en el campo de las ciencias”.⁹⁸

Estable, maestro egresado del Instituto Normal de Varones, se había dedicado en forma autodidacta a la investigación en el área de la biología. A comienzos de la década de 1920 viajó a Madrid con una beca otorgada por el Gobierno español para completar su formación en el laboratorio que dirigía el Premio Nobel de Medicina de 1906, Santiago Ramón y Cajal, especializándose en el estudio de la arquitectura del sistema nervioso central y periférico. Publicó en 1923, en la revista que editaba el propio Ramón y Cajal, hallazgos originales referentes a la organización histológica del cerebelo. Aunque su actividad principal se llevó a cabo en el instituto que fundó, a su regreso de España se vinculó activamente al Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina y años después fue designado para integrar el plantel docente de la cátedra de biología de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHC) de la Universidad de la República. Como docente universitario integró la Asamblea General del Claustro durante el período que aquí se abarca. Fue miembro fundador de la AUPC, donde tuvo un activo y destacado desempeño. Los 30 años de la creación del IIB, en 1957, fueron el momento elegido para llevar a cabo una serie de homenajes a la trayectoria del instituto y de su fundador y, por tanto, una ocasión más que propicia para impulsar en el seno del Gobierno un proyecto de esas características.⁹⁹

⁹⁸ *Actas CNG*, 29 de octubre de 1959, Archivo General de la Nación (AGN), Montevideo

⁹⁹ *Revista de la Asociación Uruguaya para el Progreso de la Ciencia*. Montevideo, v. 5, n.º 1 (1958). En *Archivo Laguardia*, AGU, Montevideo

Es claro que Estable junto a varios de sus colaboradores intervino en la idea y también en la redacción del anteproyecto original, que recogía experiencias internacionales respecto a la creación de Consejos Nacionales de Investigación Científica —instituciones que como vimos ya existían en México, Argentina, Brasil— y expresaba el espíritu de la época al resaltar la significación económica que suponía el avance de la ciencia para el país.¹⁰⁰ Otros consejeros de Gobierno apoyaron entusiastas la propuesta de Haedo y también destacaron la relación entre el desarrollo científico y el progreso económico, razón por la cual resultaba ineludible que el IIB fuera sostenido con recursos estatales; “es una cuestión de lógica y decoro nacional”, decía el consejero blanco Pedro Zabalza.¹⁰¹

Al mismo tiempo que esto ocurría, el rector Cassinoni entregó a Estable el título de doctor *honoris causa*, máximo honor que otorga la Universidad de la República. Cassinoni destacó su vasta trayectoria científica y su destacado papel en el desarrollo de la investigación científica en Uruguay, lamentando que “absurdas” disposiciones reglamentarias (tener un título de la Udelar) habían impedido que Estable asumiera y ejerciera como catedrático. Pero, en cambio, remarcó el costado universitario de quien “ha sido maestro de nuestros catedráticos”. Y agregaba con sentidas palabras: “todos los que hoy desarrollan en numerosas Facultades tareas de investigación y de docencia, han tenido en la voluntad de Estable, en su desinterés, en su jerarquía intelectual, en la conducta moral de Estable, un gran ejemplo”.¹⁰² Estable tenía un pie fuera y otro dentro de esa casa de estudios y Cassinoni apelaba al que lo mantenía ligado a ella. Como el propio Estable reconoció: “yo no soy universitario y lo soy”. Desde esa doble condición jugó un significativo papel en el proceso que estamos describiendo. Se agrega a ello que no contaba con una militancia político partidaria conocida, circunstancia que sumado a su débil inserción en la Universidad, le dio mayor margen de maniobra para moverse en ámbitos gubernamentales y políticos, en un momento de creciente discrepancia entre las autoridades universitarias y las nacionales. Es uno de los tantos ejemplos de figuras difícilmente clasificables dentro del esquema izquierdas/derechas. En él pesó, al tiempo que hizo valer, su propio prestigio y reconocimiento como científico.

¹⁰⁰ *Actas CNG*, 29 de octubre de 1959, AGN. Los colaboradores eran los médicos José Pedro Segundo, José Roberto Sotelo, Carlos María Franchi y Francisco Alberto Sáez, docentes de Facultad de Medicina que desarrollaban sus investigaciones el Instituto de Investigaciones Biológicas junto a Clemente Estable

¹⁰¹ Ver *Actas CNG*, 29 de octubre de 1959, AGN

¹⁰² *Actas CDC*, 4 de noviembre de 1959, pp. 1178. AGU

Concretamente el “proyecto Haedo”, como se lo llamó, previó una amplia libertad de acción para el Centro Nacional, integrado con el IIB y con aquellos institutos que la ley creara. Se le asignaban, además, vastas atribuciones: realizar investigación científica original, estimular y coordinar la producción científica a nivel nacional, mantener vínculos con similares organismos fuera de fronteras e impulsar un plan de publicaciones científicas y desarrollar tareas de asesoramiento al Estado y a privados. El Estado, por su parte, debía garantizar condiciones de autonomía y de libertad en el desarrollo su labor, lo que también suponía dotarle de los medios suficientes.¹⁰³ También se establecía su estatuto de ente autónomo, lo cual lo ponía fuera de la órbita del Ministerio de Instrucción Pública. Finalmente, el texto del proyecto establecía la organización, competencias e integración de sus cuerpos directivos y de los institutos que se incorporaban.¹⁰⁴

Varios elementos convergieron para que el Gobierno se lanzara a esta empresa. Por un lado, las aspiraciones fundacionales del Partido Nacional, que por primera accedía a la conducción estatal, y sus esfuerzos por liderar iniciativas que marcaran la diferencia con los Gobiernos precedentes. A esto se agregaba la urgencia por captar ayudas financieras externas en medio de una aguda crisis económica y las consecuentes restricciones presupuestales. Por otro, las condiciones de presentación del proyecto y la marginación de la Universidad de la República en su elaboración no eran ajenas a la hostilidad del Gobierno y de los grupos políticos que lo sustentaban hacia ella, a causa de sus cada vez más frecuentes posiciones opositoras y al incremento de la movilización estudiantil. Recordemos una vez más que a fines de 1958 miles de estudiantes se habían volcado a las calles exigiendo la aprobación inmediata de una nueva Ley Orgánica universitaria. En un momento de creciente protesta social los sindicatos se plegaron a los reclamos estudiantiles. Estudiantes y trabajadores aunaron así sus reivindicaciones, fraguando la tan mentada “unidad obrero-estudiantil”.

El marco normativo sancionado finalmente otorgó a los estudiantes voz y voto en todos los cuerpos directivos y un papel importante en la elección del rector y de los decanos de las facultades. Buena parte de la comunidad universitaria, con sus autoridades a la cabeza, rechazó y cuestionó las políticas económicas liberalizadoras y las prácticas represivas para contener las movilizaciones de sindicatos y estudiantes que

¹⁰³ *El Debate*, 4 noviembre 1959, p. 3

¹⁰⁴ *El Plata*, 9 de noviembre 1959, p. 10

llevó a cabo el Gobierno blanco. Estos acontecimientos produjeron un impacto directo en variados sectores políticos y sociales, en particular aquellos afines a las derechas sociales y partidarias, que profundizaron su rechazo a los gremios estudiantiles y parte del cuerpo docente, acusándolos de adherir a ideologías de izquierda.¹⁰⁵

Finalmente, aunque no menos decisivo, fue un factor gravitante el interés y las gestiones realizadas por Estable para mejorar las condiciones de su instituto, autonomizarlo del Ministerio de Instrucción Pública y captar más recursos estatales para su funcionamiento entonces muy dependiente de los fondos que recibía desde fines de la década de 1940 de la Fundación Rockefeller. Vale aclarar que la recurrencia a fuentes de financiación externa —a través de fundaciones filantrópicas, de organizaciones internacionales o de otros Gobiernos— para el desarrollo de programas de investigación era un trámite frecuente también en la Universidad de la República y una práctica que no fue cuestionada hasta mediados de la década del sesenta.¹⁰⁶ El Poder Ejecutivo, a su vez, se apoyó en el prestigio científico de Estable para legitimar su propuesta. Los beneficios así eran mutuos. Se podría pensar que el anteproyecto venía a satisfacer una década de reclamos de la comunidad científica, de hecho el articulado contemplaba muchos de ellos. Sin embargo, como veremos, esto no fue así, agitando los ánimos en la interna universitaria. Sus autoridades así como varios representantes docentes reclamaron que la Universidad no había sido convocada en la elaboración del diseño institucional en el que, además, se le asignaba un papel marginal.

Con estos antecedentes, varios órganos de prensa vinculados al Partido Nacional (*el Debate, El Plata, El País*) saludaron la iniciativa del Gobierno y resaltaron el escaso interés que sus antecesores habían manifestado en impulsar la ciencia nacional. Recordemos que estos ámbitos expresaban la opinión de sectores derechistas cada vez más reactivos a las posiciones de una mayoría universitaria que, asociada al progresismo y a distintas fuerzas de izquierda, venía consolidándose en sus organismos de dirección, contribuyendo a construir el discurso que la señalaba como un foco de

¹⁰⁵ Markarian, V., Jung, M. E., Wschebor, I., 1958... y París de Oddone, M. B. *La Universidad de la República. Desde la crisis a la intervención*

¹⁰⁶ Ver Markarian, V., “Universidad, revolución y dólares. Aproximación a otras discusiones de la izquierda uruguaya en los sesenta a partir de una polémica generada en la Facultad de Ingeniería”. Ponencia presentada a la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), mayo de 2016. Esta práctica se incrementó en la década de 1960, de la mano de viraje de la política de Estados Unidos hacia América Latina que, en aras de prevenir posibles estallidos revolucionarios, implementó varios programas de asistencia entre los que cabe destacar la Alianza para el Progreso.

perturbación social. Estos sectores objetaban que la Universidad ocupara el papel rector en la materia. *El Debate*, periódico herrerista, rechazó que la investigación estuviera bajo el patronato de las universidades, en clara alusión a la Udelar y sus “pretensiones” de conducir el proceso de desarrollo científico.¹⁰⁷ Esta consideración reforzaba el rol tradicional de las universidades como formadoras de profesionales liberales, contraviniendo los intentos de renovación académica que impulsaba la llamada generación reformista a la que ya hicimos referencia.

En similar tesitura, el doctor Juan T. Fischer, director del Instituto de Investigaciones Psicosomáticas del Hospital Maciel, en un editorial de *El País* establecía la diferencia entre la creación de conocimiento original “cuya meta suprema es la investigación” y no debía tener “obligatoriamente contornos universitarios” y la investigación como complemento de la docencia, que era función específica de la Universidad. Por estas razones, le competía al Estado marcar las directivas de la investigación científica así como crear los organismos idóneos. Conteste con esta posición afirmaba: “no todos los investigadores tienen que ser universitarios, como no todos los universitarios tienen que tener necesariamente el monopolio de la capacidad de investigación”.¹⁰⁸ Como fue señalado, estos argumentos apuntaban una vez más a reforzar el fuerte contenido profesionalista que hasta entonces había dominado en la Universidad al mismo tiempo que formaba parte de un debate mayor —que será analizado más en detalle en el próximo capítulo— sobre los alcances del sector público y el privado, la libertad de enseñanza y el laicismo, que se reavivó durante los Gobiernos blancos. Digamos, además, que estas posturas tenían expresión al interior de la Universidad, donde los reformistas continuaban batallando por una transformación académica que diera preeminencia a la investigación.¹⁰⁹

Las puntualizaciones de la prensa derechista respondían a las repercusiones y la oposición que el proyecto gubernamental despertó en filas universitarias. En ese ámbito hubo expresiones de rechazo al centro de investigaciones porque se lo consideraba una competencia a algunas de las prerrogativas que la Constitución y la Ley Orgánica

¹⁰⁷ *El Debate*, 4 noviembre 1959, p. 3

¹⁰⁸ *El País*, 5 de diciembre de 1959, p. 5

¹⁰⁹ La creencia de que la investigación y la enseñanza corrían por carriles distintos no era original. De hecho funcionaba así en distintos países de la región, siendo Brasil el caso más claro. Esto cambió a partir del proceso de modernización de las universidades que llevó adelante el régimen dictatorial. El decreto n.º 53 (1966) habilitó la unificación de ambas actividades

atribuían a la Universidad de la República. El rector Cassinoni denunció la intencionalidad política de esta iniciativa que, decía, constituía en los hechos un enfrentamiento con el centro de enseñanza. Advertía que el apoyo económico al nuevo organismo iba en detrimento de los ya retaceados recursos presupuestales que la Udelar recibía. Lo más grave era, en su opinión, que sus autoridades no solamente no habían sido consultadas sino que tampoco se contemplaba la representación de la institución en el nuevo organismo. Algunos servicios se sumaron a las objeciones del rector y del CDC. La Asamblea del Claustro de la Facultad de Química resumía estas críticas al afirmar que “en su fondo y forma, invade atribuciones de la Universidad; prescinde de ella y confiere al poder político ilimitadas posibilidades de interferencia con los fines que a ella confiere la Ley Orgánica de 1958”. Reafirmaba su apoyo a la creación de un sistema que coordinara la investigación científica y “la experimentación técnica” que realizaban varias instituciones en el país, integrado por la Universidad en igualdad de potestades que otras instituciones.¹¹⁰

Ante este estado de cosas, se reunió en sesión especial el Consejo Directivo Central junto con los miembros de la Comisión de Investigación Científica de la Universidad y el presidente de la AUPC, el matemático Laguardia. En la oportunidad la mayoría coincidió con las opiniones ya expresadas: el proyecto era un ataque a la Universidad al atribuir al nuevo centro finalidades que se entendía eran de su dominio.¹¹¹ Se consideró además que la frágil situación de la ciencia nacional debía volcar al Estado a fortalecer los institutos existentes y no a duplicar los esfuerzos, incentivando la competencia por recursos que eran escasos. La subvención estatal era imprescindible en un país en el cual, como señalamos, el sector privado no tenía participación significativa en el financiamiento de la actividad científica.¹¹²

La discusión en los órganos de dirección universitaria derivó en cuestionamientos a la escasa importancia que la propia institución asignaba a la investigación y a la ausencia de lineamientos generales en la materia. Pese a los avances experimentados en el último lustro, la investigación continuaba siendo no solo marginal sino

¹¹⁰ Facultad de Química, Repartido n.º 7876. Declaración de la Asamblea del Claustro de la Facultad de química sobre el Anteproyecto de Creación del Centro Nacional de Investigación Científica (Plan Haedo). *Archivo Laguardia*, Caja n.º 16, Carpeta n.º 16.11, AGU, Montevideo

¹¹¹ Ver *Actas CDC*, 13 de noviembre de 1959, p. 1280

¹¹² Ver “Observaciones preliminares al nuevo proyecto de creación de un Centro Nacional de Investigación Científica”, 18 de diciembre de 1959. *Archivo Laguardia*, Caja n.º 16, Carpeta n.º 16.11 y *Actas CDC*, 13 de noviembre de 1959, pp. 1275-1286

incomprendida. Era evidente que la comunidad universitaria en su mayoría comulgaba con un modelo académico orientado a la preparación de las élites y las profesiones liberales. Acaso esa incompreensión era la fuente de la generalizada “apatía” que en torno al tema detectaba el médico e integrante de la Comisión de Investigación Científica de la Universidad, doctor Estenio Hormaeche.¹¹³ Buena parte de los consejeros reformistas coincidió en que la investigación que se realizaba no era resultado de un propósito “orgánico y sistemático de las autoridades universitarias” sino de los esfuerzos aislados de “personas con iniciativas y decisión de luchar contra el ambiente”.¹¹⁴

Caldeyro Barcia, médico y eminente investigador científico en su área de especialidad, fue aún más duro en sus juicios, acusando a la dirigencia de la casa de estudios de obstaculizar el cultivo de la ciencia. Una diversidad de trabas internas hacía que esta fuera una cuenta pendiente. Agregaba con dureza que:

El año pasado la Universidad realizó la lucha por Ley Orgánica. Propondría que se hiciera una lucha análoga para llevar adelante la investigación científica, que tanta importancia tiene para el país. Para abordar el problema y resolverlo, tendremos que combatir enemigos de dentro y de fuera; enemigos como los que tuvimos que combatir para llevar la Ley Orgánica adelante; enemigos tan retrógrados como aquellos. Será una lucha difícil, pero que seguramente merece toda la atención del Consejo.¹¹⁵

El CDC resolvió finalmente iniciar una ronda de contactos con representantes del Poder Ejecutivo y con Estable, a la que sumaron delegados de la AUPC. Se introdujeron como resultado algunas modificaciones al proyecto original, que fueron consideradas insuficientes.¹¹⁶ Laguardia, en una carta dirigida al entonces ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, Eduardo A. Pons, resumía en tres puntos los defectos fundamentales que a su entender presentaba la versión definitiva: la falta de separación

¹¹³ *Ibíd*

¹¹⁴ *Ibíd*

¹¹⁵ *Actas CDC*, 13 de noviembre de 1959, pp. 1275-1286

¹¹⁶ Ver “Proyecto de Ley (Definitivo)” y Facultad de Ingeniería y Agrimensura. Repartido n.º 3682. “Memorándum y declaración relativos a la proyectada creación de un Centro Nacional de Investigación Científica (aprobado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura en sesión del 22 de diciembre de 1959)” en *Archivo Laguardia*, Caja n.º 16, carpeta n.º 16.11. AGU, Montevideo. Para las discusiones sobre este punto en el Consejo Directivo Central ver *Actas CDC*, 6, 9, 13, 16 de noviembre de 1959, p. 1195, pp. 1226-7, 1275-1278, p. 1295 y 4, 21 y 28 de diciembre de 1959, p. 1480 y pp. 1713-1714, *Actas CDC*, 14 de marzo de 1960, p. 302

entre la investigación y su fomento al concentrar ambas funciones, la atribución de la enseñanza para la investigación —finalidad que pertenece a la esfera de la Universidad de la República— y la preeminencia que se le daba en la orientación de la investigación a dos de “varios organismos en que se investiga” (el IIB y el Museo de Historia Natural). Proponía a cambio una nueva formulación que establecía: el fortalecimiento de los institutos existentes —en particular el IIB y el Museo de Historia Natural, a los que se debía dar mayor autonomía y presupuesto—, la creación de un organismo de fomento de la investigación científica y técnica —sin laboratorios propios y con representación en su cuerpo directivo del Poder Ejecutivo, la Universidad y las “tres ramas de la ciencia a saber exactas, de la naturaleza inanimada y de la materia viva”— y, por último, encomendar a este organismo el cometido de valorar la pertinencia de crear nuevos institutos y laboratorios y “el destino a darles”.¹¹⁷ Sin considerar estas últimas sugerencias, el proyecto pasó con mínimas cambios al ámbito legislativo, pero no llegó a tratarse y quedó en letra muerta.

Como se señaló, en el ocaso de los años cincuenta, especialmente tras las encendidas luchas por la aprobación de la Ley Orgánica, comenzó a crecer el encono hacia la Universidad de parte de algunos sectores partidarios afines a los sectores conservadores de los partidos tradicionales, fundamentalmente blancos herreristas y ruralistas. No obstante, todavía había espacios para dirimir diferencias entre las autoridades nacionales y las universitarias. Dos años más tarde, el asunto volvió a surgir, en un ambiente más polarizado y en el cual la Universidad aparecía a los ojos del Gobierno y de variados sectores derechistas formando parte del “enemigo interno”. La instalación del Conicyt en 1961 derivó en una dura querrela entre esa casa de estudios y el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad las argumentaciones adquirieron un cariz político-ideológico y un tono mucho más ríspido, preanunciando la ruptura entre la Universidad y el poder político que se produciría a fines de la década.

La creación del Conicyt. La Universidad de la República se enfrenta al Poder Ejecutivo

¹¹⁷ Carta de Rafael Laguardia al ministro de Instrucción Pública y Previsión Social Eduardo A. Pons, 30 de diciembre de 1959. *Archivo Laguardia*, Caja n.º 16, Carpeta n.º 16.11, AGU, Montevideo

Si hubiera un índice de hasta donde ha llegado la desviación de los conceptos democráticos más obvios, esta pretensión, seriamente manifestada, sería una de las pruebas más concluyentes. La investigación es en última instancia, una afanosa búsqueda de la verdad, en cualquiera de las ramas del conocimiento humano, además de ser uno de los supuestos del progreso y bienestar de la colectividad. Que en esa zona se pretenda reivindicar el monopolio estatal, es rendir tributo a premisas incompatibles con los más elementales supuestos de la libertad. Porque si el Estado debe estar presente para alentar esos esfuerzos, no lo debe estar para monopolizarlos, reivindicando para el burócrata el exclusivismo que se confunde con el de la búsqueda misma de la verdad. Pretender que en esa vasta zona de la cultura nacional, el Ministerio de Instrucción Pública debe ser además un testigo paralítico y sordo, es creer que ese Ministerio en materia de cometidos referentes a la cultura nacional, tiene el deber de hacerse en las ceremonias de fin de curso, y eso si lo invitan.¹¹⁸

La extensa cita, publicada por *El País*, pertenece al consejero herrerista Martín Etchegoyen que de este modo respondía a las críticas de las autoridades de la Universidad al proyecto de crear un consejo de investigaciones científicas presentado por el Poder Ejecutivo en 1961. Condensa la posición mayoritaria del partido gobernante sobre asuntos que se convirtieron en objeto de álgidas controversias a lo largo del período que nos ocupa: las funciones sociales de la Universidad, los alcances de su autonomía y del monopolio sobre la educación superior; temas que referían de modo más general a cómo concebía un sector de las derechas conservadoras-liberales los límites entre lo público y lo privado y, sobre todo, la acción del Estado. En ella, además, se justificaban los reclamos de estos grupos para acrecentar la injerencia del Poder Ejecutivo en ámbitos que hasta ahora habían estado reservados a la casa de estudios, contrarrestando así su influencia. El tenor acusador de las expresiones del político blanco resulta representativa del tono que fueron adquiriendo las disputas, dejando claro que a medida que se polarizaba el panorama social y político del país se iba haciendo más difícil conciliar opiniones.

No hay duda que la iniciativa de instituir un órgano regulador de la actividad científica reconocía la influencia de organismos internacionales, pero ante todo expresaba la voluntad gubernamental de captar las ayudas económicas prometidas a través de los programas de asistencia del Gobierno de EEUU. El lanzamiento de la Alianza para el Progreso, ese mismo año, aumentó las expectativas ante la posibilidad

¹¹⁸ *El País*, 5 de diciembre de 1961, p. 5

de un cuantioso flujo de recursos financieros hacia América Latina.¹¹⁹ Aunque en la comunidad académica y científica, como lo demuestran los antecedentes analizados, había un amplio consenso sobre la necesidad de contar con una institución de este tipo, buena parte del colectivo rechazó la decisión gubernamental, objetando el trámite expedito e inconsulto que, además de marginar la opinión de la Universidad, ocluía la posibilidad de una discusión pública en relación con la forma de regular la actividad científica. En diciembre, el Poder Ejecutivo había elevado al Parlamento su proyecto de ley de Rendición de Cuentas para el próximo año, en los que incluía dos artículos —241 y 242— que, de modo bastante general, establecían la conformación del Conicyt en la órbita del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Concretamente, los mismos definían su composición (11 miembros, siete designados por el PE y cuatro por la Udelar) y sus cometidos principales (administrar y distribuir los fondos que se le adjudicaran entre “particulares, funcionarios públicos o instituciones nacionales, públicas o privadas, de cualquier naturaleza”).¹²⁰ En un momento de creciente tensión con el poder político, la decisión fue interpretada como un agravio más en la campaña en contra de la casa de estudios. Por esos meses, varios sucesos abonaron esta idea. A los actos de violencia por parte de grupos derechistas contra varios edificios universitarios y al clima de enfrentamiento con el Gobierno se sumó un proyecto del consejero Haedo que disponía la creación de otra universidad, privada y católica, y la contratación por parte del Estado de una institución privada (el Centro Latinoamericano de Economía Humana, Claeh) para realizar una investigación sobre los problemas socio-económicos en el medio rural.¹²¹

¹¹⁹ Alonso Eloy, Rosa y Demasi, Carlos. *Uruguay 1958-1968. Crisis y Estancamiento*, (Montevideo: EBO, 1986). Para un estudio detallado sobre esta experiencia ver Garcé, Aldo. *Ideas y competencia política en Uruguay (1960-1973)* (Montevideo: Trilce, 2005)

¹²⁰ Ley n.º 13.032, 7 de diciembre de 1961 y decreto reglamentario, 1 de marzo de 1962. Caja n.º 4, carpeta n.º 14, en *Archivo Oscar J. Maggiolo*, AGU, Montevideo

¹²¹ Cómo se analizará en el próximo capítulo, en abril de 1961 el presidente del CNG, Eduardo V. Haedo, presentó ante ese organismo un proyecto de Ley de Enseñanza Libre que finalmente no se concretó. *Actas del CNG*, acta n.º 260, 4 de abril de 1961. AGN, Montevideo. Por resolución del Poder Ejecutivo del 21 de noviembre de 1961 se resolvió la contratación del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh) junto con la agencia francesa de origen católico, Compagnie d'Etudes Industrielles et d'Aménagement du Territoire (CINAM). Entre las consideraciones la CSIC manifestaba que “se ha ignorado a la Universidad, tanto como elemento de consulta como probable realizadora de la tarea investigativa encomendada por el Poder Ejecutivo. Todo ello a pesar de que el C.L.A.E.H. no ha demostrado ninguna superioridad sobre los Institutos de investigación especializados de la Universidad de la República.” *Repertorios*, Universidad de la República, 902/61, diciembre de 1961, AGU, Montevideo

La dirección universitaria, que tuvo noticias de la iniciativa gubernamental cuando ya se encontraba en la órbita parlamentaria, inmediatamente inició gestiones ante la Comisión parlamentaria para retirar los artículos que conformaban el Conicyt.¹²² En los días sucesivos varios órganos y servicios de la Universidad de la República emitieron declaraciones públicas de rechazo al expediente “de contrabando” así como a los contenidos de los artículos mencionados. En particular se criticó la capacidad de injerencia que se atribuía al Poder Ejecutivo así como la ausencia de representación en el Consejo de otros actores (estatales y no estatales) de relevancia para la vida científica y tecnológica nacional.¹²³ En los hechos, la propuesta elevada por el Ejecutivo se alejaba bastante de los proyectos anteriores de la AUPC (1948 y 1956), que habían sido respaldados por una buena parte de la comunidad científica y el reformismo universitario. Sin embargo, ni las declaraciones ni las gestiones de la Universidad lograron frenar o eventualmente introducir modificaciones a la ley, finalmente aprobada en diciembre de ese año. Como consecuencia, el CDC resolvió endurecer las acciones y presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de los referidos artículos.

Así las cosas, representantes y medios de prensa del Partido Nacional respondieron duramente a las críticas universitarias al tiempo que argumentaron a favor de la separación entre enseñanza e investigación.¹²⁴ Etchegoyen, a tono con la cita transcrita al inicio, insistió en que la función de la Universidad debía restringirse, tal como lo establecía la Constitución, a la enseñanza pública superior, es decir, a la preparación para las profesiones liberales y “la cultura más alta”. La formación profesional y la actividad científica, en su opinión, eran “órdenes mentales” que funcionaban

¹²² *Actas CDC*, 20 y 23 de noviembre de 1961, pp. 1922-9. La comisión estuvo integrada por Rodolfo Tálice, Israel Wonsewer, José B. Gomensoro y el bachiller Mario Wschebor

¹²³ *Gaceta de la Universidad*, n.º 19, diciembre de 1961, p. 5. “La investigación escamoteada” (editorial) “Esta es la primera objeción, esencial, que hacemos a ese Consejo incluido en forma solapada y oculto a la opinión utilizándose el procedimiento impropio de la Ley de Rendición de Cuentas, que es una ley presupuestal.[...] En el artículo 241 ese Consejo es estructurado con siete miembros designados por el Poder Ejecutivo y cuatro por la Universidad. Y el Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de este organismo. Aquí radica nuestra segunda objeción, tan esencial como la primera. Queda este Consejo así dependiendo del poder político y desprovisto de la elemental independencia que en materia científica y técnica es imprescindible”. Ver también la declaración de la Comisión de Investigación Científica de la Universidad en: *Distribuidos*, 989/61, 19 de diciembre de 1961. AGU, Montevideo y artículo de Óscar Maggiolo sobre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 1966. AGU, Montevideo. *Archivo Maggiolo*, Caja n.º 4, Carpeta n.º 17

¹²⁴ *El Bien Público*, 26 de octubre de 1962, *Tribuna*, 21 de octubre de 1962, *Tribuna*, 24 de octubre de 1962. *El País*, 25 de octubre de 1962. En *Colección Pivel Devoto*, Caja n.º 133, carpeta n.º 421. AGN, Montevideo

“autónomos y separables”.¹²⁵ Por lo tanto, no le correspondía a esta casa de estudios asumir prerrogativas exclusivas sobre la “totalidad de la labor de investigación”, una concepción que, como se vio, tenía su contrapartida en la interna universitaria. Los cuestionamientos, por tanto, eran infundados en tanto la creación del Conicyt no afectaba “los servicios de esta institución” y, aclaraba que “la investigación en sí misma, con carácter universal, no es un servicio propio de la Universidad”.¹²⁶ En esta línea de pensamiento, tampoco sus “diplomados” eran “los únicos capaces de formar juicio” respecto a la investigación que se hacía en el territorio nacional, concluía Etchegoyen.¹²⁷ El diario *El País*, por su parte, consideraba que la materia estaba entre los “cometidos más obvios” del Ministerio de Instrucción Pública, razón por la cual quedaba justificado que el Conicyt quedara bajo su dependencia. Al mismo tiempo, apelando a la retórica anticomunista, buscaba desenmascarar las raíces “totalitarias” de una posición orientada a “consagrar algo así como una suerte de monopolio de investigación de parte del Estado, y en particular de [...] la Universidad de la República”.¹²⁸

Con un planteo similar su par católico *El Bien Público* advirtió que la defensa del monopolio acercaba peligrosamente a esta institución a los países de “detrás de la Cortina de Hierro y [a] algunas corrientes de extracción emparentada, entre las que brilla con particular énfasis, las generadas por el laicismo.” Dentro de las fuerzas comunistas o totalitarias, como refieren los articulistas, se incluía a las diferentes vertientes del laicismo, muy activas entonces, introduciendo otro elemento más en un contexto de rediscusión de asuntos, para algunos ya laudados, como la libertad de enseñanza y el papel del sector privado en ella. Asimismo, se alegaba que la “ciencia sopla donde sea y el investigador actúa en cualquier sitio. Uno de ellos puede ser el medio universitario” y que era bueno que existieran otros ámbitos para su desarrollo. Recordemos que con el acceso del Partido Nacional al Gobierno cobraron fuerza posturas cuestionadoras de la histórica injerencia estatal en diversas áreas, en particular, la educación.¹²⁹

¹²⁵ *Actas CNG*. Actas 340 a 342. 7-14 de diciembre de 1961

¹²⁶ *Actas CNG*. Actas 340 a 342. 7-14 de diciembre de 1961

¹²⁷ *Actas CNG*. Actas 340 a 342. 7-14 de diciembre de 1961

¹²⁸ *El País*, 5 de diciembre de 1961, p. 5

¹²⁹ *El Bien Público*, 20 de octubre de 1962, En *Colección Pivel Devoto*, Caja n.º 133, carpeta n.º 421. AGN

Vale decir, que el uso de términos como “totalitarismo” o “democracia” se hizo frecuente en estos años a tono con la conceptualización de la Guerra Fría, readaptados e instrumentalizados en el vocabulario político según las necesidades de los actores y las coyunturas políticas locales. En este caso, herreristas y ruralistas, identificados con la derecha del PN, hegemónicos en el Gobierno nacional, junto al conservadurismo católico identificaron al “enemigo interno” con el comunismo, un término que en ese momento englobaba a un amplio abanico de tendencias, desde las ubicadas a la izquierda del espectro político nacional hasta sectores del liberalismo progresista como el sector batllista del PC identificado con la lista 15.¹³⁰ Resulta evidente que las argumentaciones en contra de la Universidad estaban teñidas de un sesgo político-ideológico que se identificaba con esta prédica que caracterizó a las derechas de la época y la ubicó formando parte del “enemigo interno”. En esta ocasión, sin embargo, las fuerzas conservadoras del PC, en particular aquellas que nucleaba la lista 14, liderada por los hermanos Batlle Pacheco, y el diario *La Mañana*, asumieron una posición equidistante en este conflicto e hicieron prevalecer su papel de oposición a su tradicional rival ahora en el Gobierno, cuestionando la rendición de cuentas en este y otros aspectos, señalando especialmente que se hubiese prescindido del asesoramiento universitario:

sin entrar a discutir si la creación del Instituto —en cuya dirección se adjudica[a la Universidad] una representación minoritaria frente a la representación política— roza o no la autonomía universitaria, parece evidente que el asesoramiento y el entendimiento previos con las autoridades universitarias, estaban indicados por razones de sentido común con las que había que cumplir por encima de cualquier desinteligencia o animosidad políticas. Pero los blancos son así: la infalibilidad que se atribuyen, no tolera consejos ni condesciende a pedir sugerencias.¹³¹

Desde tiendas izquierdistas, por otra parte, hubo condenas al procedimiento llevado adelante por el Gobierno. El diario de izquierda *Época*, por ejemplo, afirmó que se estaba atentando contra la autonomía universitaria.¹³²

¹³⁰ Iglesias, Mariana. “La excepción como práctica de gobierno en Uruguay, 1946-1963”. *Contemporánea. Historias y problemas del siglo XX*, vol. 2, año 2, 2011, pp. 137-155. Ver también Broquetas, Magdalena, *La trama autoritaria* (Montevideo: EBO, 2014) y Jung, M. E. “La Universidad de la República como Enemigo Interno. La reacción de las derechas uruguayas, 1958-1973” en *Anuario IEHS* 32(2) 2017, pp. 149-170 disponible en [http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2017%202/09%20Anuario%20IEHS%2032\(2\)%20D.Jung.pdf](http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2017%202/09%20Anuario%20IEHS%2032(2)%20D.Jung.pdf)

¹³¹ *La Mañana*, 26 noviembre de 1961, p. 4

¹³² *Época*, 20 de octubre de 1962, p. 10

Frente a los hechos consumados los órganos de conducción universitaria decidieron, como se dijo, emprender acciones legales para derogar los artículos de creación del Conicyt. Los estudiantes sostuvieron las posiciones más radicales, arguyendo que el “ocultamiento de las decisiones” y el “secreto” con que se había manejado este asunto demostraban que el Gobierno se orientaba por “oscuras intenciones” y, en consecuencia, convocaron a “boicotear” su funcionamiento¹³³:

su creación configura un ataque directo a la Universidad y a todo lo que ella representa en el país. [...] la Universidad debe oponerse a este organismo, debe gestionar por los medios legales correspondientes su anulación, y debe resistirlo[...].”¹³⁴

El Gobierno y la prensa de derecha presentaba a la Universidad como un todo cohesionado y uniforme, situación que distaba mucho de la realidad que se vivía en su interior. El examen de los debates respecto a este asunto, muestra la existencia de posiciones encontradas que obstaculizaron llegar a una decisión consensuada.

¿Participar o no participar?: la polémica universitaria

A grandes rasgos se perfilaron dos visiones: una proclive a considerar la incorporación con reparos al nuevo organismo, promovida mayoritariamente por el grupo de profesores reformistas más directamente vinculados a la investigación científica, y otra, impulsada decididamente por la FEUU y a la que suscribían algunos docentes y egresados, que se opuso de manera terminante. Las polémicas a lo largo de los meses que duró el conflicto tuvieron como centro temas como el papel de la Universidad en la conducción de la institucionalización científica, la procedencia de los financiamientos y la injerencia del poder político en la definición de las agendas de investigación.

Los estudiantes argumentaban que la investigación científica debía estar dirigida y organizada por un organismo autónomo, independiente del control gubernamental. En

¹³³ FEUU. Secretaría de Asuntos Universitarios. “Proyecto de posición de la Federación sobre la creación de la ley de Rendición de Cuentas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas”. Redactado por Mario Wschebor. 1961. *Trayectorias Universitarias*. Donación Rafael Guarga. AGU, Montevideo

¹³⁴ *Actas de la Actas AGC Universitario (AGC)*, 7 de diciembre de 1961, pp. 1-15

ese esquema correspondía a la Universidad asumir un rol dirigente y, conteste con ello, contar con una representación mayoritaria.¹³⁵ Solo ella, cogobernada y autónoma del poder político, estaba en condiciones de garantizar un ambiente propicio para el cultivo de la ciencia.¹³⁶ Hasta aquí no presentaban demasiadas discrepancias con las modalidades institucionales recomendadas por los organismos internacionales, que a su vez eran defendidas por los reformistas y los científicos que integraban la AUPC. En cambio, alertaban sobre los riesgos de importar experiencias ajenas y, por tanto, inadecuadas a las necesidades de países como Uruguay, planteando la oposición entre lo propio o autóctono, frente a lo foráneo o lo extranjero asociado a la penetración imperialista. Esta línea de pensamiento conducía a denunciar las posibles vinculaciones del proyecto gubernamental con los planes impulsados por el Departamento de Estado de EEUU para “controlar” e “integrar la enseñanza dentro de los mecanismos que regula el imperialismo”.¹³⁷ De hecho, sostenían, el interés que había guiado al Poder Ejecutivo era el acceso a las ayudas económicas de la AFP, cuyo objetivo era “controlar desde arriba, por los organismos políticos vinculados a los intereses que la impulsan, los centros que van a recibir esa ayuda”.¹³⁸

Esta preocupación preanunciaba las posiciones antiimperialistas que adoptaría la FEUU junto a otros actores políticos y sociales promediando la década. Recordemos que en la gremial universitaria habían primado las tendencias “terceristas” en rechazo a las dos potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, pero en estos años la misma empezó a experimentar un proceso de reorientación ideológica que fue radicalizando sus acciones y sus posiciones políticas y académicas. En su larga historia, el movimiento estudiantil uruguayo se había enfrentado a diferentes Gobiernos (con la excepción de las dos presidencias de José Batlle y Ordóñez) e impulsado consignas de cambio social, pero en estos años bajo el impacto de la Revolución cubana el “tercerismo” poco a poco fue desplazado por las corrientes afines a los comunistas y socialistas.¹³⁹

¹³⁵ Ver discusiones en *Actas CDC*, 20 de noviembre de 1961, pp. 1814-15 y *Actas AGC*, 14 de diciembre de 1961, pp. 1-16

¹³⁶ *Actas AGC*, 7 de diciembre de 1961, pp. 1-15

¹³⁷ *Ibíd*

¹³⁸ *Ibíd*, p. 14

¹³⁹ Van Aken, Mark. *Los militantes: una historia del movimiento estudiantil uruguayo desde sus orígenes hasta 1966*, (Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1990), pp. 137-95

Como ha señalado el historiador estadounidense Mark Van Aken, quien por esos mismos años estaba en Uruguay investigando el movimiento estudiantil, se fueron configurando dos tendencias que se enfrentarían en torno a temas académicos y de orientación gremial: los radicales o duros (anarquistas, trotskistas y comunistas prochinos) y los moderados o blandos (comunistas, católicos, algunos socialistas). Los primeros fueron más proclives al compromiso institucional y a buscar entendimientos con EEUU, de ahí se explica las reuniones que algunos de sus principales figuras tuvieron con personal de la embajada de ese país, y, lograron atemperar las posiciones más radicales frente al conflicto.¹⁴⁰ Aún así, la disposición a no colaborar con el Conicyt se mantuvo, y fue compartida por otros integrantes del colectivo universitario que, consustanciados con el clima de radicalización que comenzaba a insinuarse, entendieron que para resolver los problemas que afectaban a la educación, a la cultura y a la ciencia había “que impulsar la transformación de la realidad, para lo cual también [era] necesaria la investigación independiente y progresista”.¹⁴¹

Los docentes reformistas, en cambio, pese a su rechazo inicial, mayoritariamente no veían contradicción entre una Udelar orientada a la investigación y el compromiso científico con una perspectiva nacional de desarrollo y, en consecuencia, se pronunciaron a favor de la integración de los delegados universitarios.¹⁴² En su mayoría miembros activos la AUPC, como ya vimos, desde mediados de los años cuarenta venían pregonando sobre la necesidad de un instituto que regulara y fomentara la actividad científica, al tiempo que gestionando la creación del mismo. En línea con las tendencias regionales e internacionales en la materia, la AUPC concebía a esa entidad con la máxima autonomía técnica, con primacía de los científicos —y en este caso de la Universidad— en la determinación de las prioridades académicas, rechazando las condicionantes del Gobierno así como las que pudieran darse a partir de los recursos extrapresupuestales. En ese sentido expresaron su disconformidad con el trámite que llevó a la instalación del Conicyt y cuestionaron el excesivo predominio del Poder Ejecutivo en su dirección. Sin embargo, una vez que el consejo se transformó en una

¹⁴⁰ Ver Van Aken, Mark. op.cit. p. 210 y siguientes- NARA. Informe semanal de la Embajada de Montevideo al Departamento de Estado. Asunto: Reunión entre el embajador y líderes estudiantiles universitarios, 1º. Mayo 1964.

¹⁴¹ *Ibíd.*, p. 12

¹⁴² Prego, Carlos A. “La gran transformación académica en la UBA y su política a fines de los años 50” En Prego, Carlos A. y Vallejos, Oscar (comps.) *La construcción de la ciencia académica. Instituciones, procesos y actores en la universidad argentina del siglo XX* (Buenos Aires: Biblos, 2010), p. 153

realidad entendieron que era posible —e imprescindible— incidir para que su actividad resultara “proficua para el país” y “también para la Universidad” que, siendo el principal centro nacional de investigación y formación de los científicos, no podía quedar por fuera de la definición de las políticas de ciencia y tecnología.¹⁴³

El biólogo Estable fue acaso quien expresó la postura más categórica, objetando sin ambages que la Universidad reclamara la primacía (mucho menos la exclusividad) sobre la investigación científica. “Yo no defiendo este Consejo; no estoy de acuerdo con la estructura que él tiene, pero tampoco creo que se deba sostener que sólo dentro de la Universidad pueden crearse organismos de investigación”, decía.¹⁴⁴ Como se vio, Estable era representante del orden de egresados en la Asamblea del Claustro de la FHC, institución en la cual se desempeñaba como docente, pero que su actividad científica fundamental estaba radicada en el IIB. Desde esa doble condición tomó postura y se pronunció en esta oportunidad, adoptando similar tesitura respecto a la discusión, analizada más arriba, sobre la eventual creación de un Centro de Investigaciones en 1959. Lamentaba, también, el antagonismo reinante entre las autoridades gubernamentales y las universitarias. A su modo de ver, era una “situación anómala” en un momento en que debía prevalecer la voluntad de colaboración en aras de crear las condiciones necesarias para el desarrollo científico del país. Relativizaba a su vez las intenciones espurias que se adjudicaban al gobierno, concluyendo “que [lo que] sea en bien del país, ya no es contra la Universidad”.¹⁴⁵ Estas opiniones lo distanciaban de otros universitarios afines a la integración al nuevo organismo, al concebir la actividad científica disociada de la política. Fue muy criticado por ello, sobre todo por los representantes estudiantiles, que lo acusaron de adolecer una “cierta óptica profesional” que impedía “valorar exactamente los elementos muy negativos” del proyecto del Poder Ejecutivo. Dos años más tarde, cuando Estable integraba el directorio del Conicyt, insistían en estos conceptos al señalar que “sólo con la absoluta

¹⁴³ *Actas AGC*, 23 de abril de 1963, p. 7

¹⁴⁴ *Actas AGC*, 7 de diciembre de 1961, pp. 4-6

¹⁴⁵ *Actas AGC*, 7 de diciembre de 1961, pp. 1-15. En 1963 volvería insistir en esto al afirmar: “Sería extraño, arrogante, loco que los otros fueran todos contrarios a la Universidad. De modo que cuatro universitarios estarán ya defendiendo a la Universidad y mejorando al Consejo. Creo que es un deber de la Universidad tener sus representantes en el Consejo de Investigación Científica”. *Actas AGC*, 23 de abril de 1963, pp. 3-5

pureza con que el Prof. Estable opina sobre la situación política” se podía comprender “que integre ese cuerpo”.¹⁴⁶

Mientras los distintos órganos de deliberación y decisión de la Universidad se enfrascaban en duras discusiones sobre el camino a seguir, el CDC emitió una resolución en la que se instaba a institutos y servicios así como a investigadores y docentes de abstenerse de solicitar recursos al Conicyt hasta tanto no se dirimiera el asunto en la interna universitaria y hubiera un pronunciamiento oficial. Se intentaba frenar cualquier colaboración que contraviniera las decisiones que hasta el momento se habían definido. Esta disposición, sin embargo, generó rechazo por gran parte de la comunidad académica. Varios consejeros argumentaron acerca de la “absoluta libertad [del] investigador” de decidir su integración o eventual colaboración. Algunos servicios como la FHC expresaron su oposición abierta a esta resolución.¹⁴⁷ Las reacciones contrarias llevaron a que apenas unos meses más tarde se diera marcha atrás.¹⁴⁸

La instalación efectiva del Conicyt obligó a la Universidad a reconsiderar las posiciones adoptadas, abriendo una nueva etapa de discusiones. La Comisión de Investigación Científica (CSIC) fue la primera en pronunciarse a favor designar delegados. Hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no dictaminara sobre el recurso de inconstitucionalidad, la “ley estaba en vigencia y debía cumplirse”. Igual que lo habían hecho los docentes reformistas en instancias anteriores, sostenían la inconveniencia de que la institución con mayor experiencia en investigación se autoexcluyera de la definición de la política científica. Agregaba que los delegados electos debían ser investigadores de probados antecedentes científicos.¹⁴⁹

El orden estudiantil por su parte mantuvo su oposición.¹⁵⁰ Pero, esta actitud no podía sostenerse por mucho tiempo más. A los pocos meses la FEUU, en una sesión especial de la AGC Asamblea General del Claustro, matizó sus posiciones iniciales. Esto se producía como consecuencia de las tensiones ideológicas que se estaban procesando en su seno, donde duros y blandos, según la calificación de Van Aken, se enfrentaban

¹⁴⁶ *Actas AGC*, 23 de abril de 1963, p. 18

¹⁴⁷ *Actas Conicyt*, 4 de abril de 1963.

¹⁴⁸ *Actas CDC*, 6 de febrero de 1963, 15 y 26 de junio de 1963, p. 803 Esta resolución fue reconsiderada en junio de ese año. *Actas AGC*, 23 de abril de 1963, p. 14

¹⁴⁹ Ver “Pronunciamiento de la Comisión de Investigación Científica sobre envío de Representantes de la Universidad al Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica.” *Distribuidos*, 35/963, febrero de 1963. AGU, Montevideo

¹⁵⁰ *Ibíd*

fuertemente. Finalmente, el Consejo Federal de la FEUU aceptó la incorporación universitaria “en el Consejo Nacional de Investigación, lo que significaba la victoria de la línea blanda”.¹⁵¹ Los estudiantes en la AGC supeditaron su apoyo a la definición de directivas generales que orientaran la labor de los delegados de la Universidad.¹⁵² A estas alturas, la mayoría de los representantes al CDC entendía que era el momento de integrarse sin condiciones. La situación había cambiado y el Conicyt era una realidad ante la cual no se debía permanecer ajeno.¹⁵³

La propuesta del Claustro aproximaba una posible solución al diferendo al garantizar que los delegados electos contaran con el respaldo institucional y con orientaciones concretas sobre cómo proceder.¹⁵⁴ Así se hizo y un mes más tarde la CSIC puso a consideración del CDC un informe que establecía una serie de sugerencias de carácter general orientadas a fomentar la investigación científica. Se destacaban entre ellas: bregar por modificar el estatuto legal del Conicyt, dar prioridad a aquellos proyectos de investigación “que a la vez persigan objetivos directos de ciencia aplicada al desarrollo o mejoramiento de la producción agropecuaria, la producción extractiva, la producción industrial, la salud pública y la administración pública”. El informe proponía dar impulso a medidas tendientes a fortalecer los esfuerzos y recursos para el desarrollo de las capacidades científicas del país, realizar un relevamiento de la actividad científica nacional, implementar una política de becas y misiones de estudio para propiciar la formación de investigadores, tanto en centros nacionales como extranjeros. También se insistía en la necesidad de destinar recursos al mejoramiento del equipamiento instrumental de los centros nacionales básicos de investigación, universitarios y extrauniversitarios y la publicación de trabajos científicos.¹⁵⁵

Finalizando 1963, el CDC aprobó el informe y designó representantes al Consejo, apostando una vez más a la colaboración con las autoridades nacionales. La FEUU puso como condición que se mantuviera el recurso de inconstitucionalidad y que uno de los cuatro delegados fuera propuesto por el orden estudiantil.¹⁵⁶ El rector Cassinoni, que había desempeñado un papel muy activo en pos de mantener una postura unitaria,

¹⁵¹ Van Aken, M.J. op. cit., pp. 207-9

¹⁵² *Actas AGC Universitario*, 23 de abril de 1963, p. 9 y *Actas CDC*, 24 de abril de 1963, pp. 425-33

¹⁵³ *Ibíd*, p. 13

¹⁵⁴ *Actas CDC*, 24 de abril de 1963, pp. 425-433

¹⁵⁵ “Informe sobre el fomento, desarrollo y coordinación de la investigación científica en la Universidad y el país. Ver *Distribuidos* n.º 289/63, 23 de mayo de 1963

¹⁵⁶ *Actas CDC*, 2 de diciembre de 1963, pp. 1759-1777 y 9 de diciembre de 1963, p. 1841

respaldó la moción estudiantil.¹⁵⁷ En junio de 1964 fueron designados el médico Juan José Crottogini, el ingeniero Óscar J. Maggiolo, el economista y periodista Carlos Quijano y el bachiller Álvaro Díaz como delegados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.¹⁵⁸ Con esta decisión concluía una primera etapa en la pugna entre la Universidad y el Gobierno por el control de la política científica. Fracasados los intentos de frenar la resolución del Poder Ejecutivo, la casa de estudios debió suavizar sus posiciones iniciales a riesgo de quedar fuera de un asunto en el que estaba especialmente involucrada.

El Conicyt en marcha (1962-1966)

Mientras la Universidad discutía qué hacer, a fines de 1962 el Poder Ejecutivo emitió el decreto reglamentario del organismo técnico. Designó para su integración a profesionales, docentes, e investigadores de probada trayectoria en sus áreas de especialidad: Justo M. Alonso, médico otorrinolaringólogo, docente y jefe de Laboratorio de Clínica en la Facultad de Medicina y profesor de la Policlínica de Otorrinolaringología del Hospital Maciel; Walter Hill, ingeniero, director del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, docente e integrante de la Comisión Nacional de Energía Atómica; Clemente Estable, docente e investigador en ciencias biológicas y director del IIB; Juan E. Pivel Devoto, historiador y profesor del Instituto de Formación Docente; Pablo Purriel, médico y docente de la Facultad de Medicina; Gastón Navarro, ingeniero agrónomo, docente de la Facultad de Agronomía y técnico consultor del Centro de Investigaciones Agrícolas “Alberto Boerger” del Ministerio de Ganadería y Agricultura; y Joaquín de Freitas, médico veterinario, director del Centro de Investigaciones Veterinarias “Miguel Rubino” del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Al poco tiempo, Pivel Devoto fue designado ministro de Instrucción Pública y en su lugar fue nombrado Juan Llambías de Azevedo, católico y antiliberal, doctor en Derecho, docente de filosofía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en la FHC.

La información disponible sobre estos personajes con heterogéneas trayectorias y procedencias, aunque incompleta y dispar, permite señalar algunos rasgos comunes. A

¹⁵⁷ El rector afirmaba que “Una condición fundamental es que la Universidad tome una posición unida y no con un 50% a favor y un 50% en contra” *Actas CDC*, 24 de abril de 1963, pp. 425-433

¹⁵⁸ *Actas CDC*, 8 de junio de 1964, pp. 649-52.

excepción de Estable quien, como se señaló, se dedicó en forma exclusiva a la investigación en ciencia básica, todos ellos compatibilizaron el desempeño de la docencia —y en algún caso también de la investigación— en la Universidad con el ejercicio privado de sus profesiones y la actividad técnica en el ámbito estatal. Desde variadas áreas de actuación, establecieron vínculos con organizaciones, fundaciones e institutos internacionales, que funcionaron como fuentes de financiación, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) o la Fundación Rockefeller, por mencionar algunos ejemplos. La mayoría manifestó una preferencia por el desarrollo de la ciencia aplicada al sector productivo y en esa dirección, como veremos, consideraron que debían orientarse las acciones del Conicyt. A diferencia de Hill y Estable, no habían participado en los impulsos iniciales de la AUPC ni eran demasiado cercanos al núcleo duro del reformismo. Asimismo, varios de ellos tuvieron representación en el cogobierno universitario en más de una ocasión, interviniendo más o menos activamente en las discusiones sobre asuntos político-académicos varios, y en particular, en las discusiones sobre la posición de la institución respecto al Conicyt.¹⁵⁹ Sin embargo, no tuvieron un lugar de alta visibilidad ni lugares de poder de relevancia al interior de ella. De hecho, su incorporación al nuevo organismo es una muestra de las distintas visiones que existían al interior de la comunidad académica y científica.

Respecto a su filiación político-partidaria la información es escasa, pero no es aventurado afirmar que mayoritariamente fueron cercanos a los partidos tradicionales, manteniendo una actitud de colaboración con los distintos Gobiernos de turno. El médico Purriel era el único manifestar su afinidad a un partido de izquierda, el Partido Socialista.¹⁶⁰ Alonso y Pivel Devoto, en cambio, fueron militantes orgánicos y dirigentes de largo y reconocido recorrido en el PN y en su calidad de tales ocuparon altos cargos políticos. Acaso la figura del ingeniero y físico Walter Hill es la de más

¹⁵⁹ “Resolución del Poder Ejecutivo aprobando el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas” 18 de setiembre de 1962. Caja n.º 4, carpeta n.º 14, *Archivo Maggiolo*, AGU, Montevideo

¹⁶⁰ Purriel llegó a integrar en los años cincuenta listas del Partido Socialista en las elecciones nacionales. Más tarde, el 1º de marzo de 1972, fue designado Ministro de Salud Pública en presidente colorado Juan María Bordaberry, de quien era entonces su médico personal. Esto le valió duras críticas de parte de sectores e integrantes de la izquierda. Renunció luego del golpe de Estado de junio de 1973. Ver Turnes, Antonio L. Pablo Purriel (1905-1975). *Medicina y pasión*. (Montevideo: Ediciones Granada, 2019). Disponible en: [https://www.suhm.uy/wp/wp-content/uploads/2020/03/Pablo-Purriel.-Medicina-y-pasi%
c3%b3n-006.pdf](https://www.suhm.uy/wp/wp-content/uploads/2020/03/Pablo-Purriel.-Medicina-y-pasi%c3%b3n-006.pdf), fecha de última consulta abril 2020

difícil clasificación y merece mayor explicación. Hill no destacó por sus contribuciones originales a su campo disciplinar. Su dedicación a la actividad científica fue parcial, y la compatibilizó con la práctica profesional en el ámbito privado y estatal. Con todo, tuvo un papel clave en la institucionalización de la física en el país.¹⁶¹ Alcanzó una fuerte inserción en las redes científicas regionales e internacionales al tiempo que estableció vínculos estrechos con miembros de la Fundación Rockefeller. Gracias a ello logró una importante legitimidad entre sus pares a nivel nacional e internacional. Integró la delegación uruguaya al Primer Congreso de Expertos Científicos de América Latina y fue miembro fundador de la AUPC. Podría decirse que su preocupación por la ciencia fundamental lo acercaba a los universitarios reformistas con quienes coincidió en la AUPC. Sin embargo, sus posiciones académicas y políticas al interior de la Facultad de Ingeniería lo colocaron en la vereda de enfrente. Aunque sin estridencias parece haber estado más cercano a los sectores de la derecha conservadora enfrentados al grupo de ingenieros reformistas que promovió cambios académicos en esa Facultad. A fines de la década del sesenta, después de que la alianza entre este grupo y los estudiantes asumiera finalmente el control de la Facultad de Ingeniería y mientras se agudizaba el clima de radicalización política, Hill se alejó de la vida universitaria. Retornó a la Facultad con un cargo de asesor en 1975, cuando la Universidad se encontraba bajo la intervención decretada por la dictadura cívico-militar instalada dos años antes.¹⁶²

Con esta composición, en febrero de 1963, el Conicyt entró en funciones. A tono con el auge planificador de la época, sus miembros acordaron elaborar un plan de investigaciones “racionalmente estructurado” con áreas de atención prioritaria. Se manifestaron entonces diferencias sustantivas respecto a sus orientaciones que derivaron en largas discusiones sobre la distinción entre ciencia pura o aplicada, desinteresada o de aplicación práctica con fines económicos y de productividad y la determinación de un orden de prioridades para dirigir los escasos recursos disponibles. Mientras Estable

¹⁶¹ Ver biografía de Walter Hill, redactada por Juan Queijo para *Historias Universitarias* http://historiasuniversitarias.edu.uy/wp-content/uploads/2020/04/Hill_Walter.pdf, fecha de última consulta octubre 2020

¹⁶² *El País, Ecos. La voz del lector*, “Cien años tendiendo puentes. Un ingeniero memorioso”, 19 de julio de 2016 <http://ecos.elpais.com.uy/cien-anos-tendiendo-puentes>, fecha de consulta 31 de enero de 2020. En esta nota el “ingeniero memorioso” denunciaba injustas omisiones durante los homenajes realizados con motivo de cumplirse el centenario de la Facultad de Ingeniería. Se opacó en ellos la contribución de varios ingenieros que en opinión del autor de la nota habían tenido un rol destacado: Walter Hill, Luis Giannattasio y Carlos Berta. La ausencia obedecía, según el articulista, a que no pertenecían a la izquierda.

defendía con vehemencia el apoyo a la ciencia básica, el médico Pablo Purriel consideraba que Uruguay “no [estaba] preparado” para abocarse a ella porque debía hacer frente a enormes problemas de “orden práctico” y “para el desarrollo biológico y económico del país”, concluyendo que se necesitaba producir más conocimiento aplicado. Claramente, la polémica expresaba viejos debates que habían tenido —y tenían aún— como escenario diversos ámbitos de la discusión pública y, muy especialmente, la Universidad. En esta cuestión Estable se encontraba en línea con las posturas que defendían los reformistas y el colectivo de científicos nucleado en torno a la AUPC. Para él la clasificación entre ciencia pura y ciencia aplicada era “falsa y ha[bía] sido superada”; mucho menos aceptaba la existencia de jerarquías entre ambos tipos de conocimiento. Asimismo, se oponía rotundamente a supeditar las investigaciones a fines prácticos. El filósofo Llambías de Azevedo, a su vez, matizó en buena medida los planteos de Purriel, al proponer como criterio para decidir el destino de los dineros, “el grado de urgencia del problema, pertenezca a uno u otro campo”. No obstante, consideraba que debían favorecerse investigaciones que tuvieran rendimiento económico para el país. De este modo, se ponía en funcionamiento un círculo virtuoso: el incremento de la riqueza proveería de más recursos al Estado, que luego podrían canalizarse para estimular y ampliar el campo de investigaciones en áreas no redituables económicamente.¹⁶³ En una tesitura similar, los consejeros Joaquín De Freitas y Justo Alonso consideraban que los planes de largo aliento que dieran prelación a temáticas con repercusión nacional y de interés práctico facilitarían la obtención de fuentes de financiamiento externo.¹⁶⁴

En suma, se ponían sobre la mesa argumentos de orden sustantivo, es decir, referidos a las distintas concepciones sobre el conocimiento socialmente útil, y otros, de carácter pragmático, que ataban las prioridades a la disponibilidad de recursos y a las posibilidades de acceder a ayudas externas. Había que empezar por lo “urgente”, pero claramente lo apremiante variaba en función de la concepción sobre la función del conocimiento que se tuviera. Había una amplia corriente de opinión que sostenía la inconveniencia de que los países subdesarrollados invirtieran en ciencia fundamental y que, en cambio, debían promover investigaciones puntuales y atadas a las necesidades del mercado y de la producción. Esta concepción no se limitaba al ámbito local, sino

¹⁶³ *Actas Conicyt*, 21 de marzo y 21 de mayo de 1963.

¹⁶⁴ *Actas Conicyt*, 21 de mayo de 1963.

que respondía a una tendencia global, impulsada por fundaciones, organismos gubernamentales y diversas instituciones internacionales que proveían ayuda financiera para América Latina.

Luego de un acalorado intercambio de ideas se acordó apoyar estudios que abordaran la realidad uruguaya así como los que directa o indirectamente tuvieran impacto económico sin desmedro del desarrollo de la ciencia pura. En este sentido, se hizo especial énfasis en investigaciones como la del quiste hidático, un problema de carácter económico, sanitario y social. No obstante, en un esfuerzo por contemplar las disidencias, se incluyeron otras temáticas “absolutamente universales”. También en línea con los planteos de organismos similares en la región y de las agencias internacionales, se decidió favorecer el cultivo de una ciencia que contribuyera a la resolución de los “grandes problemas nacionales”, formulación que se hizo muy habitual en la época. En esa dirección, se propusieron cuatro grandes áreas vinculadas a la estructura económica y social: agropecuaria, económica, antropológica-médica y ciencias puras de la naturaleza y del espíritu.¹⁶⁵ La tipología despertó críticas y reavivó la discusión. Nuevamente fue Clemente Estable quien argumentó en contra.

Ya en el nombre [del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas], la ley que lo creó puso la prioridad en lo científico. Nadie ignora el íntimo engranaje que une lo científico y lo técnico, pero tampoco ignora nadie sus radicales diferencias. ¿Qué puede ocurrir si adoptamos un criterio global de prioridades? Que sin más ni más, entre temas, uno agropecuario –caro a la mayoría del consejo- y otro de ciencia pura, o de ciencia aplicada con distinto objetivo que el agropecuario, primará siempre el tema concerniente al agropecuario, sea cual sea el alcance científico y el valor práctico de otros temas, sea cual sea su exigencia inmediata y su prospectivo horizonte, sean quienes sean los investigadores, sin cuyos talentos y virtudes no existen garantías de que el programa del Consejo se cumpla de la mejor manera posible con los medios de que se dispone. [...] mi mayor discrepancia gira en torno de las prioridades globales y que a partir de un criterio de valoración global, se de preferencia a lo agropecuario siempre posponiendo también globalmente la Ciencia pura y aún las aplicadas con diferente propósito que el agropecuario¹⁶⁶

¹⁶⁵ Ver *Actas AGC*, 23 de abril de 1963, p. 14

¹⁶⁶ *Actas del Conicyt*, 4 de junio de 1963, s.p.

A pesar de estas objeciones, el Consejo aprobó las áreas propuestas. Para un mejor funcionamiento se resolvió crear comisiones asesoras integradas por especialistas.¹⁶⁷ Cabe señalar que como consecuencia del conflicto con la Universidad fueron varios los investigadores que se negaron a colaborar, enlenteciendo así el proceso de conformación de las mismas. El filósofo Llambías de Azevedo, designado al frente de los temas económicos, por ejemplo, se lamentaba de la negativa a participar de los economistas de la Facultad de Ciencias Económicas.¹⁶⁸ Con todo, algunas de las comisiones empezaron a definir sus líneas de acción. En el caso de la enfocada en la economía, dado que la programación de las actividades científicas y tecnológicas necesariamente estaba sujeta a los planes más generales del desarrollo económico y social del país, se buscó coordinar acciones y definir áreas de competencia con la CIDE. Con ese espíritu, se mantuvieron encuentros con su secretario técnico, el contador Enrique V. Iglesias, y con el jefe de la Asistencia Técnica, Ángel Monti.¹⁶⁹ Sin embargo, no hay registros de que se haya avanzado en la coordinación orgánica entre ambos órganos técnicos.

Sin lugar a dudas, fue la Comisión de Hidatidosis la que acaparó mayor atención y recursos a lo largo del período aquí reseñado. Estuvo integrada por actores relacionados con esta problemática, considerada de interés estratégico y que, a causa de su complejidad, precisaba un abordaje multidisciplinar. Contemplando esa necesaria pluralidad de enfoques se convocó a los directores de institutos universitarios de las Facultades de Medicina y Veterinaria, a un representante de la Sociedad de Biología, al director del Centro de Estudios de Hidatidosis y a un miembro del Instituto Fitotécnico de La Estanzuela.¹⁷⁰ Asimismo, se realizó un llamado para proveer un cargo de parasitólogo y otro de asistente social para colaborar con las investigaciones. En todos los casos hubo una explícita voluntad de evitar cualquier fricción con la Universidad. Así, por ejemplo, se decidió realizar las designaciones de los miembros de las

¹⁶⁷ Plan Investigaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En *Actas del Conicyt*. Caja n.º 697, Carpeta n.º 8179, Fondo del Ministerio de Instrucción Pública, AGN, Montevideo

¹⁶⁸ *Actas del Conicyt*, 11 de junio de 1963.

¹⁶⁹ Ver Actas de reunión de la “Comisión encargada de determinar los problemas de investigación dentro del tema II. Lo económico”, 25 de julio y 7 y 13 de agosto de 1963, Caja n.º 697, Carpeta n.º 8179, AGN, Montevideo

¹⁷⁰ Ente los elegidos se encontraban: Prof. Dres. Pedro Larghero, Juan A. Borrelli, Rodolfo V. Tállice, Velarde Pérez Fontana, Pablo Purriel, José R. Monti Grané, Manuel Rodríguez González, Ing. Agr. Carlos Rucks y Prof. Napoleón Pradinez Brazil.

comisiones en “carácter personal”, evitando hacer mención a los cargos universitarios que estos desempeñaban.¹⁷¹

Junto a la definición del plan de trabajo y la instalación de las comisiones especialistas, el Consejo se concentró en conseguir fuentes alternativas de financiamiento y atender la sostenida demanda de ayuda económica proveniente de investigadores o instituciones. En el primer caso se apeló a organismos regionales e internacionales, para lo cual hubo reuniones con representantes de la Oficina Científica Regional de EEUU para América Latina, la Comisión Uruguaya Pro Alianza para el Progreso, el Centro de Cooperación Científica de la Unesco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como con otras agencias y organizaciones, sin obtener respuestas satisfactorias en el corto plazo.¹⁷² También se solicitó colaboración a ministerios o agencias estatales. Como resultado, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, entonces dirigido por el dirigente blanco Wilson Ferreira Aldunate, brindó su contribución económica para los estudios sobre la hidatidosis. También se hicieron gestiones con el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Aduana a los efectos de agilizar los trámites de importación de instrumental, equipos y material científico y conseguir exoneraciones impositivas; reclamos incluidos en el programa inicial de la AUPC.¹⁷³ En el segundo caso, las solicitudes de subvención económica llegaban en forma aleatoria y eran puestas a consideración las comisiones especialistas, que recomendaban o no otorgar el beneficio.¹⁷⁴ De todas formas, las constricciones impuestas por el exiguo presupuesto estuvieron a la orden del día del Conicyt, condicionando la capacidad de satisfacer las solicitudes de apoyo a la investigación científica.

Resulta evidente que con los medios que disponía era prácticamente imposible que el Conicyt pudiera cumplir a cabalidad las funciones para las que había sido creado. Esta situación se hizo patente cuando Llambías de Azevedo informó los resultados de su visita al Conicet en Buenos Aires, donde tomó nota de su organización y

¹⁷¹ *Actas del Conicyt*, 15 de febrero y 8 de marzo de 1963. En caja n.º 266, carpeta n.º 941. *Colección Pivel Devoto*, AGN, Montevideo

¹⁷² *Actas del Conicyt*, 14 de enero de 1963, 2 de mayo de 1963 y 21 mayo 1963

¹⁷³ Ver Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, caja n.º 697, carpeta n.º 8179. 25 de marzo de 1963. AGN, Montevideo

¹⁷⁴ Ver por ejemplo *Actas del Conicyt*, 15 de febrero de 1963. Nota de Caldeyro Barcia solicitando ayuda económica para instalación de instituto para estudio de cardiopatías; 21 de mayo de 1964, Se aprueba subvención económica al Sergio Bianculló- Dr. Ricardo Artagaveytia (estudios ecológicos y sistemáticos de las levaduras) y el Instituto de Enfermedades del Tórax de la Colonia Saint Bois; Acta n.º 31, 11 de junio de 1964 Solicitud de coronel (r) e ingeniero militar Rolando A. Laguarda Trías de ayuda económica para continuar con sus investigaciones histórico-geográficas

funcionamiento. En su informe a los colegas uruguayos dio cuenta de las dificultades y los avances de su par argentino. Las diferencias con la realidad uruguaya eran abismales.

En primer lugar, su diseño institucional, que preveía la dependencia directa del Poder Ejecutivo. Contaba con personería jurídica y disponía de recursos propios, además de tener capacidad para administrar los que recibía del Estado. En segundo lugar, tenía mayor acceso a medios financieros y, como consecuencia, la posibilidad de apoyar una serie de programas de fomento al desarrollo científico como la promoción de la carrera de investigador y la política diferenciada de becas. Más allá de la escala y las especificidades de cada país, la comparación no solo daba cuenta de todo lo que restaba por hacer en el caso uruguayo, también era un modelo cercano que había que considerar. Por eso se resolvió crear una comisión que analizara aquellos aspectos que podían ser adaptados al ámbito local.¹⁷⁵

En agosto de 1964 habían tomado posesión de sus cargos en el Conicyt los representantes de la Universidad, abriendo una tregua en el conflicto entre la institución y el Gobierno. De las medidas más sobresalientes en esta etapa es posible mencionar la solicitud a Unesco del envío de un experto en planificación científica y técnica que asesorara en la realización de un inventario de las capacidades científico-técnicas del país. Se trataba de coleccionar información precisa sobre la cantidad de unidades de investigación existentes, la orientación de sus trabajos y los recursos financieros y humanos que para ellos disponían. Estos datos servirían de insumo para delinear una política de investigación científica.¹⁷⁶ Se mantuvo también el fuerte impulso a las investigaciones sobre hidatidosis, determinado por el interés que el tema despertaba en ámbitos gubernamentales. En ese marco se proyectó la construcción de un laboratorio en el Frigorífico Nacional y otro en el IIB, y se contrató, como se dijo, a un colaborador en parasitología y a una asistente social al tiempo que se llevó a cabo un estudio epidemiológico “en los órdenes humano y animal” a nivel nacional cuyos resultados fueron presentados en una publicación a cargo del doctor Pablo Purriel y su equipo: *La Hidatidosis en el Uruguay-Radiografía de un problema*.¹⁷⁷ No cabe duda que la

¹⁷⁵ *Actas Conicyt*, 10 de febrero de 1965. *Archivo Conicyt*, material digitalizado

¹⁷⁶ “Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Solicita ayuda de Unesco para realizar un inventario del potencial científico del país”, 20 de julio de 1965, Caja n.º 697, Carpeta n.º 8179, AGN. Ver también: Conicyt, “Memoria Anual (1965)”

¹⁷⁷ En *Conicyt*, caja n.º 133, carpeta n.º 421, *Colección Pivel Devoto*, AGN, Montevideo

contribución económica del Ministerio de Ganadería y Agricultura fue decisiva para el avance de los trabajos.¹⁷⁸ En 1965 el Consejo decidió dar un paso más y lanzó una convocatoria para la presentación de solicitudes de subvención para proyectos de investigación. Se recibieron 75 propuestas que sumaron un presupuesto total de casi 12 millones de pesos, desbordando las expectativas y la capacidad disponible (una partida anual de 1 millón de pesos) para cumplir con los compromisos asumidos. Frente a esta situación los fallos fueron postergados.

La endémica carencia de medios y la dependencia del poder político comprometieron las posibilidades de acción del que debía ser el principal organismo rector en materia de ciencia y tecnología a nivel nacional. Al mismo tiempo, esta situación fue deteriorando el vínculo con el ministro de Instrucción Pública, Pivel Devoto.¹⁷⁹ La adjudicación de dineros provenientes del Fondo de Financiación del Desarrollo Económico —creado por el Gobierno en diciembre de 1964 con destino a las investigaciones sobre el quiste hidático— fue la gota que desbordó el vaso, desatando un conflicto que culminó con la renuncia de todos los miembros —universitarios y no universitarios— del Conicyt. En la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativo, éstos diseñaron un anteproyecto de ley a ser incluido en la Rendición de Cuentas, que establecía la creación de un Fondo de Recursos para investigación científica conformado a partir de un impuesto que afectaba a las importaciones. Lo recaudado sería administrado y distribuido por el Conicyt, pero el Fondo se radicaría en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).¹⁸⁰ De esta forma, se obtenían medios económicos, independientes del presupuesto nacional, para subvencionar proyectos de investigación, becas internas y externas para la formación de investigadores, establecer la carrera de investigador y promover el intercambio de profesores e investigadores con otros países.¹⁸¹

¹⁷⁸ Nota del ministro Pivel Devoto, Caja n.º 266, carpeta n.º 942. *Colección Pivel Devoto*, AGN y Expediente: “Ministerio de Ganadería. Transcribe resolución del Poder Ejecutivo autoriza a ese ministerio para contribuir con \$700.000 en las investigaciones que sobre el problema de la hidatidosis realiza el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas”. Caja n.º 697, carpeta n.º 8179, *Fondo del Ministerio de Instrucción Pública*, AGN, Montevideo

¹⁷⁹ [Documentos vinculados a convocatoria a subsidios de investigación], caja n.º 266, carpeta n.º 942, *Colección Pivel Devoto*, AGN

¹⁸⁰ Conicyt, anteproyecto de ley presentado al ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, Juan Pivel Devoto, 23 de marzo de 1966. Caja n.º 133, carpeta n.º 421, *Colección Pivel Devoto*, AGN, Montevideo

¹⁸¹ Óscar J. Maggiolo en *Gaceta de la Universidad*, julio de 1966, AGU, Montevideo

La propuesta fue presentada al ministro, pero no tuvo andamio. En 1964, como parte de las reformas del Plan Nacional de Desarrollo de la CIDE, se creó un Fondo de Desarrollo Económico, administrado por el BROU, con el propósito de costear proyectos específicos de desarrollo avalados por la primera.¹⁸² Los recursos para investigación científica tenían un destino específico: continuar con los estudios sobre la hidatidosis. El Consejo rechazó de plano la disposición que consideraban lesiva de sus competencias. En una carta dirigida a Pivel Devoto cuestionaron la ausencia de una consulta respecto a las necesidades o preferencias para la distribución de los recursos. A esto se agregaba la asignación al Conicyt de una partida, comprendida en el rubro “inversión cultural”, de 3 millones de pesos que, según Maggiolo, era una “dádiva otorgada a título de premio consuelo”.¹⁸³ El Fondo de Desarrollo, por otra parte, otorgaba presupuesto para el desarrollo de investigaciones pero los canalizaba a través de los institutos de investigación que estaban bajo la órbita de varios ministerios.¹⁸⁴ Así las cosas el Conicyt cuestionó que

el Consejo Nacional de Gobierno o la CIDE sustituyen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y le imponen realizar o ampliar determinada investigación. No puede legalmente hacerse. Este consejo se convertiría en un simple cajero intermediario de las investigaciones, por otro, ordenadas. [...] A este consejo se le impone, contra lo que la ley preceptúa, una investigación y además la vigilancia de esa investigación se comete a otro organismo.¹⁸⁵

La respuesta del ministro no se hizo esperar. Luego de pasar revista de los avances de los estudios sobre hidatidosis promovidas por el Consejo Nacional de Investigaciones así como de todos los apoyos que el mismo había recibido por parte del Gobierno, respondió que la decisión no hacía más que satisfacer los pedidos “tantas veces reiterado[s]” de financiamiento en la construcción de los laboratorios proyectados, contratación de técnicos y ayudantes, aplazados por falta de recursos. Con tono desafiante, Pivel expresaba su asombro por la “paradojal” actitud del organismo,

¹⁸² Garcé, A. *Op. cit.*

¹⁸³ Óscar J. Maggiolo en *Gaceta de la Universidad*, julio de 1966, AGU, Montevideo

¹⁸⁴ Ver Fondo de Desarrollo Económico. Caja n.º 133, carpeta n.º 421, *Colección Pivel Devoto*, AGN, Montevideo

¹⁸⁵ Nota del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas al señor ministro de Instrucción Pública, don Juan E. Pivel Devoto, 18 de abril de 1966, caja n.º 133, carpeta n.º 421. Caja n.º 133, carpeta n.º 421, *Colección Pivel Devoto*, AGN, Montevideo

cuya función debía ser velar por el desarrollo de la producción científica nacional y, que, sin embargo, ponía reparos al ingreso de medios “para que prosiga la única investigación sobre la que ha formulado un programa concreto”. Remataba puntualizando que legalmente, aún cuando gozaba de “desconcentración técnica” y tenía facultades de administración, ese Consejo mantenía una relación jerárquica que lo obligaba a someterse a los lineamientos, directivas y fiscalización del ministerio. Por último, acusaba a los consejeros de asumir una “actitud antipatriótica” al poner freno a las investigaciones de un problema vital para “la salud de los habitantes y la riqueza de la nación”.¹⁸⁶

El directorio del Conicyt replicó que no era de su competencia llevar a cabo investigaciones por su cuenta sino dar apoyo a los investigadores y a las instituciones que se dedicaban a tal fin; labor a la que se intentaba dar cumplimiento a pesar de todas las dificultades y carencias. Ante esto, y tras haber realizado infructuosas gestiones, presentaba su dimisión (tanto los delegados universitarios como los designados por el Poder Ejecutivo). En la renuncia las autoridades del Consejo rechazaron categóricamente las acusaciones realizadas por Pivel, “de desconocimiento de nuestros deberes y de nuestra ‘actitud antipatriota’”. Declaraban no aceptar las calificaciones injuriosas del ministro “ni colectiva ni individualmente, pues lesiona el buen nombre de personas que han dedicado lo mejor de su vida a servir a la sociedad y al país”.¹⁸⁷

El ingeniero Maggiolo exponía su versión de lo ocurrido en un artículo publicado por el periódico universitario *Gaceta de la Universidad*, que rezaba en su título “La omnipotencia ministerial”. En él descargaba sus tintas contra Pivel Devoto. Ironizando afirmaba que “parece ser que [en] un organismo dependiente de un ministerio, sin autonomía expresamente consagrada en la Carta Constitucional, nada se puede realizar sin visitar al Ministro, jerarca omnipotente, dueño absoluto del sí y del no, de acuerdo a los intereses políticos del momento”. No obstante, para Maggiolo, pese a su final abrupto, la colaboración de los universitarios con el Conicyt fue positiva, al dejar en

¹⁸⁶ Ibíd y Pivel Devoto “Nota del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas” Montevideo, 26 abril de 1966. Caja n.º 133, carpeta n.º 421, *Colección Pivel Devoto*, AGN, Montevideo

¹⁸⁷ Carta de renuncia, 4 de mayo de 1966, caja n.º 133, carpeta 421, *Colección Pivel Devoto*, AGN, Montevideo

evidencia “los rasgos más negativos de la dependencia ministerial”. La experiencia vino a confirmar las suspicacias iniciales, convirtiéndose en profecía autocumplida.¹⁸⁸

Aún para quienes inicialmente vieron en el Conicyt una oportunidad, la carencia de recursos y la permanente injerencia del ministro terminó cancelando las posibilidades del mismo de transformarse en un activo promotor de la actividad científica a nivel nacional. Podría pensarse que las restricciones impuestas a la clamada autonomía de la ciencia frente al poder político terminaron por unificar posiciones en el campo científico, trascendiendo las afinidades político-partidarias. Es probable que esto no hubiera sido así de haber contado este organismo técnico con los recursos necesarios para llevar a cabo los planes que se había marcado. Luego del episodio, el Poder Ejecutivo designó un nuevo directorio honorario, que no contó con la participación de la Universidad.

A modo de epílogo, vale mencionar que el Consejo mantuvo en lo sucesivo una actividad muy limitada. Luego que fuera aprobada en 1966 la nueva Constitución nacional, se reestructuraron los ministerios y sus funciones y se creó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).¹⁸⁹ Entre las varias innovaciones institucionales implementadas, el Ministerio de Instrucción Pública cambió su designación por Ministerio de Cultura y bajo su órbita se instituyó una Dirección de Educación, Ciencia y Tecnología de la cual el Conicyt pasó a depender directamente. A su vez, un decreto posterior modificó los criterios para su composición; de los siete representantes del Gobierno, seis pasaron a ser designados por los ministerios y uno por la OPP. Se pretendía que comprendiera “las actividades e instituciones de investigación científica y técnica, así como los organismos encargados de la planificación económica y social”¹⁹⁰. La integración de un delegado de la OPP parecía apuntar a establecer un lazo orgánico entre ambos institutos de planificación. Por último, el decreto mencionado establecía también la instalación de una Oficina Técnica con funciones de asistencia.¹⁹¹ Se abría entonces una nueva etapa, caracterizada por la casi nula incidencia de la comunidad científica y signada por un cambio en las expectativas respecto a sus funciones. Se acentuó su perfil tecnocrático y burocrático, con énfasis en el apoyo a disciplinas de

¹⁸⁸ *Gaceta de la Universidad*, julio de 1966, n.º 39, AGU

¹⁸⁹ Decreto n.º 160/67 en *RNLD*, disponible en: <https://www.impo.com.uy/diariooficial/1967/03/27>
(consulta marzo de 2019)

¹⁹⁰ Decreto n.º 555/967 en *RNLD*: <https://www.impo.com.uy/diariooficial/1967/08/30>

¹⁹¹ *Ibíd*em

aplicación directa a los sectores productivos del país. Con todo, a comienzos de 1969, la Universidad decidió reincorporarse a él. En diciembre de 1968, el PE había renovado su integración de acuerdo con los nuevos criterios e invitó a aquella a nombrar a sus delegados.¹⁹² Sin embargo, en los convulsionados años que siguieron los debates y realizaciones en materia de política científica pasaron a un segundo plano. Las dificultades de funcionamiento y, sobre todo, la escasez endémica de medios financieros comprometieron su capacidad de cumplir con los cometidos que la ley le asignó y, por tanto, de jugar el rol que le cabía en el fomento y promoción de la ciencia.

Si bien la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas puede ser interpretada como un intento del Poder Ejecutivo por limitar el área de influencia y de acción de la Universidad, ese proceso no puede ser explicado únicamente como parte de una reacción de las derechas ante lo que percibían como una “izquierdización” de la casa de estudios. Como pudo observarse, el conflicto se insertó en debates más generales en relación con cómo era concebido el rol de las instituciones públicas y del Estado, temas que se creían laudados para una gran parte de fuerzas sociales y políticas y que en un contexto de avance conservador resurgían con inusitada fuerza.

Asimismo, las posturas y alineamientos dentro y fuera de la comunidad universitaria tampoco fueron un mero reflejo de las disputas del campo político. Las discusiones académicas se dieron con una relativa autonomía respecto a las definiciones político partidarias o estrictamente ideológicas. Por otra parte, la realidad del nuevo organismo signada por la imposibilidad de disponer y administrar recursos propios y por la creciente tensión que se generó con el ministro Pivel Devoto hizo que sus miembros fueran abandonando su apoyo inicial y su confianza en las posibilidades de cumplir un papel efectivo en el impulso a la actividad científica. Además, luego de las álgidas polémicas iniciales y de la designación de los representantes universitarios, el Conicyt dejó de ser objeto de preocupación o discusión al interior de la Universidad, acaso por la clara marginalidad que tuvo en los hechos. La renuncia de sus miembros cerró una fase en la puja que enfrentó al Gobierno con la Universidad. Pero como se señaló al inicio

¹⁹² *Actas CDC*, 9 de diciembre de 1968, pp. 1661-2, AGU, Montevideo. Fueron designados Juan José Crottogini, Carlos Quijano, el estudiante de Agronomía José Samalvide y Washington Buño. Los tres docentes elegidos habían participado en la primera etapa del CONICYT: los dos primeros integrando su Directorio y el último, Buño, integrando comisiones *Actas CDC*, 26 de febrero de 1969, AGU, Montevideo

del capítulo, las relaciones entre la Udelar y el poder político no fue lineal y hubo instancias de colaboración. De eso trata el siguiente apartado.

2. La Universidad y la CIDE, o crónica de una colaboración discreta

En la primera mitad de los años sesenta, a instancias del programa de asistencia del Gobierno estadounidense Alianza para el Progreso, se crearon órganos de planificación en distintos países de América Latina. Lanzada en marzo de 1961 por el presidente John F. Kennedy como parte de su estrategia para contener la amenaza del comunismo después de la Revolución cubana, la AFP fue formalizada varios meses después en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES). Allí los representantes de los países miembros de la OEA, con la excepción de Cuba, firmaron un documento conocido como la Carta de Punta del Este —que toma su nombre del balneario uruguayo que fue sede del encuentro— en el que se comprometían a implementar medidas para mejorar las condiciones de vida del continente a cambio de la cooperación técnica y financiera de EEUU.¹⁹³ En Uruguay, un año antes, el Gobierno encabezado por el Partido Nacional había creado la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en la órbita del Poder Ejecutivo con el propósito de “formular planes orgánicos de desarrollo económico”, procurar financiamiento interno y externo y vigilar la puesta en práctica de los planes que se aprobaran. En el nuevo escenario que se abría a nivel regional, se propuso revitalizar este organismo, intensificando los contactos con el país del norte y los organismos internacionales.¹⁹⁴

En un conocido trabajo sobre la experiencia de la planificación en Uruguay, el investigador Adolfo Garcé ha señalado con acierto que las condiciones que hicieron posible el desarrollo de la CIDE se debieron a la convergencia de dos factores ya mencionados: la llegada al Gobierno del Partido Nacional en 1959, que aspiraba a

¹⁹³ Acuerdo firmado en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), realizada del 5 al 17 de agosto de 1961 en Punta del Este, Uruguay. Ver “Carta de Punta del Este, establecimiento de la Alianza para el Progreso dentro del marco de la Operación Panamericana”, agosto de 1961 *Alianza para el progreso. Documentos Básicos* (Punta del Este: [s.n.], 1961), p. 57 Disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8789.html>

¹⁹⁴ *RNLD*, 27 de enero de 1960, tomo I, pp. 146-148. Garcé, Adolfo, *Ibíd*, Camou, María, Moraes, María Inés, “Desarrollo reciente de la historia económica en el Uruguay” *Documentos de trabajo* n.º 40, (mayo 2000). Udelar/FCS/Unidad Multidisciplinaria

imponer una agenda propia e impulsar políticas activas, para lo cual le urgía acceder al financiamiento externo, y el viraje en la política exterior estadounidense que propició la implementación de varios programas de asistencia y puso a disposición cuantiosos recursos con la condición de establecer mecanismos de planificación. También según Garcé, esta confluencia explica en buena medida la aparente paradoja de que las nuevas autoridades nacionales se inclinaron por la liberalización de la economía al mismo tiempo que impulsaban el planeamiento del desarrollo económico.

En 1962 fueron designados los técnicos del Grupo Asesor de Planeamiento (GAP).¹⁹⁵ El ministro de Hacienda, Eduardo Azzini, nombró al contador Iglesias para ocupar la Secretaría Técnica de la CIDE. Iglesias era docente e investigador del Instituto de Teoría y Política Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y una figura de prestigio en el ámbito académico y en el privado. Había formado parte del equipo que dirigía Luis Faroppa, director de aquel instituto, pionero en la difusión del estructuralismo cepalino y promotor de la incorporación de las nuevas modalidades de producción académica en economía. Con la conducción de Iglesias, la CIDE inició un inédito esfuerzo de investigación que movilizó durante cinco años a la mayor parte de la masa crítica disponible en el país, reclutando de la única universidad existente cerca de 300 técnicos; profesionales acreditados o estudiantes avanzados, con disímiles trayectorias académicas y procedencias político-ideológicas.¹⁹⁶

A diferencia de lo que ocurrió con el Conicyt, en esta oportunidad no hubo cuestionamientos por parte de la Universidad, que en una primera etapa cooperó de manera discreta pero sostenida y fructífera. La puesta en funcionamiento de la CIDE fue recibida con expectativa y entusiasmo por parte de algunos espacios de investigación y formación universitarios así como de los investigadores que en ellos se desempeñaban y que terminaron por incorporarse a sus filas. ¿Cómo se explica esa diferente actitud en un contexto de progresivo endurecimiento de las relaciones entre la Universidad y el poder político? Más aún, ¿cómo explicar la ausencia de cuestionamientos en el seno del

¹⁹⁵ Ver Sánchez Araya, Rolando. *Uruguay. Planeamiento educativo-* noviembre diciembre de 1966) París, Unesco, enero de 1967. Garcé, A. “Economistas y políticas en Uruguay (1932-2004)” *Quantum*, vol. 4, n.º 1 (junio 2009), Camou, María Moraes, María Inés. “Desarrollo reciente de la historia económica en el Uruguay” *Documentos de trabajo* n.º 40, (mayo de 2000). Udelar/FCS/Unidad Multidisciplinaria. Garcé, A., *Ideas y competencia política*. Bértola, Luis (coord.). *50 años de historia de la OPP* (Montevideo: Fin de Siglo, 2018), pp. 58-59

¹⁹⁶ Iglesias, Enrique, *Uruguay: una propuesta de cambio. Introducción al plan nacional de desarrollo económico y social* (Montevideo: Alfa, 1966), p. 13, Camou, María, Moraes, María Inés. *op. cit.*, p. 13

colectivo universitario a una creación institucional que por su vinculación con la AFP podía ser denunciada como parte de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos locales? Sin duda, más de un factor incidió en ello.

Tal vez uno de los más evidentes remite a la generalización de la preocupación por la cuestión del desarrollo que se produjo en amplios sectores, tanto del ámbito universitario como político. La expectativa que despertó el desarrollismo en sus diversas variantes se comprende más cabalmente si este es entendido como “un espíritu generalizado antes que un grupo ideológico particular”, en la formulación de Carlos Altamirano. Trascendió así a la escuela de pensamiento económico que le dio origen, moldeando un clima de época y permeando a distintas capas políticas e intelectuales.¹⁹⁷ Recordemos que este término, al igual que la idea del desarrollo, desde su introducción a mediados de los años cincuenta en la esfera de la política cotidiana, ejerció una influencia gravitante en el continente gracias a los múltiples focos de irradiación intelectual y política a los que se sumó un conjunto de instituciones de carácter regional e internacional, destacando la pujante Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada por las Naciones Unidas en 1948.¹⁹⁸ En ese entorno, tuvieron especial impacto las ideas del economista argentino Raúl Prebisch, que aportó un cuerpo analítico aplicable a las condiciones históricas específicas de América Latina. Su esquema centro-periferia constituyó una de sus contribuciones más potentes para explicar la desigual configuración de la economía mundial y el lugar que ocupaba la región en ella debido al deterioro de los términos de intercambio entre países periféricos y países centrales. Muchos años después, Tulio Halperín Donghi resumía la proyección que alcanzó la CEPAL y su mentor Prebisch:

el séquito que reunió en la CEPAL [la] inspiración y magisterio [de Prebisch] iba a encontrar en ambos una doble validación para la empresa a los que los había convocado; por una parte con ella retomaban una ilustre tradición intelectual que no podía ser más raigalmente iberoamericana, por otra se constituían en protagonistas del esfuerzo por dotar a quienes aspiraban a constituirse en voceros de América latina de la competencia científica y técnica que haría de ellos participantes de pleno derecho en el

¹⁹⁷ Altamirano, C. “Desarrollo y Desarrollistas” *Prismas, Revista de historia intelectual*, 2, (1998) p. 79

¹⁹⁸ Halperín Donghi, T. “La CEPAL en su contexto histórico”, *Revista de la CEPAL*, n.º 94 (abril de 2008), pp. 7-27

proceso de avance de las ciencias sociales, del que habían sido por demasiado tiempo distantes espectadores.¹⁹⁹

La referencia de Halperin articula la influencia de CEPAL con el cambiante panorama de las ciencias sociales latinoamericanas en el medio siglo XX, cuando, influidas por las teorías de la modernización y del estructural-funcionalismo estadounidense, experimentaron profundas innovaciones en sus objetivos, enfoques y métodos. En Uruguay, tanto la sociología como la economía, pese a que todavía estaban en una etapa muy incipiente de su desarrollo, recibieron el impacto de estas transformaciones de carácter global e iniciaron el camino hacia su profesionalización. Salvo alguna excepción como los Equipos del Bien Común —ámbito laico asociado al humanismo cristiano que fue preámbulo del Claeh—, el espacio natural de formación y producción de las disciplinas sociales en el país fue la Universidad de la República. Con distintos grados de afianzamiento, estas se constituyeron en un polo de reflexión y expansión de las ideas del desarrollo y la planificación en ese ámbito y más tarde pasaron a ser las proveedoras de técnicos para la CIDE.²⁰⁰ Los sociólogos Isaac Ganón y Aldo Solari en el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho o los economistas Luis Faroppa, Israel Wonssewer y el propio Iglesias en el Instituto de Teoría y Política Económica de la Facultad de Ciencias Económicas fueron algunas de las figuras que postularon la necesidad de incorporar las nuevas perspectivas teóricas y herramientas metodológicas al estudio de los problemas concretos de la realidad uruguaya.

Resulta claro que la imbricación de ambos procesos —la modernización de las ciencias sociales y la puesta en marcha CIDE— contribuyó a instalar de lleno el problema del desarrollo y los beneficios de la planificación en la agenda pública —también en la universitaria— en un momento de búsqueda de soluciones ante la inédita crisis económica. Dicho de otro modo, se conjugaron la confianza en la producción de un conocimiento específico sobre lo social que se postulaba científico y la legitimidad que otorgaba el nuevo organismo técnico, que a su vez permitía aplicar los nuevos enfoques y métodos de análisis. Asimismo, la planificación se mostraba como una

¹⁹⁹ *Ibíd.*

²⁰⁰ Bittencourt, Gustavo, Galván, Estefanía, Moreira, Cecilia y Vázquez, Daniela. “La planificación en el contexto de las estrategias de la posguerra y la experiencia de la CIDE”. En Alemany, Cecilia, López, Andrés (Coord.) *Enrique V. Iglesias. Intuición y ética en la construcción de Futuro* (Montevideo: Red Mercosur de Investigaciones Económicas, 2012), p. 80

herramienta eficaz para introducir racionalidad a un Estado entonces fuertemente cuestionado por su ineficiencia y la persistencia de viejas prácticas clientelísticas.

En el ámbito universitario un grupo de docentes mayormente provenientes de esas disciplinas, afines al reformismo y que habían apoyado los cambios en la Ley Orgánica de 1958, impulsaron la apertura a estos nuevos campos de estudio, propiciando condiciones adecuadas para su desarrollo. El avance de la investigación empírica y la formación de expertos para colaborar con el Estado, pensaban, permitirían que la institución asumiera un papel activo en la resolución de los problemas sociales. Al mismo tiempo, ese cuerpo de ideas y las herramientas de análisis debían ponerse al servicio de la transformación de las estructuras universitarias.

Las autoridades de la Universidad, en particular el rector Cassinoni, fueron receptivas a estos planteos. Así lo demuestra el apoyo que recibió en 1959 el primer registro de estudiantes mediante técnicas censales, realizado bajo la dirección de Isaac Ganón con el asesoramiento técnico de la Unesco. El censo, que respondía a la necesidad de poner en cifras la situación de la Universidad, ofreció un conjunto de información sistematizada sobre la población estudiantil que más tarde constituyó la base empírica del informe sobre la situación universitaria de la CIDE.²⁰¹ En forma paralela a estos procesos, el decano de Ciencias Económicas, Israel Wonsewer, impulsaba en el CDC una serie de medidas de racionalización de la gestión universitaria, que contemplaba la elaboración de datos y estadísticas y la profesionalización de los recursos humanos como parte del ineludible proceso de reestructuración académica de la institución. A casi medio siglo de la Reforma de la Universidad de Córdoba sus objetivos se habían vuelto anacrónicos y, por tanto, inadecuados para los desafíos de la hora, decía Wonsewer. Era el momento de adaptar la Universidad a una “sociedad moderna y no a lo que los sociólogos llaman sociedad tradicional”. De hecho, los problemas de la institución se originaban en su “propia estructura interna”, y en su administración lenta e ineficiente. Desde este lugar tanto la economía como la sociología tenían mucho para aportar.²⁰²

Wonsewer (1918-1997) se convirtió en una figura clave en los ámbitos decisorios de la Universidad, donde fungió como adalid de las disciplinas sociales y de la aplicación

²⁰¹ Universidad de la República. Facultad de Derecho y ciencias Sociales. Instituto de Ciencias Sociales. *Registro Universitario. 1960*, p. I.

²⁰² *Actas CDC*, 25 de abril de 1962, p. 409

de sus métodos y herramientas. De origen polaco y emigrado a Uruguay en su niñez, egresó de la Facultad de Ciencias Económicas en 1948, viajó a Europa y realizó estudios de posgrado en la Escuela de Economía de Londres. A su regreso comenzó una vasta carrera en la Universidad. Fue docente de Teoría Económica (1951-1974) e investigador en el Instituto de Teoría y Política Económica (1951 y 1959) dirigido por Faroppa. Participó, además, como delegado del orden docente en la Asamblea General del Claustro Universitario que redactó el anteproyecto de la Ley Orgánica de 1958. En sus viajes por Europa y Estados Unidos tomó contacto con centros académicos que se reconocían de primer nivel. Por ejemplo, visitó las universidades de Harvard, Yale, Columbia, Chicago, Berkeley, Stanford, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), algunos otros institutos de investigación y las fundaciones Ford y Rockefeller, a las que en distintas instancias propuso solicitar apoyo técnico y financiero para sostener el plan de transformaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) que llevaría a cabo en la década siguiente.²⁰³ Fue electo decano en 1960, cargo que ejerció por dos períodos consecutivos (1960-1968). Durante su mandato promovió el desarrollo de la disciplina económica e impulsó una reconfiguración institucional tendiente a la separación entre la formación de contadores y economistas. En su juventud, y durante catorce años, había trabajado como taquígrafo del Consejo de la Facultad de Medicina, donde adquirió amplios conocimientos de los asuntos universitarios así como de sus aspectos administrativos. En esos años entabló “una profunda y fraternal amistad de toda la vida” con el futuro rector Cassinoni: “Lo conocí cuando recién terminaba la carrera de médico; tenía el 28 años y yo, diez años menos. Integrábamos generaciones diferentes a quienes los acontecimientos políticos y universitarios de una época dramática y turbulenta, habían unido en el pensamiento y la acción”, declaró años más tarde.²⁰⁴

Wonsewer se integró a comienzos de los años sesenta como representante de la Udelar a la Comisión Coordinadora de Entes de la Enseñanza, creada en 1962 a instancias del ministro de Instrucción Pública y Seguridad Social. Por esa misma época concurrió a Santiago de Chile para participar en la Conferencia sobre Educación y

²⁰³ Wonsewer, Israel. “Problemas de enseñanza e investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Exposición en el Consejo de la FCEA el 14 de setiembre de 1961”, FCEA, Montevideo, 1962. s.p.

²⁰⁴ Wonsewer, Israel. “Una etapa de la transformación de la Universidad: el rectorado de Mario A. Cassinoni”, en *Hoy es historia*, año II, n.ºs 9-10, junio-julio 1985, pp. 8-22

Desarrollo Económico y Social en América Latina, organizada por Unesco. En esa oportunidad Wonsewer destacó en el CDC la decisión del entonces ministro de elegir como representantes a idóneos en la materia, es decir, especialistas en educación —en este caso economistas y sociólogos— en lugar de “seguir con la rutina de nombrar políticos que prácticamente no entienden” de los problemas educativos.²⁰⁵ En esa línea, propuso la integración a la comitiva universitaria del sociólogo Aldo Solari, por su especialización en temas de sociología de la educación. Consideraba conveniente la participación de un economista y un sociólogo “para intervenir en los problemas técnicos, en los debates, y recoger una experiencia [...] invaluable en los aspectos de planeación y programación de la educación nacional”.²⁰⁶ En suma, valoró en los ámbitos donde se desempeñó la importancia del conocimiento especializado sobre lo social y promovió distintas formas de colaboración de los técnicos universitarios en ámbitos estatales.

La conferencia en Santiago ejerció una importante influencia tanto en Wonsewer como en Solari, que regresaron con ideas más firmes respecto a la relación entre educación y desarrollo y los beneficios de la planificación. Con esta influencia, el primero propuso en el seno del CDC la creación de una oficina técnica de planeamiento universitario, ubicada “al más alto nivel de la Universidad, al nivel de rectorado”, con el cometido de “planificar a largo plazo” el desarrollo de sus actividades. Consideraba que la misma podía tener un diseño sencillo pero debía reunir a un conjunto de técnicos “expertos en educación y en planeamiento de la educación, y que dediquen una parte importante de su tiempo en forma retribuida a estudiar y planificar las actividades de la universidad”. Esto suponía incorporar a educadores y sociólogos así como contar con el asesoramiento de expertos en economía, en estadística, en administración, en presupuesto, junto al “asesoramiento permanente de planificadores físicos”, un aspecto al que dio particular relevancia.²⁰⁷ Asimismo, valoraba la posibilidad recurrir a fuentes de financiamiento externa para su implementación:

puedo decir que el representante de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en el Uruguay, el Sr. Alberthal, estaría muy dispuesto y vería con mucha simpatía un esfuerzo en la planificación en el campo de la educación

²⁰⁵ *Actas CDC*, 25 de abril 1962, pp. 407-431

²⁰⁶ *Actas CDC*, 26 de febrero de 1962, pp. 112-117

²⁰⁷ *Actas CDC*, 25 de abril 1962, pp. 407-431

universitaria, y no sería muy difícil obtener técnicos de las Naciones Unidas que nos ayuden en las primeras etapas de este esfuerzo.²⁰⁸

Finalmente, en mayo de 1963, cuando la CIDE estaba en pleno funcionamiento, la Universidad aprobó la creación de su Oficina de Planeamiento.²⁰⁹ Ese mismo año, Domingo Carlevaro, quien luego asumiría como director, participó en el Curso de Capacitación en Planeamiento de la Educación organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes) y Unesco en Santiago de Chile, gracias al usufructo de una beca asignada a Uruguay, tramitada ante el Gobierno por el secretario ejecutivo de la CIDE, Enrique Iglesias.

A través de estos ejemplos queda consignado que al interior de la Universidad las ciencias sociales renovadas y, sobre todo, la idea de las ventajas de la planificación habían ganado amplio terreno, contribuyendo a amortiguar las posibles cuestionamientos al organismo técnico encabezado por Iglesias. A esto se agrega, los tempranos vínculos que el Instituto de Economía de la FCEA, a instancias de los docentes Faroppa, Iglesias y del propio decano Wonsewer, entabló con la Cepal, colaborando de manera activa con la formación de universitarios y de funcionarios de la administración pública en las modernas técnicas de la programación. En 1960, bajo los auspicios de la Universidad de la República, la Cepal y la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica (DOAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tuvo lugar la primera edición del Curso Intensivo de Capacitación para el Desarrollo Económico. Versiones similares se venían realizando desde tiempo atrás en Buenos Aires, Rio de Janeiro, Caracas, Santiago y otras ciudades latinoamericanas. El Poder Ejecutivo declaró esta iniciativa de interés nacional y designó un Comité Nacional de Selección integrado por el ministro de Hacienda, un representante de la Cepal y otro de la FCEA.²¹⁰ En esta ocasión fueron designados respectivamente como director y codirector de la Comisión Organizadora el economista argentino Pedro Méndive,

²⁰⁸ *Actas CDC*, 25 de abril 1962, p. 421

²⁰⁹ *Actas CDC*, 20 de mayo de 1963, pp. 586-589

²¹⁰ Ver Ministerio de Instrucción Pública. “*Curso intensivo de capacitación en problemas de desarrollo económico*” Caja n.º 696, carpeta n.º 9535. AGN, Montevideo

funcionario de Cepal desde 1951, y Enrique Iglesias en representación del Instituto de Teoría y Política Económica.²¹¹

El curso incluía seis materias básicas —Contabilidad social, Teoría y programación del desarrollo, Preparación y evaluación de proyectos, Financiamiento del desarrollo económico, Administración para la programación del desarrollo y Programación agrícola, materia especialmente incorporada para Uruguay “por su relevancia en el medio”— dictadas por expertos de la Cepal, todos ellos economistas de países de la región con amplia experiencia en ámbitos universitarios y estatales en sus países de origen. Se completaba la grilla con una serie de cursillos enfocados a la realidad económica y social nacional dictados por docentes y especialistas uruguayos. Esta primera experiencia, en la que participaron 76 funcionarios de distintas reparticiones públicas, fue evaluada como un éxito por sus organizadores que expresaron que la contribución a la “mejor preparación técnica” de quienes están al frente de la “ejecución de las políticas económicas del Estado, constituyen la mejor colaboración que los organismos especializados de las Naciones Unidas y la Universidad de la República pueden prestar al progreso efectivo del país”.²¹²

Por estos cursos pasaron funcionarios de la administración, docentes y estudiantes universitarios que luego se incorporaron a los grupos de trabajos, dirigidos por los expertos extranjeros del GAP.²¹³ Entre 1962 y 1963 estos se abocaron a la recolección, sistematización de información y a la elaboración de los diagnósticos en las distintas áreas de interés económico y social, se estimó por primera vez el PBI de Uruguay, se elaboraron las cuentas nacionales y se realizó el segundo censo de población y viviendas. Como resultado, en mayo de 1963 se presentó el *Estudio Económico del Uruguay*, un diagnóstico de la situación del país, que causó un fuerte impacto en ámbitos políticos y sociales. A partir de 1964 el Gobierno encomendó a la CIDE la preparación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que contemplaba una

²¹¹ Méndive fue director general de Estadística e investigaciones económicas, Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires. También se desempeñó como profesor de Economía y Bancos del Instituto Tecnológico del Sur

²¹² 24 de febrero de 1961. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Expediente: “Remite copia de informes relacionadas con el Curso de Capacitación en Problemas de Desarrollo Económico”. Caja n.º 696, carpeta n.º 9535, AGN, Montevideo

²¹³ Entre ellos se destacaron Danilo Astori, Mario Bucheli, Ariel Davrieux, José Santías, Raúl Trajtenberg y Ramón Oxman, por mencionar algunos. “CIDE.- Remite condiciones para participar en el Quinto Curso de capacitación intensiva en Desarrollo Económico y Social a realizarse desde agosto a noviembre de 1966”, 20 de mayo de 1966. Caja n.º 696, carpeta n.º 9535, AGN, Montevideo

propuesta de reformas estructurales: agraria, tributaria, financiera, industrial, comercial y financiera.

A lo largo de estos años los universitarios que pasaron a trabajar en este emprendimiento, incluido Iglesias, lo hicieron en régimen de comisión de servicio (reglamentación que permite el pasaje de funcionarios públicos de un organismo estatal a otro). Sin embargo, no existen registros de que estas designaciones hayan sido puestas a consideración de las autoridades centrales de la Universidad de la República. Según testimonio de Iglesias, la Facultad de Ciencias Económicas facilitó su pasaje a la CIDE sin la pérdida de su cargo docente.²¹⁴ Es altamente probable que para eso hayan sido decisivas las gestiones del decano Wonsewer. En parte, el hecho de que un contingente relevante de universitarios participara en este emprendimiento sin levantar objeciones estuvo vinculado a que la CIDE logró mantenerse despegado de la asociación con la AFP. De este modo quedó a resguardo en términos generales de los más acérrimos cuestionamientos antiimperialistas. Estos se volvieron cada vez más frecuentes y radicales a partir de mediados de los años sesenta, tras la decisión del Gobierno uruguayo de romper relaciones exteriores con Cuba y, sobre todo, de la invasión estadounidense a República Dominicana en 1965. Entre tanto, hubo un claro esfuerzo de quienes condujeron la CIDE por mantener una actitud y un posicionamiento neutral y marcadamente técnico. Su composición, con renombrados técnicos de distintas generaciones y tradiciones, ayudó a consolidar esta imagen.²¹⁵ Favoreció este deslinde la ausencia todavía en esta etapa de un posicionamiento decididamente hostil por parte de la FEUU que, en cambio, se había pronunciado y movilizó, junto con el movimiento sindical y distintas fuerzas de izquierda, en oposición a la conferencia en Punta del Este y la AFP. Si bien la gremial estudiantil, como se señaló, estaba experimentando realineamientos en su correlación de fuerzas como consecuencia del proceso cubano, la línea “blanda” en los términos del historiador Van Aken aún mantenía suficiente poder y moderaba las tendencias más confrontativas que paulatinamente iban cobrando mayor peso.²¹⁶

²¹⁴ Ver Garcé, A. *Ideas y competencia política en Uruguay*; Entrevista a Enrique Iglesias en: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. *70 aniversario de su creación legal. 1932 -13 de julio- 2002* (Montevideo: FCEA; EBO, 2002), pp. 163-5

²¹⁵ *Ibíd*

²¹⁶ Van Aken, M. *op.cit.*

Uruguay se caracterizó a lo largo del siglo XX por su vocación panamericana y pro estadounidense. Aún después del abandono de las políticas de “buena vecindad”, mantuvo su alineación con el sistema interamericano de la Guerra Fría. Sin embargo, la reorientación de la estrategia exterior de EEUU hacia América Latina fue generando creciente descontento en ámbitos políticos e intelectuales así como no pocos desentendimientos en sectores que, como el batllismo, habían sido tradicionalmente cercanos a ese país.²¹⁷ En ese marco, la diplomacia estadounidense se afanó denodadamente en mejorar su imagen pública. A lo largo del período que nos ocupa, se mostró muy atenta a los acontecimientos universitarios y sostuvo frecuentemente reuniones tanto con representantes políticos e intelectuales de derechas como de sectores que consideraban moderados, entre ellos estudiantes y docentes, y más propensos a dialogar. Su interés radicaba, como se afirmaba en sus documentos, en el reconocimiento del poder “considerable” que ejercía la FEUU en la política universitaria y, en consecuencia, de su capacidad de incidir en el estudio de proyectos de asistencia a la Universidad provenientes del gobierno estadounidense. Así, por ejemplo, en 1964 se registraron un par de encuentros con dirigentes estudiantiles de la izquierda no comunista. Uno de ellos tuvo lugar en la casa del historiador Van Aken, becario de la Fulbright, con la participación de varios líderes de la FEUU, el exdirigente escribano Vicente Cremanti, el “coordinador de la juventud” de la Embajada de EEUU y del embajador de ese país en Montevideo, con el propósito de conversar sobre asuntos concernientes a la AFP, los programas de cooperación con la Universidad y la política estadounidense en América Latina. Los representantes diplomáticos esperaban, mediante “estas reuniones informales”, quebrar “los prejuicios que los comunistas han fomentado entre los estudiantes y particularmente en el liderazgo de FEUU”.²¹⁸ En esta etapa de recopilación de datos y elaboración de diagnósticos, la relativa flexibilidad de la FEUU fue otro de los factores que facilitaron el ambiente de colaboración que se produjo entre la CIDE y la Universidad.

Este clima de relativa armonía, fruto del espíritu desarrollista compartido y de la ausencia de una oposición abierta del movimiento estudiantil, encontró sus límites luego

²¹⁷ Ver Marchesi, Aldo; Markarian, V. “Uruguay en el mundo” En Caetano, Gerardo (Dir.) *Uruguay. En busca del desarrollo entre el autoritarismo y la democracia* (Montevideo: Planeta, 2016) pp.113-155

²¹⁸ Informe semanal de la Embajada de EEUU en Montevideo al Departamento de Estado. Asunto: Reunión entre el embajador y líderes estudiantiles universitarios. 1º. De mayo de 1964. NARA. RG59.SNF.1964-1966. PD.BOX 2790

de que la Secretaría Técnica de la CIDE entregara, en octubre de 1965, los planes de desarrollo por sector. En el ámbito universitario se alzaron varias voces cuestionando las conclusiones sobre la situación de la educación y las propuestas de solución contenidas en el *Informe de Educación*, en particular las vinculadas al capítulo universitario. Vale decir que su presentación coincidía con el escándalo provocado por las denuncias del denominado Proyecto Camelot; una investigación social destinada a analizar la protesta social en Chile, financiada por el ejército y el Departamento de Defensa de EEUU. Se fue produciendo entonces un cambio en la interna del movimiento estudiantil, que radicalizó sus posiciones antiimperialistas a raíz del desplazamiento de los grupos más moderados de la conducción de la FEUU por parte de una alianza entre socialistas y comunistas. Ese mismo año, bajo la estela del Proyecto Camelot, se produjeron las primeras polémicas que pusieron en cuestión la recepción de fondos externos para la investigación científica hasta ese momento de trámite frecuente en la Universidad, recrudeciendo la retórica antiimperialista de algunos actores universitarios.

La crisis de la educación superior como telón de fondo y el *Informe de Educación de la CIDE*

Iniciando los años sesenta el sistema educativo uruguayo había empezado a manifestar los impactos de la aguda crisis económica, social y política que se venía incubando desde mediados de los cincuenta. Se hicieron evidentes entonces los problemas que acuciaban cada vez más agudamente a la Universidad: el incremento exponencial de la matrícula y la incapacidad del sistema para cubrir la creciente demanda, la excesiva duración de las carreras, los altos niveles de deserción y el bajo nivel de egresos así como la preferencia de los estudiantes por las carreras de Derecho y Medicina (que concentraban el 56 % del alumnado) y no por aquellas ligadas a las áreas productivas. Esta situación, no obstante, no obedecía únicamente a factores domésticos sino que respondía a una tendencia global y regional. Según datos de Carmen García Guardilla, desde la segunda mitad del siglo XX el número de estudiantes matriculados en el mundo se multiplicó por más de seis. También las universidades latinoamericanas,

aunque de manera desigual según los países, crecieron y se diversificaron en estos años.²¹⁹

Uruguay, único país de América Latina con una sola universidad pública, según estimaciones de París y Oddone, pasó de 4.800 estudiantes en 1939 a 17.108 en 1957 (256 %).²²⁰ Aunque los autores previenen sobre la exactitud de estas cifras a causa de la falta de datos para el período, estas dan una idea del incremento experimentado. La tendencia se mantuvo en los años siguientes y entre 1961 y 1968 el crecimiento fue de un 22 %. Se calcula además que los ingresos aumentaron un 54 % de 1955 a 1966. En 1972 la Universidad de la República había alcanzado los 28.453 alumnos.²²¹ Como en otros países de la región, la masificación estudiantil trajo aparejadas una serie de problemas entre los que destacaron las insuficiencias locativas y del cuerpo docente y la carencia de recursos para atender la creciente demanda. En 1962, *Gaceta de la Universidad* advertía con preocupación sobre el “agudísimo problema de ubicación y de administración de una correcta enseñanza. Todos los locales son exiguos e inapropiados”. El artículo ejemplificaba con el “sorpresivo” aumento de la población estudiantil de la Escuela de Bellas Artes que había ascendido de 300 a 800 estudiantes con una inscripción de 510 nuevos alumnos. También la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales registró “1000 nuevos inscriptos [que] colmarán al extremo los locales que ya en estos últimos años eran inadecuados, a lo cual se suman 325 de Ciencias Económicas que ocupan el mismo edificio”.²²² La situación se volvía más acuciante en un contexto de drástica contracción del gasto de educación en el presupuesto general del Estado, provocando un serio resentimiento de las actividades

²¹⁹ García Guardilla, Carmen (ed.). *Pensadores y forjadores de la universidad latinoamericana*. (Caracas: Cedes, Iesalc-Unesco, 2008), p. 24. Algunos ejemplos pueden resultar ilustrativos: Chile aumentó su población universitaria de 9.528 a 78.430 entre 1949 y 1970 (723 %), Brasil de 30.000 a 142.000 entre 1945 y 1964 (373 %) y un 1000 % en el período de 1964 a 1984 (entre universidades públicas y privadas). Unesco. *Statistical Yearbook 1970*. (París: Unesco, 1971) tomado de: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/25613/18Desarrollo%20y%20educacionT2cap8.pdf>. Consulta mayo 2013. Los datos de Brasil fueron extraídos de Motta, Rodrigo Patto Sá. *As universidades e o régimen militar*, p. 249 Para Argentina, Pablo Buchbinder fecha el comienzo de la masificación en la segunda posguerra. Entre 1945 y 1960 el alumnado pasó de 47.400 a aproximadamente 160.000 (241 % de crecimiento). La cifra trepó a los 333.000 (un crecimiento de 108 %) en los años que van de 1960 a 1972. Buchbinder, Pablo. “Los sistemas universitarios de Argentina y Brasil: una perspectiva histórica y comparada de su evolución desde mediados del siglo XX”, p. 15

²²⁰ Datos extraídos de Oddone, J. A. y París, B. *La Universidad uruguaya desde el militarismo a la crisis, 1885-1958*, vol. I, p. 254.

²²¹ Porcentajes calculados en base a cifras contenidas en 'Plan Maggiolo'. Ver Markarian, V. “Apogeo y crisis del reformismo universitario...” pp. 92-3 Ver también: Censo de Estudiantes de 1968; Los datos correspondientes a 1972 son aportados por Nahum, B. y otros, *op. cit.*, p. 174

²²² *Gaceta de la Universidad*. 20, (julio 1962), p. 2

del sistema educativo en todos sus niveles y, como consecuencia, el incremento de las movilizaciones en reclamo de mayores recursos.²²³

Ante esta situación, desde distintas tiendas, por izquierda y por derecha, arreciaron las críticas al estado de la enseñanza, incluida la universitaria, que se percibía deficitaria en relación con los requerimientos de la “modernización”. Así, por ejemplo, el semanario de izquierda independiente *Marcha* hacía su propio diagnóstico del estado educativo en el país haciendo notar que

Carecemos de técnicos; la enseñanza de las escuelas rurales es verbosa y superficial; secundaria hace bachilleres, no forma hombres ni da [a] los que pasan por ella los cimientos de una cultura; el profesionalismo domina en la Universidad y las tareas de investigación tienen un ámbito muy reducido. [...] Acostumbramos a los jóvenes y esa costumbre los acompañará después hasta la muerte, a la facilidad y al menor esfuerzo. A pretexto de generalización hemos cerrado las puertas a la selección. Confundimos gratuidad con igualdad. Establecida la primera, creímos asegurada la segunda. Nuestra enseñanza, en fin, no es humanista, tampoco científica. Ni cultura profunda ni especialización técnica.²²⁴

Concluía con una idea que iba a generalizarse en estos años: la gratuidad no era condición suficiente para lograr la efectiva democratización que se perseguía.²²⁵ Y agregaba: el sistema de enseñanza era anacrónico e inadecuado a las necesidades del desarrollo del país.

Por su parte, el diario conservador *El Día*, que representaba al sector del Partido Colorado vinculado a los hermanos Batlle Pacheco, opositor a Luis Batlle, también se sumó al coro de voces que cuestionaba la situación educativa y en particular de la Universidad que, en su opinión, no cumplía un papel activo en la resolución de los problemas nacionales. Las críticas iban a dos puntas. Por un lado, a la propia institución por su falta de involucramiento: “La universidad permanece al margen de importantes rubros de acción educadora, realizadora e investigadora en el progreso de la República”.²²⁶ Por otro, al Gobierno del Partido Nacional, que no la convocaba justo en el momento que daba inicio a un proceso de planificación a nivel nacional, menospreciando sus funciones.

²²³ Nahum, B. y otros, *op. cit.*, p. 174

²²⁴ *Marcha*, 12 de mayo 1961, p. 5 “El país de ‘M’hijo el doctor’”, editorial

²²⁵ *Marcha*, 30 junio de 1961, pp. 5-6

²²⁶ *El Día*, 29 de abril de 1961, p. 7

En los planes agropecuarios en desarrollo no se tuvo nada en cuenta a las Facultades de Agronomía, de Veterinaria y de Química y Farmacia. Es inexplicable que no se les haya dado una importante participación, ya que sus funciones docentes, experimentales y forjadoras de técnicos, las sitúan en condiciones de privilegio para servir con eficiencia al perfeccionamiento de todas las actividades agropecuarias.²²⁷

El Día, por su parte, ponía el acento en la formación de técnicos especializados en las actividades agropecuarias, fuentes de la riqueza nacional. La idea estaba lejos de ser novedosa, pero se reactualizaba en un contexto de estancamiento del sector agropecuario e impregnada del lenguaje desarrollista y tecnocrático ponía énfasis en el perfil utilitarista y, sobre todo, productivista de la educación en general y de la Universidad en particular. Se anunciaba así cuál debía ser a su entender la función social de la casa de estudios: producir profesionales capaces de contribuir “a la prosperidad y progreso de actividades rurales”. Para ello, según *El Día*, la enseñanza debía ser más práctica y menos teórica; también una tensión que no era nueva pero que en estos años se reeditó con fuerza marcando la tónica de los debates educativos. Finalizaba afirmando que el Partido Colorado, en la oposición o en el Gobierno, lucharía por construir una “Universidad constructiva dinámica y atareada sin pausa en el perfeccionamiento de todas las actividades que desarrolle o pueda desarrollar el Uruguay”.²²⁸

Con distintos énfasis, las dificultades que atravesaba la enseñanza universitaria y la necesidad de transformaciones académicas habían sido advertidas tempranamente por buena parte de la comunidad universitaria, especialmente el núcleo reformista, al mismo tiempo que empezaban a ser, al compás de la modernización de las ciencias sociales, objeto de reflexión académica. La investigación empírica que se desarrolló en ámbitos universitarios, que precedió a los trabajos de la CIDE, buscó identificar y cuantificar cuáles eran los principales problemas que afectaban a la educación uruguaya, en particular la universitaria, para tentar alternativas que la pusieran a tono con las expectativas de desarrollo.

El citado *Registro Universitario*, realizado desde el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho bajo la dirección de Isaac Ganón, y los pioneros trabajos de

²²⁷ *El Día*, 7 de abril de 1961, p. 7 y 10 de abril de 1961, p. 7

²²⁸ *El Día*, 29 de abril de 1961, p. 7

Aldo Solari (1922-1989), sociólogo fuertemente influenciado por la sociología de la modernización y el estructural-funcionalismo, formaron parte de los pioneros esfuerzos por explicar la realidad educativa uruguaya.²²⁹ La ciencia económica no se quedó atrás, y en ese período comenzó a desarrollarse una línea de investigación que intentó examinar las vinculaciones entre desarrollo económico y educación. La monografía de Danilo Astori, Alberto Couriel, Juan José Santías y Ricardo Zerbino, en sintonía con las concepciones cepalinas, se propuso “tentar un análisis teórico de algunas vinculaciones entre la educación y el desarrollo económico y social, y estudiar algunos aspectos cuantitativos de la enseñanza primaria en el Uruguay en el período 1930-1960”. Combinando la elaboración teórica y el análisis empírico, dedicaron la primera parte a relacionar la “variable educación con algunas variables económicas representativas del desarrollo” y en la segunda se centraron en analizar en base a datos empíricos el vínculo entre “la situación educacional de la enseñanza primaria con la evolución, que a nuestro juicio, han tenido algunas variables económicas del país”.²³⁰

Desde el punto de vista de las acciones institucionales, no cabe duda que el censo de estudiantes, cuyos resultados se dieron a conocer en 1961, marcó un primer hito. La Universidad de la República hasta el momento no disponía de cifras o estadísticas que pudieran contribuir a la producción de diagnósticos y a la definición de una política universitaria que marcara prioridades y guiara sus actividades en base a una distribución más eficiente de sus recursos. Para su realización se acudió a experiencias similares en otras universidades y al asesoramiento de la Unesco, que designó para esta tarea al experto Jean Labbens, profesor de la Universidad Católica de Lyon. Por otra parte, su implementación posibilitó introducir las novedades metodológicas de las disciplinas sociales anglosajonas así como avanzar hacia la incorporación de las técnicas de la planificación en el seno de la institución universitaria.

La novedad de la experiencia despertó suspicacias en distintos medios periodísticos de cobertura nacional, particularmente en aquellos vinculados a los partidos tradicionales. Por un lado, aducían que las preguntas del cuestionario vulneraban la

²²⁹ Ver por ejemplo Solari, Aldo “Aproximaciones al problema de la educación y el desarrollo económico en el Uruguay”, *Anales del Instituto Profesores ‘Artigas’*, n.º 6, Montevideo 1961. Errandonea, Alfredo. “Historia Institucional de la Sociología” *Revista de Ciencias Sociales*, n.º 21 (2003), pp. 25-26

²³⁰ Couriel, Alberto, Santías, José, Astori, Danilo, Zerbino, Ricardo. *Vinculaciones entre educación y desarrollo económico y social*. (Montevideo: Udelar FCEA, 1963). [Monografía para obtener título de contador economista, director Luis Faroppa]

privacidad de las personas amparadas por los derechos individuales consagrados en la Constitución; por otro, ponían en entredicho las potestades de la casa de estudios para imponer a los estudiantes su obligatoriedad a cambio de sanciones.²³¹ *Gaceta de la Universidad* interpretó estos cuestionamientos como “una de las batallas más espectaculares de la guerra que mantiene cierta prensa contra la universidad”. No fue suficiente para acallar las críticas que los organizadores aclararan que esta técnica censal se inspiraba en las universidades de EEUU y seguía recomendaciones de la Unesco, en ningún caso pasibles de ser sospechados de comunistas. “Los descargos parecieron nimios a quienes interpretaban todo aquello como una prueba irrefutable de la opresión totalitaria y comunista que soportaba la Universidad”, concluía la *Gaceta*.²³² Y aunque en buena medida las denuncias en la prensa pueden ser explicadas como parte de los enfrentamientos entre la Universidad y el poder político, lo cierto es que también obedecían al profundo desconocimiento que existía en relación con el uso de estas técnicas.

El trabajo emprendido por el Instituto de Ciencias Sociales cubrió aspectos como la composición demográfica, la procedencia social y geográfica, la distribución por carrera, las condiciones de vida (alojamiento, trabajo, etc.) o sobre la distribución por sexo y por zona geográfica de la población estudiantil. Los resultados preliminares dejaron en evidencia el alto porcentaje de estudiantes universitarios en relación con la población total, lo que ubicaba a Uruguay en segundo lugar en América del Sur detrás de Argentina en ese indicador. Esta realidad que tomada en forma aislada era valorada de manera positiva, no lo era tanto cuando se consideraban otras variables como la desequilibrada proporción de estudiantes por carreras, los altos niveles de deserción y la excesiva duración de los estudios. Sobre el primer punto, los números reafirmaban algunas cuestionamientos que ya circulaban en medios académicos y periodísticos: 60 % del estudiantado se concentraba las carreras de Derecho, Medicina y Ciencias Económicas, mientras Veterinaria y Agronomía, fuertemente vinculadas a la economía del país, eran las que atraían menor cantidad de aspirantes. Solo un 9 % de jóvenes se orientaban hacia profesiones ligadas a las actividades primarias y secundarias.

²³¹ *El Día*, 2 y 10 de abril de 1960 [Editorial], *El País*, 25, 27, 28 y 29 de marzo, 1, 2 y 5 de abril de 1960. Carpeta de recortes de prensa en Unidad Polifuncional de Problemas Universitarios (UPPU), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHUCE)

²³² *Gaceta de la Universidad*, n.º 24, mayo de 1963

Asimismo, ponía en evidencia la duración de los estudios muy por encima de los tiempos estipulados en los planes, ocasionada por el alto porcentaje de estudiantes que trabajaban (el 34% de los jóvenes).²³³ Se sumaba a esta realidad el altísimo nivel de abandono estudiantil, que alcanzaba el primer año al 40% de los inscriptos por primera vez.

Aldo Solari fue lapidario en su interpretación de estos datos, cuestionando el papel social efectivo que desempeñaba la institución. Quedaba demostrado, decía, que el acceso a los estudios universitarios era “el fiel reflejo de la estructura social existente en el sentido de que son los grupos dominantes y aquellos para los cuales la Universidad representa la casi única esperanza de mantenerse en el estrato social al que sus padres pertenecen, los que pertenecen a ella”. Aún más, “la Universidad no es ese canal formidable de ascensión social que algunos imaginaron sobre la base de que era gratuita”. La educación universitaria constituía una salida “para ciertos grupos sociales, independientemente de los ingresos, porque está unida a ciertas aspiraciones, a ciertos juicios de valor sobre la jerarquía de las actividades, a ciertas normas de prestigio que solo se dan en ellos”, afirmaba el sociólogo.²³⁴

El censo, en suma, venía a confirmar una serie de percepciones extendidas en medios académicos, sociales y políticos, por izquierda o por derecha: existía un desajuste entre las necesidades del país y las exigencias del mundo moderno por un lado y los logros y realizaciones de la educación en todos sus niveles.

Se observa que la relación entre educación y desarrollo en sus distintas variantes se había instalado en el ámbito público aunque asumía intensidades y expectativas diferentes de acuerdo con los múltiples actores que la invocaban. En particular, y a cuenta de un análisis más detenido, digamos que la visión productivista y tecnocrática comenzaba a imponerse.

En medio de los crecientes cuestionamientos y reclamos a la Universidad, en 1963 se puso en funcionamiento el sector de Educación de la CIDE. Para ello se creó una Comisión Técnica encargada de realizar los diagnósticos y el plan educativo, a la que se integró un conjunto de investigadores y universitarios, en su mayoría economistas y sociólogos. Fueron contratados como asesores el sociólogo Aldo Solari y el economista

²³³ Universidad de la República, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias Sociales. *Registro Universitario 1960. Informe General Preliminar* (Montevideo: FD/ICS, 1961), p. 2

²³⁴ Aldo Solari en *Marcha*, 29 de diciembre de 1961

Alberto Couriel y, como coordinadores, Germán Rama y Ricardo Zerbino, también sociólogo y economista respectivamente. En representación del GAP se incorporó al equipo el chileno Rolando Sánchez Araya, funcionario de Unesco.²³⁵ Se ha destacado el amplio grado de autonomía que gozó esta comisión respecto a la Secretaría Técnica de la CIDE. Esta actuó al abrigo del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social y más específicamente, bajo la dependencia de la Comisión Coordinadora de Entes, una instancia de coordinación entre las cuatro ramas de la enseñanza pública (enseñanza primaria, secundaria y técnica y la Universidad de la República) y de estas con el Poder Ejecutivo. La Coordinadora de Entes había sido creada en marzo de ese año por iniciativa del ministro Pivel Devoto (1962-1967), quien a raíz de su participación en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en Santiago adhirió con entusiasmo a las ideas del desarrollo y de la planificación aplicadas al ámbito educativo. Aún bajo los efectos de las discusiones y asuntos abordados en Santiago de Chile, Pivel Devoto impulsó la conformación de la Comisión con el objetivo, entre otros, de facilitar las tareas de la CIDE en el sector.

Existía cierto acuerdo general entre los actores involucrados –representantes de los entes, el ministro y los técnicos- de que estructurar un plan educativo unificado necesariamente afectaba a las diversas áreas de la enseñanza y requería de un ambiente de colaboración entre ellas y con el equipo técnico. El diseño institucional del sistema educativo uruguayo, caracterizado por la amplia autonomía de los organismos de cada rama respecto al Poder Ejecutivo, podía convertirse en un freno para el desarrollo de los trabajos técnicos. En el caso de la Universidad esto se acentuaba ya que, regida por el estatuto orgánico aprobado en 1958, disponía de amplios márgenes de independencia en la definición de sus políticas educativas y en la elección de sus propias autoridades. Cada organismo tenía sus propias lógicas así como resistencias y apuestas distintas. Así lo insinuaba Sánchez Araya en su informe de actuación a Unesco, cuando explicaba que su contratación debió hacerse a través del GAP debido a razones de política interna: algunos organismos internacionales eran más resistidos por las distintas autoridades de

²³⁵ Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Comisión Coordinadora de los Entes de la Enseñanza. *Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay. Plan de Desarrollo Educativo* (Montevideo, Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1966), vol. 1, p. IX

la enseñanza y “en consecuencia, no convenía mezclarse con ellos para trabajar en el campo educacional”.²³⁶

El equipo de educación trabajó afanosamente a lo largo de tres años. En ese lapso brindó cursos básicos de planeamiento educativo a asesores, supervisores y directores de los consejos de enseñanza, de formación de maestros directores e inspectores de instituto de estudios magisteriales y participó en los cursos de verano que la Universidad de la República organizaba desde 1956. Simultáneamente, en 1964 y 1965 el mencionado Curso de Desarrollo Económico que brindaba la FCEA y la Cepal sumó una nueva materia sobre planeamiento educativo, dictada por los integrantes del equipo de expertos en educación. En esos años, finalmente, el *Informe sobre el Estado de la Educación* fue publicado en dos tomos por el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.²³⁷ El extenso documento proporcionó información sistematizada acerca del sistema educativo y actualizó la agenda de discusión a las nuevas temáticas orientadas a vincular la educación con la estrategia nacional de desarrollo.²³⁸

Mientras el primer volumen ofrece un diagnóstico general y por ramas, el segundo se concentra en los planes, incluyendo tanto objetivos y metas como una serie de medidas para alcanzarlos. A través de la CIDE y de sus técnicos se instaló, como afirma Lucas D’Avenia, el “desarrollismo en su vertiente política educativa”.²³⁹ De su lectura es fácil concluir que recogía los estudios que venían realizándose en los espacios académicos, en particular aquellos provenientes de la sociología de la educación y de la economía, liderados por Solari y el equipo de Couriel. En el caso de la Universidad, por otra parte, como reconocían sus autores, los datos empíricos tomaron como base el *Registro Universitario* de 1961 ya analizado. Asimismo, se asumía de forma explícita que el análisis sobre el sistema universitario era el más débil e incompleto, limitándose a señalar tendencias y a proponer líneas generales de políticas. Por esa misma razón, se

²³⁶ Sánchez Araya, Rolando. *Uruguay planeamiento educativo* (noviembre-diciembre de 1966). París, Unesco, enero de 1967, p. 3

²³⁷ Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Comisión Coordinadora de los Entes de la Enseñanza. *Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay. Plan de Desarrollo Educativo* (Montevideo, Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1966)

²³⁸ Ver trabajos ya citados de D’Avenia, Lucas. “La CIDE y el campo pedagógico uruguayo: actores, producción de conocimiento y agenda política” y “La irrupción de la cuestión del desarrollo en el campo educativo y su interpelación al campo pedagógico. El caso de la CIDE en Uruguay”

²³⁹ Un hecho similar ocurrió con el diagnóstico sobre el sector educación (1964) elaborado por el Consejo Nacional de Educación (Conade) creado en 1961 en Argentina. Ver Suasnábar, Claudio. *Universidad e Intelectuales: Educación y Política en la Argentina (1955-1976)*

planteaba que era necesario avanzar en un estudio “en profundidad de la universidad conjuntamente con un estudio de las necesidades de recursos humanos de nivel superior”.²⁴⁰

En términos generales y en línea con los postulados desarrollistas el estudio definía a la educación, fundamentalmente, por su contribución al desarrollo económico y social y por tanto como “una inversión en hombres, o si se prefiere, como un capital social básico”.²⁴¹ Se entiende así la preocupación manifiesta por la eficacia del sistema en términos de rendimiento (relación ingresos y egresos, deserción, etc.) y su relación con la metas del desarrollo.²⁴² Las formulaciones contenidas estuvieron revestidas de un significativo carácter economicista al articular o, más precisamente, subordinar el desarrollo educativo a las tareas más generales del desarrollo económico y social. Profundizaba así en los análisis de Solari, que unos años antes había sostenido que aún cuando la educación por sí misma no generaba el desarrollo, sí podía “dejar de obstaculizarlo y crear ciertos elementos necesarios para favorecerlo”. Consideraba, por tanto, imprescindible la reorientación de la política educativa, “la coordinación de los diferentes servicios, la redistribución de los recursos en función de esa política”, temas que luego fueron planteados en el Informe de la CIDE.²⁴³ Partiendo de estas premisas, identificó una agenda de problemas y alternativas e hizo hincapié en la necesidad de encarar un proceso de reforma educativa integral.

Específicamente en el ámbito de la educación superior el estudio planteó severas críticas a la Universidad de la República, destacando la necesidad de modernizar su estructura para adaptarla a los cambios del país y del mundo. Reconocía la amplia cobertura de la enseñanza universitaria pero remarcaba, como se dijo, la ineficiencia del sistema en relación los requerimientos del desarrollo económico y social. El bajo rendimiento era atribuido a la duración de las carreras superior a la fijada por los planes de estudio, la desequilibrada distribución de estudiantes por área, el alto nivel de deserción estudiantil y la baja representación pese a la gratuidad de los sectores de más

²⁴⁰ Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Comisión Coordinadora de los Entes de la Enseñanza. *Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay. Plan de Desarrollo Educativo*, t.I pp. 50 y 75.

²⁴¹ Citado por *Gaceta de la Universidad*, 38 (abril de 1966)

²⁴² Errandonea, A. *op. cit.*, p. 31

²⁴³ Solari, A., “Educación y desarrollo” en *Estudios sobre la sociedad uruguaya*, tomo II (Montevideo: Arca, s.f.), p. 82. El mismo texto fue publicado bajo el título “Aproximaciones al problema de la educación y el desarrollo económico en el Uruguay” en los *Anales del Instituto Profesores ‘Artigas’*, n.º 6, Montevideo 1961

bajos recursos; asuntos que habían sido analizados por el *Registro Universitario*.²⁴⁴ En un trabajo posterior, Solari avanzó aún más en los diagnósticos y concluyó de manera contundente que “la Universidad está moldeada profundamente por los grupos a quienes sirve”, es decir a “sectores de las clases medias” para quienes su estructura resultaba funcional. Los problemas apuntados, decía, no se originaban en la propia institución sino en la estructura social del país. No obstante, reflejaban “la indecisión en torno a una política educacional”, hasta el momento exclusivamente asentada en el valor de la gratuidad. Por ello, proponía “racionalizar el principio de gratuidad, como una condición para su plena y eficaz aplicación.”²⁴⁵ En esa misma dirección el Informe presentado por la CIDE incluía una serie de propuestas que incluía la selección del alumnado de enseñanza media, el establecimiento de normas para regularizar los estudios universitarios, la implementación de una política de becas para alumnos con menores recursos, el establecimiento de medidas de incentivo para reorientar a los jóvenes a elegir carreras científicas y tecnológicas y la creación de una Facultad de Educación.²⁴⁶

Las conclusiones de la CIDE no tuvieron una recepción unánime por parte de los actores involucrados en el proceso. Si bien contó con la aprobación del ministro Pivel Devoto, no fue ratificado por la Comisión Coordinadora de Entes, dejando ver discrepancias con sus contenidos. Digamos que durante su elaboración el vínculo entre el equipo técnico y los distintos consejos fue complejo y heterogéneo, dado, como se señaló, el grado de autonomía que cada uno de estos disponía; asunto que, por otra parte, el propio informe ponía en cuestión, al reclamar cambios en el diseño institucional que permitieran mayor coordinación del sistema.

En el caso de la Universidad de la República, pese al importante contingente de investigadores y docentes que formó parte del equipo de expertos, los análisis y diagnósticos fueron cuestionados por buena parte de la dirigencia universitaria. Las principales críticas provinieron de actores y sectores contrarios a la concepción que lo sustentaba, en un momento en que en ámbitos políticos y académicos comenzaba a

²⁴⁴ *Informe sobre el estado de la Educación en Uruguay* (1965). Un desarrollo más afinado de la situación universitaria puede consultarse en Solari, A., “La universidad en transición en una sociedad estancada: el caso del Uruguay”. *Aportes*, n.º 2, (1966), pp. 4-51

²⁴⁵ Ver Solari, A. E. “La Universidad en transición...” p. 18

²⁴⁶ Para un resumen de las propuestas incluidas en el plan de educación de la CIDE ver *Gaceta de la Universidad*, n.º 36, abril de 1966

manifestarse el desencanto con las posibilidades transformadoras del desarrollismo. *Gaceta de la Universidad* dedicó un número especial a “El polémico plan de educación” en el que ofrecía un resumen del plan “claro y accesible” así como “diferentes puntos de vista sobre sus contenidos y sus principales asuntos polémicos” procedentes de autoridades y personalidades universitarias. La línea editorial del periódico oficial de la Universidad destacaba por su parte los puntos fuertes del documento:

Al margen de la opinión que se pueda tener sobre las medidas concretas que el proyecto propone, y de los errores u omisiones que puedan ser localizados en su diagnóstico de la realidad universitaria actual no cabe duda de que es necesario modernizar la estructura de nuestra Universidad para mejor adaptarla al desafío de los cambios necesarios en este país en crisis. Tampoco cabe duda de que el informe de la CIDE aporta una valiosa recopilación y sistematización de informaciones dispersas sobre nuestro sistema educativo, que permiten enfocarlo en su conjunto y señalar sus tendencias predominantes y las líneas generales de transformaciones que es necesario operar para que su estructura no se divorcie de los imperativos del crecimiento económico nacional y de los grandes cambios sociales que el futuro anuncia.²⁴⁷

Para Maggiolo, uno de los críticos del *Informe*, éste presentaba “grandes virtudes” a la vez que “grandes defectos”. Entre sus virtudes destacaba su aporte a una visión global del sistema educativo elaborado con un criterio único y la reunión y sistematización de un conjunto de información estadística que hasta el momento era inexistente o se encontraba dispersa. Asimismo, admitía los beneficios de la planificación, “un hecho nuevo, que dará mucho que hablar”, y por ende el consecuente abandono de la improvisación para “construir el futuro”. Entre sus defectos señalaba el “exagerado énfasis en el aspecto profesionalista de la Universidad” y el descuido del tratamiento de los temas vinculados a la investigación científica y tecnológica, en su opinión una función primordial de esta institución. Maggiolo ratificaba una línea de pensamiento a la que suscribía la generación reformista sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo autónomo del país y el lugar central que tenía la Universidad en su fomento; temas fuertemente discutidos, como ya se dijo, en la interna universitaria.

En un artículo anterior publicado por *Marcha* había expresado su contundente rechazo a la “filosofía” que subyacía tras las propuestas del organismo técnico. En sus

²⁴⁷ Editorial de la *Gaceta de la Universidad*, n.º 38, p. 1

propias palabras: “para hablar con propiedad de desarrollo, hay que tener la mentalidad del desarrollo. La Alianza [para el progreso] y el FMI hablan siempre de desarrollo. Pero la mentalidad de sus ‘teóricos’ es colonialista”. Por tanto, las reformas inspiradas en esta concepción no podían sino estar encaminadas al logro de “objetivos filosóficamente equivocados”.²⁴⁸ De modo más específico, Maggiolo arremetió contra las medidas limitacionistas sugeridas que, en su visión, no resolverían la desequilibrada relación entre egresos e ingresos. En todo caso, advertía, “modificará el conjunto de los estudiantes dentro de los cuales se selecciona el bajo número de egresados, sin garantizar que estos aumenten”.²⁴⁹

Horacio Bazzano, estudiante de la Facultad Ciencias Económicas, secretario General de la FEUU y representante del orden estudiantil en el CDC, también criticó la “filosofía” desarrollista del informe. Más concretamente, expresaba sus discrepancias con las bases del “supuesto desarrollo” que impulsaban la CIDE y sus técnicos. Y aunque compartía el concepto de que la educación era un factor importante para el avance económico del país, expresaba su escepticismo ante un “plan que pretende el avance económico y social sin arrancar las trabas que imposibilitan ese avance, desconociendo los condicionantes fundamentales de la estructura económica y social: el imperialismo y el latifundio”. “No puede haber un desarrollo económico profundo sino hay sustitución de las clases sociales que detentan el poder”, concluía.²⁵⁰

A esas alturas, al interior de la FEUU, como se señaló, la alianza entre socialistas y comunistas iban ganando terreno a los terceristas y a los moderados a los que refería Van Aken, incidiendo en las posiciones de la gremial. Bazzano, que representaba a las tendencias comunistas, valoraba de manera positiva algunos cambios parciales propuestos como el estímulo a la mayor dedicación docente y a la investigación científica y tecnológica o la asignación de becas para estudiantes de secundaria con menores recursos. En cambio, rechazaba de plano cualquier medida “limitacionista” o “selectiva” para el ingreso a la Universidad. “La lucha contra el limitacionismo es una de las tradiciones del movimiento estudiantil que entendemos como más valiosas”, afirmaba. Al igual que Maggiolo criticaba el acento profesionalista que subestimaba así “las otras funciones que la universidad debe o debería cumplir”. Señalaba Bazzano que

²⁴⁸ *Marcha*, 28 de enero 1966, pp. 6-7 y p. 22

²⁴⁹ *Ibíd*

²⁵⁰ Ver *Gaceta de la Universidad*, n.º 36 (abril de 1966), pp. 8-9

la investigación científica, sobre todo aquella orientada a las ciencias básicas, no era tratada en profundidad, más allá de las referencias generales al respecto y, por ende, no era tomada en cuenta “para medir la eficiencia del ente”. El dirigente estudiantil reconocía, sin embargo, que el trabajo de la CIDE constituía un aporte al conocimiento de la “realidad nacional” que debía ser puesto al servicio del “pueblo, en la lucha por la progresiva transformación de la sociedad y la educación”.²⁵¹

Al mismo tiempo hubo expresiones de apoyo por parte de aquellos que elaboraron las primeras formulaciones respecto a la realidad de la institución en el marco de la institucionalización de las ciencias sociales. Parte del grupo de universitarios que nutrió los equipos técnicos o que de distintas formas promovió al interior de la Universidad los nuevos enfoques de la planificación juzgaron de manera positiva el trabajo realizado. De esa forma lo expresó Wonsewer, el decano de la FCEA, quien definió el diagnóstico presentado como “el primer esfuerzo orgánico para discutir en conjunto los problemas de la educación nacional y sus relaciones con el desarrollo económico y social del país”. Por supuesto, decía, tenía otros aspectos discutibles. Pero sin duda constituía una herramienta indispensable y “un punto de partida” para estudiar a fondo los problemas educativos y adoptar una política de transformaciones estructurales. La exposición de Wonsewer, en línea con sus posturas en ámbitos de cogobierno, rezumaba confianza en los métodos cuantitativos y en la planificación para llevar a cabo los procesos de cambio. En contraste con las posiciones de Maggiolo y de los estudiantes, se mostraba favorable a la adopción de una política de racionalización de los ingresos. Su insistencia en el desarrollo de la investigación científico-tecnológica, sin referir con igual énfasis en el impulso ciencia básica, denotaba matices con parte del reformismo. En su opinión, la Universidad tenía como prioridad contribuir la formación de recursos humanos para el desarrollo; es decir, orientados a la creación y adaptación de tecnologías modernas con aplicación a los sectores productivos. Ese era el camino, entendía, “para superar el estancamiento y comenzar proceso de crecimiento acumulativo”.²⁵² Las reacciones reseñadas respondían a cambios que se estaban produciendo tanto en la coyuntura política nacional como al interior de la comunidad universitaria.

Apenas un año después, en 1967, regresó el Partido Colorado al Gobierno. En este marco se profundizaron las prácticas autoritarias en medio de un escenario marcado por

²⁵¹ *Ibíd*

²⁵² *Gaceta de la Universidad*, n.º 38 (julio 1966), p. 8

el agravamiento de la crisis económica que redundó en un ascenso de la conflictividad social y política al tiempo que impactó en una aguda politización de los debates universitarios. Por otra parte, ante el recrudecimiento del conflicto bipolar en la región con la injerencia del Gobierno y las agencias de EEUU en los asuntos al interior del campo intelectual uruguayo, el tercerismo fue finalmente abandonado y las posiciones antimperialistas se radicalizaron. En tal sentido fue un factor determinante el escándalo público que causó el descubrimiento del financiamiento por parte de las agencias de aquel país de proyectos para investigar las condiciones para la emergencia de la protesta social en países latinoamericanos, como el citado Proyecto Camelot, que por otra parte desató virulentos debates al interior del colectivo universitario en torno a la financiación externa a la investigación científica que terminaron erosionando la alianza reformista.²⁵³

Fue en estos años que la FEUU terminó de procesar los cambios en su correlación de fuerzas y que junto a una porción de docentes también radicalizó sus posiciones y acciones. Así en andas del antiimperialismo y la adhesión a la Revolución cubana, las expectativas desarrollistas terminaron por resquebrajarse entre buena parte de los intelectuales uruguayos dentro y fuera de la Universidad. Una nueva generación de científicos sociales recibió las influencias del dependentismo. Todo esto al compás de un creciente enfrentamiento entre las autoridades universitarias y el Poder Ejecutivo, azuzado luego de la intervención del CDC a la Facultad de Ingeniería para poner fin a la lucha férrea entre el reformismo y la derecha universitaria que entonces dirigía esa facultad.

En 1967, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se instaló la OPP y con esta la Secretaría Técnica de la CIDE pasó a formar parte del andamiaje institucional del Estado.²⁵⁴ Ante este estado de cosas, desilusionados por lo que fue considerado un fracaso político de este organismo, muchos de los investigadores y técnicos que habían trabajado en él retornaron a sus ámbitos académicos y, en algunos casos, reformularon sus proyectos de investigación. Se produjo, como han señalado María Inés Moraes y María Camou, un doble movimiento institucional: mientras de 1963 a 1967 la CIDE fue el centro de gravedad de la investigación empírica y la producción de conocimiento sobre lo social, a partir de 1968 y hasta 1973 el mismo se

²⁵³ Ver Markarian, V., *Universidad, revolución y dólares*

²⁵⁴ Garcé, A., *op. cit.* p. 62 y Bértola, Luis (coord.) *50 años de historia de la OPP* (Montevideo: Fin de Siglo, 2018)

traspasó a la Universidad de la República. Este pasaje fue acompañado de un “péndulo teórico” que caracterizó el período a partir de la influencia ejercida por las teorías de la dependencia.²⁵⁵ Esta constatación que las autoras mencionadas realizan para el campo de la ciencia económica puede hacerse extensivo a la sociología. Los técnicos de esa disciplina, también influenciados por los dependentistas y las corrientes marxistas, se propusieron construir una “sociología nacional” poniendo las innovaciones teórico-metodológicas de las disciplinas sociales al servicio de un proyecto de transformación de la sociedad. De esta manera, llegaba a su fin el período de colaboración universitaria con el Gobierno. Digamos que hubo universitarios que siguieron otros rumbos, incorporándose a los equipos gubernamentales, en el Banco Central o la OPP, o integrándose a trabajar en organismos internacionales como Ilpes o Cepal, como fue el caso de Rama o de Solari, quien abandonó la dirección del Instituto de Ciencias Sociales.

No obstante, los análisis de la CIDE en general y sobre el sector educativo en particular calaron hondo en múltiples ámbitos y sectores sociales y políticos. La labor de sus equipos técnicos contribuyó a que la expectativa del desarrollo y el rol asignado a la educación en este se instalara en la discusión pública. Sus conclusiones abrieron el camino a otros planteos que propugnaron modelos alternativos al de la Universidad de la República, instalando y legitimando los reclamos de modernizar la educación como factor clave para el desarrollo económico y social. Claramente la CIDE estuvo lejos de convertirse en un centro del pensamiento de derecha en el ámbito nacional, como lo demuestran el carácter pluralista de su composición y el signo de sus orientaciones, pero dieron sustento a muchas de las propuestas que emergieron en relación con la educación superior. Como se dijo, el desarrollismo en general y en particular sus diagnósticos y propuestas fueron adoptadas y reinterpretadas por actores ideológicos y partidarios de distinto signo.

Hasta aquí este recorrido por dos experiencias que vincularon de manera estrecha y contradictoria a la Universidad con el Poder Ejecutivo. Mientras la instalación del Conicyt fue objeto de una dura y prolongada contienda, la CIDE en cambio se presentó como un espacio de colaboración. En ambos casos, para buena parte de los

²⁵⁵ Camou, María y Moraes, María Inés. “Desarrollo de la historia económica en Uruguay”. *Documentos de trabajo* n.º 40, mayo 2000, p. 13, Programa de historia económica y social-unidad multidisciplinaria. FCS

universitarios, una y otra, constituyeron oportunidades tanto desde el punto de vista institucional, por la posibilidad de incidir en asuntos públicos que se consideraban propios de la casa de estudios, como para el afianzamiento de determinadas profesiones o áreas del saber. De hecho, las polémicas involucraron campos disciplinares muy distintos que se encontraban además en disímiles estadios de profesionalización y desarrollo institucional. Por un lado, el de las ciencias básicas, representado por la AUPC y cuyo núcleo duro estaba radicado en la Facultad de Ingeniería. De allí emergió el grupo de docentes que, en alianza con el movimiento estudiantil, apostó a una transformación radical de la universidad y de sus funciones sociales. Fueron la base del llamado reformismo universitario, convirtiéndose en el blanco de la oposición de los sectores de la derecha conservadora universitaria y extrauniversitaria. Asimismo, la canalización de recursos al fomento de la ciencia original en un país de escasos recursos fue un asunto de discusión para variados actores y sectores. La tensión entre la ciencia aplicada o práctica y la ciencia básica fue también objeto de controversias dentro y fuera del ámbito universitario. Lo mismo ocurrió en relación con el papel de la Udelar en la promoción de la actividad científica. Para una parte de la comunidad universitaria la función principal de esta institución consistía en la enseñanza para el ejercicio profesional.

La CIDE, en cambio, sintetizó las expectativas que generaron las nuevas técnicas para diagnosticar los problemas sociales e intervenir sobre ellos en un momento en que las ciencias sociales se habían constituido un campo en expansión en sintonía con el apogeo de los desarrollismos. La Universidad de la República era la única institución capaz de proveer los técnicos necesarios. Al mismo tiempo en su interior se libraba la batalla por afianzar espacios de formación e investigación en esas áreas. Así, una mirada atenta a ambas experiencias da cuenta de las posibles imbricaciones así como de los márgenes de autonomía entre el campo académico y el campo político. Queda claro que, a pesar de los enfrentamientos crecientes, en esta etapa hubo amplio margen para el diálogo y la colaboración entre la Universidad y el Gobierno. Esta situación cambiará radicalmente con el comienzo del giro autoritario en 1967.

CAPÍTULO II. LA UNIVERSIDAD BAJO LA LUPA: LAS DERECHAS Y LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (1960-1967)

Desde los albores de la década del sesenta Uruguay inició un período en el que proliferaron los diagnósticos, la búsqueda de soluciones y, sobre todo, las expectativas de transformaciones profundas. En un momento de marcada influencia de los organismos internacionales en las políticas educativas, el informe de la CIDE instaló el discurso de la crisis de la enseñanza en todas sus ramas y, por consiguiente, planteó la necesidad de encarar un proceso de reforma integral que la adecuara a las exigencias del ampliamente invocado “desarrollo nacional”. Los debates sobre el rol social de la Universidad, desde la perspectiva del desarrollo o de los procesos de transformación estructural, ocuparon entonces un lugar central en la agenda pública.

Este capítulo analiza el lugar que diversos actores partidarios, sociales e intelectuales, en particular aquellos alineados con las derechas, asignaron al conocimiento técnico, qué entendían por tal y cómo debía reflejarse en la orientación académica de la Universidad, así como el impulso que recibió el proyecto de crear una universidad privada y católica como parte de sus propuestas para solucionar la crisis educativa. Para abordar el primer asunto se propone un recorrido, entre otros posibles, de la palabra *técnico*, cuyo significado así como su valoración se fue modificando de acuerdo al papel que se atribuyó a esta figura en relación con las demandas de la sociedad, el mercado, los sectores productivos o aquellas provenientes del Estado. A partir de fuentes primarias y secundarias de variada procedencia se intenta recuperar la voz de los actores de la época; es decir, con qué sentido y con qué propósitos aludían a la palabra en un espacio acotado del campo intelectual y político. El análisis de los cambios que el vocablo experimentó así como de algunas de las tensiones y disputas de las que fue objeto se realiza en vinculación con las transformaciones que su referente (el *técnico* propiamente dicho) sufrió a lo largo del período que nos ocupa.

En segundo lugar se reconstruyen las disputas que, en relación con los mencionados debates, se produjeron en esta etapa en relación con los intentos de instalar otra universidad, privada y católica. Digamos que la coyuntura política era muy favorable al avance del sector privado y católico en el ámbito educativo debido a la aproximación entre el Gobierno y la Iglesia luego de la asunción del Partido Nacional. No es ajena a

este impulso la movilización del mundo católico a nivel latinoamericano por profundizar su influencia en la educación, como lo demuestran la realización de conferencias y la creación de organizaciones regionales con este fin. Esta iniciativa apuntó a resolver tanto los problemas señalados en los diagnósticos de los organismos técnicos como la politización que sufrían los centros universitarios debido a la influencia de las izquierdas en la conducción de esa casa de estudios y los crecientes niveles de movilización estudiantil.

1. Debates sobre los *técnicos* y el lugar del conocimiento

Entre viejos y nuevos *técnicos*

El diccionario de la Real Academia Española, en su edición de 1917, establecía que *técnico* es el individuo que posee “conocimientos especiales de una ciencia y un arte”. Esta definición, que aún se mantiene, fue ampliada más tarde al incluir tanto al conjunto de procedimientos y recursos como a quienes poseen pericia o habilidad en el uso de estos. Es decir, en términos generales los *técnicos* son personas que poseen tanto un conocimiento especializado como habilidades propias que pueden ser adquiridas a partir de una formación académica o no y que las habilita a intervenir en áreas específicas. Más allá de su definición estrictamente lexicográfica, el sustantivo adquirió diversos significados y usos al aludir a distintas profesiones y a sus portadores en diferentes coyunturas históricas. *Técnico*, por tanto, no es un término nuevo como tampoco lo es la demanda de saberes expertos por parte del Estado o del sector privado.

En Uruguay se advierte la presencia tanto de la figura, asociada a determinadas profesiones, como de la palabra que la designa por lo menos desde mediados del siglo XIX, cuando la región se encontraba en pleno proceso de construcción estatal. Abogados, médicos e ingenieros contribuyeron en esa etapa a la demarcación de las fronteras entre lo público y lo privado, a la unificación del Estado y a la creación de una infraestructura (vialidad, transportes, comunicaciones) que la hiciera posible.²⁵⁶ El novecientos los vio afianzarse íntimamente ligados a la acción estatal. La palabra *técnico*, sin embargo, fue generalmente utilizada para aquellas áreas del conocimiento

²⁵⁶ Sobre la conformación y consolidación del cuerpo médico, la medicalización de la sociedad así como su relación con el poder político y su incidencia en las políticas públicas ver Barrán, J. P., *Medicina y Sociedad en el Uruguay del novecientos* (Montevideo: EBO, 1992-1999), 2 v.

de aplicación práctica y de impacto directo en los sectores económicos que el Estado pretendía apuntalar.

En estos años se priorizó la formación y entrenamiento de especialistas volcados a la realización de obras básicas para la modernización del país; asunto de temprana preocupación por parte de las élites dirigentes y que se mantuvo en las primeras décadas del siglo XX. Sin duda, el primer batllismo, en el marco de su modelo agroindustrial, continuó y consolidó esta tendencia, al demostrar un pronunciado interés por la formación de técnicos en dos niveles: profesionales (particularmente ingenieros civiles e ingenieros agrónomos) que pudieran liderar el proceso industrializador en el ámbito estatal —en el diseño de políticas y el trazado de sus principales orientaciones— o en el privado-empresarial y en la capacitación de mano de obra altamente calificada y diestra en el manejo de tecnologías para mejorar los rendimientos de la producción.

El historiador de la ciencia Alción Cheroni ha demostrado cómo en este período los ingenieros civiles fueron conformando lo que denominó una “élite tecnocrática” afin a los planes industrializadores del Gobierno. La Facultad de Ingeniería proporcionó los técnicos que engrosaron las direcciones especializadas de los ministerios y de los institutos estatales establecidos en las primeras décadas del siglo con el fin de promover la actividad industrial y las realizaciones económicas (Institutos de Geología, de Química Industrial y de Pesca). Estos profesionales pronto reclamaron su participación directa en los “puestos principales, en la dirección de la cosa pública”.²⁵⁷

También conteste con el proyecto batllista fue la aspiración de llevar a cabo una reforma gradual de la economía rural a través de la diversificación y la incorporación de métodos más modernos de producción tal como lo demuestra la creación en 1911 de las estaciones experimentales en los departamentos de Paysandú, Salto, Cerro Largo y Colonia. En las diversas áreas de la economía los sucesivos gobiernos contrataron expertos extranjeros (de EEUU y de Europa) para dirigir estos centros financiados por el estado y dedicados a investigar los problemas locales y a entrenar a los técnicos locales. Lo mismo ocurrió en la Universidad de la República, que designó a científicos europeos o estadounidenses al frente de las nuevas carreras que se fueron creando (en

²⁵⁷ “La concurrencia de los técnicos a las cámaras” en *Revista de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Uruguay*, año VII, n.º 64 (agosto de 1913), pp. 133-134. Citado por Cheroni, A. *El Pensamiento conservador en el Uruguay* (Montevideo: ClaeH, 1986), pp. 120. Ver también Cheroni, A., *Políticas científico tecnológicas en el Uruguay del siglo XX* (Montevideo: FHC, 1988)

1907 se contrató al alemán Alejandro Backhaus (1865-1927) en Agronomía y al estadounidense Daniel Salmon (1850-1914) en Veterinaria).²⁵⁸

Desde el ámbito privado los propietarios rurales, que históricamente se consideraron postergados por el proteccionismo industrial promovido por el batllismo debido a la transferencia de recursos económicos generados por el agro hacia la industria a costa del atraso tecnológico y productivo, requirieron en forma persistente la promoción y, más tarde, la mejora en la formación de especialistas en las ciencias agropecuarias. Sus reclamos se incrementaron a fines de los años cincuenta cuando el estancamiento del sector se tornó uno de los principales factores explicativos de la crisis económica nacional. Estos grupos exigieron el fomento y la reorientación de los estudios que ofrecía la Facultad de Agronomía en relación con sus demandas. Los ingenieros agrónomos, además de integrar la burocracia estatal, debían jugar un papel activo en el desarrollo de los emprendimientos privados. Asimismo se precisaba personal de nivel intermedio a cargo de las tareas y administración de los establecimientos agrícolas y ganaderos, que actuarían como auxiliares de los agrónomos.²⁵⁹

En sintonía con esos reclamos el diario *El País* —órgano de prensa del Partido Nacional— en una serie de artículos publicados en 1962 insistía en fortalecer la formación práctica de profesionales y técnicos para contribuir al desarrollo agropecuario. Señalaba, además, el fracaso de la enseñanza agronómica que impartía la Universidad de la República, sumándose a las críticas sobre su énfasis en las profesiones liberales (Derecho y Medicina) en detrimento de las disciplinas vinculadas a los sectores productivos.²⁶⁰ Hacía hincapié en el rol de la educación superior en la implementación de carreras que capacitaran al personal técnico para el sector productivo. Una vez más se insistía en la paradoja de que un país con una economía fundamentalmente agropecuaria “no ha[bía] tenido jamás el número de técnicos que la Universidad debió preparar”. No obstante esto, el articulista resaltaba que la promoción de la agronomía no podía ocurrir a expensas de otras carreras de “vital interés para el

²⁵⁸ Finch, Henry, “La política tecnológica y el Estado en el Uruguay 1900-1935”, *Cuadernos del CLAEH*, Montevideo, año 12, n.º 44 (1987), pp. 87-109

²⁵⁹ *Actas CDC*, 18 de enero de 1956, “Plan de Estudios y Reglamento del curso de Técnico Rural propuesto por la Facultad de Agronomía”. AGU, Montevideo

²⁶⁰ *El País*, 26 y 28 de diciembre de 1962. Biblioteca Nacional

país” como la química industrial o la veterinaria, de importancia sustantiva para el “desarrollo nacional”, según decían.²⁶¹

De paso se responsabilizaba de esta situación a la orientación “ideológica” de la Universidad de la República que había favorecido la transformación de la Facultad de Agronomía en un centro de agitación extremista.²⁶² A esto obedecía en gran medida el escaso número de jóvenes que se inclinaban por los estudios agropecuarios: “Muy pocos están dispuestos a correr el riesgo de enviar sus hijos a centros de enseñanza que como el bochornoso ejemplo de la facultad de Arquitectura, son un foco de capacitación de reaccionarios totalitarios en lugar de una escuela técnica”²⁶³. La Universidad debía, por ende, modificar sus orientaciones “que no son las del país” y democratizarse “en su esencia”.²⁶⁴

El País se posicionaba críticamente ante la reorientación académica que estaba implementando la Facultad de Agronomía. Un punto alto en un proceso de renovación que había comenzado unos años antes con el cambio de plan de estudios que, entre otras modificaciones, dio mayor relevancia a la ciencia básica en la formación profesional. Parte de ese mismo proceso fue la reconversión en 1962 de la escuela de práctica que funcionaba en el departamento de Paysandú, en la zona litoral del norte uruguayo, en un centro de investigación agropecuaria. El proyecto fue impulsado por el sector estudiantil y tuvo el apoyo decidido del rector Mario Cassinoni y el CDC. El modelo de la Escuela Experimental de Paysandú coligó enseñanza con investigación científica, incorporó la extensión universitaria a los fines de la Estación, creando un servicio específico para atenderla, al tiempo que apostó a la radicación de docentes con dedicación exclusiva y sólida formación académica. Esta experiencia puso en práctica algunas de las propuestas de cambio estructural que venían impulsando los reformistas en el seno de la Universidad. El decano de la FCEA Wonsewer afirmaba que se estaba “llenando una

²⁶¹ *Ibíd*

²⁶² *El País*, 5 de diciembre de 1962, p. 5 “Enseñanza Agronómica”

²⁶³ La Facultad de Arquitectura había cambiado su plan de Estudios diez años antes, en 1952. Este plan significó una transformación en la orientación académica de la Facultad al privilegiar la relación entre la Arquitectura y la sociedad y dar gran relevancia a la formación de planificadores. En esa transformación tuvo gran influencia el Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA), muy activo entonces y en los años siguientes. Estuvo marcado por una fuerte incidencia de estudiantes de tendencia troskista; situación peculiar en relación a la fuerza que este grupo tenía en el resto de la Universidad. Asimismo tras la aprobación del plan se escondían fuertes discrepancias que obstaculizaron su puesta en práctica y que derivaron en una aguda polarización que dividió a la facultad a mitad de los años sesenta. Mazzini, Elena, Méndez, Mery, *Polémicas de Arquitectura en el Uruguay del siglo XX* (Montevideo: CSIC, Udelar, 2011)

²⁶⁴ *El País*, 28 de diciembre de 1962, p. 5 “El ingreso a Agronomía”

real función social al empujar todo lo que pueda el avance de la Facultad de Agronomía”. Mientras el rector Cassinoni concluyó que si se cumplían con los propósitos “esta realización será, sin duda, una de las cosas importantes hechas por la Universidad”.²⁶⁵

La falta de técnicos vinculados a las áreas productivas, tanto en el agro como en el sector industrial, fue una preocupación bastante generalizada que se acentuó tras conocerse los datos del *Registro Universitario* y más tarde el informe de educación de la CIDE. En un contexto en el cual la idea de que los problemas del país requerían de soluciones técnicas se iba extendiendo cada vez más, el diario católico conservador *El Bien Público* hacía notar que

Es cosa sabida lo que hasta el presente ha venido ocurriendo en nuestro país con los técnicos de la tierra. Nuestra juventud ha mostrado muy poco interés en orientar sus estudios hacia las ciencias veterinarias y agronómicas. Las estadísticas universitarias arrojan los más bajos índices de estudiantes de esas carreras profesionales, dándose la paradoja de que un país cuya riqueza fundamental se afianza en la tierra, no logre atraer a la juventud hacia disciplinas que, bien encauzadas, ofrecen amplias perspectivas de superación personal y de aporte social. Y los pocos que han terminado los cursos veterinarios y agronómicos, han tenido —por regla general— un mismo destino, el burocrático.²⁶⁶

El campo necesita “como el pan”, concluía el editorialista, vigorizar su “capacidad productiva” y elevar su “medio social”. La incorporación de técnicos era uno de los “medios más eficaces” para lograr estos objetivos. El Gobierno debía implementar los incentivos necesarios.²⁶⁷ Un par de años más tarde, *El País* volvía a la carga contra la Universidad y se quejaba de los recursos que se destinaban a una facultad “ineficiente” como la de Humanidades frente a los otorgados a la de Agronomía. En particular, cuestionaba el establecimiento de las limitaciones impuestas a la carrera de técnicos rurales que se impartían en las estaciones experimentales.

Así ocurre en la Facultad de Agronomía donde a los cursos de técnicos rurales se debe ingresar por oposición en virtud de que el número de plazas se debe reducir a 21 anuales. Quiere decir que una de las enseñanzas más importantes para el país, uno de los sectores universitarios que hay más interés en desarrollar, tiene el único régimen restrictivo en toda la enseñanza pública nacional.²⁶⁸

²⁶⁵ *Actas CDC*, 22 de julio de 1963, pp. 939-40

²⁶⁶ *El Bien Público*, 3 de octubre de 1961, p. 3

²⁶⁷ *El Bien Público*, 3 de octubre de 1961, p. 3

²⁶⁸ *El País*, 12 de marzo de 1965, p. 6 “Agronomía y Humanidades”

Por su parte, el sector industrial, más cercano a las políticas de sustitución de importaciones del batllismo, también manifestó su interés en contar con el asesoramiento de los ingenieros, impactando directamente en los debates al interior de la Facultad de Ingeniería en relación con su orientación académica y el perfil de sus egresados. En 1963, la Asociación de Químicos Industriales resolvió adjudicar una beca destinada a estimular el ingreso a carreras técnicas universitarias a estudiantes de liceos públicos del interior. El monto del subsidio propuesto se financiaría con “sobre cuotas” voluntarias de los asociados. El presidente de la Asociación argumentaba que todo plan de desarrollo suponía una amplia industrialización. Para ello se precisaban técnicos e idóneos. “Las preferencias de nuestra juventud por las carreras no técnicas están señalando un déficit que hay que cubrir”.²⁶⁹

Hasta mediados del siglo XX, entonces, el sustantivo *técnico* refería principalmente a varios niveles formativos: uno superior, académico-universitario y otro intermedio orientado a la formación mano de obra calificada.²⁷⁰ Es decir, que la palabra designaba tanto a determinadas profesiones universitarias como a ocupaciones que requerían cierta pericia y entrenamiento. La creación, dentro de la Udelar, de las facultades de Matemática en 1885 y más tarde de Agronomía y Veterinaria en 1907 junto al énfasis puesto en la educación técnica en la primera década del siglo XX son claros ejemplos de cómo se articulaba el proyecto educativo con la demanda de técnicos por parte del Estado y el sector productivo.

En los sesenta, tanto la aplicación de técnicas y tecnologías modernas como la capacitación de personal competente fueron aspectos resaltados desde ámbitos académicos, intelectuales y políticos (como en el caso de *El País*) por quienes reflexionaban sobre las posibles salidas a la crisis. Por ejemplo, el economista Luis Faroppa, vinculado al batllismo, en su cátedra de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas sostenía que para superar el rezago económico que sufría el país era necesaria la inversión orientada a la incorporación de técnicas modernas y a la

²⁶⁹ *Gaceta de la Universidad*, n.º 23 (enero 1963), p. 3 “Q.I. Manuel Canosa”

²⁷⁰ Ver Cheroni, A. *Políticas científico-tecnológicas... y El Pensamiento conservador...*, Ruiz, E. y otros. *Memorias de una profesión silenciosa: Historia de la ingeniería en Uruguay* (Montevideo: Udelar-Facultad de Ingeniería, 1997) y Martínez, M. L. *75 primeros años en la formación de los ingenieros nacionales. Historia de la Facultad de Ingeniería (1885-1960)* (Montevideo: Udelar, Facultad de Ingeniería, 2014)

capacitación de recursos humanos.²⁷¹ Por su parte, el economista, político y director del semanario de izquierda *Marcha*, Carlos Quijano, también remarcaba el papel que les cabía a los *técnicos* a la hora de decidir cuáles eran los mejores métodos y técnicas para “lograr una mayor y también mejor producción” y así superar la grave situación del agro uruguayo.²⁷²

Estas afirmaciones daban realce a la relación entre educación y desempeño económico y social que, aunque no era nueva, en estos años, bajo el influjo de las teorías de la modernización y los desarrollismos, adquirió centralidad en América Latina. El impulso que experimentaron entonces las ciencias sociales, muy especialmente la economía y la sociología, que emergieron con fuerte legitimidad técnica y académica, contribuyeron a la naturalización de este vínculo.²⁷³ Como fue señalado en el capítulo anterior, las nociones de educación como “inversión en hombres” o “capital social básico” se volvieron frecuentes en los discursos de la época. El economista argentino Raúl Prebisch en su conocida intervención en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo de Santiago de Chile en 1962 insistía en eliminar el divorcio entre los sistemas educativos y los requerimientos del desarrollo económico. En tal sentido, daba particular importancia al adiestramiento técnico como una modalidad de educación que tendría un impacto directo en la productividad.²⁷⁴ La formación técnica (y los técnicos), en este caso, era pensada en función de sus efectos directos sobre la mejora del rendimiento económico.

Así, mientras que hasta promediando los cincuenta del siglo XX y aún después, técnico hacía alusión al idóneo vinculado más directamente con la producción como fue el caso de agrónomos e ingenieros civiles (quienes se incorporaron a los cuadros estatales o el ámbito privado) o en otro nivel a la mano de obra especializada, la peculiaridad del período que nos ocupa es la emergencia de una nueva acepción que incluyó a profesionales procedentes de un universo de disciplinas dirigidas a producir conocimiento sobre la sociedad y cuyo saber y práctica, en esta etapa, adquirieron

²⁷¹ Faroppa, Luis A. *El desarrollo económico del Uruguay. Tentativa de explicación* (Montevideo: Oficina del libro del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración, 1975)

²⁷² *Marcha*, 24 de marzo 1961, p. 5. Disponible en <http://anaforas.fic.edu.uy>

²⁷³ D’Avenia, L., “Desarrollismo y Educación en Uruguay en los 60”. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 5, n.º 5 (2014)

²⁷⁴ Prebisch, Raúl, en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina, Santiago de Chile, 5 al 19 de marzo de 1962. Disponible en: <http://archivo.cepal.org/pdfs/cdPrebisch/101.pdf> Consultado el 18 de abril de 2016

relevancia y prestigio social. *Técnico* pasó a ser asimilable a experto, un término que se generalizó en la segunda posguerra bajo la influencia de las ciencias sociales norteamericanas. Este fenómeno se dio de la mano de la profesionalización de estos saberes, particularmente en el ámbito universitario, que se ocuparon de analizar, con renovadas herramientas teóricas y metodológicas, la problemática social; un terreno hasta entonces reservado a los literatos u hombres de la cultura, algunos autodidactas y sin una formación académica específica en esas áreas, que aportaron una visión crítica del desarrollo social y político del país a través de su producción ensayística. Las noveles ramas de conocimiento se orientaron a la elaboración de diagnósticos así como de propuestas de solución a la deteriorada situación económica y social. La misma necesidad de explicar la crisis nacional generó una demanda social hacia estas disciplinas y sus cultores. En ese contexto, y en íntima relación con los requerimientos del Estado y de diversos organismos internacionales y agencias financiadoras, cobró fuerza una élite técnica capaz de participar tanto en la formulación de políticas públicas como en la gestión gubernamental y con ella la palabra técnico sufrió transformaciones.

La profesionalización de las ciencias sociales y los nuevos *técnicos*

Desde mitad del siglo XX los saberes expertos y sus portavoces se convirtieron en opiniones especializadas y legítimas para explicar y proponer soluciones a una realidad económica y social que era considerada acaso la más grave que Uruguay había conocido hasta entonces. En este período, al igual que estaba ocurriendo en distintos puntos del globo y muy especialmente en el continente latinoamericano, las ciencias sociales comenzaron a acreditar competencias requeridas para la modernización de los Estados, por los organismos internacionales y el sector privado en función del llamado desarrollo económico y social.²⁷⁵ El *técnico* pasó a ser especialista en un campo determinado del saber y su labor se orientó a la solución de problemas y la elaboración de políticas públicas. Gracias a esas competencias se desempeñaron en ámbitos gubernamentales, agencias financieras internacionales o en organismos como Cepal, OEA o Unesco, conformando una nueva élite técnica internacional que ejerció fuerte influencia en

²⁷⁵ Existe una vasta producción al respecto. Ver, por ejemplo, Sikkink, Kathryn, *El Proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil: Frondizi y Kubitschek* (Buenos Aires, Siglo XXI, 2009) y Plotkin, Mariano, Neiburg, Federico, *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina* (Buenos Aires: Paidós, 2004)

espacios académicos nacionales. Desde la segunda posguerra, en el marco de la Guerra Fría, asuntos tales como quiénes eran esos técnicos, cuál era su relación con la política y los políticos o la compatibilidad entre su desempeño académico y el compromiso político produjeron enconados debates públicos. Como se dijo, de la mano de estos cambios, el sentido del término sufrió modificaciones y dio cabida a esta nueva figura que emergió con fuerza en el panorama intelectual y político de la época.

El auge de las teorías de la modernización, el estructural-funcionalismo en la academia estadounidense y la influencia del desarrollismo cepalino en la región dieron fuerte impulso a la modernización e internacionalización de las ciencias sociales. A partir de entonces, estas disciplinas acentuaron su carácter empírico mediante la introducción de técnicas cuantitativas y modelos matemáticos al servicio de la elaboración de diagnósticos, así como de la programación y la planificación. Por tanto, su despegue, parte de un fenómeno de carácter global, estuvo asociado a una profunda transformación de ese campo y de sus fundamentos teórico-metodológicos. En este proceso convergieron varios factores: el ya mencionado cambio de política de EEUU hacia América Latina luego de la Revolución cubana, la influencia de organismos internacionales creados a partir de la segunda posguerra (ONU, Unesco, Cepal, BIRF, FMI) y la necesidad de buscar alternativas a un modelo de desarrollo que había entrado en una profunda crisis. Como han señalado varias investigaciones —por ejemplo, las de Mariano Plotkin y Jimena Caracava para el caso argentino—, esa misma crisis parece haber sido un elemento determinante en la constitución y posterior legitimación del campo de las ciencias sociales.²⁷⁶

En Uruguay, también en estos años, cobraron vigor distintos saberes sociales que buscaron comprender y brindar alternativas a lo que entonces se consideraban los grandes problemas nacionales, nutriéndose de las influencias mencionadas. Sin embargo, este proceso fue más lento que en otros países de la región. Las primeras interpretaciones sobre el desarrollo de las ciencias sociales producidas en la inmediata posdictadura por los propios cultores de la disciplina, protagonistas de aquellos años y

²⁷⁶ Sobre cómo las coyunturas consideradas críticas condicionan la demanda de saberes especializados por parte del Estado y la sociedad ver: Caravaca, Jimena y Plotkin, M. “Crisis, ciencias sociales y elites estatales: la constitución del campo de los economistas estatales en la Argentina, 1910-1935”, *Desarrollo Económico*, vol. 47, octubre-diciembre de 2007 y Plotkin, M. y Visacovsky, Sergio, “Saber y autoridad: intervenciones de psicoanalistas en torno a la crisis en la Argentina” *EIAL (Estudios Interdisciplinarios de América Latina)*, vol. 18, n.º 1 (2007)

entonces investigadores destacados, van en una línea similar a los planteos de Plotkin y Caracava. En 1986, un año después de reinstalada la democracia, la economista uruguaya Celia Barbato, que había integrado el plantel de investigadores del Instituto de Economía de la FCEA a fines de los años sesenta y más tarde, en las restrictivas condiciones impuestas por el régimen dictatorial, fundó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), planteaba la relación causal entre el retraso en el desarrollo de la disciplina económica en Uruguay y “un crecimiento económico sostenido, que durante varias décadas no planteó problemáticas acuciantes”. Para Barbato la crisis de los sesenta “generó la respuesta académica que alienta el desarrollo de la investigación en economía” y, agreguemos, la demanda de sus técnicos.²⁷⁷

El sociólogo Carlos Filgueira, relevante en el desarrollo de su disciplina en el período que nos ocupa y fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales del Uruguay (CIESU) durante la dictadura, fue más contundente al vincular el desarrollo de la sociología con los “fenómenos que ocurren en la sociedad”. Más concretamente, enfatizaba el impacto directo del agotamiento del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones en la “ruptura definitiva de un orden y una organización social que no tenía condiciones para sostenerse”. La toma de conciencia de esta crisis condujo a pensar la sociedad como un problema y por tanto se requirió de un análisis social basado en la “investigación sistemática” y el “trabajo académico profesional”.²⁷⁸

Se intentaba dejar atrás la tradición ensayística; una tradición que, sin embargo, se mantuvo durante esta década, conviviendo con las nuevas modalidades de abordaje de lo social.²⁷⁹ No es casual que Carlos Real de Azúa incluyera en su célebre *Antología del Ensayo Uruguayo Contemporáneo* al sociólogo Aldo Solari, destacando en él la combinación de “dato empírico seguro y cauteloso e hipótesis a confirmar”, caracterizada por una “secuencia de relevamiento e invención (en la que lo imaginativo entra no poco)”. Esta forma de practicar la disciplina era según Real de Azúa “el signo

²⁷⁷ Barbato de Silva, Celia, “Economía” Cinve, *Ciencia y Tecnología en el Uruguay* (Montevideo: MEC/Cinve, 1986), p. 131

²⁷⁸ Filgueira, Carlos, “Sociología”, en Cinve, *Ciencia y Tecnología en el Uruguay* (Montevideo: MEC/Cinve, 1986, pp. 173-174

²⁷⁹ En 1959 Aldo Solari decía al respecto de la situación de su disciplina: “las ciencias sociales en una actividad esencialmente libresca, basada en la repetición de las de las opiniones más recibidas a veces bastante tiempo atrás de que fueran repetidas aquí. La actividad puramente teórica es y será siempre legítima y necesaria en las ciencias sociales; pero aquella enseñanza no aportaba nada ni a la teoría ni al estudio de los problemas nacionales.” Solari, A., *Las ciencias sociales en el Uruguay* (Rio de Janeiro: Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, 1959), p. 148

común de la mejor labor sociológica, tal como por estas tierras, y en forma creciente, se practica”. Y agregaba que:

aun podría pensarse que, si bien se atiende, los dos extremos de estas eventuales antítesis: “dato”, “relevamiento” por uno de ellos; “hipótesis” e “invención” por el otro flanquean entre ellos un “espectro” continuo de posibilidades, en el que a veces es difícil afirmar donde termina (o empieza) la tarea científica y en donde comienza (o finaliza) la postura ensayística.²⁸⁰

Algo similar señala José Rilla en su prólogo a una de las reediciones del ya clásico libro de Real de Azúa, *El impulso y su freno*, al calificar al ensayo uruguayo de literatura “de doble faz, de declinación y de sospecha”, donde la conciencia de la crisis era expresada como “un asalto a la relativa calma de la convivencia, deterioro de su fondo moral, aflojamiento de toda disciplina, lastres más ostensibles en la pendiente de la crisis”. Con el desarrollo de las ciencias sociales esta constatación devino “medurable, diagnosticad[a] y evidente”.²⁸¹ La caracterización de Real sobre Solari, sin embargo, solo podía ajustarse a estos primeros años de la década. Luego de su incorporación a la CIDE en 1963 —y siguiendo su derrotero posterior— la producción de este sociólogo decantó por el dato duro y la investigación empírica, acorde con las ciencias sociales modernizadas.²⁸²

La importancia que por esos años se atribuyó a la planificación para alcanzar la meta del desarrollo económico y social acrecentó la necesidad de contar con cuadros técnicos que, en palabras de Solari, pusieran “un poco de orden” y obligaran a los políticos a definir “los objetivos perseguidos más allá de la mera formulación electoral”.²⁸³ Es así que la palabra cada vez más empezó a ser utilizada en referencia a los profesionales formados en Economía o Sociología que investían un saber especializado a partir del entrenamiento académico. El rigor científico estaba dado por la exposición de cifras, estadísticas, cuadros que dotaban de legitimidad y aparente neutralidad al conocimiento

²⁸⁰ Real de Azúa, Carlos. *Antología del ensayo uruguayo contemporáneo*, Tomo II (Montevideo: Departamento de Publicaciones de la Udelar, 1964), pp. 574-576

²⁸¹ Rilla, José, “El freno en el impulso”, prólogo a Real de Azúa, C. *El impulso y su freno* (Montevideo: Biblioteca Artigas, Clásicos uruguayos, vol. 179, 2009)

²⁸² Markarian, V., *Universidad, revolución y dólares. Dos estudios sobre la Guerra Fría cultural en el Uruguay de los sesenta* (Montevideo: Debate, 2020) y Marchesi, Aldo y Markarian, V. “Solari y Trías. Dos trayectorias intelectuales en la guerra fría” en Dossier Guerra Fría cultural en América Latina. *Prismas*, v. 23, 2, (2019)

²⁸³ Solari, A., op. cit., p. 167

que producían sobre la sociedad.²⁸⁴ El nuevo tipo de profesional se fue alejando paulatinamente, en conflicto y también en relación, tanto del intelectual generalista, muchas veces literato, que interpretaba la realidad político social y aportaba alternativas de cambio, como de las representaciones dominantes en el campo de las izquierdas del intelectual crítico que incidía en los debates político-ideológicos y estaba al servicio de las transformaciones sociales.

Solari —cuya producción, como bien refería Real de Azúa, todavía se hallaba a medio camino entre la ensayística y la incipiente sociología científica— se lamentaba en 1959 de la escasa receptividad y hasta el menosprecio demostrado por la clase política hacia los aportes que los científicos podían hacer para entender los grandes dilemas nacionales:

si a veces los técnicos han ido demasiado lejos, sosteniendo implícitamente las bondades de una tecnocracia e ignorando a las necesidades que responde la política, el hecho es que la clase política ha mostrado una desmedida despreocupación por los resultados de los estudios científicos sobre la realidad nacional y ha ocultado su menosprecio por las opiniones de los técnicos.²⁸⁵

Esta escasa atención de los políticos no era de extrañar en un país que desde 1908 no contaba con un censo demográfico y, por ende, no conocía con exactitud la cantidad y composición de su población. Ya fueron mencionadas las suspicacias que produjo en círculos políticos la incorporación de instrumentos de medición. En el Parlamento y en la prensa se hicieron objeciones al cuestionario implementado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en 1960.²⁸⁶ Isaac Ganón argumentó en ese momento que “es necesario una educación censal que el propio Estado ha descuidado gravemente, al punto que ha dejado formar y asentarse un estado de ánimo contrario a todo Censo General (que el país no realiza desde hace más de 50 años), a todo Registro de funcionarios que no sea un simple padrón, tantas veces incompleto”.²⁸⁷

²⁸⁴ Ver Plotkin, Mariano, “Saberes y Estado” en *Boletín bibliográfico Electrónico*, n.º 6 (2010); Neiburg, F. y Plotkin, M. (comps.) *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina* (Buenos Aires: Paidós, 2004)

²⁸⁵ Solari, A., óp. cit., p. 151

²⁸⁶ Ver Facultad de Derecho. Instituto de Ciencias Sociales. *Registro Universitario. Boletín de Reinscripción. Año 1959*. Disponible en Unidad Polifuncional sobre Problemas Universitarios (UPPU)-FHUCE. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Ciencias Sociales. *Registro universitario 1960. Informe General Preliminar*, (Montevideo, Universidad de la República, 1961). Ver también *El País*, 25 de marzo de 1960, *El País*, 2 y 5 de abril de 1960 y *El Día*, 10 de abril de 1960. UPPU-FHUCE

²⁸⁷ Ver nota del director del Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, Isaac Ganón, dirigida a *El Diario*, 24 de marzo de 1960. En UPPU-FHUCE

No está de más adelantar, que apenas unos años más tarde, los cuestionamientos a las técnicas de recolección de datos vendrían por el lado de las izquierdas radicalizadas, sobre todo luego de los escándalos producidos por la revelación de las fuentes de financiamiento de varios proyectos de investigación social (Proyecto Camelot y Proyecto Marginalidad). Bajo el manto del antiimperialismo, y en un marco más general de cuestionamientos a las ciencias sociales modernizadas y a sus cultores en ámbitos locales, denunciaron que se proveía de información funcional a los intereses políticos estadounidenses en el continente.²⁸⁸

A pesar del estado de situación de los primeros años de la década sesenta, un optimista Solari vaticinaba que en un futuro no muy lejano los políticos iban a “utilizar cada vez más los resultados de las ciencias sociales”. Seguramente esto iba a derivar en una “conciencia más aguda de los problemas” del país.²⁸⁹ En su famoso artículo *Requiem para la izquierda* ensayó criterios de cientificidad en el análisis de los resultados electorales de 1962, en un intento por comprender el magro desempeño electoral de la izquierda así como las causas profundas de la supervivencia de los partidos tradicionales frente a una crisis largamente anunciada. Cerraba el ensayo señalando cual era en su opinión el lugar que debían ocupar los intelectuales/técnicos respecto a la política y la sociedad. “Sea cual sea la respuesta que el intelectual se dé al problema de su actuación en la política, y hay muchas válidas, esa tarea de pensar al país es la única verdaderamente irrenunciable, la que solamente justifica su presencia como tal en la sociedad”.²⁹⁰ Para Solari, las fronteras entre el intelectual y el *técnico* no estaban aún claramente delineadas y ambos términos aparecían intercambiables. Esta visión se correspondía con el lugar que todavía él ocupaba a caballo entre la tradición ensayística y el cultivo de las ciencias sociales al estilo anglosajón.

También en Uruguay hasta mediados de los cincuenta había predominado, de acuerdo con la categoría de Gino Germani, la “sociología de cátedra”. Los estudios sociológicos hasta entonces habían privilegiado la enseñanza sobre la investigación y se

²⁸⁸ Sobre Proyecto Marginalidad ver: Plotkin, Mariano, “Fundaciones, imperialismo cultural y malos entendidos transnacionales: El caso del Proyecto Marginalidad” Ponencia presentada en *Congreso Internacional LASA*, Río de Janeiro, 2009, Petra, Adriana, “El “Proyecto Marginalidad”: los intelectuales latinoamericanos y el imperialismo cultural. *Políticas de la Memoria*, n.º 8/9, (2009). Sobre Proyecto Camelot ver: Bozza, Juan Alberto, “Las huellas de Camelot. Investigación social, cooperación internacional norteamericana y contransurgencia en Chile en los sesenta” *Épocas. Revista de Historia*, 9 (2014). Markarian, V. *Universidad, revolución y dólares*

²⁸⁹ Solari, A., op. cit., pp. 150-151

²⁹⁰ Solari, A., “Requiem para la Izquierda”, *Gaceta de la Universidad*, n.º 22 (noviembre de 1962). AGU

llevaban a cabo de manera dispersa en una diversidad de cátedras de distintos servicios universitarios.²⁹¹ El espacio de desarrollo más sistemático, sin duda, fue la cátedra de Sociología de la Facultad de Derecho, que funcionaba desde 1915. En ese ámbito académico, Isaac Ganón y Aldo Solari se pusieron al hombro el impulso a su institucionalización y profesionalización en el seno de la Udelar. Como consecuencia de la expansión y de la importancia que adquirió la disciplina a nivel global y regional, en los años cincuenta del siglo XX también se crearon cursos y cátedras en otros servicios universitarios, por ejemplo en la Facultad de Humanidades y Ciencias, con Carlos Rama y Jorge Dionisio Garmendia a la cabeza, o en la de Arquitectura, a cargo del arquitecto Juan Pablo Terra, profesor titular de la cátedra de Sociología, por mencionar algunas.²⁹² Garmendia y Terra, de origen cristiano, se desempeñaron en forma paralela en los Equipos del Bien Común que funcionaban desde los años cuarenta. En 1957 se transformaron en el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh). Allí, siguiendo las enseñanzas y los métodos de investigación del padre dominico Joseph Lebret, se desarrollaron varios de los métodos y técnicas sociológicas para realizar encuestas de muestreo o censos regionales, convirtiéndose así en un espacio de relevancia para la práctica de las ciencias sociales uruguayas.

Más allá de estos esfuerzos, la creación del Instituto de Ciencias Sociales en 1956, bajo la dirección de Ganón primero y de Solari después (1964-1966), marcó el primer mojón en el tránsito hacia la institucionalización disciplinar. Existe cierto consenso en atribuir a Solari, que al igual que Ganón era abogado y mantenía vínculos con el Partido Colorado y la masonería, un rol influyente en el proceso de profesionalización e internacionalización de la sociología uruguaya. En este sentido, contribuyó su temprano involucramiento con el Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC), organización internacional que reunió a intelectuales no comunistas y de la izquierda anticomunista y

²⁹¹ Blanco, Alejandro. *Razón y Modernidad. Gino Germani y la Sociología en la Argentina* (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005), pp. 175-184

²⁹² Gerónimo de Sierra consigna que en 1952 se creó el curso de Sociología y Economía en la Facultad de Arquitectura, en 1954 el de Sociología general, Económica y de Hacienda en la FCEA; y en 1958 Sociología y Economía Rural en las Facultades de Veterinaria y de Agronomía. Fueron esfuerzos complementarios sin llegar a “constituir núcleos de formación y reproducción disciplinaria”. También funcionaron dos cursos de esa disciplina en el instituto de formación de docentes para enseñanza secundaria del país, Instituto de Profesores Artigas (IPA), donde Aldo Solari fue docente durante varios años. De Sierra, G. “Las ciencias sociales en Uruguay: un caso de desarrollo y profesionalización tardíos”. En Trindade, Helgio (coord.). *Las Ciencias Sociales en América Latina* (México: Siglo XXI, 2007), p. 9

estaba financiada en forma encubierta por el Gobierno de EEUU a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por su sigla en inglés).²⁹³

Vania Markarian ha demostrado, en base a documentación del CLC custodiada en la Universidad de Chicago, los alcances de esta relación. Solari mantuvo una correspondencia fluida con integrantes del CLC, recibió pagos regulares y subsidios para sus actividades académicas. El punto alto de esta colaboración, objeto de profundos debates en el campo intelectual uruguayo, fue la organización del *Seminario sobre Élités y Desarrollo en América Latina* con sede en la Universidad de la República, bajo la coordinación de Solari y del reconocido sociólogo estadounidense Seymour Lipset, en junio de 1965.²⁹⁴

En el caso de la economía, su impulso estuvo asociado a la fundación del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas en 1949 y a los sucesivos cambios de plan de estudios (1954 y 1966) que pautaron la formación diferenciada entre contadores y economistas.²⁹⁵ En el capítulo anterior destacamos el papel pionero de Luis Faroppa, del entonces joven y promisorio economista Enrique Iglesias y, especialmente, del decano de la FCEA, Israel Wonsewer, quien fungió como articulador tanto en la difusión del pensamiento desarrollista como en la concreción de acuerdos con organismos internacionales en el seno de esa Facultad y del CDC de la Universidad. Carlos Quijano, economista, político y periodista del semanario *Marcha*, docente de esa casa de estudios hasta aproximadamente mediados de los años cincuenta, también formó parte de este proceso.

²⁹³ Ver Mudrovic, María Eugenia, *Mundo Nuevo. Cultura y Guerra Fría en la década del 60* (Buenos Aires: Beatriz Viterbo Editora, 1997); Janello, Karina, “Los intelectuales de la Guerra Fría. Una cartografía latinoamericana (1953-1962)”, *Políticas de la Memoria*, 14 (2014); Nállim, Jorge, “Intelectuales y Guerra Fría: El Congreso por la Libertad de la Cultura en Argentina y Chile, 1950-1964”, *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, 14, (2014) En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6730/pr.6730.pdf, Markarian, V. *Universidad, revolución y dólares*; Iber, Patrick, “El imperialismo de la libertad: el Contreso por la Libertad de la Cultura en América Latina (1953-1971)”, en Calandra, Benedetta y Franco, Marina *La Guerra Fría cultural en América Latina* (Buenos Aires: Biblos, 2012)

²⁹⁴ Markarian analiza estos vínculos y demuestra cómo estos permitieron incorporarse a redes político-intelectuales lideradas por EEUU así como internacionalizar su carrera académica y Markarian, V. *Universidad, revolución y dólares* y Marchesi, A. y Markarian V. “Solari y Trías. Dos trayectorias intelectuales en la guerra fría”.

²⁹⁵ FCEA. *70 aniversario de su creación legal 1932-13 de julio-2002* (Montevideo: FCEA/EBO, 2002). Celia Barbato de Silva “Economía” En Cinve. *Ciencia Tecnología en el Uruguay*, (Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura/Cinve, 1986). Garcé, A., *Ideas y competencia...* y “Economistas y política en Uruguay (1932-2004)”, *Quantum*, vol. 4, n.º 1 (2009), pp. 80-96

A diferencia de la sociología, la afirmación de la disciplina económica y de los economistas parece haber sido más temprana gracias, entre otros factores, a que contó con un espacio institucional propio: la Facultad de Ciencias Económicas erigida a mediados de los años treinta del siglo XX. Unos pocos años antes, en 1929, un entonces joven Quijano, recién retornado de un viaje de cuatro años por Europa y algunos países de América Latina, defendía ante un público de contadores y abogados la necesidad de desarrollar estudios en economía en el país.²⁹⁶ Quijano regresaba imbuido de las novedades del mundo europeo en relación con su disciplina en un contexto pautado por los avatares del período de entreguerras y, especialmente, por el estallido de la crisis económica mundial. Así expresaba la tensión existente entre un sentido más utilitario de la investigación y la preocupación por su cultivo desinteresado.

Su preocupación central era conocer mejor la realidad nacional para desarrollar adecuadamente la política económica y financiera, la política social, o para cosas tan concretas como fijar el salario mínimo o establecer el régimen impositivo. Quijano no pensaba en la necesidad de contar con técnicos bien formados que pudieran asesorar a los gobernantes, como iba a ocurrir treinta años más tarde. Su inquietud pasaba por contribuir a la formación de la élite dirigente. La clase política debía abandonar las preocupaciones meramente políticas y abstractas en favor de los asuntos económicos en tanto problemas reales y concretos. Esto implicaba sustituir los saberes asociados al derecho por los de la ciencia económica.

Las preocupaciones de Quijano denotaban los resabios del arielismo y del reformismo universitario tan importante para su generación, y es en esa dirección que se dirigía su discurso a favor de la importancia de una ciencia pura, desinteresada, en oposición al tradicional perfil profesionalista de la Universidad. Por supuesto, en los años siguientes mucha agua pasó bajo el puente y Quijano fue modificando sus puntos de vista. Aunque pregonó la necesidad de planificar las políticas económicas y defendió la labor de los técnicos, mantuvo desde las páginas de *Marcha* su posición crítica y escéptica tanto a los postulados del desarrollismo impulsados por los organismos internacionales, por su estrecha relación con la política exterior estadounidense y su

²⁹⁶ Quijano, Carlos, “Uno de nuestros objetivos de lucha: Conferencia del Dr Carlos Quijano prestigiando la Facultad de Ciencias Económicas”, *Revista de la Asociación de Contadores y Peritos Mercantiles*, año VI, (junio de 1929). Ver también D’Avenia, Lucas y Jung, Ma. Eugenia, “La investigación en economía entre 1932 y 1966”, trabajo inédito

propósito de evitar la propagación del ejemplo cubano en América Latina, como a los intentos de aplicar las técnicas de planificación por parte de los Gobiernos de turno. En 1964, en un editorial dedicado al último presupuesto nacional, se burlaba de la jerga técnica y planificadora y calificaba al presupuesto por programas como “una divertida colección de simplezas”, de “puerilidades” y “noñerías”, que “transitan gallardamente por los vericuetos de las clasificaciones, las divisiones, las subdivisiones no menos tontas y ridículas”.²⁹⁷

Veinte años después en el prólogo a un trabajo de Wonsewer publicado en 1953, el economista Luis Faroppa ponía en evidencia los dilemas que enfrentaba su disciplina a causa de las transformaciones teórico-metodológicas que se estaban operando en su seno. La economía, decía, se hallaba en una encrucijada entre “refaccionar su edificio clásico”, “construir uno sobre nuevos fundamentos” o “levantar varios adecuando cada uno de ellos a la etapa cultural, estructural o histórica” que atravesaba cada sociedad. Había que encontrar un método científico adecuado, decía Faroppa.²⁹⁸ No obstante a estas alturas las condiciones institucionales para el desarrollo de la disciplina se habían modificado sustancialmente desde la creación de la Facultad y de los Institutos a fines de los años 30 y 40 respectivamente.

En ese nuevo contexto, Wonsewer manifestaba su concepción de la disciplina influida por su contacto con los centros de investigación en Europa y EEUU así como el desarrollismo de matriz cepalina que se iba expandiendo en la región. Recordemos que el futuro decano de la Facultad de Ciencias Económicas pertenecía a una generación que también tuvo intensos intercambios a nivel regional, en buena medida gracias al dinamismo que había introducido la Cepal desde la década anterior. Con estas influencias la cuestión del “desarrollo nacional” había irrumpido en la agenda de la economía y de las demás ciencias sociales. La necesidad de poner a la investigación económica al servicio de los requerimientos del desarrollo fue, entonces, un eje central de las argumentaciones de Wonsewer y de sus contemporáneos. El nuevo contexto disciplinar e institucional, por otra parte, reeditaba la tensión entre *técnicos* —que ahora también refería a economistas y sociólogos— y política.

²⁹⁷ *Marcha*, 30 de abril 1964. Disponible en: <http://anaforas.fic.edu.uy>

²⁹⁸ Wonsewer, I. *Orientaciones y características actuales de la Metodología Económica* (Montevideo: Publicación del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, 1953), pp. 3-5

En general, los “desarrollistas” de la primera hora como Wonsewer o el propio Solari concibieron la especificidad de las tareas de un técnico que, en principio, no se identificaba con quien tomaba las decisiones. En 1961 el primero se preguntaba: “¿el técnico como cualquier otro técnico, tiene la obligación de asumir, una posición de filosofía política o social? ¿Debe señalar ciertos fines o debe atenerse pura y exclusivamente a la especulación científica de analizar si ciertos medios son adecuados a fines que han sido dados?”. Su planteo distinguía con más facilidad la discusión de medios (técnicos) y fines (políticos) de lo que lo hacía la generación anterior, expresada por el joven Quijano en 1929.

Así, por ejemplo, mientras las intervenciones de Quijano en los albores de los treinta apuntaban a delimitar la especificidad de una disciplina que hasta ese momento no tenía contornos claros y que era absorbida por otros saberes o profesiones como el Derecho y las disciplinas comerciales, las formulaciones de Wonsewer sobre la naturaleza de los estudios en economía respondían a otro etapa tanto del desarrollo disciplinar e institucional como de la realidad económica nacional e internacional. En las décadas siguientes, la experiencia de la Cepal, como se dijo, marcó a esta nueva generación de economistas —y en buena medida también a Quijano— en relación con la naturaleza de la disciplina e influyó decisivamente en las prácticas académicas y de producción de conocimiento económico. En este sentido, las propuestas Wonsewer respondían claramente a este clima de ideas y a los desarrollos de las ciencias sociales.²⁹⁹

En sintonía con los reclamos de Solari respecto a la sociología, la nueva camada de economistas cuestionó la falta de interés desde el ámbito gubernamental por preparar cuadros técnicos para la “reestructuración social”. En los años cincuenta, sin embargo, esta realidad había empezado a modificarse. En el marco de una mayor presencia del Estado en los asuntos económicos, la demanda de economistas fue creciendo de manera sostenida. Finalizando esa década, el Instituto de Economía que dirigía Faroppa fue requerido para el asesoramiento sobre temas de su especialidad como el impulso inflacionario, la reforma cambiaria o la del régimen de contralor del comercio exterior. En 1959, el flamante Gobierno blanco designó al Cr. Juan E. Azzini, en ese momento

²⁹⁹ Wonsewer, Israel, “Problemas de enseñanza e investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Exposición en el Consejo de la FCEA el 14 de setiembre de 1961”, FCEA, Montevideo, 1962 y “La investigación económica”, Cursos de Verano de la Universidad (24 de febrero de 1964), *Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, n° 15 (1964), Montevideo

director del Instituto de Finanzas de la FCEA, como ministro de Hacienda.³⁰⁰ Esto no impidió que al promediar los años sesenta se mantuviera la inquietud por la capacidad del mercado para absorber a los egresados de los nuevos planes. Aún así, el empeoramiento de la situación económica nacional, la expansión de los organismos internacionales y las funciones de la planificación estaban abriendo posibilidades para esos nuevos graduados de la carrera de Economía.³⁰¹

En suma, pese a sus desiguales desarrollos, predominó tanto en la sociología como en la economía la crítica al agotamiento del modelo económico y social junto a un marcado interés por comprender los “problemas nacionales” y encontrar soluciones. Como señala Garcé para la economía, la traducción de la visión crítica sobre la realidad del país asumió inicialmente la inspiración desarrollista de matriz cepalina. El sociólogo Alfredo Errandonea, integrante del grupo de sociólogos críticos que relevó a los desarrollistas, en un trabajo de síntesis histórica de la disciplina, indicaba que esa inspiración aportó un conjunto de análisis de orientación más moderada que la que imprimió la izquierda. Acaso se trataba de una mirada cándida demasiado confiada en las posibilidades de corregir el proceso. Avanzada la década, esta concepción fue fuertemente discutida por los planteos de la dependencia que marcaron su impronta en medios académicos y en la formación de economistas y sociólogos.³⁰²

Como se señaló, la oportunidad para los nuevos técnicos llegó con la instalación de la CIDE en sintonía con la Alianza para el Progreso.³⁰³ Se desplegó en esa ocasión todo el conocimiento técnico disponible al servicio de una “aproximación racional a la realidad” para buscar soluciones a los problemas sociales “con información y sistematización científica”, en palabras de su conductor Enrique Iglesias.³⁰⁴ El informe final destacó la importancia de contar con un detallado análisis de la realidad nacional basado en la recolección de datos. Se disponía, decía, de un “esquema de los principales problemas del país, ponderados y sistematizados con un criterio rigurosamente objetivo

³⁰⁰ Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. *70 aniversario de su creación legal*; Barbatto de Silva, Celia, óp. cit., y Garcé, A., *Ideas y competencia*.

³⁰¹ *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas*, 25, (diciembre de 1965)

³⁰² Alfredo Errandonea, “Historia institucional de la Sociología”, *Revista de Ciencias Sociales*, año 16, n.º 21 (agosto 2003), p. 28; ver también De Sierra, G. “Las ciencias sociales en Uruguay: un caso de desarrollo y profesionalización tardíos”. En Helgio Trindade (coord.), *Las Ciencias Sociales en América Latina* (México: Siglo XXI, 2007), pp. 339-391

³⁰³ Garcé, A. *Ideas y competencia* Ver también decreto de creación en *RNLD*, 27 de enero de 1960, vol. I, pp. 146-148.

³⁰⁴ Iglesias, E., óp. cit., pp. 18-19

y técnico”.³⁰⁵ Iglesias subrayaba que era resultado de un “esfuerzo interdisciplinario objetivo y técnico”, alejado tanto de las tendencias político partidistas que buscaban señalar responsabilidades como ajeno a esquemas ideológicos generales “excesivamente dogmáticos que tuercen la realidad pero ilustran muy poco sobre sus detalles”, reafirmando su carácter técnico y apolítico.³⁰⁶ Esta experiencia habilitó el perfeccionamiento de sus integrantes en centros de investigación en el exterior, particularmente institutos regionales como Cepal, Flacso o Ilpes, contribuyendo a la internacionalización de las disciplinas y, de paso, de las carreras académicas de los técnicos.

Pese a las visiones críticas al informe y a la concepción que sostenía, lo cierto es que la CIDE constituyó un momento fuerte para el reconocimiento social y la legitimación de las nuevas profesiones y sus representantes. Se aprecia así lo que Mariano Plotkin define como una relación doblemente constitutiva de los intentos de modernización estatal y la evolución de ciertas formas de saber social que dio “lugar a un proceso complejo y dialéctico entre conformación, legitimación e institucionalización de formas de conocimiento, expertos y modernización del Estado”.³⁰⁷

En suma, en interrelación con los procesos descritos, emergió un nuevo sentido de la palabra *técnico*, cuya utilización se amplió hacia conocimientos especializados sobre la sociedad que además de comprender la realidad social permitía operar sobre ella así como a quienes los poseían. Recordemos además que la afirmación de estos saberes, que tuvieron como epicentro la Universidad de la República, tuvo fuerte imbricación con los debates académicos, influyendo en las orientaciones generales de la institución. Como fue analizado, numerosos dirigentes universitarios se plegaron a las nuevas concepciones desarrollistas y manifestaron su confianza en las posibilidades que brindaban las remozadas ciencias sociales para introducir modificaciones en la propia realidad universitaria. El lenguaje técnico y planificador permeó las discusiones y las propuestas de transformación académica e institucional. Asimismo, la nueva manera de concebir al *técnico* generó, como veremos a continuación, no pocas polémicas y

³⁰⁵ [Compendio del] *Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1964-1974*. (Montevideo, CCEA, 1966)

³⁰⁶ Iglesias, E., óp. cit., pp. 9-10

³⁰⁷ Plotkin, Mariano, “Saberes y Estado” en *Boletín Bibliográfico Electrónico*, 6, 2010. Ver también Plotkin, Mariano Ben y Zimmermann, Eduardo (comps.) *Los saberes del Estado* (Buenos Aires: Edhasa, 2012)

enfrentamientos. La idea de que los graves problemas que atravesaba el país requerían de soluciones técnicas fue apropiada, con diferentes sentidos, por una variedad de actores del espectro político y social, de izquierda y de derecha.

Técnicos, políticos y política: tensiones y disputas

La instalación de la Alianza para el Progreso generó ásperos debates —en el país y el continente— tanto en torno a sus objetivos y su relación con la política estadounidense hacia la región (y en particular hacia Cuba) como sobre el papel de los expertos que idearon y formularon las propuestas para el “desarrollo” latinoamericano. En agosto de 1961, en su célebre discurso ante el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), Ernesto “Che” Guevara hacía mención al papel de los *técnicos*, no sin un dejo de ironía, refutando su pretendida asepsia ideológica.

Pero, hay un punto que es muy importante [...] el peligro de la letrocracia, metido en medio de los acuerdos con que los pueblos quieren mejorar su nivel de vida; otra vez políticos disfrazados de técnicos diciendo: aquí sí y aquí no; porque tú has hecho tal cosa y tal cosa, sí, pero en realidad, porque eres un fácil instrumento de quien da los medios; y a ti no, porque has hecho esto mal; pero en realidad, porque no eres instrumento de quien da los medios, porque dices por ejemplo, que no puedes aceptar como precio de algún préstamo, que Cuba sea agredida.³⁰⁸

El Che procuraba dejar en evidencia que tras la aparente neutralidad de los técnicos y de sus propuestas había intereses de carácter político y, por ende, sus intervenciones tenían efectos políticos. Esto los convertía en técnicos/políticos, donde ambos roles constituían las caras de una misma moneda. La AFP y sus propuestas de “revolución” para América Latina tenían como objetivo neutralizar el peligro que representaba Cuba y su proceso revolucionario; un propósito que, por otra parte, no permanecía oculto.

En el contexto del conflicto bipolar, el economista e historiador estadounidense Walter Rostow afirmaba que la tarea central de EEUU “en las áreas subdesarrolladas” consistía en “proteger las independencias del proceso revolucionario que está en curso”. Y por esa razón el programa más importante de la administración del presidente John F. Kennedy era el “programa de desarrollo de larga duración, representado, por ejemplo,

³⁰⁸ Guevara, Ernesto “Che”: Cuba no admite que se separe la economía de la política. Discurso pronunciado en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) en Punta del Este, 8 de agosto de 1961. Disponible en: <https://www.marxists.org/espanol/guevara/escritos/op/articulos/puntadeleste/discurso.htm>

en la Alianza para el Progreso en América Latina” y agregaba: “Las sociedades modernas deben construirse y nosotros estamos preparados para ayudar a construirlas”.³⁰⁹ En contraste, en Uruguay, un cronista de *Marcha* retomaba la línea de pensamiento del Che al sostener que

las revoluciones se hacen por los pueblos y no se planean en Conferencias Internacionales o en estiladas y estiradas reuniones de técnicos asépticos. [...] No se puede proclamar la necesidad de la revolución y tener la presunción de fijar sus etapas y sus objetivos, con exactitud de relojero.³¹⁰

La pretendida despolitización del conocimiento social produjo profundas tensiones al interior del campo intelectual. Los saberes sociales y sus exponentes fueron cuestionados en su empeño por ocupar el lugar de la verdad generado a partir de estudios que se presentaban como políticamente neutros y, por tanto, por encima de consideraciones políticas o ideológicas. Al igual que ocurrió en otros países latinoamericanos, las ciencias sociales, que además en la mayoría de los casos recibía el apoyo de centros y fundaciones de EEUU, fueron vistas por parte de los sectores más radicales de la intelectualidad de izquierda como formas veladas —y no tanto— del imperialismo en la región.³¹¹ En su crónica sobre la reunión del CIES en Punta del Este, *Marcha* aludía despectivamente a “los técnicos de la ‘Nouvelle Vague’” que discutían con “elegancia y refinado tecnicismo” cuál era el mejor destino para los países latinoamericanos.³¹²

Para intelectuales de izquierda de la talla de Ángel Rama, el *técnico* era una versión del intelectual en “su actual forma exitosa” y esa condición lo convertía en una “pieza fundamental del juego, tanto para asesorar como para transmitir la remodelación económica (y política y social) que se nos propone mediante la Alianza”. El sustantivo *técnico*, a su vez intercambiable por “científico”, representaba para Rama el tipo de “intelectual desarrollista” que comportaba una “obligada despolitización” y su sujeción

³⁰⁹Walter Rostow (1916-2003), Economista, docente universitario y político. Fue asesor en la campaña presidencial del Senador John F. Kennedy. En 1961 se integró al Consejo de Seguridad Nacional y a fines de ese año fue nombrado presidente del Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado. Entre 1964 y 1966 integró el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso. Entre 1966-1969, coincidente con la presidencia de Lyndon Johnson, fue Consejero de Seguridad Nacional. Rostow, Walter *Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista*. (México: Fondo de Cultura Económica, 1961). Cita de: “Guerra de guerrillas en áreas subdesarrolladas” *Marine Corps Gazette* 46: 1 (enero de 1962), 46-9 (traducción de V. Markarian).

³¹⁰*Marcha*, 11 de agosto de 1961, disponible en <http://anaforas.fic.edu.uy>

³¹¹Plotkin, M., “Proyecto Marginalidad”, p. 6

³¹²Ibíd

a los centros de poder, nacionales o internacionales, al tiempo que trabajaba para las “fuerzas conservadoras” locales. La cita que sigue, pese a su extensión, sintetiza cómo concebían numerosos intelectuales de izquierda, que frecuentemente expresaron su opinión a través del semanario *Marcha*, a los llamados técnicos/expertos y, en contrapartida, cuál era el rol que estaba llamado a cumplir el intelectual comprometido:

El primer rasgo es la obligada despolitización a la que se somete el intelectual, que tiende a devenir una nueva especie, la de los ‘técnicos’ o los ‘científicos’. Mantendrá sus convicciones pero en forma privada y ellas serán prudentes, reformistas, de colaboración y crítica con el orden establecido. Esta posición que está legislada cuando se trata de organizaciones técnicas internacionales, asume rasgos paradójales en algunas formulaciones latinoamericanas: los técnicos que representan orientaciones modernas y generaciones nuevas son incorporados al ‘establishment’ como asesores de fuerzas conservadoras y de viejas generaciones a cuyo servicio se ven forzados aunque con ellas discrepan y traten de modificarlas. Esto postula, previa y subrepticamente, una drástica desvalorización (o revisión) de las teorías sobre clases sociales, para poder justificar el servicio que se presta a los representantes de la vieja oligarquía. El segundo rasgo apunta a que dichos ‘técnicos’ a falta de una inserción o respaldo popular, quedan a merced de los centros del poder, tanto los nacionales que podrán ser o no de su agrado como los internacionales, para nuestro caso los Estados Unidos en forma predominante. [...] En tercer término, la adopción de una línea no sólo compromete la conducta social sino también las ideas, como ya señalamos para el tema de las clases sociales. Los intelectuales del desarrollismo se ven forzados a desvalorizar los argumentos anti-imperialistas y llegan a escamotear el tema o a ofrecer una imagen muy curiosa de la acción imperial y de las causas de la situación latinoamericana. Desde luego, en la zona de los economistas, el planteo de soluciones a corto plazo favorece la esfumatura de los planteos históricos y socio-culturales [...] Toda fragmentación exclusivamente económica y parcializada a algunos sectores de la realidad concluye puesta al servicio de la estructura imperial y no nacional. [...] Aquí se debe incluir la curiosa repercusión de la neutralización sobre la metodología de las llamadas ciencias sociales. El intelectual desarrollista, en la medida en que homologa el campo operacional y hace suyos los criterios de la metrópoli, se desliza al uso indiscriminado de su aportación sociológica que no ve en relación a los problemas y al nivel de la sociedad en que surgió como instrumental adecuado a sus específicas necesidades sino como un valor en sí, un universal.³¹³

Rama ponía en evidencia la dependencia de los llamados “técnicos” de la periferia, que compraban *in totum* las metodologías asépticas de las “llamadas ciencias sociales”, de los centros académicos del norte que imponían sus agendas de investigación y

³¹³ *Marcha*, 27 de mayo de 1966. Disponible en <http://anaforas.fic.edu.uy>

proveían de recursos. La postura del intelectual uruguayo, según Mariano Plotkin, era asimilable a las posiciones de la izquierda radical marxista y del nacionalismo de izquierda que reaccionaron a lo que calificaba de “cientificismo”; término que fungió “como unidad semántica que definía cualquier intento de defender la autonomía del campo científico respecto de la política”.³¹⁴ Desde esa postura se negaron sistemáticamente a utilizar las metodologías, participar en proyectos y particularmente a recibir fondos provenientes de EEUU. Al igual que muchos intelectuales de izquierda en la región, Rama consideraba con el Che Guevara que la economía y la política iban juntas y, por ende, eran indivisibles. “Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnicas, cuando está de por medio el destino de los pueblos”, decía el Che.³¹⁵ Sin embargo, hasta el fin de la experiencia de la CIDE, pasada la mitad de los sesenta, en Uruguay las críticas más fuertes parecen haber estado dirigidas hacia los expertos que actuaban a nivel internacional, en las diferentes agencias financiadoras o en los organismos internacionales.

Más tarde, argumentos de similar tenor apuntaron contra los científicos sociales del país, muchos de ellos colaboradores en la experiencia planificadora y que habían completado su formación académica en los centros de investigación regionales ya mencionados. Se entiende así la polémica que sostuvieron, a través de la sección “Carta a los lectores” de *Marcha*, Real de Azúa y el sociólogo Alfredo Errandonea originada en una serie de notas fuertemente críticas del primero hacia el *Seminario sobre Élite*s organizado por la Universidad bajo la dirección de Solari y que tuvo financiamiento del Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC).

En este contexto y en medio de una polémica con Arturo Ardao sobre el libro publicado ese mismo año por Solari, *El Tercerismo*, Real de Azúa cuestionó la baja calidad académica del evento, pero sobre todo puso en el centro de su crítica la procedencia de los fondos y su asociación y la de sus promotores con el CLC. En sus intervenciones, en la misma línea que Rama, que por otra parte al igual que Real de Azúa estaba por fuera de los circuitos de validación y legitimación propios del campo académico, apuntó sus dardos contra la supuesta imparcialidad del conocimiento técnico ya que salvo “ciertos logros inductivos de poco alcance, absolutamente todo el esfuerzo

³¹⁴ Plotkin, M. “Proyecto marginalidad”, p. 15

³¹⁵ Discurso del Che Guevara disponible en:

<https://www.marxists.org/espanol/guevara/escritos/op/articulos/puntadeleste/discurso.htm>

teórico está marcado por un sesgo ideológico que ‘grosso modo’ coincide con la celebración del ‘statu quo’ norteamericano”.³¹⁶

Recordemos que en estos años, en el marco de la agudización de la Guerra Fría, cuando América Latina pasó a ser prioridad para el gobierno de EEUU a consecuencia del proceso cubano, las fundaciones que desde tiempo atrás actuaban en la región incrementaron su presencia, brindando asesoramiento técnico y financiero a distintos programas y centros de investigación: en esos años el flujo de recursos creció exponencialmente.³¹⁷ Como ha señalado Plotkin esta presencia contribuyó a generar una doble percepción, por un lado, de bienvenida a la renovación de las disciplinas sociales y, por otro, de la injerencia de los poderes imperiales. Esto último provocó fuertes reacciones contrarias en la intelectualidad y en ámbitos políticos de la izquierda. Resulta evidente que la actividad de las fundaciones frecuentemente fue funcional a los objetivos políticos de EEUU para la región, pero, como también señala este autor, la articulación entre los objetivos estadounidenses, las fundaciones, los gobiernos locales y los científicos sociales latinoamericanos fue mucho más compleja. Así lo ha demostrado Markarian para el caso uruguayo en el trabajo citado, al poner en evidencia cómo las repercusiones del escándalo provocado por la procedencia de los fondos del Proyecto Camelot y las polémicas sobre el financiamiento del *Seminario sobre Élite*s contribuyeron a radicalizar las posiciones y a reforzar el antimperialismo de gran parte de la intelectualidad uruguayo.³¹⁸ Por supuesto, la Universidad no se mantuvo ajena a estos dilemas. También en su seno se produjo una radicalización por izquierda de parte de su cuerpo docente y sobre todo de la FEUU, que pasando la mitad de la década y a partir de los eventos mencionados se opuso sistemáticamente a la recepción de financiamientos externos para la actividad científica, provocando fisuras en la alianza reformista.

A dos años de estas controversias, en 1967, finalizó la experiencia de la CIDE y, como consecuencia, un importante contingente de economistas y sociólogos retornó a la

³¹⁶ *Marcha*, 3 de noviembre de 1967. Disponible en <http://anaforas.fic.edu.uy>

³¹⁷ Como indica Mariano Plotkin, la Fundación Ford fue la que más invirtió en la región y otorgó subsidios por 50 millones de dólares para proyectos de ciencias sociales en América Latina. Plotkin, M. “Proyecto Marginalidad” p. 5.

³¹⁸ Navarro, Juan José y Quesada, Fernando. “El Proyecto Camelot (1964-1965). La dependencia académica, entre el escándalo y el mito”. En: Beigel, Fernanda. *Autonomía y dependencia académica. Universidad e investigación en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980)* (Buenos Aires: Biblos, 2010), pp.145-167

vida académica en la Universidad de la República, rompiendo relaciones con los organismos gubernamentales para dedicarse íntegramente a la investigación en el Instituto de Economía o en el de Ciencias Sociales.³¹⁹ Además de haber pasado por aquel organismo técnico, la mayoría había realizado posgrados o cursos de especialización en el exterior, especialmente en los centros de investigación en Chile aunque también en otros países. A partir de la circulación e intercambio en estas redes académicas recibieron las influencias del marxismo y abrazaron la teoría de la dependencia, ya fuera en la versión más marxista de André Gunder Frank o la de tono historicista promovida por Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faletto y el mexicano Pablo González Casanova, según la clasificación de Errandonea. Los más jóvenes eran diestros en el manejo de técnicas y metodologías de investigación más sofisticadas fruto de una formación más sistemática y profesionalizada. Ubicándose a la izquierda del espectro político nacional, defendieron la utilización del renovado caudal de conocimientos teórico-metodológicos para comprender la realidad y transformarla. Estaba presente aquí una noción de *técnico* que lejos de estar reñida con la práctica política la incorporaba. Este conjunto de científicos sociales protagonizaron el afianzamiento de la profesionalización de sus disciplinas.

En 1968, el Instituto de Ciencias Sociales, aún sin dejar de formar parte de la Facultad de Derecho, asumió estatuto de instituto central de la Universidad al tiempo que se instauraba la Licenciatura en Sociología. Por su parte, el Instituto de Economía se convirtió en una usina de ideas afines a las distintas versiones del dependentismo aunque con ribetes originales, así como en un espacio de debates de amplia resonancia académica y política. De este período es el otorgamiento de la primera dedicación total en el área de las ciencias sociales, un régimen instaurado con la ley orgánica 1958, cuyo principal objetivo era fomentar la investigación. Así, en el escenario de agudización de la crisis económica, social y política que atravesaba el país, un grupo de economistas publicó el libro colectivo *El proceso económico del Uruguay*, parte del “boom editorial” de la época, que ha sido señalado como el inicio de un programa de investigación basado “teoría marxista de la dependencia”.³²⁰

³¹⁹ A partir de 1967 se reorganizó el Instituto de Ciencias Sociales como instituto central y se creó la Licenciatura en Sociología

³²⁰ Ver Messina, Pablo “‘El proceso económico del Uruguay’: a 50 años del dependentismo uruguayo”, *La Diaria*, 22 de julio de 2019

Ese año el presidente Jorge Pacheco Areco adoptó drásticas medidas económicas liberalizadoras y de corte aperturista al tiempo que implementó duras políticas estabilizadoras. Para estos economistas la nueva coyuntura cerraba “una etapa en la vida del país” y “nuevas instancias sociales y políticas se avecinaban”. Con el libro, por tanto, se propusieron poner la ciencia económica al servicio de la comprensión de esa nueva etapa, combinando el análisis del proceso económico uruguayo en la larga duración con el estudio de la coyuntura específica. En la introducción los autores declaraban que “esta situación de creciente descomposición no es ajena al nivel de los economistas y científicos sociales preocupados por aportar alguna salida viable para el país”.³²¹

Estas derivas impactaron el campo de las izquierdas, donde se enfrentaron distintas posturas respecto al papel de los técnicos y el rol de las ciencias sociales, como quedó de manifiesto en la mencionada polémica entre Real de Azúa y Errandonea. En este contrapunto, Real de Azúa oponía al intelectual no científico el “tipo de joven flacsista”, exhibiendo, según Errandonea, una visión estereotipada del cientista social asociado a los intereses del imperialismo norteamericano. Real refería en su nota a la “traición de los científicos” y remarcaba la excepcionalidad de los “intelectuales” no científicos. Para Errandonea, en cambio, Real de Azúa hacía gala de un “terrorismo anticientífico, oscurantista” al disfrazar de antiimperialismo una postura anticientificista. El sociólogo uruguayo defendía de esta manera la validez de la metodología científica como herramienta para el cambio social.³²²

El terrorismo oscurantista a que conduce inevitablemente la postura de R. de A. —lo quiera o no— en el campo antimperialista, abre el camino a los ideólogos disfrazados de técnicos promovidos por el otro bando, y cuyo ejemplo más clamoroso son los llamados ‘desarrollistas’. El prestigio y la eficacia de la ciencia pueden ser así impunemente atados a las metas de la ‘Alianza para el Progreso’[...] hay que conocer las técnicas que R. de A. desprecia porque ignora, hay que cultivar la ciencia que tanto le repugna. En lugar de ello, R. de A. respeta y admira a su amigo Solari. Parece haberse decidido por las flechas, huyendo de la contaminación científica moderna. Me supone expuesto a ser comprado con cuentas de vidrio, pero acepta éstas del primer desarrollista criollo a su alcance.[...] Quienes queremos servir con el bagaje científico de las técnicas modernas, no aceptamos estar

³²¹ Instituto de Economía, FCEA. *El proceso económico del Uruguay. Contribución al estudio de su evolución y perspectivas* (Montevideo: FCU/Departamento de Publicaciones-Udelar, 1969), p. 17

³²² *Marcha*, 3 de noviembre de 1967. Disponible en: <http://anaforas.fic.edu.uy>

condenados a trabajar bajo permanente sospecha de traición. Y no lo aceptamos, porque es monstruoso, estúpido e indigno.³²³

En el otro extremo del arco político-ideológico, un conjunto importante de técnicos que había integrado los equipos de trabajo de la CIDE pasaron a ocupar cargos en la OPP o en el Banco Central del Uruguay, ambos organismos creados a instancias de la reforma constitucional aprobada a fines de 1966. También desencantados con el desarrollismo y el pensamiento de la Cepal, economistas como Alberto Bensión, Ricardo Zerbino, Juan José Anichini, José Puppo y José Gil Díaz se plegaron al ideario liberal y permanecieron trabajando en el ámbito estatal. Algunos de ellos fungieron como artífices destacados de las políticas liberales que llevaron adelante los Gobiernos colorados de Pacheco Areco y de Juan María Bordaberry. En estos años ocuparon un lugar marginal en los debates universitarios, hegemonizados por las corrientes dependentistas referidas, por tanto, buscaron otros espacios desde los cuáles difundir su pensamiento e influir en la discusión pública. Con este propósito unos años más tarde, en 1972, acompañaron la fundación del semanario *Búsqueda*, que pasó a ser una tribuna del pensamiento económico liberal y que como tal permanece actualmente en actividad.

En otros casos, los exintegrantes de la CIDE abandonaron el país para incorporarse a trabajar en organismos internacionales. Los sociólogos Aldo Solari y Germán Rama, por ejemplo, emigraron a Santiago de Chile y pasaron a ser funcionarios de la Cepal. Solari se desempeñó primero en la División de Desarrollo Social y luego en el Ilpes. En 1979 fue designado representante residente del PNUD en Ecuador y volvió a Uruguay en 1985, cuando la reinstalación de la democracia, para ocupar el cargo de vicepresidente del organismo estatal encargado de los servicios de educación primaria, secundaria, técnica y de formación de maestros y profesores.

Rama, que previamente había actuado como asesor en temas de educación superior en Colombia, ingresó a la Cepal en 1971 como funcionario en la División de Desarrollo Social. Se desempeñó en Santiago y Buenos Aires, donde coordinó el proyecto Educación y Desarrollo en América Latina. A fines de los ochenta retornó al país como director de la oficina de esa organización en Montevideo. Durante la década de los noventa trabajó para el segundo Gobierno del colorado Julio María Sanguinetti y más tarde como asesor del BID. A partir de las redes que tejieron con estos organismos

³²³ *Marcha*, 10 de noviembre de 1967. Disponible en: <http://anaforas.fic.edu.uy>

podieron internacionalizar sus carreras. Ambos de origen colorado y batllista, adhirieron tempranamente al desarrollismo y se mantuvieron cercanos al grupo de intelectuales vinculado al semanario *Marcha*. Se fueron alejando de este conforme avanzando la década del sesenta el tercerismo declinó a un antimperialismo sin reservas. Esta fue la deriva de Solari que, como se dijo, se alineó en redes político-intelectuales vinculadas al CLC, del cual recibió financiamiento.³²⁴

Es posible afirmar que uno de los legados más importantes que dejó el proceso de planificación de la CIDE fue el cambio en las relaciones entre la “clase política” y los técnicos quienes desde entonces gozaron de un mayor reputación, pasando a integrar en algunos casos los cuadros estatales. También los partidos incorporaron el aporte de los expertos, en tanto legitimadores de sus proyectos políticos. En 1966 el Partido Demócrata Cristiano presentaba su plan de Gobierno, de cara a las elecciones nacionales de noviembre, destacando la colaboración de un importante número de técnicos. El plan se presentaba como una herramienta eficaz para superar la crisis nacional y emprender un camino de transformaciones profundas.³²⁵ Finalmente parecían cumplirse los vaticinios de Solari: la política y los políticos ponían a su servicio el saber experto que cumpliría un papel instrumental a sus proyectos políticos.

Asimismo, desde fines de la década del sesenta se detectan visiones sobre el técnico y lo técnico que sintonizaban en buena medida con los planteos liberales, pero que hacían hincapié en aquellas profesiones más directamente vinculadas con el sector productivo. En tal sentido, como se indicó, varios acusaron a la Universidad de no priorizar las carreras vinculadas a la agropecuaria. *El País*, decía “que nuestra Universidad, en el campo de la formación profesional, está muy alejada de las necesidades del desenvolvimiento del país, lo cual era particularmente aplicable a la preparación de técnicos necesarios para el desarrollo agrario”.³²⁶

En particular, desde tiendas derechistas se desplegó un discurso que priorizó el criterio de eficiencia y la adecuación al mercado de trabajo para alcanzar el “desarrollo” del país y superar la situación de estancamiento. Esta forma de concebir el desarrollo económico exigía la modernización de la enseñanza universitaria, cuyo objetivo principal debía ser formar técnicos que actuaran directamente en la producción, tal

³²⁴ Marchesi, A. y Markarian, V. “Solari y Trías...”, *Prismas*, n.º 23 (2019), p. 232

³²⁵ *Marcha*, 16 de noviembre de 1966. Disponible en: <http://anaforas.fic.edu.uy>

³²⁶ *El País*, 19 de julio de 1969, p. 5

como fue formulado en 1968 por el entonces ministro de Cultura de Pacheco Areco, el colorado Federico García Capurro.³²⁷ Las soluciones que el país necesitaba, entendía García Capurro, vendrían de aquellos que “son capaces de producir riqueza”. Apuntaba así al desarrollo de carreras intermedias y de especializaciones en áreas como ingeniería, química, agronomía y medicina orientadas a satisfacer las necesidades productivas y las demandas del sector privado.³²⁸

En 1972 se fundó la revista *Búsqueda*, a instancias del Centro Uruguayos de Estudios Económicos Sociales, con el propósito de difundir la doctrina liberal. Fue dirigida por Ramón Díaz, un abogado especializado en economía y febril partidario del liberalismo económico. Díaz fue profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho y a partir de 1968, cuando el presidente Pacheco Areco designó a técnicos y empresarios al frente de los ministerios clave en materia económica, ocupó el cargo de subsecretario de Industria y Comercio. Junto con el ministro Jorge Peirano Facio marcaron las grandes líneas de la política estabilizadora para reducir la inflación que ensayó ese Gobierno. Más tarde se incorporó a la OPP, donde impulsó una política de contención del gasto y de liberalización económica.³²⁹ A partir de 1972 se dedicó por entero a la revista.

La prédica de *Búsqueda* estuvo orientada a alentar el libre juego de las fuerzas económicas y a combatir el dirigismo que había predominado en la conducción económica del país. En esa línea enfatizó su independencia de los partidos políticos y su rechazo a las ideologías. Declaraba así que su “búsqueda” no era la de una ideología “no porque ya poseamos una, sino porque preferimos no tener ninguna”.³³⁰ Uno de sus fundadores, Carlos Basabe, por su parte, saludaba los cambios producidos en la ciencia económica que dejaba de lado las especulaciones y razonamientos teóricos que habían caracterizado el cultivo de esa disciplina para basarse “más en la reunión y examen de

³²⁷ *Tribuna Salteña*, 18 de junio de 1969. Biblioteca Nacional

³²⁸ *BP Color*. Edición Extraordinaria del 90º Aniversario del Bien Público, 27 de noviembre de 1968. Ver Jung, M. E., “De la Universidad del Norte a la Universidad para el desarrollo (1968-1970). Las posiciones de ‘las derechas’ sobre el futuro de la educación superior” *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 4, n.º 4 (2011)

³²⁹ Sobre la historia de *Búsqueda* ver Linn, Leticia, *Búsqueda: una historia para ser contada* (Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2007) Garcé, A. “La conciencia crítica desde Marcha a Búsqueda” en De Armas, Gustavo, Garcé, A. *Uruguay y su conciencia crítica. Intelectuales y política en el siglo XX* (Montevideo: Trilce, 1997)

³³⁰ Bruno, Mauricio “Contra el consenso político y por la racionalidad económica. El semanario Búsqueda de cara a las elecciones de 1984”. Ponencia presentada al *Seminario académico: Expectativas y Disputas en torno a la nueva democracia*, Montevideo, 15 al 17 de abril; *Búsqueda*, n.º 7, julio de 1972

los datos reales del mundo económico”³³¹. En 1972 recibieron con expectativa los anuncios del gobierno así como el nuevo plan económico elaborado por el equipo técnico de la OPP, en cuya redacción habían participado economistas liberales como Alberto Bensión y Ricardo Zerbino, quienes como vimos habían integrado los equipos de la CIDE.³³² En la perspectiva de *Búsqueda*, *técnico* era quien poseía conocimientos especializados y asumiendo su posición apolítica debía tener injerencia en la elaboración de los lineamientos de las políticas públicas. En cambio, reclamaban a los políticos mayor decisión y pragmatismo en su manejo y ejecución.³³³

El fracaso de los proyectos revolucionarios de izquierda a comienzos de los setenta facilitó que la representación del saber técnico pretendidamente “despolitizado” ganara terreno. Coadyuvó a ello el fortalecimiento del pensamiento liberal, que fue ganando espacios en los ámbitos académicos, así como en el campo económico y el político. La noción de *técnico* en tanto individuo que a partir de credenciales científicas específicas brinda un conocimiento objetivo de la realidad y, por tanto, es capaz de operar sobre ella a través de soluciones técnicas, terminó permeando en los ámbitos académicos, políticos y sociales a lo largo de las décadas siguientes. Paulatinamente, se fue instalando esta representación en el discurso público que coexistió con la idea de lo *técnico* como la aplicación de innovaciones tecnológicas y la capacitación de recursos humanos expertos en el manejo de esas técnicas en aras de mejorar la productividad. En este último sentido, se pensaba en profesiones y especializaciones vinculadas a la ingeniería, la agronomía o la química, pero también en el personal calificado para llevar a cabo diversas tareas volcadas al mercado. Destaquemos, además, que desde entonces la jerga especializada, particularmente aquella proveniente de la rama de la economía, tiñó los discursos públicos y de los actores políticos, siendo frecuente la apelación constante a palabras como rendimiento y eficiencia.

A modo de epílogo digamos que el modelo tecnocrático que adoptó el régimen dictatorial instalado a partir de 1973 brindó una nueva oportunidad a los nuevos expertos, especialmente a los economistas que sintonizaban con la doctrina liberal, de ocupar un lugar protagónico en la escena nacional. La dictadura, que se acopló a la idea de la planificación y adoptó la jerga técnica, confió en el conocimiento especializado y

³³¹ *Búsqueda*, n.º 6, junio de 1972

³³² Presidencia de la República. OPP. *Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977* (Montevideo: OPP, 1977)

³³³ *Búsqueda*, n.º 5, mayo 1972

en las vinculaciones internacionales de los técnicos civiles a quienes delegó la conducción de algunas áreas específicas como la política económica.³³⁴ A estos se sumaron “algunos agentes intelectuales” —en palabras del historiador Aldo Marchesi— adherentes al credo liberal y nucleados en torno a *Búsqueda*, transformada en revista en 1975 y en semanario seis años más tarde, que mantuvieron un discurso autocalificado de “apolítico” y “desideologizado” al tiempo que reivindicaron el papel de los técnicos en la dirección de los asuntos económicos del país.³³⁵ Gran parte de los economistas liberales que actuó en el período completó su formación en la Escuela de Economía de Chicago, cuna del pensamiento liberal.

Mientras esto ocurría, una parte importante de los científicos y especialistas de la Universidad de la República fue apartada de sus cátedras como consecuencia de las medidas implementadas por las autoridades dictatoriales para depurar el cuerpo docente. Además de las destituciones masivas, hubo una cantidad importante que optó por renunciar a sus cargos. El alejamiento de académicos de destacada trayectoria determinó que algunos servicios universitarios que habían contribuido al desarrollo de la investigación, y que en el caso de las ciencias sociales habían comenzado un proceso de especialización e institucionalización, circunscribieran sus actividades a la enseñanza. Así por ejemplo, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas quedó desarticulado y perdió el dinamismo que lo había caracterizado y el Instituto de Ciencias Sociales pasó a funcionar como Instituto de Estudios Sociales bajo la órbita del Rectorado interventor, cambiando sus áreas de interés y abandonando tanto la formación de sociólogos como las tareas de investigación a las que venía abocándose.

El régimen osciló entre la reacción a la situación universitaria previa al golpe y los intentos más o menos deliberados de reformulación académica. En términos generales en estos años se priorizaron las actividades de enseñanza con un claro repliegue de la investigación. La formación universitaria entonces se orientó hacia la creación de carreras cortas y la reformulación de otras existentes para satisfacer las demandas del mercado y los planes de gobierno, en sintonía con una forma de concebir la educación

³³⁴ Ver Presidencia de la República. OPP. *Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977* (Montevideo: OPP, 1972). Yaffé, J. “Proceso económico y Política económica durante la dictadura 1973-1984” en Demasi, Carlos, Marchesi, A.; Markarian, V.; Rico, A.; Yaffé, J.. *La dictadura cívico militar 1973-1985* (Montevideo: EBO, 2009)

³³⁵ Marchesi, A. “Una parte del pueblo uruguayo feliz, contento, alegre”: los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura en Demasi, C. y otros, óp. cit. *Búsqueda*, n.º 32 febrero de 1975

superior que tenía antecedentes en propuestas sostenidas por las derechas del arco político-ideológico en el período anterior.³³⁶

Los documentos oficiales estuvieron plagados de la jerga desarrollista y planificadora, como se observa en los cónclaves gubernamentales (reuniones periódicas entre autoridades civiles y mandos militares) que se realizaron en distintas ciudades del interior. En sus actas puede apreciarse, además de la retórica nacionalista exaltando el desarrollo de los valores patrióticos, el estilo de vida nacional o la importancia de la familia en la formación de los educandos, el énfasis en la asociación entre educación y desarrollo; vínculo que suponía la adecuación de aquella a las necesidades concretas establecidas en los planes del Gobierno y a las del sector productivo.³³⁷

Otro registro, en cambio, se observa en los informes elaborados en el marco del proyecto de mejora de la Udelar, producto del convenio firmado en 1976 entre el BID y la institución. La serie de informes finales estaba despojada de esa retórica nacionalista, más allá de algunas formulaciones generales al comienzo. Realizados por un equipo de consultores extranjeros y nacionales coordinado por el consultor en planeamiento de la educación superior, el argentino José Alberto Landi, asumieron el perfil técnico tan habitual en documentos de la época: presentación de información sistematizada, con cuadros y estadísticas, sobre los cuales se asentaban los diagnósticos y recomendaciones acerca de un amplio espectro de asuntos de la situación universitaria. Se sugerían orientaciones y propuestas de acción futura, imbuidas del espíritu planificador, que tenían un perfil modernizador y tecnocrático.

En suma, en el arco que va desde fines de los cincuenta hasta 1973 y aún después, la noción de *técnico* y de *lo técnico* fue variando en relación con la emergencia de nuevos saberes sobre la sociedad, las demandas estatales y del sector productivo. Resulta claro además que la Universidad de la República ocupó un lugar central en este proceso, tanto como espacio principal de la producción de los nuevos saberes sociales y de sus profesionales como en la incorporación de algunas concepciones vinculadas al desarrollismo y la planificación para pensar y diseñar sus propias propuestas de

³³⁶ Markarian, V., “La Universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-1984). En *Cuadernos Chilenos de historia de la Educación*, 4 (junio de 2015). Ver *Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Universidad de la República* (Convenio de Cooperación Técnica ATC/TF (SP) – 1513 – UR entre el estado uruguayo y el BID) (Montevideo: Udelar, 1978). 9 v.

³³⁷ Ver Cónclaves del Gobierno Uruguayo. *Resoluciones de los cónclaves gubernamentales: San Miguel, Colonia Suiza, Montevideo, Solís* (Montevideo: División Publicaciones, 1978), p. 139

transformación académica. Asimismo los discursos y los debates sobre su papel social y el rumbo que debía tomar, en auge en este período, estuvieron atravesados por las nuevas formas de concebir el conocimiento técnico y sus prácticas asociadas. La convicción de la primacía de las soluciones técnicas por sobre las políticas también permeó las discusiones sobre el futuro de la educación superior en Uruguay. Ante la proliferación de los diagnósticos sobre la crisis del sector educativo, y en particular la educación superior, emergieron propuestas que apostaron a la diversificación del sistema, abriendo la posibilidad del avance privado en este terreno. Las páginas que siguen se concentran en este asunto. Para ello se reconstruyen los intentos de una buena parte de las derechas partidarias, en alianza con las fuerzas conservadoras de la Iglesia católica, por crear una universidad privada en Uruguay.

2. Los intentos de crear una universidad privada y católica

Es hora ya, de que, por encima de prejuicios y de intereses políticos, todos nos unamos en la defensa efectiva de la libertad de enseñanza. La superior ha quedado sometida al monopolio de la Universidad de la República. Hay que fomentar la creación de establecimientos privados, que contribuirán a resolver los problemas culturales del país poniéndolo a tono con el estado de la enseñanza en el mundo contemporáneo. El mantenimiento de enseñanza oficial en monopolio, sea de hecho o de derecho, representa una forma de acción estatal antidemocrática. Los grandes dominadores de conciencias, así como los despotismos, aún los ‘iluminados’ han considerado el monopolio de la enseñanza como el instrumento más eficiente para tan detestable tarea. Contribuir a crear Universidades privadas para que la libertad de enseñanza sea una realidad y no un artículo muerto en la constitución es obra de civilización y misión esencial de los gobernantes.³³⁸

Las expresiones citadas, procedentes del consejero Haedo, sintetizan los fundamentos del Proyecto de Ley sobre Enseñanza Libre que presentó ante el CNG en abril de 1961. Condensan las expectativas así como las motivaciones políticas e ideológicas que animaron a un amplio sector de las derechas, en este caso los sectores mayoritarios del Partido Nacional y las fuerzas conservadoras de la Iglesia católica, a impulsar esta iniciativa. La posibilidad de instalar un centro universitario “libre” emergía así como una alternativa a los problemas que entonces se atribuían la enseñanza

³³⁸ “Proyecto de Ley sobre Enseñanza Libre, presentado por el señor Presidente del Consejo”. *Acta del CNG*, n.º 260, 4 de abril de 1961

superior pública y como contrapeso al creciente peso de las corrientes de izquierda en la Universidad oficial.

En esos años se fue instalando en el discurso público la necesidad de encarar transformaciones en un sistema educativo que, sumado a la creciente politización del estudiantado, se encontraba masificado y resultaba ineficiente para enfrentar los desafíos de la modernización económica y social. Como se analizó en el capítulo anterior, el ámbito académico primero y los diagnósticos de la CIDE sobre el sector educativo un poco más tarde refrendaron esta percepción al tiempo que sugirieron una serie de medidas para su reforma. La Universidad de la República se volvió en los albores de la década objeto de controversias para un amplio arco de sectores sociales y políticos que, en el marco de similares discusiones regionales y globales sobre el papel de las instituciones de conocimiento, se replantearon su orientación, funciones y diseño institucional.

En este contexto, azuzados por la crisis del sistema educativo y bajo la influencia del discurso desarrollista en boga, grupos y representantes sociales y políticos posicionados a la derecha del espectro político nacional pusieron en cuestión el monopolio de la educación superior por parte del Estado uruguayo y de la Udelar, promoviendo la creación de otras universidades (públicas o privadas, católicas o laicas). Al mismo tiempo reavivaban viejos reclamos del catolicismo vernáculo en relación con el papel del Estado en el ámbito educativo, el laicismo y la libertad de los padres de elegir la educación para sus hijos. Claro está que en esta oportunidad las fundamentaciones se tiñeron de la retórica anticomunista propia de los marcos doctrinarios que impuso la Guerra Fría, cuya influencia comenzaba a hacerse sentir con más fuerza en la escena doméstica y regional. Las páginas que siguen se proponen dar cuenta del surgimiento y posterior peripecia de esta propuesta, procurando desmenuzar los múltiples factores e intereses que concurrieron en ella.

A cuenta de mayor explicación en el próximo capítulo, digamos que la cuestión de una posible diversificación del sistema universitario no era una novedad. Es posible acreditar como antecedentes las primeras iniciativas volcadas a instalar centros universitarios en el interior del país, particularmente en las capitales departamentales del litoral norte, Salto y Paysandú, que emergieron en la década del cuarenta del siglo XX y circularon a lo largo de las décadas siguientes. La demanda fue impulsada por las

llamadas “fuerzas vivas” de esas ciudades —comerciantes, productores, profesionales, docentes o, de manera más general, lo que podemos denominar como clases medias ilustradas locales— interesadas en que sus hijos pudieran continuar sus estudios universitarios sin los costos que suponía el traslado a Montevideo, así como en el desarrollo de esas ciudades en los contextos regionales y nacional. En estos casos esta aspiración de carácter localista se insertaba en reivindicaciones más generales de incremento de la autonomía departamental respecto al sempiterno centralismo montevidiano.³³⁹ De hecho, los variados planteos en esta dirección fueron dirigidos a los poderes públicos y a la principal casa de estudios.

Comenzando la década del sesenta a estas razones se sumó la impugnación a la orientación político institucional y académica de la llamada Universidad de Montevideo, anticipando la fuerza que algunos debates cobrarían a fines de la década. En esa línea de pensamiento, en octubre de 1960, mientras se desarrollaba una huelga universitaria en reclamo de mayor presupuesto, el diario salteño *El Pueblo* arremetía contra el exclusivismo que la misma ejercía sobre la “cultura”, la “ciencia” y la “investigación” y, de paso, al monopolio de la capital del país, reclamando la creación de otros centros universitarios públicos o privados en el interior del país.

Si en otros sitios del país surgieran —como surgirán algún día— otras universidades, públicas, municipales o privadas, se demostraría en los hechos lo que es evidente en los principios. Esto es, que la Universidad de Montevideo, en las circunstancias actuales y habida cuenta la densidad de la población es, por el momento, la única. Pero que sería pretensión realmente absurda, por decir ridícula, la que quisiera asignarle a esa Universidad y únicamente a ella, el monopolio de valores espirituales, que por cierto, no admiten semejantes exclusivismos.³⁴⁰

El artículo discutía también los costos que suponía al país la “multiplicación de abogados, médicos, odontólogos, escribanos” y sostenía que la educación superior debía volcarse a la preparación de técnicos en las distintas ramas de la ciencia aplicada y de expertos en las disciplinas relacionadas con la producción agropecuaria, en su opinión, “un objetivo nacional más urgente y necesario”, adentrándose en la discusión más general sobre el rumbo y el rol que aquella debía asumir.³⁴¹

³³⁹ Ver Jung, M. E. *La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista. El movimiento pro-Universidad del Norte de Salto (1968-1973)* (Montevideo: CSIC-Udelar, 2018)

³⁴⁰ *El Pueblo*, 26 de octubre de 1960, p. 3

³⁴¹ *Ibíd*

Estas y otras motivaciones subyacían tras la campaña a favor instalar una universidad privada y católica que, coincidente en el tiempo con los planteos de *El Pueblo* de Salto, lanzaron varios medios de prensa de alcance nacional que respondían al Partido Nacional, desafiando el monopolio estatal y de la Universidad respecto a la enseñanza superior. El asunto se incorporaba a la agenda pública en un contexto más general de reacción de las derechas partidarias y sociales ante el avance de la movilización social y política que tuvo, como se analizará en detalle en el último capítulo, a la Universidad como uno de sus principales blancos. Coincidió, además, con una vigorosa protesta estudiantil por el presupuesto universitario, que acarreó una serie de manifestaciones callejeras, huelgas y ocupaciones, y con el progresivo resquebrajamiento de las relaciones entre las autoridades universitarias y los poderes públicos tal como fue analizado en capítulos anteriores.³⁴²

Otro de los detonantes fue la reelección de Cassinoni rechazado por las fuerzas conservadoras a causa de su filiación socialista y su proximidad con la FEUU, organización que sostuvo su candidatura. Ese año además, como parte de la reacción al avance de las izquierdas en el ámbito educativo, emergieron a la vida pública una variedad de organizaciones, en su mayor parte autodenominadas “demócratas”, que desarrollaron acciones contra la institución universitaria, protagonizando en algunos casos sonados episodios de violencia que contribuyeron al clima de polarización que dominó el período.

En este escenario, para los sectores derechistas la erección de otros centros universitarios resultaba una tentadora opción ante la llamada “infiltración comunista” en los establecimientos educativos. Asimismo, no puede obviarse la gravitación que ejercieron los intereses de sectores de la Iglesia católica que vislumbraron una ventana de oportunidad para concretar antiguas aspiraciones de avanzar en el campo educativo. Retornaron así a la discusión pública asuntos que algunos actores creían saldados como las relaciones Iglesia-Estado y el laicismo en la educación, provocando fisuras al interior de la coalición derechista que finalmente condicionaron las posibilidades de materializar este proyecto.

³⁴²Markarian, V., y otros 1958: *El cogobierno autonómico*, p. 142

La universidad privada. Católicos y Partido Nacional avanzan posiciones

La inusitada fuerza que cobró la propuesta entre fines de 1960 y comienzos del año siguiente se entiende en la concurrencia de dos factores estrechamente ligados. Por un lado, el contexto regional y global favorable al avance del sector privado y a la expansión del sistema de educación superior. Entonces, como ha señalado Andrés Bernasconi, el “modelo de universidad latinoamericana”, resultante de una configuración institucional heredada del modelo francés o napoleónico y de la influencia ejercida por el movimiento reformista de Córdoba de 1918, empezaba a mostrar sus fisuras. Las universidades latinoamericanas, en diferentes grados y niveles, se caracterizaban en aquel entonces por su autonomía frente al control gubernamental, formas democráticas de gobierno con la participación de docentes, estudiantes y egresados en la elección de sus autoridades y el financiamiento estatal. En estos años las universidades públicas pasaron a ser objeto de críticas cada vez más extendidas por su lentitud para satisfacer las demandas de sociedades “en plena modernización” donde sectores cada vez más vastos de las clases medias urbanas presionaban para acceder a la educación superior.³⁴³ En consecuencia la mayoría de los países del continente asistió a la proliferación de centros enseñanza superior públicos y/o privados y de institutos no universitarios de carácter terciario. En particular el avance del sector privado constituyó una respuesta a lo que entonces se señalaban como los principales problemas de las universidades públicas: politización, deterioro de la calidad académica y masificación. Con la progresiva agudización de la politización y radicalización de algunos actores universitarios, especialmente del movimiento estudiantil, tras la Revolución cubana, estas instituciones fueron vistas en oposición a los Gobiernos, perdiendo su apoyo y el de los elencos dirigentes.³⁴⁴ En el caso uruguayo, se agrega la particularidad, ya mencionada reiteradamente, de que la única universidad, pública y laica, desempeñaba una multiplicidad de funciones que en otros países se encontraban desde tiempo atrás diversificadas en múltiples instituciones.

Por otro lado, favoreció el avance privatizador el cambio de coyuntura política nacional, signada por el apartamiento del Partido Colorado del Gobierno, especialmente

³⁴³ Brunner, José J., *Educación Superior en América Latina. Cambios y desafíos* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 1990), p., 20

³⁴⁴ Brunner, J. op.cit. 1990, p. 20, Bernasconi, Andrés, “Is there a Latin American Model of the University?”, en *Comparative Education Review*v.52, 1 (2007),.p. 28

su ala batllista de posiciones fuertemente anticlericales y principal sostén de la política de laicización de la educación que llevó a cabo el Estado uruguayo. El Partido Nacional, aliado con el Ruralismo liderado por Benito Nardone, se mostró más abierto a fomentar las relaciones con la Iglesia católica y desde el inicio de su mandato manifestó coincidencias con las autoridades eclesiásticas sobre la función de la Iglesia como freno o contención al avance de las “fuerzas disolventes” así como a la “descatolización” de la sociedad. Varios integrantes del elenco gobernante, como los consejeros Martín Etchegoyen y el propio Haedo, destacaron con marcado tono moralista el papel de la religión en la inhibición de los impulsos y “vicios sociales”.³⁴⁵

La concordancia de intereses se reflejó en el viraje que en materia religiosa protagonizó el Gobierno.³⁴⁶ Efectivamente, el impulso a la llamada universidad “libre” de comienzos de la década venía a coronar una serie de reformas orientadas a fomentar la iniciativa privada en el campo de la enseñanza promovidas por el Partido Nacional desde el comienzo de su gestión, poniendo en cuestión los límites de la acción estatal en áreas sociales consideradas sensibles. Así, por ejemplo, en 1959 senadores herreristas expresaron en el Parlamento duras críticas a los fundamentos de la escuela pública y propusieron cambios sustantivos a la Ley de educación al tiempo que presentaban un proyecto de fomento escolar que preveía un subsidio a docentes de instituciones privadas. Etchegoyen, también herrerista, fundamentó esta política educativa alegando principios caros al catolicismo como el derecho de los padres a la elección de la educación de sus hijos mientras el Estado permanece como un “espectador inerte ante esa elección”.³⁴⁷ Etchegoyen, que había impulsado estos principios en otras coyunturas —por ejemplo durante el proceso de reforma constitucional de 1934 bajo la dictadura de Gabriel Terra— argüía la conveniencia de la formación integral del “hombre” de los aspectos de orden filosófico y religioso en el entendido de que “el tiempo de gestación del espíritu es irreversible”.³⁴⁸

En este sentido, una de las medidas más radicales del Gobierno blanco, que dio lugar a enfrentamientos con los consejeros del Partido Colorado, fue un artículo de la

³⁴⁵ Etchecury, Mario. Entre el Colegiado y el Vaticano II. Renovación eclesial y política en el catolicismo uruguayo pre-conciliar. 1958-1962 Monografía de pasaje de curso, Historia del Uruguay III, FHUCE, Udelar, 2004. (inédito), pp.155-74; *Acta del CNG*, n.º 260, 4 de abril de 1961

³⁴⁶ Etchecury, M., op.cit., p. 81

³⁴⁷ Ver *El Debate*, 1 y 3 de noviembre de 1959, p. 3. “El partido nacional y la escuela pública”

³⁴⁸ *El Debate*, 23 de noviembre de 1961, p. 1

Ley de Presupuesto que amplió considerablemente los alcances de las subvenciones y exoneraciones impositivas establecidas en la Constitución Nacional a las instituciones culturales y educativas privadas y religiosas (artículo 69).³⁴⁹ Los grupos anticlericales y laicistas de larga tradición en el país junto a organizaciones de docentes de educación pública levantaron sus voces contra las iniciativas de blancos y católicos. El consejero Amílcar Vasconcellos, fiel a los principios del batllismo clásico y, por tanto, exponente del laicismo radical, se lamentaba por el resurgimiento de discusiones sobre “temas religiosos que habíamos logrado que no tuvieran ese carácter”.³⁵⁰ A esta afirmación Echegoyen replicaba que el “problema religioso viene siendo planteado con cierta hostilidad, desde hace años, por instituciones que organizan [...] diversos actos y jornadas laicas, de propaganda, movimientos que se denominan de defensa de la escuela pública, con declaraciones y exhortaciones a favor de ésta, con sentido beligerante”, reviviendo las permanentes tensiones, polémicas y enfrentamientos entre liberales y católicos.³⁵¹

En estas circunstancias se abrió un espacio para que las jerarquías y el laicado católico retomaran con nuevos bríos su defensa de la educación religiosa. Históricamente la enseñanza en sus distintos niveles había sido el principal y más sensible punto de tensión y disputa entre católicos y liberales, consecuencia del

³⁴⁹ Ver RNLD, *Ley 12.802*, 30 noviembre de 1960, Artículo 134: “Reconócese como institutos culturales incluidos en el artículo 69 de la Constitución, a los efectos de la exención de impuestos, los seminarios o casas de formación de las congregaciones o instituciones de cualquier religión, las salas de biblioteca, salones de actos públicos, locales destinados a las clases de comercio, música, labores y economía doméstica y las canchas y centros de deportes y entretenimientos para jóvenes, fundados y sostenidos por las parroquias o instituciones que no tengan fin de lucro. Declárase asimismo exoneradas de todo impuesto nacional o departamental así como de todo tributo, aporte y/o contribución, a las instituciones culturales, de enseñanza, y a las Federaciones o Asociaciones Deportivas, así como a las instituciones que las integren, siempre que éstas y aquéllas gocen de personería jurídica. Quedan igualmente exonerados de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo, aporte y/o contribución los bienes, de cualquier naturaleza, de las instituciones mencionadas en el inciso anterior, así como los de las actuales y/o futuras Diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los de cualquier otra institución religiosa, que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a obras asistenciales, a obras educacionales y a actividades deportivas. La Sociedad de San Vicente de Paul (Conferencia de Hombres y Señoras) será eximida de toda clase de impuestos. Lo serán igualmente los bienes de las asociaciones benéficas de asistencia gratuita a los pobres, enfermos o inválidos. En el caso anterior, la circunstancia eximente se justificará ante el Ministerio de Hacienda. Las personas jurídicas Diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana, creadas o a crearse en el futuro por la Sede Apostólica, al formular las respectivas declaraciones juradas, indicarán los bienes no exentos a los efectos del pago del impuesto. Quedan incluidos en las exoneraciones de este artículo los partidos políticos permanentes o las fracciones de los mismos con derecho a uso del lema y los sindicatos obreros con personería jurídica. Puede consultarse en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12802-1960/134> última fecha de consulta 18/4/2020

³⁵⁰ *Actas CNG* n.º 340 a 342, 7-14 diciembre de 1961

³⁵¹ *Ibíd*

temprano proceso de secularización que vivió Uruguay. El punto de inicio de este proceso se ubica en el último cuarto del siglo XIX y el de su culminación con la separación institucional entre la Iglesia y el Estado, fruto de una trabajosa transacción entre ambos, consagrada con la constitución de 1919 e impulsada por el sector colorado liderado por José Batlle y Ordoñez. Varios autores coinciden en señalar que la pronta secularización formó parte de la construcción estatal y de la sociedad moderna en el país, “con el agregado de que sus principales promotores privilegiaron las vías institucionales y políticas para la concreción de sus ideas”. Desde entonces la Iglesia fue quedando confinada al ámbito privado mientras el Estado iba ocupando cada vez más espacios públicos, generando una fuerte competencia por “la construcción y ocupación de *lugares sociales*”.³⁵²

Según Gerardo Caetano, la privatización de lo religioso y la progresiva naturalización de modelo de laicidad radical se convirtieron en dos aspectos centrales del proceso secularizador y coadyuvaron a que esta última se volviera un elemento constitutivo de la identidad nacional y parte del imaginario social uruguayo.³⁵³ Claramente, esto desató enfrentamientos y controversias con el catolicismo, que reaccionó con mayor o menor fuerza en distintas coyunturas históricas. Sin duda en esa pugna la enseñanza devino un objetivo privilegiado. Las autoridades y el laicado católico reaccionaron con vehemencia a lo que catalogaban de embestida laicista y masónica, en defensa del papel primordial que debía asumir la religión para la conservación del orden y la cohesión social.³⁵⁴ Esgrimieron argumentos ya mencionados como la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a decidir la educación para sus hijos. No obstante, hasta mediados de siglo la oposición católica se concentró primordialmente en la educación primaria y secundaria. Recién en la década de los cincuenta fue ganando terreno la pretensión de contar con centros educativos confesionales de nivel terciario para el alumnado católico así como de institutos para la formación del cuerpo docente de los distintos niveles de enseñanza.

³⁵² Ver Caetano, Gerardo; Geymonat, Roger; Greising, Carolina y Sánchez, Alejandro. *El Uruguay laico. Matrices y revisiones* (Montevideo: Taurus, 2013). Da Costa, Néstor; Maronna, Mónica, *100 años de laicidad en Uruguay. Debates y procesos (1934-2008)* (Montevideo: Planeta, 2019)

³⁵³ Ver Caetano, Gerardo, “Laicidad, ciudadanía y política en el Uruguay contemporáneo: matrices y revisiones de una cultura laicista”, *Revista Cultura & Religión*, v. VII, 1 (enero-junio 2013), pp. 116-139; *La República batllista* (Montevideo: EBO, 2011)

³⁵⁴ Ver Caetano, G. y otros. *El Uruguay Laico* s.p. [Edición electrónica]

La movilización del catolicismo vernáculo se insertaba en un movimiento más general del mundo católico, iniciado durante la inmediata posguerra, con el fin de establecer una red interamericana en defensa de la educación católica contra las ideologías enemigas (comunismo y protestantismo), que se institucionalizó en el Congreso Interamericano de Educación Católica realizado en 1945 en Bogotá, Colombia, y cuyo punto de culminación fue la fundación de la Confederación Interamericana de Educación Católica Interamericana (CIEC). Desde este espacio se planteó un amplio abanico de temas, entre ellos la promoción de asociaciones nacionales de colegios católicos y la fundación de instituciones universitarias católicas en todo el continente.³⁵⁵ En Uruguay esta última aspiración se plasmó en el Primer Congreso Nacional de las Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Católicos (APAC, fundada en 1948) realizado en agosto de 1952. En la oportunidad se reafirmó el rechazo a la doctrina laicista y al laicismo “como política de gobierno, que tiende a arrancar de la sociedad y de la familia los ideales religiosos”, se exigió la igualdad de tratamiento entre la enseñanza oficial y privada y la supresión del monopolio estatal directo e indirecto de la enseñanza y se declaró la necesidad de consagrar leyes específicas que facultaran la instalación y el funcionamiento “a la manera de otros países, [de] universidades libres que den títulos profesionales, plenamente habilitados”.³⁵⁶

Un año más tarde, en setiembre de 1953, se reunió el Congreso Nacional de Educación Católica a instancias de la Unión Nacional de Educación Católica (UNEC), creada una década atrás, para coordinar los esfuerzos de las diversas congregaciones católicas en el área educativa en el marco de una fuerte preocupación por la “descristianización” de la sociedad uruguaya. El “Plan de Educación Católica” aprobado en la ocasión se proponía dar los pasos necesarios para la erección de una universidad católica. El padre Francisco Fernández, basándose en el principio de libertad de enseñanza que consagraba la Constitución Nacional en su artículo 68,

³⁵⁵ Alvarez, Satizabal, Gineth, Andrea. “Los orígenes de la *Confederación Interamericana de Educación Católica* como red. ¿una reacción integralista? (Bogotá 1945-Buenos Aires 1946)” En: Rodrigues, Cândido, Zanotto, Gizele, Caldeira, Rodrigo Coppe (orgs.) *Manifestacoes do pensamento Católico na América do Sul*.(Sao Paulo: Fonte Editorial, 2015), pp. 283-307. Ver *El Bien Público*, 5 al 15 de octubre 1946.

³⁵⁶ Ver Conclusiones aprobadas por el Primer Congreso Nacional de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Católicos, realizado en Montevideo los días 23, 24 y 25 de agosto de 1952”. En *Tribuna Católica*, Año XVIII, n.º 4, diciembre de 1952

enfaticó además que, teniendo en cuenta el perfil agropecuario del país, la misma debía apuntar al interior e impulsar estudios de agronomía, veterinaria y otras carreras similares; una exigencia presente en muchos de los discursos de época tanto en relación con la orientación de los estudios de la Universidad estatal como en la de aquellas que se crearán. En línea con algunas interpretaciones propias de los desarrollismos en auge, se deslizaba la orientación técnica y productivista que debía asumir la educación. Parece plausible afirmar que la especificación de la localización en el interior del país respondía tanto al sostenido incremento de la educación privada y católica secundaria fuera de la capital como a la intención de captar los reclamos localistas.³⁵⁷

También, señalaba el padre Fernández, debía considerar carreras tradicionales así como la creación de facultades de Filosofía, Ciencias de la Educación y Centros de Investigación Técnica. Dado lo ambicioso del proyecto y la falta de recursos no fue posible concretarlo en el corto plazo. En cambio, el 1 de abril de 1954 se fundó, a instancias de las religiosas del Sagrado Corazón, un Instituto de Filosofía con el fin de formar “educadores y pensadores católicos” para la enseñanza media, tal como estuvo planteado en las reuniones interamericanas y las nacionales.³⁵⁸ En 1961 se inauguró la carrera de Letras y unos años más tarde, en 1967, la de Ciencias, quedando conformado el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. En 1969 se incorporó Psicología y Periodismo y en 1974, ya durante el régimen dictatorial instaurado en 1973, se instaló el departamento de Historia. El Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras se convirtió en el germen de la Universidad Católica del Uruguay, creada en 1984 en los últimos estertores del régimen militar.³⁵⁹

En octubre de 1960 las páginas editoriales de los principales diarios de tiraje nacional vinculados al Partido Nacional (*Tribuna Popular, El Debate, El País, El Plata*) lanzaron una agresiva ofensiva a favor de la universidad privada. En medio de la huelga en reclamo de mayor presupuesto para la educación protagonizada por la FEUU, el diario oficialista *El País* se preguntaba:

Si los huelguistas o sus familias costearan sus estudios como ocurre en casi todas partes ¿abandonarían las aulas nuestros jóvenes en son de protesta porque son reducidos los gastos de la enseñanza que reciben? ¿Harían un

³⁵⁷ Sobre crecimiento de enseñanza privada fuera de Montevideo ver *Informe de la CIDE*, op.cit

³⁵⁸ Monreal, Susana, Universidad Católica del Uruguay: el largo camino hacia la diversidad (Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, 2005), pp. 64-67

³⁵⁹ Etchechury, M. op.cit., pp. 155-174; Monreal, S. op. cit.; pp. 64-93

movimiento de protesta para encarecer la preparación que reciben para graduarse? ¿Correrían el albur de perder el año duplicando los sacrificios pecuniarios que sus padres realizan para que ellos obtengan un título profesional?³⁶⁰

Tanto el tono como el contenido de los artículos que aparecieron de manera constante en el correr de esos meses evidenciaban la inspiración ideológica subyacente. Además de resaltar los beneficios académicos que traería aparejado contar con una nueva institución universitaria, sus impulsores aludían a la crítica situación de la Universidad de la República, filtrada por “tendencias extrañas a la enseñanza misma y reñidas con el espíritu de las instituciones”.³⁶¹ *Tribuna Popular*, por ejemplo, decía que mantener “una Universidad oficial” sin que existieran instituciones “particulares de igual índole” atentaba contra los “postulados de la libertad de enseñanza” y, por ende, se convertía “en un monopolio de hecho”. Formulaba que la “universidad libre” era una “experiencia que está más que justificada a esta altura del proceso de nuestra cultura en formación” y ponderaba “la emulación que acompaña siempre a la competencia”, al estimular la actualización de los planes de enseñanza y la renovación periódica de las cátedras. Por último, en la misma línea que su par *El País*, sostenía que:

La Universidad Libre deja las puertas abiertas a las víctimas de [la] situación [en que se hallaba la Universidad] permitiendo que la vida de estudio mantenga su regularidad y desde otro punto de vista, quitando estímulo y restando eficacia a las maniobras de los sindicatos estudiantiles dirigidos con fines políticos desde el mundo exterior a la universidad oficial³⁶²

El Debate, periódico oficial del herrerismo, remarcaba la posible apertura de un espacio de cultivo y difusión de la cultura, en el cual “los estudiantes formen su personalidad y adquieran sus conocimientos profesionales, sin la deformación política e interesada” de la universidad pública transformada en medio “proselitista” de los “postulados del marxismo”.³⁶³

En esta oportunidad, sin embargo, *El Bien Público*, vocero de la Unión Cívica, partido conservador de orientación católica, se mantuvo ajeno a la campaña. Más aún, desde sus páginas este sector se distanció, declarando no conocer la existencia del

³⁶⁰ *El País*, 28 de setiembre de 1960, p. 5 “La huelga y la enseñanza”

³⁶¹ *Tribuna Popular*, 16 noviembre 1960, p. 3

³⁶² *Tribuna Popular*, 16 de noviembre de 1960, p.3

³⁶³ *El Debate*, 16 de diciembre de 1960, p.3

proyecto. Sus opiniones se remitían a lo dicho públicamente por “quienes han pensado en que la situación actual de nuestra universidad estatal obliga a reflexionar sobre la conveniencia de buscar soluciones que ayuden a superar el actual estado de cosas”.³⁶⁴ Esta posición expresaba las disidencias internas del catolicismo en general y, especialmente, de esa fuerza política. Ya en la década anterior el Movimiento Social Cristiano, que agrupaba a los jóvenes del partido y abrevaba en el humanismo cristiano propiciado por el economista y religioso francés Joseph-Louis Le Bret, liderado por el arquitecto Juan Pablo Terra –propulsor además de los mencionados Equipos del Bien Común y del Claeh-, buscó reformar el partido y provocar un corrimiento hacia la izquierda, que finalmente condujo a su ruptura y a la fundación dos años más tarde, en 1962, del Partido Demócrata Cristiano.

Llegados a este punto vale aclarar que, aunque en un contexto histórico muy diferente, la libertad de enseñanza y la creación de universidades libres o privadas – aunque no confesionales- formaron parte del temario del 1er Congreso Internacional de Estudiantes Americanos realizado en Montevideo en 1908. En aquella instancia, los estudiantes que profesaban el credo liberal apoyaron su instalación en detrimento de las estatales.³⁶⁵ En los años aquí tratados, en cambio, la utilización del término “libre” adquiriría resonancias similares a la reciente experiencia argentina en relación con los debates sobre la “laica y la libre” que tanto impacto tuvieron en la vecina orilla. En 1958 el Gobierno de Arturo Frondizi reglamentó el artículo 28 del decreto n.º 6.403 de diciembre de 1955, que abrió en Argentina la puerta a la creación de universidades privadas con capacidad de expedir diplomas y títulos habilitantes. Esta disposición provocó fuertes enfrentamientos entre los opositores al decreto, muy especialmente el movimiento estudiantil, y sus partidarios católicos que fueron conocidos popularmente por el lema “laica o libre”. En momentos de expansión y diversificación de los sistemas de educación superior en América Latina, no es aventurado afirmar que estos procesos y movilizaciones regionales impactaron en el ámbito local, contribuyendo a generar un clima favorable para la emergencia de propuestas de este calibre. En esta oportunidad, se entrelazaban las aspiraciones de amplios sectores derechistas por afianzar la “libertad de enseñanza”, identificada con la posibilidad del sector privado y católico de contar

³⁶⁴ *El Bien Público*, 2 de diciembre de 1960, p.3

³⁶⁵ Ver Markarian, V., y otros. *1908: el año inaugural*, p.105. Por las discusiones acerca de este punto ver *Actas del Congreso Internacional de Estudiantes Americanos*, pp. 30-31

con centros educativos y avanzar en el terreno universitario, y por evitar el avance del comunismo en el mismo. Los debates en torno a la laicidad que se produjeron en el marco de estas discusiones se imbricaban así con los discursos y las dicotomías de la Guerra Fría.

El “Proyecto Haedo” de “Universidad Libre”: acciones y reacciones

En este escenario, y como corolario de esta campaña de prensa, en abril de 1961 el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Haedo, presentó el proyecto de Ley de Enseñanza Libre referido por el cual se habilitaba la creación de centros privados de educación superior, contemplando su eventual localización en el interior del país.³⁶⁶ Haedo en la oportunidad manifestó la expectativa de su sector de que esta ley se convirtiera en uno de los legados más significativos de la gestión del PN. Aparicio Méndez, catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Udelar y el sacerdote jesuita Carlos Mullin S.J. fueron sus principales artífices.³⁶⁷ El proyecto desarrollaba el artículo 68 de la Constitución Nacional y reglamentaba las diversas etapas de la habilitación de los establecimientos privados. Replanteaba, además, el grado de injerencia gubernamental en la educación superior al colocar las instituciones a crearse bajo el control inspectivo y fiscalizador del Ministerio de Instrucción Pública que, cabe recordar, tenía escasa influencia a causa de la amplia autonomía que gozaban los consejos que regían las cuatro ramas que integraban el sistema educativo uruguayo.

Los argumentos se centraron en la incapacidad del sistema de atender el crecimiento de la población estudiantil en todos sus niveles, haciéndose eco de los cuestionamientos y diagnósticos sobre la situación de la enseñanza que empezaban a circular en esos años. Recordemos que este asunto estaba siendo objeto de estudio de los científicos sociales tanto en ámbitos académicos —principalmente el Instituto de Ciencias

³⁶⁶ *Actas del CNG*, 4 de abril de 1961

³⁶⁷ Abogado especialista en derecho administrativo, fue docente de dicha materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República entre 1934 y 1955. Adquirió gran prestigio, incluso internacional, como jurista. Militó en el Partido Nacional, fue integrante de la Corte Electoral en los años 1940 y Ministro de Salud Pública durante el primer y segundo colegiado blanco entre 1961 y 1964. En 1971 se acercó al Movimiento Por la Patria; tras la celebración de las elecciones de noviembre de ese año, Méndez presentó un alegato de impugnación de los comicios por supuesto fraude. Integró el Consejo de Estado luego del golpe de Estado del 27 de junio 1973 y fue presidente de facto entre 1976-1981. Carlos Arturo Mullin Noceti, S.J. (Montevideo, 9 de agosto de 1914 - Minas, 17 de marzo de 1985) fue un sacerdote jesuita, Obispo en la Diócesis de Minas entre 1977 y 1985. Anteriormente ocupó el cargo de rector del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras.

Sociales— como en el Estado, con la creación del sector educativo de la CIDE. Sociólogos y economistas cuantificaron esa expansión del sistema y detectaron una serie de problemas asociados. Aún antes de que se publicara el informe de la CIDE, los números resultantes de las investigaciones en curso se habían propagado a través de informes preliminares y publicaciones académicas en distintos espacios públicos. En ellos se demostraba que entre 1940 y 1960 se produjo un aumento “acelerado” y de “gran intensidad” del estudiantado de nivel medio que tuvo como correlato la multiplicación de liceos públicos y privados existentes.³⁶⁸

En un conocido trabajo editado en 1963, el sociólogo Germán Rama adelantaba que el crecimiento de la población secundaria entre 1942-1960 fue superior en términos relativos en el interior del país, lo que atribuía al acceso de las “capas sociales medias y superiores” en zonas que carecían hasta entonces de establecimientos educativos. En la capital uruguaya, en cambio, este aumento reflejaba “una tendencia vertical” debido a la incorporación al sistema de jóvenes provenientes de hogares de “baja clase media y de clase popular”, explicaba Rama.³⁶⁹ El crecimiento vertiginoso de la cantidad de estudiantes llevó a que se fundaran decenas institutos secundarios en todo el país. En las ciudades del interior fue determinante la movilización de los propios residentes, “personas con destacadas y calificadas aspiraciones de crecimiento colectivo, profesionales e intelectuales”.³⁷⁰ También el sector privado había avanzado de modo sustantivo con la creación nuevos liceos, particularmente, fuera de la capital. El informe de la CIDE, del cual Rama fue uno de sus autores, indicaba que “los establecimientos habilitados proporcionalmente ha[bía]n crecido mucho más que los públicos, y el conjunto de la región lo ha[bía] hecho más intensamente que Montevideo”.³⁷¹ Por tanto, existía en el futuro inmediato una demanda potencial de servicios universitarios que explica en buena medida la mayor presión de los sectores medios y medio-altos en el caso de las capitales departamentales por disponer de mayores opciones educativas.

Asimismo, la insistencia en la función suplementaria del sector privado, que desde tiempo atrás prestaba servicios al desarrollo educativo y cultural, abonaba en esta

³⁶⁸ Rama, Germán. *Grupos Sociales y Enseñanza Secundaria* (Montevideo: Arca, 1964), p. 15

³⁶⁹ Rama, G. op.cit, pp. 20-21

³⁷⁰ *Ibíd*

³⁷¹ *Informe de la CIDE*, T. 1, pp. 124-126 De acuerdo con el informe entre 1942 y 1963 el alumnado de secundaria pasó de 12.927 a 44.570 en Montevideo y de 6.282 a 34.940 en el resto del territorio, donde la cantidad de liceos públicos aumentó de 24 a 69 y la de los privados de 5 a 38 en el mismo período

dirección ya que de acuerdo al texto del proyecto el crecimiento estudiantil acelerado estaba comprometiendo los recursos financieros del país. Constituía un “deber del gobernante” aceptar y estimular la colaboración de los privados, más aún cuando éstos “espera[ba]n las condiciones legales favorables para actuar”.³⁷² La Iglesia católica, imbuida de ese espíritu de “colaboración”, se había constituido, explicitaban, en un puntal al instalar institutos docentes (primarios, secundarios y de especialización) “modelo” en todo el territorio. Simultáneamente, el planteo de los representantes del Partido Nacional y la Iglesia comprendía la creación de centros universitarios fuera de Montevideo, lo cual permitía articular la iniciativa concreta con los antiguos reclamos de una variedad de sectores sociales de carácter localista.

La Universidad de la República, por su parte, era “ejemplar” en el “proceso de desbordamiento de la población estudiantil”, cuyo alumnado, según las cifras manejadas por los autores del proyecto, alcanzaba los 18.000 jóvenes provenientes de todo el país (el Registro Universitario dado a conocer ese año ubicaba la cifra en 15.320 con datos relevados en 1959).³⁷³ Ante este estado de cosas las opciones consistían, siempre según la exposición de motivos, en crear otras universidades, ampliar la existente “en la proporción requerida por el alumnado” o, en su defecto, fomentar la instalación de institutos privados en la capital y en el interior. La referencia abrevaba en las múltiples críticas que entonces empezaban a dirigirse a la Universidad oficial tanto por su incapacidad de satisfacer la creciente demanda como a su orientación excesivamente profesionalista, la cual entendían debía matizarse con el cultivo de disciplinas de carácter técnico vinculadas al sector productivo y a las fuentes de riqueza del país. En tal sentido, la noción productivista de la educación, resignificada bajo el influjo de los discursos desarrollistas, casaba bien con aquellas propuestas que apuntaban a localizar centros universitarios fuera de Montevideo al tiempo que anticipaba futuros debates en torno al perfil de la educación superior impulsados por fuerzas vinculadas a las derechas del espectro político nacional.

Como era de esperar, el “proyecto Haedo” despertó el inmediato rechazo de parte de la dirigencia universitaria, de la mayoría de sus representantes docentes y de la FEUU, que lo asociaron a la “campana sistemática de desprestigio” y a la “persecución

³⁷² *Actas CNG*, 4 de abril 1961

³⁷³ Ver Proyecto de Ley y *Registro Universitario* de 1961

ideológica” orquestada desde el poder político contra la Universidad de la República.³⁷⁴ El Centro de Estudiantes de Derecho, por ejemplo, en la misma línea que el resto de los gremios estudiantiles, denunciaba que el proyecto formaba parte de “una política reaccionaria propiciada por la oligarquía nacional, los intereses imperialistas aliados con los sectores reaccionarios de la Iglesia” y de la serie de ataques a la principal casa de estudios, como el retaceo presupuestal, los “asaltos” a los locales universitarios de parte de fuerzas derechistas o la ofensiva periodística contra la institución. Declaraba, por tanto, la incompatibilidad de la “calidad de universitario” y “la participación en las actividades de ese instituto” que se planteaba crear.³⁷⁵

La decisión del Poder Ejecutivo de crear el Conicyt o la contratación del Claeh para llevar adelante un estudio socio-económico sobre el medio rural abonaron la opinión extendida en gran parte de la comunidad universitaria de que “exist[ía] la voluntad clara de pasar por encima a la Universidad, de menospreciar sus posibilidades”, según aseguraba *Gaceta de la Universidad*.³⁷⁶ El ingeniero Óscar J. Maggiolo consideró el proyecto gubernamental “un peligro no ya para la Universidad Oficial, sino también para el propio país”, cuestionando sus justificaciones así como la participación del Poder Ejecutivo en una “iniciativa que s[o]lo debió ser privada”.³⁷⁷

Paralelamente, un puñado de egresados creó el Movimiento de Profesionales Universitarios en Defensa de la Universidad de la República. Eran en su mayoría figuras reconocidas del campo intelectual y político con claras vinculaciones a los sectores liberales de los partidos tradicionales o la izquierda, de larga trayectoria en la militancia anticlerical, como el doctor Pedro Díaz, docente cercano al socialismo de Emilio Frugoni y miembro del Ateneo de Montevideo; Carlos Quijano, director de *Marcha* o el mencionado Vasconcellos, por mencionar solo algunos. La radioemisora Ariel, vocera del sector del Partido Colorado dirigido por Luis Batlle Berres, se convirtió en tribuna de difusión de sus posiciones y actividades. Su objetivo, según declaraban sus dirigentes, era fortalecer “una opinión nacional en defensa de la Universidad cuyo ataque es injustificado y es necesario esclarecer”. La denominación de “libre” para el establecimiento proyectado era “equivoca” y tendía a confusiones ya que “la

³⁷⁴ Ver discusiones en *Actas AGC*, 10 de mayo de 1961, y 1 de junio de 1961 y *Gaceta de la Universidad*, n.º 19, diciembre de 1961

³⁷⁵ Declaración del CED- *Acción*, 5 de mayo de 1961

³⁷⁶ *Gaceta de la Universidad*, n.º 19, diciembre de 1961, pp. 6-7

³⁷⁷ *Marcha*, junio de 1961

Universidad de la República nunca ha ejercido presión ni exigido determinada afiliación política o filosófica a aquellos que están a cargo de sus cátedras”, decían.

La declaración de los profesionales destacaba la adhesión de la Universidad de la República a la tradición liberal, que había “hecho posible la convivencia de todos, sin exclusiones ni discriminaciones basadas en motivos de índole política, filosófica o religiosa”, y que a lo largo de su “trayectoria secular” había “ennoblecido y trascendido su función docente con el espíritu de claro civismo democrático.³⁷⁸ Condenaban una iniciativa que, impulsada por “motivaciones circunstanciales”, provocaba el “antagonismo” y la “sectarización”, “perjudicial[es] para el cabal cumplimiento de la misión de que debe estar investida una Universidad”.³⁷⁹ El apoyo de estos profesionales dejaba en evidencia los márgenes de acuerdo que aún existía entre amplios sectores de los partidos tradicionales y las autoridades universitarias.

Las discrepancias con algunas de las orientaciones de la casa de estudios todavía no habían tomado el cariz dramático de fines de los años sesenta. Esto obedecía, en gran medida, a que estas agrupaciones políticas aún mantenían importante predicamento en los órganos de cogobierno universitario. De hecho, buena parte de los integrantes del reformismo todavía adherían a los partidos Colorado y Nacional. Es el caso, por ejemplo, de los ingenieros Julio Ricaldoni y Oscar J. Maggiolo, entonces pertenecientes al ala de izquierda del Batllismo liderada por Zelmar Michelini e identificada con la Lista 99. Digamos por último que el Movimiento en defensa de la Universidad se sumó a un conjunto de actores y fuerzas sociales, integrado por la Asociación de Maestros de Montevideo, el II Congreso de Apoyo y Defensa de la Educación Pública y el Ateneo de Montevideo, que venía movilizándose en rechazo a los mencionados proyectos gubernamentales que, en líneas generales, apuntaban a destinar recursos estatales a la enseñanza privada.³⁸⁰

³⁷⁸ *Acción*, 2 de marzo de 1961, p. 2 y *El Día*, 2 de marzo de 1961, p. 10

³⁷⁹ *El Día*, 2 de marzo de 1961, p. 10

³⁸⁰ Ver *La Mañana*, 19 de diciembre de 1960, p. 3. En rigor, las agrupaciones mencionadas tenían vasta trayectoria en el combate a favor de los “principios de laicidad y gratuidad”, entendida la primera como neutralidad en materia de religión en las aulas. Sus esfuerzos conjuntos se formalizaron a comienzos de los años cincuenta en ocasión del primer Congreso Internacional de Laicismo (abril 1951) que tuvo lugar en Montevideo organizado por la Acción Laica Argentina, La Liga Argentina de Cultura Laica y la Acción Laica Sudamericana de Chile junto con la Federación Uruguaya de Magisterio, la Alianza por la Educación Laica (APEL) responsable de la publicación *Laicidad* y el Ateneo de Montevideo. Ver Da Costa Néstor; Maronna, M. *100 años de laicidad*

En la arena político-partidaria se opusieron al proyecto los partidos de izquierda y agrupaciones del Partido Colorado que tenían su origen en el batllismo como el grupo liderado por Luis Batlle Berres, asociado a la lista 15 y al diario *Acción*, y su ala conservadora, identificada con la 14 y el periódico *El Día*, que tenía a su frente a los hermanos Batlle Pacheco, hijos del líder histórico José Batlle y Ordoñez. Este último sector fue virando a la derecha en esta época, plegándose a la retórica anticomunista de la Guerra Fría, y manifestó coincidencias con el herrerismo y el ruralismo en el Gobierno. Sin embargo, pese a sus crecientes diferencias, ambas fuerzas del coloradismo aunadas por su común anticlericalismo, mancomunaron sus esfuerzos en la defensa de la secular “tradición liberal” del país y de sus instituciones. *Acción* y *El Día*, no dudaron en rechazar el “cuño confesional y dogmático” del proyecto.³⁸¹ La Universidad, decía *Acción*, debía ser “laica, popular y gratuita”. Se hacía necesario para ello la primacía estatal como garante del papel igualador de la educación mediante el libre acceso a ella a jóvenes de todas las clases sociales. “Las universidades privadas, por cuanto responden a determinada clase social, o a determinada orientación ideológica o religiosa, no cumplen la misión que les corresponde en la formación para el ideal democrático”. Mucho menos podían calificarse de “libres” cuando en ellas estaba ausente el “clima de libertad de pensamiento y de reflexión”.³⁸²

Estos grupos habían asociado el concepto de laicidad a la neutralidad en materia filosófica, política y, sobre todo, religiosa, una concepción que había regido las políticas estatales desde comienzos del siglo XX. En cambio, la fracción católica, conservadora y de impronta ruralista del PC omitió pronunciamientos expresos al respecto aunque respaldó con reservas la implementación de subsidios a la educación privada, “siempre que no fueran desatendidos los recursos que requería la enseñanza pública, considerados insuficientes”.³⁸³ Sobre este punto se mantuvo vigente la asociación entre el liberalismo anticlerical y las izquierdas, posibilitando la resistencia conjunta y mayoritaria tanto en el terreno partidario como social a la ofensiva católica sobre el ámbito educativo. Pocos años más tarde, en el marco de agudización de los conflictos de la Guerra Fría en el ámbito local, la noción de laicidad se reconfiguró y con ellas las alianzas partidarias y

³⁸¹ *Acción*, Universidad y Democracia, 10 de abril 1961, p. 3

³⁸² *Ibíd*

³⁸³ *La Mañana*, 20 y 24 de noviembre de 1961, p.4

sociales. Los viejos antagonistas —laicistas y anticlericales con los católicos— se unieron en su lucha contra el comunismo.

No obstante, uno de los frenos decisivos al proyecto provino de la propia Iglesia católica, donde no solo no alcanzó consenso sino que generó fuertes divergencias entre congregaciones, en las jerarquías y en la opinión pública católica. Recordemos que el catolicismo vivía desde fines de la segunda posguerra un proceso de renovación potenciado a causa del impacto del proceso cubano y del Concilio Vaticano II (1962-1965). Como expresión de estos cambios y reformulaciones, en los prolegómenos del Concilio se conformaron diversos grupos de laicos, alineados con las directivas de la acción católica especializada, que apuntaban a conjugar la fe y la vida mediante una lectura evangélica de las realidades sociales, según estudió Lorena García para el caso uruguayo.

Parroquia Universitaria fue una de las instituciones que emergieron con fuerza en este período con el propósito de tener llegada a los estudiantes universitarios. Junto a la Federación Uruguaya de Estudiantes de Acción Católica se manifestaron contrarios a la iniciativa.³⁸⁴ A esto sumaba la actitud de distanciamiento que mantuvo la Unión Cívica en ese momento en medio de una fuerte controversia interna que terminó en la fractura y la posterior fundación del Partido Demócrata Cristiano (1962). La convulsionada realidad del catolicismo local y global llevó a la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) a emitir una posición salomónica: expresó su apoyo a la fundación de una universidad católica, pero cuestionó la oportunidad del “proyecto Haedo”, indicando que debía concretarse en un ambiente exento de “polémicas divisionistas” y como resultado “de una cooperación, libre de parcialidad y, por lo mismo, nunca con el signo de la hostilidad hacia la enseñanza oficial”.³⁸⁵ *El Bien Público* se alineó con la postura del Episcopado y acusó al diario batllista *Acción* de difundir tergiversaciones e interpretaciones erróneas, “deformando [el] sentido profundo” de la declaración. A fin de “espantar suspicacias y despejar malos entendidos”, el periódico católico hacía algunas puntualizaciones:

³⁸⁴ García Mourele, Lorena <http://historiasuniversitarias.edu.uy/wp-content/uploads/2017/08/parroquia-universitaria-3.pdf> y sobre derrotero de las juventudes católicas y su radicalización por izquierda ver su artículo “Universidad, catolicismo e izquierdas en Uruguay”, *Contemporánea: Historia y problemas*, n.º 9, 2018, pp. 75-91

³⁸⁵ *Boletín Eclesiástico*, abril de 1961: pp. 129-130) citado por *El Bien Público*, 30 de marzo 1961, p. 3 Declaración de la Conferencia Episcopal del Uruguay sobre el problema de la Universidad Libre” *Boletín Eclesiástico*, Montevideo, Año XXXV, n.º 511 (abril de 1961)

1°. La Declaración no se mezcla con ningún propósito extraño a la acción episcopal. Se dice: “Trabajaremos para que llegue lo más pronto posible...” Queda claro que cualquier iniciativa de creación de una Universidad libre, de origen católico, debe tener su punto de partida en la acción del Episcopado y no de otros. 2°. Esa Universidad debe llegar ‘libre de parcialidad’ y, precisamente, el ejemplo que da para puntualizar la afirmación es que esa Universidad nunca se creará ‘con el signo de la hostilidad hacia la enseñanza oficial’.³⁸⁶

Así las cosas, en una atmósfera signada por la polémica y el enfrentamiento y un generalizado rechazo, el proyecto no logró pasar a la órbita parlamentaria y, por tanto, no prosperó. Las polémicas desatadas pusieron una vez más en cuestión el concepto de laicidad, de carácter polisémico e históricamente objeto de disputas. Esta noción empezaba a revelar variaciones en su significación a medida que los conflictos de la Guerra Fría se agudizaban. Este hecho fue particularmente relevante en el caso uruguayo donde, bajo la impronta del batllismo, la laicidad se consideró como un valor esencial y constitutivo de la identidad nacional.³⁸⁷ La interpretación de cuño anticlerical de los liberales uruguayos en estos años se mantuvo apegada a la idea de neutralidad o “ausencia de religión”, como han definido Alvez, Faget y Batista, tanto en el espacio público como en las instituciones educativas. Esta asociación, sin embargo, sufrió fuertes transformaciones luego de la posguerra cuando el foco pasó del catolicismo al marxismo o al peligro totalitario, desplazando el énfasis hacia lo político.³⁸⁸

En el caso de la Universidad, como hemos venido analizando, desde fines de los años cincuenta fuerzas derechistas dirigieron sus dardos contra la Universidad de la República donde, decían, el principio de laicidad era atacado por sectores minoritarios —fundamentalmente el movimiento estudiantil y parte del cuerpo docente— que inoculaban ideas foráneas. Real de Azúa a diez años de estos hechos advertía que la impugnación a la casa de estudios se basaba en “la reivindicación de la noción de laicidad en una significación nueva aunque a mi juicio no ilegítimamente deducida”. Esa “nueva significación” importaba, en palabras de Real, “lo que se denunciaba como

³⁸⁶ *El Bien Público*, 30 de marzo 1961, p. 3 “Una interpretación equivocada”

³⁸⁷ Da Costa, Néstor y Maronna, Mónica, *100 años de laicidad en Uruguay*

³⁸⁸ Ver Alvez Cavanna, Federico, Faget, Gustavo y Batista, Pía “El redil del concepto de laicidad “ajustista”. En: Rois, Diogo Da Silva (org.) *A prática da histórica intelectual e dos intelectuais: ideias, movimentos e acoes.* (Jundial: Paco Editorial, 2017), pp. 84-85

el absolutismo y el dogmatismo de una imposición ideológica y concretamente, la del marxismo”.³⁸⁹

A pesar del fracaso de este proyecto, la aspiración de habilitar instituciones de educación superior privadas permaneció latente. En efecto, a mediados de los sesenta, mientras se procesaban las discusiones sobre la reforma constitucional, el asunto de la libertad de enseñanza volvió a ser objeto de reclamos por parte de los actores políticos y sociales vinculados al catolicismo y al Partido Nacional, resurgiendo los rumores de reactivación del proyecto de universidad privada.³⁹⁰ La reforma constitucional promovida por los blancos en alianza con lo que quedaba del ruralismo de Nardone buscó afinar el artículo 68 de la Constitución que, entendían, se encontraba lejos de asegurar el carácter universal de la libertad de enseñanza que la propia formulación constitucional establecía.³⁹¹

Concretamente, proponía modificaciones que implicaban la eliminación de las condiciones (tener un número determinado de estudiantes becados) para la exoneración de impuestos nacionales y municipales a las instituciones de enseñanza y de carácter cultural a la vez que agregaba la obligatoriedad del control ideológico de los docentes a quienes se les exigía convicciones democráticas conforme a las bases de la Constitución Nacional.³⁹² Este último requisito iba en línea con un conjunto de iniciativas promovidas por el herrerismo y las agrupaciones de derecha en ámbitos legislativos y del Poder Ejecutivo desde comienzos de la década para frenar el “avance del comunismo” y en defensa de la “nacionalidad”, que incluyeron intentos de ilegalizar al Partido Comunista, la reglamentación sindical o la exigencia de una prueba de filiación democrática a quienes ingresaran a la administración pública.³⁹³

Para *El Debate*, vocero del herrerismo, la nueva redacción de los artículos 68 y 69 constituía “un progreso cierto sobre el texto actual”, pero ante todo permitía terminar “con los últimos coletazos del sectarismo batllista que negando a Dios y a la religión,

³⁸⁹ Real de Azúa, C., *La universidad*, 1992, p. 75

³⁹⁰ *El País*, 14 de mayo de 1966, p. 5

³⁹¹ *Ibíd*

³⁹² La redacción decía: "No podrá ejercer la docencia quien no sustente convicciones democráticas conforme a las bases de nuestro orden constitucional. La falta de esa condición determinará la pérdida del cargo. Los Consejos respectivos de los Entes realizarán dentro de los seis meses de la vigencia de este texto, el control consiguiente del personal actual, y lo mantendrán permanentemente en lo sucesivo. Se reputará omisión grave la falta de su cumplimiento por el Consejo respectivo o por sus autoridades dependientes." Agradezco esta información a Óscar Sarlo y a Gerardo Caetano. Ver también: *El Debate*, 8 de octubre de 1966, p. 5

³⁹³ Broquetas, M., *La trama autoritaria*

pretendió terminar con el sentimiento católico de la ciudadanía”.³⁹⁴ Finalmente, los partidos tradicionales acordaron una propuesta de reforma constitucional común, la llamada “Reforma Naranja”, que fue plebiscitada y aprobada en noviembre de 1966. Como parte de la transacción se mantuvo la parte de la redacción nacionalista que ampliaba el régimen de exoneración de impuestos y subsidios a la educación privada pero en cambio eliminó la vigilancia ideológica al cuerpo docente.³⁹⁵

En ese contexto se propagaron rumores y acusaciones de que sectores del catolicismo, en connivencia con el Partido Nacional, intentaban relanzar el proyecto de universidad privada. La FEUU denunció ante el CDC las gestiones que estaba realizando la Iglesia católica para concretar esta iniciativa que, aseguraban, contaba con el apoyo económico de la Alianza para el Progreso y se orientaba a la “formación de técnicos en disciplinas vinculadas a la producción y a la industria agropecuaria”.³⁹⁶ El asunto resurgía mientras todavía circulaba información acerca del Proyecto Camelot que, como se señaló, generó profundo rechazo en amplios sectores de la comunidad universitaria y entre los intelectuales afines a la izquierda.

La documentación diplomática de EEUU confirma esta versión al atestiguar el interés de ese país en reactivar la propuesta de instalar una centro de enseñanza superior privado en el interior del Uruguay, donde se dictarían las carreras de agronomía, ciencias veterinarias y posiblemente economía e ingeniería. A tales efectos, mientras se procesaban los debates en torno a la reforma constitucional, representantes de la embajada mantuvieron conversaciones con varios dirigentes políticos. En junio de 1966, el embajador Henry Hoyt tuvo un intercambio al respecto con el consejero Vasconcellos, quien consecuente con sus posiciones anticlericales se mostró renuente a la posibilidad de crear universidades privadas en el país.³⁹⁷

Asimismo, a los efectos de subrayar los beneficios de la diversificación del sistema universitario los informes de la diplomacia hacían referencia a los resultados positivos que había reportado la habilitación en 1958 de este tipo de instituciones en Argentina. Estas mismas fuentes prueban además que, comenzando 1967, sectores del catolicismo uruguayo, a través de María Luisa Coolighan, profesora e integrante del Instituto de

³⁹⁴ *El Debate*, 8 de octubre de 1966, p. 5

³⁹⁵ Carlos Demasi, Monica Maronna y Óscar Sarlo me aclararon dudas sobre este punto

³⁹⁶ *Actas CDC*, 1 de setiembre de 1966, p. 1253

³⁹⁷ *NARA*, Reunión con el embajador Henry Hoyt, 7 de junio de 1966. Sobre las posturas de Amílcar Vasconcellos y su difusión en el diario *Acción* ver Da Costa y Maronna, óp. cit., p. 162

Cultura Católica, establecieron contactos con esa oficina con la finalidad de conseguir apoyos para una futura universidad católica en el país.³⁹⁸ Pese al claro interés en la propuesta, el embajador se mostraba consciente de las trabas constitucionales que existían para su implementación.³⁹⁹ El “proyecto Haedo” no fue reactivado, ni tampoco se conoce otro alternativo. Así las cosas, el impulso de los católicos y de las fuerzas del nacionalismo y del ruralismo una vez más encontró pesados frenos. Pasarían 20 años más para que en Uruguay se habilitaran las universidades privadas.

Real de Azúa, en el texto citado, hacía una síntesis a la vez que daba su propia interpretación de los primeros “barruntos” al inicio de “los ocho años blancos” (1959-1967) para implantar “universidades privadas, según el modelo estadounidense o del más reciente y modesto patrón argentino”, que una y otra vez tropezó “con la cortapisa constitucional del monopolio de la expedición de títulos por parte de la Universidad estatal”. Como señalaba Real, este obstáculo resultaba decisivo ya que “hacía poco atractiva cualquier empresa de universidad privada”. La Constitución que finalmente fue aprobada en 1966, “que hubiera sido magnífica coyuntura para obviar la dificultad” finalmente no innovó en esta materia. “En el orden de las hipótesis es probable que la fuerte impronta masónica del grupo que la promovía haya tenido algo que ver con el descarte y aun el mero olvido de una iniciativa que siempre, clásicamente, se vio vinculada a los intereses católicos del país”, concluía Real de Azúa.⁴⁰⁰

En suma, y en sintonía con esta interpretación, puede afirmarse que la instalación de un sistema privado (y sobre todo católico) de enseñanza superior chocó con valores arraigados en la tradición educativa uruguaya: la laicidad y la gratuidad y, por tanto, no contó con el apoyo del sistema político mayoritariamente apegado a esa tradición liberal que se remontaba al siglo XIX. La temprana secularización del país determinó que la Universidad uruguaya, como han indicado los historiadores París y Oddone, fuera fundada “bajo el patrocinio ideológico de la masonería y no de la iglesia” y que en ella primara un pensamiento filosófico “independiente de toda ideología religiosa”.⁴⁰¹ Sin embargo, estas valoraciones no ponderan entre las razones de su fracaso el peso de las

³⁹⁸ NARA, RG59 Carta de John L. Topping (Embajada de Estados Unidos) al jefe de Asuntos Políticos de Uruguayos, Departamento de Estado, George H. Thigpen, 26 de enero de 1967

³⁹⁹ NARA, RG59 Informe del embajador de EEUU en Montevideo, Henry Hoyt, al Departamento de Estado, 27 de setiembre de 1967

⁴⁰⁰ Real de Azúa, Carlos. *La Universidad*, pp. 44-45

⁴⁰¹ Oddone, Juan; París de Oddone, Blanca, op.cit., pp. 127-128

disidencias al interior del catolicismo a nivel nacional e internacional, convulsionada y atravesada por los dilemas político-ideológicos de un tiempo marcado por el conflicto global de la Guerra Fría.

Mientras tanto, en el correr de la década del sesenta, diversos actores locales reanudaron sus reclamos de expandir la cobertura de la educación superior pública hacia el norte del país. Aunque tuvieron escasa repercusión en el ámbito público y universitario, lo cierto es que en esos años circularon una variedad de proyectos orientados en esa dirección, que fueron fortaleciendo una corriente de opinión que más tarde sería capitalizada por la coalición de derechas que se fue conformando y consolidando a fines de la década.

Entre 1963 y 1968 fueron presentados a la Cámara de Diputados cuatro proyectos: el del diputado herrerista José Pedro Lamek (1963), que disponía instalar una universidad en la ciudad capital del Departamento de Tacuarembó; el de creación de la Universidad del Litoral (1964), del diputado colorado por Paysandú, José Cerchiaro San Juan, con sede en esa ciudad; el de Creación de la Universidad del Norte en Salto (1966), del diputado colorado por Salto Martín Boada Pettiati, y un último proyecto redactado por el diputado Jaime Montaner, que retomaba la iniciativa de crear un centro de educación superior en Tacuarembó.⁴⁰² Más allá del obvio y más inmediato interés de las élites dirigentes y de las clases medias ilustradas de las capitales departamentales por llevar la universidad a sus áreas de influencia, los proyectos presentan algunas características comunes en relación con sus orientaciones.

En primer lugar, en sintonía con el auge planificador, fundamentaban la solicitud en los diagnósticos de la CIDE así como en la información producida por esta, en particular el censo demográfico de 1963, aún cuando no se abundaba de manera explícita sobre la problemática específica de la Udelar a la que el informe del sector educación aludía. Se apelaba a argumentos demográficos, geográficos e históricos que buscaban demostrar la necesidad de desarrollar la zona norte, en un intento de conjugar los intereses locales y regionales con el desarrollo nacional y resolver lo que consideraban desequilibrios entre el norte y el sur del país que alteraban “la

⁴⁰² *Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes (DSCR)*, 4 de diciembre de 1963, 91, 2 de julio de 1964, n.º 992, tomo 565, pp. 377-378 y 17 de agosto de 1966, pp. 194-200, 5 de diciembre de 1968, pp. 55-56

organización armónica de la Nación”.⁴⁰³ Sobre la base de la información proporcionada por el estudio del organismo técnico y de los señalamientos realizados respecto a las deficiencias del sistema universitario y a la necesidad de su reforma, se argumentaba la conveniencia de ampliar la cobertura geográfica de la educación superior a todo el país. “Causas de extrema necesidad, factores esenciales de orden económico-social y un evidente sentido de descentralización administrativa” hacían necesario tomar medidas para abrir “nuevos cauces” a la enseñanza superior, decía el diputado Cerchiaro San Juan.⁴⁰⁴

Se consideraba además, y así era señalado por alguno de los proyectos, que la descentralización del sistema terciario de enseñanza podía dar una respuesta a la expansión de la enseñanza secundaria que, como dijimos, se venía produciendo de modo muy agudo en las ciudades del interior desde la década del cuarenta, abriendo opciones educativas terciarias para sus cada vez más numerosos egresados. En segundo lugar, a excepción del proyecto de Paysandú que ponía el foco en las implantación de las “distintas facultades que integran el ciclo completo de la Universidad de la República”, coincidían en el planteo de potenciar las disciplinas vinculadas al agro, como agronomía y veterinaria, con el objetivo de formar recursos humanos —“crear el elemento productor, es decir el técnico, perito capacitado”— necesarios para el desarrollo productivo de esas regiones y del país, retomando así un viejo reclamo a la Universidad de la República de trasladar esas facultades al interior del país.⁴⁰⁵

Pero en esta coyuntura en particular resurgía revestida de las preocupaciones y del lenguaje de los desarrollismos, poniendo en el centro de la discusión cuál debía ser la orientación de la educación superior y su relación con el desarrollo. Esto queda claro en la exposición del legislador de Tacuarembó que preveía la instalación de las Facultades de Ciencias Veterinarias (que expediría títulos de doctor médico veterinario y el de perito veterinario), de Ciencias Agronómicas (ingeniero agrónomo y perito agrónomo) y de Ciencias Económicas (títulos de doctor en ciencias económicas y administración, contador público, perito mercantil y tenedor de libros), así como las escuelas de

⁴⁰³ Ver exposición de motivos del *Proyecto de Universidad del Norte* en Tacuarembó, *DSCR*, 4 de diciembre de 1963

⁴⁰⁴ Ver exposición de motivos del *Proyecto de ley de Creación de la Universidad del Litoral*, *DSCR*, 2 de julio de 1964, pp. 377-8

⁴⁰⁵ Ver proyecto de Lamek para Tacuarembó, *DSCR*, 4 de diciembre de 1963

Servicio Social y de Explotación de Huertas, Granjas y Jardines.⁴⁰⁶ Como puede observarse, se contemplaba la expedición de titulaciones de carácter intermedio con las que se pretendía cubrir la demanda personal calificado para el manejo de los establecimientos rurales; también este un asunto de fricción con las autoridades universitarias, sobre todo luego que la facultad de Agronomía convirtiera a la Estación Experimental de Paysandú en un Centro de Investigación Agropecuaria, suprimiendo los cursos de técnicos agropecuarios.

En una dirección similar apuntaba el proyecto de Universidad del Norte del diputado Boada, que proponía la apertura de las Facultades de Agronomía y la de Veterinaria y agregaba la de Derecho y Ciencias Sociales. En este último caso consideraba necesario aprovechar la experiencia iniciada en esa capital norteña en 1956 con la instalación de cursos universitarios de Derecho y Notariado. Se anticipaba a posibles cuestionamientos porque, como él mismo reconocía, los estudios en derecho no atendían a una “finalidad social”, teniendo en cuenta la plétora de abogados que había en el país. En cambio, las carreras de agronomía y de veterinaria eran “de fácil justificación” y aludía a las cifras del informe de Educación de la CIDE respecto a la distribución por carreras de la población estudiantil. Es así que resultaba “ocioso, a esta altura, hacer hincapié en la urgencia de intensificar la producción agropecuaria, que constituye el pilar básico de nuestra economía.” Es decir, se precisaba disponer de “técnicos indispensables y aptos” y para ello había que reorientar la enseñanza universitaria “hacia el desarrollo progresivo del país”.⁴⁰⁷

A diferencia del “proyecto Haedo” o de las iniciativas orientadas a la privatización del sistema educativo superior, los proyectos de crear universidades en el interior no cuestionaron el monopolio estatal de la educación. Estos establecimientos asumirían un carácter público funcionando como entes autónomos del Estado. En forma transitoria estarían regidas por la Ley Orgánica de 1958 y su conducción se encargaría a un consejo integrado con representantes del Poder Ejecutivo y del resto de los entes de enseñanza pública (secundaria, UTU y Universidad de la República). Tras la instalación de las mismas se debería elaborar y aprobar un estatuto orgánico específico y se designarían sus autoridades definitivas. No es difícil deducir que esta formulación, además de aprovechar la legislación existente en la materia, eludía profundizar en temas

⁴⁰⁶ *Ibíd*

⁴⁰⁷ *Proyecto de Universidad del Norte* de Martín Boada, *DSCR*, 17 de agosto de 1966, 194-200

que entonces eran motivo de controversia como los alcances de la autonomía y su relación con el Poder Ejecutivo, la forma de gobierno y la relación con la Universidad de la República.⁴⁰⁸ Aunque no tuvieron eco parlamentario, los proyectos aludidos dejaron en evidencia la persistencia de los reclamos descentralizadores así como las limitaciones de las dirigencias locales para materializar sus demandas sin contar con el apoyo del Gobierno nacional.

La desconcentración geográfica no fue visualizada por los Gobiernos de turno ni por las dirigencias partidarias a nivel nacional como una solución a los problemas que afectaban a la educación superior, como también queda de manifiesto en el informe sobre el sector elaborado por la CIDE, que no contempló esta opción. Los partidos políticos no funcionaron como mediadores de los intereses de los actores regionales y locales que intentaron instalar esa demanda en la esfera estatal.⁴⁰⁹ En cambio, la opción por la erección de instituciones privadas parece haber concitado un mayor apoyo en ámbitos afines a las derechas partidarias y católicas. Concurrieron en ella intereses de diverso signo: sectoriales, político-ideológicos y corporativos, entre otros, que atravesaron la dinámica izquierda-derecha posibilitando la conformación de una alianza entre actores del universo educativo privado, del catolicismo conservador y las derechas. La llamada “universidad libre” se proponía llenar los vacíos que dejaba un sistema universitario inadecuado y politizado, al tiempo que procuraba captar otros grupos cubriendo sus demandas específicas. En el centro de las polémicas se ubicaron una diversidad de temas como la libertad de enseñanza y la laicidad, la lucha contra el comunismo, la ampliación geográfica de la cobertura universitaria o el componente técnico y productivista que debía asumir la enseñanza universitaria. Como analizaremos en el próximo capítulo, estos asuntos tomaron forma a finales de la década, tras el giro autoritario, cuando las derechas lograron articular un programa de modernización universitaria. Es posible afirmar que el proyecto descentralizador y, en particular, el devenir del Movimiento Pro Universidad del Norte reconocen un antecedente en los proyectos y debates aquí analizados.

⁴⁰⁸ Debe hacerse la salvedad de que el único proyecto que preveía el gobierno tripartito fue el proyecto del diputado salteño Martín Boada Pettiati. *DSCR*, 17 de agosto de 1966, pp. 194-200

⁴⁰⁹ Sobre el carácter “partidocéntrico” del sistema político uruguayo ver Caetano, Gerardo, Rilla, José y Pérez, Romeo. “La Partidocracia uruguaya. Historia y centralidad de los partidos políticos” *Cuadernos del CLAEH*, vol. 12, n° 44 (1987)

En síntesis, en estos años la diversificación de la educación superior, a través de la creación de nuevas universidades, públicas o privadas, laicas o católicas, emergió desde círculos derechistas como una alternativa para resolver los problemas asociados a lo que se entendía como la masificación, la baja calidad académica y la politización en las universidades públicas. Las disputas sobre el papel del conocimiento técnico y de los técnicos —y qué sentidos le asignaron diversos actores— para superar el “estancamiento productivo” —otro concepto que se instaló en el discurso de la época— abrevaron en y abonaron los debates al interior de la Universidad y entre esta y el poder político sobre el futuro de la educación superior. La idea de que la Universidad debía dedicarse a la capacitación de profesiones orientadas al sector productivo fue ganando fuerza en el discurso y las propuestas promovidas por algunos sectores de la derecha, en un momento de generalizada y fuerte apuesta por soluciones que privilegiaban las dimensiones técnicas sobre las políticas.

CAPÍTULO III. LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TRAS EL GIRO AUTORITARIO (1968-1973)

En medio de una crisis económica sin control y de la consecuente agudización de la agitación social, en la primavera de 1967 el presidente colorado Óscar Gestido, aplicó Medidas Prontas de Seguridad (MPS) y reanudó las gestiones con el FMI abandonando sus iniciales oscilaciones desarrollistas.⁴¹⁰ Apenas unos meses más tarde murió repentinamente y asumió en su lugar el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco, quien profundizó la línea fondomonetarista y el ajuste autoritario de su antecesor. Con él, Uruguay inició un camino sin retorno que un lustro más tarde tendría como desenlace el quiebre institucional. El año 1968 marcó un momento bisagra en este proceso. Al incremento de la protesta social se sumó el protagonismo de un vigoroso y altamente politizado movimiento estudiantil en la escena pública y el recrudecimiento de las acciones armadas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). La consecuencia fue un endurecimiento de la represión estatal. La radicalización política de los estudiantes y la oposición de las autoridades universitarias a la política represiva de Pacheco ambientaron la ruptura definitiva entre el Poder Ejecutivo y la Universidad de la República. La educación y muy especialmente esa casa de estudios se transformaron en campo de lucha pero también en objeto de fermentales debates públicos e institucionales en relación con sus funciones sociales y características.

Este capítulo se propone reconstruir los esfuerzos de un heterogéneo conglomerado de fuerzas derechistas por conformar, a partir de demandas y propuestas de diverso origen, un programa de modernización de la educación superior orientado al sector productivo y el mercado. Desde este campo político, como vimos, se habían tentado sin éxito diversas alternativas de diversificación del sistema debido a la percepción de que no era posible imponer cambios en el interior de la Universidad de la República. A partir de 1968, con la fundación del Movimiento pro Universidad del Norte (MpUN) en Salto, cobró fuerza la iniciativa de erigir una nueva universidad, localizada en el interior del país y en oposición a la Udelar tanto en sus contenidos académicos como en su organización institucional. Con base en los diagnósticos de las décadas previas, las

⁴¹⁰ Las Medidas Prontas de Seguridad son un mecanismo de excepción previsto por la Constitución que habilita al Poder Ejecutivo el recorte en forma transitoria de las garantías individuales en casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior

discusiones giraron en torno al modelo que debía adoptar esta nueva universidad: la preparación para las profesionales liberales, la transformación en centros dedicados a la investigación científica y tecnológica o la instalación de instituciones terciarias de perfil técnico, entre otras variantes manejadas en la época.

En primer lugar, el capítulo pone el foco en la deriva hacia la derecha de una antigua demanda localista que originalmente no tuvo adscripción político-partidaria. Esta logró trasvasar el ámbito local al ser apropiada por diversos grupos de las derechas partidarias, órganos de prensa que respondían a estas tendencias así como de movimientos sociales derechistas como la agrupación radical Juventud Uruguay de Pie (JUP), de relevante actuación en el período que nos ocupa. Asimismo, obtuvo el respaldo del presidente Pacheco y, especialmente, del ministro de Cultura, Federico García Capurro. En segundo lugar se analiza el proceso de inclusión de este proyecto en un plan más vasto de reforma educativa. García Capurro fue una figura clave en la articulación de este programa modernizante, que incluía la coordinación de la enseñanza con la instalación de un Consejo Superior de Enseñanza (Cosupen), recortando las autonomías de cada rama y dando mayor injerencia al Poder Ejecutivo, y la fundación de lo que llamó la “Universidad para el desarrollo”.

Junto a los planteos más tradicionalistas en torno a la finalidad de la educación superior, que defendían la preparación para las profesiones liberales, surgieron otros de corte modernizador y tecnocrático, en consonancia con las ideas preconizadas en la región por los organismos y consultores estadounidenses como Rudolph Atcon, que enfatizaron la necesidad de instaurar carreras cortas de carácter técnico y aplicado, organizadas con criterios de eficiencia y volcadas al mercado y el sistema productivo.

Así, el último apartado intenta dar cuenta de la circulación de ideas y agendas en relación con la modernización de las universidades. Para ello se explora la similitud de los planteos del MpUN y del ministro de Cultura, entonces su portavoz más influyente, con otros proyectos de reforma que, coincidentes en el tiempo, intentaron implementarse en la región, entre los que destacan el *Plan de reestructuración de la Universidad del Buenos Aires* propuesto por Raúl Devoto y el *Plan de Nuevas Universidades* de Horacio Taquini o, de modo más general, la *Universidad Latinoamericana* redactado por Atcon. De este modo, es posible observar la inserción de los debates locales en discusiones más amplias. En el ambiente general de

radicalización que vivía el país, las distintas visiones respecto a estos asuntos pusieron de manifiesto no solo la existencia de tendencias académicas discordantes sino también la confrontación de ideologías políticas opuestas.

1. El Movimiento pro Universidad del Norte y la deriva a la derecha

En setiembre de 1968, cuando todavía estaban en su apogeo el ciclo de protesta estudiantil y las violentas escaramuzas con las fuerzas represivas que causaron los primeros jóvenes muertos en las calles, los periódicos de la ciudad de Salto anunciaban la constitución del MpUN. El objetivo era impulsar un proyecto de ley de creación de una universidad con sede en esa capital departamental y con jurisdicción en los seis departamentos de la región norte del país.⁴¹¹ Padres, docentes, profesionales y comerciantes, algunos de ellos representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas de Salto, colmaron los salones del Club Salto Uruguay para expresar su adhesión y elegir las autoridades del novel movimiento, encabezadas por José Antonio Varela.⁴¹²

El proyecto del MpUN se concibió en oposición a la Universidad de la República tanto en sus contenidos académicos como en su orientación político-ideológica. Se declaró un ámbito plural que expresaba a diferentes tendencias políticas, religiosas y filosóficas, reactualizando una corriente tradicional a favor de la descentralización de la cultura y la “apoliticidad” en la enseñanza. Sin embargo, tanto en los hechos como discursivamente, la campaña del MpUN se inscribió en la batalla de las derechas anticomunistas contra aquella casa de estudios, entonces acusada de “centro de perturbación” o “foco de disturbios”, según las variadas expresiones de la época. En cierto modo a ello refería Varela, su presidente, cuando afirmó: “Somos peregrinos de un ideal patriótico”.⁴¹³

⁴¹¹ *Movimiento pro Universidad del Norte. Antecedentes de una lucha en pro de la descentralización y extensión de la cultura.* Salto, octubre de 1968. Memorándum entregado por una delegación del Movimiento pro Universidad del Norte al ministro de Cultura, Federico García Capurro, el 2 de octubre de 1968. En *Colección Federico García Capurro*, Cajas s.n., AGN, Montevideo

⁴¹² Lo integraron también María Mercedes Silveira de Fuentes, como secretaria de actas, Pedro F. Belgeri, secretario de finanzas, Élide Conti de Lluveras, prosecretaria de finanzas y Juan José Vispo Mari, secretario de relaciones. Por último los vocales: Luis Alberto Panizza y Lauro Ruétalo. *El Pueblo*, 11 de setiembre de 1968, p. 2 y 23 de setiembre de 1968, p. 2

⁴¹³ *Movimiento pro Universidad del Norte. Antecedentes de una lucha en pro de la descentralización y extensión de la cultura.* Salto, octubre de 1968. Memorándum entregado por una delegación del

Ahora bien, como se adelantó, las propuestas orientadas a la diversificación del sistema de educación superior uruguayo, especialmente aquellas destinadas a incrementar su cobertura geográfica, tenían profusos antecedentes desde por lo menos mediados de la década del cuarenta del siglo XX. En Salto en particular, una universidad "propia" era una aspiración largamente acariciada por vastos actores sociales, que la pensaron como otra forma de enfrentar el centralismo montevideano y dinamizar su propio desarrollo. Huelga decir, por tanto, que la demanda de instalar una universidad con sede en la capital salteña y con alcance al norte uruguayo se correspondía con la manera en que los grupos dirigentes locales entendían el liderazgo del departamento en esa región. En este sentido, organizaciones civiles, asociaciones profesionales y agrupaciones de padres, docentes y estudiantes con el apoyo de las autoridades municipales promovieron en distintos momentos iniciativas en esa dirección que contaron con éxitos relativos. Por ejemplo, en noviembre de 1948 se colocó la piedra fundamental y se procedió a la posesión simbólica de los terrenos donde se pensaba instalar la futura Universidad del Norte (UN) y casi una década más tarde, en 1957, tras la intensa movilización de alumnos de bachillerato del Liceo Departamental, profesores y padres organizados en el Comité Pro Cursos Universitarios, se instalaron cursos de primer año de Derecho y Notariado de la Universidad de la República, lo que fue percibido en ámbitos locales como un primer paso en la creación de la UN. Estos logros, lejos de agotar las demandas de sus impulsores, se convirtieron en una plataforma desde la cual continuaron reclamando la expansión de la oferta universitaria hacia el interior del país.

Una mención especial merecen los citados cursos universitarios que desde 1957 y sin intermitencias funcionaron en Salto. Pese al respaldo que recibieron de una parte de los docentes de la Facultad de Derecho de la Udelar, fueron duramente resistidos por las autoridades de esta institución y la FEUU, históricamente renuentes a la duplicación de servicios universitarios fuera de Montevideo. A las trabas iniciales (y que estuvieron a punto de hacer naufragar el proyecto), se sumó que la iniciativa no logró el reconocimiento oficial de la Universidad de la República. Hasta 1970, de hecho, los cursos se sostuvieron gracias al esfuerzo de actores locales. Estas circunstancias originaron una asentada hostilidad en ámbitos salteños hacia la Universidad. En el

Movimiento pro Universidad del Norte al ministro de Cultura, Federico García Capurro, el 2 de octubre de 1968. En *Colección Federico García Capurro*, Cajas s.n., AGN, Montevideo

correr de la década el Comité pro Cursos Universitarios de Salto prosiguió de manera constante sus gestiones para oficializar su oferta académica. El interés por contar con un centro universitario permaneció y en 1966 el diputado Martín Boada Pettiati —representante colorado por Salto— presentó sin éxito a la Cámara Baja un nuevo proyecto de ley para instalar la UN. Según se analizó en el capítulo anterior, por estos mismos años habían emergido proyectos de similar naturaleza en otras ciudades del norte uruguayo que tampoco tuvieron eco en ámbitos universitarios ni gubernamentales.

La fundación del MpUN pareció abrir una nueva etapa más promisoriosa para esta vieja demanda, pero su irrupción supuso novedades respecto a las iniciativas que le habían precedido tanto por los contenidos y la radicalidad de su propuesta como por las fuerzas que la impulsaron y acompañaron. Nacido al calor de la crisis económica, social y política, de la creciente protesta social y la represión gubernamental de esos años, este movimiento se alineó con la derecha política, reconvirtiendo una demanda localista, que inicialmente había carecido de contenidos político-partidarios, en una reivindicación propia, incorporándose a su vez a los debates sobre la modernización universitaria. Ante la alarma por el sesgo ideológico de gran parte de la comunidad universitaria y su adscripción a un movimiento que requería cambios sociales más o menos radicales, la UN ofrecía una oportunidad de establecer un formato universitario alternativo y opuesto en lo académico y en lo político. El apoyo que recibió de diversos grupos políticos derechistas y en particular del Gobierno central facilitó que el tema trascendiera los estrechos marcos locales, integrándose a la agenda política nacional en un momento de auge, en la región y el mundo, de los debates sobre el papel social de las instituciones de conocimiento. El MpUN se tornó la expresión de la deriva hacia la derecha de una parte de ese amplio movimiento social que desde mitad del siglo XX se había aglutinado en torno al reclamo de instalar la UN. En otras palabras, se apropió de una demanda que presentaba fuertes resonancias localistas —con la que se identificaba genuinamente— pero la revistió de unas motivaciones político-ideológicas que no había tenido hasta el momento, expresando así las dicotomías del conflicto global de la Guerra Fría en el ámbito doméstico. A través de una amplia campaña supo aglutinar a un conglomerado de amplia base social al que adhirieron sectores políticos vinculados a las derechas (en su amplia gama), capitalizando la animosidad local hacia la institución universitaria a la que se acusaba de impedir la concreción de sus aspiraciones en el campo educativo.

Resulta claro que su vinculación con las derechas no fue ajena a la coyuntura política nacional e internacional, marcada por el recrudecimiento de los conflictos de la Guerra Fría y la eclosión de la protesta estudiantil. Existe consenso académico en señalar el año 1968 como un momento de inflexión en la historia reciente uruguaya. Aunque producto de acumulaciones previas, como ha señalado Vania Markarian, el 68 uruguayo, a tono con un movimiento de alcances continentales y globales, presentó novedades y rupturas, entre las que destaca el papel del movimiento estudiantil radicalizado y pujante que, con reivindicaciones propias ensayó nuevos repertorios de protesta, erigiéndose con fuerza en la escena política nacional.⁴¹⁴ A ello se agrega la centralidad que fue adquiriendo la Universidad de la República en los enfrentamientos con el Gobierno, lo cual abonó la cada vez más generalizada idea propagada por las derechas de que esta era un foco de reclutamiento para las izquierdas, una representación que se fue construyendo desde fines de los cincuenta, especialmente luego de las intensas luchas sociales que antecedieron a la aprobación en 1958 de la Ley Orgánica. Desde este espectro político se alertó sobre la connivencia de esta institución con el bloque de las izquierdas y, consecuentemente, de su adhesión a valores antitéticos a los que la sociedad uruguaya había aceptado como suyos, erigiéndose como una amenaza a su estabilidad.⁴¹⁵ Esta asociación de la institución universitaria con el “enemigo interno” alcanzó su punto crítico a fin de la década, derivando, en palabras de

⁴¹⁴ La literatura histórica uruguaya ha señalado el año 1968 como un punto de inflexión para el país, comenzando, según Álvaro Rico, el lento “camino democrático a la dictadura”. Para Rico fue un “año bisagra”, momento en que el discurso ideológico del Ejecutivo se articuló en torno al binomio crisis-orden ver Rico, Á. *Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura Uruguay (1985-2005)* (Montevideo: Trilce, 2005) y *1968: El liberalismo conservador. El discurso ideológico desde el Estado en la emergencia del 68* (Montevideo: FHCE, 1989).

Para un detallado análisis de este fenómeno ver Markarian, V. *El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat*. (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2012) Leibner, Gerardo. *Camaradas y compañeros, una historia política y social de los comunistas* (Montevideo: Trilce, 2011) Leibner afirma que “no solo la radicalización peculiar sino también la cronología indican que la revuelta estudiantil de 1968 no surgió desde la Universidad de la República, sino desde ‘más abajo’. ‘Más abajo’ en doble sentido, en referencia tanto a la edad como a los orígenes sociales de quienes iniciaron las luchas estudiantiles de 1968. Los liceales, los estudiantes de magisterio y de las escuelas industriales de la UTU (Universidad del Trabajo) representaban capas sociales mucho más amplias y heterogéneas que los universitarios organizados en la FEUU”. Ver también Varela Pettito, Gonzalo. *El movimiento estudiantil de 1968: el IAVA, una recapitulación personal* (Montevideo: Trilce, 2002); Landinelli, J. *1968: la revuelta estudiantil* (Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-EBO, 1989)

⁴¹⁵ Aldrighi, Clara. *La izquierda armada. Ideología, ética e identidad en el MLN-Tupamaros* (Montevideo: Trilce, 2001), p. 42

Jorge Landinelli, en la ruptura de los “vínculos más elementales entre la Universidad y la esfera gubernamental”.⁴¹⁶

En los hechos, el MpUN surgió en el momento de mayor tensión entre el Gobierno y las autoridades de la Universidad debido a los graves sucesos acaecidos contra esta institución: violento allanamiento policial a sus locales, pedido por parte del Poder Ejecutivo al Senado para destituir al CDC y primeros estudiantes asesinados en manifestaciones callejeras.⁴¹⁷ El Poder Ejecutivo asimismo había decretado en agosto la suspensión de toda la actividad académica en las tres ramas de la enseñanza, fundamentando la medida en la “infiltración de elementos que practican y difunden la violencia”, la incapacidad de las autoridades docentes para controlar “la actividad ilícita que se desarrolla en los locales educacionales” y el “estado de conmoción emocional en que se encuentra el estudiantado”.⁴¹⁸ Como señaló Carlos Real de Azúa, se asistía al fin del “sistema de consenso básico entre el poder central y Universidad sobre la misión de ésta, sobre sus deberes, sobre las metas y los valores sustanciales que han de presidir la vida del país en que la Universidad se inscribe”.⁴¹⁹ Bajo estas circunstancias, la campaña a favor de la UN estuvo asociada desde el inicio al combate contra la principal casa de estudios. El proyecto ofreció una alternativa seductora a las fuerzas de derecha: establecer otra universidad alejada de la capital, financiada por el Gobierno nacional y que reformularía el gobierno universitario, suprimiendo el cogobierno.

Se entiende entonces que la noticia no pasara inadvertida en otros ámbitos políticos y sociales a nivel nacional, cosechando, como se dijo, apoyos en otros sectores. Apenas un mes más tarde, el periódico *La Mañana*, destacado vocero de la derecha colorada antibatllista y un actor decisivo en esta historia, celebró la iniciativa del MpUN y manifestó su confianza en que el Gobierno daría los pasos necesarios para concretarla.

⁴¹⁶ Landinelli, J. “La Universidad como problema político (1968-1973)”, p. 81

⁴¹⁷ El 9 de agosto de 1968 fuerzas policiales irrumpieron violentamente en varias facultades y escuelas universitarias en busca del presidente de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Ulysses Pereira Reverbel, secuestrado por el MLN-T. El mismo día el presidente Jorge Pacheco y su Consejo de Ministros se reunió para resolver la solicitud de la venia al senado para destituir al Consejo Directivo Central de la Universidad. Simultáneamente, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que establecía que las elecciones universitarias se realizarían bajo “la superintendencia de la Corte Electoral y con las garantías del voto secreto y obligatorio consagradas en el artículo 77 inciso 2º de la Constitución de la República para las elecciones nacionales”. [Extractado del Mensaje del Poder Ejecutivo] *Extra*, 23 de setiembre de 1968, p. 3

⁴¹⁸ *Ibíd*

⁴¹⁹ Real de Azúa, Carlos. “Ante la ley de elecciones universitarias” *Marcha*, 15 de noviembre de 1968, p.

Aducía que en un momento en el cual se ponía en evidencia “la diferencia de procedimientos de lucha estudiantil que existe entre Montevideo y el Interior” había que evitar “continuar trayendo a la capital al estudiantado de tierra adentro” y “apresurarse a llevar a los montevidianos al interior” de modo de eliminar “los focos minoritarios” que llevaban “intranquilidad” a la población del interior y que, en algunos casos, lograba contagiar “a jóvenes ingenuos que no están acostumbrados a diferenciar los verdaderos problemas estudiantiles de implicancias políticas internas y externas”.⁴²⁰

Con estas expresiones el periódico colorado, fiel a su matriz ruralista, aludía al estado de agitación que asolaba a la capital uruguaya por la radicalización estudiantil y que tanto preocupaba a los sectores de la derecha anticomunista. Recordemos que entre las novedades del ciclo de movilizaciones estudiantiles de ese año estuvo, como también muestra Markarian, la expansión en el uso y despliegue en el espacio urbano. Inicialmente las manifestaciones se concentraron dentro y alrededor de los establecimientos de enseñanza ubicados en los barrios populares de Montevideo, pero con la incorporación de los universitarios el escenario de la protesta se expandió al centro de la ciudad, principalmente en las zonas aledañas a la Universidad de la República y al liceo Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA).⁴²¹

En la percepción de las derechas, la capital se tornó una ciudad sitiada y asediada por las fuerzas del comunismo. En contraste, el interior se erigía como un espacio libre e “incontaminado”, una representación que se recostaba en —a la vez que daba nuevos sentidos a— la antigua dicotomía Montevideo e interior; construcción discursiva que forma parte del imaginario uruguayo desde el siglo XIX pero que en su versión más reciente reconocía antecedentes en la corriente ruralista conservadora liderada por Benito Nardone desde mediados de la década del cuarenta.

La contraposición indicada contiene un fuerte componente valorativo que atribuye al primer término una carga positiva y predomina respecto el segundo, observable en las diferentes formas en que la misma se presentó, capital-interior, ciudad-campo o civilización-barbarie, donde el primer concepto es asociado al progreso y al “sentido de la historia”, en palabras de Giovanni Levi.⁴²² El “interior” resulta entonces una noción opaca e imprecisa que bien refiere tanto a los centros urbanos no montevidianos como

⁴²⁰ *La Mañana. Edición del interior*, 17 de octubre de 1968, p. 3

⁴²¹ Markarian, V., *El 68 uruguayo*, pp. 48-49

⁴²² Levi, Giovanni, “Un problema de escala”, p. 290

al campo y sus actividades relacionadas. Julio Martínez Lamas —estudioso de la realidad económica del país y crítico del modelo proteccionista y dirigista del batllismo—, en su recordado libro *Riqueza y pobreza del Uruguay. Estudio de las causas que retrasan el progreso nacional*, publicado originalmente en 1930, ofreció de acuerdo al historiador Raúl Jacob una eficaz formulación según la cual Montevideo era asociado a una “bomba de succión” que frenaba el desarrollo de Uruguay. “De una parte la metrópoli, opulenta y magnífica, y por otra la campaña —gallina de los huevos de oro— con su obligada trilogía: la ganadería, el desierto y la pobreza”.⁴²³ En los años cuarenta el ruralismo dirigido por Nardone insistió en el cisma campo-ciudad, revalorizando al primero, fuente de la riqueza nacional, mientras la capital era sede de la “corrupción social y de la demagogia política”.⁴²⁴ En ese momento, al igual que lo haría *La Mañana* veinte años más tarde, *Diario Rural*, portavoz del ruralismo, aseguraba que en el campo

no se hace demagogia ni se pone mostrador a los ideales; en el campo se respira, pese a todo un ambiente sano, incontaminado de los vicios políticos y sociales que carcomen la nacionalidad y atentan contra nuestro sagrado patrimonio, vicios que se están incubando en forma alarmante en la otrora Tacita de Plata.⁴²⁵

Esta idea daba cuenta de los intereses de amplios sectores rurales que se consideraban postergados por el modelo industrial proteccionista que promovió el batllismo en el Gobierno. La transferencia de recursos económicos del agro hacia la industria redundaba, en esta visión, en el atraso tecnológico y productivo del sector agropecuario. El esquema centro-periferia, por tanto, formó parte del imaginario y de las representaciones mentales de las élites locales que se sentían retrasadas, relegadas y marginadas respecto al centro/metrópoli que era Montevideo. No obstante, una similar dicotomía se reproducía dentro de cada región donde existía una “férrea subordinación de las poblaciones secundarias a su respectiva capital departamental” y que explica parte las rivalidades que también se producían entre las distintas localidades y

⁴²³ Martínez Lamas, Julio. *Riqueza y pobreza del Uruguay* [2ª. ed.] (Montevideo: s.n., 1946), p. 286. Citado por Jacob, R. *Benito Nardone. El ruralismo hacia el poder (1945-1958)* (Montevideo: EBO, 1981), p. 56. Sobre este libro y su autor ver el prólogo de Raúl Jacob en la edición al libro *Riqueza y pobreza del Uruguay*, Cámara de Representantes, 1996. Disponible en http://www.rauljacob.com/docs/RJacob_riquezaypobreza_prologo.pdf

⁴²⁴ Para un análisis de las tempranas expresiones del ruralismo en Salto ver Jacob, R., *Brevísima historia del partido ruralista* (Montevideo: Arpoador, 2006)

⁴²⁵ *Diario Rural*, 2 de junio de 1945. “La libreta del Hacendado”. Citado por Jacob, R. *Benito Nardone...*, p. 57

regiones.⁴²⁶ Para las localidades menores la “metrópoli” o el “centro de vitalidad”, en palabras de Edward Shils, eran las propias capitales departamentales (aunque a veces el centro de referencia no perteneciera a su jurisdicción departamental correspondiente). En estos casos las demandas se dirigían principalmente hacia esos centros.⁴²⁷

Las argumentaciones a favor de la UN abrevaron en este esquema argumentativo que se imbricaba con el anticomunismo y la lógica bipolar de la Guerra Fría. Así el interior era identificado por vastos sectores derechistas como un espacio total e indiferenciado, asimilado a la vida rural y a la campaña, siempre postergado y olvidado. Allí se cultivaba un estilo de vida propio, natural, pacífico y simple, donde los jóvenes crecían en un entorno “de vida ordenada”, viendo flamear las “banderas patrias” y entonando “estribillos en pro de la orientalidad”, aseguraba el diario *La Mañana*.⁴²⁸ En las ciudades del interior, continuaba este medio de prensa, “las clases no se interrumpen” y “los estudiantes no alardean de 'patoteros ideológicos' como servilmente e incautamente muchas veces, caen en la capital”.⁴²⁹ En definitiva existía una “realidad sociológica” peculiar que debía ser preservada y que “ningún sociólogo” podía negar. Por ende, un estudiante que se trasladara, por ejemplo, desde Tacuarembó o de Durazno “para estudiar en la Universidad del Norte, **ingresa más naturalmente**, a un medio que no es el propio, que el ingreso a la capital del país”.⁴³⁰ En ese marco, concluía, mientras la Universidad de la República representaba “el asfalto” y una “mentalidad urbana y extranjerizante”, la del Norte “toma su realidad”, aquella históricamente olvidada, y “pisa la tierra firme”.⁴³¹

A partir de estos propósitos y fundamentos, el MpUN se fue configurando gracias a una amplia red de apoyos que incluyó a organizaciones y entidades locales, dirigentes de las fracciones conservadoras de los partidos tradicionales, medios de prensa salteños alineados con estas vertientes, y autoridades departamentales.⁴³² Logró la adhesión de las llamadas “fuerzas vivas” del departamento representadas por el Club de Leones de Salto, el Rotary Club y el Centro Comercial e Industrial, así como de corporaciones

⁴²⁶ Padrón Favre, Óscar, óp. cit., p. 82

⁴²⁷ Shils, Edward. *Los intelectuales en los países en desarrollo* (Buenos Aires: Ediciones Tres Tiempos, 1976)

⁴²⁸ *La Mañana. Edición del Interior*, 24 de junio de 1971, p. 3

⁴²⁹ *Ibíd*

⁴³⁰ *La Mañana. Edición del Interior*, 5 de junio 1968, p. 5

⁴³¹ *La Mañana. Edición del Interior*, 30 de octubre de 1969, p. 7

⁴³² *Resoluciones de la Junta Departamental de Salto*, 28 de noviembre 1968, Carta al Sr. Presidente del Movimiento pro Universidad del Norte, Dr. José Antonio Varela

profesionales como el Centro Agronómico, que agrupaba a los ingenieros agrónomos de Salto. Sus núcleo dirigente se conformó con profesionales del medio (principalmente abogados), que actuaron en ámbitos públicos y privados, en la docencia (especialmente en el liceo departamental IPOLL, Instituto Politécnico Osimani y Llerena), o representaron al comercio de la ciudad, en su mayoría reconocidos por su participación en emprendimientos de carácter social a través de las organizaciones que adhirieron al MpUN (Club de Leones y rotarios). Algunos de sus miembros mantuvieron una destacada militancia política, ocupando cargos en el Gobierno municipal y en el Parlamento nacional. Asimismo, hubo entre ellos dirigentes ligados al ala derecha de la Iglesia católica de Salto que, como estaba ocurriendo en el ámbito nacional y latinoamericano, experimentaba duros conflictos entre quienes apoyaban la línea conciliar y aquellos que la rechazaron alineándose con la derecha política.⁴³³

Vale mencionar, que en estos años hubo entre los católicos de Salto duros y publicitados enfrentamientos. A tono con la posición adoptada por las jerarquías eclesiásticas nacionales, el obispo salteño Marcelo Mendiharat siguió una política contraria a la polarización impulsando un camino de diálogo, reformas (la Iglesia de Salto “debe estar permanentemente en búsqueda de superación por una sana renovación”, afirmaba) y respeto a los derechos humanos.⁴³⁴ Sus posiciones le valieron ásperos cruces con el ala conservadora de la Iglesia, que lo acusó de amparar las acciones de las izquierdas, responsables en la visión derechista de la crisis social y política imperante. Se produjo así una profunda fractura en la sociedad salteña entre quienes apoyaban la descentralización bajo la órbita de la Universidad y aquellos que, en cambio, propiciaban un camino alternativo que, según Alda Thevenet, una de las principales dirigentes del MpUN, nada tenía que ver “con esta ola subversiva” y nacía de “un sentimiento autonómico real”.⁴³⁵

Mientras tanto, *Tribuna Salteña*, diario local afín al Partido Colorado, se convirtió en el principal portavoz del MpUN. Había sido fundado en 1906 por Modesto J. Llantada y conservaba una larga y sostenida trayectoria en el departamento. En sus

⁴³³ Esta información, todavía incompleta y fragmentaria, fue reconstruida a partir de fuentes de prensa y de los datos proporcionados a la autora por un informante calificado que ha preferido permanecer en el anonimato

⁴³⁴ Ver Aldrighi, C. *El caso Mitrione...*, 339 Ver También *El Pueblo*, 24 de julio de 1969, p. 4 “El obispo de Salto encara problema de la Unidad cristiana”

⁴³⁵ *Tribuna Salteña*, 3 de agosto de 1969, p. 5 y p. 7

páginas se dio impulso a arraigados reclamos locales como la construcción de la represa de Salto Grande, la descentralización de la enseñanza superior y la implantación de los cursos de derecho y notariado, abogando contra lo que consideraba los males del centralismo montevideano. Pero a fines de los sesenta, bajo la conducción del hijo de su fundador, Modesto Llantada Bouzadas, se posicionó entre los sectores que apoyaron al Gobierno de Pacheco Areco. En 1968 se produjo su cierre temporal a causa de un conflicto con los trabajadores, quienes fundaron un nuevo periódico, *Verdad Salteña*, de efímera existencia. Esta situación contribuyó a radicalizar aún más las posiciones de Llantada Bouzadas, marcadamente anticomunistas y enfrentadas a lo que catalogaba como actitud opositora y presuntamente cómplice con la subversión de la dirigencia universitaria, la mayoría de su cuerpo docente y el orden estudiantil.⁴³⁶ Luego de su reaparición, *Tribuna Salteña* llevó a cabo una sostenida prédica en contra de la Universidad de la República y a favor de la UN. Al mismo tiempo alentó la creación y las actividades del grupo derechista Juventud Salteña de Pie (JSP).⁴³⁷

La adhesión al MpUN se trasladó desde esos actores al ambiente estudiantil polarizado en distintos bandos. Por estos años surgieron en las agrupaciones gremiales de Salto sectores de derecha radical que se enfrentaron a los grupos simpatizantes de las distintas opciones de izquierda.⁴³⁸ La información disponible confirma la existencia de diferencias irreconciliables y de un clima que se iba polarizando cada vez más.⁴³⁹ En respuesta al incremento de la movilización social y política en el país, los jóvenes derechistas de Salto crearon en julio de 1969 la JSP. En los hechos, el “interior” del país no permaneció al margen del clima de protesta y agitación social y política que se vivía como el discurso derechista señalaba y remarcaba con énfasis. En Salto, los medios de prensa, las “fuerzas vivas” y los partidos siguieron de cerca los acontecimientos que se vivían en la capital atemorizados ante sus posibles efectos expansivos. Las notas periodísticas evidenciaban la preocupación ante una eventual propagación de lo que

⁴³⁶ Olarreaga, Manuel, óp. cit., p. 24. Ver también *Salto: voz de la tierra y el hombre*. La información se complementó con testimonios orales

⁴³⁷ *Tribuna Salteña*, 12 de julio de 1969, p. 3

⁴³⁸ Tal como fue tratado en el capítulo anterior, a fines de la década del cincuenta existían varias asociaciones agrupadas en la Unión de Asociaciones Estudiantiles Salteñas (UDAES) que integraba a la Asociación de Estudiantes Gustavo Volpe, Asociación de Estudiantes del Osimani y Llerena, Asociación de Estudiantes del Liceo Nocturno. Desde 1959 tenía actividad la Asociación de Estudiantes del Derecho interior-Sede Salto a la que luego se sumaría la Asociación de Estudiantes del Liceo del Este

⁴³⁹ Es aún insuficiente la información que se dispone acerca de las características de la situación estudiantil en las ciudades del interior del país. Los estudios que hay al respecto refieren a la “rebelión estudiantil” en Montevideo cuya realidad puede presumirse presentó grandes diferencias

consideraban excesos de la protesta juvenil capitalina causada por la penetración de ideologías izquierdistas, perturbando la habitual “tranquilidad” del interior.⁴⁴⁰

Claramente, el avance de estos movimientos juveniles constituyó una reacción a los cambios que se venían produciendo en las asociaciones estudiantiles locales y a la incidencia que los grupos de izquierda habían adquirido. Tras la eclosión juvenil de 1968 las mismas presentaron, al igual que en la capital, cambios y novedades y el tono de los enfrentamientos internos se tornó más beligerante.⁴⁴¹ La JSP tuvo un doble carácter: proactivo mediante su apoyo a la UN y reactivo ante la creciente protesta social y política liderada por las izquierdas. Sus principales líderes respondieron a esa realidad política y sus formulaciones se tiñeron de un acentuado anticomunismo. Logró aglutinar a un gran número de jóvenes gracias al impulso que dio a demandas específicas, en particular, una tan cara en el ámbito local como la de instalar un centro educativo superior en la ciudad. La JSP acompañó la expansión del MUpN y se ramificó hacia otras ciudades y departamentos vecinos, dando origen a las Juventudes del Norte del Pie a comienzos de 1970. La fundación del movimiento de derecha radical Juventud Uruguay de Pie (JUP) supuso una reorientación del movimiento original que asumió un alcance nacional e integró reivindicaciones y demandas de tono y contenido ideológicamente más radical, acentuando la prédica anticomunista y nacionalista. En el correr de los primeros años de la década del setenta, la JUP se posicionó entre las tendencias derechistas antiliberales.⁴⁴²

La deriva político-ideológica que venimos describiendo muestra que la posibilidad de crear la UN trascendió la mera disputa entre grupos locales y expresó las tensiones que por esos años atravesaban a la sociedad y al sistema político uruguayo. La derechización de este movimiento fue un indicador más del alto grado de polarización política, donde la educación fue uno de los principales escenarios en disputa. En este marco, la idea de una nueva universidad logró eco en espacios que hasta el momento

⁴⁴⁰ *La Mañana. Edición del Interior*, 29 de agosto 1968, p. 3 y 31 de agosto de 1968, p. 3. Denunciaban huelgas y ocupaciones en los liceos de José Batlle y Ordóñez (Departamento de Lavalleja) y en Fraile Muerto (Departamento de Cerro Largo) y *Tribuna Salteña*, 22, 26 y 27 de julio de 1969, 3-4, 9, 7 *La Mañana Edición del Interior*, Montevideo, 31 de julio de 1969, p. 5. Entre julio y agosto de 1969 hechos similares ocurrieron en el liceo de Bella Unión (Departamento de Artigas) que culminaron con su intervención por parte de las autoridades y la designación de Aníbal Gagliardi, integrante del MUpN, como director interventor

⁴⁴¹ Markarian, V. *El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2012, p. 67

⁴⁴² Ver Jung, M.E., *La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista*; Bucheli, G., “O se está con la patria o se está contra ella”...

habían permanecido indiferentes a este tipo de reclamos, obteniendo aliados influyentes en el sistema político y el Gobierno. Fue así que se plegaron figuras y grupos políticos partidarios (especialmente el herrerismo, el ruralismo y el coloradismo independiente vinculado al presidente Pacheco) y órganos de prensa de derecha de amplio alcance nacional (el diario colorado *La Mañana* y el nacionalista *El País*). Otros medios de comunicación como *Radio Carve*, propiedad de las familias Fontaina y De Feo, que ostentaba un abierto anticomunismo, ofrecieron amplia cobertura a las actividades del MpUN.⁴⁴³

En setiembre, a pocos días del lanzamiento del proyecto de la UN, el presidente de la República, Pacheco Areco, visitó la capital salteña. Fue recibido por el Comité Ejecutivo del Movimiento, diputados del departamento, el intendente municipal, el presidente de la Junta y el jefe de Policía quienes le expusieron los motivos del proyecto.⁴⁴⁴ Los resultados fueron auspiciosos para la comitiva que de aquí en más contó con el aval del Poder Ejecutivo y, muy especialmente, de García Capurro, su ministro de Educación y Cultura, representante de la línea dura del Gobierno.⁴⁴⁵ Con la ampliación de sus bases de apoyo, la demanda de expandir la cobertura geográfica de la educación superior se incorporó a las discusiones político-ideológicas que marcaron la agenda y pasó a formar parte de las disputas por el control de la educación.

En el ámbito universitario un grupo de docentes y egresados autodenominados “demócratas”, en su mayoría pertenecientes al Movimiento Demócrata Universitario (MDU), manifestó su adhesión a la UN. Algunos de sus dirigentes, por ejemplo, sostuvieron que la UN debía diferenciarse de la Universidad de la República en su forma de organización y gobierno, y para ello su estatuto orgánico debía asentar en

⁴⁴³ A comienzos de la década del sesenta, los hermanos Fontaina se habían integrado al grupo derechista Asociación para la Lucha Ejecutiva y Repudio de los Totalitarismos de América (ALERTA). A través de su emisora también promovieron las actividades de organizaciones de la derecha radical que surgieron a inicios de los 70 como la Juventud Uruguaya de Pie “Los inicios. Rastreamos los orígenes de la violencia política en el Uruguay de los 60”, *Cuadernos de la Historia reciente 1968-1985*, 4 (2008).

⁴⁴⁴ Ver [Memorándum al ministro García Capurro, 27 de setiembre de 1968] Movimiento pro Universidad del Norte. Antecedentes de una lucha en pro de la descentralización y extensión de la cultura. Salto, octubre de 1968. En *Colección Federico García Capurro*, caja s/n, AGN, Montevideo y *El Pueblo*, 23 de setiembre de 1968, p. 4

⁴⁴⁵ Federico García Capurro (Montevideo, 1907-2000), médico radiólogo. Perteneció al Partido Colorado. Fue ministro de Salud Pública en el periodo 1952-1954. Durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco fue designado ministro de Cultura ante la renuncia a esa cartera de Alba Roballo, cargo que ocupó hasta marzo de 1970. Hacia el final del mandato ocupó el Ministerio de Defensa. Desempeñó brevemente, en forma simultánea, la titularidad del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. Luego del Golpe de Estado de junio de 1973 integró el Consejo de Estado.

forma explícita la “defensa del orden democrático” y determinar la “exclusión” de cualquier “intervención política y declaración sobre asuntos internacionales”, prohibiendo las “influencias totalitarias: nazismo, fascismo o comunismo”.⁴⁴⁶ Asimismo, finalizando la década, un puñado de docentes y profesionales de posiciones democrático-liberales, en reacción a esta situación, fueron desplazándose hacia la derecha y terminaron apoyando la Universidad del Norte.

En suma, la UN, independiente de la "Universidad central" (y alejada de "la utopía del cogobierno estudiantil, que al fin se transforma en dictadura estudiantil"), fue visualizada como una manera de contrabalancear el peso de la tradicional casa de estudios, donde a su entender se incitaba a la "agitación social", suscribiendo "dogmas políticos nacionales o extranjeros".⁴⁴⁷ Asomaba un camino para eliminar “los focos minoritarios” causantes del clima de agitación y violencia en los centros de estudios y en la sociedad, que buscaban captar “jóvenes ingenuos que no están acostumbrados a diferenciar los verdaderos problemas estudiantiles de implicancias políticas internas y externas”, decía *La Mañana*.⁴⁴⁸ En paralelo, el principal vocero del Partido Nacional, *El País*, volvía a arremeter contra la Universidad acusándola de haber fracasado en el cumplimiento de su misión fundamental: preparar los técnicos necesarios para el desarrollo agropecuario, como resultado de “una política deliberada y confesada documentalmente” y de la negativa influencia que el movimiento estudiantil ejercía en la conducción universitaria.⁴⁴⁹ La FEUU, agregaba, “es prácticamente quien gobierna en la Universidad porque en eso ha concluido el cacareado ‘cogobierno’”, afirmaba, cuestionando una vez más el modelo de gobierno universitario.⁴⁵⁰

La campaña del Movimiento pro Universidad del Norte

La capacidad organizativa y la intensa movilización del MpUN, con el decidido apoyo del ministro de Cultura, Federico García Capurro, permitieron articular los intereses de variados sectores sociales y políticos, locales y nacionales, vinculados con

⁴⁴⁶ *La Mañana*, 12 de junio de 1969, pp. 12-3. “Universidad del Norte: necesidad impostergable” Entrevista al Arquitecto Juan Ramón Menchaca (miembro del Consejo de Facultad de Arquitectura) y al Dr. Ricardo Yanicelli, (especialista en cirugía infantil y consejero de la Facultad de Medicina).

⁴⁴⁷ *La Mañana*, 29 de mayo de 1969, p. 5 y *La Mañana. Edición del Interior*, 12 de junio de 1969, pp. 12-3.

⁴⁴⁸ *La Mañana. Edición del Interior*, 18 de octubre de 1968, p. 3

⁴⁴⁹ *El País*, 19 de julio de 1969, p. 5

⁴⁵⁰ *Ibíd*

el amplio espectro de las derechas uruguayas. A partir de las alianzas que tejió, logró ejercer una fuerte presión que alcanzó su clímax durante 1969 y 1970. Un somero repaso de la trayectoria de MpUN permite observar la manera en que se tramitaron y articularon estos apoyos y las diversas motivaciones e intereses en juego. El punto de arranque de la campaña pro UN se produjo unos pocos días después del acto inaugural del MpUN, cuando sus autoridades aprovechando la mencionada visita a Salto del presidente Pacheco, se reunieron con él y le presentaron el proyecto. En esta reunión se acordó, y así se hizo, entregar al ministro de Cultura un memorándum que junto al texto de la ley y su exposición de motivos, incluía “veinte mil firmas de ciudadanos y ciudadanas”, según cifras aportadas por el propio movimiento.⁴⁵¹

El documento historiaba el surgimiento de los reclamos en pos de esta demanda, que según los autores se remontaba al novecientos. Fundamentaba al mismo tiempo los beneficios que traería su materialización, en particular para la superación de la brecha entre el interior y Montevideo. Luego seguía el extenso articulado que establecía la creación, organización y funcionamiento de la UN, que básicamente eran tomados del proyecto de ley que en 1966 presentó Boada Petiatti.⁴⁵² Denotaba a su vez el esfuerzo de sus redactores por asociar la iniciativa con la tradición del reformismo universitario, repropiciándose y haciendo su propia lectura del movimiento que impulsó la ley orgánica en los años cincuenta tantas veces invocado por la FEUU y buena parte de la dirigencia de la Universidad de la República: “los mismos principios democráticos que orientaron a las sucesivas reformas universitarias y que tuvieron concreción legal en la citada Carta Orgánica de 1958, presiden y son esencia de nuestro estado de espíritu y determinación por la Universidad del Norte”.⁴⁵³ García Capurro dio trámite al proyecto a través de la recientemente creada dirección de Educación, Ciencia y Tecnología del Ministerio, la cual por su parte recomendó instalar una comisión para formular un anteproyecto de ley. Las fuentes consultadas no confirman si efectivamente esta comisión entró en funcionamiento, sin embargo, la nómina de sus integrantes da pistas acerca del tipo de respaldo así como de las redes que movilizó: Dr. Raúl Blengio Brito, escritor y

⁴⁵¹ Ver *Folleto con la exposición de motivos del Proyecto de Ley de creación de la Universidad del Norte presentado por el Comité Pro Universidad del Norte al Ministro de Cultura García Capurro el 27 de setiembre del 1968*, 11 de abril de 1969 en Colección Federico García Capurro, cajas s.n., AGN, Montevideo

⁴⁵² Ver *Folleto de exposición de motivos y DSCR, Actas de sesiones*, 17 de agosto de 1966, pp.194-200

⁴⁵³ *Folleto de exposición de motivos.*, p. 3

periodista de los periódicos colorados antibatllistas *La Mañana* y *El Diario*, ingeniero Luis A. Balparda Blengio, dirigente herrerista y miembro supernumerario del Opus Dei, Adolfo Silva Delgado, profesor y escritor de Salto, y al profesor de historia y militante colorado José María Traibel.⁴⁵⁴

Sobre esta base, durante el año 1969, el MpUN intensificó sus esfuerzos para alcanzar y fortalecer sus sustentos políticos para lo cual desarrolló una intensa campaña periodística y de contactos, con reiteradas visitas a la capital, donde sus representantes mantuvieron varias entrevistas con García Capurro así como con legisladores nacionales, al tiempo que eran recibidos en varias radioemisoras de la capital. Además de las extensas coberturas en diarios de amplia circulación como *La Mañana* y *El País*, sus voceros participaron en conocidos programas radiales de la época, con audiencia en todo el país.⁴⁵⁵ Paralelamente, se buscó dar proyección regional al movimiento, sumando a ciudadanos y organizaciones públicas y privadas de los departamentos limítrofes.⁴⁵⁶ En Tacuarembó, por ejemplo, José Pedro Lamek, autor en 1963 del proyecto de ley para crear una universidad en esa ciudad, junto a la Intendencia Municipal de Tacuarembó y el Club de Leones, organizaron un plebiscito para recolectar adhesiones.⁴⁵⁷ Este impulso se hizo sentir en otras capitales departamentales norteñas, donde las llamadas “fuerzas vivas” fueron conformando comités de apoyo. Se logró, además, el respaldo de legisladores representantes de los departamentos ubicados al norte del Río Negro, que presentaron a la Cámara de Diputados una solicitud de “urgente trámite” a la fundación de la Universidad del Norte.⁴⁵⁸ También manifestaron

⁴⁵⁴ Ver “Extracto del Expediente. Documentos ref. a la creación de la Universidad del Norte. Proyecto de ley, folletos de exposición de motivos” 794/68-2795. Borrador de la Resolución del Ministro de Cultura, 28 de mayo de 1969, *Colección Federico García Capurro*, caja s.n., AGN, Montevideo

⁴⁵⁵ *Tribuna Salteña*, 6 de julio de 1969, p. 5

⁴⁵⁶ *Verdad Salteña*, 3 de enero de 1969, p. 2

⁴⁵⁷ *La Mañana. Edición del Interior*. 29 de mayo de 1969, p. 4. Según la crónica de prensa se contabilizaron 24.000 votos y el acta de escrutinio se entregó a legisladores del departamento para que la derivaran al ministro de Cultura. La comitiva estuvo integrada por el Intendente Municipal Pedro María Chiesa, Jefe de policía Guillermo A. Ramírez, los diputados Vital Oribe Palomeque y Héctor Gutiérrez Ruiz, el Obispo Diocesano de Tacuarembó, el director de la radio y el canal local Luis S. Dini y su hija Benita Dini, el jefe de redacción de *La Mañana*, Guillermo Rego, y el profesor José Pedro Lamek

⁴⁵⁸ *Tribuna Salteña*, 4 de julio de 1969, p. 1 y 25 de julio de 1969, p.3 *DSCR* Tomo 595, n.ºs 1444 a 1459, junio y julio de 1969, p. 226. Los firmantes fueron: Juan Carlos Fá Robaina, Rutilo de Paula, Juan M. Delgue y Juan José Avellanal, representantes por Salto; Luis M. Giamberini, Sebastián Elizeire, Jorge W. Larrañaga y Washington Vázquez, representantes por Paysandú; Mario Heber, Carlos de Mello y Guido Machado Brum, representantes por Rivera; Héctor Gutiérrez Ruis, Vital Oribe Palomeque y Arnoldo C. García, representantes por Tacuarembó; Luis Eduardo Juan y Alberto Gutiérrez, representantes por Artigas; Raúl A. Silva y Alfonso Equiterena, representantes por Río Negro

su adhesión el Tercer Congreso de Presidentes de Juntas Departamentales y el Congreso de Intendentes Municipales.⁴⁵⁹

Sin dudas el logro más importante de esta campaña lo constituyó el decreto del presidente Pacheco de octubre de 1969, que estableció la creación de una Junta Planificadora de la Universidad del Norte de la República. La Junta estaba integrada por un delegado de cada uno de los seis departamentos al norte del Río Negro, un miembro de la OPP y un representante del Ministerio de Educación y Cultura. Tenía entre sus cometidos elaborar un estudio y relevamiento de las necesidades educativas en la zona de cobertura del nuevo establecimiento, redactar el proyecto de creación de la UN así como su estatuto orgánico y proponer al Poder Ejecutivo la contratación de un rector provisorio. Esta decisión del PE era en los hechos un espaldarazo al Movimiento y fue determinante para que la UN rebasara los restringidos marcos localistas.⁴⁶⁰ Declaraba el asunto de interés nacional ya que, decía, expresaba una corriente popular que daba respuesta a las “reales necesidades de las juventudes del Interior”, favoreciendo una política descentralizadora.⁴⁶¹ Tanto su denominación como los cometidos que se le asignaron denotaban la influencia que por esa época había adquirido la herramienta de la planificación. El decreto traslucía así el interés por introducir cierta racionalidad técnica mediante la producción de conocimiento sobre las poblaciones y sus recursos que avalara la creación de la institución educativa. Sin embargo, resulta llamativo que en su integración no se preveía la participación de expertos o técnicos especializados. Tampoco se explicitaba cómo se iba a proceder al diagnóstico de la realidad de las zonas geográficas que abarcaba, tarea que, según se desprende del texto, quedaba a cargo de los representantes departamentales.⁴⁶²

En diciembre, en la ciudad de Salto, la flamante Junta Planificadora realizó su primera reunión.⁴⁶³ A tono con la significación del acontecimiento, el MpUN y la JSP,

⁴⁵⁹ *Tribuna Salteña*, 6 de diciembre de 1969, 4 y *La Mañana. Edición del Interior*, 18 de diciembre de 1969, p. 13

⁴⁶⁰ Decreto n.º 499/969 en *RNLD.*, 9 de octubre 1969, pp. 1543-1545

⁴⁶¹ *Ibíd.* Ver también *Tribuna Salteña*, 16 de diciembre de 1969.p.1 La Junta estuvo integrada por el ministro de Cultura, Federico García Capurro, como presidente, Edmundo Narancio, representante del ministro en calidad de alterno y el doctor José Echeverry Stirling por la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto. Se incorporaron también José Antonio Varela en representación de Salto, el químico Luis Dini por Tacuarembó, el escribano Esteban Bacigalupi por Rivera, el doctor Rafael Berciano (h.) por Paysandú, Alfredo Mollo Souber por Río Negro y Enner Amaral de García por Artigas

⁴⁶² Decreto n.º 499/969 en *RNLD.*, 9 de octubre 1969, pp. 1543-1545

⁴⁶³ El edil Sidi Omar Cancela manifestaba en la Junta Departamental su beneplácito de que la ciudad fuera sede de “un acto de trascendental importancia, para el futuro [del] departamento y de toda la zona

organizaron una caravana de autos que recibió al ministro de Cultura. Finalizó con un acto público en el Ateneo donde hicieron uso de la palabra José Antonio Varela y el ministro García Capurro. La resolución del Gobierno representaba, a los ojos de *Tribuna Salteña*, un triunfo de los salteños “que han logrado su Universidad para el Norte del País”. Se concluía una primera etapa en el camino hacia el logro de la “justicia cultural para el interior”.⁴⁶⁴

Al mismo tiempo, en Salto algunas asociaciones gremiales de profesores y estudiantiles así como el Comité pro Cursos Universitarios manifestaron su oposición y acusaron a este movimiento de formar parte de una ofensiva de las derechas para desprestigiar a las instituciones de enseñanza y, en especial, a la Universidad de la República. El Comité referido, en particular, dejando de lado las antiguas desavenencias que lo habían enfrentado a aquella institución, expresó su apoyo a una descentralización de la educación superior en el marco de esa casa de estudios. La Asociación Salteña de Profesores, por su parte, cuestionó la concepción “tecnológica” y las motivaciones políticas que desvirtuaban una idea de “noble origen” y expresó su total apoyo Universidad.⁴⁶⁵ Objetaron además al ministro García Capurro, “que por un lado oprime a la Enseñanza y, por otro lado, aparece ofreciendo su apoyo financiero al proyecto de Universidad del Norte, transformado en un reformador universitario”.⁴⁶⁶ Otras entidades locales como la Asociación de Estudiantes del Liceo Piloto (AELPS) también manifestaron su rechazo.⁴⁶⁷

Como era de esperar, la reacción más enérgica provino de la Udelar. Sus autoridades consideraron que la UN respondía a razones de “política menuda” y no contemplaba “los grandes intereses del país que son los que deben preocuparnos a todos los uruguayos”, en palabras del rector Maggiolo.⁴⁶⁸ No obstante, el rector instó a mantener una posición cautelosa, evitando la polémica y la confrontación. Propuso recorrer las localidades con el fin de explicar en qué consistía la “descentralización”, los mecanismos existentes para facilitar la afluencia de estudiantes del interior así como

norte [del] país”. Ver *Actas Junta Departamental de Salto*, Acta n.º 152, 15 de diciembre de 1969, pp. 9-10

⁴⁶⁴ *Tribuna Salteña*, 13 de octubre de 1969, p. 1

⁴⁶⁵ Copia taquigráfica de la Exposición realizada por la directiva ante la Asamblea realizada el 10 de febrero de 1969. *Verdad Salteña*, 7, 15, 20 y 23 de febrero de 1969

⁴⁶⁶ *Verdad Salteña*, 14 de febrero de 1969, p. 7

⁴⁶⁷ *Tribuna Salteña*, 7 de octubre 1969, 1 y 11 de octubre de 1969, p. 8

⁴⁶⁸ Entrevista a Óscar J. Maggiolo en el semanario *Izquierda*, marzo de 1969 *Archivo Maggiolo*, Caja n.º 11, Carpeta n.º 215, AGU

“los obstáculos que impiden que esas dos políticas [...] lleguen a feliz término”.⁴⁶⁹ El Consejo Directivo Central, mientras tanto, decidió interponer un recurso de revocación del decreto que creaba la Junta al tiempo que acordó tomar medidas para incrementar la presencia universitaria en el interior y contemplar, en especial, las demandas provenientes de Salto.⁴⁷⁰ Luego de varios contactos con el Comité Pro-Cursos y de la visita a Salto de las autoridades universitarias a fines de 1969, se decidió oficializar los cursos de Derecho y Notariado y establecer una Casa de la Universidad en la ciudad, trasladando la exitosa experiencia que había comenzado a implementarse en Paysandú ese año a instancias de la Estación Experimental que funcionaba desde 1963.⁴⁷¹

Estas acciones generaron temor en los partidarios de la UN que, por otra parte, hacía tiempo habían desechado la expansión universitaria dentro de los marcos de la Universidad de la República, una opción que en su opinión afianzaba el centralismo que se estaba combatiendo.⁴⁷² En nota al ministro de Cultura, el presidente del MpUN, José A. Varela, se quejaba amargamente de que “la universidad de Montevideo y la Iglesia Católica han tocado a degüello contra la Universidad del Norte”.⁴⁷³ En julio de 1970, sin embargo, se inauguró la Casa de la Universidad de Salto, donde al año siguiente comenzaron a dictarse los cursos de Derecho y Notariado. La oficialización de los cursos y la instalación de la “casa de la adversidad”, según la calificación de *Tribuna Salteña*, agudizó los ataques contra la Universidad provenientes de los sectores de la derecha salteña, esgrimiendo que se trataba de una maniobra para debilitar la fuerza del movimiento por la UN.⁴⁷⁴ *Tribuna Salteña* advertía que “combatiremos siempre a la

⁴⁶⁹ CDC, 22 de diciembre de 1969, p. 1457

⁴⁷⁰ El recurso se basó en la “contienda” de competencias entre el Poder Ejecutivo y la Udelar. Ver “Sentencia de la Suprema Corte”, n.º 24, 8 de marzo de 1971. En *Anales Administrativos 1971*, t. 7 (Montevideo: Presidencia de la República, Centro de Información y Difusión, 1974)

⁴⁷¹ En 1969, a iniciativa de los docentes de la Estación Cassinoni, se estableció un enclave universitario en la ciudad de Paysandú. En julio de ese año se inauguró la Casa de la Universidad con el cometido de vincular a los universitarios con el resto de la población. Pese a la fuerte relación que mantuvo desde el inicio con la Facultad de Agronomía, cuyos docentes dedicaban horas de trabajo a las actividades que se organizaban, se resolvió que dependería centralmente de la Comisión de Cultura. La Casa se transformó en un centro de divulgación cultural y de enseñanza de gran incidencia en el medio. El éxito de la iniciativa permitió que se la experiencia se replicara en Salto. Ver Jung, M. E. (ed.) *Antecedentes históricos de la Universidad en el interior 1906-1973*, p. 29 La C

⁴⁷² Exposición de motivos de la UN, p. 20, *Colección Federico García Capurro*, caja s/n, AGN, Montevideo

⁴⁷³ Carta de José Antonio Varela al Ministro Federico García Capurro, 18 de enero de 1970. *Colección Federico García Capurro*, cajas s/n, AGN, Montevideo

⁴⁷⁴ *Tribuna Salteña*, 28 de octubre de 1970, p. 3

Universidad politizada y extranjerizante”⁴⁷⁵ así como a los “elementos corrosivos” dirigidos a destruir “nuestro sistema democrático republicano”.⁴⁷⁶

Aún así, crecieron los rumores de que al año siguiente se inaugurarían los primeros cursos de la UN, generando gran expectación en filas del Movimiento. De acuerdo a las versiones de la prensa, el Ministerio de Cultura aportaba 1 millón de pesos, al tiempo que se esperaba la contribución económica de las intendencias y de “hacendados y vecinos de los departamentos interesados en la eficacia del organismo”.⁴⁷⁷ Pero el viento a favor viró a principios de 1970. Tras el escándalo provocado por la fuga de las presas del MLN-T de la Cárcel de Mujeres, García Capurro, se vio obligado a renunciar.⁴⁷⁸ El alejamiento de quien hasta ese momento había sido el principal impulsor del proyecto en el Gobierno, significó un duro revés para el MpUN. El ex ministro aclaró que pese a verse obligado “a abandonar el frente de la línea de lucha” su posición era la del presidente Pacheco y, por tanto, quien lo sustituyera continuaría “en la línea” trazada por el Gobierno. Comprometía su apoyo desde el “llano” y aventuraba que “nada ni nadie [podía] parar lo que ya está en marcha por el esfuerzo de Uds. y el apoyo de nosotros”.⁴⁷⁹

Su sucesor, Carlos María Fleitas, representante del sector colorado Unidad y Reforma liderado por el Dr. Jorge Batlle, modificó el rumbo que el Poder Ejecutivo había seguido hasta ese momento. Retomó el diálogo con las autoridades universitarias al tiempo que el trámite de la UN, en la órbita del Ministerio de Cultura, quedaba suspendido. Recordemos que ese sector del coloradismo a partir de 1966 experimentó una inflexión hacia posiciones neoliberales en lo económico y liberal conservadoras en lo político, abandonando la herencia republicana proveniente del primer batllismo. Con el retorno del Partido al gobierno, Unidad y Reforma, pasó a ser uno de los principales apoyos a la gestión de Pacheco, aunque mantuvo un perfil propio, marcando distancia en este y otros asuntos.⁴⁸⁰ Eso explica que el diario *Acción*, considerara a la UN como

⁴⁷⁵ *Tribuna Salteña*, 8 de abril de 1970, p. 1

⁴⁷⁶ *Tribuna Salteña*, 2 de octubre de 1970, p. 3

⁴⁷⁷ *Tribuna Salteña*, 12 de diciembre de 1969, p. 3 “Universidad del Norte podría comenzar en 1970”

⁴⁷⁸ El 8 de marzo de 1970 se fugaron 13 presas políticas pertenecientes al MLN-Tupamaros de la Cárcel de Mujeres

⁴⁷⁹ *Tribuna Salteña*, 22 de marzo de 1970, p. 1 “Futuro cierto de la Universidad del Norte”

⁴⁸⁰ Rodríguez Metral, Matías, “En el llano. Adaptación política y renovación del programa económico de la Lista Quince del Partido Colorado. 1958-1962, *Tesis de Maestría en Historia Política*, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9907/1/TMCP_Rodr%C3%ADguezMetr

“una utopía” y que, por tanto, manifestara que no apoyaría “sueños que no podrán ser realidades”.⁴⁸¹ Esta rama del batllismo no abandonó totalmente la tradición liberal y cierta cercanía con la Universidad de la República que habían sido determinantes en su rechazo a la creación de otras universidades privadas o públicas.⁴⁸²

Así las cosas, el cambio de orientación ministerial generó fuerte malestar tanto en el MpUN como en la prensa derechista que había manifestado su apoyo al proyecto. El periódico nacionalista *El País* acusó a Fleitas de acercarse a “la Universidad monopolista existente” mientras mantenía silencio respecto al compromiso “contraído por el gobierno y por el presidente con la juventud del interior”⁴⁸³. Su par colorado, *La Mañana* en su edición del interior también expresó su disgusto por el “fervor dialogante” del ministro que, además, detenía el proceso de creación de la Universidad del Norte⁴⁸⁴. Mientras tanto, en Salto, *Tribuna Salteña* convocó a redoblar la lucha “por la creación de la Universidad del Norte, para contrarrestar la podredumbre maloliente del sur”⁴⁸⁵ mientras la Junta Directiva del Comité Departamental Colorado de la Lista 123, integrante de Unión Colorada y Batllista liderada por Pacheco, exhortaba a los demás partidos políticos a pronunciarse públicamente sobre el asunto.⁴⁸⁶ Conforme transcurrían los días iba quedando claro que el proyecto era “enterrado”, dejando como saldo una “movilización frustrada”, “promesas incumplidas” y “ciudadanos desairados”, según expresiones de *El País*.⁴⁸⁷

Ante esta situación, la Junta Planificadora y el MpUN movilizaron sus recursos e iniciaron rondas de contacto con el nuevo ministro de Cultura con el propósito de destrabar la situación. En estos encuentros participaron también las llamadas “fuerzas vivas locales”, estudiantes, diputados y representantes del gobierno departamental.⁴⁸⁸ Fleitas no transigió —y expresó sus razones— a crear otros centros de carácter universitario, proponiendo en cambio instalar Institutos Tecnológicos Superiores de carácter regional que se encargarían de la coordinación general con todos los

[alMatias.pdf](#) (última consulta: 7 mayo 2020) y Ferreira, Pablo. “El otro viraje. Democracia y ciudadanía en el discurso de la lista quince ante los debates constitucionales de 1951 y 1966”. En *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año V, n.º 5, 2014, pp. 105-123

⁴⁸¹ *Acción*, enero de 1970 citado por *El País*, 20 de julio de 1970, p. 5.

⁴⁸² Ferreira, Pablo, *Ibíd.*, p. 115

⁴⁸³ Tomado de *El País*. En: *Tribuna Salteña*, 23 de abril 1970, p. 3

⁴⁸⁴ *La Mañana Edición del Interior*. 21 de mayo de 1970, p. 3 y 9 de julio de 1970, p. 3

⁴⁸⁵ *Tribuna Salteña*, 28 de agosto de 1970, p. 3

⁴⁸⁶ *Tribuna Salteña*, 24 de julio de 1970, p. 7

⁴⁸⁷ *El País*, 29 de mayo 1970, p. 3

⁴⁸⁸ *Tribuna Salteña*, 30 de julio de 1970, p. 3

organismos de tecnología estatal y privado en la zona norte.⁴⁸⁹ En respuesta al ministro, en Tacuarembó se difundió un volante titulado “Universidad del Norte”, que incluía una síntesis del proyecto de ley de 1963 presentado por Lamek, a cuyo pie rezaba “¡Esto es lo que pedimos, señor Ministro y nada más!”. Finalizaba con una advertencia: “El pueblo sabrá juzgar...! La historia lo dirá...!”.⁴⁹⁰ Por su parte, el Presidente del MpUN, José Antonio Varela, mantuvo conversaciones con Jorge Batlle, dirigente de Unidad y Reforma, que respaldó a su ministro.⁴⁹¹ También el mencionado Movimiento Democrático Universitario que nucleaba a los docentes opositores y anticomunistas en la interna universitaria, reprobó el “momentáneo fracaso de la llamada Universidad del Norte” y resolvió exhortar a los poderes públicos a viabilizar “un requerimiento tan esencial para la supervivencia y el desarrollo de nuestro país”.⁴⁹²

Pese a las diversas tratativas no hubo cambios sustantivos en la postura ministerial y el proyecto quedó en suspenso. Tanto el MpUN como *Tribuna Salteña* radicalizaron su discurso y el tono beligerante, propio de la reacción derechista que había incorporado la lógica de la guerra interna, para denostar a quienes “pretenden destruir nuestro sistema republicano-democrático y el tradicional estilo de vida que se impuso libremente la ciudadanía de nuestro país”. “En esa guerra no hay treguas, porque estamos dispuestos a seguirla hasta sus últimos extremos”, concluía.⁴⁹³ Sin embargo, con el correr de los meses otros asuntos concentraron la atención gubernamental, entre ellos la lucha contra la guerrilla y la dura campaña electoral, en la que participaba por primera vez la coalición de izquierda Frente Amplio. La instalación de otra universidad pública pasó a ocupar un segundo plano para el gobierno central y parte del elenco político nacional.

La iniciativa, sin embargo, se mantuvo en el debate público tal como quedó de manifiesto en las diversas tentativas por revitalizarla y concretarla que finalmente no prosperaron. Una primera señal fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia, en marzo de 1971, a favor del Poder Ejecutivo en la contienda de competencia que la Universidad había interpuesto dos años antes. La sentencia incluía una “discordia” de uno de los

⁴⁸⁹ *El País*, 12 de julio de 1970, p. 5

⁴⁹⁰ “Universidad del Norte. Reunión con el Ministro de Educación y Cultura. Junta Departamental de Tacuarembó. 26 de julio de 1970, Hora 10”. Folleto proporcionado por el actual diputado del Partido Nacional, Antonio Chiesa. Entrevistado por Gabriel Bucheli y María Eugenia Jung, Montevideo, 11 de setiembre de 2013

⁴⁹¹ *Tribuna Salteña*, 23 julio de 1970, p. 3

⁴⁹² *Tribuna Salteña*, 9 de octubre de 1970, p. 1 Resolución del Movimiento Democrático Universitario, firmado por el doctor Hugo C. Amorín (presidente); arquitecto Juan R. Menchaca (secretario de Prensa)

⁴⁹³ *Tribuna Salteña*, 2 de octubre de 1970, p.3

ministros de la Corte, el Dr. Sánchez Rogé, dando cuenta de lo controvertido del asunto en cuestión.⁴⁹⁴ El mismo año el entonces ministro de Cultura, Ángel Rath, se reunió con representantes de los departamentos del norte quienes le entregaron un estudio que relevaba el número de habitantes por zona, la cantidad de estudiantes, y detallaba cuáles eran las “necesidades”, los “problemas” y las “aspiraciones” de la región. Según declaraban, los datos proporcionados se basaban en “estadísticas reales, de probada vigencia”. La representante de Artigas, profesora Enner Amaral de García, resaltaba la importancia de este encuentro, que renovaba las expectativas de materializar la UN.⁴⁹⁵

En setiembre, en plena campaña de los partidos políticos hacia las elecciones nacionales de noviembre, el presidente Jorge Pacheco con el apoyo pleno de la Junta Planificadora y del MpUN emitió un nuevo decreto ampliando la cobertura geográfica de la Junta integrando a delegados de los departamentos situados al sur del Río Negro.⁴⁹⁶ La Universidad del Norte pasó entonces a ser la Universidad del Interior. El Poder Ejecutivo envió al presidente de la Asamblea General un proyecto de ley que disponía la instalación de la Universidad del Interior que, además de la exposición de motivos, incluía seis artículos.⁴⁹⁷⁴⁹⁸ Sin embargo, el proyecto corrió la misma suerte de sus predecesores: no fue discutido y quedó en suspenso. En opinión de sus impulsores, quedaba en evidencia “el sistemático desinterés de las autoridades nacionales respecto a este problema” y hacia las “juventudes del interior” que eran condenadas al olvido al restringirles “de cuajo el acceso a los estudios profesionales”.⁴⁹⁹ En los años previos al golpe de Estado la movilización del MpUN no alcanzó las adhesiones políticas necesarias. Otras preocupaciones, vinculadas a las duras circunstancias que vivía el país, concentraron la atención de los partidos políticos y del elenco gobernante.

Lo dicho hasta acá demuestra que el MpUN retomó la antigua reivindicación local de crear una universidad en Salto y devino, claramente, un movimiento de reacción

⁴⁹⁴ “Sentencia de la Suprema Corte”, n.º 24, 8 de marzo de 1971. En óp. cit.

⁴⁹⁵ *La Mañana Edición del Interior*. 27 de mayo de 1971, pp. 8-9 “Una importante reunión tuvo lugar en Artigas en apoyo a gestiones por la Universidad del Norte

⁴⁹⁶ Decreto n.º 586/971 en *RNLD*. 15 de setiembre de 1971, pp. 590-591. Ver también *La Mañana Edición del Interior*. 30 de setiembre de 1971, p. 3 “La Universidad del Norte será del interior”

⁴⁹⁷ *Cámara de Representantes. Secretaría*. Carpeta n.º 2675/971, Montevideo, 20 de setiembre de 1971. Transitoriamente la “organización, puesta en funcionamiento, dirección y administración” quedaba a cargo de la Junta Planificadora de la Universidad del Norte, ampliada en su integración por el decreto antes mencionado. Se autorizaba al Poder Ejecutivo a disponer de Rentas Generales de doscientos millones de pesos para los gastos de instalación, organización y funcionamiento

⁴⁹⁸ *La Mañana. Edición del Interior*, 30 de setiembre de 1971, p. 3

⁴⁹⁹ *La Mañana Edición del interior*, 18 de marzo de 1971, p. 3 “¿Y la Universidad del Norte?”

contra lo que percibía como un peligroso avance de las izquierdas en el seno de la enseñanza debido a la creciente movilización estudiantil y la adhesión de parte del cuerpo docente a ideologías de cambio social. Desde esta tesitura, la campaña que llevó adelante estuvo dirigida contra la Universidad a la vez que propiciaba la creación de una nueva universidad competitiva con ésta. A medida que fue sumando apoyos, su discurso se tornó cada vez más radical y combativo. Las argumentaciones académicas y técnicas acerca de los cometidos, el carácter y la configuración institucional de la UN se tiñeron de un marcado contenido político e ideológico. El devenir del Movimiento pro Universidad del Norte muestra cómo en esta etapa de fuerte crisis social y política las tendencias derechistas más moderadas se acercaron a las más radicales, adoptando rasgos de su ideología y de su práctica. De hecho, su composición social y política, la trayectoria de sus integrantes más reconocidos junto al impulso que recibió de algunos grupos de derecha radical (a nivel local y nacional) marcaron el tono confrontativo que fue adquiriendo su campaña y condujo a que la idea (y no solo el movimiento) quedara asociada al amplio abanico de sectores ubicados a la derecha del espectro político nacional. Carlos Real de Azúa a comienzos de los setenta resumía el proceso aquí descrito:

Desde 1969 se ha agitado la posibilidad de centros privados o libres y descentralizados de enseñanza superior. En noviembre de 1969 el ministro García Capurro creó una comisión para planear la Universidad del Norte, la cual fue dotada con 200 millones de pesos. Más tarde, durante la gestión del ministro Fleitas, el proyecto pareció empantanarse. De nuevo el presidente Pacheco proyectó una Universidad para el interior (16.IX.71). La modulación "privatista" ha sido esbozada bajo la forma de centros universitarios privados o mixtos, con aporte privado y estatal, para fines de enseñanza superior e investigación con estas específicas características: carreras breves y de orientación práctica, "universidad para el desarrollo", participación de la industria y otros intereses privados (en *El País*, 14.X.73)⁵⁰⁰

En línea con el planteo de Real, es posible vislumbrar en este período cómo se fue configurando un programa de modernización universitaria por derecha que, más allá de las fórmulas propuestas —centros universitarios privados, públicos o mixtos (con aporte privado y estatal)—, puso énfasis en la promoción de carreras breves con orientación práctica y la participación de los sectores vinculados al sector productivo. La UN en el

⁵⁰⁰ Real de Azúa, Carlos. *La Universidad*. p. 91

proceso que condujo al trasvase al ámbito nacional y a la cooptación por parte de las derechas, pasó a ser la “Universidad para el desarrollo”, según la formulación de García Capurro, y fue presentada como parte de una reforma integral del sistema educativo uruguayo, reactualizando las discusiones sobre el papel de las universidades y los distintos modelos de educación superior de importante difusión regional y mundial. Las diferentes concepciones acerca del rol de la universidad que promovieron las derechas, tras las cuales se solaparon distintos modelos universitarios, intereses locales y corporativos y posiciones político-ideológicas, constituyen el centro del análisis de las páginas que siguen.

2. Universidad para el desarrollo: un programa de modernización conservadora

En su origen el MpUN no objetó la orientación profesionalista de la enseñanza universitaria. Al contrario, aspiró a que la UN cumpliera un rol similar al de la Universidad de la República en la formación para las profesionales liberales y de los elencos dirigentes. El énfasis argumentativo estuvo puesto en la descentralización cultural, es decir, en la resolución de los desequilibrios de acceso a la enseñanza universitaria entre los jóvenes de la capital y del resto del país, y en la contención de los desbordes en la institución universitaria a causa, según decían, de la actividad subversiva de las izquierdas. Estas ideas fueron sintetizadas en las expresiones que calificaban a la proyectada universidad como “igualitaria”, “popular” y “esencialmente democrática”.⁵⁰¹

Pero también, en línea con antiguos reclamos, se propusieron variantes significativas al modelo tradicional al ponderar las profesiones vinculadas de modo más directo al sector productivo. Más aún, consideraban que la UN importaba una profunda reforma universitaria, con énfasis en la enseñanza práctica, aplicada y, por ende, socialmente útil, muy a tono con los discursos de carácter modernizador que preconizaban vastos actores de las derechas de la época. Conjuntamente, los cambios propuestos requerían de la adecuación de los contenidos curriculares y de los planes de estudios en el entendido de que el cometido de un centro de nivel universitario debía “enseñar lo que

⁵⁰¹ Folleto de la UN. *Colección Federico García Capurro*, cajas s.n., AGN, Montevideo

el estudiante pueda aprender y debe moralmente saber”.⁵⁰² Las expresiones de la fundamentación del proyecto que se transcriben a continuación, pese a su extensión, resultan expresivas de algunas de estas ideas que, según decía, se insertaban en el reformismo universitario, haciendo su propia lectura e interpretación del legado cordobés.

Con ello, nos mantendremos dentro de la tradición reformista de la esencia y sentido universitario, sin alterar los hados de la Universidad entre cuyas funciones, siguiendo aquellas mismas enseñanzas, está; el aumentar y mejorar aquel su propio saber universitario por medio de la investigación, de la experimentación, del estudio sin pausa ni sosiego; el hacer profesionales para transmitir a la vida diaria, práctica, común los atributos de aquel saber, en beneficio todo ello del mismo interesado y de la comunidad. Ese saber se adquiere y se acumula en los laboratorios, campos y escuelas de experimentación, etc., y se enseña y comunica a los estudiantes, en las cátedras y sus trabajos. Es decir, pues, insistiendo en conceptos ya enunciados, que siendo la Universidad un producto y elemento social imponderable, es y debe ser hija y alto exponente del medio ambiente, y proceder y actuar por extensión, con un sentido cultural de utilidad social, de perfeccionamiento moral e intelectual de la comunidad. El índice social inequívoco de ésta lo da y es el hombre medio social. En este orden de ideas el hombre medio del Litoral y Norte del país, piensa, siente anhela y hasta procede de modo y manera diversa que el hombre medio de Montevideo, por ejemplo.⁵⁰³

Concretamente, la propuesta que el MpUN presentó al ministro de Cultura, Federico García Capurro, preveía la creación de tres facultades: Derecho y Ciencias Sociales, Agronomía y Veterinaria así como de otros servicios que eventualmente pudieran crearse. La UN, además, quedaría facultada para expedir títulos equivalentes a los de la Universidad.⁵⁰⁴ Aunque es claro el interés por implementar profesiones liberales clásicas, se daba prioridad, junto a la carrera de Derecho, a áreas de conocimiento vinculadas a la producción agropecuaria, contemplando los estudios de corta duración así como de títulos intermedios para que los jóvenes se insertaran más tempranamente al mercado de trabajo.

Estos planteos iniciales fueron tomando diferentes modulaciones y modificando sus contenidos una vez que el movimiento amplió sus bases de apoyo. La UN, entonces, comenzó a ser imaginada como parte de una reforma educativa más amplia que superara

⁵⁰² Folleto de la UN, p. 13, *Colección Federico García Capurro*, cajas s.n., AGN, Montevideo

⁵⁰³ Folleto de la UN, p. 10, *Colección Federico García Capurro*, cajas s.n., AGN, Montevideo

⁵⁰⁴ *DSCR*, 17 de agosto de 1966, pp. 194-200

las graves insuficiencias de la enseñanza universitaria, considerada “arcaica” y “obsoleta”. Independiente de la Universidad de la República, el nuevo establecimiento nacía libre de los problemas de aquella, con una orientación transformadora para contribuir en la solución de los problemas fundamentales del país e incidir en la problemática cultural, científica y tecnológica de las diferentes regiones, se señalaba. Para el *El País* constituía una “experiencia pedagógica de sentido renovador y profundo y vasto alcance” que debía construirse “con el estudiante en una comunidad en desarrollo progresivo”, adecuando “las instituciones y las formas administrativas a esa meta”⁵⁰⁵. Esa reforma solo sería posible si se concedía mayor injerencia y control al Poder Ejecutivo en el ámbito educativo, limitando la excesiva autonomía de que gozaban los entes de enseñanza en general, y especialmente la Universidad. En una tesitura similar, García Capurro, además de declarar la conveniencia de recabar las experiencias transitadas en el país y en el exterior, exitosas o truncadas, hacía explícita esta aspiración de mayor control del PE sobre los órganos de enseñanza:

Existe opinión generalizada en este país de que la enseñanza hay que adecuarla al momento que vive el mundo. Incluso adecuando la mayoría de los procedimientos viejos, que no deben ser desechados. Pero no es tema para improvisaciones ni para frases a corazón ligero. Hay que estudiar primero la situación nacional, hay que revisar los antecedentes (Cassinoni, Pivel y la CIDE hicieron proyectos), hay que informarse de lo que ocurre en el resto del mundo y recién entonces elaborar la gran reforma. Pero en ella deben intervenir los responsables de la enseñanza (o sea los entes autónomos de la misma) y el pueblo a través del Poder Ejecutivo y de las Cámaras, ya que estos fueron elegidos por el pueblo lo representan y deben opinar.⁵⁰⁶

El apoyo de García Capurro fue decisivo tanto en el curso que siguió el proyecto como en las repercusiones públicas que tuvo, convirtiéndose en una figura clave para la articulación de los variados intereses en juego. Sus opiniones alimentaron los debates en torno al futuro de la educación superior que fueron particularmente fecundos durante el período en que permaneció en su cargo. Sus acciones estuvieron marcadas por un particular encono hacia la Universidad de la República, con cuyas autoridades se negó a dialogar durante toda su gestión al frente del Ministerio de Cultura.

⁵⁰⁵ *El País*, 27 de octubre de 1969, p. 3 “Reforma de la enseñanza”

⁵⁰⁶ *BP Color*, edición extraordinaria 90 aniversario, 27 de noviembre de 1968, pp. 18-19

Dada la relevancia de este personaje en la historia que aquí se cuenta, parece conveniente detenerse brevemente en algunos trazos biográficos. Federico García Capurro (1907-2000) médico radiólogo y político colorado, fue una figura muy controvertida en los diversos ámbitos en los que se desempeñó. Cincuenta años más tarde de los acontecimientos aquí reseñados, es evidente esa marca, al punto que apenas aparece referido en las historias del período y en la memoria de sus protagonistas. Su archivo personal custodiado en el AGN en Montevideo (aún sin procesar) aporta información sobre su trayectoria profesional y política así como sobre sus vínculos personales en distintas etapas de su vida y, por tanto, ofrece una perspectiva más amplia acerca de sus posicionamientos, propósitos y motivaciones respecto a este y otros asuntos en los que tuvo incidencia. Educado en el seno de una familia patricia montevideana de comienzos del siglo XX, estudió medicina en la Universidad de la República, al igual que lo había hecho su padre y su hermano, especializándose en radiología.

Incursionó en la actividad política como militante colorado, católico y opositor del batllismo liderado por Luis Batlle Berres. Entre 1952 y 1954 fue ministro de Salud Pública, con un desempeño que provocó más de un cuestionamiento y fricciones varias con sus correligionarios y con otros actores políticos y sociales. En las elecciones de 1954 integró la lista de candidatos al Consejo Nacional de Gobierno por el coloradismo independiente, que obtuvo una amarga derrota ante el sector de Luis Batlle Berres. En esa oportunidad García Capurro declaró a un correligionario: “Mi posición es clara y puede resumirse así: fui, soy y seré un hombre de partido, que actúa con convicción en el ‘Libertad y Justicia’, que está dispuesto a afrontar las responsabilidades si comparte los criterios que los amigos disponen, pero que no aspira a encumbrarse a expensas del partido.”⁵⁰⁷ Ese año, el sector Libertad y Justicia, liderado por Eduardo Blanco Acevedo, exponente del partido colorado independiente y destacada figura del terrismo de los años treinta, alcanzó un acuerdo con el batllismo de la lista 14. La “catorce” respondía a un sector del batllismo, de matriz ideológica republicana y reformista, cuyos orígenes remiten al ciclo de cambios que se produjo en Uruguay en las primeras décadas

⁵⁰⁷ Carta de Federico García Capurro a Dr. Cosse E. Correa, Castillos, Rocha, 5 de enero de 1955. Ver *Colección García Capurro*. Caja s.n. AGN. Por el Partido Colorado en esa instancia compitieron tres listas. La nómina completa de la Lista 14 era: Orestes Lanza, Eduardo Acevedo Álvarez, Giordano Bruno Eccher, Daniel Castellanos, Álvaro Correa Moreno, Federico García Capurro

del siglo XX, pero que durante la década del cincuenta, al calor del clima de época signado por la Guerra Fría y coincidente con el segundo ciclo reformista de perfil progresista liderado por Batlle Berres, se fue configurando como una de las expresiones del campo de las derechas en la arena política partidaria.⁵⁰⁸ En 1962, ambas agrupaciones se fundieron en la Unión Colorada y Batllista (UCB), de matriz ruralista y católica, que ese año lanzó a Óscar Gestido como candidato a la presidencia.⁵⁰⁹ García Capurro se integró a las filas de la UCB. A fines de la década fungió como uno de los principales apoyos del presidente Gestido y, más tarde, de su sucesor Jorge Pacheco Areco. En 1968 fue designado ministro de Cultura, luego que su titular, Alba Roballo, renunciara por discrepancias con las políticas autoritarias que comenzó a implementar el presidente Pacheco. En ese cargo tuvo una activa labor mediante la presentación de variados proyectos que generaron enconadas resistencias por parte de los sectores involucrados.

Su obligada renuncia al cargo en 1970, no canceló su actividad en la primera línea del Gobierno y al año siguiente fue designado como ministro de Defensa. En esta etapa expresó su más abierto apoyo a la intervención de las FFAA en la lucha contra la subversión. En simultáneo, y por un breve tiempo, ocupó la titularidad del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. En 1971, Pacheco le ofreció ocupar la fórmula presidencial en una posible reelección pero rechazó la propuesta. Su carrera política se mantuvo durante la dictadura cívico militar que se instauró en junio de 1973. Integró el Consejo de Estado, bajo la presidencia de Aparicio Méndez y, más tarde, ante la posibilidad de recambio en la presidencia del régimen su nombre fue considerado para conformar un triunvirato que finalmente no prosperó. Con estos antecedentes, no llama la atención que García Capurro mantuviera una conflictiva relación con la Universidad de la República.

Los cruces con esa institución tenían un lejano origen, remontándose a su época de estudiante cuando fue denunciado por irregularidades en la forma de acceso a cargos docentes. Más tarde se sumaron severas acusaciones a sus actuaciones como ministro de Salud Pública (irregularidades en la provisión de los cargos, designaciones directas,

⁵⁰⁸ Ferreira, Pablo “DEMOCRACIA, ORDEN Y LEGALIDAD. El surgimiento de un batllismo conservador y de derechas en el Uruguay feliz de los tempranos cincuenta” *Revista de Historia Americana y Argentina*, Vol. 54, n.º 2, 2019, Mendoza (Argentina). Universidad Nacional de Cuyo, pp. 169-173

⁵⁰⁹ *Ibíd*

entre otros). En 1954, la delegación estudiantil cuestionó en el seno del Consejo Directivo de Medicina su idoneidad moral para ocupar la titularidad de la Cátedra de Radiología, constituyendo el inicio de un duro y prolongado conflicto. En esa oportunidad el orden estudiantil presentó 38 cargos en su contra entre los que destacaban: incompatibilidad de entre el cargo de ministro Salud Pública y la candidatura a Titular de cátedra, anomalías en la provisión de cargos, maniobras para desplazar a docentes de sus cargos en hospitales públicos. En su descargo, García Capurro, catalogó las acusaciones de “inconsistentes, infundad[a]s, fals[a]s y no exentos de cierta malicia o de aviesa intención, originada seguramente en fuentes de información que han sido tendenciosas o erróneas”. Agregaba que: “La enormidad de la aberración que cometen equivocadamente en nombre de la juventud universitaria, es doblemente ofensiva porque la juventud ha sido siempre defensora generosa y desinteresada de la justicia”.⁵¹⁰ Haciendo uso del lenguaje anticomunista propio de la Guerra Fría, calificó la negativa de la Asociación de Estudiantes de Medicina a discutir sobre las imputaciones como digna “del más encumbrado de los dirigentes del Kremlin” y a los consejeros estudiantiles de “autómatas”. En una carta dirigida al Presidente del tribunal de Recusaciones del Ministerio de Salud Pública aclaraba que:

El Sr. Presidente del Tribunal de Recusaciones, sabe bien hasta donde he sido y continúo siendo partidario del sindicalismo y del gremialismo universitario. Esta exposición, obviamente, no tienen ninguna intención de atacar esas formas corporativas de actuación. Tiene la sola intención de puntualizar cuan falsos son a veces los movimientos sindicales o gremiales cuando las jefaturas de los grupos se encuentran en manos de quienes hacen ceder los intereses de éstos en beneficio propio. Dentro de los organismos de esta índole actuales, existen elementos dirigentes del mejor cuño, pero lamentablemente carecen de efectividad en su acción por la falta de escrúpulos y la pretendida habilidad política o de gobierno de los restantes dirigentes⁵¹¹

Con el tono beligerante y provocativo que caracterizaron sus intervenciones, García Capurro hacía gala de su acendrado anticomunismo, anticipando la disposición de ánimo con la que una década más tarde asumió el ministerio y se enfrentó a la

⁵¹⁰ Exposición presentada por el profesor Agregado de Radiología de la Facultad de Medicina. Doctor Federico García Capurro. Con motivo del injustificado e insólito ataque que a su persona realizaron los señores delegados estudiantiles, en sesión del Consejo de la Facultad de Medicina. 1954 En *Colección Federico García Capurro*, caja s.n., AGN, Montevideo

⁵¹¹ Carta dirigida al señor Presidente de Tribunal de Recursos del Ministerio de Salud Pública. 1958, En *Colección Federico García Capurro*, caja s.n., AGN, Montevideo

Universidad. A comienzos de 1968 la Federación de Docentes Universitarios lo denunció por sus intentos de cercenar la autonomía de esa institución, fomentar su desprestigio público y de sus autoridades, apoyar al allanamiento policial a los locales universitarios así como promover la destitución del Consejo Directivo Central.⁵¹² Por similares razones, ese mismo año el Consejo Arbitral de la gremial médica del país resolvió suspenderlo en su calidad de socio y de Médico Radiólogo en el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU).⁵¹³ Se entiende así el profundo resentimiento de García Capurro hacia la Universidad, pero sobre todo, a los principios autonómicos que la sustentaban, a sus órganos de cogobierno y a la participación estudiantil en ellos. Para el entonces rector, Oscar Maggiolo, García Capurro no era más que un “generador de conflictos”, “que nada constructivo proponía”.⁵¹⁴

Sin embargo, su gestión al frente de la cartera de Cultura estuvo signada por la voluntad de llevar adelante, en medio del clima de “agitación estudiantil y gremial que ha distorsionado gravemente la actividad educacional, una “gran reforma educativa” de acuerdo a “un orden de prioridades ineludible y ajustándose a un claro sistema de principios y de normas que constituyen la más auténtica tradición cultural y jurídica del país”, que procuró canalizar a través dos proyectos: el de creación de un Consejo Superior de Enseñanza e Investigación Científica, con funciones de asesoramiento y de orientación en materia de política educativa, y el de la UN “con las características de una Universidad para el desarrollo”, según sus palabras. No se trataba, de “multiplicar los servicios ya existentes en la Universidad de Montevideo, sino de establecer oportunidades para la juventud en el sector de las ciencias básicas y de las profesiones tecnológicas estrechamente ligadas a la promoción del desarrollo económico y social”, afirmaba.⁵¹⁵

En el primer caso, el propósito era recortar la autonomía de las distintas ramas de la enseñanza condicionándola a un organismo coordinador controlado por el Poder Ejecutivo; autonomía que, entendía el ministro, había derivado en “cuatro repúblicas docentes dentro del país, con tendencia a subdividirse en otras republiquetas, como

⁵¹² *Asamblea General de la Claustro*, 22 de enero de 1968, pp. 15-18

⁵¹³ “Notas cambiadas con el Sindicato Médico del Uruguay”(copia del fallo en carpeta del Tribunal Arbitral)”, 1968 *Colección Federico García Capurro*, cajas s/n, AGN, Montevideo

⁵¹⁴ *Marcha*, 5 de setiembre de 1969

⁵¹⁵ Informe sobre el estado actual de la educación en el Uruguay presentado por el Señor Ministro de Cultura Dr. Federico García Capurro en la Conferencia de Rhevot sobre Ciencia y Educación en países en desarrollo. Israel, agosto de 1969 *Colección Federico García Capurro*, cajas s.n.. AGN, Montevideo

ocurre con algunas facultades e institutos”.⁵¹⁶ Daba cuenta con estas expresiones de su particular manera de concebir la coordinación de la enseñanza, que consideraba debía ir más allá de la armonización de “los distintos grados, etapas y ramas para que el acceso de los alumnos se cumpla sin sobresaltos y según una evolución lógica del conocimiento”, procurando “adecuar el sistema educativo a las necesidades del desarrollo”.

Y el plan de desarrollo, con sus pautas y sus metas, lo establece el poder político, en todos los países, democráticos o socialistas. ¿De qué manera se podrá lograr ese ajuste imprescindible si el sistema educativo se declara independiente del poder político y pretende trazar sus propias normas, calificando de ‘peligrosa’ la injerencia de los órganos legalmente constituidos en los temas relativos a la enseñanza, cuando éstas son la representación genuina de la voluntad de la mayoría del pueblo expresada libremente en un país que es ejemplo de mecánica democrática?.⁵¹⁷

El Cosupen, como fue conocido, no debía, por tanto, restringirse a ser ámbito de comunicación o “un sistema de consultas” para dilucidar posibles discrepancias, tal como funcionaba, en su opinión, la Comisión Coordinadora de Entes, creada por Pivel Devoto a comienzos de la década. Por el contrario, sus resoluciones debían tener “la fuerza y permanencia necesaria para ser eficaces”. De esa manera lo planteaba el proyecto presentado a la Asamblea General, que preveía la representación del poder Ejecutivo a través del ministro y el subsecretario de Cultura y de un representante de la OPP junto a un docente de cada una las ramas de la enseñanza.

Sus cometidos principales eran: definir lineamientos de política educativa adecuados a los planes de desarrollo generales, coordinar la enseñanza pública mediante recomendaciones impartidas a los entes, formular planes y programas coordinados de desarrollo educacional, que incluyan al sector público y al privado, entre otros. La posibilidad de incorporar al sector privado no era un planteo novedoso, pero en este caso avanzaba hacia la configuración de un sistema educativo integral que lo incorporaba. Asimismo, en línea con las tendencias planificadoras, sugería la incorporación de mecanismos de planificación u oficinas de programación y de asesoramiento permanente así como la implementación de un sistema uniforme de

⁵¹⁶ Información del ministro de Cultura sobre Política de la Enseñanza Montevideo, diciembre de 1969. Colección Federico García Capurro, cajas s.n., AGN, Montevideo

⁵¹⁷ Información del ministro de Cultura sobre Política de la Enseñanza Montevideo, diciembre de 1969. Colección Federico García Capurro, cajas s.n., AGN, Montevideo

información y procesamiento de datos estadísticos, entre otras disposiciones y medidas.⁵¹⁸ Claramente, esta iniciativa se topó con una generalizada oposición tanto de autoridades de la enseñanza, particularmente de la Universidad, como de los gremios docentes y estudiantiles de todos los niveles educativos, que adujeron como principal argumento la lesión a los principios de autonomía consagrados en la Constitución.

Como se analizó, la coordinación y creación de un sistema educativo nacional constituía un reclamo de diversos actores sociales y políticos. El informe de la CIDE, por ejemplo, dedicó un capítulo entero a este asunto en aras de facilitar y flexibilizar el tránsito de los estudiantes de un ciclo a otro y de una rama a otra.⁵¹⁹ Para García Capurro las resistencias que generó su proyecto formaban parte de una

campaña orquestada por grupos extremistas que responden a consignas foráneas antidemocráticas de varios orígenes y a sus colaboradores útiles contra la coordinación de la enseñanza que el actual Gobierno ha promovido con vistas a hacerla efectiva, superando el plano de la mera especulación, insiste en denunciar el presunto peligro de que el poder político democrático y representativo, —síntesis de la opinión pública nacional— influya, como corresponde, en el sistema educativo del país, certifica el origen foráneo de sus intenciones.⁵²⁰

Al mismo tiempo, García Capurro hizo suya la iniciativa del MpUN, pero marcando su impronta en ella. En tal sentido, enfatizó la necesidad de ofrecer “oportunidades para la juventud en el sector de las ciencias básicas y de las profesiones tecnológicas estrechamente ligadas a la promoción del desarrollo económico y social”.⁵²¹ La UN desde su perspectiva era el germen de lo que denominó “Universidad para el desarrollo” cuyas características, organización y fines debían dirigirse a capacitar profesionales competentes para cubrir las “necesidades del ambiente”.

En una extensa entrevista publicada en el diario *BP Color* (complementada en la página contigua con una entrevista al rector Maggiolo) un año antes anticipaba algunas de sus ideas básicas en torno al proceso de reforma de educativo. Sostenía en esta ocasión que las causas del atraso e ineficiencia de la enseñanza universitaria radicaban

⁵¹⁸ “Proyecto de ley de Universidad del Norte”, 29 de setiembre de 1968, *Colección Federico García Capurro*, cajas s.n., AGN, Montevideo

⁵¹⁹ *Marcha*, 5 de setiembre de 1969

⁵²⁰ Información del ministro de Cultura sobre Política de la Enseñanza Montevideo, Diciembre de 1969. *Colección Federico García Capurro*, cajas s/n, AGN, Montevideo

⁵²¹ “Informe sobre el estado actual de la educación en el Uruguay presentado por el Señor Ministro de Cultura Dr. Federico García Capurro en la Conferencia de Rhevot sobre Ciencia y Educación en países en desarrollo. Israel, Agosto 1969”, *Colección Federico García Capurro*, cajas s.n., AGN, Montevideo

en que no se había incorporado “el concepto de rendimiento, de productividad”. La “Universidad monopólica” no había llevado a cabo “reformas sustanciales”, a excepción, decía, de la incorporación de la autonomía y del cogobierno. Una vez más insistió en que la educación debía encararse “con el rigor de un ente industrial”, es decir con criterios de gestión empresarial. El perfil del egresado debía orientarse a la resolución de problemas concretos y de aplicación al mercado y al sistema productivo, con el objetivo de “mejorar el bienestar de las clases sociales”, para lo cual era preciso “lograr una mejor distribución de los bienes y del confort”. El país no necesitaba más abogados o médicos, sino ingenieros, agrónomos, veterinarios, químicos industriales o meteorólogos, en otras palabras, profesionales “capaces de producir riqueza”, afirmaba, cuestionando la concepción “académica y doctoral” predominante en la Universidad.⁵²²

En sucesivas intervenciones el ministro fue afinando sus ideas acerca de la “gran reforma universitaria”. Insistió en que los cometidos de la enseñanza superior, era capacitar, en un lapso reducido de tiempo, técnicos para atender los sectores de producción prioritarios para el progreso económico del país. Haciéndose eco de algunos de los principales señalamientos de la CIDE, cuestionó los altos costos que suponía para el Estado continuar “formando profesionales en la media docena de facultades tradicionales” que, sumado al tiempo de duración de los estudios universitarios, sustraían al estudiante “de la vida y de la producción durante siete, diez o más años.” Proponía, por tanto, dividir las carreras en etapas breves que asegurara al joven una más rápida incorporación al mercado de trabajo mientras proseguía, si así lo deseaba, estudios superiores. Apuntaba así a una formación intermedia cuya finalidad era la aplicación directa de los conocimientos adquiridos. Vale acalrar que la modalidad de estudios escalonados y la expedición de títulos intermedios estaba siendo cuestionado en ámbitos universitarios en el marco de discusiones más amplias sobre el perfil de sus egresados.

Un segundo aspecto en el planteo de García Capurro consistía en crear especializaciones en áreas como ingeniería, química, agronomía y medicina que requerían de “expertos de formación rápida, que a la actualidad deben buscarse en el extranjero”. En síntesis, la educación superior debía enfocarse en la enseñanza técnica orientada al desarrollo de sectores económicos específicos fundamentales y a la

⁵²² *BP Color*. Edición Extraordinaria del 90o. Aniversario del Bien Público, 27 de noviembre de 1968, p. 18 y *Tribuna Salteña*, 18 de junio de 1969, p. 8

inserción laboral temprana de los egresados. La UN así concebida atacaba dos problemas: la grave desocupación de los jóvenes y la capacitación de los recursos humanos diestros en el manejo de tecnologías modernas capaces de incrementar la productividad. Aunque no se explicitaba, se priorizaban disciplinas consideradas menos peligrosas políticamente y más útiles para satisfacer las necesidades productivas y las demandas del sector privado. Es claro, como se verá más en detalle, que estos planteos no eran originales del ministro, y concurrían con un conjunto de ideas y propuestas de circulación regional e internacional -algunas de ellas preconizadas por el consultor estadounidense Rudolph Atcon- que tuvieron traducción en diversos proyectos de reorganización universitaria que impulsaron las derechas en la región.

En consonancia con estos propósitos, la “Universidad para el desarrollo” debía adoptar una “organización abierta”, con participación en su dirección de representantes de las “fuerzas vivas de país”, apuntando a la coordinación de la enseñanza con la demanda de técnicos en los distintos sectores. La incorporación de productores, hacendados, industriales y profesionales en su conducción reforzaba su orientación técnica pero sin abordar los aspectos de creación y difusión del conocimiento en las áreas mencionadas.⁵²³ En línea con una particular forma de entender el vínculo entre educación y desarrollo económico, el ministro concluía que “el profesional sin trabajo o que emigra, es una consecuencia de la desconexión existente entre el fundo académico, encerrado en su torre de marfil y el mundo real de las fábricas y los negocios”.⁵²⁴

Por otra parte, resulta claro que la representación corporativa se contraponía al sistema de cogobierno establecido en la ley orgánica de 1958, que aseguraba la participación de estudiantes, docentes y egresados en la dirección de la Universidad y que constituía uno de los principales blancos de las críticas de los sectores derechistas y del propio ministro. Por último, en esta ocasión volvió a manifestar su apoyo al avance del sector privado en la educación superior, siempre y cuando se respetaran los principios del laicismo y la apoliticidad en los establecimientos –aludiendo a la injerencia de las izquierdas en la educación- y remataba: “si hay alguien que puede

⁵²³ En el país se habían planteado en distintos momentos posiciones en esta dirección tanto al interior de la Universidad como por parte del Poder Ejecutivo. Para mencionar un ejemplo, un criterio similar orientó a los impulsores de la Ley Orgánica de 1908. Esta ley negó el estatuto de Facultad a las recientemente creadas Facultades de Veterinaria y Agronomía y las redujo a escuelas técnicas dirigidas por representantes de las ramas productivas. Ver Markarian, Vania, y otros. *1908. El año inaugural*, pp. 19-31

⁵²⁴ *Tribuna Salteña*, 26 de junio de 1969

pagar una inscripción y aliviar al Estado ¿cómo se lo vamos a prohibir?”.⁵²⁵ Más aún, proponía que la UN adoptara un sistema mixto con aporte estatal y activa participación del sector privado de los departamentos en que esta se asentara, que de ese modo contribuiría a sostenerla.

En este marco, la Junta Planificadora creada por Pacheco se convirtió en un espacio de negociación y conciliación entre los representantes departamentales que alimentaban distintas expectativas respecto al nuevo instituto y de éstos con el gobierno central representado por el ministro de Cultura. Como resultado el énfasis se desplazó del modelo profesionalista, al que suscribió en sus comienzos el MpUN en Salto, hacia otro que, sin abandonar del todo aquella orientación, ponderaba la instalación de carreras de perfil tecnológico ligadas a los sectores productivos, y muy especialmente, al agropecuario. Se afianzó una concepción que, privilegiando el vínculo directo entre educación y economía, hizo foco en la formación técnica al tiempo que dejaba abierta la posibilidad de instalar carreras tradicionales. Algunos representantes departamentales (claramente el caso de Salto) aspiraban, sin embargo, a que la Junta diseñara un instrumento legal que garantizara a la UN un estatuto universitario que dejara abierta la oferta educativa a futuro. En esta etapa, el gobierno, que buscaba un camino para neutralizar el peso de la Universidad de la República, también se inclinó por esta opción.

La visión “tecnológica” del ministro de Cultura fue compartida por diferentes grupos más o menos cercanos al proyecto. Los representantes de los departamentos norteros en la Junta Planificadora, con matices, expresaron que la Universidad del Norte debía abocarse a la “tecnificación profesional” para el desarrollo y el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos de la región.⁵²⁶ El delegado de Paysandú, por ejemplo, destacó los beneficios de estimular “profesiones intermedias”, destinadas a satisfacer “los requerimientos zonales para el desarrollo de la producción rural u otras técnicas”.⁵²⁷ La UN constituía una opción atractiva para los jóvenes que atenuaba, por un lado, los efectos de la masificación y la deserción estudiantil en la universidad y, por otro, solucionaba los inconvenientes derivados del desarraigo y la emigración hacia la capital

⁵²⁵ *BP Color*. Edición Extraordinaria del 90o. Aniversario del Bien Público, 27 de noviembre de 1968, p. 18

⁵²⁶ *La Mañana Edición del Interior*, 29 de enero de 1970, p. 11

⁵²⁷ *La Mañana edición del Interior*, 5 de mayo de 1970, p. 12

del país.⁵²⁸ El diario *El Telégrafo* de Paysandú en la siguiente cita condensa en pocas palabras las expectativas e intereses que confluían en el proyecto:

Nosotros hemos dicho y repetido varias veces, indubitadamente, que el Interior necesita y desea una Universidad para el Interior. Y esa universidad no puede ser manejada desde la capital por la cerrada élite que allá mismo está fracasando en su tarea, pues vive en perpetua anarquía en su función formadora. [...] es necesario que la Universidad del Interior o del Norte — como se prefiera llamarla— tenga una organización moderna y ágil. Sea una universidad de Hoy y para Mañana. Una universidad eminentemente tecnológica, con propósitos de formación de profesionales para el medio y para el arraigo lógico entre nosotros. Una universidad que sirva al país, sirviendo a la 'campana', con profesionales que necesita en principio, como agrónomos, veterinarios, ingenieros industriales, y con cursos auxiliares para formar idóneos que diversifique los caminos para la vocación de nuestra muchachada de ambos sexos. Queremos, no una universidad autónoma en relación con el Estado, sino autónoma en su funcionamiento orgánico, en su independencia de toda ideología política y de toda doctrina ajena a nuestro sentir nacional.⁵²⁹

Es decir, se esperaba una Universidad descentralizada, y por tanto que atendiera las necesidades del interior del país y de la “campana”, dedicada a la formación de técnicos para el mercado y la producción, organizada y administrada con eficiencia y con un sentido de la autonomía que la protegiera de la politización y la partidización promovida por las fuerzas de izquierda. El presidente del MpUN, José Antonio Varela, agregaba que debía aplicarse una “irrenunciable severidad y seriedad en el estudio universitario, concurrencia obligatoria y reglamentaria del estudiante a clase, animosa disciplina en el esfuerzo”, reforzando los aspectos disciplinarios junto a los técnicos.⁵³⁰ Varela, acorde con los postulados de la derecha nacionalista, atribuía a la educación el rol de formar al educando en el respeto a la autoridad y las jerarquías. Esto suponía que los jóvenes abandonaran el juego político y se dedicaran a lo que les competía: estudiar duro. Según Varela, con horarios rígidos y con niveles altos de exigencia no quedaba espacio para pensar en política. La reforma integral de la enseñanza superior y universitaria, agregaba, comportaba cambios a todos los niveles: al “régimen de estudios; al orden interno; a la ubicación de los Centros de enseñanza, Facultades, Institutos, Escuelas, etc.; a la integración de las autoridades”.⁵³¹ En concordancia con los planteos del

⁵²⁸ *La Mañana Edición del Interior*, 2 de julio de 1970, p. 3

⁵²⁹ *El Telégrafo*, 13 de agosto de 1970, p. 3

⁵³⁰ *Tribuna Salteña*, 10 de abril de 1970, p. 3

⁵³¹ *Tribuna Salteña*, 18 de abril de 1971, p. 3

ministro sostenía que la reestructura académica debía ser acompañada por profundas modificaciones en las restantes ramas de la enseñanza, apuntando a la coordinación entre ellas.⁵³²

Hubo, no obstante, matices y, en algunos casos, diferencias en las expectativas e intereses que orientaban los reclamos de los representantes departamentales. En particular, el movimiento salteño influenciado por las corporaciones profesionales (principalmente de los abogados), aun cuando claramente incorporó la orientación tecnológica impulsada principalmente por el ministro de Cultura, mantuvo su arraigada aspiración de que la UN albergara carreras de tipo clásico. *La Mañana*, firme defensor del proyecto, suscribió a esta posición cuestionando que ésta se limitara a expedir “títulos reducidos”, similares a los de “idóneos en estrechos sectores de actividad profesional”. La UN debía otorgar “verdaderos títulos universitarios, que no sólo capacitaran para el ejercicio inmediato de una profesión, sino también habilitante para que el egresado se pueda adecuar al ritmo progresivo de la tecnología”⁵³³. Se remitía así al prestigio de alcanzar un rango equiparable al de la Universidad en Montevideo, que al momento era la que otorgaba los grados académicos y profesionales más altos. Este fenómeno era global, pese a los cambios que se estaban produciendo en los sistemas de educación superior, todavía las universidades ocupaban un el lugar de mayor influencia y visibilidad, mientras que las nuevas configuraciones institucionales se consideraban de menor categoría, inferiores respecto de una jerarquía “cuya cúspide era ocupada por la Universidad”.⁵³⁴

La ubicación de las sedes constituyó otro motivo de tensiones a causa de viejas rivalidades o sentimientos localistas largamente enraizados. Para resolver la cuestión se manejaron diferentes opciones, entre ellas la creación de un Consejo Central Universitario con sede en Salto y funciones de coordinación de las diferentes escuelas técnicas localizadas en las capitales departamentales. En ese esquema, cada departamento se especializaría en la formación de determinadas áreas. En la distribución, por ejemplo, Salto tendría una escuela de citricultura, lechería y cueros, mientras en Paysandú se establecería Agronomía y Tacuarembó se especializaría en

⁵³² *Tribuna Salteña*, 18 de abril de 1971, p. 3

⁵³³ *La Mañana Edición del Interior*, 13 de mayo de 1971, p. 3

⁵³⁴ Brunner, J. J., óp. cit., p. 17

minería⁵³⁵. Frente a los resquemores recíprocos *La Mañana* en su edición del interior requería dejar de lado “las aspiraciones localistas”, recordando que el “verdadero enemigo era la Universidad de Montevideo”⁵³⁶.

El discurso del ministro, vocero del Poder Ejecutivo, y de los representantes del MpUN, interpelaba a la Universidad y, sobre todo, a los llamados reformistas. La formación de técnicos “capaces de asimilar y aplicar los conocimientos existentes” o de profesionales en sentido clásico contradecía en su misma base el programa que esta generación de universitarios venía promoviendo y que el Plan Maggiolo sintetizó.⁵³⁷ No es de extrañar, por tanto, que los planteos sobre la UN, teñidos además de acusaciones de diverso tipo hacia la Udelar, provocaran inmediato rechazo en una buena parte de sus docentes, investigadores y estudiantes. El rector Maggiolo en 1970, durante el acto de inauguración de la Casa de la Universidad de Salto, manifestó su oposición a la “Universidad de carreras cortas” ya que con “técnicos de nivel medio nunca alcanzaremos la autonomía cultural que nuestra dependencia política y económica exige”⁵³⁸. De hecho, el Plan presentado en 1967 para su discusión en el seno del Consejo Directivo Central establecía claramente los niveles de enseñanza que debía impartir la Universidad de la República, priorizando el correspondiente a licenciatura o maestría y el nivel de doctorado.⁵³⁹

La renuncia del ministro García Capurro, como se dijo, paralizó el trámite de la UN. El nuevo ministro, Carlos María Fleitas, insistió en instalar Institutos Tecnológicos Superiores a nivel regional que coordinarían a todos los organismos de tecnología estatal y privado en la zona norte, en concordancia con la postura de su sector

⁵³⁵ *Tribuna Salteña*, 11 de setiembre de 1969, p. 1 “El movimiento Pro-Universidad del Norte dialogó con alumnos del Liceo Zona Este”

⁵³⁶ *La Mañana Edición del Interior*, 1 de octubre de 1970, p. 3

⁵³⁷ Ver *Plan de Reestructuración de la Universidad*, 1967, pp. 13-15

⁵³⁸ “Inauguración de la casa de la Universidad en Salto” 18 de julio de 1970. *Archivo Maggiolo*, caja n.º 11, carpeta n.º 214

⁵³⁹ Ver *Plan de reestructuración de la Universidad*, 1967, pp. 13-15. La implementación de un sistema de estudios escalonados fue objeto de discusión en varios servicios de la Universidad. En la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, esta modalidad fue erradicada con el nuevo plan de estudios aprobado en 1966. El decano Israel Wonsewer afirmó que: “acortar la carrera o intentar crear escalones sucesivos, hubiera dado como resultado el volcar al medio ambiente, profesionales que serían rápidamente absorbidos por él y que difícilmente volverían a la facultad para completar o intensificar su capacitación”. En cambio, se prefirió por apostar a profesionales con alta capacitación aún cuando “esa capacitación no sea utilizada en toda su profundidad”. Ver Wonsewer, I. “Las ciencias económicas” en *La estructura de la Universidad a la hora del cambio*, tomo 2 (Montevideo: Departamento de Publicaciones, 1970), pp. 78-79

partidario, Unidad y Reforma.⁵⁴⁰ Desde esas tiendas políticas también se cuestionaba la “ineficiencia, la inoperancia y la vetustez de los sistemas pedagógicos, de los programas y de la administración” de la enseñanza en general y la universitaria en particular, pero las soluciones propuestas diferían radicalmente. *Acción* criticaba el academicismo de la formación que ofrecía la Universidad y el excesivo énfasis en las profesiones liberales. Daba cuenta además de las dificultades internas de esa institución para procesar cambios profundos y ponía como ejemplo el naufragio del “Plan Maggiolo”, al que reconocían como un intento de transformación más allá de aciertos o desaciertos. Tampoco se avizoraba en el escenario universitario una alternativa similar.⁵⁴¹ Detallaba luego los principales déficits que, a su entender, padecía la educación superior. En su evaluación se advierte la influencia de los diagnósticos realizados por la CIDE pocos años antes:

Acá, en el Uruguay, es preciso ir al encuentro de ese problema, que es buena parte de la inquietud que agita a los estudiantes por un lado y al país entero con relación a la cuestión de la enseñanza, que es tan vital como la que más en todo planteo que mire hacia el futuro del país. Cualquier profesional tiene, salido de la Universidad, dificultades para trabajar; es inmensa la cantidad de estudiantes que quedan a la mitad del camino y marchan al mercado de trabajo sin ninguna aptitud especial que los califique como no sea una cultura de tipo general más o menos modesta según los casos; los organismos absorben una inmensa parte del presupuesto nacional y no coordinan entre sí sus servicios a fin de mejor emplear esos recursos, nunca bastantes; los programas mismos de enseñanza es muy discutible que estén al día.⁵⁴²

Según el diario colorado, el sistema universitario proporcionaba una enseñanza “teórica, abstracta, individualista y crítica” de acuerdo con un “esquema del mundo de principios de este siglo [XX]”. Era preciso convertirlo en un centro “eficiente y serio, capaz de darle al individuo el conocimiento necesario y claro” en consonancia con el mundo en que le tocaba vivir⁵⁴³. La reforma debía procesarse al interior de la propia institución y por tanto, no entendía oportuno ni conveniente la instalación de otra universidad. El senador de la Lista 15 del Partido Colorado y salteño, Juan Carlos Fa Robaina, que en 1956 había integrado la Comisión para gestionar los cursos universitarios, entendía que quienes utilizaban la “muletilla de la Universidad del

⁵⁴⁰ *El País*, 12 de julio de 1970, p. 5

⁵⁴¹ *Acción*, 16 de julio de 1970, p. 4 “Universidad del Norte. Falsa oposición”

⁵⁴² *Acción*, 1 de octubre de 1968, p. 3 “La cuestión de la enseñanza”

⁵⁴³ *Acción*, 5 de junio de 1970, p. 4 “Los estudiantes y la enseñanza”

Norte” adoptaban una postura oportunista al procurar “granjearse la simpatía de los pobladores del interior”.⁵⁴⁴ Afirmaba, además, que se hacía una falsa oposición entre la Universidad de la República y la Universidad del Norte. Sin embargo, rechazó los supuestos “propósitos siniestros del Ejecutivo cuando insiste en su posición a favor de lo que ha llamado 'Universidad del Norte'. No es, entonces, ni una cosa ni otra”, concluía el legislador colorado.⁵⁴⁵

El nuevo recambio de ministro en 1971 reactivó el proyecto que, con modificaciones, fue enviado al Parlamento. Como se adelantó, éste ponderaba una orientación tecnológica y la radicación de la nueva universidad fuera de la capital en concordancia con una estrategia de desarrollo que daba prioridad a la producción agropecuaria y la integración agro-industrial.⁵⁴⁶ Sin embargo, el parlamento no llegó a discutir esta iniciativa. Un año más tarde, *La Mañana* exhortó al flamante gobierno encabezado por Juan María Bordaberry, a agilizar el proceso de reestructuración de toda la enseñanza. Reclamaba “menos largas y costosas carreras liberales” de escasa aplicación a las necesidades del país y “más cursos de especialización que permitan tecnificar al país”. Aunque, aclaraba, no pretendían “una tecnocracia fría y materialista”, la educación debía estar al servicio de la “formación moral” de la juventud. El Estado era el principal responsable en la tarea de “educar a los jóvenes en el culto a la Patria como ideal supremo”.⁵⁴⁷ Por su parte, el presidente del MpUN celebró la presentación de este nuevo proyecto que tenía los “mismos deseos y anhelos que los del norte”. De hecho, aseguraba que la Junta Planificadora había colaborado con el Ministerio de Educación Cultura en su elaboración, “en un marco de total armonía y con comprensión justa de las necesidades de organización de la nueva universidad uruguaya”.⁵⁴⁸ Esta iniciativa, sin embargo, una vez más quedó encajonada en ámbitos parlamentarios.

En los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado los debates en relación con la modernización de la universidad pasaron a un lugar secundario en la agenda política nacional. De lo analizado hasta aquí se advierte que tras las posiciones sobre la

⁵⁴⁴ *Acción*, 22 de julio de 1970, p. 4

⁵⁴⁵ *Acción*, 16 de julio de 1970, p. 4 “Universidad del Norte. Falsa oposición”

⁵⁴⁶ Decreto n.º 586/971 en *RNLD* 15 de setiembre de 1971, pp. 590-591 y *Cámara de Representantes. Secretaría*. Carpeta n.º 2675/971, Montevideo, 20 de setiembre de 1971

⁵⁴⁷ *La Mañana. Edición del Interior*, 16 de marzo de 1972, p. 3

⁵⁴⁸ *La Mañana. Edición del interior*, 30 de setiembre de 1971, p. 3 “La Universidad del Norte será del interior”

educación superior estuvieron en disputa distintos modelos de desarrollo. Las polémicas que tuvieron lugar involucró asuntos como el rol del Estado en la dirección de la educación, la relación entre país agrario e industrial y, en particular, la necesidad de promover al sector agropecuario, la función estatal en la dirección del desarrollo económico, el papel de la iniciativa privada, el planeamiento económico y el estancamiento productivo. Así las posturas sustentadas por los grupos derechistas se basaron en un fuerte cuestionamiento al modelo “academicista y doctoral” de la Universidad ponderando, en cambio, la capacitación en disciplinas técnicas y tecnológicas de aplicación inmediata a las actividades productivas consideradas fundamentales para el progreso económico y social del país. Como señalaba Carlos Real de Azúa en 1971 la UN “pluraliza[ba]” y descentralizaba la educación superior al diversificarla “en núcleos más fácilmente controlables”, “apartados del tráfico y la incentivación montevideana”, y era concebida sobre “bases tecnicistas y apolitizadas a la medida de las necesidades y exigencias de la clase superior agropecuaria.”⁵⁴⁹ El análisis precedente evidencia también que no hubo una postura única sobre estos asuntos. Una mirada atenta revela matices y apuestas diversas en función de distintos intereses corporativos, locales y posiciones ideológicas y, en algunos casos, resentimientos personales. Junto con los planteos de corte tradicionalista, que ponían el foco en el cambio de planes de estudios, en la adecuación curricular y, sobre todo en la limpieza ideológica de la universidad, sin cuestionamientos a la formación para las profesiones liberales, se expresaron otros de corte modernizador y tecnocrático, representados en la formulación de García Capurro, que eran concurrentes con las ideas preconizadas por los organismos y consultores estadounidenses. Las páginas que siguen desbrozan la influencia de estas ideas de circulación global en las discusiones sobre los modelos universitarios en Uruguay y la región.

3. Lecturas inspiradoras y modelos de universidad

Los planteos sobre la UN, cooptados y reelaborados por el ministro de Cultura de la época, se insertaron en una concepción más general de modernización universitaria que, sustentada en el paradigma estadounidense, fue preconizada por algunos sectores de las

⁵⁴⁹ Real de Azúa, C. *Partidos, política y poder en el Uruguay (1971- coyuntura y pronóstico)* (Montevideo: FHCE, Udelar, 1988), pp. 134-5, ver nota al pie n.º 11

derechas a nivel regional y global. Los contenidos de los programas impulsados por estos actores en el ámbito doméstico fueron concurrentes con las políticas educativas promovidas por EEUU en América Latina, viabilizadas a través de una diversidad de programas de asistencia que proveyeron de recursos financieros y de técnicos. En particular, la actuación de los consultores de agencias de ese país y de organismos internacionales fue uno de los vehículos privilegiados para la circulación de una agenda que alimentó los debates sobre la educación superior en la región. Se destacó en particular el papel del asesor estadounidense Rudolph Atcon (1921-1995) en la propagación y promoción de un modelo de universidad para América Latina basado en criterios de eficiencia y productividad y orientado al mercado y al sector productivo. A partir del estrecho vínculo profesional que entabló desde fines de la década del cincuenta y a lo largo de las décadas siguientes con varios países latinoamericanos, en los cuales asistió en la elaboración de diagnósticos y planes dirigidos a implementar cambios radicales en las universidades, aportó un conjunto de orientaciones que tuvieron gran difusión y es fácilmente reconocible como fuente de inspiración de los proyectos modernizantes que intentaron llevar adelante las derechas en la región.

Recordemos que en el período que nos ocupa la necesidad de transformaciones en el sistema educativo se había tornado evidente para un amplio arco de actores sociales y políticos; tanto para las derechas como para las izquierdas. Pero, mientras los diagnósticos presentaban a muy grandes rasgos aspectos coincidentes, las soluciones propuestas dieron cuenta de divergencias inconciliables. En el caso de las derechas, sin excepción, una de las preocupaciones principales era el nivel de politización de los centros de estudio, cuya causa atribuían a la interferencia estudiantil en los asuntos universitarios. Por ende, uno de los principales objetivos que se trazaron fue desmovilizar al alumnado. No obstante, al interior de este campo político ideológico no existió unanimidad respecto de los rumbos que debían tomar las universidades. Así, junto a las posiciones más tradicionales, que no cuestionaron la formación para las profesiones liberales clásicas y pusieron el foco en la readaptación de los planes de estudio, se fue perfilando una tendencia que pretendió transformarlas en instituciones eficientes dirigidas a la capacitación de los cuadros para el desarrollo económico y la administración pública. Este programa, esbozado en los términos de las teorías de la modernización, en la versión del economista estadounidense Walter Rostow, combinó

un doble propósito: contener el ímpetu revolucionario y reformular los centros de enseñanza de acuerdo a los paradigmas estadounidenses, en aras de convertir la educación superior en sustento del desarrollo económico y social. Atcon brindó un cuerpo de ideas, plasmado en un texto más tarde conocido como *Informe Atcon* que, en su articulación con los intereses de las derechas locales, fue base de múltiples iniciativas, las cuales, con clara vocación modernizante y conservadora, se volcaron a reestructurar las universidades del continente.

Rudolph Atcon en América Latina

En los últimos años, en Hispanoamérica, a los efectos universitarios, un nombre ha adquirido celebridad como ‘trouble-shooter’: Rudolph P. Atcon, de nacionalidad tan indefinida como los mismos intereses a los que sirve. Se le considera ‘experto en asuntos sociales que se convirtió en educador y que inventó una profesión. La de reorganizar sistemáticamente universidades’.⁵⁵⁰

De esta manera el periodista argentino Gregorio Selser se refería, en extensa nota en el semanario uruguayo *Marcha*, al consultor estadounidense a propósito de su visita, invitado por el gobierno argentino, “relámpago” y “ultrasecreta” a la capital porteña. El propósito: reorganizar la universidad argentina. En medio del recalentado clima de la Guerra Fría de esos años, estas palabras cargadas de ironía y de la retórica antiimperialista venían a sumarse a las frecuentes denuncias de la injerencia de los poderes imperiales en los asuntos domésticos latinoamericanos. En este contexto, Atcon, que había estado asesorando en temas educativos desde comienzos de los cincuenta sin generar demasiadas resistencias, se erigió en la visión de amplios sectores de las izquierdas radicalizadas de la época como un emisario de los intereses de esa potencia.

Ahora bien, ¿quién era realmente Rudolph Atcon y cuáles eran sus credenciales? Es muy escasa la información que se dispone hasta el momento. La mayoría de las referencias provienen de sus publicaciones y fueron aportadas por él mismo. De acuerdo con esa información era griego de nacimiento y naturalizado estadounidense. Se presentaba como especialista en planeamiento y gestión educativa en cuya calidad tuvo

⁵⁵⁰ *Marcha*, 6 de diciembre de 1968

un vasto desempeño en varios continentes, especialmente en América Latina donde participó en los procesos de reforma educativa en Brasil, Chile, Honduras, Colombia, Venezuela.⁵⁵¹ Sabemos, además, que en la Universidad de Concepción en Chile tuvo un rol destacado como asesor de la Unesco.⁵⁵² En otros casos es referido como “consultor independiente”, contratado directamente por los gobiernos o las instituciones educativas, dejando así en la nebulosa sus posibles vinculaciones con la USAID o la CIA. Como dato interesante agreguemos que Atcon fue invitado por el sociólogo estadounidense Seymour M. Lipset a participar en el *Seminario sobre Élités y Desarrollo en América Latina* coorganizado por la Universidad de la República y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de California, y financiado por el Congreso por la Libertad de la Cultura, que tuvo lugar en Montevideo, a comienzos de junio de 1965. La convocatoria al seminario fue muy amplia contemplando a un conjunto de intelectuales y científicos sociales de muy variada procedencia y de reconocida trayectoria en sus áreas de especialidad.⁵⁵³ En el momento de recibir la invitación, Atcon se encontraba trabajando para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se le solicitaba una intervención sobre su área de competencia, esto es, un abordaje del sistema universitario, con énfasis en la comparación entre países desarrollados y subdesarrollados (“The University system: comparisons between developed and underdeveloped countries”), que en lo posible incluyera evidencia empírica con tablas estadísticas e información de carácter comparativo.⁵⁵⁴ El Congreso por la Libertad de la Cultura ofrecía a cambio pagar sus honorarios y los gastos de viaje y estadía en la capital uruguaya. Atcon finalmente no concurrió al seminario y no conocemos cuál fue su respuesta —si es que la hubo— y, por tanto, las razones de su ausencia. Sin embargo, esta información nos aproxima al radio de circulación y de valoración que alcanzó nuestro consultor en ámbitos diversos.

⁵⁵¹ Sobre su influencia en la reforma de las universidades colombianas ver Acevedo Tarazona, Álvaro. “Educación, reformas y movimientos universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador en el siglo XX”, *Revista de Estudios Sociales*, n.º 53, julio-septiembre [2015]. pp. 102-111

⁵⁵² Ver documentación disponible en (Reorganization of the Universidad de Concepción): Chile - (mission), 1957-1958, disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158866> [consultado en octubre de 2019]

⁵⁵³ Las invitaciones cursadas incluyeron por ejemplo al reconocido politólogo Juan Linz y a Darcy Ribeiro.

⁵⁵⁴ Nota fechada el 14 de julio de 1964, *Archivo del Congreso por la Libertad de la Cultura*, University of Chicago Libraries, Box 562, Folder 1. Agradezco a Vania Markarian el conocimiento de este documento

Asimismo, el investigador estadounidense Daniel Levy, en un libro sobre los programas de ayuda externa estadounidense a las universidades latinoamericanas, lo ubica como un referente en círculos allegados a estos programas. Según este autor, el llamado *Informe Atcon* fue realizado para la Alianza para el Progreso y las agencias multilaterales, convirtiéndose en una biblia para los “donantes”.⁵⁵⁵ Por otra parte, las denuncias que pesaban sobre él provenientes de medios y personalidades de las izquierdas de la época, como era el caso del periodista argentino Selser, contribuyeron a construir una imagen particularmente negativa del asesor. La carencia documental alimentó las suposiciones acerca de su trayectoria y sus conexiones con agencias gubernamentales de Estados Unidos que todavía no han podido ser constatadas ni descartadas. No obstante y teniendo en cuenta estas prevenciones, es posible afirmar que sus ideas, claramente convergentes con los objetivos políticos así como con las políticas educativas estadounidenses, resultaron atractivas para los impulsos modernizadores de las derechas domésticas e influyeron en los proyectos de transformación universitaria que con mayor o menor suerte intentaron llevar a cabo.

Sus primeros pasos en la región datan de los años cincuenta, cuando colaboró junto al prominente intelectual y educador brasilero Anísio Teixeira (1900-1971) en la organización original del CAPES (entonces Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) y un poco después en la administración de su Programa Universitario.⁵⁵⁶ Entre 1957 y 1958 asistió en el proceso de reforma de la Universidad de Concepción. En esa oportunidad realizó un diagnóstico del estado de ese centro educativo y propuso una serie de medidas, sintetizadas en el Plan de reestructuración docente, que pueden ser consideradas un anticipo de su programa modernizador.⁵⁵⁷ Ya entonces alertó sobre la intromisión del estudiantado en los asuntos académicos y políticos de las casas de estudios, una tendencia que reconocía como propia de América Latina y que abrevaba, en su opinión, en la configuración histórica de sus universidades

⁵⁵⁵ Levy, Daniel C. *To Export Progress. The golden age of University assistance in the Americas* (Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press, 2006), pp. 10-11

⁵⁵⁶ Fávero, Maria de Lourdes de Albuquerque (1991). *Da universidade “modernizada” à universidade disciplinada: Atcon e Meira Mattos*: Sao Paulo: Cortez: Autores Associados, Cunha, Luiz Antonio (1988). *A universidade reformada*: Rio de Janeiro: Francisco Alves, Motta, Rodrigo Patto Sá (2014), *As universidades e o regime militar. Cultura política brasileira e modernização autoritária*. Rio de Janeiro, Zahar

⁵⁵⁷ Ver *Plan de estructuración docente de la universidad de concepción Chile*, 1958 En (Reorganization of the Universidad de Concepción): Chile - (mission), 1957-1958, disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158866> [consultado en octubre de 2019]

y en el legado reformista de Córdoba. Sugería definir estrategias tendientes a reencauzar las ansias de participación estudiantil hacia actividades de carácter social y cultural alejadas de las disputas políticas a nivel nacional.⁵⁵⁸ En este y otros asuntos profundizó en un documento que inicialmente presentó a la Universidad de Princeton, *Outline of a proposal for US policy concentration in Latin America on university reorganization and economic integration*, publicado tres años más tarde con el título *The Latin American University*. En julio de 1963 la revista literaria colombiana *Eco* editó su versión en español, *La Universidad Latinoamericana*, lo cual permitió su amplia difusión en la región.⁵⁵⁹ Este texto, aparecido en español después de los sucesos cubanos, de manera similar a otros de la época, tuvo un carácter programático que expresó un ideal de universidad a seguir.

Con un lenguaje plagado de metáforas médicas, Atcon expuso en detalle los problemas —así como sus orígenes— de la educación en América Latina y definió directrices generales para un programa integral de cambio cuyo referente eran las universidades estadounidenses. Inserto en el clima intelectual signado por los desarrollismos en sus variadas expresiones, el *Informe Atcon* presenta semejanzas con propuestas ideológicamente divergentes y antagónicas. Comencemos por advertir, como detalle elocuente, la coincidencia con el título homónimo con que se conoció el célebre libro de Darcy Ribeiro que tanta influencia ejerció en medios intelectuales y académicos de izquierda.⁵⁶⁰ El desarrollismo como ha señalado Carlos Altamirano, excedió con creces a una doctrina o corriente de pensamiento y se convirtió en “objeto de referencia común para argumentos, análisis y prescripciones distintas dentro el pensamiento social

⁵⁵⁸ Memorandum n.º 3, 24 de noviembre de 1957, dirigido al rector don David Stichkin Branover. “University policy on students politics and other activities” En (Reorganization of the Universidad de Concepción): Chile - (mission), 1957-1958, disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158866> [consultado en octubre de 2019]

⁵⁵⁹ Ver Atcon, Rudolph P. “*La Universidad latinoamericana: clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América Latina*”, *Eco. Revista de la cultura de occidente*, mayo-julio, tomo VII, Bucholz, Bogotá, 1963, pp.1-169. La revista *Eco* (1960-1984) fue una de las revistas culturales de más larga trayectoria e influencia en la vida literaria de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Empezó a publicarse en mayo de 1960 por Karl Buchholz, Ernesto Guhl, Hans Herkrath, Hasso Freiherr von Maltazahn, Carlos Patiño Roselli y Antonio de Zubiaurre. Fue editada a través de la Librería y Galería Buchholz. Inicialmente se propuso difundir la “cultura y espíritu de Occidente” a través de traducciones de textos inéditos en español Sin embargo, a partir de mediados de la década de los sesenta, *Eco* se convirtió en un espacio para la difusión de la literatura latinoamericana. Allí publicaron entre tantos otros los uruguayos Angel Rama y Emil Rodríguez Monegal, Ver: Marín Colorado, Paula Andrea, “ECO (1960-1984) y las dinámicas del campo literario colombiano de mitad del siglo XX” *Lingüística y Literatura*, 66, (2014), pp.107-126

⁵⁶⁰ Ribeiro, Darcy. *La universidad latinoamericana* (Montevideo: Universidad de la República, Departamento de Publicaciones, 1968)

y económico”.⁵⁶¹ En tal sentido, brindó referencias conceptuales y, sobre todo, un vocabulario común utilizado y resignificado por un vasto abanico de actores sociales, políticos e intelectuales. Tras este lenguaje compartido, empero, subyacían concepciones opuestas acerca del rol de las universidades.

Señalemos que el *Informe*, también en sintonía con otros documentos de la época, proponía un diagnóstico de la crisis educativa en clave histórica. Retomando el modelo explicativo del desarrollo lineal de Rostow, que reproducía la mirada simplificadora que los medios académicos estadounidenses habían construido sobre América Latina, atribuía el atraso de las sociedades del continente a la herencia social y cultural colonial y a las estructuras políticas y económicas resultantes de los procesos de construcción nacional tras las guerras de independencia. Esta forma de articulación entre pasado-presente-futuro caracterizó a otros informes de la época, en los cuales en un presente de crisis general, la educación era concebida como un factor y motor del desarrollo.⁵⁶² Específicamente para las universidades, Atcon señalaba el anacronismo de la permanencia del modelo napoleónico en momentos de explosión socioeconómica. En suma, las estructuras académicas eran conservadoras, obsoletas e ineficientes y orientadas a la provisión de títulos para las élites. En otras palabras, se habían convertido en sustento a la vez que en mecanismo de reproducción de unas estructuras económicas y sociales tradicionales que debían ser desterradas. Proponía, en cambio, redireccionar la enseñanza universitaria hacia la formación de profesionales modernos que contribuyeran a encauzar a los países por el camino del desarrollo.

La participación de los estudiantes en la dirección de los asuntos universitarios era señalada como el principal elemento retardatario. El poder que detentaban era una “amenaza los fundamentos mismos del orden social”, ya que constituía un caldo de cultivo para las fuerzas izquierdistas que, en su opinión, supieron capitalizar esa situación.⁵⁶³

Es un hecho deplorable pero cierto que los estudiantes universitarios representan el elemento más reaccionario en la actual sociedad

⁵⁶¹ Altamirano, C. “Desarrollo y desarrollistas”, *Prismas*, n.º 2 (1998)

⁵⁶² Ver análisis de Vania Markarian sobre el Plan Maggiolo en “Tres partes y tres fuentes. Un ensayo de ubicación del plan Maggiolo en el contexto intelectual del Uruguay de los sesenta” En: Jung, Paroli, Martínez (eds.) *50 años del plan Maggiolo. Historia, testimonios y perspectivas actuales* (Montevideo: Ediciones Universitarias, 2018), pp.15-25

⁵⁶³ Atcon, Rudolph. *La Universidad Latinoamericana: clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América Latina*, p. 67

latinoamericana. Con toda su rebeldía, con todos sus lemas revolucionarios, el estudiante es en realidad una fuerza negativa dentro del orden social. Pertenece a una elite, alimentada por el privilegio, desembarazada de disciplina o de conocimientos, arrogante con la sensación de su poder.⁵⁶⁴

Así, la reforma estructural de la universidad en América Latina, postulada por Atcon como “necesidad” y como “manifiesto,” se tornaba insoslayable y, sobre todo, urgente. Con meridiana claridad explicitaba su temor, ampliamente compartido por los sectores anticomunistas, de que de no tomarse las medidas urgentes, Cuba era el “ejemplo de lo que nos espera”.

Sabemos que se están acumulando las presiones contra la encrucijada actual y en busca de cambios violentos. La violencia es lo último que deseamos, pero si las actuales tensiones no encuentran salida, ni comprensión, ni mecanismos en lo alto para transformarlas en actividades prácticas y productivas, si se les permite acumularse más aún, entonces, sencillamente estallarán.⁵⁶⁵

Desde esta perspectiva, la educación superior era la verdadera encrucijada para el desarrollo en el continente y el punto de partida para cualquier cambio social. “La sociedad menos favorecida, la menos desarrollada, la menos adelantada técnica e industrialmente, la sociedad tradicional en un nivel bajo de equilibrio económico, la que más necesita[ba] hacer fuertes inversiones en la educación”, decía.⁵⁶⁶ La cualificación de un “factor humano” propio en condiciones de manipular la maquinaria y adaptarla a las necesidades locales era condición necesaria para superar el subdesarrollo. Mediante la “planeación integral” debía implementarse una “revolución institucional” que removiera los cimientos de las arcaicas universidades, reorganizándolas con los criterios de eficiencia de una empresa privada.⁵⁶⁷ Recostado en la concepción tecnocrática de las teorías de la modernización, entendía a la planificación educativa como parte de la planificación integral del desarrollo económico y social.

En este informe, como en otros que publicó después, subyace omnipresente el concepto de neutralidad política, asociado al desempeño técnico, y el carácter universal de las soluciones propuestas; una concepción que, como vimos, se había generalizado en esos mismos años de la mano de los desarrollos de las ciencias sociales. Dicho en

⁵⁶⁴ *Ibíd.*, p.70

⁵⁶⁵ *Ibíd.*, p.97

⁵⁶⁶ *Ibíd.* p.12

⁵⁶⁷ *Ibíd.*, p.97

otras palabras, para Atcon la reforma universitaria era un asunto técnico y no político y, como tal, eran los especialistas los encargados de marcar el camino a seguir. Cuestionó además la tendencia a las ayudas esporádicas y el énfasis economicista de la planificación que soslayaba otras facetas del orden social.⁵⁶⁸ En tal sentido, realzó el papel de los expertos en educación en contraste con la preponderancia adjudicada a los economistas en esta y otras áreas. Sostenía que los esfuerzos de estos últimos habían sido inarmónicos y concentrados en los “medios de producción”, dejando de lado otros aspectos de la sociedad. “Hasta ahora no ha habido una planeación paralela política, sociológica, filosófica o educativa para promover el progreso –o al menos un cambio coherente- en esas otras facetas del orden social que no se relacionan directamente con la pura planeación económica pero que tienen gran influjo sobre ésta”, afirmaba Atcon.⁵⁶⁹ Para ello, sugería la designación de un grupo de científicos sociales que con amplio margen de independencia se ocupara de definir las premisas de un programa de desarrollo integrado.

Dicho esto, ¿cuáles eran las ideas fuerza del “modelo” de universidad en los términos de Atcon? Como afirma Levy, la receta del asesor era “una gran dosis del modelo estadounidense”, que claramente no representaba la compleja realidad de la educación superior del país del norte. Tomando ese referente como un tipo ideal, Atcon postuló en el plano académico la eliminación del monopolio de las facultades profesionalistas y de las cátedras como unidad educativa, la flexibilización y diversificación de disciplinas y carreras así como la integración de cursos, currículos, equipos y docentes. Cuestionó las estructuras basadas en institutos tal cual se habían implementado en la región cuya naturaleza había sido desvirtuada. Proponía, en cambio, una nueva organización flexible, centrada en la formación general bajo el principio de “máximo conocimiento en el mínimo de tiempo”. Esto significaba la implantación de cursos generales a nivel universitario al modo de los *colleges* estadounidenses.

América Latina tiene que llegar a ver claramente la utilidad de una preparación universitaria no especializada tanto para el progreso individual como para el de la comunidad. Una educación en las humanidades, las ciencias y las artes; una preparación práctica y teórica, una búsqueda del conocimiento sin preocupaciones prematuras sobre los medios específicos de ganarse la vida, a la larga representa una preparación para que muchas

⁵⁶⁸ *Ibíd.*, p. 10

⁵⁶⁹ *Ibíd.*, p.8

personas ejerzan una ciudadanía productiva mejor que la preparación directa orientada hacia un puñado de profesiones.⁵⁷⁰

Quienes así lo desearan (o tuvieran condiciones) podrían continuar hacia niveles de especialización profesional o en ciencias básicas. La base de la reestructura académica promovida por Atcon consistía, por tanto, en la implementación de grandes centros de estudios generales. Enfatizaba además la importancia de la enseñanza técnica orientada a cubrir las demandas productivas y del Estado, en detrimento de la tradición humanista que, consideraba, había prevalecido hasta entonces en las universidades latinoamericanas.⁵⁷¹ Asimismo, la investigación científica pasaba a ser en este esquema una actividad de élite y, sobre todo, no prioritaria en países donde no se disponía de los abultados recursos que requería su desarrollo:

Sólo cuando se adquiriera el personal apropiado, se establezca una política, se planeen programas integrados y se reserven los fondos suficientes, podrá hacerse un esfuerzo consciente para lanzarse a la verdadera investigación [...]. Una institución que comienza apenas a adelantar investigaciones debe adaptarse, y tiene que hacerlo, a las necesidades de quienes la financian. Es algo no sólo carente de sentido sino meramente indefendible el pedir la prerrogativa de trabajar dentro de un vacío social e insistir en que otros paguen la cuenta.⁵⁷²

En este sentido, iba a contracorriente del reformismo por izquierda, en la versión, por ejemplo, de Darcy Ribeiro y cuya expresión fue la breve experiencia de la Universidad de Brasilia, que consideraba la investigación científica, básica y aplicada, un fundamento de las funciones de las universidades y condición necesaria para la soberanía de los países. En el caso uruguayo, estas ideas eran representadas, como vimos, por el movimiento de renovación impulsado por la generación reformista sintetizado en el Plan Maggiolo. Digamos, también, que el modelo de universidad estadounidense era muy heterogéneo y cubría una amplia gama de instituciones terciarias de distinto tipo, la menos común en la época era la universidad orientada a la investigación a la que los reformistas tomaron como referente de transformación. Como se ve hubo diversas adaptaciones y apropiaciones de este modelo.

⁵⁷⁰ *Ibíd.*, p. 102

⁵⁷¹ *Ibíd.*, p.70

⁵⁷² *Ibíd.* pp. 83-84

Otro eje relevante era la racionalización de la administración mediante la centralización, la introducción de prácticas modernas y la profesionalización de los recursos humanos. La Universidad era concebida como una gran empresa en la cual los órganos encargados de elaborar política universitaria debían estar separados de aquellos a los que les competía su ejecución. En consonancia, el acceso a las funciones universitarias (docentes y no docentes) debían “tener una base competitiva” regulada por el mercado, es decir, se precisaba establecer un esquema de competencia para la selección de personal, que asegurara remuneraciones justas y mediante contratos individuales.

Su concepción de la autonomía universitaria también iba a contrapelo de aquellas posiciones comúnmente asociadas con el “reformismo” latinoamericano. Esta suponía la emancipación de las instituciones universitarias del financiamiento y de las regulaciones estatales así como de cualquier forma de injerencia en sus objetivos científicos y docentes. Era preciso buscar y diversificar las fuentes de recursos (donativos estatales y creación de fundaciones privadas), consolidando así el avance privatizador en la educación superior.

Hasta mediados de la década del sesenta la presencia del consultor norteamericano no levantó olas en ámbitos universitarios, académicos e intelectuales, cuando las misiones y los financiamientos externos de agencias gubernamentales o de fundaciones filantrópicas estadounidenses a las universidades fueron de trámite frecuente. Pero tras el golpe de Estado militar en Brasil (1964), bajo la estela del fantasma de Camelot (1965), y la intervención militar en República Dominicana que depuso al presidente electo Juan Bosch (1965), esto cambió drásticamente. En el marco de una fuerte reacción antimperialista, sus planes fueron denostados y denunciados públicamente como parte de la intromisión de los poderes imperiales de EEUU en el ámbito educativo latinoamericano. Así lo explicitaba el periodista argentino Gregorio Selser en una de sus tantas crónicas en el semanario *Marcha*

Herr Atcon podrá ser muy ‘independiente’ y ‘libre’ de disentir con quien sea en materia estudiantil: pero, sus planes lo revelan, nunca disenterá con quien proporciona los fondos o le promueve contratos. Y siempre insistirá en su principal estribillo, casualmente el que más importa a la política del Departamento de Estado en Hispanoamérica: los estudiantes no deben militar en política y no deben participar en la conducción de los asuntos

universitarios. De hecho, y a todos los efectos, Herr Atcon es el Enemigo Número 1 de la Reforma Universitaria.⁵⁷³

Parte de este rechazo estaba vinculado a su colaboración con la dictadura brasilera en el proceso de reforma de la educación superior.⁵⁷⁴ En 1965, Atcon retornó a Brasil convocado por la dirección de Enseñanza Superior del Ministerio de Educación y Cultura para realizar una evaluación de las instituciones universitarias. Paralelamente, el MEC suscribió un acuerdo con la USAID que preveía una fuerte inversión en asesoría y planeamiento con el objetivo de “modernizar” la enseñanza superior. Aunque fue asociado a este convenio, el contrato de Atcon corrió en paralelo al mismo. El asesor recorrió doce instituciones y recolectó un conjunto de informaciones que fueron difundidas en un detallado informe, publicado en 1966, en el cual, luego de enumerar una serie de principios filosóficos que debían sustentar el proceso de planificación y programación, planteaba, en línea con su texto programático, medidas dirigidas a la centralización administrativa, la profesionalización de la gestión de las universidades, la departamentalización, la diversificación de fuentes de financiamiento y la inversión en la construcción de los campus.⁵⁷⁵ Simultáneamente, en 1966, la Universidad Federal do Espírito Santo demandó sus servicios para la elaboración de un plan de reorganización de esa institución.⁵⁷⁶ Pese a la resistencia y a las sonadas movilizaciones estudiantiles en protesta por el convenio USAID-MEC, que determinaron su cancelación, Atcon permaneció en el país, asumiendo como secretario del Consejo de Rectores de las Universidades Brasileñas (CRUB), cargo que ocupó entre 1966-1968.

En 1968 su nombre volvió a aparecer en medios latinoamericanos debido a su eventual colaboración con la dictadura del general Juan Carlos Onganía en su tentativa de renovar las universidades argentinas. Pese al secretismo que rodeó su estadía en aquel país, órganos de prensa y agrupaciones estudiantiles denunciaron sus presuntas intenciones. Según informaba Selser, se lo había visto “pasar diligentemente por ciertas oficinas públicas [...], se le localizó en conversaciones con altas autoridades

⁵⁷³ *Marcha*, 6 de diciembre de 1968

⁵⁷⁴ Cunha, óp. cit., p. 204

⁵⁷⁵ Atcon, R. *Rumo à reformulação estrutural da universidade brasileira* (Rio de Janeiro: Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, 1966), p. 124

⁵⁷⁶ Atcon, R.P. *Proposta para a reestruturação da Universidade Federal do Espírito Santo*. (Florianópolis: Imprensa Universitária da UFSC, 1967); Inhan, Gabriella; Miranda, Clara; Chaves Alberto, Klaus (2016). “Rudolph Atcon e o planejamento do campus da Universidade Federal Do Espírito Santo” *Oculum Ensaíos*, vol. 13, n.º 2, pp. 237-254

universitarias (¿rector Devoto?, ¿decano Taquini?) y también del elenco gubernamental no específicamente educativo. Se supo [...] que (¿fines de enero, principios de febrero?) le tendremos entre nosotros, [...], preparando la salvación de la universidad argentina para uso de la facción gobernante.”⁵⁷⁷

Como contrapartida, las ideas de Atcon fueron bien recibidas por amplios sectores de las derechas locales. Es posible advertir su influjo en la articulación de los impulsos modernizadores de ciertos actores locales con “la ideología tecnocrática del planeamiento”. Estas derechas, además de asumir diversidad de formas y expresiones locales, representaban a un conjunto muy heterogéneo de grupos e individuos pertenecientes a diversas tradiciones político-ideológicas (desde liberales a nacionalistas) que en la coyuntura de polarización de los largos sesenta fueron radicalizando posiciones y confluyendo en intereses y propuestas. En relación con las universidades, convergieron en algunos de los diagnósticos, sobre todo aquellos que cuestionaban la politización de los centros de estudios y la intervención y movilización política estudiantil, pero no así en sus propuestas para reestructurar el sistema educativo. Por otra parte, quienes abrazaron los planteos modernizadores de Atcon, así como otros lineamientos promovidos por los organismos y agencias internacionales de alcance regional y/o global, los adaptaron y resignificaron en función de intereses de diverso signo.

Aunque Atcon no estuvo en Uruguay, su informe fue conocido por intelectuales y académicos uruguayos, como queda en evidencia en las discusiones en el seno del Consejo Directivo Central de la Universidad en torno al proyecto de reconversión integral de esa institución presentado en 1967 por el rector Óscar J. Maggiolo. En esa oportunidad el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Rodolfo Tálice, invocó al consultor para fundamentar su oposición a la creación de institutos centrales en la Universidad de la República, aspecto medular del Plan:

en el informe Atcon, que ha sido muy divulgado, que es muy cuestionado pero que merece ser leído, hay una cantidad de hechos que nos hacen comprender que las Universidades latinoamericanas no están todavía muy maduras para esta clase de Institutos centralizados. [...] a este respecto dice sobre que esta forma de juntar a veces cátedras diferentes representa más una tentativa que no se concreta nunca en realidades. Separa –dice– el matrimonio feliz de la docencia y la investigación.⁵⁷⁸

⁵⁷⁷ *Marcha*, 6 de diciembre de 1968

⁵⁷⁸ Consejo Directivo Central, *Actas de Sesiones*, 12 de julio de 1967, AGU, Montevideo

Otro indicio acerca del flujo de ideas y propuestas también puede inferirse a partir de las semejanzas que presentan los planteos de García Capurro con los proyectos de reformulación del sistema universitario argentino que, con diversa suerte, fueron objeto de debates y polémicas dentro y fuera del colectivo universitario. Resultan así evidentes las coincidencias con el “Programa de Adecuamiento de la Enseñanza Universitaria Argentina a las Necesidades del Desarrollo” presentado por el doctor Horacio Taquini el Coloquio sobre Modernización de las Instituciones Políticas en la Argentina, organizado por la Academia del Plata –institución cultural católica, creada en 1879 para “fomentar amor a la filosofía católica” y “conservar el espíritu cristiano”⁵⁷⁹ - en la localidad de Chilecito, provincia de La Rioja, el 16 y 18 de noviembre de 1968, apenas unos días antes de que se publicaran las declaraciones del ministro uruguayo en la prensa montevideana. Taquini argumentó en la ocasión que

La adecuación de la universidad actual a las necesidades del desarrollo de nuestro país impone la creación de títulos intermedios que permitan a quienes los reciben incorporarse a la vida productiva, manteniendo la posibilidad de proseguir los términos de las carreras largas. De esta manera se logrará no sólo una mayor afluencia del estudiantado sino una diversificación de las disciplinas a encarar así como un aporte consecuentemente más efectivo de la universidad a las necesidades reales del desarrollo del país, mediante la aplicación de métodos agilizados que en menos tiempo capaciten a los estudiantes para graduarse e incorporarse a la vida productiva. Esta reducción en el tiempo de desarrollo de las carreras traerá aparejada una paralela disminución de los costos operativos de la universidad con el beneficio correspondiente para el todo, desde el punto de vista económico y financiero.⁵⁸⁰

Doctor en medicina, especializado en fisiología humana, docente e investigador, Taquini representaba a los grupos liberales católicos de la Universidad de Buenos Aires. En 1968 fue designado por Onganía decano interventor de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Su preocupación por la cuestión universitaria lo llevó a conformar un equipo de expertos en política educativa con amplias redes de relaciones con integrantes

⁵⁷⁹ Sobre la Academia del Planta ver: <https://www.academiadelplata.com.ar/>

⁵⁸⁰ Taquini (h), Alberto C. *Nuevas Universidades para un nuevo país* (Buenos Aires: Editorial Estrada, 1972) p. 10. Rovelli, Laura. “Del plan a la política de creación de nuevas universidades nacionales en Argentina: la expansión institucional de los años 70 revisitada” En *Temas y Debates*. Año 13, n.º 17 (agosto de 2009) Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. pp. 117-137 Mendonca, M., óp. cit.

del Gobierno.⁵⁸¹ Bajo el impacto del informe del sector de educación de la Comisión Nacional de Desarrollo (Conade), dado a conocer ese año, propuso un plan de fundación de universidades nacionales en distintas regiones del país como solución a lo que entendía eran los problemas más acuciantes de las universidades argentinas: la creciente demanda de educación universitaria cuyo resultado fue la masificación que transformó a las instituciones en “multitudinarias” y “superpobladas” y el aumento de la politización estudiantil. La enseñanza superior debía estar volcada a la formación de recursos humanos para el desarrollo nacional, pero juzgaba incompatible una “universidad de masas” con una “universidad científica”. En sintonía con los planteos de Atcon, su plan integral preveía la existencia de dos circuitos: uno de élite, focalizado en la investigación y otro profesionalista destinado a atender las demandas crecientes de educación superior. Sostenía que el proceso educacional en todos sus niveles tenía como desafío desterrar el subdesarrollo. Debía construirse una verdadera “Universidad para el desarrollo”, decía. También apelaba al análisis histórico como punto de partida para la elaboración de un plan de transformación de las ya inadecuadas estructuras académicas.

El pasado es siempre punto de inspiración y punto de apoyo para los cambios y la modernización; [...] no hay planeamiento posible, efectivo y realista por revolucionario que éste pretenda ser, desgajado del proceso histórico⁵⁸²

Postulaba, a tono con las tendencias de la época, la necesidad del planeamiento para el logro de una mayor eficiencia del sistema y “de un mayor aprovechamiento de sus frutos por parte del país”.⁵⁸³ La base de su programa consistía en la fundación de nuevas universidades públicas con “estructuras modernas” localizadas en distintas ciudades del interior de Argentina. La modernización estructural implicaba la sustitución de la estructura de facultades y cátedras por una departamentalizada, la instauración de la dedicación exclusiva de los docentes, la diversificación de la oferta disciplinar con énfasis en la implementación de carreras cortas e intermedias, disminuyendo así los costos operativos de las universidades. También indicaba la unificación del sistema universitario argentino así como la racionalización de las estructuras administrativas para el logro de una mayor eficiencia. Por último, establecía criterios básicos para la

⁵⁸¹ Rovelli, óp. cit., pp. 117-137

⁵⁸² Taquini, A., óp. cit., p. 42

⁵⁸³ *Ibíd*, pp. 111-113

selección de la ubicación de universidades.⁵⁸⁴ En términos generales es posible observar en las propuestas de Taquini, al igual que en las de su colega uruguayo, líneas de coincidencia con los postulados de Mr. Atcon.

Aunque el plan del argentino era más abarcativo y estructurado que las propuestas lanzadas por García Capurro, las semejanzas en las argumentaciones sugiere la propagación en la región de ideas y proyectos relativos a las políticas universitarias y la influencia de otras experiencias en los procesos y debates locales. La transcripción en uno de los principales diarios de la ciudad de Salto, *Tribuna Salteña*, de un editorial del diario bonaerense *Clarín*, que destacaba la importancia de la creación de las universidades de Río Cuarto (Córdoba) y de Comahue (Neuquén) abona la certeza de esa circulación de ideas y experiencias. *Clarín* planteaba que la descentralización permitiría revertir la tendencia macrocefálica del país vecino, reducir los males del “gigantismo en las universidades mayores”, crear nuevas fuentes de trabajo, reactivar otros sectores económicos y el comercio “lugareño”, argumentos similares a los que manejaban los partidarios de diversificar la educación superior uruguayo.⁵⁸⁵ En las regiones fronterizas con Argentina, como la ciudad de Salto, donde se seguía muy de cerca la realidad del vecino país, se recibió con expectación la instalación de nuevas universidades en las que, por otra parte, jugaron un rol muy importante los actores locales organizados y movilizadas en Comités pro Universidad de similares características al Movimiento pro Universidad del Norte y sus derivaciones en cada departamento.

Menos evidente son los parecidos con el “Plan de Transformación de la Universidad de Buenos Aires”, que presentó a fines de 1968 el rector interventor de la UBA, Raul Devoto. Su plan incluía parcialmente el reemplazo de las facultades por complejos académicos, la departamentalización, un nuevo sistema de ingreso y el cierre de la ciudad universitaria. Proponía dividir los departamentos en Centros de Ciencias Puras y Centros de Formación Profesional. Asimismo, preveía la creación de cinco complejos: tecnológico, agropecuario, ciencias sociales, Humanidades y Ciencias de la Salud o Biomédico. Inspirado en el planteo del consultor estadounidense, aunque readaptándolo, proponía la implantación de estudios generales al estilo de las universidades estadounidenses y definía cuatro ciclos de formación: de iniciación, de

⁵⁸⁴ Ver Rovelli, L., óp. cit., y Mendonca, óp. cit.

⁵⁸⁵ Editorial del diario *Clarín* de Buenos Aires citado en *Tribuna Salteña*, 17 de abril de 1970

ciencias puras, de formación profesional, y de posgrado.⁵⁸⁶ La reconfiguración del ciclo superior buscaba solucionar la masividad y la deserción estudiantil. Devoto expresaba una concepción elitista de la educación superior que contraponía la universidad de la política, “que acaba en nido de guerrilleros”, a la universidad de la sabiduría⁵⁸⁷.

Para Selser este plan era obra del “condotiero internacional del Departamento de Estado para asuntos educativos, Mr Atcon” y agregaba que si “no ha parido el ‘Plan Devoto’, es casi seguro que actuó de comadrona o ama de cría”.⁵⁸⁸ Esto tampoco sería del todo extraño si se tienen cuenta que los contactos de Rudolph Atcon en Argentina venían de fines de los cincuenta cuando, mientras desarrollaba sus trabajos de asesoramiento en Brasil y Chile, realizó una visita al país y se reunió con representantes del gobierno y los investigadores Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir para estudiar alternativas para que el Instituto de Fisiología e Investigaciones Bioquímicas pasara a depender del apoyo financiero del gobierno sin perder su independencia. Según informaba Atcon a sus superiores de Unesco en ese momento, se alcanzó una fórmula que si “se adopta, y parece probable, sentaría un precedente valioso para el desarrollo de la ciencia libre en un país latinoamericano”.⁵⁸⁹

El conjunto de medidas impulsadas por Devoto provocaron una fuerte oposición de los sectores estudiantiles, de parte del cuerpo docente y de los decanos de las Facultades de Filosofía y Letras, Odontología y Derecho, quienes presentaron su renuncia al rectorado en señal de protesta. Como consecuencia el rector abandonó su cargo y su proyecto fue abandonado. Distinta suerte corrió el plan Taquini, que fue incorporado al Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975. Aunque con importantes modificaciones, se constituyó en la base del proceso de expansión universitaria que se produjo en Argentina entre 1970 y 1973, luego de los estallidos populares que tuvieron como corolario el *Cordobazo* y que determinaron la caída del general Onganía. En un contexto de fuerte activación de la movilización social y debido a la necesidad de buscar apoyos políticos, su sucesor Alejandro Agustín Lanusse influido por la propuesta técnica del

⁵⁸⁶ Ver “Anteproyecto de reestructuración de la Universidad de Buenos Aires” en Devoto, Raúl A. *Sobre una nueva universidad. Discursos y conferencias* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, sf.), pp. 107-147

⁵⁸⁷ Devoto, R., óp. cit., p. 32

⁵⁸⁸ *Marcha*, 14 de febrero de 1969

⁵⁸⁹ Carta de Rudolph Atcon a A.H. Mackenzie, Chief Latin American Section, Bureau of Relations with Member States, Unesco, en París, Rio de Janeiro, 5 de setiembre de 1957, en (Reorganization of the Universidad de Concepción): Chile - (mission), 1957-1958, disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158866> [consultado en octubre de 2019]

equipo de Taquini apostó a la expansión del sistema universitario.⁵⁹⁰ El plan fue visualizado por las autoridades dictatoriales como un instrumento político que permitía combinar políticas de carácter represivo con otras de corte modernizador y tecnocrático al estilo de la experiencia brasilera.⁵⁹¹

De lo analizado se puede concluir que en Argentina y Uruguay hubo sectores modernizadores de las derechas locales que buscaron articular un programa de reforma que tuvo como centro la despolitización y depuración ideológica así como la reorientación académica basada en criterios de eficiencia de las universidades. El perfil tecnocrático se expresó en el énfasis en la implementación de carreras cortas, de perfil técnico y aplicado, destinadas al mercado y al sistema productivo. Otros elementos comunes que se encuentran presentes son la relación virtuosa entre desarrollo y educación, la invocación a la planificación y el énfasis en la necesidad de realizar diagnósticos y estudios de factibilidad, dando relevancia a las herramientas de las ciencias sociales y la circulación de expertos. Estas ideas fueron inspiradas en las formulaciones del consultor estadounidense Rudolph Atcon, pero también reconocen antecedentes en los debates y las realizaciones que se produjeron en los años cincuenta y sesenta en Brasil (con la creación de la Universidad de Brasilia en 1961, y la influencia del antropólogo y educador Darcy Ribeiro), Argentina (el reformismo post 1955) y Uruguay (Plan Maggiolo en 1967), coartadas por los procesos políticos nacionales y en alguna medida por la resistencia de actores universitarios.

Asimismo, para el caso uruguayo, cabe destacar los intentos del gobierno de EEUU por influir en la educación, “especialmente la Universidad Nacional”, a través de su embajada en Uruguay. Varios informes diplomáticos insistieron en la urgencia de mejorar la calidad de enseñanza uruguaya lo cual debía hacerse mediante la acción gubernamental dirigida a implementar una profunda reforma interna. Las alternativas contemplaban como requisito disminuir e incluso “eliminar la dirección comunista y de extrema izquierda de la Universidad de la República”, según decían. Sin embargo, la creación de una universidad privada, al menos en el futuro inmediato, fue descartada.

⁵⁹⁰ Se instalaron trece nuevas universidades mediante la fundación de nuevas casas de estudio, la subdivisión de instituciones preexistentes o la nacionalización de anteriores establecimientos privados o provinciales: Río Cuarto, Lomas de Zamora, Luján, Santiago del Estero y Catamarca. Subdivisiones: Salta, San Juan, San Luis, Entre Ríos y Misiones. Nacionalizaciones de universidades anteriores provinciales o privadas: Comahue, La Pampa y Jujuy

⁵⁹¹ Rovelli, L. óp. cit. pp. 117-134 y Mendonca, M. op.cit.

En una primera instancia, propusieron concentrar esfuerzos en captar el apoyo de jóvenes, profesores, gobierno y dirigentes políticos para llevar a cabo un proceso de reorientación académica. Se buscó además fomentar relaciones fraternas entre universidades estadounidenses y la uruguaya mediante programas de beca e intercambio de estudiantes. Así, “el gobierno de EEUU está interesado en influir en la dirección de la educación en el país, aportando asistencia técnica y técnicos para colaborar con la modernización educativa”, se señalaba.⁵⁹²

Por último, dejemos planteado las posibles influencias del exitoso proceso de modernización de las universidades brasileras que se llevó adelante bajo el régimen dictatorial instalado en ese país en 1964. Como fue mencionado, las recomendaciones de consultores de la USAID a través del convenio firmado con el MEC y las del propio Atcon fueron relevantes en la elaboración de un programa de reestructura académica que tuvo profundos impactos en el sistema universitario de Brasil. Como ha estudiado ampliamente el historiador brasileño Rodrigo Patto Sá Motta, el impulso modernizador acopló dos objetivos: la represión y la cancelación de la disidencia al interior de los centros educativos y la reforma del sistema. Las universidades fueron consideradas piezas fundamentales para el proyecto modernizador promovido por sectores de la coalición gobernante luego del golpe de Estado. Los militares se apropiaron de las ideas reformistas del período anterior y las adaptaron y aplicaron de manera elitista y autocrática.⁵⁹³

Resulta evidente que los debates y polémicas sobre los modelos universitarios en boga en las décadas de los cincuenta y sesenta rebasaron los marcos nacionales y se inscriben en contextos más generales. No obstante, las iniciativas locales presentan diferencias y tuvieron suertes muy distintas. En Argentina, las propuestas provinieron de actores universitarios y de expertos, estrechamente ligados al poder político. En particular, el plan Taquini fue incorporado a las estrategias del Gobierno de Lanusse a través del Plan Nacional de Desarrollo y fue sustento de la expansión universitaria del período.

En Uruguay, la iniciativa provino de los sectores y representantes de las élites locales y fue cooptada por el Poder Ejecutivo, lo que generó una franca oposición con la mayoría del colectivo universitario. No se logró conformar un equipo de expertos o

⁵⁹² NARA. RG.59, 20 de abril de 1968 129- Country Analysis and Strategy Program (CASp)-Uruguay

⁵⁹³ Motta, Rodrigo Patto Sá, op.cit.

sumar el proyecto de la UN a las propuestas de la CIDE. Compartieron, en cambio, el interés por instalar un modelo de universidad en oposición al político y académico de las universidades tradicionales de perfil elitista y tecnocrático que combinaba la despolitización y la reorientación académica de las universidades. Aun cuando no se han encontrado registros, no puede descartarse la existencia de contactos entre las autoridades universitarias argentinas y el ministro uruguayo o puntos de encuentro en espacios regionales de discusión sobre asuntos educativos.

A modo de epílogo digamos que tras la intervención a la Universidad de la República en octubre de 1973, el régimen dictatorial además de implementar un conjunto de prácticas represivas y desmovilizadoras, también manifestó su voluntad de transformar el sistema universitario. Aún se ha avanzado poco en el conocimiento de los propósitos y lineamientos o eventuales realizaciones en esta área y, por tanto, la discusión sobre la existencia o no de un proyecto educativo de la dictadura continúa abierta. Sabemos, sin embargo, que además de privilegiar la enseñanza por sobre las actividades de investigación, la intervención puso énfasis en una formación universitaria dirigida a satisfacer las demandas del mercado y los planes de gobierno, sintonizando con las propuestas sostenidas por parte de las derechas en el período anterior. Como varios documentos de época declaraban se trataba de capacitar profesionales y técnicos para el desarrollo, con perfil técnico y práctico.⁵⁹⁴ En tal sentido, varias carreras retomaron la expedición de títulos intermedios que ofrecía a los jóvenes una salida laboral temprana. Un caso ejemplar, fue el nuevo plan de estudios que aprobaron las autoridades interventoras de la Facultad de Ingeniería, que como se analizó había sido uno de los centros pioneros en el desarrollo de las ciencias básicas en el país y en la Universidad. Alfredo de Santiago, decano interventor, en 1975 luego de valorar el “acto de despolitización” que llevó adelante el régimen para alcanzar la “verdadera nacionalización de la Universidad de la República, paulatinamente transformada en República de la Universidad”, afirmó que a esas alturas el camino se encontraba abierto para iniciar la necesaria modernización de la enseñanza de la ingeniería. El propósito era formar “ingenieros modernos” y desarrollar de laboratorios para la asistencia al sector productivo. El nuevo plan, contradecía punto por punto, las aspiraciones y logros que los ingenieros reformistas trabajosamente procuraron llevar a cabo durante las dos

⁵⁹⁴ Sobre la intervención a la universidad ver: Markarian, V., “La Universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguayo durante la última dictadura (1973-1984)

décadas anteriores.⁵⁹⁵ Se proponía, y así se hizo, instaurar carreras cortas, estudios graduales y titulaciones intermedias que posibilitaran “poner en circulación, rápidamente escalonada, a esos jóvenes con superior preparación y disciplinas, antes de culminar la meta actual de la profesión de ingeniero”, redundando en beneficios para la sociedad, la carrera y el estudiante, según decía. La división en etapas de la trayectoria académica creaba un “mercado” al tiempo que regularizaba situaciones curriculares existentes.⁵⁹⁶

Asimismo, el proyecto de mejora de la Universidad de la República elaborado unos años más tarde en el marco del convenio firmado en 1976 entre el BID y la Universidad, fue el que mejor expresó esta filosofía en materia de educación superior. Los lineamientos y directivas de acción que sostenía el informe final, que expresaban el espíritu planificador de la época, presentaron claros rasgos modernizadores y tecnocráticos. Contemplaba la instalación de nuevas carreras con el propósito de cubrir las necesidades de la economía del país, haciendo foco en su carácter práctico. También establecía la posibilidad de que parte de esa nueva oferta académica estuviera localizada en el interior del país. En relación a este último punto, digamos que tampoco en esta etapa fue instalada la UN pese a las gestiones que realizó el MpUN ante el Ministro de Cultura y designado Rector interventor interino, Edmundo Narancio. Se acordó una solución a medio camino al habilitar la reapertura de la Casa de la Universidad de Salto, que había sido cerrada con la intervención a la Universidad. Los cursos de derechos que se dictaban desde fines de la década del cincuenta no se restituyeron. En cambio se optó por ofrecer cursos de los primeros años de las facultades de arquitectura, ingeniería, veterinaria y agronomía. Estos fueron inaugurados en abril de 1975, en el marco de los actos celebratorios programados por los 150 años de la Cruzada libertadora.⁵⁹⁷ Como había ocurrido en 1957, para algunos actores y sectores locales esta resolución constituyó “nuevo jalón en la historia de nuestro departamento”, en palabras de *Tribuna*

⁵⁹⁵ De Santiago, Alfredo *Un bienio de intervención- nov. 1973 - noviembre 1957*, Montevideo, Universidad de la República. Facultad de Ingeniería, 1975

⁵⁹⁶ De Santiago, Alfredo *Un bienio de intervención- nov. 1973 - noviembre 1957*

⁵⁹⁷ El acto de inauguración se puede ver en el “Documental institucional sobre la inauguración de los Cursos Universitarios del Norte de la Universidad de la República en Salto”. Realizado por Walter Acosta, Carlos A. Luzardo; Departamento de Medio Técnicos y Comunicación (DMTC), Udelar, 1975. Disponible en <https://archivosdocumentales.udelar.edu.uy/index.php/cursos-universitarios-del-norte>, y <https://www.youtube.com/watch?v=GQo0n02LkBI>

Salteña.⁵⁹⁸ El acto de inauguración contó con la presencia del Presidente de facto Juan María Bordaberry, el Ministro de Educación y Cultura Dr. Daniel Darracq, el Rector Interventor de la Universidad, Arq. Gustavo Nicolich, el Gral. de la División del Ejército n.º 3, general Rodolfo Zubía, junto a los decanos de los cuatro servicios involucrados. En la oportunidad, el Rector Interventor destacó el acto de justicia que suponía satisfacer “los afanes por muchos años relegados de las fuerzas vivas del interior, respecto a la educación superior para sus hijos”. Reconoció el esfuerzo de la colectividad de Salto al brindar su “total apoyo económico” y señaló su aspiración de que los cursos alcanzaran “igual nivel técnico que en Montevideo”. Comprometió todo el respaldo de la Universidad para que Salto se transformara en la “segunda ciudad Universitaria del país”⁵⁹⁹. No es casual que el acontecimiento coincidiera con la concreción de una serie de iniciativas y obras de “notable jerarquía” para el futuro del departamento (y del país) como la construcción de la represa de Salto Grande, “la interconexión carretera y ferrocarrilera por sobre la Represa”, el desarrollo de la actividad turística.⁶⁰⁰ En suma, la instalación de otras universidades públicas no fue contemplada por las autoridades de facto ni por una buena parte de los grupos que a fines de los sesenta habían apoyado al MpUN.

⁵⁹⁸ *Tribuna Salteña*, 22 de abril de 1975, p. 3

⁵⁹⁹ *Circulares* n.º 76/75, 25 de abril de 1975. AGU, Montevideo

⁶⁰⁰ *Tribuna Salteña*, 22 de abril de 1975, p. 3

CAPÍTULO IV. LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN LA CONFORMACIÓN DEL CAMPO DE LAS DERECHAS (1958-1973)

A comienzos de la década del sesenta, alarmado ante los posibles efectos expansivos de la Revolución cubana y en el marco de su estrategia de contención de la amenaza soviética, EEUU reorientó su política exterior hacia América Latina. Intensificó su injerencia en los asuntos locales mediante la asistencia técnica y financiera y los programas de seguridad pública orientados a reforzar los mecanismos estatales de represión. Uruguay había permanecido desde el comienzo de la Guerra Fría bajo la órbita estadounidense y permeable a su prédica anticomunista. Pero en el nuevo contexto regional y con la llegada del Partido Nacional al Gobierno se profundizaron los vínculos entre ambos países, tanto en materia económica como de seguridad. Desde entonces, la realidad local fue analizada por las derechas uruguayas a través de la óptica del esquema bipolar y, por tanto, se percibieron insertas en una guerra de escala mundial contra el avance comunista más allá de las fronteras nacionales.

Así, leyeron y readaptaron la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), cuerpo de pensamiento difundido mediante campañas publicitarias que propagó la noción de una guerra de escala planetaria entre las dos fuerzas antagónicas y pregonó la existencia de un “enemigo interno” —el comunismo— que, omnipresente, extendía sus tentáculos a todos los niveles de la sociedad para socavar las bases de la “nación” y de la “civilización occidental y cristiana”, o del “estilo de vida nacional”, según las diversas formulaciones de la época. En un ambiente signado por la crisis económica, la creciente conflictividad social y el reforzamiento de las izquierdas y de los movimientos sociales impactados por los sucesos cubanos, la amenaza latente se volvió cercana y tangible, lo cual tuvo efectos en el discurso y en las prácticas de estos grupos que endurecieron su prédica anticomunista.

El “comunismo”, término descalificante, fue identificado con las distintas vertientes de la izquierda, los sectores liberales y progresistas de los partidos tradicionales y los movimientos sociales opositores al Gobierno. En ese esquema, uno de sus frentes privilegiados de actuación era la educación y, en particular, la Universidad de la República. Según los grupos derechistas, el uso abusivo de la autonomía —que había

creado una República dentro de la República, o un Estado dentro del Estado— y el cogobierno —asociado a la preeminencia de los estudiantes adherentes a las izquierdas en la dirección de los asuntos universitarios— eran, gracias a la Ley Orgánica de 1958, las causas del desvío de la institución universitaria de sus funciones naturales. Desde entonces la acusaron de ser un foco de “adoctrinamiento” y actuación de los “enemigos ideológicos” (marxistas y fuerzas de izquierda de todos los matices).

Este último capítulo reconstruye la configuración del campo de las derechas uruguayas en relación con la Universidad de la República en el arco que va desde la aprobación de la Ley Orgánica, en 1958, hasta la intervención de la casa de estudios por parte del Gobierno autoritario instaurado en el país en junio de 1973. Se centra en el proceso de construcción discursiva del anticomunismo de derecha, a través del cual se conformó un conjunto de nociones e interpretaciones compartidas que ubicaron a la Universidad como parte del enemigo interno de acuerdo con la DSN.

Asimismo, intenta reconstruir un mapa, aún fragmentario, de personas, grupos o movimientos alineados con estas tendencias, la red de relaciones que fueron tejiendo y las estrategias que llevaron adelante para contrarrestar la influencia izquierdista. Se analiza la manera en que las expresiones asociadas a este espectro político-ideológico reaccionaron —y resistieron— a lo largo de todo el período ante su pérdida de fuerza y representación en la dirección de la Udelar y por ende de su capacidad para generar cambios en su orientación, tanto en aspectos ideológicos como en asuntos propios de política universitaria. Se pretende mostrar cómo, en relación directa con la progresiva disminución de sus posiciones de poder, su retórica anticomunista fue tomando diversas modulaciones: pasaron del plano discursivo al de la violencia, apostaron a crear otras universidades al tiempo que persistieron en la tentativa de “recuperar la Universidad”. Se advierte además cómo distintos actores y sectores derechistas, a pesar de su heterogeneidad y de sus derivas complejas y contradictorias, fueron confluyendo ante la situación de “caos” e “infiltración marxista” que entendían asolaba la Universidad de la República.

1. La Universidad, “foco de subversión”

En abril de 1958, la Universidad de la República elevó al Parlamento su proyecto de Ley Orgánica. La discusión en este ámbito se produjo mientras el estudiantado, junto a buena parte de la comunidad universitaria, tomaba las calles exigiendo su aprobación inmediata y sin modificaciones. En el marco de una creciente movilización social a causa de una crisis económica que desde mediados de la década se profundizaba, los sindicatos se plegaron a los reclamos estudiantiles de reformar los mecanismos de gobierno de la universidad. En ese escenario, estudiantes y trabajadores aunaron sus reivindicaciones y fraguaron en las calles la tan mentada “unidad obrero-estudiantil”, que se materializó con la creación del Plenario Obrero-Estudiantil.⁶⁰¹

Ante esta situación, sectores liberales conservadores de los partidos tradicionales, principalmente del PN y en menor medida el coloradismo no batllista, lanzaron una campaña periodística objetando algunos aspectos de la ley y principalmente los métodos de presión. La filiación socialista del rector, pese a que desde su asunción en 1956 había abandonado toda militancia político-partidaria, influyó en las valoraciones de estos sectores respecto a las exigencias de la Universidad y la protesta estudiantil. Varios de sus medios de prensa acusaron a las autoridades universitarias de incitar “al desorden” y desafiar a las instituciones al desconocer las competencias constitucionales del Parlamento.⁶⁰² Estaba en ejecución un “plan coordinado y preestablecido desde fuera de fronteras contra nuestro estilo de vida”, denunciaban, imbuidos de la retórica de la Guerra Fría, y cuestionaban duramente los métodos de lucha llevadas a cabo para presionar al poder político. Los excesos producidos en las manifestaciones y los actos de violencia que se dieron en este contexto, afirmaban, eran provocados por estudiantes comunistas y socialistas junto a individuos no estudiantes afines a estas organizaciones con el ánimo de generar un clima de “desorden, odio y rencor”.⁶⁰³

Desde la interna de la Universidad se hicieron sentir voces disidentes que sintonizaban con estas denuncias. Las declaraciones públicas de los decanos de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Odontología, ingeniero Carlos A. Berta y doctor Hugo Amorín, respectivamente, evidenciaban las divergencias que habían

⁶⁰¹ Markarian, V. *El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2012), p. 16. Markarian, V., Jung, M. E., Wschebor, I. 1958...

⁶⁰² Ver por ejemplo artículos de *El Bien Público*, 10 de octubre de 1958. *El Plata*, 16 de octubre de 1958 y *El Día* 6 de octubre de 1958

⁶⁰³ *El Plata*, 16 de octubre de 1958 y *El Día* 6 de octubre de 1958

enfrentado a los universitarios en las instancias deliberativas previas y anticipaban las disputas que, como veremos, tuvieron lugar entre derechas e izquierdas por el control universitario. Amorín, lideraba el Movimiento Democrático Universitario (MDU), organización de derecha liberal que actuó a partir comienzos de la década.⁶⁰⁴ El decano Berta, por su parte, también estuvo cercano a los grupos derechistas que mantuvieron el control de la Facultad de Ingeniería hasta mediados de los sesenta.

Las luchas por la aprobación de la referida ley presagiaron los límites de la cooperación con el Gobierno. No obstante, la resolución del conflicto demostró que todavía había márgenes de acuerdo entre los llamados sectores reformistas y el poder político. Ciertamente, el nuevo marco normativo otorgó a los estudiantes voz y voto en todos los cuerpos directivos y un papel importante en la elección del rector y de los decanos de las facultades. La incorporación a la dirección de la Universidad de una generación de estudiantes fogueada en las luchas sociales y populares de esos años, más combativa y radicalizada que sus predecesoras, produjo un impacto directo en variados sectores políticos y sociales de las derechas que profundizaron sus críticas contra los gremios estudiantiles y parte del cuerpo docente, acusándolos de adherir a ideologías de izquierda.⁶⁰⁵

El recientemente creado Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad (MEDL) —agrupación de derecha y rama juvenil del Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad (Mondel)—, fundado en 1959, acusó a los comunistas “que ven lejos y trabajan siempre con doblez de intenciones” de apropiarse de un movimiento “loable” como era la aprobación de la Ley Orgánica universitaria. “Detrás de este movimiento (de cuya dirección se apoderaron) venía esa ‘extraterritorialidad’ a que nos referimos”, afirmaban.⁶⁰⁶ Apenas unos meses antes, el Mondel aseguraba que la movilización estudiantil había sido controlada por el Partido Comunista, que logró convocar a “100.000 personas preferentemente jóvenes y debidamente enfervorizadas”. Por otra parte, alertaba con preocupación del poder que los estudiantes controlados por el “comunismo” detentaban en la universidad, al punto que

⁶⁰⁴ *La Mañana* 13 de setiembre de 1958 y 15 de setiembre de 1958

⁶⁰⁵ Markarian, V., Jung, M. E., Wschebor, I., 1958... y París de Oddone, M. B. *La Universidad de la República. Desde la crisis a la intervención*. (Montevideo: Universidad de la República. Departamento de Publicaciones, 2010)

⁶⁰⁶ Ver Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad, setiembre 1959 (Carpeta n.º 479) Archivo Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII)

aprueban o desaprueban los planes de estudios, [...] seleccionan a los profesores y los obligan a marcharse o a que se les designe, [...] insultan, calumnian, destratan a profesores brillantes y hasta eméritos, en una verdadera subversión que no condice con nuestra tradición universitaria, que ha sido sorprendida con un sistema inesperado de terrorismo mental y de pistolero intelectual⁶⁰⁷

Asimismo, para gran parte del profesorado —mayoritariamente apegado a los partidos tradicionales y que hasta entonces había detentado el control de las decisiones de la Universidad— así como para los grupos que se fueron alineando con la derecha política en la coyuntura que se abría, este nuevo estado de cosas también produjo fuerte inquietud. Como veremos, la retórica anticomunista fue acompañada de prácticas violentas protagonizadas por movimientos derechistas que surgieron en el período y operaron en connivencia con figuras partidarias y la policía. Desde el ámbito gubernamental, en el marco de la estigmatización de la protesta social y el incremento de las medidas represivas para contenerla, el señalamiento de la institución como centro subversivo apuntalado por el incremento de la movilización estudiantil justificó los cada vez más frecuentes allanamientos a los locales universitarios por parte de las fuerzas policiales así como otras modalidades de represión. En el seno de la Universidad de la República, asimismo, expresiones disidentes se sumaron al coro de voces que denunciaba el rumbo que la misma tomaba y exigía al poder político una reacción enérgica ante esta situación al tiempo que ensayaba estrategias para ganar espacios de poder en sus órganos de conducción con el fin de revertir esta tendencia.

2. Los “demócratas” en defensa de la Universidad

La infiltración anarco-socialista-comunista ha logrado una gravitación tal en el mundo universitario, que los planes para combatirla y derrotarla requiere una organización, esfuerzos y medios que exceden las posibilidades del estudiantado y exigen un apoyo muy amplio con intervención de los Profesionales y del Profesorado, en una acción conjunta y combinada.⁶⁰⁸

Con estas afirmaciones, el MEDL se presentaba ante la opinión pública y definía sus líneas de acción orientadas a combatir al comunismo y a “recuperar la universidad para

⁶⁰⁷ Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad (Mondel). *Memorándum. El comunismo en el Uruguay*. Julio de 1959

⁶⁰⁸ Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad (MEDL). *Informe sobre la situación universitaria en el Uruguay*. 22 de enero de 1960, carpeta n.º 479. Asunto: Agrupaciones anticomunistas. Mondel. Archivo de la DNII

la democracia”.⁶⁰⁹ Este informe estaba firmado por los secretarios de relaciones Duncan Iribarne y el arquitecto Juan Ramón Menchaca. Este último, militante del Mondel, como se verá, fue fundador y activo militante del MDU, agrupación que tendrá una larga actuación opositora en el seno de la universidad. A un año de las movilizaciones estudiantiles y próximo a la realización de las elecciones universitarias al amparo del nuevo estatuto orgánico, las perspectivas del MEDL estaban lejos de ser optimistas al prever un triunfo de los grupos “disolventes” en esta instancia electoral. La causa radicaba en “el principio de la autonomía universitaria y las normas de la Constitución y las Leyes, [que] hacen que la opinión y la acción de los Gobernantes del País y de los Partidos Políticos Mayoritarios sean totalmente inoperantes”.⁶¹⁰

Recordemos que, como apunta Magdalena Broquetas, a comienzos de la década se forjaron alianzas entre viejas y nuevas fuerzas de derecha tanto en el espacio político partidario como en el de la movilización social.⁶¹¹ La novedad del período es la emergencia de una serie de movimientos y grupos que actuaron en el plano social para combatir la influencia de las fuerzas de izquierda en los sindicatos y en las agremiaciones estudiantiles. Algunas de ellas tomaron la denominación de “demócratas”, calificación que remontaba al final de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la Guerra Fría en clara identificación con el bloque occidental liderado por Estados Unidos, y respondieron a tendencias liberales conservadoras que manifestaron su rechazo a los totalitarismos de cualquier signo.

Con el fin de la guerra y la derrota del nazismo y el fascismo, el “totalitarismo” fue asociado automáticamente con el comunismo, apelativo que se utilizó en forma despectiva para referirse a orientaciones y grupos diversos como el movimiento sindical y estudiantil o sectores políticos partidarios que abarcaron un amplio espectro de fuerzas de izquierda, incluyendo el progresismo católico y sectores liberales de los partidos tradicionales. Las nuevas y también las viejas derechas analizaron los acontecimientos y las circunstancias de la realidad local bajo la óptica del esquema bipolar y, por tanto, se percibieron insertos en una guerra de escala mundial contra el avance comunista. Luego

⁶⁰⁹ En Mondel, Montevideo, setiembre de 1959, carpeta n.º 479. Asunto: Agrupaciones anticomunistas. Mondel. Archivo de la DNII

⁶¹⁰ Informe sobre la situación universitaria en Uruguay, setiembre de 1959, carpeta n.º 479, Asunto: agrupaciones Anticomunistas, MEDL. Archivo de la DNII

⁶¹¹ Broquetas, M., *La trama autoritaria*.

de la Revolución cubana la amenaza latente se volvió cercana y tangible, lo cual tuvo efectos en el discurso y en las prácticas de estos grupos.⁶¹²

De la mirada de organizaciones que surgieron a comienzos de la década, en el nivel universitario destacaron dos: el MEDL y un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina nucleados en torno a la publicación *Gallo*. Ambas agrupaciones compartieron diagnósticos e interpretaciones respecto a la situación universitaria, controlada, según decían, por fuerzas totalitarias. Esta situación cobraba particular relevancia dada la trascendencia que atribuían a la Universidad para la vida de la “nación y para su futuro”, una preocupación que entendían debía ser extensiva a toda la ciudadanía y no únicamente a los universitarios. De esa institución dependía, decían, el progreso en “el plano del conocimiento y de la técnica”. En ella se formaban las élites que dirigirían los destinos de Uruguay. Su misión, por tanto, era educar hombres con “formación moral y democrática”, con “claros conceptos de responsabilidad”, aptos para asumir un lugar primordial como “factores de perfeccionamiento de la vida de relación pública y privada”. La Universidad debía ser un ámbito de cultura abierto a todos los individuos sin distinción de clase, al servicio del pueblo, una garantía de democracia y de “filtro de todo extremismo totalitario”, concluía un manifiesto del MEDL.⁶¹³

Bajo el lema “nacional”, “universitaria” e “independiente”, *Gallo* se presentó como una publicación apartidaria y denunció la politización reinante en los centros de estudios.⁶¹⁴ Para *Gallo*, la Universidad fungía como grupo de presión al asumir un rol político ajeno a sus fines “científicos” y “profesionales”, transformándose en un “foco de agitación política e ideológica”. Dos factores, afirmaban, habían provocado este estado de cosas: la interpretación del concepto de la autonomía, que no era “casual e involuntaria, sino deliberada” y el movimiento reformista de 1918, inicialmente un levantamiento contra los abusos a la que era sometida la Universidad de la época, que por las ideas de la Revolución rusa y “un mesianismo declamatorio” devino un

⁶¹² Broquetas, M. *La trama autoritaria*; Aldrighi, Clara. “La estación montevideana de la CIA. Operaciones encubiertas, espionaje y manipulación política”. *La Lupa-Brecha*, 25/11/2005. Por una aproximación al uso y las disputas en torno al término democracia en el período estudiado ver Bruno Tamburi, Mauricio. “Usos y sentidos del concepto democracia en Uruguay (1958-1989)”, en *Políticas de la Memoria. Anuario de Investigación e Información del CeDInCI* (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), n.º 18, 2018/2019, pp. 209-221

⁶¹³ MEDL (Filial del Mondel). *Por la democracia. Contra el Comunismo. Sin terceras posiciones. El Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad, se dirige al Estudiantado Nacional proclamando los postulados fundamentales que constituyen la finalidad y la guía de acción* (Montevideo: Talleres Gráficos “Prometeo”, s.f. [ca. 1960]), s.p. [8h.]

⁶¹⁴ *Gallo*, n.º 1 (junio de 1960)

movimiento político que pregonó la “acción directa y la violencia”.⁶¹⁵ *Gallo* concentró su actividad en el desarrollo de una campaña de prensa dirigida a establecer una ‘base anticomunista’ dentro del movimiento estudiantil.⁶¹⁶ Pero no se limitó a aparecer como un libelo anticomunista sino que ostentó pretensiones culturales, como puede apreciarse en la elección del nombre de la publicación, homónimo a la revista impulsada por el poeta Federico García Lorca en Granada a fines de la década de 1920, y por la cantidad de artículos sobre temas literarios, cinematográficos y de cultura general que incluía en sus páginas.

Según datos de la propia publicación alcanzó amplia circulación al pasar de 1.000 ejemplares a un tiraje promedio de 15.000.⁶¹⁷ El público objetivo eran los estudiantes despolitizados, esa “mayoría silenciosa” que colmaba las facultades. Su primer número presentaba un diálogo imaginario con un estudiante recién ingresado a la vida universitaria a quien se le pintaba un panorama, al tiempo que se alertaba, caracterizado por las pretensiones de cooptación por parte de los gremios y las agrupaciones estudiantiles. Pese a su extensión, vale la pena su transcripción dado que resume a cabalidad la visión de éstos sectores de la militancia estudiantil y las distintas tendencias que en ella predominaban, da cuenta de sus estrategias y del lenguaje empleado en la época para calificar al “enemigo” al tiempo que transmite en buena medida el clima que se vivía en los centros educativos:

Comienza un curso. Para ti una carrera. No se sabe si la de la tortuga o la de la liebre.

Llegarás a tu Facultad. Tendrás las puertas abiertas de par en par. No te hagas ilusiones, siempre están ahí. Nadie te irá a recibir, total, pensarán algunos es un futuro enemigo. [...]

Ya te encuentras a gusto, pero... entonces... Criptocomunistas, reacción, fuerzas progresistas, católicos retrógrados y de los otros, orden anarquía, caverna, Hungría, trayectoria limpia, por la Paz, Fidel Castro, Huber Mattos, armamentismo, revisionismo, quinta columna, totalitario, moción mordaza, maniobreros, fascistas, imperialismo (de los dos, pero sobre todo uno).

Pensarás, es la guerra. No, son las elecciones. Entonces [sí] te van a ir a esperar a la puerta. Hasta puede que te digan que eres recuperable, o un puntal para la lucha por... y para...

Después de las primeras escaramuzas donde se estudian tus posibilidades políticas, pasas a una primera clasificación que te la hace el

⁶¹⁵ *Gallo*, n.º 4, diciembre 1960

⁶¹⁶ Van Aken, Mark. *Los militantes* 1990, pp. 228-229

⁶¹⁷ Cifras de Van Aken. También la revista publica estos números *Gallo*, n.º 3, agosto 1960

grupo del que resultes enemigo: Comunista o reaccionario. No hay que olvidar que puedes ser una de las dos cosas.

‘Ya eres un ‘votante’ o un ‘candidato’. Entonces entran a tallar los subgrupos. Es un pequeño reajuste para ver en qué grupo de dos bloques puedes ser introducido, en fin, no te preocupes mucho de esto porque son pequeños detalles.

¿Y el tercerismo? Bueno... terceristas somos todos... pues no faltaba más!

Ahora pensarás: ¿Por qué dirá éste todas estas cosas?

Las digo por algo. Yo sé que las sabes casi todas porque estuviste en Preparatorio y es la misma cosa. Es simplemente para pedirte un favor: Haz lo que quieras. Elige tu grupo y tu subgrupo. Postúlate como votante o como candidato. Vota porque tienes un amigo en una lista o porque quieres salvar al mundo. Pero insisto, por favor, las frases y palabras del párrafo cuarto y otras semejantes que tú conoces elimínalas de tu vocabulario. ¿Conoces algo más repugnante que las frases hechas[?]. Si lo haces prometo ir a buscarte a la Facultad para enseñarte donde está el bar y que inicies tu entrada convidando a un veterano con café.⁶¹⁸

Por su parte, el MEDL, al igual que *Gallo*, operó en el espacio estudiantil para combatir la penetración comunista en la enseñanza y con el propósito explícito de ganar a los jóvenes en la lucha contra el comunismo.⁶¹⁹ Fue dirigido por un “aparato” constituido por el Mondel, el Ateneo de Montevideo y el diario colorado *El Día*, portavoz del ala conservadora del batllismo liderada por los hermanos Batlle Pacheco. Denunciado por la FEUU y otras organizaciones de izquierda como un grupo de choque de ideología fascista, actuó como instrumento de la estación local de la CIA, que incitó su organización y le brindó financiamiento.⁶²⁰ Orientó sus actividades al reclutamiento de dirigentes y militantes anticomunistas en las facultades mediante campañas propagandísticas y la difusión de panfletos anticomunistas. Asimismo, no vaciló en apelar a la violencia y al enfrentamiento directo.

Protagonizó además varias acciones que tuvieron como epicentro a la principal casa de estudios. Así por ejemplo, en marzo de 1960, con motivo de la visita del presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, se produjeron incidentes en esa institución que activaron una campaña periodística contra sus autoridades al tiempo que ambientaron las acciones del MEDL. Pero el episodio más recordado y de mayor

⁶¹⁸ *Gallo*, n.º 1 (junio 1960)

⁶¹⁹ Mondel, setiembre de 1959 y *Memorándum sobre organizaciones extremistas*, julio de 1962, carpeta n.º 479. Archivo DNII

⁶²⁰ *Jornada*, FEUU, 26 de octubre de 1960. Sobre sus conexiones con la CIA ver Van Aken, M. *Los militantes*, Broquetas, M. *La trama autoritaria*

impacto fue el conocido como “asalto a la universidad”, producido en protesta a la reelección del rector Mario Cassinoni así como a la orientación general de la Universidad y de la FEUU.⁶²¹ En la madrugada del 5 octubre de 1960, mientras la gremial universitaria preparaba una huelga en reclamo de mayor presupuesto, un pequeño grupo de militantes del movimiento, portando armas, intentó ocupar el edificio donde funcionaban la Facultad de Derecho y las oficinas centrales. Los militantes de la FEUU, advertidos del operativo programado, repelieron el ataque. En esta oportunidad, como en otras, el MEDL contó con la complicidad de la institución policial y, particularmente, de su máxima jerarquía: el entonces coronel Mario Aguerrondo.⁶²² Jefe de Policía entre 1959 y 1963 y ascendido a general en 1964, Aguerrondo fue un militar de extracción blanca, católico y representante de la vertiente más conservadora y anticomunista de las FF. AA. Durante su gestión al frente de la Policía llevó a cabo la depuración de sus mandos, desplazando a los oficiales leales al Partido Colorado. También promovió la modernización de esa institución, gestionando mayores recursos y promoviendo la capacitación de oficiales a través de becas de adiestramiento en el exterior, en particular en Argentina.⁶²³

El MEDL tuvo, además, el respaldo de dirigentes políticos que alentaron sus acciones de diversos modos, como el senador por la fracción Unión Blanca Democrática (UBD) del PN y director del diario *El País*, Eduardo Rodríguez Larreta, quien estuvo implicado en el asalto. Ante estos hechos, los movimientos sociales, las autoridades universitarias, la oposición partidaria (batllismo del Partido Colorado y los partidos minoritarios de izquierda) responsabilizaron a través de la prensa y en el Parlamento a estos dirigentes de lo ocurrido. Aunque la organización estudiantil derechista eludió toda responsabilidad, algunos de sus integrantes —Pedro Torterolo (Agronomía),

⁶²¹ *Gaceta de la Universidad*, n.º 28 (setiembre de 1963)

⁶²² Asociación de Estudiantes de Medicina, *El Estudiante libre. Boletín extraordinario*. s.f. y *Acción*, 16 de diciembre de 1960

⁶²³ Mario Aguerrondo (1910-1977) fue militante de la corriente Herrerista dentro del Partido Nacional. En las elecciones de 1971 se postuló a la Presidencia de la República por ese sector, acompañado en la fórmula por Alberto Héber Usher. Presidió el Centro Militar en el período entre 1972 y 1977. Fue uno de los fundadores de la Logia Tenientes de Artigas, compuesta por militares de tendencia nacionalista. Esta organización clandestina tuvo un papel fundamental en la depuración de las fuerzas armadas y en la concreción del golpe de Estado de junio de 1973 que instaló un régimen cívico militar en Uruguay. Ver Broquetas, M. *La trama autoritaria*, op.cit. Por las denuncias sobre la connivencia policial y la responsabilidad de Mario Aguerrondo en el episodio reseñado ver por ejemplo: Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM). *El Estudiante libre. Boletín extraordinario*. Sobre Asalto a la Universidad, s.f., *Acción*, 16 de diciembre de 1960. “Más ilegalidades y castigos en la policía” y “Críticas a la gestión policial en Diputados”

Eduardo Miguel (Medicina), Raúl Maglione Garibaldi (Veterinaria), Héctor Franco (Odontología) y Carlos Bertolini (Preparatorios de medicina)— reconocieron en una conferencia de prensa en la sede del Círculo de Prensa haber participado en la refriega.⁶²⁴

Finalmente, digamos que el MEDL, al igual que otros grupos similares también autodenominados “demócratas”, durante esos primeros años de la década estuvo implicado en otros sucesos de similar calibre que involucraron a la Universidad de la República. Baste recordar el asesinato del profesor de historia Arbelio Ramírez en una balacera que se produjo luego de un acto en el Paraninfo de la Universidad donde el Che Guevara pronunció uno de sus primeros discursos tras el triunfo de la Revolución cubana. También en la oportunidad se acusó al líder ruralista Benito Nardone de ser inspirador del hecho y a la policía por amparar a los provocadores que se encontraban en las inmediaciones del edificio universitario en la zona céntrica de la capital uruguaya. Este suceso se sumó a las denuncias de torturas contra militantes políticos y sociales en dependencias policiales que pusieron en entredicho a la institución policial. Al respecto no hubo reacciones unánimes entre las derechas partidarias. Concretamente, las fracciones conservadoras del Partido Colorado tomaron distancia y expresaron su rechazo a los hechos acaecidos.⁶²⁵

Sin embargo, y pese a sus persistentes intentos, los agrupamientos “demócratas” no pudieron canalizar su oposición dentro de la FEUU y, menos aún, disputarle la conducción del estudiantado universitario. En consecuencia el MEDL redirigió sus esfuerzos a organizar a los jóvenes “antiizquierdistas” de enseñanza secundaria, con énfasis en las localidades del interior del país. A fines de octubre de 1960, en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, fundó la Confederación de Estudiantes del Interior (CEI) con el objetivo de formar un frente unido que combatiera el ascendente de la federación universitaria sobre la Federación de Estudiantes del Interior (FEI) y las asociaciones que la integraban.⁶²⁶ La CEI fue apoyada por *Gallo*, la prensa derechista de los partidos tradicionales, que en todo momento dio cobertura a esas expresiones

⁶²⁴ *El Debate*, 17 de octubre de 1960

⁶²⁵ *La Mañana*, 15 noviembre 1961, p. 4

⁶²⁶ *El País*, 22 de octubre de 1960 y *Gallo*, 3 de agosto de 1960. *NARA.RG* 59, Reporte semanal, 8 de febrero de 1963

“demócratas”, y por connotados dirigentes político-partidarios.⁶²⁷ Entre los miembros del Gobierno que manifestaron su apoyo a la iniciativa se destacó el entonces presidente del CNG, el ruralista Nardone —que actuaba como operador político de la CIA—, el doctor Carlos Stajano —exministro de Salud Pública (1959-1961), político del PN “comprometido activamente con la promoción de las organizaciones de padres de orientación democrática”, según un informe de la embajada estadounidense— y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Homero Martínez Montero.⁶²⁸ Las actividades de la gremial del interior fueron seguidas con expectativa por la diplomacia de EEUU en Uruguay. Un año y medio después de su fundación sus informes destacaban que esta era “una organización estudiantil secundaria fuerte y orientada democráticamente que ha tenido éxito en derrotar la influencia en el interior”.⁶²⁹

No es claro el tipo de vinculación existente entre *Gallo* y el MEDL. Pese a que la primera procuró desmarcarse del movimiento, algunos registros dan cuenta de que apoyó alguna de sus iniciativas, como la creación de la CEI.⁶³⁰ El director del periódico derechista, José A. Ferreira, fue acusado por la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) de haber participado en el asalto armado a la sede central de la Universidad y, por esa razón, convocado a declarar ante la asamblea general de ese gremio.⁶³¹ El historiador Van Aken es más contundente en relación a los presuntos vínculos entre ambas agrupaciones al afirmar que *Gallo* recibía financiamiento del MEDL. Coincidieron además en la coorganización de varios eventos y actos “por la libertad y la democracia” que nuclearon a las organizaciones autodenominadas “demócratas” que emergieron en esos primeros años de los sesenta.⁶³² Asimismo, el MEDL y *Gallo*

⁶²⁷ *El Bien Público*, 24 de agosto y 7 de noviembre de 1960, *Tribuna Popular*, 25 de octubre y 4 de noviembre de 1960

⁶²⁸ Ver Philip Agee, *La CIA por dentro*. También: Broquetas, M., *La trama autoritaria...* 83-4. RG59.SNF.1963.PD.BOX4084. 8 de febrero de 1963. Según este informe durante el tercer congreso de la CEI, realizado en Paysandú, participaron 180 delegados en representación de 57 asociaciones estudiantiles de secundaria. En él se destacó la presencia de Carlos Stajano, dirigente del sector UBD del Partido Nacional y ministro de Salud de la época

⁶²⁹ NARA. RG59 SNF.1963.PD.BOX 4084. 25 de mayo de 1963, *University student political situation at the beginning of the new school year* (marzo-abril, 1963)

⁶³⁰ *Gallo*, año I, n.º 3, agosto 1960

⁶³¹ *Gallo*, año I, n.º 4 (diciembre 1960)

⁶³² *El Día*, 2 de junio de 1961, p. 8 “El Congreso por la Libertad y la Democracia: solemne inauguración”. Realizado en el Ateneo, según la crónica periodística asistieron 400 delegados nacionales e internacionales y numeroso público. La comisión organizadora estuvo integrada por las siguientes organizaciones: Amigos de Cuba Libre, Alerta, Ateneo, Comités pro de Defensa de la Libertad y la Democracia, Federación de Estudiantes Demócratas del Este y del Litoral, Frente Revolucionario Democrático Cubano, Grupo Universitario Gallo, Juventudes Demócratas, Juventudes Uruguayas Libres,

desarrollaron variadas estrategias para debilitar la supremacía de la FEUU y alcanzar representación en los organismos directivos de la Universidad. Promovieron la creación de centros paralelos a los tradicionales adheridos a aquella, como el Centro de Estudiantes de Agronomía, rival de la histórica Asociación de Estudiantes de Agronomía (AEA-FEUU), que logró un representante en la Asamblea del Claustro de la Universidad, y una asociación calificada de “amarilla” —expresión utilizada en el ámbito sindical para referir a agremiaciones que defienden o trabajan para los patrones— que fue contendiente de la histórica Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM-FEUU).⁶³³

En otros casos, la disputa se produjo en el interior de las mismas agremiaciones de la FEUU, donde las listas derechistas llevaron a cabo intensas campañas para lograr mayorías con resultados infructuosos.⁶³⁴ Un ejemplo de ello fue la lista 44, que aglutinaba a estudiantes de “centro derecha” en el marco de la AEM. En las elecciones gremiales de julio de 1960 disputó con dos listas adherentes a la izquierda: una de tendencia moderada y otra que representaba a los comunistas. En la ocasión obtuvo un segundo lugar y logró 5 de los 13 directivos. Sin embargo, las fuerzas de izquierda hicieron frente común y los directivos de la 44 terminaron renunciado.⁶³⁵ En esta misma dirección iba el proyecto impulsado por estos grupos para instalar el plebiscito como mecanismo de resolución gremial. Argumentaban que las asambleas, donde una minoría politizada decidía en nombre de una mayoría de estudiantes, no eran representativas del sentir general del estudiantado.⁶³⁶ El historiador Van Aken apunta que las agrupaciones antiizquierdistas dirigieron sus campañas y desarrollaron diversas estrategias para lograr mayorías en los centros, pero sus intentos fueron “permanentemente frustrad[o]s por su incapacidad de montar empujes sostenidos capaces de poner a la izquierda a la defensiva de manera continuada”.⁶³⁷ Aun cuando la información disponible es insuficiente y fragmentaria, no es aventurado afirmar que estas expresiones gremiales tuvieron vinculaciones con el MEDL y otros grupos similares, engrosando las filas de

Movimientos para la defensa de la Libertad: Nacional, Nacional Femenino y Estudiantil, Organización Nacional de Uruguayos Demócratas y Unión Cristiana del Uruguay

⁶³³ *AGC*, 15 de octubre de 1959

⁶³⁴ *Gallo*, n.º 2, julio de 1960 (Van Aken 1990, p. 224)

⁶³⁵ *Gallo*, n.º 2 (julio de 1960)

⁶³⁶ *Gallo*, n.º 2 (julio de 1960)

⁶³⁷ Van Aken, M., óp. cit., p. 224

las fuerzas autodenominadas “demócratas” que actuaron en el período.⁶³⁸ Mientras tanto, para *Gaceta de la Universidad*, órgano oficial de la institución universitaria, estas agrupaciones, “a pretexto de defender la democracia” pretendían monopolizar la “única concepción legítima de la misma”. Y concluía, “no importa que reniegue del calificativo de fascista, no importa, incluso que ciertas significaciones del término no le sean estrictamente aplicables; en lo esencial, tales movimientos implican una radical negación de la democracia”.⁶³⁹

Con similares propósitos, en algunas facultades se reagruparon los estudiantes de los partidos tradicionales que habían perdido representación en la FEUU y, en consecuencia, su peso en los órganos de cogobierno universitario fue disminuyendo. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, jóvenes de los partidos tradicionales en vistas de “los últimos acontecimientos universitarios” y para devolver “la Universidad a su verdadera misión”, conformaron el grupo Acción Democrática, que pretendía reunir “bajo una bandera común los núcleos estudiantiles democráticos a efectos de presentar lucha a los sectores extremistas” que amenazaban “la independencia” de la Universidad. Señalaron entre sus principios en materia ideológica la defensa del sistema democrático representativo, de las normas de autodeterminación y de no intervención en el plano internacional —lo que constituía en América Latina “la violación más flagrante a este principio la intervención comunista en Cuba y la inadmisibles exportación de la [R]evolución cubana por el régimen castrista”— y la aplicación del mecanismo de plebiscito en la interna gremial para la definición de paros y huelgas.⁶⁴⁰

También al inicio de los sesenta y con propósitos afines, un grupo de docentes y egresados universitarios fundó el MDU. Algunas de sus figuras habían tenido una proficua labor en sus cuerpos deliberativos y directivos, como decanos o integrando los consejos directivos y los claustros (de la Universidad o de las facultades). El MDU incluyó a profesores y profesionales de distinta procedencia político-partidaria que

⁶³⁸ Ver Van Aken, M., óp. cit., p. 221

⁶³⁹ *Gaceta de la Universidad*, n.º 4 (diciembre de 1961)

⁶⁴⁰ *La Mañana*, 6 de diciembre de 1961, p. 3 Informaba la conformación de las siguientes comisiones y de sus integrantes: 1) Comisión de Asuntos Universitarios: presidente: José María Gamio; Graciela Duce, Elsa Izeta, Jorge Vedovelli; 2) Comisión de relaciones; Presidente: Luis A. Lacalle de Herrera; Elena Pdbielska, Juan Carlos Ramírez, Juan José Viacaba; 3) Comisión de Finanzas; presidente; Juan José Moratorio; Marta pollero, Fabian Melogno, Pablo Serrano; 4) Comisión de Prensa y Propaganda: presidente, Eduardo Ansuberro, César Abad, Mariana Tarnowska, Fernando Ramos; 5) Comisión de Organización interna: presidente, Domingo H. Cuadra; Gonzalo Regules, Carlos Sineiro, Román Scremini, 6) Comisión de Asuntos Político-Sociales: presidente, Luis Lamas; Juan Tafernaberry, Ana María Menéndez, José Crisci

compartían el rechazo por el rumbo “ideológico” que tomaba la institución universitaria. La información disponible respecto a su fundación, organización e integración es aún incompleta, pero hay indicios suficientes para afirmar que desplegaron una intensa actividad hasta comienzos de la década siguiente. Su presidente, Hugo Amorín, integró el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología (1944, 1946 y 1950), fue delegado al Consejo Central Universitario (1948-1951, 1951-1955) y decano de su Facultad entre 1955 y 1959, participando activamente en los debates en torno a la Ley Orgánica y marcando, como vimos, distancia con la movilización estudiantil y la presión ejercida sobre el Parlamento.⁶⁴¹ El arquitecto Juan Ramón Menchaca, secretario de propaganda, fue miembro de los órganos de cogobierno de la Facultad de Arquitectura, cofundador del Mondel e integrante del Frente Revolucionario Democrático pro Cuba. Aunque no hay evidencia suficiente que indique su filiación activa, permanecieron cercanos al MDU docentes de la Facultad de Ingeniería, como el decano Héctor Fernández Guido y el profesor Edelmiro Mañé que, como veremos, protagonizaron enconados enfrentamientos con el grupo de ingenieros reformistas y el Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura (CEIA-FEUU) en torno a la orientación académica y el control de esa Facultad.⁶⁴² Este grupo, que aún mantenía representantes en los consejos y claustros universitarios, fue perdiendo paulatinamente posiciones de poder en la interna universitaria.

Asimismo, a causa de la situación reinante a lo largo de la década, se produjo el alejamiento de un puñado de docentes de la Universidad, quienes con hondo resentimiento desplegaron desde otros espacios campañas furibundas contra ella. Uno de los casos más sonado en estos años fue el del profesor Edmundo Narancio, militante del PN, docente de historia nacional y americana en enseñanza secundaria y de la Facultad de Humanidades. En 1956, mediante el mecanismo de designación directa, sucedió al historiador argentino Emilio Ravignani como director honorario del Instituto

⁶⁴¹ Datos tomados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Proyecto de expansión y mejoramiento de la Universidad de la República”

⁶⁴² Las reconstrucciones de los datos del arquitecto Menchaca aparecen dispersos en las fuentes. Sobre su integración en órganos de cogobierno se han corroborado los siguientes datos: En las elecciones universitarias de 1963 fue electo representante por el orden de egresados al Consejo Directivo y a la Asamblea del Claustro de la Facultad. *Gaceta de la Universidad*, n.º 29 (octubre de 1963), ver también en Mazzini, Elena y Méndez, Mary, *Polémicas de Arquitectura en el Uruguay del siglo XX*, (Montevideo: CSIC/Udelar, 2011), p. 148 En 1969, en una entrevista realizada por el diario *La Mañana*, era presentado como integrante del Consejo de esa Facultad *La Mañana*, 12 de junio de 1969, pp. 12-13, ver: <http://concursos.fadu.edu.uy/index.php/concursos/sindicato-medico/> Sobre Mañé y Fernández Guido ver: Legajos de Edelmiro Mañé y Héctor Fernández Guido, Archivo Facultad de Ingeniería

de Investigaciones Históricas de esa Facultad. Aunque el nombramiento fue cuestionado por la delegación estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad y por algunos profesores que reclamaban la realización de un concurso de oposición, Narancio se mantuvo en el cargo por cinco años. Durante su gestión hubo varios desencuentros parte del cuerpo docente del Instituto, en particular con aquellos que pertenecían a la Sección Historia de la Cultura, puntal en la promoción de transformaciones historiográficas, dirigida por el historiador argentino José Luis Romero. Los impulsos renovadores de Romero fueron resistidos por Narancio, provocando rispideces con estudiantes y docentes que se fueron agudizando.⁶⁴³ Finalmente, a comienzos de la década, fue apartado de la dirección del Instituto, hecho que consideró como una usurpación. Desde ese momento se encargó, a través de las páginas del diario *El País*, de denunciar a la casa de estudios como una usina de la ideología comunista.⁶⁴⁴

El episodio alcanzó al Parlamento cuando el diputado herrerista Vidal Zaglio pidió informes al CDC sobre lo acontecido. Basaba su solicitud en argumentos que, como vimos, eran compartidos por el amplio espectro derechista: la Universidad al abusar de su autonomía se había convertido en un Estado dentro de otro. “Es un Vaticano enclavado en la República Oriental del Uruguay” que detentaba una especial “extraterritorialidad”, decía Vidal.⁶⁴⁵ La trayectoria posterior de Narancio lo mantuvo cercano a las derechas de la época: en 1969 fue propuesto para ocupar el cargo de rector de la UN y, un lustro después, en 1973, el régimen dictatorial lo nombró ministro de Educación y Cultura y rector interventor interino de la Universidad.⁶⁴⁶

Pese a no obtener los resultados esperados en la disputa con la FEUU, los agrupamientos “demócratas” no cesaron en sus sistemáticas denuncias sobre el estado de la Universidad y encontraron en la prensa de derecha (vinculada al herrerismo, al coloradismo independiente y el batllismo conservador) un canal siempre abierto para replicar sus planteos, que contribuyeron a generar una opinión y un clima contrario a aquella. Un ejemplo fueron los artículos publicados en octubre de 1960 en el marco de las intensas movilizaciones por el presupuesto universitario que habían motivado una

⁶⁴³ Sobre el conflicto con Narancio en la Facultad de Humanidades ver: Zubillaga, Carlos. *Historia e historiadores en el Uruguay del siglo XX*, (Montevideo: Librería de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2002) pp. 179-191

⁶⁴⁴ Legajo de Edmundo Narancio, Archivo de la FHCE

⁶⁴⁵ Ver *DSCR*, 9 de mayo de 1962, p. 131 y *Actas CDC*, 13 de junio de 1962, pp. 787-792

⁶⁴⁶ Acerca de su candidatura a rector de la UN ver por ejemplo *La Mañana. Edición del Interior*, 19 de marzo de 1970

serie de manifestaciones, huelgas y ocupaciones, agravando las tensiones entre el Gobierno y autoridades universitarias.⁶⁴⁷ Tanto representantes del Poder Ejecutivo como las fracciones derechistas responsabilizaron a la FEUU de los incidentes ocurridos, acusándola de adherir a los “postulados de la revolución fidelista”.⁶⁴⁸ Como en otras ocasiones, los periódicos afines a las derechas partidarias, particularmente aquellas vinculadas al Partido Nacional, coincidieron en develar la existencia de un plan digitado por la “subversión marxista” que incitaba las “violentas manifestaciones juveniles” con el propósito de provocar el choque con la policía, el “derramamiento de sangre y obtener muertos y heridos que puedan servir de bandera de reivindicación”.⁶⁴⁹ *Tribuna Popular* se lamentaba de las implicaciones del conflicto universitario, sobre todo, de sus efectos adversos sobre los jóvenes uruguayos hasta entonces amantes de la libertad y respetuosos de los “grandes bienes jurídicos”. Concluía, pues, que:

por un problema secundario, de carácter cuantitativo y fácil arreglo futuro, se arroja la juventud a una huelga brutal [...] ocupando la Universidad, incitando a los estudiantes al delito y perturbando la tranquilidad pública. Ejemplo también de las posibilidades de una propaganda llevada con método y de la eficacia de una adecuada filtración de agentes, lo constituyen los argumentos esgrimidos. Una juventud, apasionada por la libertad y respetuosa de los grandes bienes jurídicos en general, como lo es la nuestra, ha salido a la calle con el grito de “al paredón” utilizado por quienes asesinan al por mayor tras la careta de una revolución popular. Quienquiera que con los antecedentes de esta juventud estudiantil uruguaya hubiera vaticinado tales hechos habría sido considerado un anormal. Y sin embargo, la propaganda ha llevado a nuestra juventud, o al menos a una parte de ella, a esta situación vergonzosa⁶⁵⁰

Para poner fin a esta situación convocaban a la masa estudiantil, “mayoría silenciosa” según las expresiones de esa época, a hacer sentir su voz y a participar en las asambleas a la vez que celebraban los esfuerzos de los grupos “demócratas” por conformar un movimiento estudiantil alternativo en los liceos del interior.⁶⁵¹ Denunciaron sistemáticamente la persecución a la que eran sujetos los profesores y estudiantes “demócratas” por la mayoría “comunista”, reclamando al Gobierno el

⁶⁴⁷ Markarian, V., y otros 1958..., p. 142

⁶⁴⁸ *Tribuna Popular*, 25 de octubre de 1960, p. 3

⁶⁴⁹ *El Bien Público*, 24 de agosto de 1960, p. 3

⁶⁵⁰ *Tribuna Popular*, 4 de noviembre de 1960

⁶⁵¹ *Tribuna Popular*, 7 de noviembre, p. 3

endurecimiento de las medidas ante esta situación.⁶⁵² Un año más tarde, el diario colorado *El Día* resumía con claridad esta visión de la Universidad compartida por este variado espectro de fuerzas derechistas:

Quienes conscientes de su responsabilidad como universitarios, desearían ver nuestros centros de estudio, ocupando el lugar y cumpliendo la misión que dentro de la sociedad les corresponde, no pueden sino ver con preocupación desvirtuada su finalidad y propósitos, por la acción de elementos extremistas.⁶⁵³

Sin embargo, el articulista del emblemático diario batllista, acaso por de la herencia republicana y liberal de su sector, parecía obligado a aclarar que su “oposición” a las “directivas actuales del [r]ector, así como del orden estudiantil”, no debía interpretarse como una reacción ante la filiación socialista de aquel o a la presencia de “anarquistas” en el movimiento estudiantil. Lo que no era admisible, en su opinión, “es que hagan política socialista desde la Universidad, y pretendan transformar a ésta, no solo en un foro propagandístico de su ideología, sino también en un instrumento dócil de la misma”. Era esta situación la que contravenía las “normas de autonomía e independencia tan ampulosamente proclamadas en la víspera”; verdadera razón de su crítica, declaraba. Digamos que para el batllismo, en este caso su sector conservador nucleado en torno a *El Día*, era extremadamente difícil renegar del legado reformista universitario que sentía como propio y que, en su visión, había contribuido a plasmar. En ese sentido, a diferencia de sus pares del Partido Nacional, su discurso en este período fue más moderado y estuvo orientado a alertar sobre el peligro de que los claustros se transformaran “en prisioneros del orden estudiantil, que mediante la amenaza de desatar huelgas somete a todos a su voluntad”.⁶⁵⁴

Es claro que el progresivo resquebrajamiento de los vínculos entre la Universidad y el poder político, el desplazamiento de los sectores más moderados o directamente alineados con las derechas de sus órganos de conducción, el peso del movimiento estudiantil cada vez más radicalizado y el fracaso de las llamadas organizaciones “demócratas” para disputar espacios de poder a la FEUU alentaron la percepción de que no era posible cambiar el rumbo que tomaba la institución universitaria. Eso explica en gran medida la emergencia de los planteos de crear otros centros de educación superior

⁶⁵² *Actas CDC*, 13 de junio 1962, pp. 787-92

⁶⁵³ *El Día*, 12 de marzo de 1961, p. 7

⁶⁵⁴ *El Día*, 12 de marzo de 1961, p. 7

que tuvieron amplio eco entre 1960 y 1961 en diversos medios de prensa derechista (*El Plata, Tribuna Popular, El Debate, El País*).

El diario blanco *El Plata* afirmaba sin ambages que mientras la Universidad se mantuvo “amplia”, “ecléctica” y “liberal” no fue necesario pensar en otras universidades. Pero estas circunstancias habían variado radicalmente debido a que la dirigencia universitaria había “convertido la vieja institución en un foco de perturbación, abandonada a una orientación extremista repudiada por la inmensa mayoría de la opinión del país”.⁶⁵⁵ *Tribuna Popular*, también afín al Partido Nacional, justificaba su creación en el fracaso de los “mecanismos constitucionales y legales” del Estado para asegurar el normal funcionamiento y la correcta orientación de los servicios universitarios así como para contener la infiltración de “tendencias extrañas a la enseñanza” y “reñidas con el espíritu de las instituciones”.⁶⁵⁶ El periódico herrerista *El Debate*, en esa misma línea, afirmaba que era una “necesidad imperativa” frente al cuadro desolador que presentaba la Universidad de la República “en manos de quienes la utilizan como medio proselitista, sembrando en nuestra juventud postulados del marxismo, en vez de inculcar la simiente generosa de la democracia”.⁶⁵⁷

En ese marco, dirigentes de las derechas partidarias, especialmente del sector herrerista del Partido Nacional en alianza con sectores del clero uruguayo, impulsaron la creación de una “universidad libre” (como en Argentina, privada y católica), que eliminara el monopolio de la educación superior por parte del Estado y de la Universidad de la República. La iniciativa expresaba claramente la intencionalidad político-ideológica de los sectores nacionalistas mayoritarios en el Gobierno que buscaban una manera de contrarrestar la influencia de la izquierda en la conducción universitaria. Como analizamos más en detalle, el proyecto no tuvo andamio, pero el interés permaneció latente y estos intentos fueron retomados a mediados de la década del sesenta.

Es claro que en este período el Partido Nacional fue quien se presentó como el más férreo y sistemático opositor a la orientación que tomaba la Universidad. Además de las notas periodísticas y del proyecto de universidad privada y católica, sus legisladores expresaron sus discrepancias en el ámbito parlamentario e intentaron implementar

⁶⁵⁵ *El Plata*, citado por *Tribuna Popular*, 12 de noviembre de 1960, p. 3

⁶⁵⁶ *Tribuna Popular*, 16 de noviembre de 1960, p. 3

⁶⁵⁷ *El Debate*, 16 de diciembre 1960, p. 3

mecanismos de freno a la influencia izquierdista. Por ejemplo, en agosto de 1963, el senador Martín Echegoyen cuestionó en el Senado las duras sanciones impuestas a los estudiantes involucrados en el asalto armado al edificio central de la Universidad. Un mes más tarde, en vísperas de la realización de las elecciones universitarias, se produjeron en el Parlamento encarnizados debates a causa de la extensa exposición de censura promovida por un diputado del sector nacionalista UBD, José Manuel Urraburu. El representante blanco enumeró entonces una larga lista de acusaciones que apuntaban a demostrar la dirección ideológica afín a la izquierda que primaba en esa institución y que coartaba la libertad de expresión de las disidencias. Estas acusaciones iban desde el señalamiento del dominio que ejercía la FEUU en los organismos de cogobierno, la vinculación de esta gremial con organizaciones internacionales del bloque socialista, hasta cuestionamientos a la adjudicación y usufructo del régimen de dedicación total de algunos docentes que afirmaban no tenían méritos suficientes, como era el caso del matemático Rafael Laguardia, perteneciente al grupo de ingenieros reformistas, docentes y fundador del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería.

La diplomacia estadounidense dio cuenta de estas polémicas en su reporte semanal, destacando cómo en la oportunidad representantes “demócrata cristianos, colorados y comunistas” habían salido al cruce de estas declaraciones en un claro gesto de apoyo a la institución universitaria.⁶⁵⁸ El diputado colorado Aquiles Lanza, en un largo alegato, señalaba enfáticamente que “lo que le molesta al señor diputado Urraburu es la participación del orden estudiantil en la dirección de la Universidad”.⁶⁵⁹ *Gaceta de la Universidad* celebraba “no solo [las] expresiones de apoyo [a la Universidad], en sala, sino [la aprobación de] una resolución que avala la actuación de su gobierno legítimo y representativo”. Ciertamente las intervenciones de los colorados de la lista 15, Américo Plá Rodríguez, Julio María Sanguinetti o Aquiles Lanza, de los comunistas Rodney Arismendi o del ingeniero José Luis Massera y del diputado por el Movimiento Revolucionario Oriental Ariel Collazo constituyeron un espaldarazo a la actuación de la casa de estudios. *Gaceta de la Universidad* dio cuenta además que en las elecciones, realizadas entre agosto y setiembre con procedimientos iguales a los de los comicios

⁶⁵⁸ NARA.RG 59. Empajada de Montevideo a Departamento de Estado. Joint Weeka, n.º 36, 7 de setiembre de 1963 y *Gaceta de la Universidad*, n.º 29 (octubre de 1963)

⁶⁵⁹ *Gaceta de la Universidad*, n.º 29 (octubre de 1963)

nacionales, hubo un apoyo mayoritario a las autoridades universitarias; fueron muy pocas las listas “que postulaban discrepancias terminantes” con ellas y en la mayoría de los casos fueron derrotadas.⁶⁶⁰

Una interpretación distinta de estos resultados hacían los medios diplomáticos estadounidenses en Uruguay, para quienes estos indicaban que “si bien la orientación política radical básica de la universidad probablemente se mantendrá sin cambios, algunas incursiones alentadoras contra la influencia comunista parecen haberse realizado en varias facultades”.⁶⁶¹

La gravitación de la diplomacia de EEUU

La diplomacia estadounidense compartió con oscilaciones las preocupaciones derechistas sobre el grado de politización de la Universidad uruguaya. A ellas se agregaba la inquietud generada por las crecientes posturas antiimperialistas que asumió una buena parte de los universitarios en esta etapa, particularmente a partir de los avatares del proceso cubano y de su inscripción en el campo socialista. Se explica así el recurrente interés de la embajada por testear las repercusiones de la expulsión de Cuba de la OEA o, más tarde, el conflicto en República Dominicana que desembocó en la intervención militar estadounidense en ese país caribeño. Durante estos años fueron frecuentes los contactos con docentes y estudiantes que consideraban menos hostiles y dispuestos al diálogo, al mismo tiempo que se daba apoyo activo a la organización de las agrupaciones “demócratas” en sus intentos por disputar posiciones en la interna universitaria. En los habituales reportes de esta oficina diplomática se puede observar la atención con que se siguió tanto los acontecimientos al interior la casa de estudios como las derivas ideológicas y la radicalización de las prácticas de la FEUU.

A comienzos de 1963 los documentos informaban sobre la elección de autoridades en las asociaciones estudiantiles que habían tenido lugar el año anterior; un evento que constituía un anticipo de lo que podía ocurrir en los comicios generales de renovación de los cargos directivos en la Universidad. Se destacaba entonces la baja participación estudiantil, que no alcanzaba el 30 %, y facilitaba el triunfo de las agrupaciones de izquierda generalmente mejor organizadas. En esa instancia se confirmó el predominio

⁶⁶⁰ *Gaceta de la Universidad*, n.º 29 (octubre de 1963)

⁶⁶¹ *NARA.RG 59*. Embajada de Montevideo a Departamento de Estado. Joint Weeka, n.º 36, 7 de setiembre de 1963

de los terceristas (una coalición que incluía a socialistas, anarquistas, católicos y estudiantes izquierdistas independientes) por sobre los fracciones comunistas que participaron con lista propia logrando “por lo menos una minoría” de las directivas gremiales. En Arquitectura y Medicina se había afianzado la coalición tercerista con una mayoría de estudiantes católicos, en Derecho, Agronomía e Ingeniería triunfaron los terceristas de perfil “más moderado”. Más alentador, tal vez, fue el resultado en las Facultades de Ciencias Económicas, Odontología y Veterinaria, donde “por primera vez en varios años”, tras una ajustada victoria, los gremios pasaron a ser controlados por “moderados políticos”, según la clasificación de los representantes diplomáticos.

Se esperaba, además, que se produjeran nuevos avances de las fuerzas autodenominadas “demócratas” para el año que comenzaba ya que estas planeaban incrementar su participación en las elecciones, haciendo gala de un discurso “humanista” que enfatizaba los “ideales democráticos y la responsabilidad estudiantil”, se señalaba. La documentación referida también resaltaba muy especialmente la manera en que las distintas agrupaciones se fueron posicionando respecto a la Revolución cubana. Celebraron por ende que las fuerzas comunistas no hubieran podido frenar las resoluciones de condena a Fidel Castro en Agronomía e Ingeniería, que por otra parte contravenía una “declaración pro cubana” emitida en octubre de 1962, en medio del pico de la crisis de los misiles cubanos, por el CDC.⁶⁶²

En estas condiciones, en setiembre de 1963, a un lustro de aprobada la nueva ley orgánica, se llegó a la instancia electoral para renovar la integración de los cuerpos directivos y elegir el nuevo rector. Con los resultados a la vista, la diplomacia estadounidense expresó satisfacción y se mostró optimista ante los ligeros avances de las facciones anticomunistas, particularmente en el orden de egresados, que “con mucho esfuerzo y organización” obtuvieron representación (minoritaria vale decir) en los consejos y claustros universitarios.⁶⁶³ Según consta en los documentos se consiguieron puntos de apoyo en las Facultades de Agronomía, Odontología y Arquitectura. Eran triunfos “pequeños” pero “reales”, decían. En particular, produjo amplia expectación la presencia de dos militantes anticomunistas en Arquitectura (uno de ellos seguramente

⁶⁶² NARA RG59.SNF.1963.PD.BOX 4084 25 de mayo de 1963, University student political situation at the beginning of the new school year (marzo-abril, 1963)

⁶⁶³ NARA RG59.SNF.1963.PD.BOX4083 Informe de Embajada de EEUU a Departamento de Estado sobre varios asuntos, entre ellos los resultados de las elecciones universitarias. [14] setiembre 1963

era Juan Ramón Menchaca), donde la influencia comunista era particularmente fuerte. La actuación los representantes “demócratas”, destacaba el reporte, podía contribuir a frenar “las prácticas perversas tales como la persecución comunista de profesores no afines a la izquierda”.⁶⁶⁴ Sin embargo, existía la conciencia de que esos logros eran insuficientes para modificar la orientación del gobierno universitario, que vaticinaban se mantendría en una línea “radical”. Pero también se consideraba que las “posiciones que ganaron no son solo una molestia, sino que proporcionan un núcleo en torno al cual se puede reunir a otros elementos democráticos”.⁶⁶⁵

En este escenario, hasta mediados de la década el personal diplomático promovió contactos, referidos anteriormente, con dirigentes estudiantiles de la línea moderada, según la calificación del historiador estadounidense Mark Van Aken, con reconocidos docentes como el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Israel Wonsewer, al tiempo que explicitaron su apoyo al nuevo rector, el médico ginecólogo Juan José Crottogini (sucesor del socialista Mario Cassinoni). El propósito era mantener abierto canales de diálogo que permitieran atemperar las posiciones consideradas más radicales e intransigentes.⁶⁶⁶ Van Aken, becado por la fundación Fulbright, durante su estadía en Montevideo tuvo un papel clave en esta etapa en la que actuó como informante calificado y contribuyó a facilitar el vínculo con parte de la dirigencia estudiantil. Con mezcla de asombro y satisfacción, representantes de la diplomacia enfatizaban la buena acogida y la “actitud completamente cooperativa” de la FEUU hacia el investigador. Tanto así que, bajo el patrocinio de la gremial universitaria, se realizó un conferencia de prensa en la cual Van Aken presentó su proyecto de investigación y que tuvo gran repercusión en la “prensa democrática”.⁶⁶⁷

A estos resquicios de esperanza rápidamente siguió el desencanto. Al calor de una crisis nacional que se profundizaba y de las repercusiones de la ruptura de relaciones con Cuba por parte del Gobierno uruguayo, las izquierdas, fundamentalmente una nueva coalición de socialistas y comunistas, lograban imponerse en la dirección universitaria. De acuerdo con la información disponible, a partir de 1964 los representantes

⁶⁶⁴ NARA RG59.SNF.1963.PD.BOX4083 Informe de Embajada de EEUU a Departamento de Estado sobre varios asuntos, entre ellos los resultados de las elecciones universitarias. [14] setiembre 1963

⁶⁶⁵ NARA.RG59. Informe de Embajada de EEUU a Departamento de Estado sobre varios asuntos, entre ellos los resultados de las elecciones universitarias. [14] setiembre 1963

⁶⁶⁶ Ver Van Aken, M. *Los militantes* op.cit.

⁶⁶⁷ NARA. RG50 Box 4083 s.f. Press conference for Fulbright scholar

anticomunistas o calificados como “demócratas” poco a poco fueron desplazados en las distintas instancias electorales. Ese año fueron derrotados en facultades importantes como Derecho, donde triunfaban los estudiantes afines a la izquierda católica, o Ciencias Económicas, que hasta entonces se había mantenido bajo el control de “estudiantes políticamente moderados”, en su mayoría afines a los partidos Blanco y Colorado, y en la cual por primera vez vencían los comunistas y la izquierda católica.

Las causas de esta derrota fueron atribuidas por un “estudiante del grupo perdedor” en comunicación con un “oficial de la embajada” a la apatía de la mayoría de los estudiantes “demócratas” y a las divisiones que produjo en la coalición de blancos y colorados los debates en torno a la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, reflejando la escisión que el tema generó entre estos partidos en el Consejo Nacional de Gobierno.⁶⁶⁸

En intercambios con el embajador, Van Aken opinaba que no había posibilidad de que la acción de EEUU contribuyera con éxito a la construcción de un triunfante movimiento estudiantil “democrático” o lograra incidir en la FEUU para reducir la influencia comunista en ella.⁶⁶⁹ La embajada, por ende, que en adelante calificó y se refirió a la gremial con términos como “extremista” o “radical”, recomendaba dirigir los esfuerzos hacia el estudiantado de secundaria. La situación fue evaluada de manera similar por la estación local de la CIA. El exagente Philip Agee declaraba que a causa del fracaso en la promoción de líderes “demócratas” se resolvió que la estación concentrara sus operaciones en enseñanza secundaria:

Las operaciones estudiantiles han tenido poco éxito en los últimos años, a pesar de la generosa promoción que se ha hecho de los líderes no comunistas para asumir en la FEUU. Recientemente la estación recomendó, y el cuartel general concordó, que las operaciones estudiantiles debían tener un nuevo enfoque concentrado en las escuelas secundarias más que en la universidad, por la teoría de que el adoctrinamiento a una edad más temprana podría traer mejores resultados después, cuando los estudiantes van a la Universidad.⁶⁷⁰

Agreguemos que la convicción de que la batalla en la interna universitaria estaba perdida se expresaba en un momento en el cual el “asalto” a la Universidad y la

⁶⁶⁸ NARA.RG59.Box 2790 Documento 98. Embajada de Montevideo al Departamento de Estado, Joint Weeka n.º 40, 3 de octubre de 1964

⁶⁶⁹ NARA.RG 59. Box 2790 Memorando de conversación entre el embajador Hoyt y Mark Van Aken y DCM, William T. Briggs, 11 de agosto de 1965

⁶⁷⁰ Agee, Philip. *La CIA por dentro. Diario de un espía*. (Buenos Aires: Sudamericana, 1975), p. 300

actuación de los grupos estudiantiles denominados “demócratas” como el MEDL volvían a la palestra pública a raíz de las sanciones que los Consejos Directivos de las Facultades de Medicina y de Agronomía aplicaron a los estudiantes que habían participado en el episodio. En particular, la suspensión por 15 años en su calidad de estudiante a uno de los ocupantes, Pedro Hugo Torterolo, desató airadas reacciones en la prensa derechista.⁶⁷¹

Una vez más la Universidad, por medio de una de sus dependencias ha adoptado una medida sin antecedentes en nuestro medio y con clara transgresión del sistema normativo nacional [...] dicho proceso muestra la dualidad de criterio de las autoridades universitarias. Frente al caso de ciertos profesores de Bellas Artes con responsabilidad en el asalto a un Banco, no supieron adoptar una posición enérgica cuando estaban en juego muy serios valores morales comprometidos. La misma actitud equívoca toman ante los desplantes reiterados de los dirigentes de la FEUU y sus adláteres. Dicha ambivalencia de conducta motiva la más enérgica censura de la opinión pública que no habrá de olvidar actitudes reñidas con los sentimientos más caros que impulsan a esta última⁶⁷²

Pese a las noticias poco alentadoras, la oficina diplomática en Montevideo mantuvo su voluntad de dialogar con dirigentes estudiantiles, autoridades universitarias y docentes o investigadores durante todo el año 1964 y el siguiente. También hubo contactos con sectores de las derechas que veían restringidas sus capacidades de acción al interior de la casa de estudios y buscaban formas de intermediación y apoyo. Así, en un ambiente de creciente polarización, en noviembre de 1965 el secretario del MDU, Juan Ramón Menchaca, acompañado de otros universitarios, varios de ellos afines a la derecha radical, integrantes de la mayoría del Consejo de la Facultad de Ingeniería — entonces en pleno conflicto con los reformistas y los estudiantes— se reunió con el primer secretario de la Embajada de Estados Unidos para intercambiar opiniones sobre el agitado clima político que prevalecía en la Universidad y solicitar apoyo en su combate contra el comunismo. La evidencia documental disponible hasta el momento permite afirmar que una buena parte de ellos tuvo contactos más o menos formales con los movimientos de derecha. Además de Menchaca, la comitiva estuvo integrada por el doctor Alberto Roca (exprofesor de la Facultad de Derecho), abogado defensor de los estudiantes que participaron del “asalto” y más tarde vinculado a un grupo nacionalista

⁶⁷¹ Ver recortes prensa Archivo DNII

⁶⁷² *El País*, 13 de setiembre de 1965

nucleado en torno al periódico *El Federal*, el profesor Mañé (Facultad de Ingeniería) docente “demócrata” enfrentado a los reformistas en Ingeniería y Hugo Amorín (exdecano de Facultad de Odontología), perteneciente al MDU. Del resto de los participantes no disponemos de información.

El grupo de docentes, egresados y estudiantes que participó del encuentro volvió a insistir en que una minoría de activistas estudiantiles de tendencia comunista o de “extrema izquierda” había alcanzado el control en los organismos de decisión tanto en algunas facultades como a nivel central. Como en oportunidades anteriores, responsabilizaban a la Ley Orgánica de 1958 de esta situación y agregaban que la mayoría de los profesores no expresaba su abierta oposición a los estudiantes por temor a la injerencia que estos detentaban en la designación de los cargos docentes. En el mismo memorándum, pero en una nota aparte, el secretario de la embajada dejó asentadas sus impresiones sobre esta conversación, señalando que de los once profesores unos pocos podían considerarse lo que calificaba como “extremistas de derecha”. De acuerdo a su percepción, la mayoría adhería a posturas democráticas, expresando una sincera inquietud por el deterioro de la situación política y de los estándares académicos de esa casa de estudios.⁶⁷³

El interés de la embajada por lo que ocurría en ámbitos universitarios, tal como atestiguan las fuentes, permaneció durante todo el período que aquí se estudia. Desde mediados de la década se evidencia cómo creció la alarma por la agudización de los alineamientos antiimperialistas, particularmente al interior de la FEUU. En ese contexto se informó con preocupación acerca de las sospechas en torno a varias iniciativas a causa presuntas vinculaciones con el Proyecto Camelot; entre las cuales se mencionaban el intento de boicot al *Seminario sobre Élités* y la participación del sociólogo Seymour Lipset o la resistencia a la instalación en el quinto piso de la Facultad de Ingeniería del Centro Interamericano para la Mejora de las Ciencias Básicas organizado por la OEA.⁶⁷⁴ Los oficiales estadounidenses temían, no sin razón, que la protesta estudiantil se extendiera “en cualquier momento” e incluyera “ataques a los programas de USAID y Fulbright” en la Universidad. “Nuestros débiles contactos se tornarán aún más

⁶⁷³ NARA.RG 59. Memorandum of conversation, 25 de noviembre de 1965

⁶⁷⁴ Para un análisis detallado de estos episodios ver libro de Markarian, V. en prensa. Sobre boicot a seminario Lipset ver: NARA RG59. BOX2791, Joint Weeka, n.º 23 y 12 de junio de 1965 y Joint Weeka n.º 33. 21 agosto de 1965, sobre el Centro Interamericano para la Mejora de las Ciencias Básicas de la OEA, ver Joint Weeka n.º 30, 31 de julio de 1965

difíciles”, agregaban como una posible consecuencia de ese aumento de la conflictividad.⁶⁷⁵

Paralelamente, y mientras se discutía la reforma constitucional que fue aprobada en las elecciones de 1966, se reanudó la polémica acerca de la instalación de una universidad privada. La FEUU denunció ante el CDC las gestiones que estaban realizando representantes del clero uruguayo para instalar con apoyo económico de la Alianza para el Progreso un centro de educación superior.⁶⁷⁶ La documentación diplomática desliga el asunto de dicho proyecto pero confirma su recurrente interés en crear universidades privadas, dando cuenta de los intercambios con sectores del catolicismo uruguayo por este tema.⁶⁷⁷

Todo esto ocurría en un escenario nacional marcado por el agravamiento de la crisis económica y por el aumento de la protesta social contra las sucesivas medidas económicas de corte fondomonetarista aplicadas por los Gobiernos blancos. A mediados de la década, los estudiantes junto a otros grupos universitarios se sumaron a la creciente movilización social de oposición al Gobierno. Se incorporaron, además, a los persistentes intentos de unificación sindical que se remontaban a la década del cuarenta y que finalmente dieron sus frutos en estos años. De hecho, una de las constantes alertas de los reportes diplomáticos fue el reforzamiento de los lazos entre el movimiento sindical fortalecido y la FEUU. Los hitos clave en este largo camino hacia la conformación de un frente sindical fueron la creación de un organismo de coordinación a nivel nacional en 1964, la realización del Congreso del Pueblo en 1965 que nucleó a diversos actores sociales; acontecimientos que fueron coronados con la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en 1966.

Por su parte, la izquierda venía ensayando desde principios de la década distintas alianzas electorales que aunque no tuvieron el éxito esperado en votos fueron marcando el camino hacia la conformación de una alianza más amplia que finalmente se tradujo en la creación del Frente Amplio (FA) en 1971. También finalizando la década se crearon organizaciones que apostaron a la lucha armada para lograr la transformación social y

⁶⁷⁵ NARA RG59.BOX2791, 31 de julio de 1965. Joint Weeka, n.º 30

⁶⁷⁶ *Actas CDC*, 1 de setiembre de 1966, p. 1253. Cabe señalar que la Constitución de 1967 estableció en su artículo 69 la exoneración de impuestos nacionales y municipales a las instituciones de enseñanza privada “como subvención por sus servicios”

⁶⁷⁷ NARA. RG 59. Carta de John L. Topping al Jefe de Asuntos Políticos de Uruguayos, Departamento de Estado, George H. Thigpen, 26 de enero de 1967

disputaron espacios a la izquierda tradicional en los movimientos sociales. Esto se reflejó en el ámbito estudiantil al incorporarse a la militancia grupos más radicales, todavía inorgánicos, que se unieron a los viejos sectores anarquistas y trotskistas en minoría desde comienzos de los sesenta y pugnar por el control de la FEUU a los comunistas y socialistas.⁶⁷⁸

3. La pérdida del último “bastión democrata” en la Universidad

En ese contexto, la elección en octubre de 1966 del ingeniero Óscar J. Maggiolo como rector de la Udelar contribuyó a caldear los ánimos de los sectores derechistas. Ingeniero industrial, director del Departamento de Mecánica de los Fluidos del Instituto de Máquinas de la Facultad de Ingeniería y consejero de su facultad en varias ocasiones, Maggiolo pertenecía al grupo de ingenieros que bregaron por la reformulación de la enseñanza e investigación de su disciplina. Junto a otros destacados docentes e investigadores impulsó el fomento de la investigación científica en el país y actuó en diversas instancias universitarias para promover un cambio de orientación académica que colocara a la ciencia y la investigación en el centro de las actividades de la principal casa de estudios. Provenía de filas del Partido Colorado, más concretamente del ala de izquierda del batllismo conducido por Zelmar Michelini. Maggiolo llegaba a las instancias de conducción central universitaria siendo aún representante del sector minoritario de la Facultad de Ingeniería. En esa condición había estado enfrentado en incontables ocasiones con la facción mayoritaria de ese servicio que, en alguna instancia, intentó obstaculizar sus renovaciones docentes o impugnó la continuidad de su régimen de dedicación total.⁶⁷⁹ Para las derechas, la elección de Maggiolo carecía de legitimidad por ser fruto del voto de los representantes estudiantiles extremistas, que “respondían a Praga”, a través del “instrumento criollo de la FEUU” (en clara alusión a su reciente incorporación a la Unión Internacional de Estudiantes de Praga-UIE), con un reducido apoyo de docentes y profesionales.⁶⁸⁰

⁶⁷⁸ Markarian, V. “Universidad, revolución y dólares. Aproximación a otras discusiones de la izquierda uruguaya en los sesenta a partir de una polémica generada en la Facultad de Ingeniería”. Ponencia presentada a LASA, mayo de 2016

⁶⁷⁹ Markarian, Vania. “Apogeo y crisis del reformismo universitario. Algunos debates en torno al “plan Maggiolo” en la UDELAR”. *Pensamiento Universitario*, p. 14 (octubre de 2011)

⁶⁸⁰ Declaración del Movimiento Democrático Universitario. *El País*, 21 de octubre de 1966, p. 5

El novel rector se erigía a la vista de estos grupos como un claro representante de la “subversión” izquierdista tal como fue expresado por varios de sus exponentes. El MDU publicó una extensa carta de repudio en la cual advertía que la institución entraba en un estado de “avanzada descomposición interna” que finalmente la transformaría en “el foco más activo de la subversión organizada”.⁶⁸¹ La diplomacia estadounidense, que observó atentamente las derivaciones del conflicto, coincidió con estos pronósticos. En su opinión el apoyo al rector de la totalidad del orden estudiantil controlado por el comunismo significaba un claro retroceso para las “fuerzas democráticas” universitarias.⁶⁸²

La asunción de Maggiolo se producía además en un contexto de fuerte tensión debido al conflicto desatado en la Facultad de Ingeniería que alcanzó a los órganos centrales de conducción universitaria. Este se remontaba a la década del cincuenta, cuando los denominados “reformistas”, que aspiraban a un cambio de orientación académica, se enfrentaron de manera sistemática a la mayoría que gobernaba esa institución. Así lo evidencian las disputas referidas en torno a la propuesta realizada en 1954, a pedido del Gobierno uruguayo, por la Fundación Armour del Instituto de Tecnología de Illinois de crear un centro de investigación y desarrollo industrial externo a la Universidad.⁶⁸³

Pero a mediados de los sesenta estas controversias derivaron en fuertes contiendas, tanto en el campo político como en el de los debates político-institucionales. A las pugnas con los docentes reformistas se sumaron los desencuentros devenidos escaramuzas con los estudiantes por asuntos diversos como la negativa a conceder un salón para funcionamiento del centro gremial, las medidas restrictivas a la propaganda estudiantil dentro del recinto de la facultad y la falta de garantías en los actos eleccionarios, entre otros. Como estudió Vania Markarian, en el transcurso de estas disputas se fue gestando una alianza entre ese sector de docentes con los estudiantes organizados. El orden estudiantil venía realizando desde tiempo atrás severas acusaciones sobre el manejo discrecional de los nombramientos docentes y la irregularidad del funcionamiento de los organismos de cogobierno. El bando

⁶⁸¹ Declaración del Movimiento Democrático Universitario. *El País*, 21 de octubre de 1966, p. 5

⁶⁸² NARA RG 59 Informe Embajada de EEUU, 21 de octubre de 1966

⁶⁸³ Martínez, María Laura. *75 primeros años en la formación de los ingenieros nacionales. Historia de la Facultad de Ingeniería (1885-1960)* (Montevideo: Udelar-Facultad de Ingeniería, 2014)

mayoritario, por su parte, endilgó a los estudiantes su indisciplina y su comportamiento inadecuado en los ámbitos de decisión de la Facultad. Estos enfrentamientos alcanzaron crecientes niveles de violencia y fueron derivados al CDC, que tomó cartas en el asunto. En setiembre de 1966 se nombró una comisión integrada por cuatro decanos para estudiar la situación y, finalmente, en diciembre la máxima autoridad de la Universidad de la República resolvió intervenir la facultad.⁶⁸⁴

La situación generada en Ingeniería así como los mecanismos decididos por el CDC para resolverla acrecentó el profundo malestar que diversos sectores de derecha venían manifestando respecto a la orientación de la Universidad. Si bien, como hemos visto, los artículos acusatorios en la prensa derechista por el estado de politización y caos reinante en la institución fueron incesantes desde fines de los cincuenta, entre setiembre y diciembre de ese año se constata un seguimiento sistemático del desarrollo de los acontecimientos en ese servicio universitario. Al mismo tiempo, eran replicadas las diatribas contra los estudiantes y la mayoría del CDC, incluido el rector, provenientes de las facciones “demócratas” y otras organizaciones profesionales o docentes contrarias a las medidas. En el CDC fueron denunciados los ataques que se realizaban desde un “pasquín” llamado *Combate* destinado a los estudiantes, que respondía a los lineamientos de estos grupos y que recibía apoyo de la estación de la CIA.⁶⁸⁵ El agente Agee indicó en su libro que uno de sus redactores responsables, Alberto Roca, que como se dijo fue abogado en la apelación a la sentencia contra Torterolo por su intervención en el asalto a la Universidad en 1961 y participante en la mencionada reunión con el embajador estadounidense en 1965, actuaba como agente de propaganda de esa dependencia.⁶⁸⁶ Unos años más tarde, en 1970, este personaje figuraba entre los dirigentes de un grupúsculo de derecha nacionalista nucleada en torno a la publicación *El Federal*.⁶⁸⁷ Se sumaron a los apoyos a la mayoría depuesta la Asociación de Docentes de Cátedra de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura, la Asociación de Ingenieros del Uruguay y la Lista 17, “única representación estudiantil universitaria independiente”. Esta última señalaba que

⁶⁸⁴ Para un análisis detallado del conflicto de Ingeniería ver Markarian, V., *Universidad, revolución y dólares*. op.cit

⁶⁸⁵ *Actas CDC*, 14 de noviembre de 1966

⁶⁸⁶ Agee, P., óp. cit., p. 478

⁶⁸⁷ Ver Memorándum. Ref. agenda obtenida de un miembro de *El Federal*, 13 de junio de 1970. En carpeta Grupos Derechistas, informe 1302, Archivo DNII

Hace años que la Universidad fue tomada como campo de acción del comunismo internacional, y su premeditada y destructiva prédica infectó sus ambientes. El único bastión digno que subsiste ante los embates del comunismo imperante, es la Facultad de Ingeniería y Agrimensura y por ello es el único ámbito universitario donde la lucha continúa. El resto de la Universidad acepta sin resistencia y sumiso el doloroso hecho de que a nuestra juventud se la someta a un proceso de descomposición alejándola de las verdades eternas que debe regir la vida del hombre.⁶⁸⁸

Ante lo que calificaban de atropello de la FEUU, con la aquiescencia del CDC, “profesores y dirigentes de notoria filiación democrática” y diversos actores derechistas de los partidos tradicionales lanzaron encendidos llamamientos a organizarse junto “con todo el pueblo” para enfrentar la “prepotencia totalitaria” y “reconquistar la Universidad”, a la vez que exigían al Gobierno que tomara cartas en el asunto.⁶⁸⁹ Representantes del herrerismo intentaron incluso refloatar un proyecto de ley presentado por ese sector durante el primer Gobierno blanco que exigía “la profesión de fe democrática” a los funcionarios públicos y, en esta ocasión, se pretendía su extensión a los docentes universitarios al tiempo que procuraron establecer una formulación similar en la redacción del artículo 69 de la Constitución, que finalmente no llegó a concretarse.⁶⁹⁰

Tras las elecciones nacionales de noviembre de 1966, en las cuales, como ya dijimos, se aprobó una nueva constitución que reestableció el Ejecutivo unipersonal y fortaleció sus poderes, el Partido Colorado retornó al Gobierno. En marzo de 1967 asumió la presidencia el general Óscar Gestido, quien inicialmente optó por una política económica de tintes desarrollistas y por un camino de diálogo y conciliación con los diversos actores sociales y políticos para enfrentar el clima de confrontación y polarización que vivía el país. En este marco, el 26 de febrero, antes de asumir su investidura, Gestido visitó la Universidad de la República en un gesto de reafirmación de su voluntad de colaboración que alimentó las expectativas de establecer un ambiente de concordia. Tanto el rector como el electo presidente enfatizaron la necesidad de buscar acuerdos desde la diversidad de opiniones.⁶⁹¹

⁶⁸⁸ *El Plata*, 18 de setiembre de 1966

⁶⁸⁹ *El País*, 23 de diciembre de 1966 y *El Debate*, 18 de diciembre 1966

⁶⁹⁰ *El Plata*, 10 de octubre de 1966, p. 8

⁶⁹¹ Ver París, B. *La Universidad de la República de la crisis a la intervención*, pp. 109-111

El clima de optimismo, sin embargo, duró pocos meses. En abril, en reacción a la reunión de presidentes americanos en Punta del Este se incrementó la movilización estudiantil y con ella las protestas callejeras, las ocupaciones de los locales universitarios y el enfrentamiento con las fuerzas policiales. Se manifestaron entonces las primeras grietas del frágil acuerdo entre la Universidad y el Gobierno, que se quebró definitivamente a partir de octubre de 1967 cuando Gestido decidió retomar los lineamientos del FMI en materia económica y optó por el camino represivo, con la aplicación de las medidas prontas de seguridad, para contener la protesta social. Luego de su inesperada muerte, en diciembre de 1967, asumió la Presidencia el vicepresidente Jorge Pacheco Areco, quien profundizó un avance por el camino autoritario del cual el país ya no retrocedería. Pacheco, en palabras de los historiadores Gerardo Caetano y José Rilla, “personalizaba [...] un proyecto de reestructura radical de la política uruguaya”, al profundizar la autoridad del presidente y abandonar drásticamente lo “que iba quedando del viejo sistema uruguayo de mediaciones y compromisos”.

Como ejemplo, digamos que su mandato se inició con la ilegalización de siete sectores políticos de izquierda (Partido Socialista, Federación Anarquista Uruguaya, Movimiento Revolucionario Oriental, Movimiento de Acción Popular Uruguayo, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Grupo de Independientes nucleado en torno al diario *Época*) y dos periódicos (el vocero oficial del Partido Socialista, *El Sol*, y *Época*) por su adhesión a la declaración de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) de apoyo a la vía armada como forma de lucha en el continente. En adelante su Gobierno se caracterizó por el uso casi permanente de mecanismos previstos por la Constitución uruguaya para casos de excepción como las medidas prontas de seguridad. Con este instrumento Pacheco gobernó por decreto, sin los controles de la oposición parlamentaria, y restringió las libertades individuales (derechos de reunión, derecho de huelga, libertades de expresión y de prensa). Su política de liberalización económica y de mano dura exacerbó la confrontación y el cuadro de polarización.⁶⁹²

4. Las derechas y la Universidad de la República (1968-1973)

A fines de la década el “peligro comunista” en la Universidad de la República se volvió para las derechas una amenaza extremadamente revulsiva y peligrosa que había

⁶⁹² Caetano, Gerardo, Rilla José. *Historia contemporánea del Uruguay de la colonia al siglo XXI*, (Montevideo: ClaeH/Fin de Siglo, 2010), pp. 292-296

que combatir mediante la implementación de acciones enérgicas. La historiadora Clara Aldrighi señala que “en sus ataques contra la Universidad, la derecha miraba lejos” ya que estaba en disputa el destino del país en los próximos años.⁶⁹³

Las expresiones derechistas, en sintonía con el marco conceptual de la Guerra Fría, expresaron su alarma ante la protesta social —que se fue tornando más disruptiva— y el desafío subversivo que amenazaban remover el orden social y político establecido mientras las élites políticas demostraban su incapacidad para resolver el estancamiento económico y la agudización de las tensiones sociales.⁶⁹⁴ Ante ese estado de cosas se asistió a una reacción conservadora que impactó duramente a la Udelar, procedente de la esfera estatal —que incrementó sus prácticas autoritarias—, de las derechas partidarias que habían experimentado un proceso de reconfiguración —colorados de la UCB nucleados en torno al presidente Pacheco, lo que quedaba del movimiento ruralista de Nardone y el herrerismo del PN— y de una parte de la sociedad que se organizó en diversos movimientos y grupos derechistas, algunos de carácter juvenil y que actuaron en el ámbito de la enseñanza.

Dijimos en el capítulo anterior que a partir de 1968 se generaron condiciones propicias para el avance de esa reacción, más radical e intensa que la observada al despuntar la década de los sesenta, y que se expresó en diversos ámbitos, especialmente en el de la educación, donde la protesta estudiantil asumió un papel clave en las dinámicas de radicalización política. Señalamos también que el “68 uruguayo”, al igual que ocurría en otros puntos del planeta, estuvo signado por el protagonismo de un movimiento estudiantil vigoroso y altamente politizado, destacándose por su gravitación como actor político en la vida nacional con novedosas formas de lucha y reivindicaciones propias.⁶⁹⁵ En esos años, como ha demostrado Markarian, la

⁶⁹³ Aldrighi, Clara. *La intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973). El caso Mitrión*. (Montevideo: Trilce, 2007), p.346

⁶⁹⁴ Marchesi, A., Yaffé, J. “La violencia bajo la lupa: una revisión de la literatura sobre violencia y política en los sesenta” p. 105

⁶⁹⁵ La literatura histórica uruguaya ha señalado el año 1968 como un punto de inflexión para el país, comenzando, según Álvaro Rico, el lento “camino democrático a la dictadura”. Para Rico fue un “año bisagra”, momento en que el discurso ideológico del Ejecutivo se articuló en torno al binomio crisis-orden ver Rico, Álvaro, *Cómo nos domina la clase gobernante*. op.cit y *1968: El liberalismo conservador*. Op.cit. Por el ciclo de protestas estudiantil de ese año ver: Markarian, V., *El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat*. (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2012), 2012; Varela Petitto, *El movimiento estudiantil de 1968: el IAVA, una recapitulación personal*, (Montevideo, Trilce, 2002). Landinelli, Jorge, *1968: la revuelta estudiantil* (Montevideo:

movilización de los estudiantes se hizo incontenible, desbordando en forma, propósitos y capacidad de convocatoria a los ciclos de protesta habituales hasta ese momento. En mayo, apenas unos meses de iniciado el ciclo lectivo, los estudiantes de secundaria se lanzaron a las calles en contra la suba del boleto. Al mes siguiente los universitarios nucleados en la FEUU protestaron masivamente en reclamo del pago de la deuda presupuestal del Gobierno con la Universidad y la enseñanza en general, y pasaron a liderar el movimiento.⁶⁹⁶

Aunque inicialmente los niveles de movilización fueron asimilables en modalidad y combatividad a los repertorios tradicionalmente desplegados por las organizaciones estudiantiles uruguayas, pronto presentaron novedades: cambió la naturaleza de las reivindicaciones y aumentó la beligerancia de las acciones. Manifestaciones relámpago, barricadas, piquetes y contracursos, pedreas y choques con la policía con saldo de heridos fueron algunas de las nuevas prácticas que hicieron irrupción en esos meses. Se produjo entonces una escalada de acción y reacción entre los jóvenes movilizados y las fuerzas de choque.⁶⁹⁷ En medio de este proceso y como expresión de la polarización creciente se fue procesando un nuevo cambio en la correlación de fuerzas en la interna de la FEUU, que tradicionalmente había albergado a diferentes corrientes ideológicas. Si en los cincuenta la tendencia mayoritaria era la heterogénea coalición tercerista y a mediados de los sesenta —tras las derivas ideológicas que se produjeron como consecuencia de los sucesos cubanos— comunistas y socialistas lograron obtener mayorías en varios centros desplazando a los primeros, la característica de fines de los años sesenta fue el incremento de la influencia de los grupos más radicales afines a la confrontación directa. Incluía a sectores de diverso origen ideológico tales como católicos posconciliares, comunistas maoístas, trotskistas, anarquistas y representantes de las organizaciones armadas de la época, que disputaron la conducción de la gremial universitaria.

Así, la radicalización estudiantil y los pronunciamientos de las autoridades universitarias contra la política represiva del Gobierno y en defensa de las libertades públicas condujo a que las derechas (las vertientes extremas y antidemocráticas pero

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-EBO, 1989), Leibner, Gerardo., *Camaradas y compañeros, una historia política y social de los comunistas* (Montevideo: Trilce, 2011)

⁶⁹⁶ Leibner, G., óp. cit., p. 542. Sobre posición de la FEUU ante la rendición de cuentas ver *Jornada*, FEUU, junio de 1968, p. 2

⁶⁹⁷ Ver Markarian, V., *El 68 uruguayo*, p. 47

también algunos sectores liberal conservadores que fueron radicalizando posiciones) reforzaran su visión y su discurso de que la institución universitaria estaba asociada con la izquierda. A fines de 1967 se creó el Movimiento por la Defensa de las Libertades y la Soberanía para formar un frente de oposición al autoritarismo que nucleó a diversas organizaciones políticas, sociales y religiosas así como a connotados intelectuales, de variadas procedencias ideológicas y tradiciones políticas (comunistas, izquierdas liberales, católicos progresistas, entre otros), en el que tuvo destacada presencia el rector Maggiolo.⁶⁹⁸

El Poder Ejecutivo acusó a la casa mayor de estudios de promover la “sedición” y justificó de ese modo los allanamientos y la ocupación de sus locales, que se volvieron cada vez más frecuentes. En medio de este panorama, subió de tono la campaña de prensa llevada a cabo por los voceros de las derechas partidarias, al tiempo que circularon insistentes rumores sobre una posible intervención. A la acción represiva se sumó una fuerte presión financiera a través de un presupuesto estancado y el aplazamiento en la entrega de partidas que resintió sensiblemente el funcionamiento de los servicios universitarios.⁶⁹⁹

Se produjo entonces la quiebra definitiva de relaciones entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de la Universidad. Más aún tras los graves y resonados sucesos acaecidos como el violento allanamiento policial a los locales universitarios, el pedido por parte del Poder Ejecutivo al Senado para destituir al CDC y los primeros estudiantes asesinados en manifestaciones callejeras. En agosto de ese año, bajo pretexto de investigar el paradero del director del ente de electricidad y telefonía (UTE), Ulysses Pereira Reverbel, secuestrado por el MLN, las fuerzas represivas irrumpieron en el edificio central universitario y en las facultades de Agronomía, Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias Económicas y Medicina. El hecho fue ampliamente denunciado tanto por la comunidad universitaria como por buena parte de la prensa y de las fuerzas de izquierdas y liberales de los partidos tradicionales, que acusaron al Gobierno y a la policía de implementar un procedimiento sin orden judicial y sin conocimiento del rector y de los decanos. A los pocos días, en una protesta callejera en medio de un fuerte operativo fue herido de bala el estudiante de veterinaria y militante comunista Líber

⁶⁹⁸ Ver Markarian, V. (ed.) *Universidad, Investigación y Compromiso. Documentos del archivo Maggiolo*. (Montevideo: Udelar, 2010), p. 212 y “Apogeo y crisis del reformismo universitario...”, p. 102

⁶⁹⁹ París de Oddone, M. B., óp. cit.; ver también *Jornada*, FEUU, 3 de setiembre de 1968, p. 1

Arce, que murió dos días más tarde. Las refriegas y enfrentamientos entre la policía y los estudiantes se mantuvieron y en setiembre fueron asesinados Susana Pintos y Hugo de los Santos, estudiantes de la enseñanza técnica y de Facultad de Ciencias Económicas respectivamente, también militantes comunistas.⁷⁰⁰

En este convulsionado escenario observamos que el proyecto de la UN se revitalizó y obtuvo apoyos políticos y sociales así como aliados influyentes en el sistema político y el Gobierno. Analizamos, además, cómo diversas figuras y grupos políticos partidarios (el herrerismo, el ruralismo y el coloradismo independiente vinculado al presidente Pacheco) y órganos de prensa de derecha (el diario colorado *La Mañana* y el nacionalista *El País*) no solo lo apoyaron sino que se convirtieron en sus más fervientes portavoces. Entre sus adherentes cabe destacar, por su relevancia posterior, a la organización estudiantil de derecha radical JSP, antecedente directo de una de las agrupaciones de derecha nacionalista y radical de mayor resonancia en la época, la JUP, fundada en octubre de 1970 en la ciudad de Salto.⁷⁰¹ Tanto el surgimiento de la JSP como más tarde el de la JUP formó parte de la reactivación de una serie de movimientos juveniles anticomunistas en respuesta a la radicalización de la protesta estudiantil y a las primeras acciones armadas de la guerrilla.

Ante el fracaso de los esfuerzos por reconquistar la Universidad, también los universitarios de derecha aglutinados en el MDU —que como se vio ejercieron influencia a comienzos de la década del sesenta y a quienes el reformismo había desplazado de la dirección universitaria— se sumaron a la iniciativa, radicalizando su discurso en contra de la Universidad. El arquitecto Menchaca, por ejemplo, reclamó que la UN aprobara un nuevo estatuto orgánico que garantizara su autonomía e independencia respecto a la central, oponiéndose en forma explícita al cogobierno, en su opinión desvirtuado, e incluyera una disposición expresa “en defensa del orden democrático”, estableciendo la “exclusión” de cualquier “intervención política y declaración sobre asuntos internacionales” y prohibiendo las “influencias totalitarias:

⁷⁰⁰ París de Oddone, M. B. *La Universidad de la República desde la crisis a la intervención 1958-1973*. En setiembre de 1968 la deuda del Gobierno con la Universidad de la República ascendía a 950 millones de pesos. Ver también *Jornada*, FEUU, 3 de setiembre de 1968, p. 1

⁷⁰¹ Sobre la creación de la JSP y la JUP ver Jung, M. E. “Una universidad para Salto: de demanda localista a la agenda de los grupos de derecha radical (1968-1970)” *A contracorriente*, vol. 13, n.º 2 (2016)

nazismo, fascismo o comunismo”.⁷⁰² Por su parte, el grupo de ingenieros apartados de la conducción de la Facultad en 1966, vinculados también con el MDU, cuestionó duramente la orientación que asumieron los órganos de conducción universitaria respecto al Gobierno y sus actuaciones para contener las amenazas al orden.⁷⁰³ Asimismo, las disidencias por derecha se expresaron a través de múltiples denuncias de persecución política y “atropello” que motivaron algunas renunciaciones docentes, ampliamente publicitadas por diversos medios periodísticos de cobertura nacional. Entre ellos el ingeniero Eduardo Praderi, autocalificado como “demócrata”, abandonó su cátedra en 1970 en protesta contra la declaración que el CDC emitió ante el asesinato por parte del MLN-T del asesor estadounidense y jefe de instructores del Programa de Seguridad Pública de la AID, Dan Mittrione.⁷⁰⁴

Este tipo de declaraciones públicas del máximo órgano de dirección de la Universidad, además de constituirse una práctica cada vez más habitual para responder a las constantes acusaciones de las que era objeto la casa de estudios, no eran de expediente sencillo y fluido sino que eran resultado de laboriosas negociaciones y de frágiles acuerdos que apostaban a mantener unos equilibrios internos tensionados. Aún así el matutino *La Mañana* increpó al CDC por su posicionamiento ante el secuestro y destacó el carácter de “universitario de excepcional jerarquía” de Praderi, quien poseía, decía, “aptitudes” indiscutibles. Lejos de asumir una postura “cómoda y cobarde”, “sal[ió] a la liza para renunciar a su cátedra” y “mostrar la herrumbre que corroe a la Universidad”.⁷⁰⁵ El MDU, por su parte, expresó su solidaridad con el ingeniero renunciante al tiempo que expresaban su total apoyo a la creación de la UN. Su declaración sintetiza a cabalidad la manera en que parte de estas derechas radicalizadas concibió a la institución universitaria en esos años:

Nadie ignora que, en la actualidad la llamada Universidad de la República es el enemigo no. 1 de nuestro país, que en forma lenta y cautelosa al principio, pero acelerándose en los últimos tiempos hasta llegar al estado actual, en que aquella prestigiosa Universidad de otros tiempos, fue transformada en una ‘gran majada que por castración mental, o lavado de cerebro, sueña con la esclavitud de los pueblos y la adoración de los

⁷⁰² *La mañana*, 12 de junio de 1969

⁷⁰³ Ver declaraciones del ex decano de la Facultad Héctor Fernández Guido y del Ing. Eduardo Praderi en *La Mañana*, 22 de mayo de 1969, 12-13. Markarian, Vania (ed) *Don Julio. Documentos del Archivo Ricaldoni* (Montevideo: Universidad de la República, 2007)

⁷⁰⁴ *Ibidem*

⁷⁰⁵ *Ibidem*

dictadores’, como dijo recientemente el Ing. Praderi al renunciar a su cátedra en la Facultad de Ingeniería. A este hecho innegable se agrega la disparatada concentración de la enseñanza superior en Montevideo, lo que agudiza el macrocefalismo característico de nuestro país. La juventud uruguaya ha quedado partida en dos castas nítidamente diferenciadas [...] es imperioso luchar por la creación de varios centros de enseñanza, racionalmente distribuidos en el Interior de la República libres de la corruptora influencia de la Universidad de Montevideo. El interior tiene derecho a que sus hijos estudien en su ambiente, bajo la vigilante mirada de sus padres, e incluso muchos ciudadanos capitalinos preferirán, en defensa de la salud moral de sus hijos, que éstos prosigan sus estudios en la nueva Universidad lejos de la destructora influencia de la Universidad de Montevideo.⁷⁰⁶

Hubo otras renunciadas menos publicitadas. Un par de años antes, el doctor Antonio Borrás, militante del PN, oftalmólogo y especialista en arterias del cerebro que desarrollaba sus actividades como investigador y docente en el Hospital de Clínicas con fondos de la Fuerza Aérea de EEUU, inició gestiones ante la Oficina Regional Latinoamericana de Ciencia (Larsco, por su sigla en inglés) para que mediara en el traslado de sus investigaciones al Hospital Italiano. Borrás aducía ser objeto de acoso y persecución por los “izquierdistas” por sus posiciones disidentes, y, especialmente, por recibir financiamiento y asistencia del Gobierno de EEUU. La recepción de ayudas externas, como se observó en otros pasajes de este texto, era entonces un asunto extremadamente controvertido y debatido en la interna universitaria, al punto que contribuyó a erosionar la coyuntural alianza entre los estudiantes y los docentes reformistas. En ese panorama incierto, Borrás consideraba que corría riesgo tanto su futuro y el de su equipo de investigación (compuesto por tres asistentes) como la continuidad de sus investigaciones. Por tanto, solicitaba el mantenimiento de la asistencia financiera así como la provisión de fondos para la adquisición de nuevos equipos, porque los que utilizaba pertenecían al hospital universitario. La diplomacia estadounidense, por su parte, juzgó de interés promover nuevos establecimientos “de ciencias democráticas” que hicieran contrapeso a la Universidad de la República en manos del comunismo y recomendó el apoyo a la solicitud del médico e investigador

⁷⁰⁶ *Tribuna Salteña*, 9 de octubre de 1970, p. 1

uruguayo.⁷⁰⁷ Recordemos, que en esa misma línea, insistió en la posibilidad de crear una universidad privada o eventualmente una universidad regional con apoyo de la OEA, con fondos de Gobiernos de la región y del Gobierno estadounidense.⁷⁰⁸

Es claro que el tono de las comunicaciones diplomáticas en estos años se fue endureciendo respecto a las posibles salidas a la situación de crisis del país y de la Universidad. Los análisis realizados por los equipos de la embajada identificaban dos focos principales de amenaza a la seguridad interna: por un lado la agitación y violencia de los sindicatos y organizaciones estudiantiles comandadas por el Partido Comunista y por otro la amenaza de la guerrilla urbana que promovían grupos de ultraizquierda. En relación con esta última, aunque consideraban poco probable que derivara en una insurgencia rural, reconocían la existencia de un peligro serio por la capacidad de hostigamiento al Gobierno que disponía el MLN-T.

Asimismo, preocupaba el posible empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población y sus efectos sobre la conflictividad y el incremento de los movimientos opositores. Mucho más volátil, afirmaban, resultaba el desafío al orden que representaba la movilización de los estudiantes tanto a nivel secundario como universitario. Reconocían que todavía las fracciones comunistas tenían relativo control, pero observaban con preocupación el crecimiento considerable de la influencia de los “grupos ultra-izquierdistas que defienden la violencia”. “Indisciplinados e impredecibles, los estudiantes plantean una amenaza constante a la seguridad pública”, concluía el informe.

Para afrontar la situación se sugería una mejora en la capacidad operativa (logística, de equipamiento, técnicas y entrenamiento) de las fuerzas de seguridad para hacer frente a los problemas de seguridad interna.⁷⁰⁹ De hecho, como demostró Clara Aldrighi, los programas de seguridad pública que fueron financiados por el Gobierno estadounidense en este período fueron en esta dirección, incrementando la injerencia del país del norte en los asuntos domésticos mediante los cursos de entrenamiento en el país y en las

⁷⁰⁷ NARA. RG 59. Latina American Regional Science Office Special Report 3/68, 31 enero de 1968 Dr. Antonio Borrás y Carta dirigida a Lt. Col. Richard E. Krause, 22 de enero de 1968. Ver datos biográficos en: <https://www.anm.org.uy/ac%20borras%20pte%20honor.htm>, última consulta julio de 2019

⁷⁰⁸ NARA. RG59 “Country Analysis and Strategy Program (CASP)-Uruguay”, 20 abril 1968

⁷⁰⁹ NARA.RG59, Asunto: “1971 CASP- Uruguay”, 1º. De febrero 1969

escuelas estadounidenses, la asistencia técnica y la provisión de nuevas tecnologías represivas.⁷¹⁰

Los diplomáticos veían con particular inquietud el descontento juvenil provocado por las escasas oportunidades de futuro que ofrecía una sociedad “estática”, con una economía estancada e insistían en necesidad de implementar una profunda reestructura de la educación y de la Universidad. No obstante, todavía en esta etapa se apostaba a lograr cambios a través de métodos democráticos tanto en el país como en el ámbito universitario a pesar de que se iba haciendo cada vez más evidente la imposibilidad de realizar transformaciones profundas en tanto el Gobierno no se decidiera a reemplazar a sus autoridades y eliminar de raíz la injerencia de las izquierdas.⁷¹¹ “Esto parece improbable durante el período cubierto en este documento, e incluso si tales reformas se logran, la tranquilidad duradera requiere que se restablezcan las comunicaciones significativas entre el Gobierno, los intelectuales y los estudiantes”, afirmaban.⁷¹²

La radicalización de los actores universitarios, con la consolidación de un sector estudiantil apoyado por buena parte del cuerpo docente que pugnaba por transformar las estructuras sociales para lograr cambios en la función de la educación superior, fue desgastando el clima de concordia que generalmente se ha atribuido a la institución universitaria.⁷¹³ Se agudizaron en este marco los roces con sus autoridades, tanto decanos como con el rector, causados por los métodos o prácticas gremiales llevadas adelante por la FEUU.⁷¹⁴ Además de las disidencias por izquierda, las fisuras internas se expresaron en el desplazamiento a la derecha de una buena parte de los profesionales y docentes que en el pasado se habían identificado con posturas democrático-liberales. El abogado penalista y político del Partido Nacional, Héctor Gros Espiell, en una entrevista realizada por la historiadora Aldrighi, aludía a la derechización de ese grupo de universitarios que originalmente se había identificado con el pensamiento liberal. En el caso concreto de la Facultad de Derecho, Gros sostenía que se había asistido a un

⁷¹⁰ Ver Aldrighi, Clara. “La injerencia de Estados Unidos en el proceso hacia el golpe de Estado. Informes de la misión de Seguridad Pública y la embajada estadounidense en Montevideo (1968-1973)”. En Marchesi, Aldo, Markarian, Vania, Rico, Álvaro y Yaffé, Jaime (orgs.) *El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay*. (Montevideo: Trilce, 2003)

⁷¹¹ NARA. RG59. CASP Uruguay, 20 abril 1968 y 1971 CASP Uruguay, 1º. De febrero 1969

⁷¹² NARA. RG 59. CASP Uruguay, 20 abril 1968 y 1971 CASP Uruguay, 1º. De febrero 1969

⁷¹³ Ver Markarian, V. “Apogeo y crisis del reformismo universitario”

⁷¹⁴ *El País*, 29 de octubre de 1969, “Facultad de Derecho clima incierto”. Actas CDC, 10 de noviembre de 1969, pp.1161-1164

proceso de “fascistización” de varias personas “que provenían del centro político”.⁷¹⁵ En ese marco, se observa cómo algunos docentes que aunque liberales eran profundamente anticomunistas, terminaron confluyendo con sectores de derechas en las argumentaciones sobre la “caótica situación universitaria” y hasta apoyando la instalación de la UN como opción viable para contrarrestar el avance “totalitario” en la Udelar. Ese fue el caso de Ricardo Yanicelli (1906-1998), especialista en cirugía infantil y consejero de la Facultad de Medicina, de procedencia batllista y con temprana actuación en ámbitos gremiales universitarios y profesionales.⁷¹⁶ Yanicelli se distinguió como militante estudiantil de la AEM-FEUU y tras su graduación en 1934 representó a los estudiantes en el Consejo Directivo de la Facultad. Asimismo desarrolló una intensa labor en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Fue subsecretario de Salud Pública durante el Gobierno del colorado Juan José de Amézaga (1943-1944). En 1967 el presidente Gestido lo designó ministro de Salud Pública. Sin duda, representa uno de tantos casos de militantes de los partidos tradicionales, de procedencia democrático-liberal, que ante la polarización creciente encontraron puntos de coincidencia con el variado espectro de las derechas. En una entrevista periodística, Yanicelli manifestaba su parecer y a la par su desazón por la situación predominante en la Universidad:

La Universidad, a través de la inoperancia de sus autoridades, que salvo honrosas excepciones no ensayan enfrentar la infiltración totalitaria, se ha convertido en uno de los lugares más fecundos y fáciles para favorecerla no existiendo otros obstáculos para ella que las rivalidades entre los grupos que la impulsan. [...] Los profesores fuimos primero ‘exhortados’ y luego obligados a hacer ‘contracursos’, es decir, a interrumpir nuestros cursos habituales donde enseñamos a asistir enfermos, para hablar de la política Universitaria y Nacional, sosteniendo ‘el dogma’ que la Universidad es intocable además de autónoma. [...] El oficialismo universitario ocultaba toda oposición y los mismos opositores deseábamos que las propias autoridades corrigieran esos desatinos⁷¹⁷

Esto ocurría al mismo tiempo que se producía el ascenso de la protesta social en respuesta a una crisis económica cada vez más aguda y la guerrilla comenzaba su deriva militarista, sumando a sus acciones el secuestro de funcionarios del Gobierno,

⁷¹⁵ Aldrighi, C. *La intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973). El caso Mitrión*, p. 354.

⁷¹⁶ Datos tomados de página del Sindicato Médico del Uruguay: http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/yanicelli_alt.pdf, consulta: 10 de noviembre de 2013. *La Mañana. Edición del Interior*, 12 de junio de 1969, pp. 12-3

⁷¹⁷ *La Mañana*, 12 de junio de 1969, pp. 12-3

empresarios y personal vinculado a los aparatos represivos.⁷¹⁸ Frente a estos hechos, las reacciones de la dirigencia universitaria —consideradas fuera de tiempo y poco contundentes— fueron observadas y duramente criticadas por parte del Gobierno y de actores políticos de la época, contribuyendo acaso a la polarización y al corrimiento hacia la derecha de una buena parte de la comunidad universitaria. Así era observado por la embajada estadounidense, luego del asesinato de Mitrone, al afirmar que con estas actitudes la Universidad se aislaba de la clase media y de la “mayoría conservadora y democrática del país”, vaticinando que: “se acerca rápidamente el momento en que el Gobierno podrá intervenir o clausurar la universidad sin mucha protesta de las fuerzas democráticas tradicionales. Tal perspectiva parece cada vez más posible”.⁷¹⁹

La espectacularidad de los operativos del MLN-T causó gran impacto en la vida política nacional. Los esfuerzos del Gobierno entonces se orientaron a contener la movilización estudiantil y sindical y a reprimir al movimiento guerrillero. La violencia política —tanto estatal como no estatal— se desplegó con mayor intensidad y visibilidad, convirtiéndose en un asunto central en el debate público. El anticomunismo de las derechas entonces fue asumiendo diferentes modulaciones cuyo reflejo más evidente fue la radicalización de la idea del “enemigo interno” sustentado en la DSN. La “subversión”, que representaba la alteridad radical, pasó a englobar a una amplia variedad de manifestaciones del conflicto político y social: las luchas sindicales, la guerrilla y la protesta estudiantil. El ámbito educativo fue visualizado por una buena parte de las derechas como una cantera de reclutamiento de los grupos de izquierda que en el período incrementaron sus acciones.

La exacerbación de la noción de enemigo interno habilitó la justificación tanto de las prácticas represivas estatales como de las acciones violentas de los movimientos de derecha que surgieron en estos años y fueron consentidas, cuando no amparadas, en ámbitos gubernamentales y por las fracciones derechistas de los tradicionales partidos

⁷¹⁸ En 1969 el MLN secuestró al director del ente estatal de Telefonía y electricidad, UTE, Ulyses Pereira Reverbel, al empresario Gaetano Pellegrini Giampietro, director de los diarios La mañana y El Diario y dirigente de la Asociación de Bancos del Uruguay. En 1970 a Dan Mitrone, al cónsul brasileño Aloysio Dias Gomide y al experto en suelos estadounidense Claude Fly y en 1971 fueron secuestrados el embajador británico Geoffrey Jackson, Ulysses Pereira Reverbel por segunda vez, el exministro de Ganadería y Agricultura, Carlos Frick Davie, entre otros

⁷¹⁹ NARA. RG59.SNF.1970-1973.PD.BOX2661 Embajada de Montevideo a Depto de Estado (airgram) Tema: Reacción de la universidad a los secuestros genera fuerte rechazo del ministro de cultura, 28 de agosto de 1970

Blanco y Colorado.⁷²⁰ Sus portavoces, *El País*, *El Día*, *La Mañana* y *El Diario*, agudizaron sus acusaciones contra la Universidad, mientras desde el Gobierno, el ministro García Capurro, como vimos, dedicaba a promover el Cosupen y la Universidad del Norte. El diario *El País* argumentaba que en los centros de estudio, universitarios y secundarios, se inoculaba a los jóvenes “la conducta de la violencia y el culto de la fuerza bruta en que el nazismo y comunismo se dan la mano”.⁷²¹ Una vez más, se aludía a la autonomía universitaria como causa de los desvíos de esa institución. El periódico colorado *La Mañana* insistía en que “desde la actual Universidad se alimenta la subversión”: de ella “proviene sus ideólogos; de allí salen las proclamas, siempre tolerantes o alentadoras para la insurrección, pero invariablemente agresivas para los poderes constituidos y las fuerzas del orden”.⁷²² La Universidad era cómplice de los “sediciosos criminales” al tiempo que desde sus aulas se empujaba a los jóvenes al “delito de traición a la patria, al crimen alevoso”, señalaba.⁷²³ En el mismo diario un “grupo de ciudadanos” de la ciudad de Colonia hizo pública una carta en la que exigían al presidente de la República medidas contra la “escalada de violencia” que había llegado a su clímax con el secuestro de Mitrione. Concluían que la Universidad de la República era el “centro mismo donde se origina la conspiración”:

Allí es donde se confeccionan arbitrarios planes de estudios, mediante los cuales se adoctrina estudiantes, se los fanatiza y se los convierte en guerrilleros. Es el lugar donde se utilizan los elementos que sirven para la conspiración, como mimeógrafos o productos químicos para fabricar explosivos. [...] en los propios edificios universitarios, donde viven estudiantes becados por el pueblo, se elaboran o distribuyen importantes materiales guerrilleros, tales como manuales de contrainteligencia, guerra de guerrillas o c[ó]mo desempeñarse en un interrogatorio judicial⁷²⁴

En medio de estas acusaciones cada vez más frecuentes, las relaciones entre la Universidad y el PE continuaron en declive y la situación financiera la institución se volvió dramática.⁷²⁵ A fines de 1970, *Gaceta de la Universidad* se lamentaba de que la casa de estudios “continúa moviéndose de puro milagro: el [G]obierno ha cortado los víveres a la cultura superior y la falta de recursos frustra planes y proyectos y reduce a

⁷²⁰ Marchesi, Yaffé. “La violencia bajo la lupa” pp. 96-102-114

⁷²¹ *El País*, 3 de octubre de 1969, p. 3

⁷²² *La Mañana. Edición del Interior*, 20 de agosto de 1970, p. 3 y 27 de agosto de 1970, p. 3

⁷²³ *Ibidem*

⁷²⁴ *La Mañana. Edición del Interior*, 27 de agosto de 1970, p. 3

⁷²⁵ Ver París, B. *La Universidad de la República de la crisis a la intervención*, pp. 124-125

la impotencia a sectores fundamentales de la vida universitaria”.⁷²⁶ Esta situación se profundizó en los años que siguieron. Mientras el horizonte dictatorial se hacía cada vez más claro, las expresiones derechistas, estatales, partidarias y sociales, reforzaron y contribuyeron a instalar el discurso que presentaba a la Udelar como nodo de las acciones de la guerrilla y cantera de reclutamiento de los grupos de izquierda más radicales, destacando su responsabilidad en la instauración del clima de violencia en el país.⁷²⁷

Ante la violencia generalizada los sectores liberal conservadores de los partidos tradicionales, a través de la prensa o en declaraciones públicas, manifestaron su condena a esas acciones pero evidenciando diverso grado de tolerancia según procediera de la izquierda o de la derecha y, en algunos casos, en una abierta justificación. A estas alturas la violencia formaba parte del repertorio de acciones, habilitando el pasaje del anticomunismo discursivo a las prácticas violentas llevadas a cabo por las múltiples agrupaciones anticomunistas que emergieron y actuaron en estos años, las más de las veces en connivencia con el Gobierno, sectores partidarios y las fuerzas represivas.⁷²⁸ Se agudizaron los desbordes autoritarios del Gobierno al tiempo que aumentaba el protagonismo político de las FF. AA. En este marco, se profundizó la embestida derechista contra la Udelar, iniciada en 1968 bajo la presidencia de Pacheco, proveniente de las esferas estatal, partidaria (UCB y Herrerismo y ruralismo) y social, que tuvo entre sus principales focos a la Universidad. Es claro, por ende, que la casa de estudios difícilmente podía permanecer ajena e indemne ante esta realidad.⁷²⁹

En medio de un panorama incierto, 1971 transcurrió en medio de moderadas expectativas por las elecciones que se realizarían en noviembre. Desde el campo intelectual incluso se perseveró en buscar explicaciones y ensayar respuestas a la situación reinante. A partir de esas preocupaciones, en octubre se publicó el emblemático libro *Uruguay hoy*, en el cual un conjunto de intelectuales de prestigio como Real de Azúa, Ángel Rama, Carlos Martínez Moreno e investigadores del Instituto de Economía —Luis Macadar, Nicolás Reig y José Enrique Santías—, desde

⁷²⁶ *Gaceta de la Universidad*, n.ºs 50 y 51 (diciembre de 1970), p. 2

⁷²⁷ *La Mañana*, 27 de agosto de 1970

⁷²⁸ Marchesi, A., Yaffé, J. “La violencia bajo la lupa. Una revisión de la literatura sobre violencia y política en los sesenta”, en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, vol. 19, n.º 1 (2010), Montevideo, p. 102

⁷²⁹ París, B., p. 137

sus respectivos saberes, ensayaron explicaciones respecto a cómo se había llegado a ese “Uruguay hoy”.⁷³⁰

En el ámbito político, por otra parte, se asistió a una breve revitalización de la influencia de los partidos y del Parlamento, cuya tradicional centralidad venía siendo cada vez más cuestionada. Con todo, la campaña electoral estuvo dominada por las tensiones propias de un contexto fuertemente polarizado y represivo. También ese año se presenció el vertiginoso ascenso del poder militar, luego que el Gobierno encomendara a las FF. AA. la lucha antisubversiva.⁷³¹ Aunque sin duda uno de los factores más disruptivos fue la creación del Frente Amplio, una nueva fuerza política de izquierdas que vino a quebrar con el tradicional bipartidismo blanco y colorado, alterando el mapa político nacional. Recordemos que tras varios intentos frustrados de consolidar un frente opositor al Gobierno, finalmente en febrero se conformó una coalición que agrupó a diversas fuerzas de izquierdas procedentes de distintas tradiciones políticas e ideológicas en torno a un programa de cambios sociales y políticos común. La irrupción de esta nueva fuerza política con fuerte vinculación con los movimientos sociales y gran capacidad de movilización desafiaba la hegemonía que hasta el momento habían detentado los partidos tradicionales y coadyuvó a exasperar los temores y las reacciones de las fuerzas derechistas. Reconocidas figuras universitarias acompañaron el proceso fundacional del FA, lo cual acentuó el encono hacia la Udelar. Baste mencionar que su fórmula electoral, liderada por el general Líber Seregni, estaba integrada por dos renombrados universitarios: el doctor Juan José Crottogini —quien había sido decano de la Facultad de Medicina (1957-1963), rector interino de la Universidad de la República (1964-1966) e integrante de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas— y el doctor Hugo Villar —director del Hospital de Clínicas (1961-1974; 1985-1991)—, candidatos a la vicepresidencia y a la Intendencia de Montevideo, respectivamente.

Las candidaturas de Crottogini y de Villar fueron el acicate para que Juan Antonio Acuña, exfuncionario del Hospital de Clínicas y militante de la Confederación Sindical

⁷³⁰ *Uruguay Hoy* (Buenos Aires: Siglo XXI, 1971). Incluía los siguientes ensayos: La tierra y los hombres / Luis Benvenuto .-- Una economía latinoamericana / Luis Macadar, Nicolás Reig, José Enrique Santías .- - Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy / Carlos Real de Azúa .-- La generación crítica / Angel Rama .-- Crepúsculo en Arcadia: la institucionalidad y su derrumbe a la uruguayaya / Carlos Martínez Moreno

⁷³¹ Gonzalo Varela Petito, *De la República liberal al estado militar*, p.107

del Uruguay (CSU) —vinculada al llamado “sindicalismo libre”— sacara a la luz una serie de acusaciones que los involucraba y, de modo más general, a la institución universitaria. Ese año, en medio de la campaña electoral, publicó *Persecución política. Atropello y despojo a nivel de la Universidad de la República*, cuyo propósito, afirmaba, era alertar a la opinión pública acerca de “lo que muchos conocen y casi todos callan”:

que en la Universidad de la República se ha enquistado, como un tumor maligno, con sus radiaciones y reacciones virulentas, tendencias políticas partidarias absolutistas, sectarias y despiadadas, que, al predominar, han generado, dentro y fuera de su recinto, una psicosis de terror y temor, para que nadie diga lo que ve ni lo que piensa. Donde se ejecuta el terrorismo verbalista, la persecución política: el atropello y el avasallamiento de todas las garantías y derechos constitucionales para con aquellos funcionarios que no se someten, mansos e incondicionalmente, al pensamiento, tácticas, propósitos y fines partidarios de los que gobiernan a la máxima casa de la cultura nacional⁷³²

Acuña realiza un relato detallado —salpicado de acusaciones y adjetivos e intercalado con extractos de documentos— del conflicto que durante casi ocho años (1956-1964) mantuvo con las autoridades de ese servicio y de la Facultad de Medicina y que, tras una sinuosa investigación sumarial, concluyó con su apartamiento del cargo.⁷³³ En el libro se esfuerza por trascender lo personal y testimoniar una situación más general de acallamiento y amenaza que sufrían aquellos universitarios que se oponían a la orientación y conducción de la casa de estudios. Al mismo tiempo, su objetivo mayor era intervenir en la contienda político-electoral, desprestigiando a los candidatos de la pujante coalición izquierdista. El lenguaje así como las reiterativas argumentaciones, que abundan en calificativos, replican el discurso de las derechas locales entrelazado con el marco conceptual de la Guerra Fría.

Vale aclarar que la CSU fue creada en enero de 1951 a influjos de las redes transnacionales del “sindicalismo libre” y reunió a un conjunto de organizaciones gremiales provenientes de distintas tradiciones ideológicas con el objetivo de enfrentar a los sindicatos comunistas. La CSU mantuvo una postura contraria a todos los

⁷³² Acuña, Juan Antonio. *Persecución política. Atropello y despojo. A nivel de: la Universidad de la República. Un alerta a: los trabajadores y opinión pública del país* (Montevideo: Editorial Ayuí, 1971), p. 9

⁷³³ Ver, por ejemplo, *Actas CDC*, 11 de julio de 1960, p. 1295, 7 de diciembre de 1964, pp. 1586-1587 y *Repertorios* 480/60, 4 de julio de 1960

totalitarismos: el fascismo y el comunismo soviético, alineándose con el “mundo libre” que representaban las democracias occidentales lideradas por EEUU.⁷³⁴ En los años sesenta, esta organización —en la que Acuña continuó militando— se mantuvo apegada al “sindicalismo libre” y actuó en consonancia con las políticas sindicales impulsadas por EEUU a través de diversas agencias, marcando su declinación hacia el anticomunismo de derechas de matriz liberal-conservadora, en línea con el discurso de la Guerra Fría.⁷³⁵

La trayectoria de Acuña, por tanto, se nos presenta como una síntesis representativa de las derivas ideológicas en el campo de las derechas: el pasaje —al calor de los conflictos de la Guerra Fría y su recrudecimiento después de Cuba— de los frentes antitotalitarios, que unificaron a conservadores liberales, progresistas e izquierdas no comunistas hacia un anticomunismo de derecha. El libro de Acuña se sumó al coro de voces que venía acusando a la Udelar de ser un foco de perturbación social y señalar que en su interior se practicaba persecución ideológica contra las voces disidentes. Las expresiones derechistas fueron convergiendo en sus posiciones y exacerbando su retórica del “enemigo interno”, según la cual la Universidad quedaba asociada a la “subversión” y, ahora, al FA.

Al mismo tiempo que esto ocurría se incrementaban las acciones de la miríada de agrupaciones, grupos de derecha, de cuño nacionalista y antidemocrático, de carácter

⁷³⁴ Como señala Álvaro Sosa en una investigación reciente en surgimiento y desarrollo de la CSU influyeron tres factores: la reconfiguración del campo antitotalitario y anticomunista en la primera etapa de la Guerra Fría, los derroteros del sindicalismo comunista y las transformaciones que se produjeron en el Partido Socialista en los años cincuenta. Sosa, Á. “‘Libres’, ‘democráticos’ e ‘internacionalistas’. La Confederación Sindical del Uruguay en los años cincuenta”. *Claves. Revista de Historia*, vol. 5, n.º 8. Montevideo, enero-junio de 2019, pp. 95-122; sobre el XXXI Congreso del P. S. y su deriva ideológica ver López D’Alessandro, Fernando. *Vivian Trías. El hombre que fue Ríos* (Montevideo: Penguin Random House, 2019), pp. 48, p. 76 y p. 77

⁷³⁵ En el marco de su actuación en ella, al igual que ocurrió con otros de sus dirigentes y militantes de la CSU, Acuña fue becado a mediados de los cincuenta por la Administración de Cooperación Técnica del Departamento de Estado en el marco del Punto Cuatro del Plan Truman para participar en una capacitación, “Estudio de Suministros de los Hospitales norteamericanos”. Asimismo, a lo largo de los años siguientes representó a esa gremial en conferencias regionales y mundiales de la OIT e integró el Consejo Ejecutivo de la Ciosl, con sede en Bruselas, en representación de América Latina, asistiendo además en esa calidad a diversos eventos mundiales. Según afirma también participó de “misiones especiales de expertos para el estudio de las condiciones imperantes sobre la libre expresión del pensamiento, derecho de organización y libertad sindical; relaciones obrero-patronales en diversos países del mundo”. Por último, en su carta de antecedentes figura como “asesor especial, a nivel de Secretaría General y con relación a la cuestión laboral-social y la ex ‘alianza para el progreso’ del ex Secretario General de la OEA”, José A. Mora Otero” “Breve reseña de Actuación Internacional” que acompaña la carta de Juan Antonio Acuña al consejero de Estado Federico García Capurro, 22 de febrero de 1979. *Colección García Capurro*, s.n., AGN, Montevideo

juvenil y con distinto grado de organicidad (Movimiento Nueva Generación, que nucleaba a jóvenes colorados afines a la reelección presidencial de Pacheco Areco, Movimiento de Restauración Nacional, la Agrupación Siempre Bauzá por mencionar solo algunas) que habían surgido a fines de los sesenta y comienzos de la década siguiente. Sus actuaciones tuvieron como epicentro el ámbito de la enseñanza, donde denunciaron la presencia e “infiltración comunista” al tiempo que llevaron a cabo atentados a militantes gremiales o de izquierda así como asaltos a liceos o a las sedes universitarias. Estas organizaciones vinieron a engrosar la lista de movimientos llamados “demócratas” que sobrevivieron, en algunos casos reconvirtiéndose, y siguieron funcionando desde los primeros años sesenta, por ejemplo la Organización de Padres Demócratas (Orpade) y sus filiales en ciudades del interior del país, que en esta etapa agudizaron su retórica anticomunista y sus acciones. Orpade había sido creada formalmente en 1962 en el marco de la primera reacción derechista de comienzos de década. A diferencia de otras agrupaciones “demócratas”, que decayeron o desaparecieron entre mediados de 1962 y comienzos de 1963, la Orpade se mantuvo en actividad, cobrando renovado vigor en esta etapa.⁷³⁶

En este período los centros de enseñanza secundaria pasaron a ser el escenario principal de actividades de las organizaciones anticomunistas emergentes tras haber fracasado, tal como se analizó, en sus intentos de disputar espacios a la FEUU e influir en la interna de la Universidad. Sin embargo, mantuvieron su prédica antiuniversitaria, reclamando al Gobierno que pusiera freno al avance de las izquierdas en esa institución al tiempo que llevaron a cabo violentas irrupciones a sus locales, atentados contra los domicilios de sus docentes o ataques a militantes de izquierda. Contaron con la connivencia de las fracciones derechistas de los partidos tradicionales —UCB, principal apoyo del presidente Pacheco y de su sucesor, Juan María Bordaberry y dentro del Partido Nacional el herrerismo y el ruralismo— que fueron extremando su anticomunismo y sus posturas antidemocráticas, abogando por el endurecimiento de la lucha “antisubversiva” y la intervención militar para resolver la situación de “caos” del país. En relación con la Universidad, alternaron entre la insistencia en crear otras

⁷³⁶ Sobre la Organización de Padres Demócratas (Orpade) y su actuación a lo largo de la década del sesenta ver: Broquetas, M. Un caso de anticomunismo civil: los “padres demócratas” de Uruguay (1955-1973)” *Páginas*, v.10, n° 24 (Septiembre-Diciembre 2018) pp.34-54 disponible en : <http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas>

universidades o el reclamo de intervención a esa casa de estudios, pero cada vez más inclinándose por esta última opción. Sus portavoces, *La Mañana*, *El Día* y *El País*, replicaron este discurso y dedicaron editoriales a demostrar que en la Universidad se amparaba y fomentaba la subversión al tiempo que se acallaba y perseguía toda disidencia, contribuyendo a generar un estado de opinión hostil hacia ella.

En el extremo del arco político-ideológico derechista, y más directamente relacionado con el ámbito juvenil y estudiantil, se destacó la referida JUP. Su peculiaridad en relación con agrupaciones similares residió en la adhesión que alcanzó en un amplio espectro de la población, especialmente entre los sectores medios y estudiantiles y en el interior del país.⁷³⁷ La JUP se autodefinió como un movimiento juvenil, partidario y de ideas, que tenía como misión dar impulso a un conjunto de valores éticos y morales en defensa de la “patria”. Su principal objetivo, decía, era contribuir a la construcción de “un Nuevo Uruguay enraizado en su pasado, donde reine la justicia, la paz y la libertad”.⁷³⁸ Aunque no tuvo una incidencia directa al interior de la Universidad, su discurso se orientó a los jóvenes en general a quienes convocó a abandonar la pasividad y la apatía y a asumir una activa participación en respuesta a la infiltración del “enemigo” en las aulas, las fábricas, los hogares y las calles.⁷³⁹ Abrevaba, como se señaló, en la experiencia de la JSP y de las Juventudes de Pie, que se habían nucleado en torno a la demanda de instalar la Universidad del Norte, al tiempo que denunciaban la penetración del “comunismo” en la enseñanza.⁷⁴⁰

En este proceso fue gravitante el matutino montevideano *La Mañana*, y en particular su edición del interior, que se convirtió en su promotor y principal portavoz. En su conformación convergió, además del coloradismo pachequista, el ruralismo de Nardone, entonces muy marginal, a través del apoyo decidido y la integración a sus filas de sus principales referentes, Olga Clerici de Nardone y Juan José Gari, quienes cedieron al

⁷³⁷ Sobre la JUP ver Bucheli, G. “La Juventud Uruguaya de Pie y la violencia en la enseñanza en la coyuntura previa al golpe de Estado (1970-1973)”, en *Contenciosa. Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la historia iberoamericana*, Santa Fe, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, año I, n.º 2 (2014). Disponible en: <http://www.contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=15>, “El sujeto social de derechas en Uruguay y la emergencia de la Juventud Uruguaya de Pie (1968-1972)” en *Revista Divergencia*, año 2, n.º 4 (julio-diciembre de 2013) pp. 11-36, *O se está con la patria o se está contra ella. Una historia de la Juventud Uruguaya de Pie* (Montevideo: Fin de Siglo, 2019)

⁷³⁸ *Tribuna Salteña*, 18 de octubre de 1970, p. 4

⁷³⁹ *Ibidem*

⁷⁴⁰ *La Mañana. Edición del Interior*, 15 de enero de 1970, p. 2 y *La Mañana. Edición del Interior*, 29 de enero de 1970, p. 11

novel movimiento el local de la Liga Federal de Acción Ruralista y un espacio radial diario en la emblemática Radio Rural. También contó con el respaldo activo de conocidas figuras como el productor rural y político blanco Alberto Gallinal y el también productor agropecuario y periodista, de origen católico y conservador, Eduardo Corso. Asimismo, la JUP estrechó vínculos con los sectores derechistas de la Iglesia católica que, como dijimos, vivía las tensiones derivadas del viraje de signo renovador que experimentó gran parte del mundo católico luego del Concilio de Vaticano. Recordemos que en 1966 el monseñor Antonio Corso, hermano de Eduardo Corso, de orientación conservadora, fue relevado de su cargo de Administrador Apostólico con Sede Plena por el progresista monseñor Carlos Partelli. En ese contexto de disputas internas, un puñado de curas católicos prestaron su apoyo explícito a la JUP, mediante comunicados públicos, participación en los actos o con declaraciones en la prensa: el obispo de Tacuarembó, monseñor Miguel Balaguer, el cura párroco de Rocha, Mario Aquiles Sención, Ramón Rodríguez, cura párroco de Castillos, Alcides Esghirla, de la Parroquia Nuestra Señora del Huerto (Montevideo), entre otros.⁷⁴¹ La JUP asumió, por ende, un alcance nacional e integró reivindicaciones y demandas de tono y contenido ideológicamente más radical que sus predecesoras. Desde su fundación en 1970 fue acentuando su prédica anticomunista y nacionalista y fue corriéndose cada vez más hacia tendencias derechistas nacionalistas y antiliberales. Aunque adhirió a la causa de la UN como forma de contrabalancear la influencia de la Universidad al tiempo que atendía una antigua y sentida demanda regional, su interés excedió estos asuntos al asumir una postura más general y enérgica en el combate contra lo que consideraban la decadencia económica, social y moral del país a causa del avance izquierdista en todos los ámbitos, especialmente en el de la enseñanza.⁷⁴² Cerró filas en torno al presidente Pacheco, apoyando su reelección en las elecciones de noviembre de 1971.

La JUP, junto a otros movimientos derechistas y con la connivencia de referentes derechistas de los partidos tradicionales, contribuyó con su discurso de fuerte tono moralista y con sus acciones a denunciar la penetración de las izquierdas en la Universidad y a señalar su asociación con las actividades subversivas. La violencia

⁷⁴¹ El obispo de Tacuarembó, Miguel Balaguer, y el cura párroco de Rocha, Mario Aquiles Sención, dirigía Parroquia de Nuestra señora de los Santos Remedios mandaron notas de apoyo al 2º. Congreso de la JUP. Ver *La Mañana. Edición del Interior*, 31 de diciembre de 1970, p.2 La lista completa se puede ver en: Bucheli, G., *O se está con la patria o se está contra ella*, pp. 179-180

⁷⁴² Jung, M. E., *La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista*

“revolucionaria”, sostenía, iba de la mano de la degradación de los valores morales a causa del avance del “materialismo ateo” y “comunista”. Así, por ejemplo, su retórica fácilmente coligaba la “erotomanía” —“esta obsesión por los problemas sexuales tan común” en los profesores de enseñanza secundaria”— con la “otra manía por la violencia y por la subversión”. Socavando la institución familiar, envileciendo al ser humano “al punto de transformarlo en un animal”, era como mejor se franqueaba “el camino al materialismo marxista”, concluían. En esta misma línea denunciaba la “otra perla del modernismo”: las drogas.

¿Cuál es el modernismo que se está inculcando a la juventud? Ruido, convulsión, histerismo, desaliño... y ahora drogas. [...] Hemos podido leer en las noticias policiales, la existencia de peñas juveniles entregadas al vicio y el consumo de cigarrillos integrados con marihuana.⁷⁴³

En este esquema, violencia, universidad, juventud y degradación moral formaban parte de un mismo paquete. La JUP, al igual que Orpade y otros movimientos, convergieron en la reacción conservadora ante una cultura juvenil de izquierdas asociada al “68 global”, que desafiaba el orden y el “estilo de vida” tradicional al subvertir las jerarquías vinculadas al orden familiar, de género y generacional. Sobre esta base la JUP mantuvo su campaña contra la Universidad, reclamando una y otra vez al PE la adopción de una posición más decidida ante una institución en la cual, como señalaba el diario colorado *La Mañana*, se llevaba adelante “una perseverante labor destructiva contra el propio pueblo que la sostiene y la paga”.⁷⁴⁴

En medio de este panorama, en noviembre de 1971 tuvieron lugar los comicios nacionales cuyos resultados arrojaron novedades dentro del mapa partidario. Por un lado, la consolidación de una nueva derecha radical, de cuño nacionalista y con fuertes reflejos antidemocráticos agrupados en torno a Pacheco (cuya reelección no prosperó) y Bordaberry dentro del PC y a Óscar Mario Aguerrondo en el PN. Asimismo, confirmaba el viraje neoliberal que venía procesando el quincismo liderado por Jorge Batlle Ibáñez y la emergencia, aunque muy marginal, de un tercer frente batllista. Por otro, ratificaba el corrimiento hacia el centro del Partido Nacional con el fortalecimiento

⁷⁴³ *La Mañana. Edición del Interior*, 22 de abril de 1971, p. 4

⁷⁴⁴ *La Mañana. Edición del Interior*. 11 de febrero de 1971, p. 3

de un sector liberal renovador con tintes desarrollistas dirigido por Wilson Ferreira Aldunate, que desplazó a la tradicional hegemonía de herreristas y ruralistas.⁷⁴⁵

Por su parte, el Frente Amplio logró concitar la adhesión de un 18,28 % del electorado nacional, superando ampliamente las votaciones que la izquierda había obtenido hasta el momento. Vale decir que a la luz de la experiencia de la Unión Popular en Chile, esta nueva formación político-partidaria se volvió particularmente amenazante para vastos sectores políticos.⁷⁴⁶ También, como han señalado los historiadores Gerardo Caetano y José Rilla, los resultados electorales demostraron que a través de las urnas no era posible dirimir los pleitos fundamentales, consolidando una situación de empate político en el marco de una acentuada fragmentación partidaria que se reflejó en el Parlamento.

En marzo de 1972, Bordaberry, que contaba con un escaso respaldo en la ciudadanía (22,8 % del electorado), ocupó la Presidencia. Desde el comienzo el flamante presidente fracasó en concretar respaldos políticos amplios y debió conformarse con un pacto político con el quincismo de Jorge Batlle (a cuyos técnicos neoliberales confió la conducción económica) y los entonces sectores minoritarios de la derecha del Partido Nacional, comprometiendo de ese modo la gobernabilidad.⁷⁴⁷ Con estos apoyos se implementó un duro reajuste económico orientado a recuperar los equilibrios macroeconómicos que redundó en una escalada inflacionaria y un aumento de la conflictividad social. Al mismo tiempo, profundizaba la dirección autoritaria y represiva que había llevado adelante Pacheco. Durante esta etapa, la violencia tanto de izquierda como de derecha y los enfrentamientos con la guerrilla se recrudecieron. En este marco, para la derecha más extrema como la que representaba la JUP no alcanzaba con las medidas implementadas hasta ese momento por el Gobierno, particularmente en el ámbito educativo, y reclamaba mayor intransigencia. En esta línea, se cuestionó al ministro de Educación y Cultura por retomar el diálogo con las autoridades universitarias y se exigieron acciones más duras hacia la institución. En un país “en guerra”, “lo primero que espera de este gobierno es que [la] gane”, decía un artículo de la JUP. Lo que se había hecho para frenar la situación de caos imperante en los centros educativos había demostrado ser insuficiente; no alcanzaban ni “leyes perfectas” ni las

⁷⁴⁵ Caetano, G. y Rilla y Caetano

⁷⁴⁶ Sobre 1971, Real de Azúa, C. *Partidos, política y poder*

⁷⁴⁷ Caetano, G., Rilla, J., pp. 301-305

invocaciones a una laicidad pretérita —“de la que s[o]lo se acuerdan nuestros abuelos”, decían—, tampoco innovaciones en los planes de estudio. “A esta altura a nuestra enseñanza, más falta le hace la escoba que la pluma”, agregaban.⁷⁴⁸

En los meses siguientes el deterioro económico y social se hizo incontrolable y con él la crisis política sumada a los desbordes autoritarios del Gobierno. Mientras tanto, las FF. AA. (Fuerzas Conjuntas), que actuaban cada vez con mayor independencia, consolidaron su poder político luego de su éxito en la represión a la guerrilla. También se generalizaron los ataques violentos de parte de la miríada de grupúsculos de derecha contra locales universitarios y las refriegas entre policías y manifestantes sindicales y estudiantiles dejaron heridos y muertos, al tiempo que desaparecían militantes de izquierda en manos de las fuerzas paramilitares (escuadrón de la muerte o comando cazatupamaros) que actuaron con el apoyo del Gobierno y que contaron entre sus integrantes a miembros de las agrupaciones derechistas. Así por ejemplo, en la madrugada del 30 de setiembre de 1972 alrededor de treinta integrantes del MRN, agrupación derechista vinculada a sectores del Partido Nacional, portando armas y municiones y vistiendo similares ropas que lucían el emblema de la organización, ingresó y desalojó por la fuerza el edificio central universitario. La intención de los invasores era probar y advertir a la opinión pública de los “delitos de subversión” que entendían se cometían al interior de la institución universitaria.⁷⁴⁹ En respuesta, el rector, los decanos y el CDC, que calificaron al MRN de fascista por su “disciplina orgánica, adiestramiento, empleo de armas y de costosos medios de intercomunicación, así como el uso de un símbolo inspirado en la falange española”, juzgaron este episodio como uno más de una persistente “campana provocativa” contra la educación en el mismo momento en que era presentado “un bastardo y desquiciante proyecto de ley de enseñanza [secundaria] y un proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo para la Enseñanza Pública que pretende reducirla a extremos que de ser aprobados significarán la culminación del proceso de su destrucción”.⁷⁵⁰

En efecto, en ese mismo momento, el Parlamento nacional discutía un proyecto por el cual se reformaba la institucionalidad de la enseñanza: quitaba potestades y disminuía

⁷⁴⁸ *La Mañana. Edición del Interior*, 2 de marzo de 1972, p. 3

⁷⁴⁹ *Actas CDC*, 30 de setiembre de 1972, p. 1084 y *Gaceta de la Universidad*, n.º 55 (octubre de 1972)

⁷⁵⁰ *Gaceta de la Universidad*, n.º 55 (octubre de 1972). Sobre la ley general de educación ver Romano, *De la Reforma al Proceso*

la autonomía de los consejos de las tres ramas de la enseñanza pública (primaria, secundaria y enseñanza técnica), que quedarían sujetos a un Consejo Nacional de Educación (CONAE). Ante los sucesos ocurridos contra la Universidad, el rector Maggiolo reclamó al Gobierno el máximo rigor en juzgar a los responsables, para así “evitar nuevos derramamientos de sangre”. En la misma línea, la FEUU relacionó el episodio con la escalada represiva contra la enseñanza. Invirtiendo los términos de la argumentación de las derechas, la FEUU sostenía que los llamados de medios de prensa afines (*Azul y Blanco*, *Radio Rural* y la prensa de circulación masiva de derecha, *El País* y *La Mañana*) a intervenir la casa de estudios y la acción de estas agrupaciones “fascistas” —que con la anuencia policial habían ocupado liceos y sedes universitarias y habían efectuado atentados contra estudiantes y organizaciones estudiantiles— estaban dirigidos a generar un clima de caos y desorden que justificaba la aplicación de la ley que restringía la autonomía de las ramas de enseñanza.⁷⁵¹

En suma, la Universidad fue presentada por las derechas como una amenaza creciente por su connivencia con los elementos subversivos. De esta forma, se apuntó a justificar y a naturalizar el ajuste autoritario que implementó el Gobierno, los operativos de las fuerzas represivas así como las acciones violentas de agrupaciones de derecha contra locales, militantes, sus docentes y sus autoridades. La lectura maniquea de la realidad impulsada desde el Poder Ejecutivo, los partidos y los medios de comunicación derechistas abonó la proclividad a la represión y a las salidas autoritarias como únicos mecanismos para contener el avance de la “subversión”, que incluía también a la protesta social.⁷⁵² En este contexto se fue extendiendo la percepción de que las instituciones democráticas eran ineficaces para hacer frente a los desafíos de la conspiración subversiva. “No creemos que la postura ingenua de la democracia sea la aconsejable. No creemos que las cosas se arreglen por la violencia. Pero sí que es preciso empezar a ajustar todos los resortes, para ir doblegando a este monstruo dañino que es la Universidad”, señalaba *Nuevo Amanecer*, novel semanario de la JUP.⁷⁵³ Se hizo visible para amplios actores sociales y políticos vinculados a este campo político ideológico que la Universidad de la República no podía ser reencauzada.

⁷⁵¹ *Ibíd*

⁷⁵² *Nuevo Amanecer*, 5 de octubre de 1972, p. 7

⁷⁵³ *Nuevo Amanecer*, 5 de octubre de 1972, p. 9

En este escenario cada vez más “conflictivo y rupturista”, en palabras de Gerardo Caetano, finalmente se produjo el golpe de Estado cívico-militar en dos tiempos, que tuvo su comienzo el 9 de febrero, cuando los mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea rechazaron la designación del general Antonio Francese como nuevo ministro de Defensa y culminó el 27 de junio de 1973, momento en que el presidente Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las cámaras.⁷⁵⁴ Se cerraba así un largo proceso, que Álvaro Rico ha calificado de “camino democrático hacia la dictadura”, y se abría una etapa de inédita y de brutal represión que duró doce años.

Pese a los reclamos de los sectores derechistas más radicales que acompañaron el golpe de Estado, la Universidad de la República no fue intervenida inmediatamente. Una gran parte de la comunidad universitaria se sumó entonces al movimiento opositor y se plegó a la huelga general decretada por la CNT que se mantuvo durante quince días. Tras el levantamiento de la huelga, y pese a la represión, el acoso policial, las detenciones y los asesinatos de estudiantes, la institución retomó sus actividades y decidió convocar a las elecciones previstas para setiembre de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Educación General que había sido sancionada por el Parlamento en febrero de ese año.

Mientras esto ocurría, la JUP y los sectores golpistas continuaron exigiendo una acción más decisiva ante “la corrupción” que según ellos imperaba en la Universidad. Aquella organización estaba guiada, decían, “por dios Todopoderoso” y por los ideales de José Artigas, a quien calificaban como “nuestro héroe”. Clamaban por la realización de “la ansiada Revolución Nacional” y recordaban que en el interior de “cada una de las facultades” se había gestado “la guerrilla tupamara antinacional, por medio de contracursos”. A “los estudiantes débiles y mal preparados” se les había inculcado, decían, “un sentimiento extranjerizante [...] camuflado con un falso sentido de justicia” que había conducido a muchos jóvenes “a una guerra cruel, traicionera e impropia de hombres de esta tierra”. Alertaban al “Pueblo Oriental, todo, y en especial a la oficialidad del Ejército Nacional” acerca de la “maniobra” que se estaba tramando en “oscuros cónclaves” con el propósito de aislar a las FF. AA. de los “civiles que le hacen

⁷⁵⁴ Caetano, G.. *Historia Mínima de Uruguay* (Montevideo: El Colegio de México, 2019), p. 191

de nexos con el pueblo uruguayo, que apoya desinteresadamente el proceso de recuperación nacional”.⁷⁵⁵

En agosto comenzaron los preparativos para los comicios y el proceso de presentación de listas. Además de las tradicionales agrupaciones gremiales, los partidos tradicionales decidieron conformar listas propias y estuvieron representados a través del Movimiento Universitario Nacionalista (MUN), identificado con el sector “Por la Patria” (Partido Nacional) liderado por Ferreira Aldunate, entonces exiliado en Buenos Aires y la Agrupación Batllista Universitaria (ABU), vinculada al sector de Batlle Ibáñez (PC). En la oportunidad, integrantes de la ABU declararon al diario *El País* que “tenemos una Universidad donde la enseñanza se encara en forma errónea, por la capciosidad ideológica de quienes se han autoerigidos en dueños absolutos”.⁷⁵⁶ Así el MUN y la ABU apostaron a competir con las mayorías universitarias y los tradicionales gremios controlados mayormente por las fuerzas afines a la izquierda, especialmente la FEUU, pero asumieron claras posturas opositoras al régimen. Esto generó denuncias y protestas desde los ámbitos derechistas más radicalizados y afines a la intervención de la casa de estudios. Así, por ejemplo, en agosto el MDU emitió un manifiesto firmado por sus principales autoridades, el doctor Amorín y el arquitecto Menchaca, en rechazo a la convocatoria a elecciones y afirmaban:

constituimos la mayoría democrática de los profesionales universitarios, como lo demostramos, sin voto obligatorio, en setiembre de 1963. Y sin embargo, tuvimos que asistir impotentes al derrumbe de la Universidad, ante la cómoda indiferencia y desinterés de nuestros legisladores y gobernantes. Asumimos en cambio la triste responsabilidad de esclarecer ahora a una asombrada opinión pública lo que fue y lo que es la Universidad⁷⁵⁷

Una vez más insistían en que a causa de la Ley Orgánica de 1958 la institución universitaria era dirigida por el “orden docente ideológico, “la tiranía de la FEUU” sometida a “jerarquías internacionales” y los egresados “absorbidos por los ‘colaboracionistas’ de esta caduca Universidad”. Se lamentaba además de la participación en el proceso electoral de asociaciones con “con cintillos partidarios”, en

⁷⁵⁵ *La Mañana*, 29 de julio de 1973. “La J.U.P denuncia una acción diversionista” En DNII, carpeta n.º 6261

⁷⁵⁶ *El País*, 1 de setiembre de 1973 citado en Rico, Á, óp. cit.

⁷⁵⁷ *El País*, 1 de setiembre de 1973, citado en Rico, Á. *La Universidad de la República. Desde el golpe de Estado a la intervención. Cronología de hechos, documentos y testimonios junio a diciembre de 1973.* (Montevideo: CEIU-FHCE-Udelar, 2003), p. 127

clara alusión al MUN y la ABU. En una tesis similar, la agrupación Odontología Libre, integrante del MDU, emitía una declaración —firmada por los doctores Miguel Blanzaco, Juan C. Doyenart y Oscar Gaynicotche— en la cual afirmaban que por la vía electoral y en el marco de la Ley Orgánica vigente la Facultad no era “recuperable para la Democracia” y exhortaban a votar en blanco en repudio “al fanatismo marxista” que había alejado a sus “más auténticos valores docentes” y había silenciado a buena parte del estudiantado universitario.⁷⁵⁸ Los firmantes de ambos manifiestos eran viejos militantes de las agrupaciones autodenominadas “demócratas”. Según Van Aken, Blanzaco estaba vinculado al diario *El Día* y al batllismo de derecha nucleado en la lista 14. Fue directivo del Mondel y luego del MEDL. Asimismo, figura en la documentación de la DNII como integrante y fundador en 1960 de la Liga Oriental Anticomunista (LOA).⁷⁵⁹ De Doyenart solo sabemos que a comienzos de los sesenta estuvo vinculado al batllismo conservador a través de la lista de los hermanos Batlle Pacheco. No disponemos de datos sobre la filiación y trayectoria de Gaynicotche.⁷⁶⁰

En simultáneo, un grupo denominado Estudiantes Nacionales, en sintonía con el MDU, cuestionaron a las agrupaciones universitarias de los partidos tradicionales, orientadas por “marxistas” o “marxistoides” y dirigidos por los “demagogos” Ferreira Aldunate y Batlle Ibáñez. Así el MDU, Estudiantes Nacionales (EN) y la JUP llamaron a votar en blanco.⁷⁶¹ También el sector universitario del movimiento ultraconservador y católico Tradición, Familia y Propiedad, en un extenso artículo publicado por el diario *El País*, atacó el acto electoral. Bajo el título “Las elecciones universitarias: ni elecciones ni universitarias”, cuestionó la ausencia de verdaderas opciones “antiizquierdistas”, afirmando que se estaba ante un “fraude electoral institucionalizado” donde claramente “la izquierda “triunfará directamente o indirectamente”. En la oportunidad “los electores estarán enfrentados a una de dos: o creyendo votar contra la izquierda lo harán a favor de ella a través de listas camufladas

⁷⁵⁸ Ibid, pp. 127-128

⁷⁵⁹ “Informe sobre “organizaciones anticomunistas, no oficiales”, abril de 1962, Archivo DNII, Carpeta n.º 674.

⁷⁶⁰ Dato tomado de *Unidad Colorada, órgano colorado independiente*, año I, n.º 3, 23 de noviembre de 1962

⁷⁶¹ En *Nuevo Amanecer*, 16 de agosto de 1973, p. 1 y 30 de agosto de 1973, p. 2 “Del Movimiento Democrático Universitarios a la opinión pública”. citados por Bucheli, G. “O se está con la Patria, o se está contra ella”, p. 157

(MUN y ABU) o sino votar por la izquierda, atraídos, no por lo que esta es, sino por lo que ésta muestra”.⁷⁶²

Las derechas representadas por el diario *El País*, en cambio, vieron en el acto eleccionario, que por primera vez se realizaba con voto obligatorio y secreto, una oportunidad para que los sectores de los partidos tradicionales disputaran la conducción universitaria en aras de modificar el rumbo ideológico de la Universidad. En esa línea, Washington Beltrán dejaba sentada su posición en una nota editorial de aquel medio de prensa. En ella se alejaba de las posturas de la derecha nacionalista y antidemocrática y convocaba a votar a las listas de los partidos tradicionales, expresando su apoyo al MUN que, en su opinión, recogía “las mejores tradiciones de un partido que fue abanderado de la causa universitaria”.⁷⁶³

La campaña electoral universitaria se produjo en medio de incidentes contra la institución. El 3 de setiembre, militantes derechistas invadieron una vez más el edificio central con palos y cachiporras y destruyeron carteleras y propaganda sobre las elecciones.⁷⁶⁴ Al día siguiente fue asesinado Hugo Leonardo de los Santos, un estudiante de agronomía, quien murió a causa de las torturas que recibió, solo por mencionar algunos de los tantos episodios que dominaron esos días y marcaron el clima de incertidumbre y violencia que se vivía. El 12 de setiembre finalmente se realizaron las elecciones universitarias con un claro triunfo de las listas opositoras, constituyendo una derrota para el régimen y agravando las denuncias y los ataques de las derechas hacia la institución. Resultaba claro que esta situación de relativa apertura iba contra los planes del gobierno de facto de acallar la disidencia y no duraría mucho tiempo.

En medio de los ataques de violencia contra locales y militantes universitarios, con cientos de detenidos, heridos y muertes de de estudiantes, se preparó el terreno para la intervención a la Universidad. El 27 de octubre, dos días después de que la Corte Electoral emitiera los resultados electorales definitivos, explotó una bomba en la Facultad de Ingeniería en un confuso episodio en el que murió el estudiante Marcos Caridad Jourdan, militante de los Grupos de Acción Unificadora (GAU). Al otro día, las autoridades dictatoriales emitieron el decreto n.º 921/973 que estableció la intervención

⁷⁶² *El País*, 3 de setiembre de 1973, p. 8 En DNII, carpeta n.º 6126, Tradición, Familia y Propiedad, mayo de 1974

⁷⁶³ *El País*, 7 de setiembre de 1973. En Rico, Á., p. 134

⁷⁶⁴ En Rico, Á. *La Universidad...*, p. 128

de la Universidad y la puso bajo el control directo del Ministerio de Educación y Cultura al tiempo que suspendió toda la actividad académica y ordenó el arresto de los miembros del CDC.⁷⁶⁵

El alcance de los apoyos con que fue recibida esta decisión da cuenta de este proceso de confluencia de las distintas vertientes del espectro derechista. Según la JUP la intervención “fue la medida más trascendente de los últimos años, más importante que la clausura del [P]arlamento, más eficaz que la disolución de la CNT, el paso previo a todo el programa de reconstrucción nacional”.⁷⁶⁶ Por su parte, el semanario *Búsqueda*, revista que reunía a economistas liberales en su mayoría afines a los partidos tradicionales que habían permanecido marginados del ámbito universitario, celebró el fin de la Universidad “marxista” y “totalitaria”. Bajo el título “La Universidad ha muerto, ¡Vivan las Universidades!”, destacaba que ella había “muerto en su ley: mientras fabricaba bombas”. De hecho, decían, hacía mucho que la “difunta” Universidad “había dejado de manipular ideas, y tenía las manos llenas, por regla general, de explosivos y proyectiles”. “Nuestros vándalos hacían gala de su barbarie ante el beneplácito del señor del palacio y los plácemes del deán de la catedral”, señalaban estos exponentes del neoliberalismo vernáculo.

En esta línea de pensamiento, ante tal estado de cosas y aún siendo contrarios al control de las instituciones universitarias por el Poder Ejecutivo, la intervención se presentó como la única salida posible, pero aclaraban que les servía “como régimen de emergencia”.⁷⁶⁷

Como se dijo, al igual que ocurrió en otros espacios de la administración pública, durante la dictadura la dirección universitaria se mantuvo en manos de civiles, docentes en su mayoría, que tenían trayectoria en la institución. Los decanos y rectores nombrados por las autoridades interventoras eran (o habían sido) parte del cuerpo docente de las instituciones y habían desarrollado sus carreras en los propios servicios. La mayoría había ocupado posiciones directivas e integrado el cogobierno universitario durante las décadas anteriores y, como se vio, a partir de la aplicación de la Ley

⁷⁶⁵ Decreto n.º 921/973

⁷⁶⁶ *Nuevo Amanecer*, 1 de noviembre de 1973. “El Ejército Nacional derrumbó el mito de la autonomía universitaria”, citado por Bucheli, G., óp. cit., p. 158

⁷⁶⁷ *Búsqueda*, Montevideo, n.º 21-22 (setiembre-octubre de 1973), pp. 33-35

Orgánica fueron paulatinamente marginados por su oposición a las orientaciones de las autoridades universitarias.⁷⁶⁸

Fue el caso analizado del profesor de historia Edmundo Narancio, entonces ministro de Educación y Cultura designado y, a la par, primer rector interventor interino de la Universidad, quien había sido alejado de su cargo de director del Instituto de Investigaciones Históricas de la FHC a comienzos de los sesenta y, tras las diferencias suscitadas, mantuvo una constante prédica contra la institución.⁷⁶⁹ Otros nombres a destacar en este período: Jorge Anselmi (segundo rector interventor), Mario Berta (Psicología), Luis Sayagués Laso (Derecho), Gonzalo Fernández (Medicina), Norberto Faroppa (Ingeniería), Hugo C. Amorín (Odontología), José Delfino (Química), Nilo Berchesi (Ciencias Económicas). Todos ellos habían sido docentes y habían manifestado sus disidencias con el rumbo que había tomado la institución. Algunos, como Amorín, habían sido declarados enemigos de la conducción anterior e integrantes de las llamadas agrupaciones “demócratas”. La intervención les dio la oportunidad de reasumir puestos protagónicos en la conducción de la Universidad.⁷⁷⁰

⁷⁶⁸ Markarian, V. “La Universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-1984)” pp. 121-152

⁷⁶⁹ París de Oddone, B. (ed.). *Historia y memoria: Medio siglo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1945-1995* (Montevideo: FHCE, 1995)

⁷⁷⁰ Markarian, V. “La Universidad intervenida”

CONCLUSIONES

El recorrido realizado hasta aquí buscó reconstruir las posiciones, ideas y propuestas de un conjunto de actores ubicados a la derecha del espectro político en relación con la Universidad de la República, en una coyuntura que empezaba mostrar los efectos del estancamiento económico y el agotamiento del modelo de desarrollo que había primado hasta mediados del siglo XX. Este proceso estuvo acompañado del aumento del malestar de buena parte de la población y, como consecuencia, de una creciente conflictividad y protesta social, capitalizada por unas izquierdas que se radicalizaban a causa del impacto de la Revolución cubana. En contrapartida se produjo un movimiento de reacción derechista desde el Estado, los sectores conservadores de los partidos Nacional y Colorado y la sociedad para impedir los intentos de subvertir el orden social, político y cultural predominante. La aprobación en 1958 de una nueva Ley Orgánica para la Universidad, que consagró su autonomía y la participación de un movimiento estudiantil cada vez más combativo en su dirección, el giro a la derecha del Gobierno del Partido Nacional y la entrada a pleno de América Latina y de Uruguay en las dinámicas de la Guerra Fría atravesaron los debates en torno al futuro de la educación superior, su papel social y su diseño institucional.

Entre 1958 y 1973, agrupaciones de la derecha partidaria, sectores católicos, movimientos de estudiantes, grupos de egresados y docentes universitarios unieron esfuerzos para frenar lo que entendían como la “izquierdización” de esa casa de estudios. También la diplomacia estadounidense expresó en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación universitaria y su voluntad de influir en la reforma de sus estructuras. Estos sectores advirtieron sobre los efectos de la masificación estudiantil, criticaron el perfil “doctoral” y “academicista” y, sobre todo, se alzaron ante la “politización” de los centros de estudios.

Paradas en la vereda de enfrente, y de modo similar al llamado reformismo universitario, las expresiones de derecha tejieron redes de solidaridad coyunturales —y por eso mismo cambiantes—, elaboraron un discurso propio sobre la Universidad —que poco a poco se fue asociando al “enemigo interno”— y concibieron formas alternativas respecto a su papel en la sociedad. Oscilando entre la reacción y la propuesta, una buena

parte de este campo político-ideológico, de manera convergente con el incremento de la polarización política, fue concibiendo un programa de modernización universitaria cuyo objetivo era adecuar la enseñanza superior a las necesidades del “desarrollo nacional”.

Es claro que estos procesos formaron parte de un movimiento más general de revisión del papel de las universidades en el continente latinoamericano y en el mundo. Desde la segunda posguerra el conocimiento y las instituciones que lo producían fueron concebidos en medios académicos, intelectuales y políticos —así como por organismos internacionales y agencias gubernamentales— como factores estratégicos para el desarrollo o los procesos de transformación social. El desarrollismo que “estaba en el aire” y las teorías de la modernización en auge en las ciencias sociales anglosajonas contribuyeron a instalar estas ideas, que ambientaron reformas universitarias.

Asimismo, en los años sesenta la llamada “universidad latinoamericana” —en alusión a la singular combinación del diseño napoleónico y el legado reformista cordobés— comenzó a ser fuertemente cuestionada a causa de los problemas mencionados: superpoblación estudiantil, deterioro de la calidad académica y politización de los claustros. Muy especialmente, las universidades públicas estuvieron en la mira de las élites dirigentes y de los Gobiernos, que fueron retirándoles su apoyo. Se favoreció así un proceso de diversificación de la educación superior con la creación de nuevas universidades e instituciones de educación superior, lo que acusó un marcado avance del sector privado.

También en Uruguay un amplio espectro de actores y fuerzas de diversos signos ideológicos coincidieron en que la Universidad debía revisar sus orientaciones generales e implementar cambios profundos. Las discrepancias se manifestaron en relación con la dirección de esos cambios, dando cuenta de distintas visiones académicas así como intereses locales, sectoriales y adscripciones político-ideológicas. Por tanto, la progresiva politización de los debates en y sobre la Universidad puso en evidencia no solo la existencia de tendencias académicas divergentes sino que confrontó visiones ideológicas y políticas opuestas. La discusión sobre los modelos universitarios condensó, además, una serie de tópicos más amplios como el papel del Estado en la dirección de la educación, los alcances de la iniciativa privada, la relación entre ciencia básica y conocimiento aplicado y la laicidad y sus cambiantes sentidos. De modo más general abarcó también la relación entre el país agrario e industrial, el impulso al sector

agropecuario y la función estatal en la conducción del desarrollo y el planeamiento económico. La única universidad del país estuvo en el centro de unas polémicas que pusieron en cuestión cuál debía ser su contribución para dilucidar e intervenir en algunos de estos asuntos y, en última instancia, su función en una sociedad entonces en crisis y proceso de cambio. Esas polémicas estuvieron condicionadas en buena medida por el cambiante vínculo entre las autoridades nacionales y universitarias a lo largo del período que nos ocupa. Se observa así que con la agudización de los procesos de radicalización política se fueron constriñendo y endureciendo las comunicaciones entre el Poder Ejecutivo y la Universidad.

Se eligió examinar dos iniciativas gubernamentales —no procedentes de las contiendas políticas en su sentido más estricto— que apuntaron a definir orientaciones generales sobre la ciencia nacional y el “desarrollo económico y social” así como una institucionalidad que las llevaría adelante. El análisis de la creación del Conicyt, con el cometido de coordinar y fomentar la actividad científica y tecnológica, y de la CIDE, un organismo técnico de planificación del desarrollo, permitió capturar la complejidad de la relación entre las autoridades universitarias y el Poder Ejecutivo en la convulsionada primera mitad de la década del sesenta. En un movimiento pendular, este vínculo pasó por momentos de aproximación y colaboración y por otros de conflicto y enfrentamiento. Para una buena parte de los universitarios, los nuevos organismos ofrecieron una oportunidad para que la institución pudiera intervenir en la definición de políticas públicas en temas que se entendía eran de su competencia; para otros, la forma en que el Gobierno los instituyó expresaba la voluntad de marginar a la Universidad como parte de una ofensiva general del poder político contra ella. Ambos procesos, acompañados de amplias discusiones y en algunos casos de disputas, involucraron campos disciplinares muy distintos que se encontraban, además, en disímiles estadios de profesionalización y desarrollo institucional, determinando las posturas de los actores que participaron en ellas.

En el caso del Conicyt las discusiones se adentraron en el terreno de las ciencias básicas, representadas por la AUPC y cuyo núcleo duro se encontraba radicado en la Facultad de Ingeniería. De allí emergió el grupo de docentes que, en alianza con el movimiento estudiantil, apostó a una transformación radical de la Universidad y de sus funciones sociales. Base del llamado reformismo universitario, este sector se transformó

en el blanco de la oposición de la derecha conservadora universitaria y extrauniversitaria, tanto por sus propuestas académicas como por su deriva a la izquierda. La instalación del Conicyt enfrentó duramente a las fuerzas renovadoras de la Universidad con el Gobierno. Si bien la creación de un centro de este tipo era una cara aspiración del reformismo, en línea con experiencias regionales e internacionales, el decreto gubernamental despertó por su forma y su contenido un generalizado rechazo y terminó provocando un duro y prolongado enfrentamiento. Se reeditó así una antigua discusión acerca de las posibilidades de desarrollar producción científica original en un país de escasos recursos y pequeño en términos geopolíticos y sobre la necesidad de que el Estado canalizara recursos para ello. Los debates en relación a estas temáticas pusieron en evidencia distintas visiones acerca de las prioridades de una agenda de investigación: la de quienes defendían el cultivo de la ciencia aplicada o práctica con aplicación directa a las áreas productivas y la de aquellos que, en cambio, privilegiaban la ciencia básica como condición para un desarrollo nacional autónomo. Ambas concepciones tuvieron adherentes, como vimos, al interior de la comunidad universitaria. En ese marco se cuestionó el papel rector que le cabía a la Universidad de la República en el fomento a la actividad científica a nivel nacional. En buena medida, la derecha conservadora se reafirmó en la creencia de que la función principal de la institución consistía en la enseñanza para el ejercicio profesional; la investigación científica debía correr por otros carriles independientes.

Es claro que esta concepción no era nueva en Uruguay ni en la región. Formaba parte del modelo tradicional de universidad asociado a la formación de los cuadros estatales y profesionales liberales que había establecido hasta ese momento unas prioridades, formas y modos funcionamiento al interior de la casa de estudios. Un conjunto importante de docentes, que compartía su labor universitaria con su actividad profesional privada, se mantuvo apegado al *statu quo*. La resistencia que manifestaron a los cambios promovidos por los “reformistas” no respondía necesariamente a adscripciones político-partidarias. Vale destacar que las críticas al profesionalismo habían sido recurrentes a lo largo de todo el siglo XX, pero a partir de la mitad de los años cincuenta cobraron mayor fuerza debido al ascenso de la “generación reformista”, gracias a la alianza con los estudiantes. La creciente incidencia del reformismo en los

órganos de cogobierno ambientó transformaciones en las orientaciones generales de la casa de estudios que no siempre fueron bienvenidas.

La reacción conservadora, ante las declinaciones hacia la izquierda del reformismo y en un contexto más general de combate al “comunismo”, ambientó el enlazamiento de los debates académicos y político-institucionales con aquellos que se estaban procesando en la arena político-ideológica. Esto impactó en parte en la querrela entre las autoridades y buena parte de la comunidad universitaria y el Gobierno en relación con el futuro de la ciencia en el país. Las diatribas contra la Universidad a causa de la actitud que esta asumió frente al Conicyt, provenientes de las fuerzas conservadoras de los partidos tradicionales, se tiñeron de un lenguaje —y echaron mano a unas argumentaciones— propias de la lógica amigo-enemigo de la Guerra Fría. Sin embargo, queda en evidencia que la demarcación izquierda-derecha no explica la diversidad de alineamientos.

En contraste, desde los años cincuenta las ciencias sociales se convirtieron en un campo en expansión en un momento signado por el auge del desarrollismo y el impacto de la renovación disciplinar que se estaba llevando a cabo en ámbitos académicos estadounidenses. La CIDE sintetizó, por tanto, las expectativas ante las nuevas técnicas para diagnosticar los problemas sociales e intervenir sobre ellos. Es claro que estuvo lejos de funcionar como una usina de pensamiento de las derechas. Alcanzó, en cambio, una amplia llegada a ámbitos muy diversos dentro del espacio político-ideológico e intelectual. Si bien surgió al calor de la Alianza para el Progreso, no fue asociada inicialmente con ese programa del Gobierno estadounidense, quedando a resguardo de las críticas antiimperialistas. Contribuyó a ello la pluralidad ideológica y disciplinar que caracterizó la composición de sus equipos. La Universidad de la República, por otra parte, era la única institución capaz de proveer los técnicos necesarios mientras en su interior continuaba librándose la batalla por afianzar espacios de formación e investigación en esas áreas. La experiencia de la planificación, por tanto, constituyó un foco de irradiación de las ideas del desarrollo en ámbitos políticos e intelectuales a la vez que abonó la emergencia y consolidación de los científicos sociales como agentes con legitimidad académica y social para intervenir en los problemas nacionales, ampliando la noción del conocimiento técnico y de la figura asociada: el *técnico* o *experto*. Como señala Carlos Altamirano, la novedad no radicó en los asuntos en

discusión —el papel del Estado, la industrialización o el planeamiento— sino en el discurso. Es decir, lo nuevo era la emergencia de un cuerpo analítico, un vocabulario teórico y un campo de especialización y producción intelectual que irradió un conjunto de ideas que permeó a la sociedad, al campo intelectual y a la política. En ese sentido, bien puede afirmarse que en este período el “reformismo” universitario y el desarrollismo caminaron de la mano. Esta sintonía iba a modificarse radicalmente pasando la mitad de la década.⁷⁷¹

El análisis detenido de estos dos procesos permite sostener que hasta mediados de los años sesenta las actitudes y las alianzas que se fueron entretejiendo estuvieron más condicionadas por las trayectorias disciplinares que por las diferencias ideológicas, dejando en evidencia las imbricaciones así como los márgenes de autonomía entre el campo académico y el político. Es claro que, a pesar de la creciente politización de los debates académicos, las actitudes de los universitarios no siempre coincidieron con aquellos asumidos a una escala mayor de la política nacional. Incidieron en ellas además los sistemas de prestigio y reconocimiento propios del campo académico, que no tuvieron —ni tienen— un correlato directo en las afinidades políticas. Así, la dicotomía derecha-izquierda como clave explicativa se vuelve insuficiente para entender fenómenos que presentaron una mayor complejidad y en los cuales se superpusieron intereses, apuestas y expectativas de diverso tipo, muchas veces ajenas a la contienda política en un sentido lato.

Esto no significa que los dilemas ideológicos de la coyuntura no influyeran en los procesos aquí reseñados. En estos años, en la medida que avanzaba la polarización social y política, las visiones en pugna fueron atravesadas por las concepciones —y argumentaciones— político-ideológicas. Por otra parte, existió un interés de las derechas y del Gobierno nacional por limitar el radio de influencia y de acción de una Universidad que, cada vez más, fue identificada como parte del “enemigo interno”. Hasta mediados los años sesenta, sin embargo, hubo márgenes para la negociación así como canales de diálogo entre el poder político y las autoridades universitarias, que quedarían cancelados a fines de la década.

Los diagnósticos de la CIDE sobre el sector educativo reforzaron y dieron nuevos sentidos a la vinculación entre desarrollo y educación, que se volvió central en los

⁷⁷¹ Altamirano, C., *Desarrollo y desarrollistas*

debates analizados. Las derechas, en términos generales, también fueron influidas por las ideas del desarrollo y del lenguaje de la planificación. En los hechos, sus propuestas de reformulación de la enseñanza universitaria se sustentaron en algunas de las conclusiones de este organismo. Se fue asentando así una concepción que privilegió el conocimiento *técnico*, pretendidamente neutral y apolítico, de carácter práctico y aplicado. En este período la palabra técnico sufrió modificaciones sustantivas, ampliando sus significaciones y abarcando nuevas especializaciones. La renovación teórico-metodológica que experimentaron las ciencias sociales a partir de la segunda posguerra, las nuevas pautas de profesionalización, la relación con el poder político y la intervención de organismos internacionales fueron modelando un nuevo *técnico* y, por tanto, una nueva acepción del término. *Técnico*, al igual que otras palabras que formaban parte de una similar cadena semántica (*experto* y *tecnócrata*), se cargó de connotaciones positivas y negativas en el transcurso de unas décadas que se nos presentan ricas en debates sobre el papel del conocimiento social así como de sus exponentes. Se observa, además, cómo las categorías de *técnico*, *intelectual*, *científico* o *universitario* convivieron en mutua contaminación, pero también en conflicto y tensión. El tipo de “intelectual desarrollista”, en palabras de Ángel Rama, fue asimilado al *técnico* emergente, despolitizado y sujeto a los centros de poder, nacionales o internacionales, y que actuaba en beneficio de “fuerzas conservadoras” locales. Promediando los sesenta una buena parte de la izquierda se alejó del desarrollismo para abrazar las teorías de la dependencia.

La CIDE también dio visibilidad a un grupo de economistas liberales o que viraron hacia el liberalismo, en su mayoría cercanos a los partidos tradicionales, y minoritarios en el ámbito universitario. Tras la cancelación de la experiencia planificadora, estos no retornaron a la Universidad y, en cambio, se insertaron entre los cuadros de Gobierno vinculados a la conducción de la economía del país. Estos tecnócratas estuvieron al frente del diseño e implementación de las políticas económicas de corte liberal de los Gobiernos de Jorge Pacheco y de Juan María Bordaberry así como de las que más tarde llevó adelante la dictadura uruguaya. Con el golpe de Estado muchos de ellos retornaron a la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas, participando en los cambios que experimentó la orientación de la disciplina económica durante la intervención.

Adoptando parte de los planteos liberales desde tiendas derechistas se desplegó un discurso que priorizó el criterio de eficiencia y la adecuación al mercado para superar el estancamiento e iniciar el tránsito de la modernización. Esta forma de concebir el desarrollo económico exigía cambios en el sistema educativo y, en particular, en la enseñanza universitaria, cuyo objetivo principal debía ser formar *técnicos* que, en sintonía con estos criterios, actuaran directamente en la producción. Las disputas sobre el papel del conocimiento *técnico* y de los *técnicos* y qué sentidos le asignaron diversos actores para superar el “estancamiento productivo” —otro concepto que se instaló en el discurso de la época— impactaron en los debates al interior de la Universidad y entre esta y el poder político sobre el futuro de la educación superior. La noción de que la Universidad debía dedicarse a la capacitación de perfiles técnicos con aplicación directa en el sector productivo fue ganando fuerza en la prédica y las propuestas promovidas por algunos sectores de la derecha en un momento de generalizada y fuerte apuesta por soluciones que privilegiaban las dimensiones *técnicas* sobre las políticas.

En estrecha relación con esos debates, a comienzos de los años sesenta emergió con fuerza el proyecto de crear una universidad privada y católica. La propuesta, procedente del catolicismo conservador con el apoyo del Partido Nacional, causó gran impacto en ámbitos políticos y universitarios al impugnar el histórico monopolio de la Universidad de la República. Por un lado, reeditó las discusiones sobre el lugar del Estado y la iniciativa privada en relación con la educación; por otro, avivó antiguos reclamos del catolicismo vernáculo por avanzar en el terreno educativo. Lo novedoso en esta etapa fue su apuesta al sector universitario que, por otra parte, se ubicó en un movimiento más general de la Iglesia católica en América Latina por ganar espacios frente al sostenido avance secularizador y frenar el peligro que para ellos representaban el protestantismo y el comunismo. La incorporación del sector privado en el terreno de la formación terciaria fungía, decían, como un complemento del sector público y era una alternativa para resolver los problemas que aquejaban a la Universidad. Algunos de sus propulsores suscribieron a la visión productivista de la enseñanza superior, que ponderaba la formación *técnica* y asociaba educación con desempeño económico y productividad. El proyecto preveía además la instalación de sedes fuera de la capital, tanto para atender las necesidades del sector productivo afincado mayormente en la actividad agropecuaria como para cubrir las persistentes demandas de variados actores locales por expandir la

cobertura geográfica universitaria. Claramente el proyecto cruzó motivaciones de diversa índole: ideológicas, sectoriales y localistas. La diversificación de la educación superior y el perfil técnico y aplicado del conocimiento de la enseñanza superior atravesó las polémicas hasta aquí reseñadas. Las ideas esbozadas constituyeron un anticipo de los fundamentos del proyecto de Universidad del Norte (UN), luego reconfigurado en la Universidad para el desarrollo.

A lo largo del período se observa la convergencia de un sector conservador, que no cuestionó el perfil profesionalista de la Universidad y se enfocó en la limpieza ideológica de los claustros, con otro de perfil modernizante, en el sentido utilizado por Rodrigo Patto Sá Motta, que apostó además a la transformación radical de las estructuras académicas. A impulsos de esa derecha modernizadora, influenciada por los desarrollismos y las teorías de la modernización, se fue conformando un programa de cambios que ponderó la formación técnica orientada al mercado. Este programa logró su formulación acabada en 1968, coincidiendo con un momento más álgido de la confrontación política y social y de la drástica ruptura de las relaciones entre el Gobierno y las autoridades universitarias.

Ese año, como se analizó, en medio del ciclo de movilizaciones estudiantiles que culminó con los primeros estudiantes muertos por la represión, un grupo de ciudadanos e instituciones públicas y privadas de Salto, claramente alineado con las derechas, fundó el Movimiento pro Universidad del Norte (MpUN). El propósito era impulsar la creación de otra universidad, radicada en esa ciudad, opuesta a la Universidad de la República tanto en contenidos académicos como en su orientación político-ideológica. Expresó además la cooptación por parte de las derechas de una vieja aspiración localista que originalmente no había tenido adscripción político-partidaria. Dicho de otro modo, el proyecto enlazaba la preocupación por el tipo de universidad que estos sectores creían que necesitaba el país, la voluntad por la depuración ideológica y los reclamos dirigidos a corregir las desigualdades entre estudiantes de Montevideo y del interior en el acceso a la enseñanza superior. En esta oportunidad, el proyecto logró trasvasar los marcos locales y consiguió el respaldo de un amplio abanico de expresiones de derecha social y partidaria a nivel nacional.

El MpUN reunió a un conjunto heterogéneo de figuras y sectores provenientes de diversas tradiciones político-ideológicas, con intereses y proyectos diversos unidos por

la percepción de amenaza al orden socio-político ante el avance del “comunismo” y el “izquierdismo” en general. En este sentido, constituye un punto de observación privilegiado de los cambios y reconfiguraciones que se produjeron en el seno de las derechas de esos años.

Las fundamentaciones esgrimidas por los partidarios de la UN resultan elocuentes respecto al rol que en esos años buena parte de la derecha política adjudicó a la universidad y a los *técnicos* para el tan mentado desarrollo nacional. Da cuenta además de las vinculaciones entre el discurso desarrollista (en su versión de derecha) y la concepción de este nuevo centro universitario, su organización y sus fines. Desde una perspectiva que entrelazaba educación y economía se fue modelando un proyecto modernizador orientado a adecuar la enseñanza superior a las necesidades económicas del país y a sus posibilidades ocupacionales. Los planteos sobre la UN, reelaborados por Federico García Capurro, ministro de Cultura de la época, no fueron novedosos sino que se insertaron en una concepción más general de modernización universitaria inspirada en el modelo estadounidense y preconizado por sectores de las derechas a nivel regional y global. Los contenidos de los programas impulsados en el ámbito doméstico fueron concurrentes con las políticas educativas promovidas por EEUU para América Latina, viabilizadas a través de una diversidad de programas de asistencia que proveyeron de recursos financieros, asesoramiento y personal técnico. La actuación de los consultores de las agencias de ese país y las recomendaciones de organismos internacionales constituyeron vehículos privilegiados para la difusión de una agenda de reforma de las universidades.

Fue clave la labor del asesor estadounidense Rudolph Atcon en la propagación y promoción de un modelo basado en criterios de eficiencia y productividad y orientado al mercado. Desde finales de los años cincuenta y a lo largo de las décadas siguientes colaboró en la elaboración de diagnósticos y planes en numerosas universidades latinoamericanas, en aras de alentar cambios radicales en sus estructuras. Aportó entonces un conjunto de orientaciones que tuvieron gran difusión y son fácilmente reconocibles como fuente de inspiración de los proyectos modernizantes que intentaron llevar adelante las derechas en la región. Si bien Atcon no estuvo en Uruguay, su trabajo fue conocido en medios académicos y políticos. De la comparación del proyecto de la UN y su cristalización en la fórmula de Universidad para el desarrollo, con los

anteproyectos de reconversión de la Universidad de Buenos Aires (UBA): el plan elaborado por el rector, Raúl Devoto, y el del decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Horacio Taquini, emergen marcadas semejanzas, dando cuenta del flujo de lineamientos de carácter tecnocrático y conservador, más allá de las fronteras nacionales. No se puede eludir, por otra parte, el impacto que causó en las derechas locales la reforma del sistema universitario brasileño que, con gran éxito, llevó adelante el régimen dictatorial instaurado desde 1964, en cuyo proceso Atcon también tuvo un papel de relieve.

A lo largo de los tres lustros analizados, representantes de la derecha liberal conservadora de los tradicionales partidos Blanco y Colorado, la diplomacia estadounidense y sectores de la Iglesia católica, junto a nuevos movimientos sociales emergentes en el período, fueron confluyendo en diagnósticos y estrategias para revertir su pérdida de incidencia en los órganos de cogobierno y detener el avance de las fuerzas de izquierda en la Universidad. Se fue asentando una construcción discursiva que aportó un conjunto de nociones e interpretaciones compartidas que ubicaron a la Universidad como parte del “enemigo interno”, de acuerdo con la Doctrina de la Seguridad Nacional. En directa relación con la progresiva disminución de sus posiciones de poder, la retórica anticomunista fue tomando diversas modulaciones: pasaron del plano discursivo al de la violencia, apostaron a crear otras universidades al tiempo que persistieron en la tentativa de “recuperar la Universidad”.

Al calor de la creciente reacción conservadora y en consonancia con la lógica amigo-enemigo propia de la Guerra Fría se construyó y ganó terreno la idea de que la Universidad formaba parte de ese enemigo multiforme y plural que amenazaba con destruir los cimientos de la nación. En ese contexto, durante los primeros años sesenta, los sectores derechistas se abocaron a recuperar la casa de estudios a través de diversos mecanismos, en particular apostando a la conformación de un amplio movimiento “demócrata” que pudiera disputar espacios de poder en la interna universitaria.

Estos intentos alternaron con las propuestas de crear una universidad privada así como con el uso de la violencia por parte de los nuevos movimientos sociales de derecha que actuaron en este período y que contaron con apoyo de los sectores de los partidos tradicionales, la prensa de derecha y la CIA. A mediados de los sesenta, durante el segundo Gobierno blanco, se produjo una primera inflexión autoritaria que se

reflejó en el incremento de los mecanismos de contención ante una protesta sindical y estudiantil que se profundizaba a causa de la aguda crisis económica y social. En ese marco, la asunción del ingeniero Óscar Maggiolo como rector de la Universidad y la manera en se tramitó el conflicto entre reformistas y conservadores en la Facultad de Ingeniería significó para las derechas, dentro y fuera de la institución, la pérdida del último “bastión demócrata”. Desde entonces, el discurso contra la Universidad se radicalizó. Ante la imposibilidad de reconquistarla, estos sectores incrementaron su prédica anticomunista y reclamaron al Gobierno mano dura ante este estado de cosas.

El giro autoritario de fines de la década canceló toda posibilidad de diálogo entre la dirigencia de la Universidad y el poder político. Una variedad de actores derechistas apoyaron la creación de otra universidad, esta vez en el interior del país, opuesta al formato político-ideológico de la principal casa de estudios. El impulso a este proyecto, que tuvo amplia repercusión entre 1969 y 1970, alternó con las presiones al Gobierno para que efectivizara la intervención a la casa de estudios. En el lustro previo al golpe de Estado emergió una miríada de nuevas agrupaciones de derecha radical, de corte nacionalista, que también apuntaron sus dardos contra la Udelar al tiempo que protagonizaron hechos de violencia contra sus locales y contra militantes estudiantiles. En octubre de 1973, luego de la disolución de las cámaras en junio, finalmente la Universidad de la República fue intervenida, satisfaciendo parcialmente los reclamos de las derechas. Lo cierto es que, a partir de entonces, muchos universitarios que se habían marginado de sus posiciones universitarias retornaron a la Universidad y volvieron a ocupar en ella un lugar de preeminencia.

Como señalé en la introducción, opté por el uso “derechas” como categoría analítica para describir y organizar una serie de actitudes, individuos, grupos y posiciones en relación con los debates universitarios. Eso permitió una primera tentativa de distinción entre una derecha conservadora que, en medio del combate político de la época, bregó por la depuración ideológica de la Universidad y rechazó de plano los intentos de transformación impulsados por los reformistas, y otra modernizadora que compartió el interés de la primera por la contención de las izquierdas al tiempo que alentó cambios sustantivos en las orientaciones y estructuras académicas. Demostré así cómo estas expresiones, al igual que estaba ocurriendo en otros espacios del quehacer político, social y cultural, conformaron un frente común ante la activación del movimiento

estudiantil capitalizada por unas izquierdas en vías de radicalización debido al nuevo horizonte planteado por la Revolución cubana y a una crisis social y política que se agudizaba. La participación de las expresiones derechistas y su articulación con sectores político-partidarios, con el Gobierno o fuerzas policiales resulta clara en la disputa por los espacios gremiales, la opinión pública o en las acciones y enfrentamientos violentos. Sin embargo, su presencia se vuelve escurridiza cuando se abordan los debates académicos y político-institucionales de la Universidad. Los grupos más radicales no siempre tuvieron voz propia —o la tuvieron en forma muy minoritaria— en esos debates. En contraste, se detectan otros actores —individuos y grupos— que se resistieron a los cambios propuestos por el núcleo duro del reformismo. En algunos casos, la coyuntura crítica de fines de la década del sesenta y comienzos del setenta los acercó circunstancialmente a las derechas que tuvieron expresión en la arena política. Pero en todo caso sus posicionamientos no los identifican de manera ineluctable con ellas; identificación que fue rechazada por los propios actores.

Con esto quiero consignar que la categoría “derechas”, en su función analítica y con todas las prevenciones del caso, no agota las explicaciones respecto a los alineamientos en torno a la “cuestión universitaria” o en relación con las temáticas que estuvieron en el centro de las contiendas universitarias. Menos aún resulta pertinente el traslado de las tipologías habituales para la organización de las derechas en el espacio político como conservador-liberal y nacionalistas. Asimismo, algunos reclamos específicos —por ejemplo, la creación de una universidad en el interior— no fueron por sí mismos de derecha o izquierda, sino que fueron abrazados desde distintas tiendas político-partidarias. Por tanto, la dicotomización en términos derechas-izquierdas para pensar el ámbito académico visibiliza algunos asuntos pero opaca otros. Quedan en el medio, grupos y sujetos que no se sentían representados en esas etiquetas y a los que el analista tampoco puede ubicar en ellas. La noción de contrarreformismo, más restringida, captura algunos de los posicionamientos que resistieron modificaciones a un *statu quo* con el que los universitarios, intelectuales y académicos que lo sostenían se sentían identificados.

Acaso la propia conformación del campo de las derechas en Uruguay, atado a la búsqueda de mayor comprensión de los procesos políticos y sociales que desencadenaron en el autoritarismo, condicionó los usos de esta categoría analítica. Se

precisa mayor reflexión para problematizar estas nociones, sobre todo en su aplicación a otros espacios de producción y actividad social. Se requieren de análisis más finos sobre los pasajes de una tradición a otra, las zonas fronterizas, las mutuas influencias y contaminaciones, de modo de captar los matices y evitar clasificaciones fáciles.⁷⁷²

A modo de cierre quiero decir que esta tesis se terminó de escribir en medio de los efectos de la pandemia de covid-19 y del cambio de Gobierno en Uruguay, que puso fin a 15 años de Gobierno del Frente Amplio. En este contexto, la investigación científica y la Universidad pública se han visto extremadamente desafiadas, ocupando un lugar central de la discusión pública. Mientras aumentaron los requerimientos a la comunidad científica para afrontar la emergencia sanitaria, las instituciones científicas y la Udelar están sufriendo drásticos recortes en el marco de la política de restricción del gasto público que impulsa el nuevo Gobierno de derecha liberal encabezado por la llamada Coalición Multicolor. Setenta años después de los acontecimientos aquí narrados, la Universidad sigue concentrando el 80% de la investigación del país. Sin embargo, dejó de ser la única institución universitaria y pasó a formar parte de un sistema que incluye a otra universidad pública, de perfil tecnológico y con fuerte presencia en el interior del país, y varias universidades privadas (dos de ellas católicas). Por primera vez en la historia uruguaya los principales cuadros de la burocracia estatal proceden de esas universidades privadas. Por otra parte, una derecha nacionalista, que mantiene lazos fuertes con las FF. AA. reivindicando el papel de estas durante el pasado dictatorial, alcanzó representación parlamentaria desafiando el tradicional sistema partidario uruguayo.

Como se ve, mucho ha cambiado desde aquellos años aciagos. Sin embargo, algunos debates, analizados a lo largo de estas páginas, resurgen hoy con una fuerza inusitada: el papel del estado, el valor del sector público y el rol de la iniciativa privada, la importancia de la investigación científica y la laicidad son algunos de los asuntos que están en discusión. Sin duda, conocer y entender aquel pasado nos da herramientas para comprender nuestro convulsionado e incierto presente.

⁷⁷² Estos asuntos estuvieron en discusión en las *Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino*. Que tuvieron lugar en Córdoba, setiembre de 2020. Se publicaron dos dossier que dan cuenta de los debates y temas abordados, ambos coordinados por Ana Clarisa Agüero y Ernesto Bohoslavsky: “Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino. Presentación de las jornadas”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Colloques (2020) y “Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino”, *Prismas, Revista de historia intelectual*, n° 24, (2020)

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

FUENTES

Repositorios y Colecciones Documentales

Archivo General de la Nación, Montevideo

Consejo Nacional de Gobierno, Actas, 1960-61

Ministerio de Educación y Cultura, Expedientes – 1968-1970

Colección Juan Pivel Devoto

Colección Federico García Capurro

Archivo General de la Universidad de la República, Montevideo (AGU)

Asamblea del Claustro Universitario, Actas, 1956 a 1968.

Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, Actas, 1948-1973

Distribuidos, 1948-1968

Circulares- 1973-1984

Archivo Maggiolo.

Archivo Laguardia

Archivo José Luis Massera

Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Universidad de la República (Convenio de Cooperación Técnica ATC/TF (SP) – 1513 – UR entre el estado uruguayo y el BID) (Montevideo: Udelar, 1978). 9 v.

Documental institucional sobre la inauguración de los Cursos Universitarios del Norte de la Universidad de la República en Salto”. Realizado por Walter Acosta, Carlos A. Luzardo; Departamento de Medio Técnicos y Comunicación (DMTC), Udelar, 1975. Disponible en <https://archivosdocumentales.udelar.edu.uy/index.php/cursos-universitarios-del-norte>, y <https://www.youtube.com/watch?v=GQo0n02LkBI> En Archivo General de la Universidad

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Unidad Polifuncional sobre Problemas Universitarios (UPPU).

Archivo de Propaganda Política. Departamento de Historiología. Instituto de Ciencias Históricas. Colección Mena Segarra

Conicyt

Actas de sesiones 1962-1973

Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace (DNII). Ministerio del Interior

National Archives and Records Administration (NARA). Documentos desclasificados por el gobierno norteamericano referidos a Uruguay en el período 1963-1973 Digitalizados en el marco del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente (Geipar), Udelar. Disponibles en <http://www.geipar.udelar.edu.uy>

Publicaciones Periódicas

Montevideo:

La Mañana. Edición del Interior, 1968-1972.

Tribuna Popular, 1960-1961.

El Debate, 1960-1961.

El Día, 1961-1962

Nuevo Amanecer, 1972-1974.

BP Color, 1968.

El País, 1960-1970.

La Mañana, 1960- 1971.

Acción, 1968-1970

Marcha 1960-1968

Gaceta Universitaria, 1961-1962-1973.

Jornada, FEUU. Setiembre-octubre 1960. Junio-diciembre 1968

Interior:

El Pueblo, Salto, 1959-1970.

El Telégrafo, Paysandú, 1942-1970.

La Prensa, Salto, 1948-1973.

La Tribuna, Paso de los Toros, 1968-1970.
Tribuna Salteña, Salto, 1948-1973.
Verdad Salteña, Salto, 1969.
La Voz del Pueblo, Tacuarembó, 1960-1961

Fuentes editas

Actas del Congreso Internacional de Estudiantes Americanos

Acuña, Juan Antonio. *Persecución política. Atropello y despojo. A nivel de: la Universidad de la República. Un alerta a: los trabajadores y opinión pública del país* Montevideo: Editorial Ayuí, 1971

Cassinoni, Mario. *Memorias del Rectorado 1957-1960* Montevideo, Universidad de la República, 1962

Cónclaves del Gobierno Uruguayo. *Resoluciones de los cónclaves gubernamentales: San Miguel, Colonia Suiza, Montevideo, Solís* (Montevideo: División Publicaciones, 1978)

De Santiago, Alfredo *Un bienio de intervención- nov. 1973 - noviembre 1957*, Montevideo, Universidad de la República. Facultad de Ingeniería, 1975

Plan de Desarrollo Educativo, Montevideo, Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1966, 2 tomos.

Plan de Reestructuración de la Universidad de Óscar Maggiolo, Montevideo, Universidad de la República, 1986.

Presidencia de la República. OPP. *Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977* Montevideo: OPP, 1977

Wonsewer, I. "Las ciencias económicas" en *La estructura de la Universidad a la hora del cambio*, t. 2 Montevideo: Departamento de Publicaciones, 1970

Wonsewer, I. "Una etapa de la transformación de la Universidad: el rectorado de Mario A. Cassinoni", en *Hoy es historia*, año II, n.º 9-10, junio-julio 1985, pp. 8-22

Wonsewer, Israel *Orientaciones y características actuales de la Metodología Económica* Montevideo: Publicación del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, 1953

Wonsewer, Israel, “Problemas de enseñanza e investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Exposición en el Consejo de la FCEA el 14 de setiembre de 1961”, FCEA, Montevideo, 1962

Wonsewer, Israel, “La investigación económica”, Cursos de Verano de la Universidad (24 de febrero de 1964), *Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, n° 15 (1964), Montevideo

Otras fuentes consultadas:

Parlamentarios Uruguayos 1830-2005. Disponible en: <http://www0.parlamento.gub.uy/htmlstat/PL/OtrosDocumentos/ParlamentariosUruguayos.pdf>

Libro de Actas del Comité Coordinador de los Cursos de Derecho en Salto 1959. Estatuto de la Asociación de Estudiantes de los Cursos Universitarios de Salto. Material perteneciente a David Leites

Universidad del Norte. Reunión con el Ministro de Educación y Cultura. Junta Departamental de Tacuarembó, 26 de julio de 1970

Alianza para el progreso. Documentos Básicos (Punta del Este: [s.n], 1961), 57 p. Disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8789.html>

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo Tarazona, Álvaro. “Educación, reformas y movimientos universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador en el siglo XX”, *Revista de Estudios Sociales*, n.º 53, (julio-septiembre [2015].) pp. 102-111

Agee, Philip. *La CIA por dentro. Diario de un espía*. Buenos Aires, Sudamericana, 1975)

Agüero, Ana Clarisa; Bohoslavsky, Ernesto, “Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino”, *Prismas, Revista de historia intelectual*, nº 24, (2020)

Agüero, Ana Clarisa; Bohoslavsky, Ernesto: “Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino. Presentación de las jornadas”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Colloques (2020)

Aldrighi, Clara y otros. *Antisemitismo en Uruguay. Raíces, discursos, imágenes (1870-1940)*, Montevideo, Ediciones Trilce, 2000

Aldrighi, Clara, *La intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973). El caso Mitrione*. Montevideo, Trilce, 2007

Aldrighi, Clara. “La injerencia de Estados Unidos en el proceso hacia el golpe de Estado. Informes de la misión de Seguridad Pública y la embajada estadounidense en Montevideo (1968-1973)”. En Marchesi, Aldo, Markarian, Vania, Rico, Álvaro y Yaffé, Jaime (orgs.) *El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay*. Montevideo, Trilce, 2003

Aldrighi, Clara. *La izquierda armada. Ideología, ética e identidad en el MLN-Tupamaros* Montevideo, Trilce, 2001

Alonso Eloy, Rosa y Demasi, Carlos. *Uruguay 1958-1968. Crisis y Estancamiento* Montevideo, EBO, 1986

Alpini, Alfredo. *La derecha política en Uruguay en la era del fascismo 1930-1940* Montevideo, FCU, 2015

Altamirano, Carlos “Desarrollo y Desarrollistas”. *Prismas, Revista de historia intelectual*, 2, (1998)

Altamirano, Carlos, *Historia de los intelectuales en América Latina* 2 vol. Buenos Aires, Katz editores, 2008-2010

Altamirano, Carlos, *Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta*. Buenos Aires, Siglo XXI Ediciones Argentina, 2013

Altamirano, Carlos. *Ideas para un programa de Historia Intelectual y otros ensayos* Buenos Aires, Siglo XXI Ediciones Argentina, 2005

Alvarez, Satizabal, Gineth, Andrea. “Los orígenes de la *Confederación Interamericana de Educación católica* como red. ¿una reacción integralista? (Bogotá 1945-Buenos Aires 1946)” En: Rodrigues, Cândido, Zanotto, Gizele, Caldeira, Rodrigo Coppe (orgs.) *Manifestacoes do pensamento Católico na América do Sul*. Sao Paulo, Fonte Editorial, 2015

Alvez Cavanna, Federico, Faget, Gustavo y Batista, Pía “El redil del concepto de laicidad “ajustista”. En: Rois, Diogo Da Silva (org.) *A prática da histórica intelectual e dos intelectuais: ideias, movimentos e acoes*. Jundial, Paco Editorial, 2017

Ardao, Arturo *Espiritualismo y positivismo en el Uruguay*. México, FCE, 1950

Ardao, Arturo *Etapas de la inteligencia uruguaya* Montevideo, Universidad de la República, 1971

Ardao, Arturo *La filosofía en el Uruguay en el siglo XX* México, FCE, 1956

Ardao, Arturo *La Universidad de Montevideo: su evolución histórica*. Montevideo, CED, 1950

Ardao, Arturo *Racionalismo y liberalismo en el Uruguay* Montevideo, Universidad de la República, 1962

Ardao, Arturo, *Filosofía pre-universitaria en el Uruguay: De la Colonia a la fundación de la Universidad, 1787-1842* Montevideo, Claudio García, La Bolsa de los Libros, 1945

Atcon, R. *Rumo à reformulação estrutural da universidade brasileira* Rio de Janeiro, Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, 1966

Atcon, R.P. *Proposta para a reestruturação da Universidade Federal do Espírito Santo*. Florianópolis, Imprensa Universitária da UFSC, 1967

Atcon, Rudolph P. “*La Universidad latinoamericana: clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América Latina*”, *Eco. Revista de la cultura de occidente*, (mayo-julio 1963)

Barbato de Silva “Economía” En Cinve. *Ciencia Tecnología en el Uruguay*, Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura/Cinve, 1986

Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín (1986). “El problema nacional: un marco histórico”, en Cinve, *La crisis uruguaya y el problema nacional* Montevideo, Cinve/Ediciones de la Banda Oriental [EBO], 1986

Barrán, José Pedro, *Medicina y Sociedad en el Uruguay del novecientos* Montevideo, EBO, 1992-1999, 2 v.

Barrán, José Pedro, Nahum, Benjamin *Battle, los estancieros y imperio británico*. T.1 El Uruguay del novecientos. Montevideo, EBO, 1979

Barrán, José Pedro. *Los conservadores uruguayos (1870-1933)* Montevideo, EBO, 2004

Bascolla, Natalia, Mauro, D., Eujanian A. *Dimensiones del Reformismo universitario*. Rosario, Humanidades y Artes Ediciones, 2018. 7 Vols.

Beretta, Alcides. *Roberto Caldeyro Barcia: El mandato de una vocación* Montevideo, Trilce/Pedeciba, 2006

Bernasconi, Andrés, “Is there a Latin American Model of the University?”, en *Comparative Education Review* v.52, 1 (2007)

Bértola, Luis (coord.) *50 años de historia de la OPP* Montevideo, Fin de Siglo, 2018

Bittencourt, Gustavo, Galván, Estefanía, Moreira, Cecilia y Vázquez, Daniela. “La planificación en el contexto de las estrategias de la posguerra y la experiencia de la CIDE”. En Alemany, Cecilia, López, Andrés (Coord.) *Enrique V. Iglesias. Intuición y ética en la construcción de Futuro* Montevideo, Red Mercosur de Investigaciones Económicas, 2012

Blanco, Alejandro, *Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina* Buenos Aires, Siglo XXI, 2006

Bobbio, Norberto, *Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política*. Madrid, Taurus, 2014 [1ª. ed. 1994]

Bohoslavsky, Ernesto y Soprano, Germán. *Un Estado con rostro humano: funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad)* Buenos Aires, Prometeo, 2010

Bohoslavsky, Ernesto; Broquetas, M. “Vínculos locales y conexiones transnacionales del anticomunismo en Argentina y Uruguay en las décadas de 1950 y 1960” *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, (2017)

Boisard, Stéphane “Pensando as direitas na América Latina, objeto científico, sujeitos e temporalidades?” *Varia Historia* v. 30, n.º 52, (2014), pp. 85-88

Bonavena, Pablo y Millán, Mariano (eds.). *El '68 latinoamericano. A 50 años de Tlatelolco. Movimientos estudiantiles, política, cultura, historia y memoria*. Buenos Aires, Clacso/IIGG, 2018

Botelho, André. “Ciencia pelo desenvolvimento: a escrita pública de José Leite Lopes” En Botelho, André, Bastos, Elide Rugai, Villas Bôas, Glaucia (orgs.) *O moderno en questao. A década de 1950 no Brasil*. Rio de Janeiro, PPGSA/UFRJ, 2008

Bourdieu, Pierre *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires, Eudeba, 2009

Bourdieu, Pierre. *Homo Académicus*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2014, [1ª. ed. 1984]

Bozza, Juan Alberto, “Las huellas de Camelot. Investigación social, cooperación internacional norteamericana y contrainsurgencia en Chile en los sesenta” *Épocas. Revista de Historia*, 9 (2014).

Broquetas Magdalena. “A propósito de las repercusiones del ‘caso Eichmann’. Antisemitismo y anticomunismo en Uruguay (1960-1962)”, en *Encuentros Uruguayos*, 3 (2010)

Broquetas, Magdalena “Los frentes del anticomunismo. Las derechas en el Uruguay de los tempranos sesenta”, *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX* Año 3, 3, 2012

Broquetas, Magdalena. “Un caso de anticomunismo civil: los “padres demócratas” de Uruguay (1955-1973)” *Páginas*, v.10, nº 24 (Septiembre-Diciembre 2018) <http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas>

Broquetas, Magdalena. *La trama autoritaria: derechas y violencia en Uruguay, 1958-1966* Montevideo: EBO, 2014

Brunner, José J., *Educación Superior en América Latina. Cambios y desafíos* Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990

Bruno Tamburi, Mauricio. “Usos y sentidos del concepto democracia. en Uruguay (1958-1989)”, en *Políticas de la Memoria*, 18, (2018/2019), pp. 209-221

Bruno, Mauricio. “Algunas operaciones de las “bandas fascistas”, y su conexión política”, en *Cuadernos de Historia Reciente 1968-1985*, 5 (2008)

Bruno, Mauricio. “Contra el consenso político y por la racionalidad económica. El semanario Búsqueda de cara a las elecciones de 1984”. Ponencia presentada al *Seminario académico: Expectativas y Disputas en torno a la nueva democracia*, Montevideo, 15 al 17 de abril 2015

Buchbinder, Pablo. “Los sistemas universitarios de Argentina y Brasil: una perspectiva histórica y comparada de su evolución desde mediados del siglo XX”, en Buchbinder, P. y otros, *Apuntes sobre la formación del movimiento estudiantil argentino 1943-1973* Buenos Aires, Final Abierto, 2010

Buchbinder, Pablo. *Historia de las universidades argentinas*. Buenos Aires, Sudamericana, 2005

Bucheli, Gabriel. “El sujeto social de derechas en Uruguay y la emergencia de la Juventud Uruguaya de Pie (1968-1972)” en *Revista Divergencia*, año 2, n.º 4 (julio-diciembre de 2013) pp. 11-36

Bucheli, Gabriel. “La Juventud Uruguaya de Pie y la violencia en la enseñanza en la coyuntura previa al golpe de Estado (1970-1973)”, en *Contenciosa*, año I, n.º 2 (2014). Disponible en: <http://www.contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=15>,

Bucheli, Gabriel. “Los inicios. Rastreado los orígenes de la violencia política en el Uruguay de los 60”. En *Cuadernos de la Historia reciente 1968-1985*. No. 4. Montevideo, EBO, 2008

Bucheli, Gabriel. “Organizaciones ‘demócratas’ y radicalización anticomunista en Uruguay, 1959-1962” *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, 3 (2012)

Bucheli, Gabriel. *O se está con la patria o se está contra ella. Una historia de la Juventud Uruguaya de Pie* Montevideo, Fin de Siglo, 2019

Caetano, Gerardo *La República conservadora 1916-1929*, 2 v, Montevideo, Fin de Siglo, 1992-1993.

Caetano, Gerardo, “Laicidad, ciudadanía y política en el Uruguay contemporáneo: matrices y revisiones de una cultura laicista”, *Revista Cultura & Religión*, v. VII, 1 (enero-junio 2013), pp. 116-139;

Caetano, Gerardo, Rilla José. *Historia contemporánea del Uruguay de la colonia al siglo XXI*, Montevideo, ClaeH/Fin de Siglo, 2010

Caetano, Gerardo, Rilla, José y Pérez, Romeo. “La Partidocracia uruguaya. Historia y centralidad de los partidos políticos” *Cuadernos del CLAEH*, v. 12, n° 44 (1987)

Caetano, Gerardo. *Historia Mínima de Uruguay*. Montevideo, El Colegio de México, 2019

Caetano, Gerardo; Geymonat, Roger; Greising, Carolina y Sánchez, Alejandro. *El Uruguay laico. Matrices y revisiones* Montevideo, Taurus, 2013

Calandra, Benedetta. y Franco, Marina. *La guerra fría cultural en América Latina. Desafíos y límites para una nueva mirada de las relaciones interamericanas*. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2012

Caldelari María, Funes, Patricia. "La Universidad de Buenos Aires, 1955-1966: Lecturas de un recuerdo", en Enrique Oteiza (coordinador), *Cultura y política en los años 60*. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires, 1997

Caldelari, María, Casalet, Mónica, Fernández, Eduardo y Enrique Oteiza. “Instituciones de promoción y gobierno de las actividades de investigación” En *La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas* Buenos Aires, CEAL, 1992

Califa, Juan Sebastiaán. *Reforma y revolución. La radicalización política del movimiento estudiantil de la UBA, 1943-1966*. Buenos Aires, EUDEBA, 2014

Califa, Juan Sebastián. “El movimiento estudiantil reformista frente al primer episodio de la ‘laica o libre’ (mayo de 1956)” *Sociohistórica* no. 26, pp.51-79. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4509/pr.4509.pdf.

Camou, María Moraes, María Inés. “Desarrollo reciente de la historia económica en el Uruguay” *Documentos de trabajo* n.º 40, (mayo de 2000). Udelar/FCS/Unidad Multidisciplinaria.

Caravaca, Jimena y Plotkin, Mariano. “Crisis, ciencias sociales y elites estatales: la constitución del campo de los economistas estatales en la Argentina, 1910-1935”, *Desarrollo Económico*, vol. 47, octubre-diciembre de 2007

Carnagui, Juan Luis.- “La construcción de un sentido común sobre la 'derecha peronista' de los años '70’”. *Antíteses*, v.3, n.5, jan/jun de 2010. <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1933/193314445009.pdf>

Cassinoni, Mario A. *Memoria del 1957-1960* Montevideo, Universidad de la República, 1962

Cersósimo, Facundo. “El Proceso fue liberal. Los tradicionalistas católicos argentinos y el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)”. Tesis de Doctorado en Historia. Buenos Aires, FFyL-UBA, 2015

Chagas, Jorge, Trullen, Gustavo. “Una historia olvidada. La aparición de la JUP”. *Revista Tres*, (2001)

Chagas, Jorge; Trullen, Gustavo. *Pacheco: la trama oculta del poder*. Montevideo, Rumbo Editorial, 2005

Cheroni, Alción. *El pensamiento conservador en Uruguay* Montevideo, ClaeH, 1986

Cheroni, Alción. *Políticas científico tecnológicas en el Uruguay del siglo XX* Montevideo, FHC, 1988

Cosse, Isabela; Markarian, Vania, *El Año de la Orientalidad* Montevideo, Trilce, 1996

Cunha, Luiz Antonio. *A universidade reformada*: Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1988

D’Avenia, Lucas. “La irrupción de la cuestión del desarrollo en el campo educativo y su interpelación al campo pedagógico. El caso de la CIDE en Uruguay” Ponencia presentada a las *IV Jornadas de Investigación y III de Extensión del Facultad de Humanidades y Ciencias*, noviembre de 2011.

D’Avenia, Lucas., “Desarrollismo y Educación en Uruguay en los 60”. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, v. 5, n.º 5 (2014)

Da Costa, Néstor; Maronna, Mónica. *100 años de laicidad en Uruguay. Debates y procesos (1934-2008)* Montevideo, Planeta, 2019

Davyt, Amilcar. “Apuntes para una historia de las instituciones rectoras en ciencia, tecnología e innovación en Uruguay: 50 años de cambios y permanencias” En *Fondo Bicentenario "José Pedro Barrán": políticas científicas, tecnológicas y de innovación en el Uruguay contemporáneo: (1911-2011)* Montevideo, ANII, 2011

De Sierra, Gerónimo. “Las ciencias sociales en Uruguay: un caso de desarrollo y profesionalización tardíos”. En Helgio Trindade (coord.), *Las Ciencias Sociales en América Latina* México, Siglo XXI, 2007

Deutsch, Sandra Mc Gee. *Las derechas. La extrema derecha en Argentina, Brasil y Chile, 1890-1939* Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2005

Devoto, Fernando “Pasajeros en la tormenta. Variaciones sobre tres intelectuales italianos y el fascismo”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Coloquios 2020

Echeverría, O. “Los estudios sobre las derechas argentinas y rioplatenses del siglo XX. Balances, preguntas y perspectivas de análisis”, en Bohoslavsky, E., Broquetas, M. y Echeverría, O. (editores), *Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del VII Taller de discusión*. Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2015

Echeverría, Olga. “¿Las cosas por su nombre? Preguntas sobre la propensión a llamar “nacionalismo” a la derecha argentina de la década de 1920”, en Bohoslavsky, E. (comp.) *Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del Taller de Discusión*, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2011

Ehrlich, Laura y Espeche, Ximena. (coords.). *Guerra fría cultural en América Latina: prácticas del saber en conflicto. Prismas. Revista de Historia Intelectual*, no. 23 (2) (2019), pp. 173-181. <https://ediciones.unq.edu.ar/539-prismas-no-23-2019.html>

Errandonea, Alfredo. “Historia institucional de la Sociología”, *Revista de Ciencias Sociales*, año 16, n.º 21 (agosto 2003)

Espeche, Ximena. *La paradoja uruguaya. Intelectuales, latinoamericanismo y nación a mediados del siglo XX*. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2016

Etchechury, Mario. *Entre el Colegiado y el Vaticano II. Renovación eclesial y política en el catolicismo uruguayo pre-conciliar. 1958-1962* Monografía de pasaje de curso, Historia del Uruguay III, FHCE, 2004. (inédito)

Faroppa, Luis A. *El desarrollo económico del Uruguay. Tentativa de explicación* Montevideo, Oficina del libro del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración, 1975

Fávero, Maria de Lourdes de Albuquerque. *Da universidade “modernizada” à universidade disciplinada: Atcon e Meira Mattos*: Sao Paulo, Cortez, Autores Associados, 1991

Feld, Adriana. “El Consejo Nacional de Investigaciones: Estado y comunidad científica en la institucionalización de la política de ciencia y tecnología Argentina (1943-1966)” En Vessuri, H. (ed.). “*Conocer para transformar*”. *Producción y reflexión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica. IV Encuentro de*

Jóvenes Investigadores y Ira Escuela Doctoral Iberoamericana en Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la Tecnología–ESOCITE/CYTED/AECID/IVIC/UNESCO-IESALC Caracas, Iesalc-Unesco, 2009

Ferreira, Pablo “DEMOCRACIA, ORDEN Y LEGALIDAD. El surgimiento de un batllismo conservador y de derechas en el Uruguay feliz de los tempranos cincuenta” *Revista de Historia Americana y Argentina*, v. 54, n.º 2, 2019,

Ferreira, Pablo. “El otro viraje. Democracia y ciudadanía en el discurso de la lista quince ante los debates constitucionales de 1951 y 1966”. En *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, v.5., n.º 5, 2014, pp. 105-123.

Filgueira, Carlos. “Sociología”, en Cinve, *Ciencia y Tecnología en el Uruguay* Montevideo, MEC/Cinve, 1986,

Finch, Henry. “La política tecnológica y el Estado en el Uruguay 1900-1935”, *Cuadernos del CLAEH*, Montevideo, año 12, n.º 44 (1987), pp. 87-109

Finch, Henry. *Historia Económica del Uruguay Contemporáneo*. Montevideo, Banda Oriental, 1981

Franco, Marina. *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*, Buenos Aires, FCE, 2012

Galván, Estefanía, Moreira, Cecilia y Vázquez, Daniela. “La CIDE como invitación a repensar el Uruguay en el contexto de las estrategias de desarrollo de la posguerra.” *Revista Uruguaya de Historia Económica*. 2, (2012)

Galván, María Valeria. “Discursos de los organismos de inteligencia argentinos sobre el Movimiento Nacionalista Tacuara en el marco de la primera Guerra fría”. En *Antíteses*, v.2, no.4, jul-dez. 2009. [Http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses](http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses).

Galván, María Valeria. *Publicaciones periódicas nacionalistas de derecha: Las tres etapas de Azul y Blanco* [Azul y Blanco 1956- 1960. Segunda República 1961-1963, Azul y Blanco -segunda época- 1966-1969] [en línea]. Tesis de Posgrado. Universidad Nacional de La Plata, 2012.

Garcé, Adolfo. “Economistas y política en Uruguay (1932-2004)”, *Quantum*, vol. 4, n.º 1 (2009), pp. 80-96

Garcé, Adolfo. “La conciencia crítica desde Marcha a Búsqueda” en De Armas, Gustavo, Garcé, Adolfo. *Uruguay y su conciencia crítica. Intelectuales y política en el siglo XX* Montevideo, Trilce, 1997

- Garcé, Adolfo. *Ideas y competencia política en Uruguay (1960-1973). Revisando el “fracaso” de la CIDE*. Montevideo, Trilce, 2005
- García Ferreira, Roberto. *La CIA y los medios en Uruguay. El caso Arbenz*. Montevideo, Amuleto, 2007
- García Guardilla, Carmen (ed.). *Pensadores y forjadores de la universidad latinoamericana*. Caracas, Cedes, Iesalc-Unesco, 2008
- García Mourelle, Lorena “Universidad, catolicismo e izquierdas en Uruguay”, *Contemporánea: Historia y problemas*, no. 9, 2018, pp. 75-91
- Grandin, Greg. *The last colonial massacre. Latin America in the Cold War*. Chicago, Chicago University Press, 2011
- Guarga, Rafael, “O.J.Maggiolo, a 50 años de su plan de reestructura de la Universidad y a 38 años de su fallecimiento” En: Jung, María Eugenia, Martínez, M.L. y Paroli, P. *50 años del plan Maggiolo. Historia, testimonios y perspectivas actuales* Montevideo, Ediciones Universitarias, Udelar, 2018
- Halperín Donghi, Tulio. “La CEPAL en su contexto histórico”, *Revista de la CEPAL*, no. 94 (abril de 2008), pp. 7-27
- Halperín Donghi. Tulio. *Historia de la Universidad de Buenos Aires* Buenos Aires: Eudeba, 2013) [1a. ed., 1963];
- Hirschman, Albert O. *Retóricas de la Intransigencia* México, Fondo de Cultura Económica, 1991
- Iber, Patrick. “El imperialismo de la libertad: el Contreso por la Libertad de la Cultura en América Latina (1953-1971)”, en Calandra, Benedetta ;Franco, Marina. *La Guerra Fría cultural en América Latina*. Buenos Aires: Biblos, 2012
- Iber, Patrick. *Neither Peace nor Freedom. The Cultural Cold War in Latin America*. Cambridge (Massachusetts) y Londres, Harvard University Press, 2015.
- Iglesias, Enrique, *Uruguay: una propuesta de cambio. Introducción al plan nacional de desarrollo económico y social* Montevideo, Alfa, 1966
- Iglesias, Mariana. “La excepción como práctica de gobierno en Uruguay, 1946-1963”. *Contemporánea Historia y problemas del siglo XX*, v.2, 2, (2011),
- Inchausti, Martha (ed.). *Una vida dedicada a la matemática: Documentos del Archivo Laguardia* Montevideo, AGU, 2007

Inhan, Gabriella; Miranda, Clara; Chaves Alberto, Klaus (2016). “Rudolph Atcon e o planejamento do campus da Universidade Federal Do Espírito Santo” *Oculum Ensaio*, vol. 13, n.º 2, pp. 237-254

Jacob, Raul. “El ruralismo en el marco de la estrategia conservadora” *Hoy es Historia*, año I, n.º 3, (abril-mayo 1984), pp. 15-24

Jacob, Raúl. *Benito Nardone. El ruralismo hacia el poder (1945-1958)* Montevideo: EBO, 1981.

Jacob, Raúl. *Brevísima historia del Partido Ruralista*. Montevideo, Aprozador, 2006

Jacob, Raúl. *El Uruguay de Terra, 1931-1938* Montevideo, EBO, 1983

Janello, Karina, “Los intelectuales de la Guerra Fría. Una cartografía latinoamericana (1953-1962)”, *Políticas de la Memoria*, 14 (2014);

Jung, M. E. “La Universidad de la República como Enemigo Interno. La reacción de las derechas uruguayas, 1958-1973” en *Anuario IEHS* 32(2) 2017, pp. 149-170 disponible en [http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2017%202/09%20Anuario%20IEHS%2032\(2\)%20Od.Jung.pdf](http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2017%202/09%20Anuario%20IEHS%2032(2)%20Od.Jung.pdf)

Jung, M. E. “Una universidad para Salto: de demanda localista a la agenda de los grupos de derecha radical (1968-1970)” *A contracorriente*, vol. 13, n.º 2 (2016)

Jung, M. E. *La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista. El movimiento pro-Universidad del Norte de Salto (1968-1973)* Montevideo, CSIC-Udelar, 2018

Jung, M. E., “De la Universidad del Norte a la Universidad para el desarrollo (1968-1970). Las posiciones de ‘las derechas’ sobre el futuro de la educación superior” *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 4, n.º 4 (2011)

Jung, María Eugenia (ed) *Antecedentes históricos de la Universidad en el interior del país. 1906-1973* v.1 Montevideo, Universidad de la República, 2012

Jung, María Eugenia (ed) *Antecedentes históricos de la Universidad en el interior del país 1973-2007* v.2 Montevideo, Universidad de la República, 2013

Jung, María Eugenia. “Nuevos saberes, nuevas profesiones, nuevos técnicos. Usos y sentidos de un término en disputa (1955-1973)” *Políticas de la Memoria*, no.18 (2019)

Kierszenbaum, Leandro. “‘Estado peligroso’ y Medidas Prontas de Seguridad: violencia estatal bajo democracia (1945-1968)” *Contemporánea Historia y problemas del siglo XX* v.3, no.3, (2012)

Krostch, Pedro. “Argentina” en García Guadilla, Carmen (ed.). *Pensadores y forjadores de la universidad latinoamericana* Caracas, CENDES, IESALC-UNESCO, Bib & Co. Editor, 2008

Landinelli, J. “La Universidad como problema político (1968-1973)”, en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, n.º 3, (1989), p. 74.

Landinelli, Jorge *1968: la revuelta estudiantil* Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-EBO, 1989

Latham, Michael E. *Modernization as Ideology. American Social Science and “Nation building” in the Kennedy Era.* The University of North Carolina Press, 2000

Leibner, Gerardo. *Camaradas y compañeros, una historia política y social de los comunistas* Montevideo, Trilce, 2011

Levi, Giovanni. “Un problema de escala” en *Relaciones. Estudios de historia y sociedad.* v.24, n.º 95, 2003, 279-288

Linn, Leticia. *Búsqueda: una historia para ser contada* Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 2007

López D’Alessandro, Fernando. *Vivian Trías. El hombre que fue Ríos* Montevideo, Penguin Random House, 2019

López Macedonio, Mónica Naymich. “Historia de una colaboración anticomunista transnacional. Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y el gobierno de Chiang Kai-Shek a principios de los setenta” en *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, v.1, no.1, (2010), pp.133-158

Marchesi, Alado, Yaffé, Jaime. “La violencia bajo la lupa. Una revisión de la literatura sobre violencia y política en los sesenta”, en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, vol. 19, n.º 1 (2010), Montevideo, p. 102

Marchesi, Aldo *El Uruguay inventado* Montevideo, Trilce, 2001

Marchesi, Aldo. “‘Una parte del pueblo uruguayo, feliz, contento, alegre’. Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura”, en: Carlos Demasi, Aldo Marchesi, Vania Markarian, Álvaro Rico, Jaime Yaffé, *La dictadura cívico militar. Uruguay 1973-1985* Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009.

Marchesi, Aldo; Markarian, Vania “Cinco décadas de estudio sobre la crisis de la democracia y el autoritarismo en Uruguay”. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 3, v. 3 (2012).

Marchesi, Aldo; Markarian, Vania “Solari y Trías. Dos trayectorias intelectuales en la guerra fría” *Prismas*, v. 23, 2, (2019)

Marchesi, Aldo; Markarian, Vania. “Uruguay en el mundo” En Caetano, Gerardo (Dir.) *Uruguay. En busca del desarrollo entre el autoritarismo y la democracia* Montevideo, Planeta, 2016

Marín Colorado, Paula Andrea, “ECO (1960-1984) y las dinámicas del campo literario colombiano de mitad del siglo XX” *Lingüística y Literatura*, 66, (2014), pp.107-126

Markarian, Roberto y Mordecki, Ernesto (coords.). *José Luis Massera: Ciencia y compromiso social* Montevideo, Orbe/Pedeciba, 2010

Markarian, Vania (ed.). *Un pensamiento libre: Cartas de José Luis Massera* Montevideo, AGU, 2006

Markarian, Vania (ed.). *Universidad, investigación y compromiso: Documentos del Archivo Maggiolo* Montevideo, AGU, 2010

Markarian, Vania “Apogeo y crisis del reformismo universitario. Algunos debates en torno al “plan Maggiolo” en la Udelar”. *Pensamiento Universitario*, 14 (octubre de 2011)

Markarian, Vania “La Universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-1984). En *Cuadernos Chilenos de historia de la Educación*, 4 (junio de 2015).

Markarian, Vania *El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2012

Markarian, Vania, “Tres partes y tres fuentes. Un ensayo de ubicación del Plan Maggiolo en el contexto intelectual del Uruguay de los sesenta”. En: Jung, M. E., Martínez, M. L. y Paroli, P. (eds.). *50 años del plan Maggiolo. Historia, testimonios y perspectivas actuales* Montevideo, Udelar-Ediciones Universitarias, 2018

Markarian, Vania, “Universidad, revolución y dólares. Aproximación a otras discusiones de la izquierda uruguaya en los sesenta a partir de una polémica generada en la Facultad de Ingeniería”. Ponencia presentada a LASA, mayo de 2016

Markarian, Vania, Jung, María Eugenia y Wschebor, Isabel. 1908. *El año inaugural*. Montevideo: Universidad de la República, 2008

Markarian, Vania, Jung, María Eugenia, Wschebor, Isabel. 1958. *El cogobierno autonómico*. Montevideo, Universidad de la República, 2008

Markarian, Vania, Jung, María Eugenia, Wschebor, Isabel. 1968. *La insurgencia estudiantil* Montevideo: Universidad de la República, 2009

Markarian, Vania. (ed.) *Don Julio, documentos del Archivo Ricaldoni*. Montevideo, Universidad de la República, 2007

Markarian, Vania. *Universidad, revolución y dólares. Dos estudios sobre la Guerra Fría cultural en el Uruguay de los sesenta* Montevideo: Debate, 2020

Markoff, John, Montecinos, Verónica “El irresistible ascenso de los economistas” *Desarrollo Económico*, v. 34, n° 133, (abr-jun 1994), pp.3-29.
Montecinos, Verónica, “Los economistas y las élites políticas en América Latina” en *Estudios Internacionales Universidad de Chile*, v 30, n°119/120, (jul.-dic.1997), pp. 351-375

Martínez, María Laura *75 primeros años en la formación de los ingenieros nacionales. Historia de la Facultad de Ingeniería (1885-1960)* Montevideo, Udelar, Facultad de Ingeniería, 2014

Martínez, María Laura, “La Asociación Uruguaya para al Progreso de la Ciencia”, *Galileo*, no. 23 (mayo de 2001)

Mazzini, Elena y Méndez, Mary, *Polémicas de Arquitectura en el Uruguay del siglo XX*, Montevideo, CSIC/Udelar, 2011

Mendonca, Mariana. “Juventud y política en el Gran Acuerdo Nacional (1971-1973)” en Buchbinder, P. (coord.). *Juventudes universitarias en América Latina*. Rosario, HyA ediciones, 2018

Mendonca, Mariana. “La creación de nuevas universidades nacionales en la década de los años setenta. Continuidades y rupturas del plan Taquini en el marco de la coyuntura política nacional (1966-1973)”. *Perfiles Educativos*, n° 150 (pp.171-187). Ciudad de México, 2015

Messina, Pablo. “‘El proceso económico del Uruguay’: a 50 años del dependentismo uruguayo”, *La Diaria*, 22 de julio de 2019

Monné, Mariana. "Los 'rinocerontes' y el Estado. Aproximaciones al campo cultural durante la dictadura en Uruguay (1975-1980) y Chile (1977-1983)", tesis de maestría recientemente presentada, 2014

Monreal, Susana. *Universidad Católica del Uruguay: el largo camino hacia la diversidad*. Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, 2005

Morresi, Sergio, "Un esquema analítico para el estudio de las ideas de derecha en Argentina (1955-1983)", en Bohoslavsky, E. (comp.) *Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del Taller de Discusión* Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2011

Motta, Rodrigo Patto Sá. "Apresentação" En *Varia historia*, vol. 30, n.º 52, Belo Horizonte (2014), pp. 7-10

Motta, Rodrigo Patto Sá. "Modernizando a repressão: a Usaid e a polícia brasileira". En *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 30, nº 59, (2010), pp. 237-266.

Motta, Rodrigo Patto Sá. "O anticomunismo e os órgãos de informacao da ditadura nas universidades brasileiras". En *Contemporânea. Historia y problemas del siglo XX*, III, nº 3, 2012, 133-148.

Motta, Rodrigo Patto Sá. *As universidades e o regime militar. Cultura política brasileira e modernização autoritária*. Rio de Janeiro, Zahar, 2014

Motta, Rodrigo Patto Sá. *Em guarda contra o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil, 1917-1964* São Paulo, Editora Perspectiva, 2002

Mudrovcic, María Eugenia. *Mundo Nuevo. Cultura y Guerra Fría en la década del 60* Buenos Aires: Beatriz Viterbo Editora, 1997

Nahum, Benjamín, Ana Frega, Mónica Maronna, Ivette Trochón. *El fin del Uruguay liberal 1959-1973* Montevideo, EBO, 1993

Nahum, Benjamin. *Manual de Historia del Uruguay. Tomo II: 1903-2010* Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2010 [1ª. ed. 1995]

Nállim, Jorge, "Intelectuales y Guerra Fría: El Congreso por la Libertad de la Cultura en Argentina y Chile, 1950-1964, *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, 14, (2014) En Memoria Académica. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6730/pr.6730.pdf,

Navarro, Juan José y Quesada, Fernando. "El Proyecto Camelot (1964-1965). La dependencia académica, entre el escándalo y el mito". En: Beigel, Fernanda. *Autonomía*

y dependencia académica. *Universidad e investigación en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980)* Buenos Aires, Biblos, 2010

Neiburg, Federico; Plotkin, Mariano (comp.). *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina* Buenos Aires, Paidós, 2004

O'Donnell, Guillermo. "Tensiones en el estado Burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia". En: O'Donnell, Guillermo. *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Buenos Aires. Paidós. 1997.

Oddone, Juan y París de Oddone, Blanca. *Historia de la Universidad de la República: La Universidad Vieja, 1849-1885*. Montevideo, Universidad de la República, 1963

Oddone, Juan y París de Oddone, Blanca. *La Universidad uruguaya del militarismo a la crisis 1885-1958*. 3. v Montevideo, Universidad de la República, 1971

Palti, Elías, "La historia intelectual latinoamericana y el malestar de nuestro tiempo", *Anuario IEHS* n.º 8, (2003), pp. 232-249.

Panizza, Francisco. *Uruguay: Batllismo y después. Pacheco, militares y tupamaros en la crisis del Uruguay Batllista*. Montevideo, EBO, 1991

París de Oddone, Blanca (ed.). *Historia y memoria: Medio siglo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1945-1995* Montevideo, FHCE, 1995

París de Oddone, Blanca. *La Universidad de la intervención a la crisis, 1958-1973* Montevideo, Universidad de la República, 2010

París de Oddone, Blanca. *La Universidad de la República en la formación de nuestra conciencia liberal*. Montevideo, Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, 1958

Pasolini, Ricardo. "La historia intelectual desde su dimensión regional: algunas reflexiones". En Laguarda, Paula, Fiorucci, Flavia.- *Intelectuales, cultura y política en espacios regionales de Argentina (siglo XX)*. Rosario, Prohistoria Ediciones; Santa Rosa: Universidad Nacional de la Pampa, 2012

Petit Muñoz, Eugenio, *Dos estudios sobre Autonomía* Montevideo, Comisión Permanente de la VIII Asamblea de Profesores de Enseñanza Secundaria, 1966

Petit Muñoz, Eugenio. *El derecho de nuestra Universidad a darse su propio estatuto* Montevideo, CIENCIAS, 1961

Petra, Adriana, “El “Proyecto Marginalidad”: los intelectuales latinoamericanos y el imperialismo cultural. *Políticas de la Memoria*, n.º 8/9, (2009).

Pettinà, Vanni. *Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina* (Ciudad de México: El Colegio de México, 2018)

Plotkin, Mariano Ben, Zimmermann, Eduardo (comps.) *Los saberes del Estado* Buenos Aires: Edhasa, 2012

Plotkin, Mariano y Visacovsky, Sergio, “Saber y autoridad: intervenciones de psicoanalistas en torno a la crisis en la Argentina” *EIAL (Estudios Interdisciplinarios de América Latina)*, vol. 18, n.º 1 (2007)

Plotkin, Mariano, “Fundaciones, imperialismo cultural y malos entendidos transnacionales: El caso del Proyecto Marginalidad” Ponencia presentada en *Congreso Internacional LASA*, Río de Janeiro, 2009,

Plotkin, Mariano, “Saberes y Estado” en *Boletín Bibliográfico Electrónico*, 6, 2010.

Plotkin, Mariano; Zimmermann, Eduardo (comp.) *Las prácticas del Estado. política, sociedad y elites estatales en la Argentina del siglo XX*, Buenos Aires, Edhasa, 2012

Polgovsky Ezcurra, Mara “La historia intelectual latinoamericana en la era del “giro lingüístico”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* <http://nuevomundo.revues.org/60207>

Prego, Carlos A. “La gran transformación académica en la UBA y su política a fines de los años 50” En Prego, Carlos A. y Vallejos, Oscar (comps.) *La construcción de la ciencia académica. Instituciones, procesos y actores en la universidad argentina del siglo XX*. Buenos Aires, Biblos, 2010

Rama, Germán. *Grupos Sociales y Enseñanza Secundaria* Montevideo, Arca, 1964.
Real de Azúa, C. *Partidos, política y poder en el Uruguay (1971- coyuntura y pronóstico)* Montevideo: FHCE, Udelar, 1988

Real de Azúa, Carlos. *Antología del ensayo uruguayo contemporáneo*, Tomo II Montevideo, Universidad de la República, 1964

Real de Azúa, Carlos. *La Universidad*. Montevideo, Celade, 1992

Rey Tristán, Eduardo. “Movilización estudiantil e izquierda revolucionaria en el Uruguay”. *Revista complutense de Historia de América*, v.28 (2002) pp.185-209

Ribeiro, Darcy. *La universidad latinoamericana* Montevideo, Universidad de la República, Departamento de Publicaciones, 1968

Rico, Alvaro. 1968: *El liberalismo conservador. El discurso ideológico desde el Estado en la emergencia del 68*. Montevideo, FHCE, 1989.

Rico, Álvaro. *Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura Uruguay (1985-2005)*. Montevideo. Trilce, 2005

Rico, Álvaro. *La Universidad de la República. Desde el golpe de Estado a la intervención. Cronología de hechos, documentos y testimonios junio a diciembre de 1973*. Montevideo: CEIU-FHCE-Udelar, 2003

Rilla, José, “El freno en el impulso”, prólogo a Real de Azúa, C. *El impulso y su freno* Montevideo, Biblioteca Artigas, Clásicos uruguayos, vol. 179, 2009

Rock, David. *La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales* Buenos Aires, Ediciones B, 2001

Rodríguez Metral, Matías, “En el llano. Adaptación política y renovación del programa económico de la Lista Quince del Partido Colorado. 1958-1966”, *Tesis de Maestría en Historia Política*, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9907/1/TMCP_Rodr%C3%ADguezMetralMatias.pdf

Rodríguez, Laura Graciela “La ‘subversión científica’ en las universidades de Argentina e Hispanoamérica” *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. (2016) <https://nuevomundo.revues.org/68862>

Rodríguez, Laura Graciela *Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976–1983)* Rosario, Prohistoria, 2011

Rodríguez, Laura Graciela y Soprano, Germán “La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983)” en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* (2009) <https://nuevomundo.revues.org/56023>.

Romano, Antonio. *De la Reforma al Proceso. Una historia de la Enseñanza Secundaria de 1955-1975*. Montevideo, Trilce, 2010

Romano, Antonio. “Reconstrucción del debate en torno a la investigación en educación en la década de los 60 en el Uruguay” Ponencia presentada a las *IV Jornadas de Investigación y III de Extensión del Facultad de Humanidades y Ciencias*, noviembre de 2011.

Romero, José Luis. *El pensamiento político de la derecha latinoamericana* (Buenos Aires: Paidós, 1970)

Rostow, Walter *Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista*. México, Fondo de Cultura Económica, 1961

Rovelli, Laura. “Del plan a la política de creación de nuevas universidades nacionales en Argentina: la expansión institucional de los años 70 revisitada” En *Temas y Debates*. Año 13, no. 17. (Agosto de 2009) Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Pp.117-137.

Ruiz, Esther (ed.). *Una poderosa máquina opuesta a la ignorancia: 100 años de la Facultad de Agronomía*, Montevideo, Facultad de Agronomía, 2007

Ruiz, Esther. y otros. *Memorias de una profesión silenciosa: Historia de la ingeniería en Uruguay* Montevideo, Udelar-Facultad de Ingeniería, 1997

Sánchez Araya, Rolando. *Uruguay planeamiento educativo* (noviembre-diciembre de 1966). París, Unesco, enero de 1967

Sánchez Puñales, Soledad. *Historia de la enfermería en Uruguay* Montevideo. Trilce, 2002

Santiago Jiménez, Mario Virgilio, “Julio Meinvielle, tacuaras, los Tecos y El Yunque contra la «infiltración roja» en México y Argentina”. *Cahiers des Amériques Latines*, 2015 <https://journals.openedition.org/cal/3630>.

Santiago Jiménez, Mario Virgilio, “La universidad como «campo de batalla». Tres escenarios de participación política de jóvenes católicos radicales anticomunistas en México 1934-1975” *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, v. 12, n.º 1 (2020)

Santiago Jiménez, Mario Virgilio. “Anticomunismo católico. Origen y desarrollo del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), 1962-1975”. En Collado, C. (coord.). *Las derechas en el México contemporáneo*. Ciudad de México: Instituto Mora, 2015

Shils, Edward. *Los intelectuales en los países en desarrollo* Buenos Aires, Ediciones Tres Tiempos, 1976

Sigal, Silvia. *Intelectuales y poder en la Argentina: La década del sesenta* Buenos Aires, Siglo XXI, 2002

Sikkink, Kathryn, *El Proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil: Frondizi y Kubitschek*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009

Silva, Patricio *En el nombre de la razón. Tecnócratas y política en Chile*, (Santiago, UDP, 2010)

Silva, Patricio. “Los tecnócratas y la política en Chile: pasado y presente”. *Revista de Ciencia Política*, Vol. 26, n°2, (2006), pp.175-190

Solari, Aldo. “Educación y desarrollo” en Estudios sobre la sociedad uruguaya, tomo II Montevideo: Arca, s.f.

Solari, Aldo, “Aproximaciones al problema de la educación y el desarrollo económico en el Uruguay”, Separata de los Anales del Instituto de Profesores Artigas, no 6 (Montevideo, 1961)

Solari, Aldo. “La Universidad en transición en una sociedad estancada: el caso del Uruguay” en *Aportes. Revista trimestral de Ciencias Sociales*, n.º 2, (octubre, 1966)

Sosa, Á. “‘Libres’, ‘democráticos’ e ‘internacionalistas’. La Confederación Sindical del Uruguay en los años cincuenta”. *Claves. Revista de Historia*, vol. 5, n.º 8. (enero-junio de 2019), pp. 95-122

Spenser, Daniela (ed.) *Espejos de la Guerra Fría. México, América Central y el Caribe*. México, Ciesas/Porrúa, 2004

Suasnábar, Claudio. *Universidad e intelectuales. Educación y política en la Argentina (1955-1976)* Buenos Aires, Manantial, Flacso, 2004

Taquini (h), Alberto C. *Nuevas Universidades para un nuevo país* Buenos Aires, Editorial Estrada, 1972

Terán, Oscar. *Nuestros años sesentas: La formación de la nueva izquierda intelectual argentina, 1956-1966* Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993

Tilly, Charles y Wood, Lesley J. *Los movimientos sociales, 1768-2009: desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona, Editorial Crítica, 2010

Traverso, Enzo. *Las nuevas caras de la derecha* (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2018)

Unesco. *Statistical Yearbook 1970*. (París: Unesco, 1971) tomado de: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/25613/18Desarrollo%20y%20educacionT2cap8.pdf>. Consulta mayo 2013

Van Aken, Mark. *Los militantes: una historia del movimiento estudiantil uruguayo desde sus orígenes hasta 1966*, (Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1990

Varela Petito, Gonzalo, *De la República liberal al estado militar. Uruguay 1968-1973* Montevideo, Ediciones del nuevo Mundo, 1988

Varela Petito, Gonzalo, *El movimiento estudiantil de 1968: el IAVA, una recapitulación personal*. Montevideo, Trilce, 2002

Vessuri, Hebe. “O inventamos o erramos”. El Poder de la ciencia como idea-fuerza en América Latina, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2007

Vessuri, Hebe. “Universidad e investigación científica después de las Reformas”. En *Educación Superior y Sociedad*. v.9

Westad, Odd Arne *La Guerra Fría. Una historia mundial* Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017

Wilson, Eduardo, Nowinski, Aron, Turnes, Antonio L., Sánchez, Soledad y Sierra, Jorge. *Hospital de Clínicas de Montevideo: Génesis y realidad (1887-1974)* Montevideo: Bioerix, 2011

Yaffé, J. “Proceso económico y Política económica durante la dictadura 1973-1984” en Demasi, Carlos, Marchesi, A.; Markarian, V.; Rico, A.; Yaffé, J.. *La dictadura cívico militar 1973-1985* (Montevideo: EBO, 2009)

Zubillaga, Carlos. *Historia e historiadores en el Uruguay del siglo XX*, (Montevideo: Librería de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2002)